
PATRICIO AYLWIN AZOCAR

LA TRANSICION CHILENA

DISCURSOS ESCOGIDOS
MARZO 1990 - 1992



EDITORIAL ANDRES BELLO

2(851A-41)

992 Copia 1

122794

11114957

LIOTECA NACIONAL



0064820

22794

LA TRANSICION CHILENA
DISCURSOS ESCOGIDOS
MARZO 1990 - 1992



Esta obra ha sido publicada con el patrocinio
de la Secretaría de Comunicación y Cultura
del Ministerio Secretaría General de Gobierno

© EDITORIAL ANDRES BELLO
Av. Ricardo Lyon 946, Santiago de Chile

Se terminó de imprimir esta primera edición de 3.000 ejemplares
en el mes de julio de 1992

IMPRESORES: Alfabetá

IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE

ISBN: 956-13-1017-1

PATRICIO AYLWIN AZOCAR

LA TRANSICION CHILENA

DISCURSOS ESCOGIDOS

MARZO 1990 - 1992

EDITORES

Secretaría de Comunicación y Cultura
Ministerio Secretaría General de Gobierno

EDITORIAL ANDRES BELLO

Al asumir el gobierno de la nación, el 11 de marzo de 1990, el Presidente de la República, don Patricio Aylwin, estableció un compromiso con el país: avanzar en la solución de los grandes desafíos que enfrentaba el conjunto de la sociedad chilena. En su primer Mensaje al Congreso Nacional definió esas tareas: lograr la reconciliación nacional, tras casi dos décadas de extremadas divisiones internas; perfeccionar las instituciones del Estado que dan solidez y estabilidad a la democracia; alcanzar mayores niveles de justicia social, frente a las profundas desigualdades que afectan a un amplio sector del país; progresar en el camino de un crecimiento económico en que se conjuguen desarrollo y equidad social, y reinsertar a Chile en la comunidad internacional.

La selección de discursos del Presidente Patricio Aylwin que aquí presentamos da cuenta del itinerario seguido en el cumplimiento de esas tareas; de los avances, logros y desafíos aún pendientes; del balance que, tras dos años de gobierno, puede hacerse al respecto. Ellos constituyen la bitácora de un viaje hacia lo que él mismo tantas veces ha llamado "una patria justa y buena".

Los Editores

INDICE

EL COMPROMISO DEL GOBIERNO

11.03.90	: Desde los balcones del Palacio de La Moneda	15
12.03.90	: En el Estadio Nacional	17
21.05.90	: En el inicio de la legislatura ordinaria del Congreso Nacional	25

RECONCILIACION NACIONAL

Visión de Chile

20.08.90	: En ceremonia conmemorativa del natalicio del Libertador General Bernardo O'Higgins	81
04.09.90	: Con ocasión de los funerales del ex Presidente de Chile, don Salvador Allende G.	85
23.10.90	: Conferencia sobre "Ética y Política", dictada en ceremonia de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas	88
25.07.91	: Reflexiones sobre los últimos sesenta años del acontecer político nacional	97
19.09.91	: En el acto de aniversario de la muerte del Presidente don José Manuel Balmaceda	108

Derechos Humanos

X 24.04.90	: Al firmar el proyecto de decreto que crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación	113
X 10.12.90	: En ceremonia de conmemoración de los 42 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 12º aniversario de la Comisión Chilena de Derechos Humanos	120
X 08.02.91	: Al recibir el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación	123
04.03.91	: Al dar a conocer a la ciudadanía el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación	126
25.05.91	: En reunión interparlamentaria de derechos humanos ...	137

LA RELACION CIVIL-MILITAR

18.09.90	: Saludo en el "Día de las Glorias del Ejército"	143
20.08.91	: En ceremonia conmemorativa del 175° aniversario del natalicio del Libertador General Bernardo O'Higgins	146

DEMOCRACIA Y PARTICIPACION

Perfeccionamiento Institucional

30.03.90	: En ceremonia inaugural de la Convención de Magistrados Judiciales	159
X 17.05.90	: En acto de la creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas	166
01.07.90	: En ceremonia de clausura de las Séptimas Jornadas de Regionalización	170
24.08.90	: En aniversario de la Asociación Nacional de la Prensa ..	178
16.12.90	: En ceremonia de clausura del Congreso de Periodistas ..	183
20.12.90	: En celebración de los 95 años del Consejo de Defensa del Estado	190
X 18.01.91	: En clausura del Congreso Comisión de Pueblos Indígenas	193

Participación

09.08.90	: A pobladores sin casa y allegados de Concepción	201
26.09.90	: Reunión con representantes de Ollas Comunes	204
16.11.90	: En ceremonia inaugural de la Convención de Santiago ..	208
28.11.90	: En acto "Promoción y Desarrollo de la Mujer"	212
13.12.90	: En seminario "Perspectivas del Cooperativismo Campesino"	215
13.09.91	: En el acto de clausura de la Quinta Conferencia Iberoamericana de Juventud	219

DESARROLLO CON EQUIDAD

Política Laboral

27.04.90	: En ceremonia de firma de Acuerdo Marco entre Gobierno, Trabajadores y Empresarios	225
01.05.90	: En ceremonia de conmemoración del Día del Trabajo ...	227
10.08.90	: En asamblea sindical ampliada de mineros del carbón ..	235
30.04.91	: En ceremonia de firma del Acuerdo entre Gobierno, CUT y Empresarios	241
01.05.91	: En acto de celebración del Día del Trabajo	242

Política Educacional

04.05.90	: En ceremonia de constitución de la Comisión de Estudio de la Educación Superior	251
----------	---	-----

INDICE

09.08.90	: En reunión con la comunidad estudiantil de la Universidad de Concepción	254
27.06.91	: En ceremonia de promulgación del Estatuto Docente ...	260

Crecimiento Económico

19.04.90	: En ceremonia de clausura del Seminario sobre Pequeña y Mediana Empresa	263
05.07.90	: En la VII Reunión Ministerial del Grupo Cairns	268
22.08.90	: En ceremonia de conmemoración del "Día del Industrial", organizada por Conupia	270
28.11.90	: En ENADE "90"	272
29.04.91	: En ceremonia aniversario de la Corporación de Fomento de la Producción	281
04.07.91	: En ceremonia que da inicio al Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	284
24.07.91	: En asamblea general ordinaria de socios de la Sociedad de Fomento Fabril	286
30.08.91	: Para dar a conocer el Programa Nacional de Infraestructura	288

Medio Ambiente

05.06.90	: Con motivo de la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente	295
13.07.90	: En acto de clausura de la Primera Reunión de Expertos de Alto Nivel designados por los gobiernos para revisar el borrador del Plan de Acción para el Medio Ambiente en América Latina y el Caribe	299
25.09.91	: En acto de inauguración del Primer Encuentro Nacional Juvenil de Medio Ambiente	305

REINSERCIÓN DE CHILE EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Organismos Internacionales

09.07.90	: En la XXI Conferencia Internacional de la FAO para América Latina y el Caribe	313
14.08.90	: En ceremonia de firma de la Convención de Derechos del Niño	319
28.09.90	: Ante la Organización de Naciones Unidas	321
10.10.90	: En la sede del Sistema Económico Latinoamericano (SELA)	331
03.06.91	: Ante la XXI Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA	336

INDICE

Europa

09.04.91	: En Instituto de Cooperación Iberoamericana, ICI	343
17.04.91	: Ante el Parlamento Europeo	347
25.04.91	: Exposición en el Parlamento Bundestag y encuentro con Comisiones de Asuntos Exteriores y Cooperación Económica	354

América

26.07.90	: Ante el Congreso brasileño	359
28.07.90	: En el que agradece el banquete ofrecido por el Presidente del Perú, don Alberto Fujimori	364
27.08.90	: En ceremonia de condecoración y cena ofrecida al Presidente de la República Argentina, don Carlos Saúl Menem	367
27.09.90	: Ante <i>The Council of the Americas y Americas Society</i> , de Nueva York	371
30.09.90	: Al inaugurar la Cumbre Mundial de la Infancia	377
03.10.90	: Ante el Senado de la República de México	379
09.10.90	: Ante el Congreso de la República de Venezuela	383
03.12.90	: En la VII Conferencia Regional del Empleo en América Latina y el Caribe	388
06.12.90	: En banquete ofrecido al Presidente de Estados Unidos de Norteamérica, George Bush	393
17.07.91	: Ante la Cumbre de Presidentes Centroamericanos en El Salvador	398
18.07.91	: En inauguración de Cumbre Iberoamericana	402
01.08.91	: Ante el Parlamento argentino	405

BALANCES

31.12.90	: Mensaje de fin de año a los chilenos	413
11.03.91	: Con motivo del primer aniversario de gobierno	417
21.05.91	: Mensaje presidencial en el inicio de la legislatura ordinaria del Congreso Nacional	429
14.12.91	: En acto de celebración del segundo aniversario de la elección presidencial	477
31.12.91	: Mensaje de fin de año	486
11.03.92	: En ceremonia de conmemoración del segundo aniversario de gobierno	489

EL COMPROMISO DEL GOBIERNO

Desde los balcones del Palacio de La Moneda

Santiago, 11 de marzo de 1990

Pueblo de Santiago;
compatriotas todos:

Gracias por este recibimiento tan alegre, tan entusiasta, tan afectuoso. Yo bien sé que esa alegría, ese entusiasmo y ese afecto no son para el hombre, son para la patria que se reencuentra en la libertad. Queremos un Chile de todos los chilenos, con todos los chilenos, para todos los chilenos.

Yo comprendo la responsabilidad que ustedes han puesto sobre mis hombros. Les prometo entregar todas mis energías, toda mi capacidad, para cumplir con los anhelos de reconstruir en nuestra patria una democracia verdadera, en que haya no sólo libertad, sino también justicia y solidaridad.

Hoy es un día histórico, que recogerán los anales de nuestra patria y los del mundo entero. Gobernantes y representantes de las naciones amigas han venido a celebrar con nosotros. Les agradecemos su solidaridad en los momentos de dolor y su compañía en esta hora de alegría.

Chile vuelve a la democracia y vuelve sin violencia, sin sangre, sin odio. Vuelve por los caminos de la paz.

La tarea que tenemos por delante exige el esfuerzo, la entrega, la generosidad de todos. Debemos cuidar esta criatura que está naciendo, esta libertad que estamos reconquistando, y la vamos a cuidar en la medida en que sepamos respetarnos los unos a los otros, en que los chilenos no volvamos jamás a convertirnos en enemigos unos de otros. Podremos pensar distinto, tener distintas creencias, adorar a Dios según nuestra propia fe, pero todos juntos constituimos esa patria que constituyeron O'Higgins, Carrera y los

demás Padres de la Patria. Esa patria que, según el Himno Nacional, debe ser el asilo de los pobres contra la opresión.

Compatriotas:

Les pido que hagamos perdurar este entusiasmo, esta voluntad de fraternal amistad que hoy día impera entre nosotros. Yo necesito vuestra ayuda. Lo que tenemos que hacer lo deberemos hacer entre todos. No será la obra de un Presidente, no será la obra de un partido ni de un grupo de partidos. Será la obra de todos los chilenos.

Sé que hay compatriotas que anhelan una libertad de que están injustamente privados. Sé que hay compatriotas lejos de nuestras fronteras que quieren volver a la patria y quieren poder trabajar aquí y reconstruir sus familias. Sé que hay mucho anhelo de cambio y de justicia. Yo les digo: es nuestra voluntad crear caminos para, en el más breve plazo, darles libertad real a todos los chilenos. No queremos presos políticos en Chile.

Yo les digo que es nuestra voluntad hacer todo lo humanamente posible para que la verdad resplandezca en la vida nacional, porque sólo la verdad nos hace libres, porque sólo en la verdad se construye la confianza ciudadana que permite asegurar una vida tranquila y en paz. Allí donde no hay verdad, donde no se respeta la verdad, surge la desconfianza y el recelo, y de ellos la sospecha y el odio, y de ellos la violencia. Pero Chile no quiere más violencia, no quiere más guerra: quiere paz.

Sé que hay muchos chilenos que tienen hambre y sed de justicia, que anhelan mejorar sus condiciones de vida, que desean que el progreso de Chile no llegue sólo a una minoría, sino se traduzca en posibilidades para todas las mujeres, para todos los jóvenes, para todos los ancianos de esta tierra.

Una palabra especial para los trabajadores chilenos, que con su esfuerzo construyen diariamente la patria. Deben ser nuestra preocupación fundamental.

Amigas y amigos, compatriotas todos:

Partamos en esta nueva jornada con el corazón abierto a la comprensión, a la solidaridad. Yo confío en el pueblo de Chile y espero que con su confianza podremos juntos construir la patria que anhelamos.

Espero que en cuatro años más, plazo corto comparado con otros, podré presentarme ante ustedes, ante la faz de todo el pueblo de Chile, y decirles: juntos, chilenos, hemos construido una patria libre, justa y fraterna, para todos sus hijos.

Gracias.

En el Estadio Nacional

Santiago, 12 de marzo de 1990

Este es Chile, el Chile que anhelamos, el Chile por el cual tantos, a lo largo de la historia, han entregado su vida; el Chile libre, justo, democrático. La nación de hermanos.

Nos reunimos esta tarde con esperanza y alegría. Con esperanza, porque iniciamos, por fin, con espíritu fraterno y anhelantes de libertad y de justicia, una nueva etapa en la vida nacional. Con alegría, porque —por primera vez al cabo de veinte años— emprendemos una ruta que ha sido elegida consciente y voluntariamente por nosotros mismos; no nos ha sido impuesta, sino que corresponde a la decisión libre y soberana del pueblo de Chile.

Hoy celebramos un nuevo amanecer. Más que festejar el triunfo concretado formalmente ayer en la transmisión del mando ante el Congreso Pleno, solemnizamos en este hermoso encuentro nuestra firme voluntad de forjar la unidad nacional, por caminos de reconciliación entre todos los chilenos, sobre las bases del respeto mutuo, el imperio irrestricto de la verdad, la vigencia del derecho y la búsqueda constante de la justicia.

Realza esta celebración la presencia de nuestros invitados, gobernantes y representantes de naciones amigas. Nos acompañan ahora, en este feliz momento, como nos acompañaron con su solidaridad en los tiempos de persecución y de dolor, en el asilo generoso que dieron a los chilenos exiliados, en la defensa de los derechos humanos de tantos compatriotas y en la lucha del pueblo de Chile por recuperar su democracia. En nombre de este pueblo, ahora les decimos: Gracias, muchas gracias. Y les decimos algo más: Podéis tener la seguridad de que el reencuentro de Chile con la democracia significará también nuestra incorporación activa a todas las instancias de colaboración internacional que corresponda para contribuir con

nuestro aporte al desarrollo de los pueblos, al logro de la justicia y la paz entre las naciones y al pleno imperio de los derechos humanos en todos los rincones de la Tierra.

Nos acompañan, también, en esta fiesta, millones de chilenos que de uno u otro extremo del territorio nacional, o en la añoranza de la patria desde sus lugares de residencia, voluntaria o forzada, en otras tierras, tienen puesta su esperanza en la recuperación de nuestra democracia. A todos ellos les enviamos un fraternal saludo.

Desde este recinto, que en tristes días de ciego odio, de predominio de la fuerza sobre la razón, fue para muchos compatriotas lugar de presidio y de tortura, decimos a todos los chilenos y al mundo que nos mira: ¡Nunca más! ¡Nunca más atropellos a la dignidad humana! ¡Nunca más odio fratricida! ¡Nunca más violencia entre hermanos!

Desde aquí, donde Su Santidad Juan Pablo II dijo a los jóvenes chilenos que los valores del espíritu —como la hija de Jairo— no estaban muertos sino dormidos, proclamamos ante la faz del universo que el tradicional espíritu cívico y democrático del pueblo chileno, que nos ganó prestigio entre las naciones y fue justo motivo de orgullo patrio, no murió nunca; pudo dormirse, pero luego de años de sufrimiento, de amarguras, luchas y tropiezos, ha despertado con el ánimo alerta para no dormirse más.

Hoy asumimos el compromiso de reconstruir nuestra democracia con fidelidad a los valores que nos legaron los Padres de la Patria y que configuran lo que el Cardenal Silva Henríquez —ese varón justo y gran amigo del pueblo a quien tanto debemos— ha descrito hermosamente como “el alma de Chile”: el amor a la libertad y el rechazo a toda forma de opresión, la primacía del derecho sobre la arbitrariedad, la primacía de la fe sobre cualquier forma de idolatría, la tolerancia a las opiniones divergentes y la tendencia a no extremar los conflictos, sino procurar resolverlos mediante soluciones consensuales.

¡Estos valores imperarán de nuevo entre nosotros!

Es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por delante: restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares, sí señores, sí compatriotas, civiles o militares: ¡Chile es uno solo! ¡Las culpas de personas no pueden comprometer a todos! ¡Tenemos que ser capaces de reconstruir la unidad de la familia chilena! Sean trabajadores o empresarios, obreros o intelectuales; abrir cauces de participación democrática para que todos colaboren en la consecución del bien común; acortar las agudas desigualdades que nos dividen y, muy especialmente, elevar a niveles dignos y humanos la condición de vida de los sectores más pobres; cuidar de la salud de nuestros compatriotas, lograr relaciones equitativas entre los actores del proceso economi-

co, abrir a nuestros jóvenes acceso a los conocimientos y oportunidades de trabajo y de progreso propias del tiempo que vivimos; promover la participación y dignificación de la mujer en la sociedad chilena; dar a nuestros ancianos el respeto que merecen; impulsar el crecimiento y asegurar la estabilidad de nuestra economía; mejorar los términos de intercambio de nuestro comercio exterior; defender el medio ambiente y la adecuada conservación de nuestros recursos naturales renovables y no renovables; contribuir con nuestros mejores aportes a la democratización, al desarrollo e integración de América Latina y a la consolidación de la paz en el mundo; implementar, en fin, las políticas diseñadas en el programa de gobierno que la Concertación de Partidos por la Democracia presentó al país.

Pero así como es grande y hermosa nuestra tarea y nos exige la mayor entrega y entusiasmo, al abordarla debemos tener clara conciencia de sus dificultades.

Habrà dificultades causadas por los obstáculos y amarras que el pasado régimen nos deja en el camino; las habrá derivadas de la naturaleza misma de las cosas, y habrá también algunas —no menos importantes— originadas en nosotros mismos.

Nadie ignora que el pasado gobierno pretendió eternizarse en el poder. La historia enseña que tales intentos jamás logran prevalecer sobre el derecho de los pueblos a gobernarse por sí mismos. Así está ocurriendo ante nuestros ojos en variadas partes del mundo. Así lo estamos demostrando nosotros también aquí, con el propio acontecimiento que celebramos. Pero nuestra satisfacción en este día no puede impedirnos advertir con claridad las numerosas limitaciones, trabas y pies forzados que, en su afán de prolongarse, nos deja el régimen hasta ayer imperante.

Quienes ejercieron el poder total se empeñaron hasta el último día en reducir el poder de las nuevas autoridades democráticas. Quienes dispusieron de los bienes del Estado como dueños absolutos, sin limitaciones, se ingeniaron para sustraer cuanto pudieron de esos bienes a la administración que constitucionalmente corresponde al Presidente de la República.

Muchos se preguntan por qué aceptamos estas cosas, y no ocultan su repulsa a las formas corteses en que se ha realizado el proceso de traspaso del gobierno mientras se consumaban estos hechos.

Participando de la condena moral que merece tal conducta —condena que, estoy seguro, la historia compartirá—, invito a mis compatriotas a ver la otra cara del asunto. Estamos contentos por la forma pacífica y sin grandes traumas en que ha operado el tránsito hacia el gobierno democrático. ¿Deberíamos, para evitar aquellas limitaciones, haber expuesto a nuestro pueblo al riesgo de nuevas violencias, sufrimientos y pérdida de vidas? Los demócratas chilenos

escogimos, para transitar a la democracia, el camino de derrotar el autoritarismo en su propia cancha. Es lo que hemos hecho, con los beneficios y costos que ello entraña.

Sinceramente creo que la vía que escogimos fue la mejor entre las posibles. Lo cortés no quita lo valiente. Tengo la convicción de que la mayoría de las trabas con que se ha pretendido dejarnos amarrados no resistirán el peso de la razón y del derecho. Confío en que el Congreso Nacional, por encima de las diferencias de partidos, aprobará las reformas necesarias para asegurar el funcionamiento normal y expedito de nuestra renaciente democracia. Estoy cierto de que si alguien llegara a abrigar la tentación de emplear la fuerza contra la voluntad del pueblo, nuestras Fuerzas Armadas y de Orden no se apartarán de sus deberes institucionales.

También deberemos superar dificultades propias de la naturaleza de las cosas.

Nuestro programa es vasto; los requerimientos son múltiples. Hay muchas necesidades largamente postergadas que esperan ser satisfechas. No podremos hacer todo al mismo tiempo. Deberemos establecer prioridades. Lo justo es empezar por los más pobres. Es mucha la gente con problemas. Daremos la primera prioridad a los que realmente son más necesitados.

Nuestro país pertenece al mundo en desarrollo. Nuestro ingreso nacional por habitante es bajo; si lo distribuyéramos por igual entre los 12 millones de chilenos, nadie quedaría satisfecho y detendríamos el crecimiento. Para salir de la pobreza tenemos que crecer, y esto exige estimular el ahorro y la inversión, la iniciativa creadora, el espíritu de empresa. Las políticas gubernamentales deberán conciliar los legítimos requerimientos en la satisfacción de las necesidades fundamentales, con espíritu de justicia social, y las exigencias ineludibles del crecimiento.

Todo en la vida requiere tiempo. ¿Cuántos años nos costó recuperar la democracia? El hecho de que ahora tengamos un gobierno del pueblo no significa que los problemas se van a solucionar milagrosamente; significa, sí, que de inmediato, desde ahora mismo, nos vamos a poner a trabajar para solucionarlos, y contamos para ello con el esfuerzo y participación de todos. Sólo así consolidaremos nuestra democracia y resolveremos los problemas.

Tendremos todavía otras dificultades: las que derivan de nosotros mismos. Yo las llamaría "las grandes tentaciones": la tentación de ensimismarnos en el ajuste de cuentas del pasado, la tentación de empezar todo de nuevo, y la tentación del poder.

Es legítimo y justo que después de un período tan largo de poder absoluto y misterioso, en que tanta gente ha sufrido tanto y en que los asuntos públicos fueron secretos inaccesibles para el pueblo, éste quiera saber la verdad de lo ocurrido.

Hemos dicho —y lo reiteramos hoy solemnemente— que la conciencia moral de la nación exige que se esclarezca la verdad respecto de los desaparecimientos de personas, de los crímenes horrendos y de otras graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. Hemos dicho también —y hoy lo repito— que debemos abordar este delicado asunto conciliando la virtud de la justicia con la virtud de la prudencia y que, concretadas las responsabilidades personales que corresponda, llegará la hora del perdón.

Hay también otras situaciones injustas que merecen reparación o exigen pronta corrección. Hoy he firmado decretos de indultos para poner en libertad a numerosos presos políticos; en los próximos días resolveremos otros casos, y he enviado al Congreso Nacional los proyectos de ley pertinentes para que, en el más breve plazo, se haga justicia a todos los presos políticos.

Será necesario, asimismo, hacer claridad en asuntos importantes nunca bien explicados que comprometen el patrimonio del Estado o el interés nacional.

En este necesario ejercicio de justicia debemos evitar los riesgos de querer revivir otros tiempos, de reeditar las querellas del pasado y de engolfarnos indefinidamente en pesquisas, recriminaciones y cazas de brujas que nos desvíen de nuestros deberes con el porvenir. Considero mi deber evitar que el tiempo se nos vaya de entre las manos mirando hacia el pasado. La salud espiritual de Chile nos exige encontrar fórmulas para cumplir en plazo razonable estas tareas de saneamiento moral, de modo que más temprano que tarde llegue el momento en que, reconciliados, todos miremos con confianza hacia el futuro y aunemos esfuerzos en la tarea que la patria nos demanda.

En nuestro empeño, debemos evitar también la tentación de querer rehacerlo todo, de empezar todo de nuevo, como si nada de lo existente mereciera ser conservado. La historia enseña que las naciones se construyen por la acción acumulativa de sucesivas generaciones. Cada nueva etapa se gesta a partir de la anterior, con sus aciertos y sus errores.

Lo que Chile nos pide es conservar lo bueno, corregir lo malo y mejorar lo regular. Este es el único método eficaz de avanzar en el noble y justo afán de acercar la realidad al ideal.

También deberemos cuidarnos de las tentaciones propias del poder, sea creyéndonos dueños del mismo en vez de meros mandatarios del pueblo soberano y responsables ante éste de su desempeño, sea convirtiendo la legítima controversia democrática en lucha despiadada por conservar, acrecentar o conquistar poder.

El poder ha de ser para nosotros un mero instrumento para servir. Conservaremos y acrecentaremos la confianza de nuestros

compatriotas en la medida misma en que seamos capaces de servir eficazmente el bien común de la nación.

Por mi parte, asumo la honrosa y difícil responsabilidad que el pueblo me ha encomendado, con la firme voluntad de ser el primer servidor de Chile y los chilenos.

¿Qué pueden mis compatriotas esperar de mí?

Que ejerza el poder que se me ha confiado con integridad y plena entrega, sin pretender honores ni rehuir sacrificios, buscando siempre el bien común según los dictados de mi conciencia.

Que diga siempre la verdad, sin apartarme nunca del derecho y buscando afanosamente la justicia.

Que sea leal a los valores democráticos y leal también, dentro del marco de las bases programáticas que constituyen nuestro compromiso con el pueblo de Chile, a quienes me honran con su apoyo.

Que respete a todas las personas y a las distintas opiniones, que sepa escuchar a todos, que me empeñe siempre en promover entendimientos y lograr acuerdos, pero no vacile en adoptar las decisiones que, según mi recto parecer, exija el interés superior del país.

Que trate, en fin, de ser para todos mis compatriotas como un buen padre de familia, que pone su mayor diligencia, abnegación y autoridad en labrar el bienestar y la felicidad de su gente, preocupándose especialmente de los hijos que más lo necesitan, en este caso, de los más pobres y humildes.

¿Y qué espero yo de mis compatriotas?

Espero y reclamo, antes que nada, comprender que las tareas de construir una democracia verdadera y sólida y de conquistar el progreso y la justicia a que aspiramos, no son sólo del gobierno, del Parlamento o de las autoridades, sino de todos los chilenos; que de todos se requiere imaginación, esfuerzo, iniciativa, disciplina y sacrificio, y que sólo podremos cumplirlas con la colaboración de todos. Nuestro gobierno no vendrá a sustituir las obligaciones que tiene cada chileno, cada organización social, cada empresa; estará para apoyarlos, estimularlos, respaldarlos; pero nadie puede olvidar que Chile somos todos y lo hacemos entre todos diariamente.

Espero y demando a todos patriotismo, para entender y aceptar que por encima de los intereses particulares de personas, grupos o sectores, está el interés general de Chile. Si queremos alcanzar un orden político, económico y social justo y estable, cada cual debe estar dispuesto a contribuir generosamente en la medida de sus posibilidades.

Espero y exijo a todos acatar las vías de la razón y del derecho para promover sus aspiraciones, absteniéndose de acudir a la violencia para imponer lo que se pretende. Quien lo intente por esa vía, no lo logrará. La fuerza es propia de las dictaduras; la razón y el derecho son las armas de la democracia.

Espero de mis compatriotas que nos respetemos mutuamente en nuestras diferencias, que renunciemos a toda suerte de sectarismos o afán hegemónico y que hagamos todo lo posible por entendernos y encontrar caminos de consenso.

Bien sé que son muchos los chilenos maltratados y postergados durante estos largos años, que están cansados de esperar y visualizan en el retorno a la democracia la pronta solución de sus problemas, muchas veces angustiosos. Yo comprendo su urgencia y los invito a comprender también que —como lo dije insistentemente en la campaña electoral— necesitaremos tiempo y mucha colaboración. Si han soportado tantos años de espera forzada, les pido ahora un poco de paciencia voluntaria y racional.

Y a los chilenos que han prosperado contando con la tranquilidad de un orden impuesto por la fuerza, les pido comprender que en las sociedades contemporáneas no hay orden ni seguridad estables sino sobre la base del consenso racional fundado en la justicia.

El anhelo de paz que prevalece entre nosotros requiere de todo nuestro esfuerzo para mantener y proyectar hacia el futuro el clima de acuerdos que ha caracterizado nuestro tránsito hacia la democracia.

Dentro de este ánimo, es digno del mayor elogio el diálogo que se está realizando entre trabajadores y empresarios, con la mira de alcanzar acuerdos en el ámbito económico-laboral. A fin de respaldar y concretar esa iniciativa, he instruido a mis ministros de Hacienda, Economía y Trabajo para que formalicen conversaciones entre la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación de la Producción y del Comercio y el gobierno, a fin de concertar un acuerdo marco que sea garantía de progreso, justicia y estabilidad.

Compatriotas:

Pidamos a Dios que nos ayude a cumplir la tarea que Chile espera de nosotros.

Pidámosle sabiduría para hacer las cosas bien y no caer en errores ni torpezas.

Pidámosle prudencia para afrontar la realidad, sin confundir deseos con posibilidades y para actuar con eficacia.

Pidámosle energía para adoptar las decisiones y coraje para no amedrentarnos ante las dificultades.

Pidámosle paciencia para superar incomprensiones y humildad para reconocer nuestros errores.

Pidámosle que ilumine nuestras mentes y que acere nuestra voluntad para buscar siempre, y por sobre todo, la justicia.

Pidámosle amor para ser siempre solidarios, para trabajar todos unidos y para ayudarnos mutuamente.

Chile es nuestro hogar. Cuidémoslo entre todos, para que su pan alimente a cada uno de sus hijos y en su seno germinen los frutos de la paz y de la alegría de vivir.

Yo tengo fe. Tengo mucha fe en Chile y en su gente, en la abnegación, sensatez y fortaleza ejemplares de la mujer chilena; en el temple e ingenio de nuestros trabajadores, en la creatividad de nuestros intelectuales y empresarios, en el idealismo de nuestros jóvenes, en los valores morales de nuestras familias.

Nuestra hermosa historia patria nos enseña cómo este pueblo pequeño y lejano, pero esforzado y emprendedor, superando las dificultades de la pobreza y de su bella pero loca geografía, rehaciéndose de terremotos, fue capaz de construir una República ejemplar, admirada entre las naciones. Ideologizados y divididos por utopías inconciliables, el odio prevaleció un momento sobre la solidaridad y la fuerza se impuso sobre la razón. Tras años de cruentas divisiones y predominio de la violencia, hoy nos reencontramos nuevamente, con espíritu patriótico y voluntad de entendimiento, dispuestos a hacer que Chile llegue al amanecer del nuevo siglo como una nación próspera y pacífica.

En este momento crucial de nuestra vida nacional, yo invito a todos y a cada uno de mis compatriotas a preguntarse, mirando al fondo de su conciencia, de qué manera cada uno puede contribuir a la gran tarea común, y a disponerse cada cual a asumir su cuota de responsabilidad.

El mundo nos mira. Las grandes figuras de nuestra historia nos demandan consecuencia. Las futuras generaciones juzgarán nuestra conducta.

La tarea es hermosa: construir entre todos la patria que queremos, libre, justa y buena para todos los chilenos.

De nosotros depende, compatriotas.

En el inicio de la legislatura ordinaria del Congreso Nacional

Valparaíso, 21 de mayo de 1990

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Cumplo el deber que la Constitución impone al Presidente de la República de dar cuenta al país, a lo menos una vez al año, "del estado administrativo y político de la nación".

Aunque el texto constitucional vigente no prescribe ante quién ha de rendirse esta cuenta, ni la oportunidad de hacerlo, pienso que lo más adecuado es restablecer la vieja tradición histórica, que expresamente consagraba la Constitución anterior, de rendir esta cuenta ante el H. Congreso Pleno, el organismo más representativo de la nación toda, en la ocasión solemne en que inicia su legislatura ordinaria y en esta fecha en que Chile conmemora uno de los ejemplos de patriotismo de más alto significado moral de nuestra historia.

CHILE DE NUEVO EN DEMOCRACIA

Desde hace setenta días, los chilenos vivimos nuevamente bajo un régimen democrático.

El gobierno de la nación por autoridades libremente elegidas por el pueblo, para un plazo preestablecido, bajo un sistema que asegura a todos el pleno respeto de sus derechos y libertades personales y en que la conducta de los gobernados y el poder de los gobernantes han de sujetarse a la norma jurídica, es la forma de convivencia humana más acorde con la razón, con el progreso de la civilización y con nuestra propia idiosincrasia nacional.

La larga vigencia de la democracia entre nosotros, que parecía ser la forma de convivir consubstancial a nuestra patria, fue factor relevante de nuestro prestigio entre las naciones. Su restablecimiento causa alegría y esperanza en la comunidad nacional y nos granjea simpatías en el mundo. Al mismo tiempo, nos impone a todos la responsabilidad de consolidarla y perfeccionarla. Esta responsabilidad, señores parlamentarios, recae principalmente sobre ustedes y sobre mí, que hemos recibido del pueblo de Chile la confianza y el honor de dirigirlo en esta etapa trascendental de su historia.

Un nuevo espíritu impera en la convivencia nacional. Al clima de confrontación, descalificaciones, odios y violencia que prevaleció por tanto tiempo, ha sucedido un ambiente de paz, respeto a las personas, debate civilizado y búsqueda de acuerdos.

Contrariando al pesimismo de errados agoreros que presagiaron caos, violencia y otros males, los chilenos estamos demostrando que somos capaces de vivir en libertad y que no necesitamos del imperio de la fuerza ni de constantes amenazas para mantener el orden ni para trabajar.

Cierto es que siguen produciéndose algunos hechos de violencia que enturbian este ambiente de paz. Pero no es menos cierto que esos hechos, cuya frecuencia disminuye en relación a épocas pasadas y aun recientes, provocan cada día mayor repudio en todos los sectores de la población. Los grupúsculos que los perpetran —cualquiera que sea su signo— van quedando cada vez más aislados; ninguna razón los justifica ante la conciencia pública, en la cual suscitan la repulsa propia de los delincuentes.

Sin disminuir la gravedad de esos hechos, cuya erradicación y castigo requieren no sólo de la acción de los organismos policiales y judiciales del Estado, sino también de la cooperación responsable de todos, nadie puede seriamente negar que Chile está viviendo una etapa promisorio de reencuentro nacional. La lógica de guerra que dividía a los chilenos en amigos y enemigos ha sido superada por la lógica de la paz, en que todos nos reconocemos como compatriotas, cualesquiera que sean nuestras diferencias.

La dura experiencia de tantos años de confrontación y sufrimiento nos ha enseñado a superar caducos prejuicios e intransigencias ideológicas, a respetar explicables discrepancias, a procurar comprendernos mutuamente y a admitir que la natural diversidad no es ni puede ser obstáculo insuperable a nuestra unidad esencial como chilenos.

De este modo, aunque en lo material poco haya cambiado, el chileno común está viviendo en libertad una vida más plena y más segura, sin los miedos del pasado, con alegría y esperanza, porque se sabe respetado y tomado en cuenta en su dignidad de persona y

llamado a participar con su propio aporte en la tarea común de construir el futuro de la patria.

CONSENSOS AUSPICIOSOS

Justo es reconocer que esta nueva y promisoría realidad nacional ha sido posible, en gran medida, gracias a la disposición y conducta responsable de quienes aceptamos someternos a reglas del juego que rechazábamos por la forma en que fueron impuestas y por su contenido a nuestro juicio injusto y antidemocrático; y también gracias a quienes acataron esas reglas cuando su aplicación les resultó adversa y se sometieron al veredicto ciudadano.

La democracia supone, como cimiento indispensable, el consenso general sobre las reglas fundamentales de la convivencia colectiva. Puesto que en ella "la autoridad se funda en la voluntad de aquellos a quienes obliga", única manera racional de conciliar autoridad con libertad, el régimen democrático será más sólido y estable mientras mayor sea el grado de consentimiento que suscite en la comunidad nacional.

Esto nos exige a los demócratas, en todo tiempo, y muy especialmente —como es el caso nuestro— en la etapa de reconstrucción democrática en que estamos, poner el máximo empeño, con generosidad e inteligencia creativa, para alcanzar los mayores y más firmes acuerdos posibles.

Fue un hecho auspicioso en esa dirección el acuerdo logrado el año último entre los Partidos Concertados por la Democracia y el gobierno de la época y los partidos que lo apoyaban, acerca de las reformas constitucionales que el pueblo aprobó en el plebiscito de julio pasado. Aunque dichas reformas fueran para muchos insuficientes, representaron un avance que facilitó el proceso de la transición en que nos encontrábamos y dejó la puerta abierta a futuros perfeccionamientos de la Carta Fundamental.

En análogo sentido, es también un hecho auspicioso el que en el curso de la campaña electoral se hayan expresado por los tres candidatos a la Presidencia de la República y por diversos partidos políticos, coincidencias importantes sobre la necesidad de algunas nuevas reformas institucionales, como la democratización del régimen municipal y de la administración regional, como también en el diagnóstico de algunos de los más importantes problemas sociales que afectan al país, especialmente en los ámbitos de la salud, la vivienda, la educación y la capacitación laboral y, asimismo, en cuanto a la conveniencia de seguir promoviendo el crecimiento y modernización de nuestra economía, su impulso exportador y la

iniciativa empresarial, sobre la base de reglas claras, estables y equitativas.

Considero también digno de reconocerse como un logro democrático importante el alto grado de acuerdo que se ha ido consolidando entre los Partidos Concertados por la Democracia que dan respaldo a mi gobierno. Unidos primero en la lucha por la restauración democrática que condujo al triunfo del NO en el plebiscito de 1988, ahondaron luego su convergencia al convenir las Bases Programáticas que constituyeron la plataforma de mi candidatura presidencial. También los agoreros presagiaron que, por la diversidad de sus inspiraciones doctrinarias, serían incapaces de mantenerse unidos para dar gobierno al país. Felizmente los hechos están demostrando lo contrario. Con profunda satisfacción quiero señalar hoy que los Partidos de la Concertación Democrática están colaborando con el Presidente de la República con lealtad y espíritu cívico, que han sido fieles a su compromiso de respaldar al Jefe del Estado sin otra exigencia que las Bases Programáticas convenidas, y que mis equipos de gobierno, especialmente a nivel ministerial, están trabajando con extraordinaria homogeneidad, cohesión y entusiasmo.

Cumpla un mandato de conciencia al expresarles, en esta ocasión solemne, mi público reconocimiento por su apoyo a mi elección y a mi gobierno, como también mi profunda convicción de que la solidez y permanencia de su alianza constituye una de las bases fundamentales para la estabilidad de nuestra renaciente democracia.

Mi ánimo, que creo también es el del país, es que esta voluntad de entendimiento trascienda a los partidos de gobierno y abarque a todos los sectores que sean fieles a los principios y conductas democráticas. Por eso celebro y agradezco los acuerdos producidos en este Congreso Nacional para generar las autoridades de ambas Cámaras y para el despacho de la Reforma Tributaria, como asimismo, en otro plano, el importante acuerdo marco suscrito recientemente entre trabajadores y empresarios.

UNIDAD NACIONAL Y LEGITIMO DISEÑO

He dicho reiteradamente que quiero ser el Presidente de todos los chilenos. Mi mayor anhelo como gobernante es entregar, a quien el pueblo elija para sucederme, una patria unida en democracia.

Para alcanzar esa meta, entiendo que mi misión es promover el reencuentro de Chile con sus tradiciones de tolerancia y libertad, de respeto al derecho y de rechazo a las arbitrariedades y a la opresión.

Mis compatriotas pueden tener la certeza de que seré fiel a este compromiso. Mi gobierno respetará escrupulosamente la dignidad

humana en todas sus dimensiones; actuará siempre movido por el respeto a todos los chilenos, cualesquiera que sean sus ideas y posiciones políticas; será estricto en el apego a la verdad y en la defensa de la justicia; en fin, el mío será un gobierno de unidad nacional, a través del cual Chile podrá superar definitivamente tanto tiempo de división y de dolor.

Lo anterior no significa que no haya diferencias y debamos coincidir en todo. Es propio de la democracia que las diferentes opiniones se expresen libremente y que haya debate. Debemos acostumbrarnos a discutir en busca de las soluciones mejores para el país y a entender que al hacerlo no ponemos en peligro a las instituciones, siempre que no caigamos en ofensas, descalificaciones o mezquindades. Discrepar no significa ser enemigos. Mantener con firmeza las propias convicciones es un legítimo derecho. Pero el interés superior del país y nuestra propia calidad de demócratas nos exigen hacerlo con elevación, procurando superar los prejuicios y no ser instrumento de pasiones. La patria nos demanda desterrar el odio, respetarnos mutuamente y procurar entendernos; no nos exige estar siempre de acuerdo. Reclamar el consenso para todo sería aceptar el veto de las minorías y paralizar el país; bastaría, en efecto, que unos pocos discreparan para impedir las decisiones.

Pueden los señores parlamentarios y todos mis compatriotas estar seguros de que en el desempeño de mi mandato procuraré siempre, como he venido haciéndolo, escuchar a todos los sectores y buscar el mayor entendimiento; pero cuando no lo logre, no vacilaré en asumir la responsabilidad —que es también mi deber de gobernante— de adoptar las decisiones que mi conciencia me reclama.

Del mismo modo, pienso que si queremos reforzar la unidad nacional, debemos todos poner los ojos en el futuro común que nos une, más que en el pasado que nos divide. Dejemos a la historia que juzgue lo ocurrido y pongamos nuestro afán en los quehaceres que la patria ahora nos reclama para forjar el porvenir.

Pero este sano propósito no puede ser obstáculo para abordar con coraje los problemas que heredamos del pasado, como son los relativos a derechos humanos y a la llamada "deuda social". Rehuirlos por temor a revivir antiguas querellas sería faltar a nuestro deber. Mal que nos pese, son problemas que están presentes en la vida nacional y que exigen solución. Afrontarlos no es reabrir heridas, sino procurar cicatrizarlas.

La historia nos enseña que las naciones se construyen por la acción continuada de sucesivas generaciones. Nadie parte de cero. Los hijos asumen las realidades que les legan sus padres. Cada nuevo gobierno se hace cargo del país que le entrega el precedente.

La historia también nos enseña que, con mucha frecuencia, los

más jóvenes se quejan de los más viejos; los gobiernos que llegan formulan reparos al que les precedió.

En esta materia, el país es testigo de la altura y generosidad con que mi gobierno y los Partidos de la Concertación estamos procediendo. Pocas veces en la historia, al término de un régimen de fuerza ha habido menos recriminaciones que en este proceso original y atípico que en Chile estamos viviendo.

Reiteradamente hemos dicho que queremos conservar lo bueno, corregir lo malo y perfeccionar lo regular. Esto nos exige, obviamente, precisar lo malo que nos proponemos corregir. Ello es indispensable para que el país conozca las razones de nuestro proceder. En una democracia, el pueblo tiene derecho a que sus gobernantes lo informen de los fundamentos de sus decisiones. Tiene también derecho a saber la verdad, y es deber moral de quien gobierna decírsela a su pueblo.

Durante más de dieciséis años, quienes gobernaron el país vivieron descalificando diariamente a sus predecesores y denigrando a sus adversarios. No los seguiremos en ese camino. No enturbiaremos el ambiente de reconciliación que queremos. Pero nadie puede impedirnos decir la verdad cada vez que lo estimemos necesario, con delicadeza y a la vez con firmeza, como lo estamos haciendo. Nadie puede ofenderse porque se diga que en Chile hubo dictadura; es tan sólo llamar a las cosas por su nombre.

LAS TAREAS DE MI GOBIERNO

En el curso de mi campaña como candidato a la Presidencia de la República, dije al país que quería hacer un gobierno de unidad cuyo objetivo fundamental fuera la reconstrucción y consolidación de nuestra democracia. Agregué que para ello deberíamos, conforme a las Bases Programáticas de la Concertación de Partidos Democráticos, acometer las siguientes tareas:

1. Esclarecer la verdad y hacer justicia en materia de derechos humanos, como exigencia moral ineludible para la reconciliación nacional;
2. Democratizar las instituciones;
3. Promover la justicia social, corrigiendo las graves desigualdades e insuficiencias que afligen a grandes sectores de chilenos;
4. Impulsar el crecimiento económico, desarrollo y modernización del país; y

5. Reinsertar a Chile en el lugar que históricamente se había ganado en la comunidad internacional.

Este es mi compromiso con Chile. Estas son las tareas que mi gobierno está tratando de cumplir y a las cuales sus integrantes estamos entregando todas nuestras fuerzas y capacidades.

En esta mi primera cuenta al país, considero mi deber informar a los señores parlamentarios y a todos mis compatriotas, sobre el sentido y alcance de cada una de esas tareas, la situación de la cual partimos para realizarlas, las metas que nos proponemos y los caminos que pensamos seguir para llegar a ellas.

Lo haré en el orden que considero más adecuado para que el país conozca y comprenda los propósitos y la conducta del gobierno.

1. *Reconciliación nacional*

Nuestra primera tarea es lograr la reconciliación nacional fundada en la verdad y en la justicia.

Para alcanzar la unidad nacional que anhelamos, es indispensable superar los agravios del pasado, reparar las ofensas, borrar las sospechas, desvanecer las desconfianzas. Sólo así lograremos una verdadera —y no sólo aparente— reconciliación nacional.

Si queremos sinceramente que haya paz sólida y estable entre los chilenos y que desaparezca toda forma de violencia, no podemos limitarnos a esconder la cabeza como el avestruz y hacer como si nada hubiera pasado. Sabemos que han pasado muchas cosas, crueles y dolorosas, dejando una secuela de sufrimientos y a veces también de rabia en muchos compatriotas, de uno y otro lado.

Ignorar esos hechos y procurar aislarnos es favorecer que ese sufrimiento y esa rabia larvada germinen y conduzcan a expresiones irracionales de odio y de violencia.

Como cristiano, creo que "sólo la verdad nos hará libres". Libres, en primer término, de nuestros propios prejuicios y pasiones, que son el mayor obstáculo a la paz.

Como cristiano, pienso que la paz es obra de la justicia y sólo puede edificarse sobre los cimientos de la verdad.

Por estas razones es que, cumpliendo lo que siempre dije al país y a nadie puede tomar de sorpresa, he acometido la compleja labor de restañar las heridas que quedaron del pasado. Ello exigía abocarse a tres temas que estamos abordando con sentido de equidad, por las vías de la razón y del derecho: el de los llamados "presos políticos", el de los exiliados, y el de las violaciones de derechos humanos y crímenes políticos.

Respecto a los exiliados, nuestro compromiso es arbitrar las medidas pertinentes para promover el retorno a la patria de todos los chilenos que quieran regresar a ella, creando a la vez las condiciones para su plena reincorporación a la comunidad nacional.

La tarea no es fácil, pues se deben coordinar muchos esfuerzos y allegar recursos importantes. Por este motivo, he sometido a vuestra consideración un proyecto de ley para crear un servicio público descentralizado de carácter transitorio, con la misión de facilitar la reinserción de aquellos compatriotas que tuvieron que alejarse de Chile en los años recientes.

En cuanto a los presos, tan pronto asumí la presidencia procedí, en ejercicio de mis atribuciones y conforme a la ley, a indultar a todos aquellos que cumplían condenas por delitos propiamente políticos, como ingreso ilegal al país, asociación ilícita, ofensas a la autoridad y otros análogos, no involucrados en hechos de sangre.

Sin embargo, la mayoría de los presos por delitos con alguna connotación política no están condenados sino que tienen, muchos de ellos desde hace largos años, la calidad de procesados. El estudio de su situación legal nos llevó a concluir que, más allá de los casos particulares de cada uno, nos encontramos en presencia de una legislación que creemos errada e injusta, sea por la forma vaga o arbitraria en que tipifica los delitos, sea por lo excesivo o draconiano de las penas, sea porque no asegura a los procesados las garantías a que tienen derecho.

Frente a estas circunstancias y luego de concienzudo estudio, sometimos al Congreso Nacional los proyectos de ley que penden de vuestra consideración, sobre abolición de la pena de muerte y reformas a la ley antiterrorista, a la ley de control de armas, a la ley de seguridad interior del Estado y a los códigos de Justicia Militar y de Procedimiento Penal.

Se ha acusado al gobierno de querer, con estos proyectos, solucionar las situaciones particulares de determinados presos a través de normas generales que tendrían graves efectos para el futuro. Rechazo ese cargo como injusto. La verdad es precisamente lo contrario: queremos para el futuro una legislación racional y equitativa sobre tan delicadas materias, y esperamos que al dictarse nuevas normas generales y permanentes de tal carácter, su aplicación permita resolver con justicia los casos pendientes.

Ruego a los honorables parlamentarios considerar estos proyectos sin prejuicios ni suposiciones, y confío en que, con su aporte y cooperación, podamos perfeccionar efectivamente nuestro ordenamiento jurídico al respecto, a fin de que alcance la equidad y eficacia de que actualmente carece para prevenir y sancionar los delitos a que se refiere.

En cuanto al delicado asunto de las violaciones a los derechos

humanos, consecuente con mi reiterada afirmación de que la conciencia moral de la nación exige que se esclarezca la verdad, se haga justicia en la medida de lo posible —conciliando la virtud de la justicia con la virtud de la prudencia— y después venga la hora del perdón, he constituido la Comisión de Verdad y Reconciliación para avanzar hacia esas metas en forma seria, pacífica y con las necesarias garantías.

Dios es testigo de que en la decisión sobre su naturaleza, carácter, funciones e integración, agoté los esfuerzos para lograr el mayor consenso, consideré las más diversas opiniones, no fui objeto de ninguna clase de presiones y decidí lo que en conciencia creo lo mejor para Chile.

Basta leer el decreto y sus fundamentos para descartar las suposiciones de que la Comisión invadiría funciones judiciales o que pretenda enjuiciar al régimen pasado o a las Fuerzas Armadas. Expresamente se le prohíbe lo primero, y se establece que, si se impone de hechos que revistan caracteres de delitos, los pondría de inmediato y reservadamente en conocimiento del tribunal que corresponda. Y claramente se excluye lo segundo cuando se establece que no sólo conocerá de las situaciones de detenidos desaparecidos, ajusticiados y torturados con resultado de muerte, sino también de los secuestros y atentados contra la vida de personas con pretextos políticos.

El hecho de que se haya referido la tarea de la Comisión al lapso entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo del presente año, no significa ninguna especie de prejuzgamiento. No se trata de hacer un análisis histórico sobre la violencia en Chile, sino de esclarecer la verdad sobre violaciones de derechos humanos; y ése es el período en que ocurrieron.

Por lo demás, la sola calidad moral y prestigio intelectual, por nadie puesto en duda, de las personalidades que aceptaron la pesada carga de integrar la Comisión —a quienes reitero mi reconocimiento por su patriotismo y generosidad— es el mejor mentís a las suposiciones y temores que con ligereza se han formulado, y la mejor garantía para todos.

Reitero en esta ocasión mi solemne llamado a todos mis compatriotas a desechar prejuicios y no anticipar suposiciones, sino esperar con serenidad el trabajo de la Comisión y cooperar con buena voluntad al éxito de su tarea de Verdad y Reconciliación.

No debo concluir este capítulo sobre la reconciliación sin precisar algunos criterios sobre la violencia y el terrorismo, males cuya acción nefasta —segando vidas, destruyendo bienes y sembrando inseguridad y temor— enturbia la vida nacional y obstaculiza la anhelada concordia.

Se equivocan y son injustos quienes suponen a mi gobierno

debilidad frente a estos flagelos. Rechazamos por principio toda especie de violencia, venga de quien venga y cualesquiera que sean sus pretextos. Condenamos con la mayor energía las acciones terroristas, que causan víctimas inocentes, ocasionan daños indiscriminados e infunden pánico en la gente.

Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los chilenos comparte esta repulsa a la violencia y al terrorismo. Pero muchos, cegados por prejuicios, no aplican la misma vara para condenarlos siempre. Algunos sólo ven la violencia subversiva, y justifican o nada dicen frente a la violencia represiva. Otros sólo condenan esta última y legitiman la primera.

Hay, en esta materia, una especie de maniqueísmo inmoral y dañino. Para unos, todo crimen es obra de revolucionarios marxistas leninistas; para otros, quienes los cometen son siempre aparatos represivos al servicio de intereses reaccionarios. La experiencia demuestra lo contrario. ¿Fueron acaso los mismos los asesinos del general Schneider y de Edmundo Pérez? ¿Fueron los mismos los asesinos del general Prats, de Orlando Letelier, del general Carol Urzúa o del coronel Fontaine? ¿Son los mismos que atentaron contra el general Pinochet, los que mataron a Tucapel Jiménez, los que intentaron asesinar a Bernardo Leighton y los que hicieron lo mismo al general Leigh? ¿Son los mismos los que asesinan carabineros y los que degollaron a Parada, Guerrero y Natino?

La experiencia universal demuestra que el asunto es más complejo. Ciertamente se requiere de mecanismos policiales eficaces y de una legislación penal adecuada. Pero si queremos evitar que la violencia de un lado provoque la del otro, generando una cadena de venganzas recíprocas, debemos hacer un esfuerzo muy grande y generalizado para descubrir la verdad y hacer justicia, de modo que nadie tenga pretextos para proceder por sí mismo. Sólo así erradicaremos la cultura de la muerte.

Yo hago un llamado al corazón de todos los chilenos, de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes, para que desterremos toda forma de violencia. Recojo la idea de una gran campaña de formación moral contra la violencia e invito a los señores parlamentarios a que estudiemos juntos la manera más eficaz de poner término a ese flagelo.

2. *Democratización de la sociedad y perfeccionamiento de las instituciones*

Para construir una democracia sólida y estable necesitamos perfeccionar nuestras instituciones, de manera de asegurar principalmente lo siguiente:

a. La plena vigencia, en el territorio nacional, de los derechos humanos para todas las personas;

b. La participación de todos los sectores en los distintos aspectos de la vida colectiva en que tengan interés;

c. Una administración de justicia eficiente y oportuna;

d. Una adecuada integración entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil;

e. Mecanismos eficientes y justos de seguridad del Estado, y

f. Equilibradas relaciones entre los Poderes Públicos para conseguir el perfeccionamiento del Estado.

Para atender estas distintas necesidades nos proponemos llevar a cabo, durante mi gobierno, las acciones y políticas que paso a reseñar.

a. Vigencia de derechos humanos

La base fundamental de toda democracia es el pleno respeto a los derechos fundamentales de la persona humana.

En la reforma constitucional, aprobada en el plebiscito de julio último, se amplió la norma del artículo 5° que pone como límite al poder del Estado el respeto a dichos derechos, haciéndose expresa referencia a los consagrados en los Tratados Internacionales ratificados por Chile.

Consecuente con este criterio y a fin de darle plena aplicación, mi gobierno someterá próximamente a la aprobación del Congreso Nacional la ratificación de los siguientes tratados:

(1) Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada bajo el nombre de "Pacto de San José de Costa Rica", en el año 1969;

(2) Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea de Naciones Unidas, en 1966;

(3) Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Naciones Unidas en 1989, y

(4) Constitución de la Organización Internacional para las Mi-

graciones, aprobada por el Consejo del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, en 1987.

Asimismo, propondremos retirar las reservas con las que Chile promulgó, en 1988, la Convención Interamericana de 1985 y la adoptada por Naciones Unidas, en 1984, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Dentro de este mismo propósito de asegurar el pleno respeto a todas las libertades y derechos, el gobierno ha enviado al H. Congreso Nacional un proyecto de ley para eliminar las restricciones a la libertad de expresión.

Dicho proyecto ha recogido los puntos de vista del Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de la Prensa y la Asociación de Radiodifusores de Chile.

Asimismo, el gobierno aspira a avanzar en la creación de la institución del Defensor del Pueblo, como ente autónomo, sin facultades jurisdiccionales, con capacidad para representar a cualquier ciudadano afectado en sus derechos por algún acto de autoridad y ejercer en su nombre las acciones legales correspondientes.

b. Participación de los distintos sectores en los diversos aspectos de la vida nacional

No hay verdadera democracia sin participación.

Con el fin de hacer efectiva tal participación, el gobierno ha tomado o se propone adoptar las siguientes iniciativas:

(1) En el plano de la administración comunal, democratizar los municipios. Para ello hemos presentado los proyectos de reforma constitucional y de ley necesarios para materializar la aspiración, ampliamente compartida en el país, de que los alcaldes y los Concejos Comunales sean generados por elección popular. El alcalde deberá ser el órgano ejecutivo de los Municipios; el Concejo Comunal, integrado por concejales o regidores elegidos por sufragio universal y mediante un procedimiento de representación proporcional, tendrá facultades normativas y fiscalizadoras; y los actuales Consejos de Desarrollo Comunal, de representación vecinal y funcional, adecuadamente perfeccionados, serán organismos de participación de la comunidad organizada, de carácter consultivo y asesor;

(2) En el nivel de la vida vecinal hemos enviado también al H. Congreso Nacional un proyecto de ley para perfeccionar el régimen de las Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, a fin de

fortalecer la participación de la comunidad tanto territorial como funcional;

(3) En el ámbito de los problemas específicos del mundo femenino, hemos presentado un proyecto de ley en el cual se propone la creación del Servicio Nacional de la Mujer, como un organismo funcionalmente descentralizado, encargado de coordinar, planificar y proponer políticas, planes y programas que garanticen la plena igualdad e incorporación de la mujer en todas las áreas de la vida nacional. Velará, asimismo, por la eliminación de cualquier práctica discriminatoria que obstaculice su plena incorporación al desarrollo social, político, económico y cultural;

(4) Respecto de los jóvenes, hemos propuesto la creación del Instituto Nacional de la Juventud, estructurado como un organismo técnico, destinado a colaborar con el gobierno en el diseño, planificación y coordinación de las políticas que deben llevarse a cabo en los asuntos juveniles. Se trata, en este caso, de crear las condiciones para que los jóvenes conquisten un espacio importante en el sistema democrático, terminando con su situación de marginación y exclusión, e incorporándose de lleno a la vida económica, social, cultural y política del país;

(5) Finalmente, para propender a una efectiva democratización de la sociedad, estimo indispensable hacerse cargo de la situación de los pueblos indígenas, abriendo también respecto de ellos canales de participación. Para tal efecto, por decreto supremo se ha creado la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, que tiene por objeto asesorar al gobierno en la determinación de las políticas relacionadas con ellos, en particular en lo concerniente a su pleno desarrollo económico y social.

c. Administración de justicia eficiente y oportuna

Aunque la palabra "crisis" posiblemente disguste, nadie puede seriamente desconocer que la administración de justicia sufre serios problemas, tanto en lo que se refiere a su expedición —lentitud de los procedimientos, alto costo de los mismos, atraso en el funcionamiento de los tribunales— como en lo relativo a su organización e independencia. No parece necesario insistir sobre el fenómeno, porque al respecto hay amplio consenso en el mundo forense, en los distintos sectores sociales y en la opinión pública.

El gobierno considera necesario abordar este tema, largamente postergado, proponiendo las reformas que parecen necesarias. A tal efecto, hemos designado una Comisión Asesora del Ministerio de

Justicia, integrada por destacados juristas, que se abocará al estudio de una reforma constitucional y legal del Poder Judicial encaminada a su modernización y a constituirlo en un auténtico Poder del Estado. Ello implica dotarlo de autonomía económica y funcional, de manera que pueda cumplir cabalmente con su finalidad de ser garante del Estado de Derecho, pilar básico de un régimen democrático. Espero poder enviar el proyecto respectivo antes de fines del presente año.

En este mismo ámbito de la administración de justicia, el gobierno está abocado al estudio y búsqueda de solución a las gravísimas insuficiencias y problemas que afectan al sistema penitenciario nacional y al Servicio Nacional de Menores. La solución de esos problemas está condicionada en gran parte por la insuficiencia de recursos. En todo caso, estamos estudiando las medidas que nos permitan, a la mayor brevedad, corregir las más graves carencias que afligen a esos servicios.

d. Adecuada integración entre Fuerzas Armadas y sociedad civil

Mi gobierno persigue, simultáneamente, dos objetivos principales en el ámbito de la Defensa Nacional: por una parte, propender al reencuentro entre civiles y militares; y, por otra, mantener y fortalecer el nivel de preparación y eficiencia profesional y técnica de las Fuerzas Armadas.

En este último aspecto, la decisión del gobierno es mantener, dentro de las características del país, el más alto pie de eficiencia de nuestras Fuerzas Armadas, dimensionadas de acuerdo a las necesidades y posibilidades reales de la nación. Esa eficiencia ha de traducirse en adecuada dotación y un elevado nivel de entrenamiento y de capacidad defensiva-disuasiva.

Dentro de este rubro, merece el mayor respaldo nacional el esfuerzo que llevan a cabo nuestras instituciones armadas para desarrollar, con sus propios medios, tecnologías de importancia vital para el cumplimiento de sus tareas, como en los casos de los Astilleros y Maestranzas de la Armada, Asmar, y la Empresa Nacional de Aeronáutica, Enaer, entre otros. Allí se presenta un ejemplo de capacidad profesional, modernización y aplicación práctica de talento y de capacidad innovadora. Igualmente debe destacarse la valiosa cooperación de las instituciones de la defensa en la política antártica, en la política marítima y en el campo de la energía, como ocurre en la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

Por otra parte, pensamos que a las instituciones de la Defensa

Nacional les corresponde, dentro de su ámbito profesional, colaborar con el gobierno en la definición de aspectos importantes de la política internacional del país, como también en las tareas del desarrollo nacional, especialmente en el ámbito de la infraestructura física, el transporte y las comunicaciones.

En lo que respecta a la relación cívico-militar, consecuente con el espíritu de unidad nacional que inspira a mi gobierno, nos proponemos hacer todo lo que de nosotros depende para alcanzar, en los próximos cuatro años, una real integración entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil.

Bien sé que la tarea no es fácil, porque la distancia entre el mundo civil y el militar data en Chile desde hace más de medio siglo. Durante decenios, los integrantes de las Fuerzas Armadas tuvieron motivos para sentirse subestimados. Y durante los últimos dieciséis años y medio, buena parte de la población civil ha tenido motivos para sentirse maltratada y humillada.

Las Fuerzas Armadas deben ser, por su naturaleza, esencialmente apolíticas. Pertenecen a toda la nación —de la cual han recibido las armas para defender a la patria—, no a un sector ni a determinadas ideologías. Por eso la Constitución dispone que son “esencialmente obedientes y no deliberantes: profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”.

No obstante estos principios, aceptados por todos, cuando las Fuerzas Armadas asumen el gobierno tienden naturalmente a identificarse con “su gobierno”, lo que las lleva, de manera inevitable, a asumir posiciones políticas, tanto más cuanto mayor sea la participación de sus miembros en funciones de gobierno. Y como esas posiciones chocan con las de quienes discrepen del gobierno, tienden a considerar y tratar como “enemigos” a los opositores. Estos, a su vez, responsabilizan a las Fuerzas Armadas en conjunto de todo lo que el gobierno hace.

Esto es —como todos sabemos— lo que ha ocurrido en Chile; y ahora, cuando por decisión libre del pueblo y con la cooperación de las propias Fuerzas Armadas hemos vuelto a la democracia, unos y otros debemos ser capaces de superar los traumas del pasado reciente. En las elecciones del 14 de diciembre no fueron “derrotadas” las Fuerzas Armadas, ni quienes triunfamos somos sus “enemigos”. Fuimos, es cierto, “opositores al gobierno anterior”, lo que es cosa muy distinta de ser “enemigos de las Fuerzas Armadas”.

Yo invito a todos mis compatriotas, civiles y militares, a meditar lo que he dicho. Puesto que somos seres racionales, debemos ser capaces de superar prejuicios y pasiones, disipar errores y reencontrarnos en la verdad. Por mucho que las Fuerzas Armadas hayan sido el principal sustento del régimen anterior, una cosa fue el gobierno y otra las Fuerzas Armadas. Consiguientemente, las

responsabilidades "de ese gobierno" no son de "las Fuerzas Armadas", salvo las personales de quienes hayan participado en los hechos que las motivan.

Hay quienes quieren eludir sus responsabilidades políticas cubriéndose bajo el manto de las Fuerzas Armadas. Criticar cualquier conducta del gobierno anterior y sus funcionarios, sería "ofender" a las Fuerzas Armadas. Eso es falso.

Quien gobierna está naturalmente expuesto a la crítica de sus conciudadanos. Es el riesgo inherente a la función pública. Quien administra la "cosa pública", que interesa a todos, tiene que admitir el derecho de todos a opinar sobre el particular. A mí ya me están criticando. No me enoja. Tengo la convicción de estar haciendo lo posible por cumplir bien mis deberes de gobernante. Creo que la gran mayoría del país me comprende y me respalda.

Inspirado en estos criterios, mi gobierno busca y espera lograr la anhelada integración entre las Fuerzas Armadas y la civilidad, sobre la base del respeto mutuo y del estricto cumplimiento de las normas constitucionales que rigen la materia.

La política de defensa debe ser formulada y realizada con sentido nacional y no partidista. Puede el país estar seguro de que así procederá el gobierno, y llamo a todos los sectores para que actúen de igual manera.

Del mismo modo, espero que las instituciones armadas y sus mandos desempeñarán sus funciones por los cauces estrictamente constitucionales, con absoluta prescindencia de toda consideración de orden político, en su calidad de cuerpos "obedientes y no deliberantes", subordinados al Presidente de la República, que es su jefe superior y "dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional", según reza textualmente el artículo 90 de la Constitución Política.

Actuando unos y otros de este modo, no sólo cumpliremos lo que la nación nos exige, sino que también crearemos el clima indispensable para que el pueblo de Chile y sus Fuerzas Armadas se reencuentren en la senda de patriotismo y lealtad que nos trazaron nuestros héroes, el general O'Higgins y el capitán Prat.

e. Mecanismos eficientes y justos de seguridad del Estado

Es tarea esencial e ineludible de todo gobierno la defensa de la seguridad interior y el resguardo del orden público. Mi gobierno asume plenamente su responsabilidad en la materia, sobre la base de que ésta es una tarea que debe comprometer al conjunto de la

sociedad y de las instituciones del Estado y, muy especialmente, a las Fuerzas de Orden y Seguridad.

En esta materia, hemos heredado una situación conflictiva, caracterizada por hechos de violencia y acciones terroristas que desde hace varios años se vienen produciendo con frecuencia.

Aunque, como lo dijimos anteriormente, la enorme mayoría del país repudia esos procedimientos, su origen se encuentra, por una parte, en concepciones ideológicas extremistas, de distintos signos, que preconizan la vía armada como método de acción política —en franco retroceso hoy en Chile y en el mundo— y, por otra parte, en la secuela dejada por anteriores hechos de violencia y actuaciones represivas que se tradujeron en graves violaciones de derechos humanos y que jamás se han esclarecido.

Aunque no se trate de una situación generalizada, como ciertos sectores se empeñan en hacerlo creer, sino más bien de hechos aislados y de grupos muy minoritarios, el gobierno tiene la firme decisión de emplear todos los medios legítimos a su alcance para combatirlos.

Respetuoso de los derechos de las personas y de las normas de la institucionalidad democrática, creemos que al terrorismo y al violentismo se le combate y derrota en democracia por los métodos legales, tal como lo hacen con éxito casi todos los Estados democráticos del mundo.

Conforme a la Constitución Política, la acción en esta materia para descubrir y castigar a los responsables de esta clase de hechos corresponde principalmente a Carabineros, la Policía de Investigaciones y los Tribunales de Justicia.

El gobierno no es partidario —como algunos sugieren— de re-crear para ese fin servicios especiales, que la Constitución no autoriza, cuya acción en el pasado dejó tantas heridas y cuya reciente supresión fue acogida con beneplácito por la mayoría del país.

Quiero ser muy claro a este respecto: rechazamos la existencia de grupos de inteligencia armados o de policías secretas con facultades omnímodas; éstos son métodos incompatibles con la democracia.

Pensamos, en cambio, que aparte de crear una conciencia nacional en la materia, que lleve a toda la ciudadanía a rechazar el violentismo y a cooperar para su extinción, y de tratar de eliminar algunas causas que suelen originarlo, esclareciendo la verdad y procurando hacer justicia respecto de crímenes impunes, es necesario robustecer la capacidad de acción de los organismos competentes, especialmente Carabineros y la Policía de Investigaciones, coordinando su actuación y dotándolos de medios para que cumplan eficazmente sus funciones.

En este sentido, hemos otorgado recientemente a Carabineros de Chile un complemento presupuestario que le permita completar

este año su proyecto de aumento de mil plazas, y seguiremos buscando la manera de dotarlo de los recursos humanos y materiales que necesita. Por otra parte, hemos adoptado las medidas que permitan a Carabineros y a la Policía de Investigaciones reasumir funciones que naturalmente les corresponden y que en el pasado inmediato fueron ejecutadas por otros organismos.

f. Perfeccionamiento del Estado

Siempre en el propósito de perfeccionar nuestro sistema democrático, creemos necesario, en sucesivas etapas, abordar ciertas reformas constitucionales o legales que mejoren la representatividad o la eficacia de algunas instituciones del Estado, actuando sobre la base de los consensos ya expresados o futuros consensos que se vayan produciendo.

Aparte de proyectos a que ya me he referido, nos parece necesario elevar el nivel de responsabilidad política y administrativa de los servicios preocupados de la actividad global del gobierno. Es lo que pretenden los proyectos de ley que he sometido al H. Congreso, que transforman en Ministerios a Odeplan y a la Secretaría General de la Presidencia.

La complejidad que adquiere en la actualidad el ejercicio de la función gubernamental, exige elevar los niveles de coordinación en el gobierno para hacer posible la necesaria complementación interministerial en el desarrollo de las políticas públicas. Esta necesidad de coordinación es impuesta tanto por el carácter multidimensional que adquieren las materias de gobierno como por la necesidad de ahorrar al país el máximo de recursos, tanto humanos como materiales, a través de una gestión estatal ágil y eficiente.

Todas estas reformas de carácter administrativo, incluyendo las que puedan ser indispensables para superar algunas rigideces que obstaculizan la eficacia de la acción gubernativa, se abordarán preferentemente en la primera etapa de mi gobierno y se harán evitando duplicaciones y gastos superfluos, con pleno respeto a la carrera funcionaria, rechazando cualquier pretensión de reorganización global de la administración pública.

Simultáneamente, el gobierno estudia la conveniencia y oportunidad de someter al H. Congreso Nacional algunos proyectos de reforma constitucional o de leyes que aborden materias sobre las cuales existe, se ha expresado o se llegue a producir un grado importante de consenso ciudadano. Tal es el caso del sistema electoral, la composición del Tribunal Constitucional, el régimen de los partidos políticos, el Consejo Nacional de Televisión, la dependencia de Carabineros e

Investigaciones, y otras que responden a aspiraciones expresadas en las Bases Programáticas de la Concertación de Partidos por la Democracia.

En cuanto a los planteamientos que se han formulado respecto a cambios más substanciales en el régimen político, pienso que el asunto es de tanta importancia que exige el logro de un consenso ampliamente mayoritario al respecto. Se trata de un tema que es necesario abordar, desde ahora y con la mayor seriedad, en seminarios de especialistas, en institutos de estudio, por los partidos políticos y por los medios de comunicación. De este modo la opinión pública se podrá formar conceptos claros y definidos, lo que asegura que las decisiones que en su oportunidad se adopten sobre tan trascendental materia estén debidamente maduras.

3. *Hacia una sociedad más equitativa*

En los últimos años, Chile ha experimentado un crecimiento económico y modernizaciones importantes en diversos sectores de la actividad nacional. Sin embargo, esta situación positiva coexiste con la presencia de desigualdades muy profundas. Si ellas persisten sin un pronto y efectivo avance para superarlas, corremos el riesgo de consolidar dos países distintos y antagónicos: uno, el Chile de los que tienen acceso a la modernidad y a los frutos del crecimiento; y otro, el de los marginados, socialmente excluidos de la vida moderna, convertidos en una carga para la sociedad.

Es evidente que, para superar esa dualidad, la llamada política del "derrame" no constituye un camino viable ni eficaz. Que el crecimiento por sí mismo mejore la situación de los más destituidos puede tardar varias décadas. Como nos dijo Su Santidad Juan Pablo II, "los pobres no pueden esperar". Chile necesita una acción positiva del Estado para progresar hacia la equidad.

Un imperativo moral exige avanzar hacia un Chile donde exista cada vez mayor justicia social. Tenemos un compromiso solemne de hacerlo. Nuestras acciones durante estos meses son testimonio de ese compromiso, y no cejaremos en esta preocupación permanente por nuestros compatriotas socialmente postergados.

Avanzar hacia una mayor equidad es también una condición de la estabilidad política y económica del país. Una sociedad atravesada por desigualdades socioeconómicas inaceptables para el sentimiento moral contemporáneo, es el mejor sustrato para la exacerbación del conflicto político y su desenlace: el quiebre institucional y la opresión política subsiguiente.

Donde la injusticia social prevalece, no hay paz laboral, ni con-

fianza; empresarios y trabajadores se convierten en enemigos, con el consiguiente resultado de inestabilidad y estancamiento económico.

No podemos avanzar en el camino del desarrollo sin avanzar a la vez en el camino de la justicia social. Para crecer, necesitamos trabajo, disciplina, perseverancia, paciencia, voluntad de emprender y unidad, lo que sólo puede conseguirse en un clima de equidad en que todos se sientan partícipes no sólo del esfuerzo, sino también de los frutos del crecimiento.

Avanzar en el camino de la equidad significa integrar cada vez a más y más chilenos en el esfuerzo del desarrollo. La pobreza, la escasa educación, la mala salud de tantos chilenos, equivale a un desperdicio de energías, talentos y capacidades potenciales.

Avanzar hacia una mayor equidad equivale a invertir en las personas, en capital humano. La justicia social nos beneficia a todos, no sólo a nuestros compatriotas socialmente destituidos y marginados.

Inspirados en estos principios, y procediendo con criterios realistas, hemos definido los objetivos concretos que nos proponemos cumplir durante los próximos doce meses en los diversos sectores sociales, para avanzar eficazmente hacia la equidad a que aspiramos.

a. Política laboral

En el ámbito de las relaciones laborales, nos guía un criterio básico: lograr los mayores acuerdos posibles con el sector sindical y el sector empresarial, a fin de concordar permanentemente las orientaciones fundamentales relativas a cambios en la legislación laboral. Las experiencias pasadas indican que una sociedad y una economía en la que constantemente se están enfrentando grupos antagónicos, no es eficiente ni viable. Es necesario aumentar los niveles de cooperación entre los diversos intereses involucrados.

El primer resultado de esta política ha sido el acuerdo marco entre la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación de la Producción y del Comercio y el gobierno, suscrito el 27 de abril pasado. Expresamos nuestro público reconocimiento a los dirigentes sindicales y empresariales que participaron en este Acuerdo, por el sentido de responsabilidad y de vocación patriótica que han mostrado. Saludamos también a las bases de estas organizaciones, que entregaron un generoso respaldo a sus dirigentes.

El acuerdo marco refleja concretamente la voluntad que tienen las partes firmantes de transitar por un camino de diálogo y participación antes que por uno de confrontación y enfrentamiento. Lo

anterior no significa que unos y otros renuncien a sus legítimas reivindicaciones, ni tampoco a su autonomía, independencia y funciones propias. Pero sí establece que, conjuntamente con la defensa de sus aspiraciones específicas, es el interés de Chile, de la nación entera, lo que todos ponen como prioridad fundamental. ✓

Este acuerdo simboliza el clima de entendimiento que prevalece en el país y permite augurar con optimismo el futuro de las relaciones laborales de nuestra patria. En efecto, trabajadores, empresarios y gobierno concuerdan en que Chile tiene hoy, como nunca antes, una oportunidad histórica de conjugar democracia política con desarrollo económico y justicia social. Estos tres elementos, que estuvieron a menudo disociados, ya sea porque se le dio más importancia a uno que a los otros, ya sea porque se creyó que era posible progresar en unos sin consideración de los otros, ahora son reconocidos por todos como factores que se necesitan recíprocamente y que deben ser perseguidos en conjunto. Esta comprensión revela que están en retirada los viejos ideologismos que hacían ver como adversarios a los sectores sociales con intereses específicos, en vez de considerarlos actores con capacidad de lograr acuerdos para progresar en común.

A partir del acuerdo marco, se han identificado un conjunto de materias en las que se hace indispensable introducir cambios para perfeccionar la legislación laboral.

Para progresar hacia relaciones laborales modernas y equitativas, se requiere, en primer lugar, de organizaciones sindicales vigorosas. Para ello, entre otras medidas en estudio, creemos justo y realista reconocer la personalidad jurídica de las centrales nacionales de trabajadores, mejorar el financiamiento de los sindicatos y perfeccionar la regulación de fueros y licencias sindicales.

En materia de contratos colectivos, creemos justo ampliar la posibilidad de negociación colectiva al mayor número de trabajadores. Para ello deberá ampliarse la capacidad de negociación a las federaciones y confederaciones, además de los sindicatos de base según la voluntad de las partes y protegiendo en todo caso la soberanía de la empresa como el lugar donde deben tomarse las decisiones fundamentales.

En materia de contrato individual de trabajo también es necesario perfeccionar el sistema, especialmente en lo relativo al régimen de terminación del contrato.

Alcanzar una sociedad más equitativa exige una preocupación primordial por la situación laboral de las mujeres. Están en estudio las iniciativas necesarias para mejorarla y para poner término a las prácticas discriminatorias que la mujer suele sufrir en su vida de trabajo.

En un ámbito más específico, es necesario legislar sobre aspectos

del trabajo campesino, su régimen sindical y la negociación colectiva en ese ámbito. Esta tarea exige conciliar los requerimientos de la justicia social con las exigencias ineludibles de la producción agrícola y los superiores intereses del país. Especial atención deben merecer los regímenes de trabajo de temporada y de contratos a plazo fijo, las normas relativas a la jornada de trabajo, los sistemas de subcontratación y la regulación de otras situaciones sectoriales que pudieran no estar cubiertas por las normas generales.

Del mismo modo, con el propósito de perfeccionar en lo posible las relaciones laborales en el ámbito del sector público, especialmente en lo que respecta a la participación de las agrupaciones de funcionarios, se ha constituido una Comisión conjunta con representantes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y de los Ministerios del Trabajo, Hacienda y Economía, para estudiar estas materias.

En conformidad al referido acuerdo marco, se ha propuesto elevar el salario mínimo a 26 mil pesos a partir del 1° de junio. En materia previsional se ha decidido incrementar las pensiones mínimas y asistenciales en un 10,6 por ciento adicional, al momento que corresponda el próximo reajuste de pensiones, lo que beneficiará a tres cuartas partes de los pensionados de Chile. Asimismo, hemos propuesto complementar las asignaciones familiares de los trabajadores que ganan menos de 70 mil pesos y elevar el subsidio único familiar a 1.100 pesos. Dichos complementos e incrementos se otorgarán desde el momento en que entre en vigencia la Reforma Tributaria.

Todas estas materias están siendo estudiadas con participación de los sectores involucrados, y sobre ellas el gobierno ha presentado o presentará próximamente al H. Congreso Nacional los correspondientes proyectos de ley.

Sin embargo, la mejor legislación laboral es letra muerta o inútil si no se cumple. Conscientes de los serios déficit existentes en esta materia, reforzaremos la función propia del Estado de fiscalizar la legislación laboral en todos sus aspectos, y muy especialmente en lo relativo a la seguridad en el trabajo. Devolveremos a la Dirección del Trabajo el papel que tradicionalmente cumplió. Con ese fin, se ha iniciado una readecuación de ese Servicio que da prioridad a la acción en el terreno, y toma medidas tendientes a ampliar la cobertura de la actividad de inspección respecto de los lugares a los que alcanza. Llamamos a empresarios y trabajadores a colaborar en estas actividades fiscalizadoras, pues está en el interés de todos que se cumplan con éxito.

Al mismo tiempo, se ha iniciado el diseño de un sistema de información y orientación ocupacional sobre oferta y demanda de trabajo, que sea útil al sistema de capacitación profesional y educa-

ción técnica. También se han evaluado medidas de orden legal para la creación y el fomento de organismos técnicos intermedios que integren a las pequeñas empresas y al sector informal.

En todas estas materias, tanto en el ámbito de las iniciativas legislativas como en los diversos aspectos de la política laboral, queremos conocer la opinión de los sectores directamente interesados, en especial las organizaciones sindicales, a fin de promover su participación. Queremos radicar la iniciativa de las relaciones laborales donde corresponde, en empresarios y trabajadores, y no en el gobierno ni en una sola de las partes, ya sea la empresarial o la laboral. Por ello las propuestas pretenden lograr que empresarios y trabajadores adquieran cada vez mayor autonomía en sus relaciones, y que los mayores progresos en las relaciones laborales sean precisamente fruto de esa bilateralidad. El criterio que inspira los cambios legales no es crear una abigarrada legislación que interfiera en cada uno de los aspectos del vínculo laboral. Al contrario, queremos obtener una legislación del trabajo general, que reconozca capacidades, derechos y resguardos para que trabajadores y empresarios, en condiciones equitativas en cuanto a poder de negociación, concuerden entre ellos los mecanismos apropiados a sus realidades.

b. Política de salud

Avanzar hacia una sociedad equitativa exige progresar en hacer efectivo el derecho a la salud de todo chileno, derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Corresponde al Estado garantizar a todos el acceso a una atención digna, oportuna y eficiente, y cautelar la existencia de condiciones que mejoren la calidad de vida de la población.

El gobierno se enfrenta a una situación profundamente negativa en materia de salud, particularmente en los grupos sociales más desposeídos.

En las comunas pobres, los indicadores de salud como desnutrición, mortalidad infantil y población en riesgo biomédico, están muy por debajo de sus promedios nacionales.

Por otra parte, el retraso tecnológico, la insuficiencia de recursos humanos y financieros y la falta de renovación de la planta física, han afectado muy negativamente la capacidad de respuesta del sector público a las demandas por atención en los niveles secundarios y terciarios. El nivel primario, traspasado a los municipios, presenta un desfinanciamiento cercano al 50 por ciento; carece de supervisión técnica por parte del Ministerio de Salud, y posee baja capacidad resolutive. El resultado es una creciente demanda insatisfecha debido a los rechazos y demoras en la atención.

En el caso de los trabajadores, su horario de actividades les limita el acceso a la atención de salud, y no hay programas específicos para la prevención y disminución de los riesgos ocupacionales.

Por último, en el sector de libre elección el costo para el usuario ha aumentado, en razón del incremento del arancel de las prestaciones, la disminución del monto máximo de los préstamos médicos, y por el hecho de que más del 60 por ciento de los profesionales atienden en el nivel más caro.

Este grave deterioro es el resultado de una política que, respondiendo a criterios más ideológicos que realistas, ha privilegiado desproporcionadamente el desarrollo del sector privado en desmedro del área pública. Esto se refleja en la disminución, entre 1974 y 1989, del gasto fiscal por habitante en 43 por ciento; el aporte fiscal a salud disminuyó de 7,2 por ciento a 3,5 por ciento del gasto total del Fisco. Por último, el gasto en inversión real respecto al gasto público en salud, bajó de 9,7 por ciento a 5,7 por ciento.

Resultado de esta política es el gravísimo deterioro existente en el nivel de conservación de edificios, equipos y vehículos en el área de la salud. De las 703 ambulancias existentes en el sector público, 53 por ciento están en mal estado o fuera de servicio. En los equipos de lavandería, 90 por ciento de las lavadoras y centrifugas están deterioradas, y en cuanto a las centrales térmicas, 40 por ciento de las calderas están paralizadas. A ello debe agregarse una política de personal caracterizada por la insuficiencia de las dotaciones, la inexistencia de carrera funcionaria para los profesionales del sector, la falta de oportunidades de perfeccionamiento y, consiguientemente, la fuga de personal calificado del sector público al privado en busca de mejores remuneraciones y condiciones de trabajo.

Para avanzar hacia la equidad, haciendo progresivamente más efectivo el derecho a la salud, nos hemos propuesto varias metas concretas.

Primero, buscamos mejorar el acceso a la salud en el nivel primario de atención. Ello lo haremos eliminando el cobro directo a los beneficiarios, aumentando los recursos humanos y gastos de farmacia en 60 consultorios, creando un tercer turno de personal en 44 consultorios, organizando a los Servicios de Atención Primaria de Urgencia en 12 consultorios, poniendo en funcionamiento 15 unidades móviles, y reforzando la atención primaria en 100 comunas rurales seleccionadas.

En segundo término, queremos superar la crisis hospitalaria que vivimos. En lo inmediato, se va a dotar a los hospitales de recursos adicionales para mejorar la situación en farmacia, ropería, mantención de edificios, equipos y dotación de medios de transporte. A la vez, se han iniciado estudios destinados a concretar el plan de inversiones para el período 1991-93, a reestructurar la planta de

personal del Servicio Nacional de Salud, y a que su financiamiento sea considerado en la formulación del presupuesto de 1991.

En tercer lugar, impulsaremos la prevención y la protección de la salud. Con tal fin se fortalecerá el programa de inmunizaciones y se incentivará la capacitación del personal en áreas específicas de prevención y protección. Especial atención merece a este gobierno la protección de la salud de los trabajadores y las mujeres, particularmente en lo que atañe a la legislación de medicina preventiva.

Un elemento muy importante en las tareas de prevención es avanzar en la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado. Por una parte, en el sector de obras públicas se estudia la aplicación de un sistema tarifario que, financiando estos servicios, permita apoyar a las personas de menos recursos mediante un esquema adecuado de subsidios. Por otra parte, vamos a impulsar los programas rurales de agua potable y el aumento de nuevas fuentes que proporcionen seguridad en la cobertura actual y futura.

En materia de alcantarillado, estamos evaluando soluciones de saneamiento que sean consistentes con la realidad nacional. Un ejemplo es el programa de saneamiento del Gran Valparaíso, cuyas fases de estudio y programación han terminado. Entre otras cosas, ello significa que, en el mediano plazo, las playas del litoral central se encontrarán limpias y abiertas para el desarrollo regional.

Es evidente que la negativa situación en el área de la salud requiere de un sector público mucho más robusto del que disponemos. Es necesario fortalecer la capacidad institucional del sector, y para ello se ha iniciado el proceso que llevará a la formulación de un Plan Nacional Estratégico de Salud. Igualmente, estamos estudiando la creación de un Consejo Consultivo Nacional para el sector.

Uno de los problemas más graves que afectan la salud de todos los chilenos es el de la contaminación ambiental. Adicionalmente, es un problema que nos puede traer serias repercusiones económicas, al tener como efecto que productos chilenos no puedan ingresar a mercados extranjeros por estar contaminados. En el caso de Santiago, se ha creado una Comisión Especial Interministerial, que ya ha puesto en práctica un conjunto de medidas inmediatas y estudia un plan de mediano plazo para abordar el problema de manera integral.

c. Política de vivienda

Tal como sucede con la salud, en materia de vivienda nos encontramos con una situación altamente negativa, a partir de la cual debemos desarrollar esfuerzos para progresar en el camino de la equidad.

No sólo padecemos un enorme déficit habitacional. A la vez,

heredamos para el presente año una situación presupuestaria regresiva respecto de años anteriores. El gasto global neto y los recursos para financiar la inversión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que se consideran en el presupuesto de este año, son inferiores en más de 7 por ciento a los niveles reales observados en promedio durante los dos años anteriores. Adicionalmente, si se quiere mantener el mismo nivel de gasto real de 1989 en el subsidio indirecto que ese Ministerio realiza en la venta de letras hipotecarias, la disponibilidad de recursos implicaría este año un déficit que se estima superior a los 3 mil millones de pesos.

Otra limitación para el desarrollo de programas habitacionales reside en la descapitalización y pérdida de reservas de suelo urbano, como resultado de la enajenación de activos disponibles realizada durante la administración anterior. En varios casos, dichos recursos fueron aportados a programas habitacionales por valores muy inferiores a su tasación comercial, y no se adquirieron los terrenos necesarios para el normal desarrollo de programas futuros.

Además del déficit de viviendas, es necesario subrayar que nuestras ciudades han crecido inorgánicamente. Por esto, hoy se carece de equipamiento comunitario y social en muchas poblaciones, especialmente en las de sectores de menores recursos.

Para avanzar en la solución al problema de vivienda en el mediano plazo, se ha elaborado un Plan Nacional de Vivienda, el cual consulta un aumento importante de las soluciones habitacionales. De este modo se tiene previsto alcanzar un ritmo de absorción del déficit heredado que permita, al cabo de cuatro años, sentar bases sólidas para su progresiva superación.

El plan se propone elevar la inversión pública en vivienda desde el 1,2 por ciento del Producto Geográfico Bruto en 1990, hasta llegar al nivel que existía al comienzo del pasado gobierno. Lograr esa meta implica aumentar significativamente el número de soluciones habitacionales entre 1990 y 1994, esfuerzo que exige incrementar la capacidad constructora, la inversión en vivienda, la organización social y la creatividad de los beneficiados.

En el presente año, atendidas las restricciones existentes, hemos asignado prioridad a las necesidades de los sectores de menores ingresos y extrema pobreza. Esas necesidades se atenderán mediante el Programa de Emergencia, para cuyo desarrollo será necesario obtener recursos adicionales.

Las restricciones de recursos y la urgencia que afecta a los sectores de menores ingresos y en extrema pobreza han llevado a privilegiar, dentro de ese Programa de Emergencia, la amplitud de la cobertura por sobre el carácter más definitivo de la solución. En una primera etapa se entregarán soluciones iniciales mínimas, garantizando su urbanización y equipamiento comunitario básico. En

el segundo y tercer año, con la participación del beneficiario y la colaboración técnica y financiera del Estado, se progresará hacia una solución definitiva.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en conjunto con el Ministerio del Interior, han reactivado el programa de Mejoramiento de Barrios y Lotes con Servicios, con el objeto de duplicar las soluciones que estaban previstas para 1990. Ello permitirá entregar 15 mil nuevos lotes, distribuidos en todas las regiones. Esta acción está especialmente dirigida a la atención de allegados, que componen el 20 por ciento de las familias de menores ingresos.

Tiene especial relevancia en la atención de las necesidades de vivienda y urbanismo de los más postergados, el conjunto de actividades vinculadas al Ministerio del Interior, que se desarrollan a partir del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En la distribución del Fondo se ha establecido, como un criterio principal para la asignación de prioridades, el nivel de carencias sociales básicas. Igualmente, estamos modificando la capacidad redistributiva del Fondo Común Municipal en beneficio de las comunas cuya población presenta mayores niveles de pobreza.

En materia de subsidio habitacional se estudia la modificación del Reglamento pertinente, con el fin de asegurar tres objetivos: primero, que las personas participen organizadamente en el mercado de la vivienda a través de cooperativas y organizaciones vecinales; segundo, obtener una mejor distribución regional de recursos para enfrentar el déficit habitacional; y tercero, que los subsidios lleguen mayoritariamente a las familias más pobres: hasta ahora, en efecto, por la vía de subsidios implícitos u ocultos, se ha estado privilegiando a las familias de mayores ingresos.

El Plan Nacional de Vivienda se complementa con el desarrollo de acciones de mejoramiento urbano y de dotación de obras de equipamiento y de servicio. En este esfuerzo, la orientación y acción del Estado deberá complementarse con las iniciativas de las municipalidades y con la participación activa de la comunidad organizada. Se trata de alcanzar una gran movilización de recursos, iniciativas, solidaridad y buena voluntad para dignificar el nivel habitacional y poblacional de los chilenos de escasos recursos.

Junto con esto, el gobierno se propone mantener y perfeccionar los mecanismos que faciliten la satisfacción de las necesidades habitacionales a los sectores medios, y abordar con criterio realista el grave problema del crecimiento desmedido y anárquico de las ciudades, a fin de lograr una utilización más eficiente y económica de las áreas urbanas.

d. Política educacional

El proceso de democratización y modernización de la sociedad chilena y el pago de la deuda social contraída con los más pobres, hacen de la educación uno de los objetivos prioritarios de este gobierno. No habrá una sociedad democrática y moderna en Chile si desde ahora no formamos y preparamos para ello a las nuevas generaciones, y si no damos las mismas oportunidades de acceso a una educación de calidad a todos nuestros niños y jóvenes, los hoy privilegiados y los hoy desposeídos. Ambos compartirán el Chile del siglo XXI, y aportarán positivamente al desarrollo del país, si reciben una educación que les permita comprender y participar en la sociedad moderna y democrática.

La situación que heredamos en materia educacional presenta problemas en cuanto a la calidad de la enseñanza, la alta desigualdad existente entre los distintos tipos de establecimientos y su fuerte fragmentación. A ello hay que agregar otros tres elementos que agravan su crisis.

En primer lugar, la disminución de recursos estatales. Mientras en 1970 el sector educación gastaba 4,2 por ciento del PGB, en 1988 había reducido su participación a 2,7 por ciento. La administración municipal de los establecimientos presenta un déficit de arrastre de 7 mil millones de pesos, cifra semejante al déficit en el sector de universidades, debido este último al problema de cobro del crédito fiscal y a necesidades de desarrollo institucional. La asistencialidad a los estudiantes ha sido reducida en los últimos años. En 1973, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas ofreció desayunos u once a 1.445.600 alumnos y almuerzos a 674.300; en 1990 se programó la entrega de 476.448 desayunos u once y una cifra análoga de almuerzos.

En segundo lugar, la "municipalización" de escuelas y liceos no ha dado los frutos que se anunciaron en su origen. La calidad de la educación en los establecimientos municipalizados no es superior a la de los establecimientos privados subvencionados. Las comunidades no participaron en la gestión educativa, la cual en muchos casos ha tenido un carácter concentrador y a menudo poco transparente y arbitrario. Los docentes han visto deterioradas sus condiciones de empleo y han sido sujetos a una situación de inestabilidad y de subordinación que afecta fuertemente la capacidad de su desempeño profesional.

En tercer lugar, las condiciones en que se ejerce la función docente han sufrido un grave deterioro en todos los niveles, incluida la educación superior, lo cual afecta negativamente su desempeño y rendimiento.

Las consecuencias de lo anterior se traducen en notorias fallas

en los diversos niveles del sistema. En la educación prebásica hay fallas de cobertura, de organización institucional y de funcionamiento. En 1989, por ejemplo, sólo un niño de cada cinco recibió atención preescolar.

En la educación básica hay graves problemas de calidad. Según pruebas que se han estado aplicando, los alumnos de cuarto año de educación básica aprenden algo menos de la mitad de lo que se espera de ellos, y los alumnos inscritos en escuelas gratuitas, provenientes de familias de bajos ingresos, aprenden sensiblemente menos que los inscritos en escuelas pagadas.

En la educación media se presentan los mismos problemas de calidad e inequidad, agravados por la gran desorientación existente en cuanto a los fines que debe cumplir. La educación media no prepara adecuadamente para el trabajo ni para la educación superior, y tampoco da al estudiante los instrumentos necesarios para comprender, participar e interpretar la sociedad en que vive.

La educación superior presenta déficit de cobertura y una acentuada descoordinación y fragmentación institucional. Hoy, la cobertura del sistema universitario en relación a la población entre 20 y 24 años es inferior a la de 1973.

Frente a esta situación, buscaremos hacer efectivo el derecho y la oportunidad de los chilenos a una buena educación en todos los niveles, reafirmando los principios de la libertad de enseñanza y de un papel activo y responsable del Estado en las tareas educacionales.

En el nivel de educación prebásica, esperamos ampliar la cobertura de la educación formal y de la no convencional, estimulando la participación activa de la comunidad. A la vez, procuraremos mejorar la calidad del sector actualmente cubierto a través de programas de perfeccionamiento y capacitación. Este conjunto de acciones está siendo evaluado y coordinado por una Comisión Interdisciplinaria e Interinstitucional bajo la tuición del Ministerio de Educación.

Para el nivel de educación básica, se ha iniciado un programa de mejoramiento que se extenderá durante todo el período de este gobierno, y que en el presente año beneficiará a los novecientos establecimientos de más bajo rendimiento del país.

En relación a la educación media, se lleva a cabo un proceso de investigación, experimentación, innovación y evaluación que permitirá generar, previa una amplia discusión nacional, el consenso necesario sobre las orientaciones y fines de este nivel, tanto en lo que se refiere a la formación para el trabajo como a la preparación para la educación superior.

Con respecto a la educación para el trabajo, se está diseñando un programa de capacitación y formación profesional en la empresa, que involucra al Ministerio de Educación, al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y al futuro Instituto Nacional de la Juventud.

Sus destinatarios son jóvenes entre 15 y 24 años, que no estudian ni trabajan. En cuatro años, abarcará 160 mil jóvenes. Este programa es una expresión concreta del compromiso de este gobierno con la creación de mayores oportunidades para la juventud.

Conscientes del deterioro padecido por la profesión docente, estamos estudiando, con la audiencia del Colegio de Profesores, un Estatuto de la Profesión Docente que regule a nivel nacional la carrera de profesor. Este Estatuto mejorará la calidad de la educación, hará justicia al profesorado y permitirá resolver, sin apasionamiento ni prejuicios, el problema de la administración y gestión del sistema educativo.

En cuanto a la gestión del sistema, se mantendrá el rol central del municipio, pero se rectificará su actual dependencia de la exclusiva voluntad de los alcaldes funcionarios, asignando al Ministerio de Educación la función de supervisar y apoyar el proceso educativo, y sobre todo de velar por su equidad. Nuestro objetivo es consolidar una institucionalidad que combine los principios de descentralización, participación de los profesores y de la comunidad, respeto a las diversidades culturales y regionales, y eficiencia administrativa.

En armonía con la meta de lograr una mayor equidad, el gobierno mantendrá el sistema de subvenciones a la educación gratuita. A la vez, procurará incentivar la participación de la comunidad en este propósito. También estudiará las distorsiones que existan en el uso de los fondos públicos destinados a apoyarla, para adoptar las medidas que las corrijan.

Estamos conscientes de que la educación superior es crucial en el desarrollo del país. Sin embargo, tras las políticas aplicadas durante los últimos años, el sistema de educación superior, particularmente el universitario, padece hoy serios problemas de gobierno, coordinación y financiamiento, entre otros. Por ello, respetando el principio de autonomía universitaria, el gobierno ha creado una Comisión de Estudios, de composición pluralista y de alto nivel académico, que dentro de seis meses deberá hacer proposiciones para una legislación general de mediano y largo plazo que regule el sistema de educación superior.

En el plano del desarrollo científico, el actual nivel de las ciencias en Chile es sólo producto del esfuerzo personal aislado de los investigadores de universidades y centros privados. Al país le ha faltado lo que ha sido un factor decisivo en el desarrollo científico en otras naciones: una política nacional y un compromiso gubernamental claro con el avance de las ciencias. Estamos empeñados en la formulación de esa política, de modo de estimular la investigación, revitalizando el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, e implementando gradualmente los recursos para la actividad científica a través del Fondo de Desarrollo Científico y

Tecnológico y los presupuestos universitarios. El apoyo a la investigación en universidades y centros privados, el cultivo de las ciencias a lo largo del país y la formación de personal en áreas prioritarias y áreas retrasadas, nos pondrá en el camino de un auténtico desarrollo científico.

En el ámbito de la cultura, respetando la autonomía de sus diversas expresiones, creemos necesario incentivar la creatividad en sus múltiples expresiones y promover la igualdad de oportunidades en el acceso a los bienes y servicios de carácter cultural. Con tales fines, hemos iniciado un esfuerzo de coordinación para generar una política cultural que, junto con fortalecer la comunidad de los creadores artísticos e intelectuales y canalizar sus aspiraciones, favorezca el desarrollo de la cultura popular y el acceso de las grandes mayorías a estos bienes y servicios.

e. Política frente a la pobreza

Es imposible avanzar hacia una sociedad más equitativa si no se superan en medida importante las situaciones de pobreza que padecen tantos compatriotas. Los últimos dieciséis años han significado un serio retroceso en la situación de los más pobres. En cada recesión, los sectores de menores ingresos sufrieron la desocupación y la caída de sus remuneraciones, como asimismo los efectos de un drástico deterioro en el apoyo estatal a los programas sociales. En la fase de recuperación iniciada en 1984, la mejoría de estas situaciones no fue prioritaria para el anterior gobierno, expresión de lo cual es el deprimido nivel del gasto social durante ese período. En 1988, el gasto social público por habitante era 13 por ciento inferior al alcanzado en 1970. Esta insuficiencia global es lo que ha motivado nuestra crítica. Sin perjuicio de ella, reconocemos los progresos técnicos alcanzados en la operación de programas específicos.

Nuestra política social está orientada por el principio de que superar la pobreza no se reduce a mejorar los ingresos de los más pobres. Es necesario crear las condiciones para que las personas en esa situación puedan superar las causas que la generan, mejorando sus oportunidades y capacidades para participar activamente en el desarrollo nacional.

En armonía con ese principio, el proyecto de ley que crea el Ministerio de Planificación Nacional le asigna como una de sus funciones básicas la coordinación de las políticas y actividades destinadas a superar la pobreza. Dentro de un marco de severa escasez de recursos, el desempeño de esa función no sólo permitirá aumentar la eficiencia en el gasto social orientado a la superación de la pobre-

za, sino también traducirlo en acciones coherentes con la idea de hacer que los más pobres se capaciten, y así puedan mejorar sus oportunidades de ser actores del desarrollo.

Por otra parte, se ha creado el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, dependiente de Odeplan, que financiará proyectos públicos y privados para beneficiar a los más pobres. La acción del Fondo pondrá un énfasis particular en el apoyo productivo a los grupos de escasos recursos para que éstos, con el tiempo, logren generar capacidades e ingresos que puedan solucionar sus problemas. Se están definiendo proyectos orientados a estimular el crecimiento de la economía informal urbana y actividades de apoyo productivo a campesinos, pescadores artesanales y pirquineros. El apoyo a la economía informal urbana incluirá líneas de apoyo financiero y asistencia técnica, y contempla el impulso a las iniciativas de capacitación de los trabajadores.

La estructura orgánica de Odeplan cuenta con la División Social, cuya función principal es evaluar los efectos en los beneficiarios de los programas del sector público. Para el cumplimiento de esta función se vinculará con las organizaciones sociales de los más postergados, estimulando su participación en la solución de los problemas que los afectan. Nuestra meta es dar a los más pobres los medios necesarios para que puedan salir por sí mismos de la pobreza.

Dentro de los grupos sociales en situación de pobreza, uno de los sectores más postergados del país es el de los pobres rurales. Se está elaborando un amplio Plan de Desarrollo Rural que fortalezca las capacidades productivas de los pobres del sector, junto con darles mayor acceso a los servicios sociales básicos. Este plan se focalizará en las cien comunas rurales más pobres, coordinando acciones públicas y privadas, e incluye objetivos de asistencia técnica y medidas legislativas que regulen las relaciones laborales, particularmente para corregir problemas derivados de la temporalidad e inestabilidad en el empleo agrícola.

Conviene subrayar que el éxito de las políticas respecto de la pobreza rural constituirá un beneficio para toda la sociedad, pues permitirá retener población en las áreas rurales, evitando los enormes costos sociales que acarrea la migración hacia las ciudades y el desdoblamiento de los campos.

4. *El camino del desarrollo*

La economía chilena ofrece hoy perspectivas alentadoras. Después de una larga fase de inestabilidad, caracterizada entre otras cosas

por profundas recesiones en 1975 y en 1982, acentuadas por políticas no siempre acertadas, el país ha logrado, con el sacrificio de todos, adecuar su economía a los nuevos requerimientos de la economía mundial y obtener un razonable equilibrio macroeconómico. En la segunda mitad de la década pasada, Chile ha financiado sus cuentas fiscales y su balanza de pagos; el producto se ha recuperado de la profunda recesión de 1982-83 y la inflación se ha mantenido en niveles moderados.

Nuestra tarea es progresar en el camino del crecimiento. Hay varios factores favorables para el éxito de este esfuerzo. Poseemos profesionales de buena formación, una fuerza de trabajo comparativamente educada y capaz, nuevas generaciones de empresarios innovadores, abundancia de recursos naturales, una importante modernización productiva basada en los incentivos de una economía abierta, un dinamismo notable del sector exportador y un aparato estatal con una larga tradición de servicio y probidad administrativa. El crecimiento no sólo es posible. Es una realidad y el objetivo central de nuestra acción como gobierno.

a. Criterios básicos

Para perseverar en el camino del desarrollo, los chilenos debemos trabajar, debemos ser emprendedores y disciplinados. Sería lamentable que, so pretexto de que llegó la democracia, el país cayera en una actitud fácil, de esperararlo todo del Estado; que sobreviniera un clima de complacencia y de relajamiento.

En el mundo de hoy, Chile necesita ser competitivo. Ello requiere de imaginación y creatividad, pero también de paciencia, austeridad y constancia. Como nación, no podemos permitirnos caer en un estado de ánimo empedregado y mediocre, donde predomine la lasitud de los espíritus. La democracia, el desarrollo y la equidad son desafíos constantemente renovados y no dadas gratuitas.

Necesitamos tanto un gobierno como un país eficientes y modernos. Lo primero es responsabilidad nuestra. Lo segundo es responsabilidad de la sociedad. Ningún sector social puede soslayar esa tarea amparándose en un Estado benevolente.

Para mi gobierno, el motor primordial del desarrollo reside en la empresa privada. El rol del Estado ha experimentado una redefinición. Ello no sólo ha sucedido en Chile; es una tendencia mundial, que se manifiesta hoy con gran vigor aun en aquellos países de economías hasta ayer centralmente planificadas.

El Estado estimulará el desarrollo utilizando los recursos públicos con la máxima eficiencia posible. Pero el desarrollo provendrá

fundamentalmente de la capacidad, innovación y espíritu de empresa que el sector privado despliegue en sus actividades, tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales.

Consecuente con este criterio, el Estado buscará regular la actividad de los mercados mediante normas generales, de aplicación universal, y se abstendrá de intervenciones puntuales, erráticas y frecuentes, cuyo único efecto es desorganizarlos e introducir elementos de ineficiencia que, al acumularse, terminan por detener el crecimiento. Si hay imperfecciones importantes, o ineficiencia de los mercados en la asignación de recursos, intervendremos a través de medidas correctivas que, en la medida de lo posible, deberán persistir sólo por el tiempo que sea estrictamente necesario.

No es tarea del Estado asegurar rentabilidad a empresas determinadas o a sectores específicos. Su rol es garantizar un marco económico y político estable, que posibilite un desenvolvimiento normal de las actividades, sin más riesgo e incertidumbre que los propios de cada sector.

En armonía con estos principios, respetaremos los derechos de propiedad, buscando que se consoliden adecuadamente en aquellos casos donde aún existen situaciones de indefinición o controvertidas. Este es un principio que haremos efectivo en general, y específicamente en el caso de actividades como la minería, la agricultura y la pesca.

b. Control de la inflación

Una de las tareas básicas del Estado es actuar en todo momento buscando mantener una situación macroeconómica equilibrada. En esta materia se experimentó en los años recientes un notable progreso, que se ha visto empañado a partir de 1988 por un retroceso que, al configurar una situación delicada, ha obligado a adoptar un conjunto de medidas correctivas, a las que se denomina usualmente "de ajuste".

Desde mediados de 1988, el gobierno anterior llevó a cabo una política expansiva con finalidades electorales, y el gasto excedió a las capacidades productivas reales del país. Como resultado, en 1989 se produjo un recrudecimiento de la inflación, de modo tal que si se toma la inflación acumulada en el último trimestre del año pasado y se la proyecta hacia fines del presente año, llegaríamos a un nivel francamente preocupante.

La inflación es el peor enemigo del crecimiento y del progreso social. Con ella se perjudican los que viven de un sueldo, y toda la economía se resiente. Hay ejemplos suficientes en el mundo que atestiguan sobre los terribles efectos de ese flagelo económico. Tales

ejemplos deberían hacer meditar a los que adoptan posiciones irresponsables en esta materia y a los que, cegados por consideraciones sectoriales estrechas, sólo perciben las consecuencias negativas, ineluctables pero pasajeras, que originan las medidas destinadas a combatir una posible aceleración inflacionaria.

El control de la inflación es responsabilidad conjunta del Banco Central y del gobierno. Conscientes de los riesgos que la situación macroeconómica encierra, ambas autoridades estamos llevando a cabo una política de ajuste que disminuya las presiones de demanda, detenga el rebrote inflacionario y permita retornar a una vía de crecimiento estable que armonice los aumentos en el gasto con los incrementos en nuestra capacidad productiva.

Deseo subrayar, sin embargo, que el esfuerzo antiinflacionario no se agota en las medidas de política monetaria y fiscal. Esta lucha es responsabilidad de todos. Se imponen una austeridad generalizada y expectativas salariales prudentes, puesto que disminuir la inflación exige también disminuir las presiones de alza de costos.

Quiero dejar en claro que persistiremos en la política de ajuste hasta lograr reencauzar la economía en una vía de crecimiento equilibrado. No vamos a practicar una política fácil, dejándonos presionar por intereses sectoriales y sacrificando el bien común en pos de una fugaz popularidad.

Sabemos que el ajuste trae consigo un cierto grado de desactivación, que perjudica principalmente algunos tipos de actividad. Estamos abiertos a escuchar sugerencias del sector privado y a tomar las medidas correctivas idóneas que sean posibles. Pero, a la vez, es necesario tener conciencia de que la estabilidad económica es una condición necesaria para el crecimiento. Si hay estabilidad, llegará al país la inversión extranjera y aumentará la tasa de inversión interna. Así, se elevará nuestra capacidad productiva y obtendremos tasas de crecimiento más altas. Ello compensará con creces los sacrificios de este tiempo.

c. La Reforma Tributaria

Fieles a este propósito de preservar una economía equilibrada, decidimos financiar el gasto público requerido para atender las carencias sociales más graves mediante una Reforma Tributaria que proporcione más recursos al Estado. Con satisfacción hemos comprobado que esta reforma ha sido aceptada por la inmensa mayoría del país.

El que se busque obtener mayores recursos para el Estado por la vía de la reforma tributaria, no significa que se vaya a disminuir la fiscalización al cumplimiento tributario. Por el contrario, el régi-

men democrático que el país soberanamente ha escogido exige un cumplimiento cabal y no una relajación de la ley. El gobierno será riguroso y estricto en la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, máxime cuando se trate de abusos a incentivos a la producción y exportaciones, según se ha visto recientemente.

Como lo explicó el señor ministro de Hacienda ante este Honorable Congreso, enfrentamos problemas presupuestarios serios, pese a la mayor recaudación tributaria que obtendremos. El presupuesto heredado del gobierno anterior es insuficiente en alrededor de 380 millones de dólares. El error de cálculo en que el gobierno anterior incurrió ha sido confirmado por los resultados de la Operación Renta que acaba de concluir.

El país entero debe saber que, para el año en curso, nuestras restricciones presupuestarias son serias. Este no será un año de holguras. Por ello el esfuerzo en gasto social va a ser necesariamente gradual. Realizaremos una política de estricta austeridad en el sector público, a fin de que el ingreso que genere la reforma tributaria pueda ir mejorando paulatinamente nuestro nivel de gasto social.

Quienes tengan expectativas de realizaciones extraordinarias y rápidas, se equivocan. Vuelvo a repetir: éste es un año de estrechez. Respecto de los años próximos, habrá holguras crecientes, sucesivas y graduales, que si bien no deben alimentar esperanzas desmesuradas, nos permitirán ir progresando sólidamente hacia un mayor bienestar.

d. Deuda externa

Como es de dominio público, pesa también sobre nosotros la restricción que implica el cuantioso volumen y el servicio de la deuda externa que heredamos.

A fines del año pasado, nuestra deuda externa total ascendía a 16 mil 300 millones de dólares, lo que representa un 64 por ciento del Producto Geográfico Bruto y 1.7 veces nuestras exportaciones de bienes y servicios. El año pasado pagamos intereses que alcanzan a 7 por ciento de ese producto.

El gravamen para el futuro próximo es aún mayor, por la acumulación de compromisos para los próximos años, resultantes de las anteriores negociaciones de la deuda, y por la reversión de los flujos de financiamiento con la banca multilateral, derivada de la ausencia de nuevos proyectos sociales y productivos.

Nadie puede negar el extraordinario esfuerzo realizado por nuestro país para cumplir con sus compromisos externos y reducir su endeudamiento. Por esta razón, creemos plenamente justificado

invitar a los organismos multilaterales, a los gobiernos de los países y, especialmente, a la banca comercial e instituciones financieras privadas, a desarrollar un esfuerzo conjunto y activo que permita a Chile tener acceso a los aportes que el país va a necesitar para crecer con estabilidad. En los primeros meses de gobierno, el equipo económico se ha abocado al diseño de una nueva estrategia de manejo de la deuda externa y a preparar el terreno para las negociaciones que se desarrollarán a partir de los próximos días. Es nuestra firme intención que el resultado de estas negociaciones sea plenamente compatible con nuestros objetivos de crecimiento y estabilidad.

e. Necesidad y perspectivas de inversión

La recuperación de la economía chilena en los últimos años, junto a la baja inversión, agotó prácticamente la capacidad productiva disponible en 1989. Para mantener una tasa anual de crecimiento del 5 por ciento, se requiere de un esfuerzo de inversión del sector privado sostenidamente superior al que se realizó durante el régimen anterior.

La experiencia reciente de nuestro país indica que la inversión privada requiere de un tratamiento favorable en el sistema tributario y en las regulaciones a la inversión extranjera, normas e incentivos que no modificaremos. La estabilidad económica y política, un clima de cooperación entre el sector privado y el Estado, y un sistema financiero orientado a la intermediación eficiente de los recursos, son elementos indispensables para una sostenida expansión de la inversión.

En estos primeros meses hemos visto con satisfacción cómo el cambio de gobierno y la llegada de la democracia no han alterado las expectativas de los agentes económicos sobre las perspectivas de nuestro país. No sólo no se ha producido el colapso predicho por algunos agoreros, sino que se ha mantenido la estabilidad de los principales indicadores financieros y se ha afianzado el interés por invertir en Chile.

Sólo en el primer trimestre de este año se autorizaron inversiones extranjeras por un valor de 400 millones de dólares, cifra que representa un aumento de 77 por ciento respecto del año anterior. Hoy en día existe un stock de 500 proyectos de inversión con participación extranjera, por un valor de 14 mil millones de dólares.

Es de fundamental importancia para el país que estos proyectos, que generarán empleo y bienestar para todos los chilenos, se materialicen en los próximos años.

A ese cuadro favorable, hay que agregar que hemos puesto rápidamente en marcha un proceso destinado a movilizar recursos de la banca multilateral hacia proyectos prioritarios de inversión social y productiva. Para ello, luego de identificar las áreas y proyectos prioritarios, se han establecido contactos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, recibiendo en las últimas semanas varias misiones de estos organismos destinadas a establecer las primeras bases de los nuevos proyectos.

Estos proyectos no sólo ofrecen la ventaja de contar con un aporte externo sustancial, sino que garantizan un grado de coherencia, control y seguimiento que los hacen altamente atractivos en cuanto a garantizar la eficiencia en el uso de los recursos. El objetivo del gobierno es conseguir que un buen número de estos proyectos esté en condiciones de iniciarse a comienzos de 1991.

f. Desarrollo tecnológico

Para alcanzar un crecimiento sólido y sostenido, es necesario superar nuestras insuficiencias tecnológicas y de capacitación. La experiencia de los países económicamente más exitosos en las últimas décadas muestra que la estabilidad en el crecimiento requiere que, por sobre la explotación de recursos naturales, el país se inserte en los mercados mundiales por medio de la exportación de productos y servicios que incorporan crecientemente el progreso técnico. Así se alcanzan niveles de competitividad en los mercados y se logra una mayor retribución para los productos nacionales.

Nuestro objetivo es que, mediante un apoyo eficiente del Estado, sobrepasemos la barrera del atraso tecnológico, agregando cada vez más valor a nuestros productos. Este es un camino de grandes esfuerzos, en el cual no es posible quemar etapas y en el que hay que consolidar cada paso.

La filosofía que orienta nuestra acción de apoyo para sobrepasar la barrera del atraso tecnológico, es la de hacerlo promoviendo la cooperación y la asociación entre los empresarios y el Estado. No se trata de imponer unilateralmente al sector privado iniciativas o proyectos, o desperdiciar los recursos públicos en acciones aisladas, desvinculadas del mundo real de la economía y sin consecuencias prácticas. Para que el apoyo del Estado sea eficiente y rinda frutos, la cooperación y asociación con la empresa privada son indispensables.

En armonía con estos criterios, se considera la creación de unidades especializadas en el estudio de problemas de productividad y gestión en los diversos sectores económicos. Se tratará de pequeños

centros privados, altamente tecnificados, con gran flexibilidad en su accionar. En ellos se asociarán productores y Estado para buscar soluciones compatibles con los instrumentos de que dispone la política gubernamental y con la capacidad de los empresarios. El carácter asociativo de estas unidades hace de ellas un instrumento adecuado para satisfacer las necesidades de las empresas pequeñas y medianas, que en razón de su tamaño se ven impedidas para enfrentar individualmente los desafíos de avance tecnológico y modernización de la gestión.

Sabemos de la existencia de factores que desincentivan la innovación tecnológica en el seno de las empresas. No obstante, nos interesa que los empresarios incorporen permanentemente nuevas tecnologías en sus actividades. Para ello, se creará un Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico que complementa el actual Fondo de Desarrollo Productivo de Corfo, a fin de fomentar la utilización de nuevas tecnologías en la producción nacional e incentivar la inversión en proyectos innovadores. Dedicaremos a este objetivo recursos que esperamos alcancen los 100 millones de dólares hacia 1994.

En el área de desarrollo tecnológico, se aumentará la calidad e impacto de la investigación llevada a cabo por los institutos especializados de Corfo. Asimismo, las universidades deberían hacer una contribución más importante a la superación de la barrera del atraso tecnológico a través de la investigación que se realiza en ellas, asociándola con el sector privado. En este aspecto, al país le ha faltado una política explícita, capaz de comprometer a la investigación universitaria con nuestro desarrollo económico. Conscientes de esa carencia, estamos diseñando una política que fije áreas prioritarias en el campo tecnológico, a fin de recuperar la investigación universitaria para el crecimiento mediante un sistema de incentivos adecuados.

g. Rol de la Corporación de Fomento

En el apoyo estatal al crecimiento, la Corporación de Fomento tiene un importante rol que jugar.

El gobierno recibió esta entidad disminuida respecto a lo que fueron su patrimonio, sus recursos profesionales y su capacidad de acción. Además, en vez de cumplir una función de apoyo al crecimiento, ha estado siendo utilizada como instrumento para el traspaso de bienes al sector privado. Adicionalmente a su déficit presupuestario en 1990, que alcanza a 10 mil millones de pesos, está endeudada en 1.560 millones de dólares por haber asumido deudas de las empresas privatizadas.

Pese a las condiciones muy negativas en que se encuentra, nuestro propósito es hacer de Corfo un instrumento para apoyar el crecimiento, en la certeza de que cuenta con una capacidad humana y técnica que ofrecer al servicio de ese desafío.

Atribuimos a Corfo una significativa función en el aumento de la inversión productiva para acelerar el crecimiento. Puede lograrlo incrementando los volúmenes de crédito disponibles para las empresas, proporcionando asistencia técnica y capacitación a pequeñas empresas a través de Sercotec, y realizando estudios de factibilidad de inversiones e innovación tecnológica. También privilegiará créditos a empresas más intensivas en trabajo para contribuir a generar más y mejores empleos productivos, y fomentará la competitividad y productividad nacionales a través de los estudios aplicados que realizan sus institutos de investigación.

Otra área que nos preocupa es la de la innovación en modalidades de gestión. La experiencia contemporánea muestra que los mecanismos asociativos de gestión pueden ser muy exitosos, en la medida en que se desenvuelvan en un clima general de convivencia social pacífica. En el convencimiento de que Chile ha entrado en esa fase de su desarrollo histórico, el gobierno incentivará la formación de cooperativas como una modalidad de gestión económica innovadora que fomenta, al interior de la comunidad, un estilo de convivencia altamente positivo. El desafío para estas modalidades de gestión es conquistar un espacio en condiciones de competitividad y exigencias de productividad, sin que ello implique subsidios estatales.

h. Comercio internacional

Nuestra política exterior debe ser un instrumento importante en el fomento de una economía cada vez más competitiva internacionalmente.

Para intensificar las relaciones comerciales, Pro Chile abrirá diversas oficinas comerciales y reforzará otras. Paralelamente, se ha programado el envío de misiones comerciales con determinante participación del sector privado, a México, los Países Escandinavos, la Comunidad Económica Europea, Europa Central y el Medio Oriente. Esto será complementado con un perfeccionamiento de la información comercial y la organización, conjuntamente con los exportadores chilenos, de campañas especiales de difusión para colocar nuestro producto en los difíciles mercados internacionales.

Siempre en el ámbito de la promoción de exportaciones, Pro Chile incrementará su participación en el ámbito de las ferias inter-

nacionales durante el presente año, conservando la concurrencia a aquéllas en las que la presencia chilena está consolidada.

La Comunidad Económica Europea negocia en estos momentos un acuerdo marco de Cooperación Económica con Chile, que esperamos esté suscrito y en vigencia en el segundo semestre de 1990, al que asignamos una especial relevancia. La iniciativa para que Chile tenga acceso al Banco Europeo de Inversiones, de manera que éste pueda operar en América Latina a través de nuestro país, ha obtenido determinantes apoyos en la Comisión del organismo europeo. La materialización de este objetivo constituiría un hecho sin precedentes, toda vez que el Banco no ha extendido sus actividades hacia ningún país de la región hasta la fecha. Ello permitiría canalizar importantes recursos para financiar en Chile proyectos dirigidos al desarrollo de exportaciones a Europa, con transferencia de alta tecnología de ese continente hacia nuestro país.

Chile enfrentará en buena posición diplomática y económica los desafíos de la unidad europea. La reinstauración de la democracia en nuestro país nos ha devuelto importantes amigos, en una Europa que se ha declarado presta a respaldar el proceso chileno. Nuestros objetivos ante la Comunidad Económica Europea son claros y concretos: intensificar y diversificar el comercio, estimular una mayor fluidez del intercambio mediante la eliminación paulatina de las barreras arancelarias y para-arancelarias, acordar prioridades para una cooperación avanzada en aquellos campos estratégicos para el desarrollo económico y social de Chile, estudiar los mecanismos y vías para incrementar el flujo de inversiones, promover el establecimiento de vínculos de cooperación entre instituciones financieras, generar contactos y promover la cooperación económica entre entidades del sector privado.

i. Protección del medio ambiente

Además de los problemas de contaminación ambiental que padecemos, enfrentamos también situaciones de degradación de nuestros recursos naturales, con el riesgo claro de que las futuras generaciones carezcan de un sistema ecológico que sustente adecuadamente el crecimiento.

Hay destrucción de recursos ictiológicos, deterioro continuado de los suelos, una acelerada destrucción del bosque nativo y de la fauna autóctona. Estos son los síntomas más visibles de una situación caracterizada por la ausencia de una política de protección de recursos y de un sistema de incentivos que fomente su explotación racional.

Hemos tomado algunas medidas inmediatas en esta materia: se ha declarado monumento natural a la araucaria, y la Corporación Nacional Forestal ha establecido mecanismos de control de explotación de bosques nativos.

Pero bien sabemos que se trata de medidas parciales y paliativas. Se necesita de una política de largo plazo que dé sustentabilidad a nuestro crecimiento. Con ese fin, se ha creado la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con carácter interministerial y presidida por el señor ministro de Bienes Nacionales. Esta Comisión cuenta con un Comité de Ministros, un Comité Operativo y una Secretaría Ejecutiva como organismo técnico de estudio y planificación. Ella dará coherencia a nuestras políticas sobre medio ambiente, donde los Ministerios de Salud, Economía, Agricultura, Minería, Vivienda y Urbanismo, y de Transportes serán los principales organismos operativos.

La necesidad de conciliar el desarrollo de la producción nacional, el estímulo a la actividad privada y, en particular, el aumento de las exportaciones, con la adecuada protección de nuestros recursos naturales, se hace presente con fuerza en el ámbito pesquero. Durante el gobierno anterior se aprobó una ley de pesca, cuya entrada en vigencia fue postergada por medio de una ley que tuvo rápida acogida en este H. Congreso, para dar tiempo a preparar una legislación más adecuada a los requerimientos del desarrollo nacional y el funcionamiento del sector. Mi gobierno está completando un proceso de consultas con los diversos sectores involucrados y enviará en breve para la consideración del H. Congreso el proyecto de ley respectivo, que establezca un sistema permanente que contemple mecanismos de regulación flexibles y eficaces, compatibles con el desarrollo racional de la actividad pesquera.

j. Minería

Entre nuestros recursos no renovables de mayor importancia están los minerales. En la minería, el Estado no sólo desempeña un papel importante como productor, sino que además debería fomentar una explotación racional de esos recursos.

La minería en general, y el cobre en especial, constituyen una de nuestras principales vías para un mejor acceso a la economía mundial. Si no lo logramos en este campo, es difícil que lo hagamos en otros, pues en él es donde tenemos ventajas comparativas, potencial tecnológico, capacidad de negociación, y las empresas de mayor presencia internacional.

Hoy nos encontramos con un sector minero en expansión y con

interesantes proyectos, que constituyen un activo muy importante. Es deber del gobierno dar las señales adecuadas para que este flujo continúe y aumente. Esto significa administrar eficientemente sus empresas, establecer regulaciones claras y estables para el conjunto del sector y estimular aspectos específicos de interés nacional.

Los objetivos de nuestra política minera son varios: asumir un rol de mayor liderazgo en la industria minera, en especial del cobre; incentivar el flujo de inversión hacia el sector; diversificar la producción minera, reduciendo la alta participación relativa del cobre; aumentar la presencia directa de empresas chilenas en los mercados consumidores a través de la integración con empresas locales; compatibilizar el desarrollo minero con la preservación del medio ambiente; coordinar decisiones de producción e inversión de los productores con el fin de evitar impactos negativos en los mercados; y fomentar la pequeña minería para conformar un estrato eficiente y estable de pequeños productores.

En el sector público productivo, es necesario modernizar las empresas y adecuar los servicios a las nuevas exigencias. La Corporación Nacional del Cobre, Codelco, la Empresa Nacional de Minería, Enami, y la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, no pueden dar ventajas a sus competidores, lo que exige criterios de administración profesional y sin cortapisas burocráticas. Los servicios públicos deben justificar su existencia en virtud de los aportes efectivos que realicen al logro de los objetivos recién señalados.

En el caso de Codelco, es necesario racionalizar sus actividades para contener la tendencia al alza en sus costos. Esa tendencia es grave. Además de las previsiones negativas respecto del precio del cobre en los mercados internacionales, Codelco enfrenta problemas derivados de las leyes cada vez menores de sus yacimientos, así como de la mayor dureza de sus minerales y de los desafíos tecnológicos que dicen relación con sus operaciones. De hecho, la producción esperada para 1990 es inferior a la obtenida en 1989, según proyecciones de la administración saliente. La nueva administración de Codelco se ha hecho cargo de este problema.

En el caso de Enami y Enap, hay que realizar inversiones para ampliar sus capacidades de fundición y refinación respectivamente, las que pronto serán insuficientes para abastecer la demanda nacional.

k. Agricultura

Otra área donde los recursos naturales juegan un principalísimo papel, es la agricultura.

Sin duda, el sector ha experimentado transformaciones notables en los últimos años, al surgir un sector comercial dinámico, no tradicional, altamente competitivo en los mercados mundiales.

Nuestra política mantendrá las condiciones y reglas del juego que permitieron el surgimiento y expansión de ese sector. A la vez, el Estado pondrá a disposición de él los instrumentos propios para acentuar su dinamismo y competitividad, particularmente en lo que se refiere a apoyo tecnológico, apertura de mercados en el exterior, lucha contra el proteccionismo y prácticas discriminatorias de productores y autoridades en esos mercados.

Nuestro gobierno tiene un compromiso central con el desarrollo campesino, que se traducirá, además de las prioridades ya señaladas en el campo de la legislación laboral y el combate a la pobreza rural, en el fortalecimiento y expansión gradual de créditos y asistencia técnica a los pequeños propietarios a través de la acción del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, Indap, con la colaboración de aportes privados.

Un caso importante es el del sector triguero. Este rubro representa 50 por ciento de la superficie sembrada, con cultivos anuales y con una importancia crucial en la alimentación nacional. Durante los últimos años, este sector fue objeto de una política errática, que culminó en el tratamiento dado a la última cosecha. La tardía fijación del precio de intervención de la Comercializadora de Trigo, S.A., Cotrisa; el anuncio de un límite global de compra y de una escala inadecuada que posteriormente se modificó, provocaron la total desorganización del mercado del trigo, con el resultado de que el precio fijado por Cotrisa no logró su regulación.

La desorganización del mercado llegó a tal grado, que se nos instó a anunciar nuestra política frente a este cereal, incluso con anterioridad a la asunción del mando. El gobierno, haciendo un extraordinario esfuerzo, expuso el 1° de abril un completo enunciado acerca de una política para la comercialización del trigo, tanto en lo que restaba de la presente temporada como para las siembras futuras, lográndose por primera vez en muchos años anunciar el precio de intervención de Cotrisa con bastante antelación a la siembra. De esta manera, los agricultores podrán tomar sus decisiones de producción con un horizonte cierto de precio de venta a futuro.

Tal como en el caso del trigo, ha faltado una conducción y orientación para el sector privado no dinámico. He instruido a las autoridades sectoriales para que se inicie el estudio de las diversas situaciones y se identifiquen los instrumentos adecuados para convertir el conjunto de la agricultura al dinamismo y modernización de sus sectores más avanzados.

Es esencial en este sector progresar en la capacidad contralora requerida para proteger el patrimonio sanitario silvoagropecuario, tan

importante para nuestra capacidad exportadora. Por ello, prestaremos especial atención al Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, velando porque cuente con recursos, personal y capacidad técnica adecuados.

1. Infraestructura y Obras Públicas

El rol del Estado es insustituible en cuanto a la preservación y desarrollo de las condiciones de infraestructura que el crecimiento va requiriendo.

La inversión estatal en infraestructura durante los últimos años ha sido insuficiente. Ello se constata al comparar los recursos asignados al sector con el crecimiento del país. Organismos especializados en la materia, como el Instituto de Ingenieros de Chile y la Cámara Chilena de la Construcción, han destacado la gravedad de esta situación como limitante del desarrollo nacional. Parte de esta insuficiencia se ha debido a la tendencia a reducir las inversiones públicas en infraestructura cada vez que se efectúan ajustes económicos. Pero gran parte se ha debido a la desconfianza por todo lo que realiza el Estado, creencia propia de las ideas ultra-liberales que han predominado en la conducción económica de nuestro país. Fuimos testigos de intensas polémicas ideológicas que en muchos casos llevaron a la completa inactividad en áreas donde las inversiones no sólo eran y siguen siendo urgentes, sino extremadamente rentables para el país, como es el caso de los puertos.

Algunos ejemplos ilustran bien las deficiencias. Entre 1970 y 1989 la población creció en cerca de 40 por ciento y la producción en aproximadamente 60 por ciento. En cambio, la inversión total del Ministerio de Obras Públicas disminuyó en 34 por ciento. Por otra parte, entre 1974 y 1989 la red pavimentada creció en 32 por ciento, mientras que la flota de vehículos lo hizo en 150 por ciento. Al ritmo actual de obras nos tomará unos setenta años completar la pavimentación de nuestra red básica.

Una nueva política para el sector de infraestructura requiere, por lo tanto, un balance equilibrado de lo acontecido durante los últimos años. Es importante reconocer, porque constituye un hecho positivo, que en algunos sectores, como el portuario, el país ha podido mantenerse todo este largo período sin tener que realizar grandes inversiones, e incluso sufriendo pérdidas significativas de capacidad en sus instalaciones. Ello se debe a que se han producido mejoramientos operacionales que han incrementado de un modo notable la productividad y la capacidad tecnológica, como el uso de *containers*, que hace más eficiente la transferencia de la carga general, tradicionalmente la más lenta y complicada de movilizar.

En otros casos, como el del agua potable, ha sido posible incrementar significativamente la cobertura, continuando con la tendencia histórica, mediante el uso de la capacidad existente de fuentes de abastecimiento. Esto ha hecho posible incrementar los servicios con inversiones relativamente pequeñas. En el caso del alcantarillado, la cobertura también ha crecido. Pero, en la misma medida en que lo ha hecho, se han ido complicando los problemas de disposición de las aguas servidas.

En el caso de la vialidad urbana, se han podido paliar los crecientes problemas de congestión, recurriendo a mejoramientos operacionales en los sistemas de tráfico y a inversiones relativamente modestas en optimización de intersecciones de calles y avenidas. Sin embargo, en todos estos casos, la capacidad acumulada por las inversiones históricas hechas por el país ya se encuentra virtualmente copada, y son indispensables nuevas inversiones para el futuro. En otros casos, como el de vialidad interurbana, tenemos que incrementar la inversión para recuperar el terreno perdido. Este es un desafío que Chile tendrá que enfrentar con decisión en el futuro próximo y que, obviamente, tiene un costo.

Respecto a vialidad, se contemplan, entre otros, los siguientes proyectos: proyectos de vialidad urbana, de rentabilidad probada, hasta por un monto de 300 millones de dólares; dobles calzadas en la Carretera Panamericana; construcción o pavimentación de tramos en el camino longitudinal costero entre la Quinta y Octava Región; nuevas pavimentaciones de la red básica y mejoramiento de la Red Austral.

Además, dado que se están gastando en conservación sobre 120 millones de dólares al año, en razón del mal uso de carreteras y las violaciones de peso máximo por eje, la Dirección de Vialidad fortalecerá el programa de control de pesos.

El gobierno se encuentra también elaborando una política clara y definida sobre aguas, que represente los principios que lo animan y exprese la voluntad del país de aprovechar ese recurso en forma sustentable en el tiempo, y ponga término a la contaminación de sus fuentes. Se trata de llevar los beneficios derivados de su utilización a toda la población, consagrando en forma práctica su verdadera naturaleza de bien nacional de uso público, hoy sólo nominal.

Sobre estas bases, y con la concurrencia de toda la comunidad nacional interesada en el recurso, tanto de los sectores públicos como privados, incluidos los usuarios organizados y las universidades, se revisará la legislación y la institucionalidad respectivas, para hacerlas útiles a los fines reseñados. El cambio de legislación que se propiciará propondrá perfeccionar los mecanismos de asignación y establecer las regulaciones necesarias del derecho de aprovechamiento que surgen naturalmente de su escasez creciente, para extender los beneficios del recurso a todo el cuerpo social. En lo inmediato, hemos dispuesto el

desarrollo de un plan de saneamiento de títulos y organización de usuarios, como igualmente la ejecución de acciones conducentes a optimizar el uso de fuentes. Las particularidades regionales de las zonas desérticas harán necesaria una normativa especialmente adecuada a ellas, como igualmente su consideración en los planes de acción por desarrollar.

Respecto de las inversiones en riego, en la última década prácticamente no se ha efectuado el tipo de grandes obras que han hecho posible el desarrollo agrícola de tantas regiones de nuestro país. Se ha actuado en obras menores, motivadas por la Ley de Fomento a la Inversión Privada en Riego, mecanismo valioso que este gobierno fortalecerá, buscando llegar también a los pequeños agricultores y campesinos, que no han tenido oportunidad de contar masivamente con este beneficio. En materia de inversiones mayores, el gran desafío consiste en desarrollar sistemas que permitan ejecutar obras recuperando costos de quienes gozan de los beneficios. Resuelto esto en forma ágil y pragmática, es posible desarrollar programas de inversión mayores y medianos en diversas zonas del país, donde ya existen proyectos en distintas etapas de estudio y algunos en construcción.

En lo que se refiere a obras portuarias, recientemente se ha formado una Comisión entre los Ministerios de Obras Públicas, Transportes y la Empresa Portuaria de Chile, para la ejecución de las obras programadas en los puertos de Valparaíso, San Antonio y San Vicente. Es una decisión de este gobierno recuperar los puertos de la Quinta Región e incrementar la capacidad del Puerto de San Vicente en un sitio adicional. Además, se fortalecerá el programa de inversión en caletas pesqueras y rampas. Nuestra intención es otorgar claras señales al sector privado para que nuevos proyectos puedan ser ejecutados por empresas, dentro de un marco estable y bien definido en materia de tarifas y programas de inversiones fiscales.

En materia de aeropuertos, el gobierno está analizando un programa de inversiones que permita mejorar la capacidad de aeropuertos intermedios en lo que se refiere a terminales de pasajeros, carga y pistas de aterrizaje. Con respecto al principal aeropuerto de nuestro país, el aeropuerto Arturo Merino Benítez, he otorgado prioridad a definir el anteproyecto a fin de que la construcción del nuevo terminal pueda comenzar el próximo año, resolviéndose una situación postergada por más de una década.

m. Transportes y telecomunicaciones

El sector transporte requiere de la utilización y consumo de cuantiosos recursos económicos escasos para el país: la infraestructura

de transporte (su construcción y mantención), equipos y material rodante, insumos como el combustible, los que en conjunto suman varios miles de millones de dólares al año, con un alto componente en divisas. La operación de los distintos sistemas de transporte tiene, además, impacto sobre la calidad de vida de la población, tanto en relación con la contaminación del medio ambiente y ocurrencia de accidentes, como en cuanto a las posibilidades de accesibilidad e integración social que ofrece a la comunidad nacional.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones debe, por una parte, administrar en forma eficiente los recursos involucrados en la operación y desarrollo del sistema nacional de transporte; y, por otra, instaurar normas, regulaciones y reglamentaciones que permitan el desarrollo de la actividad privada en el sector, de forma que puedan establecerse servicios de transporte seguros y confiables con una tarifa razonable. Para el logro de estos objetivos, el Ministerio debe realizar, entre otras funciones, la planificación y coordinación del sistema nacional de transporte, la regulación de la operación de los medios de transporte y la reglamentación de las empresas de servicios.

La situación en que se recibió el Ministerio no le permite ejercer apropiadamente el rol y las funciones reseñadas. No existe proporción entre la enorme cuantía de los recursos involucrados en la operación, mantención y desarrollo del sistema nacional de transporte, y la institucionalidad, recursos humanos y presupuestarios con que cuenta este Ministerio en la actualidad. Se puede afirmar, más allá de toda duda, que la institucionalidad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y, por ende, su organización y planta administrativa, no han evolucionado en función de las nuevas realidades que enfrenta este sector, clave para el desarrollo de la economía del país. Será tarea del gobierno adecuar la organización y la institucionalidad del Ministerio a los desafíos que plantea la hora actual, para que cumpla eficazmente con las funciones que le encomienda la ley.

Las políticas seguidas en los últimos años, que eliminaron las reglamentaciones básicas para los servicios de transporte público, han conducido a que éstos se caractericen por su inseguridad, sus elevadas tarifas, y un exceso de parque vehicular que redunde en congestión del tráfico y contaminación ambiental.

En cuanto a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, el actual gobierno la ha recibido disminuida y en un estado de lamentable deterioro en su infraestructura y material rodante, con una deuda de arrastre de 88 millones de dólares, que la empresa no puede pagar con los ingresos que genera.

En el período 1990-94 se deberán abordar los problemas prioritarios del sector transporte, para lo cual se requiere desarrollar una legislación de transporte que permita regular la actividad privada

en aquellas situaciones en que la libre competencia no conduce a la eficiencia en la operación de los mercados, e intervenir allí donde es preciso evitar o controlar la presencia de monopolios.

En el sector ferroviario será necesario rehabilitar los ferrocarriles, en la perspectiva de establecer una competencia sana en el transporte terrestre; definir y poner en marcha un programa de rehabilitación de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, que defina su rol de largo plazo en el transporte de carga y pasajeros, y que signifique consolidar un sistema ferroviario eficiente y moderno adecuado a las necesidades de transporte del país; hacer de ella una empresa con relaciones laborales estables y justas y que dé servicios socialmente rentables.

En transporte urbano, las tareas serán impulsar la modernización del transporte público para mejorar los niveles de servicios y enfrentar la creciente utilización del automóvil; compatibilizar las medidas para reducir la contaminación atmosférica en Santiago con políticas adecuadas para el desarrollo del sistema del transporte de la ciudad; establecer reglamentaciones técnicas respecto de los requisitos que deben cumplir los vehículos que se utilizan en servicios de transporte urbano, velando por la seguridad de los usuarios de la población en general y la calidad del medio ambiente.

En el sector portuario, debemos asegurar la provisión de infraestructura adecuada en los puertos para el movimiento del transporte internacional; promover el desarrollo de servicios internacionales en cantidad y calidad compatibles con la expansión del comercio exterior, procurando un grado creciente de competencia y transparencia en el mercado de fletes.

Finalmente, en el sector de telecomunicaciones, nuestro objetivo básico es definir una política general en el mediano y largo plazo, la cual debe impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones, coordinando a los sectores público y privado, en armonía con un criterio de beneficio social.

Es necesario orientar el uso de los recursos del sector telecomunicaciones, evitando la duplicación de inversiones y dando prioridad a metas como un acceso adecuado a la información por parte de los sectores de salud y educación a través de bancos de datos, y al desarrollo de la telefonía rural en todo el país. Un aspecto central de la gestión gubernamental en este sector se refiere a la estructura tarifaria, el control y requisitos de concesión de los servicios públicos, como asimismo la normalización de los distintos servicios. En ambas materias se están diseñando medidas para cumplir con esos objetivos.

Mención especial merece la situación de Televisión Nacional. Respecto de esta empresa se hace necesario garantizar su existencia sobre bases económicas sanas, para lo cual será imprescindible un

aporte de capital que permita enfrentar la grave crisis financiera en que la recibió el gobierno.

Queremos también asegurar la autonomía de la empresa respecto del gobierno y la creación de mecanismos que impidan la repetición de excesos como los denunciados. Para este efecto, es necesario legislar a fin de asegurar una dirección colegiada, plural y representativa de la empresa, capaz de orientar y controlar la marcha del canal de televisión del Estado.

Esta legislación debe incorporar medidas muy claras que regulen la relación económica entre el Estado y Televisión Nacional de Chile, sobre la base de los principios de autofinanciamiento y la igualdad de condiciones competitivas con los canales universitarios y privados.

5. *Reinserción de Chile en la comunidad internacional*

A lo largo de su historia, Chile se ganó un lugar de prestigio y de ascendiente en la comunidad internacional, de extraordinaria relevancia en relación a las dimensiones y ubicación geográfica de nuestro país. Ello fue fruto, principalmente, de la solidez y de la estabilidad de sus instituciones políticas democráticas, que eran señaladas como ejemplo entre las naciones del mundo en desarrollo y apreciadas con admiración aun en las sociedades de mayor madurez política.

Esta circunstancia explica, en gran medida, la fuerte reacción de rechazo que provocó en el ámbito internacional, especialmente en las naciones de tradición democrática, el quiebre de nuestro sistema constitucional. El abuso de la fuerza, la arbitrariedad gubernativa, la violación de derechos humanos, escandalizan más mientras mayor sea el grado de desarrollo institucional, cultura cívica y vigencia del derecho que el país en que ocurren ha alcanzado.

Por eso, así como el derrumbe de nuestra democracia suscitó el repudio de la comunidad de las naciones, el retorno de Chile a la democracia ha suscitado una ostensible corriente de simpatía y solidaridad hacia nosotros.

Creo mi deber reiterar, ante este H. Congreso Nacional representativo de la soberanía nacional, nuestros agradecimientos a todos los pueblos que fueron de múltiples maneras solidarios con la lucha libertaria de los demócratas chilenos, y a las naciones y gobiernos amigos por la favorable disposición con que están cooperando con nosotros en esta primera etapa de nuestra restauración democrática.

El objetivo fundamental de nuestra política internacional es la plena reinserción de Chile en el concierto de las naciones. Nuestro

ánimo es cooperar en todas las instancias de encuentro multinacional y en las relaciones bilaterales con los demás Estados, con nuestro modesto pero decidido aporte al desarrollo de los pueblos, al logro de la justicia y de la paz entre los países, y al pleno imperio de los derechos humanos y del derecho internacional en todos los rincones de la Tierra.

Pensamos que nuestra política internacional debe ser el fruto de un gran consenso interno, e inspirarse en los mismos principios que históricamente Chile ha postulado en las relaciones entre los Estados. En pocas materias el acuerdo entre todos los sectores, más allá de las diferencias partidistas, y el respeto a las tradiciones, tienen tanta importancia.

Proclamamos la acendrada vocación de paz y cooperación de Chile y su firme adhesión al orden jurídico internacional. Nuestro país promueve un pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos y busca el fortalecimiento de la democracia como forma de gobierno. Poseedor de una economía abierta, Chile defiende la libertad de comercio, la cristalización de un orden económico basado en la justicia social y la cooperación financiera y tecnológica internacional.

Su adhesión al orden jurídico lleva a Chile a sustentar los principios de la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, cuando el país soberanamente así lo decida. Sustenta, por ende, el principio de la intangibilidad de los tratados, el de la igualdad jurídica de los Estados, el de la convivencia pacífica de los mismos, el de la autodeterminación de los pueblos, el de no intervención en los asuntos internos privativos de la soberanía de otros Estados, el de la solución de las controversias internacionales por medios jurídicos y pacíficos, el de la prohibición del uso de la fuerza o la amenaza de su empleo y el de la cooperación internacional.

Un ámbito fundamental de la reinserción plena de nuestro país en la comunidad internacional es América Latina, a la que Chile pertenece. Sus intereses políticos, económicos y culturales lo ligan a este continente. Su tradicional influencia política, jurídica y cultural tuvo por escenario privilegiado la región.

Es en América Latina donde, históricamente, Chile ha ejercitado su vocación moderadora, su rol como factor de equilibrio, al que está llamado por su personalidad internacional.

Para la región es vital el fortalecimiento de la integración. Ello, en nuestro criterio, implica utilizar plenamente las instituciones y los instrumentos jurídicos vigentes. La Asociación Latinoamericana de Integración, Aladi, ofrece un marco jurídico flexible para avanzar tanto en el plano bilateral como en el regional. De igual modo, en el ámbito de la cooperación intra y extra regionales, el Sistema Económico Latinoamericano, Sela, dispone de las modalidades e instrumentos adecuados.

Nuestra genuina vocación integracionista será conjugada con las necesidades del crecimiento económico de Chile, base sustentadora del desarrollo social que todos aspiramos para nuestro pueblo.

Esperamos que el avance de la economía social de mercado y la apertura de las economías nacionales en la región promuevan fórmulas de integración modernas y eficaces.

Los intereses vecinales de la política exterior de Chile se cuentan entre los más importantes de ésta y, ciertamente, entre los permanentes. No sólo dicen relación con parámetros tan esenciales como la supervivencia de nuestro Estado como sujeto de la comunidad internacional, sino que jalonan los primeros tramos del camino que Chile debe recorrer para insertarse en el resto del mundo.

En relación con los Estados Unidos de América, avanzaremos en la normalización de los vínculos bilaterales. Concordante con la situación que hoy vive el mundo, trataremos de aprovechar hasta donde sea posible la realidad interdependiente que se impone cada día con más fuerza.

El gobierno de Chile cooperará en el esclarecimiento del caso Letelier-Moffit, dentro del marco y con plena sujeción al ordenamiento jurídico nacional y al derecho internacional. Ello responde a justos requerimientos de política exterior y, fundamentalmente, a una exigencia moral coherente con la política de reconciliación reclamada abrumadoramente por la opinión pública.

Esperamos que nuestros importantes vínculos de intercambio con Estados Unidos puedan ser regidos efectivamente por los principios del libre comercio, eliminándose "órdenes de mercado" y otras medidas proteccionistas. Asimismo, teniendo en cuenta nuestra nueva realidad laboral, anhelamos que, en el menor plazo posible, restauren hacia nuestro país los beneficios del sistema generalizado de diferencias.

Nos interesa vivamente mantener las mejores relaciones posibles con las naciones integrantes de la Comunidad Europea. Deseamos que el entendimiento sea del mayor beneficio mutuo. Confiamos en que la nueva realidad que Europa comenzará a vivir en 1992, entregue también frutos para los países en desarrollo, y especialmente para Chile. Vemos con optimismo el fortalecimiento de los vínculos con esta importante región del mundo.

Los objetivos ante la Comunidad Económica Europea son claros y concretos: intensificar y diversificar el comercio; estimular una mayor fluidez de dicho intercambio mediante la eliminación de las barreras arancelarias y para-arancelarias; acordar prioridades para una cooperación avanzada en aquellos campos estratégicos para el desarrollo económico y social de Chile; estudiar los mecanismos y vías para incrementar el flujo de inversiones; promover el establecimiento de vínculos de cooperación entre instituciones financieras;

generar contactos para la cooperación económica con entidades del sector privado y otras; apoyar la utilización de los servicios de consultoría de asistencia técnica, particularmente en el área de la promoción comercial y de inversiones.

Las bases de la política internacional de nuestro gobierno postulan el pluralismo ideológico en las relaciones de Estado y señalan nuestra voluntad de establecer relaciones con todos los países del mundo. En este contexto, desde el mismo día 11 de marzo hemos reanudado las relaciones diplomáticas con Estados de Europa Central y del Este, de América Latina, de África y de Oceanía.

La cuenca del Pacífico se ha erigido como una nueva variable de la política exterior. La proyección chilena hacia el Pacífico es funcional con la estrategia de desarrollo del país, al proporcionar nuevos mercados, fuentes de tecnología, recursos financieros y de inversión. Profundizaremos la participación de nuestro país en los organismos transpacíficos, como la Conferencia de Cooperación Económica del Pacífico y el Consejo Económico de la Cuenca. Haremos de este planteamiento una tarea nacional.

Con el Japón, nuestro segundo socio comercial, procuraremos intensificar la cooperación técnica y la inversión en áreas que representen un efectivo progreso social para nuestro país. Debemos recordar que la privilegiada situación de Chile lo hace elegible para la cooperación financiera japonesa, todo lo cual debe fortalecer una amplia vinculación, en todos los planos, con este país.

En el Medio Oriente, África y Asia, la diplomacia chilena continuará proyectándose en la dimensión económica, comercial y cultural, pero dando nuevo énfasis a una vinculación política determinada por intereses comunes. Nuestro regreso al movimiento de países no alineados, ya formalizado, ampliará el contenido de nuestros antiguos vínculos con importantes Estados de la región.

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

He creído necesario hacer esta larga exposición para que el H. Congreso Nacional y el país entero se formen un concepto claro de las tareas que, a partir de la realidad que encontramos al asumir nuestras funciones, mi gobierno se propone realizar en el lapso de los cuatro años de su período. En los informes anexos de cada Ministerio, los señores parlamentarios encontrarán los antecedentes, cuadros y cifras explicativas de esta cuenta a la nación.

Como es fácil advertir, en cuanto a la situación en que recibimos la administración y el gobierno, me he limitado a exponer en cada rubro los antecedentes fundamentales, evitando detalles o comentarios que habrían extendido aún más esta exposición y pudieran

herir susceptibilidades. Como dije al comienzo, me interesa el futuro y no el pretérito. Es tanto y tan importante y hermoso el quehacer que tenemos por delante, que sería malgastar nuestro tiempo detenernos a escudriñar el pasado. Esa será tarea de la historia.

Vivimos una etapa trascendental. El pueblo de Chile ha vuelto a la democracia con alegría y esperanza. La gente está contenta de vivir en libertad. Cada cual espera ser respetado en su dignidad de persona, cualesquiera que sean sus creencias, ideas o situación social. La gente quiere vivir libre de temor y de toda forma de opresión, y anhela construir una sociedad más justa. La gente quiere participar en la tarea del desarrollo y modernización del país. La gente quiere paz.

Quienes vaticinaban que el regreso a la democracia podría traer grandes conflictos, revivir los odios y generar violencia, parecen haberse equivocado. Por el contrario, en todos los sectores, con sólo escasas excepciones, prevalece la voluntad de entendimiento.

A lo largo de la historia patria, Chile se distinguió por su capacidad para resolver sus desacuerdos y avanzar en el progreso por los caminos de la razón y del derecho. Cuando el país se apartó de ese camino, avanzó a costa de muchos sacrificios y sufrimientos que, con mayor dosis de sensatez, podrían haberse evitado.

Ahora tenemos una nueva oportunidad, y la razón nos aconseja sacar lecciones de la experiencia y saber aprovecharlas.

En los albores de la patria, en 1811, un colega vuestro decía estas palabras: "Las naciones tienen recursos en sí mismas; pueden salvarse por la sabiduría y la prudencia". Camilo Henríquez tenía razón. Quizás sean esas dos virtudes la savia más rica de nuestra tradición.

El Ejecutivo, el Congreso Nacional, los Tribunales de Justicia, los partidos políticos, las organizaciones sociales, tenemos en esta etapa una responsabilidad histórica: estar a la altura de lo que Chile tiene derecho a reclamarnos y nuestro pueblo espera de nosotros. Lo conseguiremos en la medida misma en que la sabiduría y la prudencia —y no las pasiones, ni los egoísmos ni los impulsos vehementes— presidan nuestra conducta.

De nosotros depende.

¡Que Dios nos ayude!

General

En ceremonia conmemorativa del natalicio del Libertador General Bernardo O'Higgins

Chillán, 20 de agosto de 1990

El pueblo chileno rinde hoy homenaje al Padre de la Patria, Bernardo O'Higgins. El Presidente de la República ha querido estar aquí, en este lugar, cuna del prócer, para expresar, en nombre del gobierno y del pueblo de Chile, su adhesión sincera y profunda a este justificado homenaje.

¿Qué sentido tiene esta celebración? Se trata de conmemorar el pasado, pero no para quedarse en él, sino para sacar de él ejemplos y valores a fin de proyectarlos hacia el futuro de la patria.

Quiero en esta oportunidad dirigir un mensaje a todos mis compatriotas, desde Arica al territorio antártico, en especial a los jóvenes chilenos. La patria es una gran familia. Como toda familia, conserva el recuerdo de sus antepasados. En la familia añoramos y señalamos el ejemplo de nuestros padres, nuestros abuelos, y encontramos en ellos signos distintivos del carácter familiar.

En la patria, que es la gran familia que une a todos los miembros de una nación, el culto a sus héroes sirve como acicate para identificar a la familia nacional, exalta los valores comunes, alimenta y estimula el amor a la patria. La patria es mucho más que la población que vive en determinado territorio, se rige por unas mismas leyes y tiene un mismo gobierno. Somos chilenos no sólo por eso, porque habitamos entre la cordillera y el mar, en este territorio largo y angosto, hermoso y, al mismo tiempo, lleno de dificultades; en esta loca geografía que a veces nos hace sufrir con terremotos e inundaciones, y otras veces con sequías, pero cuya tierra queremos, sentimos nuestra y admiramos en su hermosura.

La patria es mucho más que eso; ella nos identifica en el pasado común y en el destino común. Una nación tiene su historia, a través de la cual se va forjando, y tiene una meta, una tarea por hacer. Los chilenos estamos unidos tanto por ese pasado como por el futuro que tenemos por delante. Debemos concluir, cada día perfeccionándola, la tarea de construcción de esa patria cada vez más buena, cada vez más justa, cada vez más libre, cada vez más humana que quisieron los fundadores de la República.

La patria es una tarea por hacer, cuya inspiración y sentido arrancan de su historia.

En esta etapa que estamos viviendo, buscamos el reencuentro entre los chilenos, superando las divisiones y los odios de un doloroso pasado reciente. En esta etapa queremos reencontrarnos con los grandes valores de la historia patria, que en el pasado nos dieron solidez como nación, orgullo patrio y prestigio entre las naciones del mundo. Sólo podremos hacerlo y conseguir esas metas con un gran esfuerzo de patriotismo.

Ello nos exige reflexionar sobre el real y profundo significado del patriotismo.

¿Qué es el patriotismo?

El patriotismo se expresa en símbolos. La Canción Nacional que nos emociona cuando entonamos su música, la bandera patria que nos emociona cuando la alzamos en lo más alto de los mástiles, el escudo, los himnos marciales, los uniformes, los desfiles, son signos que expresan el sentimiento patriótico. Todo ello tiene valor como expresión formal de un contenido; es como la liturgia a la fe, como el rito a la convicción.

Pero el patriotismo significa mucho más que la liturgia y el rito. Tiene un contenido más hondo que esos símbolos. O'Higgins nos enseña con su vida ese contenido del patriotismo. O'Higgins es el ejemplo señero del verdadero y profundo patriotismo.

¿En qué se manifiesta ese patriotismo en la personalidad de O'Higgins?

Primero, en su vocación de servicio, en lo que pudiéramos llamar su espíritu público. El es un labrador, dice que su vocación es cultivar la tierra; pero no es ajeno a lo que acontece en el mundo que lo rodea, se interesa por los problemas de su patria, y por eso es subdelegado de la Isla de la Laja, por eso acepta y es elegido diputado, por eso viste en un momento el uniforme de soldado y llega a Capitán General de la República, por eso asume la responsabilidad superior de dirigir al país como Director Supremo de la Nación.

El patriotismo de O'Higgins se expresa en esta vocación de servicio, este sentir suyo de que no vive para sí, sino para servir a la comunidad nacional a que pertenece.

Se manifiesta también ese patriotismo en la enorme generosidad

de O'Higgins. Pudo ser un hacendado próspero; tenía fortuna que había heredado, era dueño de la gran hacienda Las Canteras, con miles de cabezas de ganado, y —como dijo muy bien en una carta al general Mackenna, al embarcarse en la lucha por la Independencia— “tenía mucho que perder y nada que ganar”. Pero él lo sacrifica todo, no mira su interés personal, es generoso hasta el extremo, porque tiene una clara jerarquía de los valores, porque primero está el interés de la patria, primero está la comunidad nacional; después, al final, su interés personal.

Expresa ese patriotismo en su valentía y coraje para enfrentar el peligro y arriesgar su vida en los campos de batalla. Rancagua, Cancha Rayada, El Roble, Lircay, Chacabuco y Maipú, son expresión del arrojo con que Bernardo O'Higgins afronta el peligro, sin inmutarse, decidido —como aquí se ha recordado— a “vivir con honor o morir con gloria”.

Hay otro rasgo en que se expresa este patriotismo: el idealismo de O'Higgins. O'Higgins vive en un período de cambios en el mundo. En su tiempo se desmoronaban las monarquías absolutas y nacía la democracia en distintas partes. Los países de la América Latina y de la América Sajona se sacudían del yugo de la dominación europea y conquistaban su independencia.

En ese cuadro, O'Higgins no permanece indiferente. Los altos ideales de libertad y fraternidad humana, de igualdad entre los hombres, de justicia social, lo estremecen y conmueven.

Por eso él se convierte en un activista de la lucha por la libertad de Chile, por la independencia chilena. Por eso él postula un gobierno democrático representativo; por eso le preocupa la salud del pueblo y funda hospitales, hace obras de higiene; por eso le preocupa la educación de los niños, porque piensa que lo fundamental para que la patria prospere es que su gente se capacite, y por eso recrea el Instituto Nacional, por eso funda la Escuela Militar, por eso desparrama escuelas por el territorio nacional, por eso funda los liceos de La Serena y de Concepción.

Le preocupa el progreso, y por eso se preocupa de desarrollar la canalización del Maipo para el regadío de la zona central, por eso convierte una rama del Mapocho en una nueva calle o avenida, La Alameda; por eso crea mercados, crea el Cementerio de Santiago. Es un hombre que mira hacia el futuro y que quiere para sus conciudadanos condiciones más justas y mejores niveles de vida.

Finalmente, es rasgo sobresaliente de este patriotismo de O'Higgins su consecuencia. ¿Qué llamo yo consecuencia? Ser consecuente es traducir en actos lo que se dice, es amoldar la conducta a los valores y principios en que se cree. No es consecuente el que predica una cosa y hace, en la práctica, otra. O'Higgins es un ejemplo admirable de consecuencia. El cree en el derecho y se somete a la

ley; él cree en la voluntad democrática del pueblo; él entiende que una República debe nacer sobre la base de la voluntad colectiva de la gente que forma parte de ella, y por eso acata esa voluntad colectiva.

Por eso O'Higgins no empuña jamás su arma ni su condición de soldado contra la voluntad de su pueblo. Por eso O'Higgins acepta la voluntad mayoritaria y aunque habría podido, utilizando su poder militar, mantenerse en el poder, se retira y abdica, porque no quiere derramar sangre de chilenos y quiere que la República se construya sobre la base de la voluntad general de la nación.

Por eso, cuando O'Higgins piensa o advierte que su presencia en el territorio patrio puede ser un obstáculo para el desarrollo tranquilo de la República, acepta resignado el ostracismo y vive en una patria amiga con el sufrimiento de estar lejos de su territorio patrio, al que tanto quiere, añorando su Chile, pensando en Chile, pero no pretendiendo entrometerse de una manera que pudiera perjudicar el normal desarrollo de las instituciones de la nación democrática.

O'Higgins es patriota en un doble aspecto. Es patriota como soldado, en los campos de batalla, exponiendo su vida con arrojo e intrepidez; y es patriota como conductor de su pueblo, como político, hombre interesado en el bien común, al servicio del interés general, preocupado del gobierno de la nación. Soldado y político entrañan en O'Higgins dos aspectos de su personalidad, en que se funde el mismo patriotismo, la misma generosidad, la misma abnegación, la misma consecuencia. Hombre de ideales, entregado al servicio público, delegado, diputado, gobernante, hombre de armas, Capitán General del Ejército chileno, siempre una sola es su mira: el bien de Chile.

Este es el ejemplo que he querido, esta mañana, desde aquí, en la cuna de O'Higgins, destacar a todos mis compatriotas a lo largo y lo ancho del territorio patrio: O'Higgins nos deja una lección; la tarea de los chilenos es estar a la altura de esa lección y saber cumplirla para construir esa patria que todos anhelamos.

Con ocasión de los funerales del ex Presidente de Chile, don Salvador Allende G.

Santiago, 4 de septiembre de 1990

Estamos dando digna sepultura a un compatriota que fue Presidente de la República de Chile: Salvador Allende Gossens. Quien es hoy Presidente de todos los chilenos no podía estar ausente en este acto. Al concurrir y pronunciar estas palabras, cumplo un mandato insoslayable de mi conciencia de chileno y demócrata.

Es ésta una ceremonia de reparación, de reencuentro y de paz.

De reparación, porque al llevar a cabo estas solemnes exequias estamos reparando el injusto error de que se hayan dilatado por tanto tiempo las honras fúnebres que toda comunidad humana rinde a sus muertos, especialmente a quienes en su vida terrenal sobresalieron entre sus contemporáneos.

Reencuentro con la historia patria, porque Salvador Allende —más allá de los juicios contradictorios que suscite— fue durante más de tres décadas uno de los actores más destacados del acontecer nacional. Diputado, senador, ministro de Estado, presidente del Senado, cuatro veces candidato a la primera magistratura de la nación y, finalmente, Presidente de la República de Chile, llegó a ser el líder más representativo de la izquierda chilena. Desde su perspectiva socialista y revolucionaria, encarnó las aspiraciones de vastos sectores de nuestro pueblo que anhelaban cambios profundos y drásticos hacia una sociedad más justa; luchó por ellas con coraje y dio su vida por lealtad a sus convicciones. Estos son hechos que nadie puede desconocer.

Como todo ser humano, Allende tuvo aciertos y errores, virtudes y defectos. Como suele ocurrir a los conductores políticos, suscitó

controversias y pasiones, tuvo amigos y enemigos. Idoló para algunos, detestado por otros. Tendrán que pasar muchos años para que la posteridad pueda juzgarlo de manera objetiva, pero nadie puede negar que su nombre forma parte de la historia de Chile.

Este es, también, un reencuentro entre los chilenos, que al rendir juntos homenaje póstumo al gobernante de quien unos fueron seguidores y otros fuimos adversarios, reconocemos nuestra común identidad nacional y expresamos nuestra voluntad de privilegiar el futuro de la patria, que nos exige unirnos por sobre las disputas que en el pasado nos separaron.

Se equivocan y causan daño quienes quieran hacer de este acto o ver en él un motivo o pretexto para reavivar querellas. Honrar a un difunto no es acto de proselitismo, ni puede ser ofensa para nadie.

Como todo el país sabe, yo fui adversario político de Salvador Allende —¡a aquellos que silban yo les digo: el único lenguaje en que podemos entendernos es el lenguaje de la verdad! Estoy aquí para dar un testimonio de verdad— pero eso no me impidió respetarlo como persona, reconocer sus merecimientos, coincidir en muchas ocasiones y mantener con él relaciones amistosas. Ello es de la esencia de la vida democrática. Fui severo opositor a su gobierno, lo que tampoco nos impidió ni a él ni a mí dialogar en busca de fórmulas de acuerdo para salvar la democracia.

Debo decirlo con franqueza: si se repitieran las mismas circunstancias, volvería a ser decidido opositor. Pero los horrores y quebrantos del drama vivido por Chile desde entonces nos han enseñado que esas circunstancias no deben ni pueden volver a repetirse, por motivo alguno. Es tarea de todos los chilenos impedirlo. Y lo impediremos en la medida misma en que desterremos el odio y la violencia, en que evitemos los sectarismos ideológicos y las descalificaciones personales o colectivas, en que sepamos respetarnos en nuestras diferencias y en que todos acatemos realmente las reglas del juego democrático.

Muchas fueron las causas de la crisis que sufrimos. Pero así como ayer nos culpábamos de ella unos a otros, hoy hemos asumido —cual más, cual menos— las responsabilidades que nos corresponden y, sobre todo, hemos aprendido de los errores que todos cometimos, para encaminarnos, con firme decisión, a superar el pasado doloroso, reconciliarnos y construir en conjunto el porvenir.

Por todo esto, el homenaje que tantos chilenos de buena voluntad tributamos hoy al Presidente Allende, es un acto de unidad y de paz.

Desde tiempos inmemoriales el ser humano, en su intuición,

cerró el ciclo de la vida con el sagrado rito de enterrar a sus muertos, expresando así la necesidad de encontrar la paz: la paz de los muertos y la paz de los vivos.

En la mitología de la Grecia antigua, los muertos que no recibían digno entierro estaban condenados a vagar eternamente, sin destino ni horizonte, por tierras frías e inhóspitas. Para los cristianos, la sepultura es el descanso del cuerpo hasta su resurrección en la gloria del final de los tiempos. Para la civilización a la que pertenecemos, la digna sepultura es el tributo que la vida rinde a la historia.

Los chilenos tenemos aún otras deudas con compatriotas de diversos lugares del país que todavía no descansan en paz. En este acto en que despedimos a Salvador Allende, queremos recordar a todos los caídos, comprometiéndonos a desterrar para siempre la violencia y la intolerancia, porque ha llegado el tiempo de la paz.

Estamos dando sepultura a quien fuera Presidente de la República. Lo hacemos ahora, en estos días de renaciente democracia, cuando los chilenos podemos unir nuestras manos y reconocernos como ciudadanos, como compatriotas, como hermanos.

Estoy cierto de que si Allende estuviera entre nosotros, nos acompañaría en nuestro empeño de aunar esfuerzos para construir juntos una patria de hermanos, libre, justa y solidaria.

Conferencia sobre "Ética y Política", dictada en ceremonia de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas

Santiago, 23 de octubre de 1990

Señoras y señores:

En primer lugar, quiero expresar mis agradecimientos muy sinceros a la Asociación de Ciencias Políticas por el alto honor que me confiere al recibirme como su miembro honorario.

En verdad, a lo largo de mi vida me ha tocado ser actor en la vida política y ser también, en alguna medida, académico preocupado del estudio de los fenómenos políticos.

Acción política y Ciencia Política

Entre la Ciencia Política y la política hay relaciones y hay, naturalmente, diferencias. La Ciencia Política estudia los fenómenos del acontecer político. El político es un actor de esos fenómenos.

Sin duda que para el político las enseñanzas de la experiencia que recoge la Ciencia Política, no pueden ser indiferentes. Constituyen un aporte importante para la determinación de su conducta. Demuestran cómo se han desenvuelto procesos políticos que en un momento determinado tienen lugar en un país, cómo se han desarrollado en otros. Y, aun cuando cada país tiene su propia realidad y cada circunstancia histórica es distinta, así como ningún ser humano puede pretender construir su vida sobre la base de imitar la de otro, esas experiencias enseñan, al mostrar —al menos— algunas

cosas que deben evitarse y caminos que abren perspectivas, o señalar otros que conducen a fracasos.

En los últimos años, la realidad de los países de Latinoamérica ha incentivado una gran preocupación de la Ciencia Política por el análisis de los procesos de transición desde regímenes dictatoriales o autoritarios a la democracia, tanto en nuestro continente como en la vieja Europa y otras zonas de la tierra.

Esos estudios han sido —sin duda— útiles a quienes actuamos en el quehacer político, para sacar consecuencias y, de alguna manera, guiar nuestra conducta.

Un tema que exige estudio: el régimen político

Hoy en día, creo que vuestra Asociación tiene en nuestra nación un amplio campo de actividad, que puede ser también de gran provecho para la colectividad nacional. El país empieza a estar, de algún modo, preocupado del tema del régimen político. Chile tiene una historia de régimen presidencial. Sin embargo, la experiencia de los últimos decenios anteriores a 1973 provocó serias reservas acerca de la forma como se desarrolló el presidencialismo chileno, fundamentalmente por la circunstancia de estar divididas las corrientes de opinión en tres grandes tendencias. Eso determinó que los gobiernos democráticos no fueron generalmente gobiernos de la mayoría, sino de la minoría más numerosa. Eso, sin duda, contribuyó a debilitar la eficacia del sistema y a producir su quiebre. Por eso se habla con mucha asiduidad, sobre todo en sectores jóvenes de la política chilena, de la conveniencia de emprender una reforma hacia un régimen semipresidencial o semiparlamentario.

Yo no voy a opinar esta tarde sobre esa materia. Pero quiero pedirles a ustedes que se preocupen seriamente del tema. Creo que él necesita una gran maduración. Hay que estudiar en profundidad los pro y los contra antes de tomar cualquiera decisión. Es necesario que el país se forme conciencia acerca de lo que significa uno y otro sistema y que analice cómo podría funcionar un sistema distinto, teniendo en cuenta la larga tradición histórica presidencialista de Chile.

Creo que vuestra Asociación, así como también los Institutos Universitarios vinculados a los estudios políticos y las Academias de Estudio, debieran promover investigaciones, análisis, debates sobre esta materia. El país no debiera ser convocado a tomar decisiones en el ámbito político constitucional, sobre una materia tan trascendental, sin que las ideas se hayan decantado suficientemente y se haya producido una maduración y el máximo de consenso nacional al respecto.

En esta etapa, en que se habla tanto de la necesidad de los consensos y en que la experiencia demuestra que eso es lo que el país anhela, que eso es lo eficaz, y se entiende que la concertación es el mejor camino para lograr resultados eficaces, positivos, pacíficos, esta necesidad adquiere principal relevancia en lo que se refiere al régimen político. Si hay algo que necesita y debe suscitar el consenso general, es el régimen político; éste no puede ser impuesto por una minoría o por una mayoría, sino que debe ser aceptado colectivamente, ojalá como una base consensual, ya que se trata de reglas del juego de la convivencia colectiva.

Conducta política y poder

Pero no es precisamente sobre el régimen político y su posible reforma sobre lo que yo quería reflexionar ante ustedes esta noche. Ya que me proporcionan la oportunidad de hacerlo, debo decir francamente que más que aprovechar las experiencias y lecciones de la Ciencia Política para determinar la conducta de un político en funciones de gobierno, pienso que lo fundamental es tratar de concordar la conducta política con los valores éticos fundamentales en los cuales se cree y que la sociedad comparte.

Quiero por eso reflexionar sobre la ética y la política.

La política es una actividad que tiene mala fama. El hombre común la mira con reticencia, con desconfianza. A los políticos los cree demasiado habilidosos o a veces demasiado pillos. Piensa que hay algo de diabólico en la actividad política.

Maquiavelo aconsejó al Príncipe "aprender a no ser bueno", con lo cual, sin duda, dio una orientación que justifica o da pábulo a esa desconfianza ética del común de los mortales respecto de la actividad política.

Curiosamente, este descrédito moral del hombre político ha sido recogido por pensadores ilustres. Stephan Zweig subtitula su biografía sobre Fouché, a quien pinta como lo que fue —un hombre, por decir lo menos, bastante versátil, audaz y desprejuiciado— con la frase "Contribución al estudio de la tipología del hombre político". Y Ortega y Gasset titula su análisis sobre Mirabeau, a quien pinta como un individuo que vivió en el linde de lo ilícito e inmoral toda su vida: "Mirabeau, o el político".

Tal vez esto tenga que ver con aquella vieja y tan repetida frase de Lord Ashton, "el poder tiende a corromper, y el poder total corrompe absolutamente".

La historia de la política y los políticos se vincula, generalmente, al ejercicio del poder. El poder seduce y los hombres, por llegar al

poder y por conservarlo, suelen incurrir en muchas claudicaciones y cometer, también, muchos abusos. Tal vez de allí derive este descrédito generalizado de la acción política, que —a mi juicio— es injusto.

La política maquiavélica

¿Es cierto que la política escapa a la moral? Eso es lo que enseña Maquiavelo. Maquiavelo no rechaza los valores morales, no llama bien al mal ni mal al bien. Simplemente niega a los valores morales toda aplicación en la política, con lo que legitima la inmoralidad política. Para él lo importante en la política es la eficacia, obtener el resultado que se quiere. Y el principal resultado a que ha de aspirar el Príncipe debe ser mantenerse en el poder y acrecentar su poder. Ese fin justifica todos los medios, sin consideraciones de orden ético, que no rigen en ese campo.

Más que inmoral, el político sería —y es lo que sostiene Ortega y Gasset en su trabajo sobre Mirabeau— amoral. Las reglas morales que rigen para el común de los mortales no se aplicarían en la acción política.

Yo creo que esta concepción deriva de un error básico: que el fin de la actividad política sea el poder: conquistarlo, ejercerlo y conservarlo. En verdad, ésta es sólo una cara de la medalla. La política es, antes que nada, una actividad humana, es una actividad que se ejerce por las personas, y como tal está regida por la moral, que regula la conducta humana en cuanto al bien y al mal que cualquier conducta humana entraña.

El bien común: fin de la actividad política

La política se ocupa del gobierno de las naciones.

¿Quiénes hacen política? Hacen política los gobernantes; hacen política los ciudadanos. Cuando los ciudadanos eligen gobernantes o parlamentarios, hacen política. Hacen política los funcionarios del aparato estatal que desempeñan funciones de autoridad o que cumplen cometidos estatales en los distintos ámbitos del quehacer social. Hacen política los dirigentes sociales, los dirigentes de las distintas organizaciones o comunidades que forman la sociedad. Hacen política los dirigentes de los partidos políticos. Hacen política los medios de comunicación social, que no se limitan a informar, sino que informan desde el ángulo de sus propias concepciones, porque cada uno ve las cosas según el color del cristal con que las mira y porque,

según esas mismas concepciones, procuran orientar a la opinión pública para ir formando criterios que conduzcan a la acción.

¿Cuál es el fin de esta actividad de gobernar a los países? El fin de la actividad de gobierno no puede ser otro que realizar el bien común de la sociedad, generar las condiciones que hagan posible, a los hombres, a las familias y a las asociaciones, el logro de su propia perfección, mejorar la vida humana; que posibiliten el pleno desarrollo de todas las personas.

Quien lucha en la vida política, lucha según sus propias concepciones por lograr para su país el mayor bien posible, bien colectivo y bien individual, bien —como dice Maritain— común al todo y a las partes, a la colectividad como conjunto y a cada uno de los seres humanos que conforman esa colectividad.

Autoridad y poder

Queda así en claro que el poder no es el fin de la actividad política; es, simplemente, un medio de que dispone la política y el político para cumplir el fin de lograr el bien común, de realizar el bien común. Y este poder adquiere dos formas de expresión: autoridad y poder propiamente tal.

Porque no son sinónimo autoridad y poder. La autoridad es un concepto moral, es el derecho a dirigir y a ordenar, a ser escuchado y a ser obedecido. El poder es un concepto sociológico, es la fuerza de que disponemos para obligar a otros a escuchar y a obedecer.

Maritain dice: "El justo, privado de poder, acrecienta su autoridad. El tirano, el gángster, el terrorista, ejerce un poder sin autoridad". La autoridad se funda en la razón. El poder se funda en la fuerza. El poder es atributo de la autoridad, pero no es la fuente de la autoridad.

El que funda su autoridad sólo en la fuerza que es capaz de usar, carece de verdadera autoridad; no ejerce una influencia natural sobre las conciencias. Puede vencer, pero no convencer.

Sólo el que tiene autoridad aceptada por el respaldo de la colectividad como legítima, es quien ejerce una verdadera influencia directiva y tiene capacidad de conducción.

En la democracia la autoridad se funda en la voluntad del pueblo, y el poder de esa autoridad en el sistema institucional que lo consagra. La autoridad supone, en la democracia, el consentimiento de aquellos sometidos a ella. Como ha dicho, con razón, Burdeau, lo distintivo de la democracia es que integra el concepto de libertad con el de autoridad. La libertad se concilia con la autoridad —al parecer conceptos contrapuestos desde el momento en que la auto-

ridad del gobernante se funda en el consentimiento libre de los gobernados.

Esa autoridad democrática supone una relación de confianza entre gobernantes y gobernados. Sólo en la medida en que el gobernante cuente con un respaldo de confianza colectiva, tiene verdadera autoridad. Y esa relación de confianza, indudablemente, sólo se puede construir sobre bases morales. Estas bases morales son la verdad, la honradez, la justicia, la solidaridad.

Bases éticas de la acción política

Yo diría que el respeto a la verdad por todos, empezando por quienes gobiernan —esto que ahora se llama “la transparencia”— es condición *sine qua non* para una convivencia colectiva pacífica. No hay convivencia pacífica, ni en el seno del hogar, ni en el seno de la nación, ni en la comunidad internacional, allí donde impera la mentira. La mentira suscita la desconfianza. Se desconfía de aquel a quien se sorprende mintiendo, o de aquel a quien no se le cree. La desconfianza suscita la odiosidad; la odiosidad suscita la violencia.

Se da, así, lo que planteó Solzenitzyn en su carta a la Academia de Estocolmo, agradeciendo el premio de que fue objeto: “La mentira y la violencia están indisolublemente ligadas en la historia”. Para que haya convivencia pacífica, para que haya credibilidad, es indispensable que todos procuremos vivir en la verdad, conforme a la verdad, respetando la verdad. Que los gobernantes seamos escrupulosos en decir siempre la verdad y que los opositores no recurran a apartarse de la verdad para procurar combatir al gobierno.

No necesito hablar sobre la necesidad de la honestidad, de la honradez, otro elemento esencial de la confianza colectiva. Baste recordar el viejo aforismo de los romanos: “la mujer del César no sólo necesita ser honrada, sino que debe también parecerlo”. Es fundamental en la actividad pública, para contar con la confianza indispensable para ejercer la autoridad, ser escrupuloso en materia de honestidad.

Pero yo diría que, aparte de estos valores, indispensables a toda conducta humana y naturalmente a la conducta política, la acción política requiere de otras dos virtudes: la virtud de la justicia y la virtud de la solidaridad, empleando la palabra más usada en nuestros días para referirse al amor cívico, al amor al prójimo, a la caridad en el sentido cristiano.

La acción política se achata, se empequeñece, sin verdad, sin honestidad, sin justicia, sin el afán de darle a cada uno lo que es

suyo, sin el afán de proceder rectamente, no sólo aplicando la letra de la ley, sino que yendo al derecho más que a la ley.

La búsqueda del bien común exige condiciones de justicia en las relaciones sociales. Y sin solidaridad —que significa la disposición de ayudarnos los unos a los otros, especialmente de ayudar los más fuertes a los más débiles, los que están en la buena a los que están en la mala, de modo que todos puedan sentirse miembros de una misma comunidad— no hay política verdaderamente humana. Verdad, honestidad, justicia, solidaridad, son piedras angulares de carácter ético sobre las cuales se construye la acción política.

La política, el poder y el éxito

El poder es un medio de que se vale el político para procurar realizar estos valores en la práctica, en la contingencia de una sociedad. Para lograr eficacia en la realización del proyecto de sociedad más justa, más solidaria —según la imagen que cada cual tenga del bien común— se necesita del poder como instrumento.

Por eso, el triunfo político consiste en ganar y conservar el poder, pero no puede agotarse en eso. “¿Qué saco —dirá alguno— con servir al pueblo, si pierdo el poder?” Pero a esa pregunta cabe contestar: “¿Cuál es el verdadero éxito, conservar el poder a cualquier precio o satisfacer las aspiraciones colectivas de bienestar, de justicia, de libertad, de progreso del pueblo?”

Maritain analiza ese tema en un ensayo que tituló “El fin del maquiavelismo”, y dice que la historia nos enseña que quienes en algún momento aparecieron como grandes triunfadores, que lograron el poder total, que lo ejercieron por largo tiempo, que lo conservaron durante años y decenios, terminaron siendo destruidos por su propia maquinaria; la maquinaria del poder los devoró, los destruyó, sumiendo a sus países, las más de las veces, en grandes catástrofes, en dolores o sufrimientos indecibles, generalmente en guerras.

Por eso, para juzgar el éxito en la vida política se necesita, según Maritain —y creo que tiene razón— la dimensión del tiempo. No hay que juzgar en función del éxito inmediato. El verdadero éxito es el que perdura, el que se traduce en un mejoramiento efectivo de las condiciones de vida, de las posibilidades de un pueblo. El verdadero éxito es el que se traduce en la realización del bien común, aun cuando quien lo ejerce termine perdiendo el poder.

El mérito de la democracia es que permite que el pueblo vaya distribuyendo el ejercicio de la autoridad y del poder mediante la alternativa. El que es hoy gobierno mañana puede ser oposición; el

que es hoy oposición mañana puede ser gobierno. Y eso debe inducir al gobernante a no abusar de su poder, porque quien lo suceda podría hacer lo mismo con él. Pero eso también debe inducir al opositor a no pedirle al gobernante cosas que él después no vaya a ser capaz de realizar.

Las limitaciones del poder

Y esto nos lleva al tema de las limitaciones del poder. Quien juzga simplemente, puede imaginar que cuando se llega al gobierno, se puede hacer desde allí todo lo que se quiere. Y la verdad es que la acción del político se compone, por una parte, de las nobles aspiraciones que lo inspiran, las metas que busca, los valores en que cree y que trata de convertir o encarnar en la realidad y, por otra parte, de la realidad que lo limita, que lo limita por falta de recursos, por falta de instrumentos jurídicos, por falta de medios económicos, por falta de consenso colectivo, o por mil variadas circunstancias.

Es bueno tener siempre presente que gobernar no es hacer lo que se quiere, sino hacer lo que se puede de lo que se quiere. Por eso se ha dicho que la "política es el arte de lo posible". Esto, a veces, nos encajona en situaciones en que ninguna alternativa es verdaderamente buena, o ninguna es tan buena como se quisiera; las circunstancias exigen escoger entre alternativas que, todas, aparecen malas, o apenas regulares. Entonces, lo correcto, lo ético, lo corajudo, es escoger el mal menor y no simplemente levantar las manos o intentar a toda costa una solución perfecta, ideal, pero imposible en la realidad.

Es aquí donde entra en juego la virtud de la prudencia. El gobernante, el político ha de tener coraje, valor, audacia, para luchar por aquello en que cree, por ser fiel a sus convicciones. Pero ha de tener también prudencia para no embarcarse en aventuras, para no precipitar al país en caminos que conduzcan a desastres o a males mayores.

De esto se ha hablado cuando se ha hecho el distingo entre lo que Max Weber llama la ética de la convicción o el testimonio y la ética de la responsabilidad.

Todos quisiéramos ser esencialmente fieles a nuestras convicciones. Todos quisiéramos morir con la bandera al tope, dando testimonio de nuestra lealtad a los principios, a los valores, a los ideales en los cuales creemos. Pero no siempre esto es lo que mejor sirve a la sociedad, lo que conduce al bien común. Y en la lealtad a nuestros principios y valores debemos tener siempre en cuenta los condicionamientos que surgen de las consecuencias que nuestros

actos puedan producir, porque un hermoso testimonio no pasaría a ser más que eso y puede ser dañino en vez de beneficioso, si conduce a una situación negativa desde el punto de vista social.

Excúsenme lo desordenado de estas reflexiones. Hubiera querido tener tiempo para escribirlas y desarrollarlas con mejor método, pero en cierto modo el Directorio de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas me ha hecho tomarme un recreo en mis ocupaciones para preparar esta exposición, y no me alcanzó el tiempo para lograr afinarla como hubiera deseado.

Quisiera terminar diciendo que creo realmente que la política es una actividad regida por la ética, y creo que la democracia es, como ha dicho Maritain, el camino para obtener una "racionalización moral de la vida política", o como en la cita de Montesquieu que le oímos hace un momento a Gustavo Lagos, es "el régimen basado en la virtud".

Muchas gracias.

Reflexiones sobre los últimos sesenta años del acontecer político nacional

Santiago, 25 de julio de 1991

Cuando el director de *La Segunda* me invitó a participar en este acto, no medité suficientemente en la responsabilidad que asumía, y consideré que era una manera de contribuir a elevar el nivel de nuestro debate, al conversar en esta oportunidad sobre el acontecer de Chile en los últimos años.

No se me pasó por la mente que fuera a hacer yo, en esta ocasión, una "clase magistral", como ha anunciado el señor director y dicen las invitaciones. Simplemente quiero formular algunas reflexiones sobre los últimos sesenta años del acontecer político nacional.

Nos reunimos esta noche para celebrar los sesenta años del diario *La Segunda*, que como medio de comunicación ha cumplido, durante este lapso, la delicada misión de informar, interpretar y orientar. En esta labor, *La Segunda* ha sido a la vez protagonista de la vida chilena, con una continuidad no fácil de lograr, adaptándose a los tiempos y manteniendo su vigencia, motivo suficiente para felicitar a su director, a sus periodistas y a todo el personal del diario.

Los felicito también por haber escogido hacer de este aniversario una oportunidad para meditar sobre nuestra historia. Así comprendo y por ello celebro el inicio de la publicación de las memorias de un testigo privilegiado de este siglo, como lo es don Raúl Rettig. El es más que un testigo; es un servidor público a quien los chilenos le estamos profundamente agradecidos por su labor de ayer y de hoy.

Participo, en esta ocasión, como testigo de un período de la historia de Chile. Cuando *La Segunda* de *Las Últimas Noticias* empezó

a circular en las calles de Santiago, yo era un estudiante en el Liceo de San Bernardo. Lo recuerdo como si fuera hoy. Esa tarde mi padre volvió más temprano de los Tribunales y se elevó la bandera nacional en la fachada de nuestra casa. Salimos a caminar, como él tenía la costumbre de hacerlo, y yo, muchacho de doce años, no sabía bien de qué se trataba. Y le pregunté por qué todas las casas estaban embanderadas, y él me dijo que era un día muy importante, porque Chile recuperaba su democracia.

Más tarde, desde la universidad, desde el foro y desde el Parlamento, participé con permanente y vivo interés, como testigo o como actor, en esta historia que hoy recordamos. No soy, por ello, un observador distante. Mi mirada no es la de un historiador. Es la mirada desde mi propia vida de hombre de Derecho, de profesor universitario, de parlamentario y de político vitalmente comprometido con el destino de mi patria. Hoy, desde la investidura de la función que por voluntad ciudadana desempeño, la mirada del pasado cambia en algo su perspectiva, no porque sea más serena ni porque esté por sobre el bien y el mal, sino porque los deberes de esta función me obligan a hacer un máximo esfuerzo de comprensión y objetividad. Naturalmente, ello no significa que no mire las cosas desde la perspectiva de mis convicciones, de mis ideales, de los valores en que me he formado.

En 1931, Chile vivía el fin de un corto interregno autoritario e iniciaba su restauración democrática. Sesenta años después, venimos superando un largo período autoritario y procuramos consolidar nuestra democracia.

Ambas fechas marcan la resolución de períodos de crisis que reflejan, a su vez, el sentido más profundo que ha orientado la historia del Chile contemporáneo. Ese sentido, a mi juicio, ha sido la búsqueda de una sociedad más justa e integrada, el empeño en hacer de Chile una nación que acoja a todos sus habitantes como miembros partícipes de su destino.

En esta búsqueda y empeño está el trasfondo de ambas crisis, así como el motor que movió el período que las separa.

Frente a esta dinámica —búsqueda de justicia e integración y capacidad de otorgarlas— ha habido distintas posiciones. En un extremo, una posición conservadora y en cierto sentido escéptica o fatalista, para la cual esa aspiración es una utopía irrealizable, puesto que el progreso sería sólo el fruto del desarrollo natural y cualquier intento por alterar ese curso sería ocioso y contraproducente. En el otro extremo ha existido una posición voluntarista, convencida de la posibilidad de construir una sociedad ideal por la virtud intrínseca de sus postulados, sin considerar mayormente las condiciones de la realidad. Entre ambas posturas se han situado aquellos para quienes, en mayor o menor medida, con más o menos entusiasmo,

esa sociedad es la meta hacia la cual se avanza gradualmente. En los períodos de crisis ha prevalecido la confrontación de los extremos; en los períodos de construcción ha predominado el acuerdo para una reforma gradual. Estas posiciones no se identifican exclusivamente con una determinada fuerza política. Todas, con diversa intensidad, se han situado en algún momento en posiciones extremas.

En la década de los treinta, Chile logró resolver positivamente la crisis que se hizo manifiesta en el año 1920, aquel año mítico en que por primera vez el conflicto político fue expresión de un conflicto social. Se trataba de la pugna de los sectores medios por ingresar al sistema político y por legitimar su sello cultural en la sociedad chilena. Al tiempo que aparecían en escena los primeros signos de presencia proletaria, los sectores medios reclamaban poder y dignidad. Su proyecto de país, expresado en el Partido Radical y parte del Liberal y conducido por el carismático León de Tarapacá, don Arturo Alessandri Palma, era aún difuso, pero figuraban los temas centrales que definirían el período posterior: búsqueda de igualdad, regulación por el Estado del conflicto social, industrialización, fin del parlamentarismo oligárquico y democratización política y social.

Para entender ese proceso, es útil recordar que hasta ese tiempo, al decir de un agudo intérprete de nuestra realidad social, don Carlos Vicuña Fuentes, los chilenos tenían dos apellidos en la clase alta, un apellido en la clase media y ninguno en la baja. Todavía se hablaba, en ciertos sectores de nuestra sociedad, de "gente bien", "siúticos" y "rotos".

Junto con el protagonismo de la clase media, el año 20 demostró que la "cuestión social" ya no podía estar ausente de la agenda nacional. Allí estaba el proletariado naciente construyendo sus primeras organizaciones: el partido obrero y el sindicato. Los sectores dirigentes tradicionales no comprendieron, en su mayoría, la profundidad de los cambios que se vivían y se empeñaron en un juego político de corto alcance. Ello llevó a la inmovilidad del sistema y a su ruptura el año 24.

El posterior gobierno del entonces coronel Carlos Ibáñez, hizo suyas las banderas progresistas levantadas el año 20 en el terreno económico y social, iniciando una reorganización del aparato estatal, robusteciendo su rol económico tanto en la inversión industrial como en la regulación financiera, y dictando el Código del Trabajo y otras leyes sociales. Con ello se asentaron las bases del Chile contemporáneo. Sin embargo, por la naturaleza autoritaria del régimen, ese gobierno fue incapaz de concretar la reforma del sistema político formulada en la Constitución de 1925. Esta incapacidad, junto a la grave crisis económica internacional, precipitó su caída.

La sociedad chilena de los años treinta era ya una sociedad

compleja y plural. La clase dirigente tradicional había perdido su monopolio y los sectores medios estaban incorporados no sólo a la política y las altas funciones estatales, sino también al mundo de la empresa. El proletariado industrial mejoraba su organización y se hacía presente con creciente influencia. El sistema político instaurado en la nueva Constitución fortaleció al Poder Ejecutivo, como también la presencia organizada de los partidos políticos representativos de las diversas tendencias de la sociedad chilena.

Luego de consolidada la institucionalidad democrática y recuperado el país de la crisis económica —lo que ocurrió en la segunda administración de don Arturo Alessandri—, Chile se vio abocado a nuevos y enormes desafíos: la incorporación del proletariado industrial tanto al sistema político como a condiciones de vida más digna; la industrialización para satisfacer las crecientes necesidades de las grandes mayorías; la incorporación de la mujer a la vida política, social y laboral; la atención educacional de una población cada vez más joven y con disímiles aspiraciones; la renovación tecnológica que permitiera un desarrollo armónico y eficiente; la incorporación de los campesinos, que habían sido los eternos ausentes. Todo ello se fue realizando en el marco de un Estado de Derecho y tratando de vencer las desigualdades sociales, tan irritantes como injustas, siempre con el norte de lograr la integración de los chilenos a la vida nacional.

En estas tareas el Estado desempeñó un papel fundamental.

La Corporación de Fomento de la Producción fue una de sus más relevantes expresiones. Su pionera acción en el campo de la inversión productiva y de infraestructura fue una actitud señera de un grupo visionario de chilenos, a los cuales Raúl Rettig no es ajeno, y una clarividente opción de supervivencia nacional, puesto que la crisis económica de 1929 nos había ubicado, según el decir de los especialistas, en el lugar de máximo deterioro y en el umbral del desastre. Sustituyendo importaciones, promoviendo la producción de petróleo, de acero, de electricidad, de remolacha, la fundición de minerales y el desarrollo de la industria manufacturera, el país progresó, creó nuevas fuentes de trabajo, mejoró el nivel de vida de su población y pudo enfrentar las nuevas circunstancias consiguientes a la Segunda Guerra Mundial y su desenlace.

En esta etapa, el Estado fue asumiendo las tareas que el desarrollo demandaba y que, por su naturaleza y las condiciones propias de una sociedad de masas, no podían quedar entregadas al juego del espontaneísmo. La salud pública, la asistencia social, el trabajo y la previsión, la vivienda, la educación, el desarrollo científico y tecnológico, el urbanismo y los transportes, fueron áreas en que el Estado implementó políticas públicas de un claro contenido social.

Cuando, en estos tiempos que vivimos, se ha puesto de moda

denigrar al Estado como un monstruo que devora a la sociedad, aniquila a las personas y paraliza la iniciativa creadora, creo un deber de justicia señalar que Chile no tendría su alto nivel de electrificación, ni sus grandes obras de regadío, ni produciría acero, petróleo y remolacha, ni habría desarrollado su mediana y pequeña minería, ni alcanzado los niveles de salud y educación a que ha llegado, y su problema de vivienda sería mucho peor, si el Estado no hubiera asumido las tareas que en esa etapa, especialmente a partir del gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, tomó en sus manos. Y considero también deber elemental de justicia rendir homenaje a las generaciones de servidores públicos que, desde el aparato estatal, desde entidades autónomas o desde las universidades, sirvieron a Chile desinteresadamente, sin afanes de riqueza y con ejemplar abnegación. La noción de que estaban cumpliendo una tarea nacional, contribuyó a generar una mística del servicio público.

Al señalar estos hechos, a mi juicio innegables, no pretendo desconocer que ese proceso involucró un desmedido crecimiento burocrático y contribuyó a generar, con el tiempo, el mal hábito de esperar del Estado la solución de todos los problemas. Sólo quiero poner las cosas en su lugar. Es evidente que en Chile, como en el mundo, las circunstancias han cambiado. Lo que ayer fue necesario y positivo, hoy ya no lo es, al menos del mismo modo y en igual medida.

La actual discusión sobre la dimensión y el rol que deben cumplir el sector público y el privado, no puede desconocer que "la cosa pública" no es una invención de los ideólogos críticos al capitalismo, sino una cuestión que ha estado presente en pueblos y naciones ya desde que los griegos discutían en el ágora sobre los asuntos comunes.

La referida política de fuerte intervención estatal para impulsar el desarrollo y el cambio social, hizo crisis al desencadenarse, en la segunda administración del Presidente Ibáñez, un agudo proceso inflacionario. La reacción a este fenómeno condujo a la política de restricción financiera y saneamiento económico en que se empeñó el gobierno de don Jorge Alessandri.

Pero el mundo vivía tiempos de convulsión e ideologismo. A las tensiones de la guerra fría, se sumaba una creciente demanda de los pobres y los jóvenes de las más diversas naciones, tanto del mundo desarrollado como de los países en desarrollo, por cambios que les dieran acceso al bienestar y a roles protagónicos. Expresando esa actitud, los estudiantes de París llegaron a tomarse la ciudad, esgrimiendo el lema de "seamos realistas, pidamos lo imposible".

En nuestro país, siempre abierto a estar al día con las más modernas tendencias del pensamiento y el acontecer humano, el convencimiento de la necesidad de cambios fundamentales y la

voluntad de emprenderlos conquistó a las grandes mayorías. Interpretando esas tendencias, el gobierno del Presidente Frei, bajo el lema "Revolución en Libertad", impulsó la reforma agraria y otras políticas orientadas fundamentalmente a superar el fenómeno de la marginalidad social. Luego, anunciando la instauración del "socialismo en democracia", el gobierno del Presidente Allende, junto con imponer a esas reformas un carácter "drástico y masivo", impulsó un proceso de estatización generalizada de la economía nacional.

La división de los chilenos en tres sectores, cada cual con su propio proyecto de país, y el alto grado de ideologización, intransigencia y violentismo que —crecientemente— fue dominando la convivencia nacional, condujo al quiebre del sistema. Es obvio que el intento de imponer un modelo minoritario es incompatible con la democracia. Por lo demás, como lo dijimos en el Senado en julio de 1973, a esa altura la mayoría de los chilenos había perdido la fe en la solución democrática para la crisis que el país vivía. De una parte, había quienes veían en las formas democráticas un obstáculo inaceptable para llegar al socialismo; de otra, aparte de los grupos minoritarios que nunca creyeron en la democracia, cada día eran más los que, considerándola incapaz para garantizar el orden, pensaban que sólo una dictadura militar podría restablecer la autoridad indispensable en toda sociedad.

Se produjo así el colapso democrático del cual recién venimos saliendo.

Nuestra calidad de actores en esos acontecimientos nos priva de autoridad para hacer un juzgamiento objetivo. Ellos están, por lo demás, demasiado cerca en el tiempo para que puedan ser evaluados con la necesaria perspectiva y objetividad.

Con todo, no temo ser injusto ni incurrir en grave error al formular algunos juicios.

Pienso que Chile, al comienzo de la década de los setenta, a pesar de su alto grado de polarización y de conflicto, era una nación en franco desarrollo y progreso.

En lo político, el pueblo participaba mayoritariamente en la decisión de su destino. Mientras en las elecciones de 1932 había votado el 7,6 por ciento de la población del país, en las de 1973 lo hizo el 37,3 por ciento. El interés por la "cosa pública" era real en todos los sectores de la sociedad chilena y se expresaba, de manera muy especial, en la actividad parlamentaria. A partir de los años treinta, en el Congreso Nacional se fue configurando un modelo de hacer política y de intentar resolver los problemas nacionales, mediante el debate —apasionado a veces, generalmente racional— que incorporó a nuevos partidos, grupos y familias ideológicas. Ese Parlamento fue reflejo del pueblo y en su seno, especialmente en Comisiones, se plasmaban importantes acuerdos. Regían plenamente

en el país las libertades públicas; nunca nadie habló de violaciones a los derechos humanos y las instituciones del Estado funcionaban normalmente, dentro del orden constitucional.

En lo económico, el país crecía a un promedio —en el decenio de los sesenta— de 4,5 por ciento anual y, si bien la inflación se mantenía alrededor del 30 por ciento al año, el ahorro interno superaba el 16 por ciento del producto e importantes inversiones aumentaban la capacidad productiva nacional, en electricidad, cobre, acero, industrias químicas, petroquímicas, textiles, metalmecánicas y electrónicas, plantas de celulosa y de azúcar de remolacha y muchas otras actividades.

Pero era, especialmente, en lo social, donde el país había experimentado la mayor transformación. A la consolidación de la influencia predominante de la clase media, sucedió la incorporación sucesiva a roles de participación activa en los diversos sectores de la vida nacional, del proletariado obrero minero e industrial, del campesinado y del mundo poblacional. Las organizaciones sindicales, vecinales, campesinas y cooperativas se multiplicaron y fueron instrumento de maduración e influencia para grandes sectores de chilenos modestos. El hombre y la mujer de nuestro pueblo llegaron a ser mucho más "personas". Y sus posibilidades de educarse, de atender su salud y de hacer valer sus derechos e intereses en la sociedad, crecieron considerablemente.

¿Y qué decir de los últimos veinte años?

Sin lugar a dudas, fueron traumáticos. Nunca Chile estuvo más dividido ni sufrió tanto, desde la guerra civil de 1891. Jamás hubo tanto odio y tanta violencia.

En estos años los chilenos aprendimos lo que son los derechos humanos, por aquello de que de los bienes más preciados —como el aire, el agua, la salud— sólo se toma conciencia cuando faltan. El Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación ha golpeado la conciencia moral de los chilenos. Y a cuántos la tengan, seguirá golpeándolas.

Pero, aparte de los muertos, ¿qué queda?

En el orden político, un Estado reducido —lo que es bueno—, pero no por ello más ágil ni mucho menos burocrático. Y una nueva Constitución que, con respecto a la anterior, tiene avances y retrocesos, pero que nació huérfana de la base consensual indispensable para que sea perdurable. Por ello juzgo necesario buscar los acuerdos que permitan corregir sus rasgos autoritarios y hacerla plenamente democrática.

En el orden económico, un grave endeudamiento externo, muchas dudas sobre buena parte de lo sucedido, pero un indesmentible avance en eficiencia, modernización y crecimiento. En los últimos años la producción se diversificó y las exportaciones crecieron es-

pectacularmente. La economía de mercado, libre, abierta y competitiva, ha significado un progreso muy notable.

En el orden social, una enorme deuda con un tercio de la población nacional, sumida en la pobreza, a la que la prosperidad de la economía no ha llegado. Mientras los sectores de mayores ingresos aumentaron su participación en la renta nacional, los pobres la disminuyeron.

De este cuadro derivan los grandes desafíos que tenemos por delante: democratizar las instituciones, perseverar en el crecimiento y modernización de nuestra economía y hacer justicia social. En estas tareas, precisamente, mi gobierno está empeñado, y para ello busco el acuerdo y apoyo de todos mis compatriotas.

No sería completa esta breve reseña de los últimos sesenta años de la vida política nacional, si no agregara algunas reflexiones sobre lo que el Cardenal Silva Henríquez ha llamado, con razón, "el alma de Chile".

Nuestra historia como nación independiente posee algunos rasgos cuya permanencia define su identidad. El primero de ellos, que nos ha distinguido en la comunidad internacional, fue nuestro tradicional respeto por el Estado de Derecho y por las instituciones. Chile fue el primer país del continente que restableció el orden luego de la Independencia, y lo logró porque confió su estabilidad a la fundación de instituciones y no al poder azaroso de un caudillo. Nuestras instituciones han sido flexibles para adaptarse a los cambios. También han entrado en crisis, pero son ellas las que nos han permitido recuperar nuestra convivencia cuando ella se ha roto. El respeto al derecho y a las instituciones no se improvisa. Es fruto de un largo aprendizaje histórico, es tradición. Por ello nos ha dolido tanto perder nuestra continuidad democrática y nos ha dado tanta alegría recuperarla, como el hijo pródigo que finalmente vuelve a casa.

Los chilenos también hemos demostrado en nuestra historia una voluntad de entendimiento para avanzar hacia el progreso por el camino de las reformas. Cuando se mira nuestra vida independiente, es posible concluir que el entendimiento ha prevalecido por sobre la confrontación y la integración por sobre la exclusión. Nuestros momentos de crisis duros y dramáticos se han producido justamente cuando hemos abandonado esos rasgos de nuestra identidad. Los períodos de confrontación han profundizado la exclusión con la imposición de proyectos que no concitan la mayoría ciudadana, sin la cual podrá haber cambios, pero no hay proyecto nacional ni garantía de estabilidad.

Por el contrario, los períodos en los cuales los chilenos hemos logrado establecer un proyecto nacional que incorpore y trascienda los intereses sectoriales, son los que han permitido que la justicia y la integración social logren avanzar.

Nada más lejos de mi voluntad que hacer un panegírico o esconder nuestros errores. Debemos ser críticos de nuestra historia, porque necesitamos aprender de ella, así como debemos ser agradecidos de nuestra historia porque nos alimentamos de ella.

El país ha aprendido duramente la lección de su pasado reciente. Los proyectos globales y minoritarios están destinados a terminar con el dolor de muchos. Por ello hoy día, tanto el gobierno que presido como la gran mayoría del país, estamos empeñados en la construcción de consensos estables en pos de las grandes metas nacionales. Consolidar la democracia y lograr un crecimiento económico sostenido con justicia social, es nuestro gran desafío.

Es conveniente, sin embargo, hacer algunas precisiones respecto de la política de los consensos. Chile es hoy una sociedad plural donde conviven distintas instituciones, culturas, ideologías, partidos políticos, organizaciones sociales. Para que cada uno de ellos sea respetado en sus derechos y pueda desarrollarse libremente, se requiere de un entendimiento general sobre nuestras normas básicas de convivencia. No se trata de uniformar a la sociedad ni a los partidos. Se trata, por el contrario, de que cada uno tenga el derecho a profundizar su propia identidad. Buscamos consensos para avanzar sin rupturas en la tarea de integrar a la sociedad chilena.

Yo no le temo a la diversidad, le temo a la exclusión. No le temo a las disonancias, le temo al dogmatismo. No le temo a quien lucha por un ideal, le temo a quien en su nombre mata o agrede a otro ser humano.

Esto significa que la política de los consensos no debe ser interpretada como una política del mínimo común múltiplo, del realismo pragmático sin ideales ni convicciones. Una política de esa naturaleza está condenada al estancamiento, porque a las sociedades las mueven los ideales y los valores, la pasión por construir un mundo mejor.

Seamos claros. Los consensos no mueven la historia, sólo la posibilitan. La historia no la hace una mano invisible, ni el curso natural de las cosas, ni el juego espontáneo de fuerzas abstractas. La historia la hacemos los hombres y mujeres que tenemos fe en un proyecto de nación.

Esos hombres y mujeres que con sus valores han movido nuestra historia, concitan nuestra admiración. Cuando entré por primera vez al palacio de La Moneda como Presidente de la República, vi en sus paredes los retratos de nuestros grandes estadistas y escogí a dos para tener cerca mío: el del joven Bernardo O'Higgins y el del sabio Andrés Bello. Ellos representan para mí los dos cauces más valiosos de nuestra historia. O'Higgins, porque era un hombre cargado de ideales y patriotismo que no midió el costo personal de sus pasos y se entregó a ellos con pasión, como soldado en tiempos de guerra, como estadista en tiempos de paz. Y Bello porque, siendo

un hombre de ideales, supo llevarlos a cabo escuchando la realidad para encauzarla sin herirla. Queremos una historia con la audacia y valentía de O'Higgins y con la solidez y sabiduría de Bello.

En la última década, el mundo ha presenciado enormes cambios. Chile ha formado parte de ellos. Somos hoy más contemporáneos del mundo de lo que lo fuimos nunca antes. Mientras otros pueblos derrumbaban con sus manos el muro del totalitarismo, nosotros con nuestras manos depositamos el voto en la urna electoral para reconquistar nuestra democracia. Y toda la población votó, porque Chile no es un país de escépticos.

Hoy, cuando en todas las latitudes de la tierra los valores de la democracia se consolidan, la economía se internacionaliza, el comercio busca romper las barreras para llegar a todos los mercados, Chile está plenamente incorporado a estos fenómenos con el esfuerzo de su pueblo.

Hemos aceptado los desafíos de cambio del mundo moderno y lo estamos haciendo, guiados por los mismos valores que han inspirado la mayor parte de nuestra historia, con el mismo ideal de construir una sociedad libre, justa e integrada. Nuestro gran norte sigue siendo hacer de Chile una nación en la cual todos sus hijos se sientan pertenecientes y partícipes.

Los instrumentos pueden no ser los mismos, porque los tiempos son distintos. Ello nos indica la necesidad, en cada momento de la historia, de ir pulsando el signo de los tiempos para impulsar el futuro. Y comprender que la flexibilidad en los instrumentos no significa flexibilidad en los valores.

Chile requirió en el pasado de un gran impulso estatal para avanzar en el crecimiento y en la equidad. No soy de los que miran con nostalgia el pasado, pero estoy convencido de que ello nos ha permitido, en gran medida, transitar hoy día hacia una nueva fase donde el impulso fundamental está radicado en la sociedad misma. Este parece ser el signo del nuevo tiempo.

Señoras y señores:

Soy de los que un día dijo "todo tiene que cambiar". Fue sin duda, más que una exageración, un craso error. Siempre hay algo que cambiar, más o menos, pero nunca todo. Hoy soy de los que valorizan positivamente la historia de Chile de estos sesenta años, porque a pesar de todo lo que hemos vivido, ha habido un proceso acumulativo donde las experiencias se han ido sumando y hemos progresado en nuestra integración nacional. No obstante, no soy de los complacientes y sigo pensando que queda mucho por cambiar. Soy,

por lo tanto, de los inconformistas que queremos hacer marchar la historia.

Sigue vigente el desafío de impulsar en nuestra patria una sociedad integrada, y ello significa derrotar la pobreza, vencer el abismo entre ricos y pobres, lograr para todos sus habitantes posibilidades de una vida buena.

Chile es la tierra de nuestros padres y es la tierra de nuestros hijos. A esta tierra tan amada de nuestros padres, le debemos gratitud y respeto. A la tierra de nuestros hijos, le debemos la promesa de legar una sociedad más próspera, más justa, más humana. Esta es la tarea que la hora reclama de todos los chilenos.

Muchas gracias.

En el acto de aniversario de la muerte del Presidente don José Manuel Balmaceda

Santiago, 19 de septiembre de 1991

Hoy se cumplen cien años de la muerte del Presidente José Manuel Balmaceda y del fin de una guerra civil donde murieron diez mil de nuestros compatriotas.

Nos reunimos a conmemorar este hecho y no lo hacemos como una evasión romántica hacia el pasado, sino como un diálogo a partir de las preguntas que hoy le hacemos a la historia, sin las cuales ella no sería una memoria viva, sino una ruina inerte.

Este diálogo, separado por cien años, está sin embargo unido por la continuidad histórica de las instituciones que representan la soberanía popular.

La fisonomía de nuestro país y del mundo ha cambiado profundamente en este siglo. En muchos sentidos, el Presidente Balmaceda se sentiría un extranjero entre nosotros, no de la geografía, sino del tiempo. Y, sin embargo, reconocería a su patria en sus instituciones y en su voluntad de construir un destino común para todos sus ciudadanos.

Los hechos que hoy conmemoramos son dolorosos. Están marcados por la muerte fratricida, que es el recuerdo más duro en la memoria de un pueblo.

La Guerra Civil de 1891 fue el episodio más violento de la historia de Chile luego de nuestra constitución como República, esta República nuestra que tempranamente logró establecer un orden institucional en cierto modo ejemplar en el continente.

Dicho orden se afirmó en una idea de Nación, concebida como un pasado y un destino común y expresada en un proyecto de futuro nacional para el desarrollo y prosperidad del pueblo chileno.

La institución de la Presidencia de la República, entendida más

allá de quien la detente, encarna ese sentido de unidad nacional. Así lo entendió José Manuel Balmaceda.

Aun cuando su gobierno terminó en una guerra civil y no logró concitar esa unidad, el Presidente Balmaceda concretó esa idea en una visión de Nación que lo hizo un apasionado promotor de reformas y programas trascendentales de progreso que perduran hasta hoy.

Este concepto mantiene toda su vigencia. El Presidente de la República funda su legitimidad en la representatividad popular y, aunque es elegido por la mayoría, al asumir el mando representa al conjunto de la nación. Su responsabilidad primordial es, por lo tanto, conciliar la diversidad natural de la sociedad con la unidad de la patria común para llevar a cabo una tarea nacional.

Por eso hoy, al evocar la figura de Balmaceda, quiero detenerme en su visión de país, manifestada en notables realizaciones destinadas a engrandecer a Chile y dar beneficios a todos sus habitantes.

Su fecunda obra de gobernante estuvo centrada en grandes tareas nacionales: la educación de los jóvenes en todos sus niveles, intentando acercarla a los desafíos económicos de una progresiva industrialización; la gigantesca inversión en obras públicas —ferrocarriles, caminos, puentes, puertos— que permitieron hacer a la economía chilena más moderna; la reforma administrativa en pos de la eficiencia del Estado y de la descentralización, al mismo tiempo que la fundación de numerosas ciudades a lo largo del país, afirmando la unidad territorial.

Balmaceda comprendió con certeza los desafíos de largo plazo que debía enfrentar el país. La historia le dio la razón en su clarividente intuición acerca de lo que había que hacer para lograr un efectivo desarrollo nacional.

En 1889 afirmaba, con visionaria comprensión de estadista:

Debemos invertir el excedente de la renta sobre los gastos en obras reproductivas, para que en el momento que el salitre se agote, o se menoscabe su importancia por descubrimientos naturales o los progresos de la ciencia, hayamos formado la industria nacional y creado con ella y los ferrocarriles del Estado, la base de nuevas rentas y de una positiva grandeza.

Comprendió, asimismo, el rol necesario del Estado para promover el desarrollo económico incorporando a vastos sectores a las nuevas tareas productivas. Por ello su política de infraestructura se complementaba con su política de educación.

Cien años más tarde, una visión similar de país nos inspira, al empeñarnos en crear las condiciones y emprender las obras necesarias para impulsar el crecimiento con equidad que permita a Chile integrar a todos sus habitantes en la tarea común del progreso y la justicia.

Resulta dramático y paradójal que, habiendo el Presidente Balmaceda alcanzado tan importantes logros, no haya podido evitar un conflicto que desangró a la sociedad chilena.

Balmaceda, el joven brillante que desde el Club de la Reforma soñó junto a su generación con un Chile libre y próspero, el diplomático que trabajó con eficiencia por la paz en nuestras fronteras, el parlamentario elocuente que defendió sus postulados y las prerrogativas del Congreso, el Presidente que impulsó políticas y realizaciones nacionales de largo plazo, tuvo un final trágico. A pesar de sus extraordinarias condiciones personales y de su encendida vocación patriótica, no pudo sobreponerse al conflicto de poderes que venía gestándose en la sociedad chilena y que durante su gobierno culminó en la guerra fratricida.

Al cabo de cien años, ¿qué lección podemos extraer de esa tragedia? Yo diría que, más allá de las razones que esgrimieron unos y otros para sostener sus antagónicas interpretaciones constitucionales, de los intereses, concepciones y valores que dividieron a parlamentaristas y presidencialistas, el empecinamiento en que cayeron ambos sectores de la clase política chilena estuvo ligado a pasiones, afanes de poder y dogmatismos ideológicos.

La experiencia demuestra que esta clase de fenómenos conspira contra la racionalidad, el realismo y el superior sentido de Nación que son indispensables para construir sobre bases sólidas el bienestar y el progreso de los pueblos. Las más grandes causas, los más nobles ideales, sólo pueden alcanzarse plenamente si se buscan por medios que no sean incompatibles con la indispensable unidad de la patria. La historia demuestra que, a la larga, nada justifica recurrir a la violencia, la que siempre resulta más destructora que fecunda.

La forma de parlamentarismo que se impuso por las armas no resultó mejor que el régimen depuesto, ni menos fue capaz de justificar, en su experiencia de más de tres decenios, el gran costo de odios, violencia y muerte de la guerra civil.

Así debe haberlo comprendido la propia sociedad chilena desgarrada por la tragedia, puesto que a pesar de los odios y pasiones, superando legítimos rencores, pudo pronto, a sólo tres años de la contienda, comenzar a curar sus heridas mediante la incorporación de aquellos que habían sido derrotados.

El propio Presidente, que ofrendó su vida en un acto de consecuencia, recibió los honores dignos de su alto cargo. Chile no olvidó la tragedia, sino que supo asumirla para que la unidad de la nación fuera más grande que los rencores del pasado.

La guerra civil pasó, con su cortejo de odios, sufrimientos y muertes. Lo que queda, en cambio, como legado imperecedero del Presidente Balmaceda, es su gran obra de estadista: sus escuelas,

sus ferrocarriles, las ciudades que fundó, el progreso patrio que impulsó con visionaria tenacidad.

Este diálogo con el pasado nos confirma el deber de lograr una sociedad en la cual la diversidad sea signo de riqueza, pero nunca de exclusión; una sociedad en la que nuestras diferencias no habiten el espacio de la intolerancia, sino del respeto; en la cual los derechos de cada hombre, anteriores al Estado, no puedan ser jamás conculcados por éste.

La unidad nacional es una tarea permanente que compromete nuestro cuidado de cada día. Unidad en la diversidad y en la justicia, para dar a cada ciudadano un lugar digno en la sociedad.

Recogiendo las lecciones de la historia, entiendo que la autoridad de todo gobernante debe estar al servicio de la unidad nacional, siempre necesaria para responder a los desafíos de los tiempos. Como escribió el Presidente Balmaceda antes de morir:

Este es el destino de Chile y ojalá las crueles experiencias del pasado y los sacrificios del presente, induzcan la adopción de las reformas que hagan fructuosa la organización del gobierno, seria y estable la constitución de los partidos políticos, libre e independiente la vida y el funcionamiento de los poderes públicos y sosegada y activa la elaboración del progreso de la República.

Estas palabras conservan plena vigencia.

Aun cuando el futuro le deparaba a la República nuevos dolores y nuevos encuentros, cien años después podemos decir que la patria ha podido superar sus conflictos y honrar a sus muertos, porque el amor a sus hijos ha sido más fuerte y porque el país, en su enorme mayoría, quiere trabajar en paz para hacer de Chile una sociedad cada vez más justa, próspera y fraterna.

Muchas gracias.

Al firmar el proyecto de decreto que crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación

Santiago, 24 de abril de 1990

Compatriotas:

He creído necesario demandarles algunos minutos para darles a conocer los fundamentos y alcances de una importante decisión que considero mi deber adoptar.

Un profundo anhelo de paz y entendimiento prevalece en el corazón de los chilenos. Queremos solucionar los muchos problemas pendientes en nuestro país, no por caminos de confrontación o violencia —que la experiencia demuestra inútiles y perjudiciales—, sino por las vías de la razón y del derecho. Queremos desterrar el odio en nuestra convivencia y construir una nación de hermanos sobre las bases del respeto mutuo, la búsqueda de acuerdos y la solidaridad.

Nadie puede, sin embargo, ignorar que hay hechos objetivos que conspiran contra este anhelo general. La miseria e inseguridad en que viven tantas familias chilenas que carecen de trabajo estable o de vivienda, o que no ganan lo suficiente para una vida digna, o no pueden educar a sus hijos ni atender adecuadamente a su salud, son realidades que atentan contra la paz social. Por eso enviamos al Congreso Nacional el proyecto de reforma tributaria, a fin de obtener de la solidaridad nacional los recursos indispensables para avanzar hacia la solución de esos problemas. Por eso impulsamos la búsqueda de acuerdos entre trabajadores y empresarios a fin de mejorar la condición de los primeros, en el claro entendido de que el esfuerzo para impulsar el crecimiento y lograr el progreso econó-

mico y la estabilidad que anhelamos debe ser compartido equitativamente tanto en sus cargas como en sus beneficios.

La paz no es sinónimo de quietud o inmovilidad. No se logra por el mero empeño en mantener el orden existente, que suele ser desorden preñado de violencias e incompatibles con la paz.

Como lo enseña la vieja sabiduría cristiana, la paz es obra de la justicia y sólo puede construirse sobre los cimientos de la verdad.

Así como las situaciones de grave injusticia social exigen pronta corrección para afianzar la solidez y estabilidad del orden económico social, así también hay otras situaciones que en la realidad actual de Chile deben ser encaradas con coraje y urgencia, si queremos alcanzar en nuestra convivencia colectiva el clima de confianza indispensable para la reconciliación entre los chilenos: son las relativas a graves violaciones de derechos humanos que afectan a la vida y libertad de muchos compatriotas.

En esta delicada materia, mi gobierno tiene un claro compromiso con el pueblo de Chile y con el mundo, que explicité al asumir la Presidencia de la República en mi discurso del 12 de marzo último en el Estadio Nacional. Dije entonces y ahora lo repito:

La conciencia moral de la nación exige que se esclarezca la verdad respecto de los desaparecimientos de personas, de los crímenes horrendos y de otras graves violaciones a los derechos humanos. Debemos abordar este delicado asunto conciliando la virtud de la justicia con la virtud de la prudencia; concretadas las responsabilidades personales que corresponda, llegará la hora del perdón.

Agregué en esa ocasión:

En este necesario ejercicio de justicia debemos evitar los riesgos de querer revivir otros tiempos, de reeditar las querellas del pasado y de engolfarnos indefinidamente en pesquisas, recriminaciones y cazas de brujas que nos desvíen de nuestros deberes con el porvenir. Considero mi deber evitar que el tiempo se nos vaya de entre las manos mirando hacia el pasado. La salud espiritual de Chile nos exige encontrar fórmulas para cumplir en plazo razonable estas tareas de saneamiento moral, de modo que más temprano que tarde llegue el momento en que, reconciliados, todos miremos con confianza hacia el futuro y aunemos esfuerzos en la tarea que la Patria nos demanda.

Para cumplir estas "tareas de saneamiento moral" debemos abordar derechamente, a lo menos, tres materias que por su especial importancia son insoslayables.

a) Las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de las personas cometidos por motivos políticos;

b) La situación de los exiliados; y

c) La situación de los llamados "presos políticos".

Respecto de este último tema, aparte de los indultos que dispuse tan pronto asumí y de los que pueda disponer en el futuro en los casos particulares que crea de justicia, mi gobierno ha presentado al Congreso Nacional un conjunto de proyectos de leyes, sobre supresión de la pena de muerte y sobre reformas a la ley antiterrorista, a la ley de control de armas, a la ley de Seguridad Interior del Estado, y a los Códigos de Justicia Militar y de Procedimiento Penal que tienen por objeto corregir para el futuro los excesos de la legislación vigente sobre esas materias, y cuya aprobación permitirá acelerar los procesos y alcanzar en breve plazo soluciones de justicia para quienes se encuentran actualmente procesados.

En relación a estos proyectos, el gobierno está abierto, como siempre, a considerar y acoger todas las observaciones y sugerencias que tiendan a perfeccionarlos, en la medida en que no se aparten de sus dos objetivos fundamentales:

Primero: Tipificar adecuadamente los delitos y regular con equidad las penas y los procedimientos judiciales, evitando excesos y discriminaciones injustas; y

Segundo: Poner término a la prolongación indefinida de los juicios contra los actuales procesados, que a menudo han carecido de las garantías del debido proceso. Repugna a la moral y es escarnio a la justicia que se prolongue la prisión preventiva por largos años —a veces cinco o más—, para terminar con que se impone al procesado una pena menor o, como ha ocurrido en varios casos, se decreta su libertad por falta de méritos.

En cuanto al tema de los exiliados, tenemos el compromiso de desarrollar una política activa para promover el retorno a la patria de todos los chilenos que quieran volver y de crear las posibilidades para su plena reinserción en la comunidad nacional.

Para estos efectos, hoy he enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley proponiendo crear una "Oficina Nacional de Retorno", como servicio público descentralizado que estudie, proponga, impulse y adopte todas las medidas y programas necesarios para facilitar el regreso al país de los chilenos exiliados y su adecuada reinserción social. Es una tarea impostergable, que requerirá coordinar muchos esfuerzos, exigirá recursos importantes y para la cual confiamos obtener importante colaboración de los distintos sectores de la sociedad chilena, de organismos internacionales y de naciones amigas.

Queda el acuciador problema de las violaciones a los derechos humanos y otros hechos de violencia criminal que han causado tantas víctimas y sufrimientos en los últimos años. Ellos constituyen una herida aún abierta en el alma nacional, que no puede ser igno-

rada ni cicatrizará por ningún intento de olvidarla. Ellos dañaron gravemente nuestro histórico prestigio de nación respetuosa del Derecho, que debemos reivindicar ante la comunidad internacional.

Cerrar los ojos ante lo ocurrido e ignorarlo como si nada hubiera pasado, sería prolongar indefinidamente una fuente constante de dolor, de divisiones, odios y violencia en el seno de nuestra sociedad. Sólo el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia pueden crear el clima moral indispensable para la reconciliación y la paz.

Bien sabemos todos que el juzgamiento de cualquier hecho posiblemente delictuoso es tarea propia de los Tribunales de Justicia. Mi gobierno tiene la firme decisión de prestar a esos Tribunales toda la cooperación que esté a su alcance para que puedan cumplir cabalmente su tarea de establecer las responsabilidades individuales que correspondan en cada caso sometido o que se someta a su conocimiento.

Las características del procedimiento judicial, necesariamente circunscrito a la situación particular de cada proceso y con frecuencia demasiado demoroso, no permiten razonablemente esperar que por el simple agotamiento de esa vía el país pueda lograr dentro de un plazo prudente un conocimiento global sobre la verdad de lo ocurrido.

Por otra parte, es evidente que la demora en el esclarecimiento de la verdad es un factor de perturbación en la convivencia colectiva y conspira con el anhelo de reencuentro pacífico entre los chilenos.

En estas circunstancias, se hace indispensable buscar un camino distinto, que sin entrar al juzgamiento particular de cada caso, propio de la competencia exclusiva del Poder Judicial, permita a la sociedad chilena formarse un serio y fundado concepto colectivo sobre la verdad de lo acontecido en esta trascendental materia.

Es deber de todo órgano del Estado respetar y promover los derechos naturales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por Chile. Ese deber pesa especialmente sobre el Presidente de la República, en cuanto encargado del gobierno y la administración del Estado y responsable de promover el bien común de la sociedad nacional.

En estas circunstancias, luego de escuchar las opiniones de los más importantes organismos vinculados con la defensa de los derechos humanos, de prestigiadas personalidades del ámbito jurídico y político nacional, y de meditarlo muy seriamente en conciencia, he decidido constituir una "Comisión de Verdad y Reconciliación" sobre el tema derechos humanos, integrada por personas de la más alta solvencia moral, que se aboque a la indispensable tarea de preparar un informe que, dentro de un plazo breve —entre seis y nueve meses— establezca un cuadro lo más completo posible sobre

las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Para delimitar el trabajo de esta Comisión y permitirle cumplir su tarea en el lapso señalado, se entenderá por graves violaciones a los derechos humanos las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos.

Será tarea de esta Comisión:

a) Establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos referidos, sus antecedentes y circunstancias;

b) Individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero;

c) Recomendar las medidas de reparación y reivindicación que crea de justicia; y

d) Recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio deban adoptarse para impedir o prevenir la comisión de hechos semejantes.

En caso alguno la Comisión podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a las leyes pudiera haber a personas individuales por los hechos de que haya tomado conocimiento.

Si en el ejercicio de sus funciones la Comisión recibe antecedentes sobre hechos que revistan caracteres de delito, los comunicará reservadamente y sin más trámite al Tribunal que corresponda.

Para el cumplimiento de su cometido, la Comisión recibirá los antecedentes que los afectados le proporcionen, reunirá y evaluará toda la información que le proporcionen las organizaciones de derechos humanos y practicará las indagaciones y diligencias que crea convenientes para cerciorarse de la verdad. Las autoridades y servicios de la Administración del Estado deberán prestarle, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, toda la colaboración que la Comisión les solicite.

Las actuaciones de la Comisión se realizarán en forma reservada. No se trata de crear un foro público para ventilar acusaciones y avivar pasiones, sino una instancia seria y responsable para esclarecer la verdad y abrir camino a la reconciliación.

La Comisión culminará el cumplimiento de su tarea presentando al Presidente de la República un informe público en el que, sobre la

base de los antecedentes que reúna, exprese las conclusiones a que llegue según el recto criterio y conciencia de sus miembros.

Es ésta una tarea de especial confianza que el gobierno de la República encomienda a ciudadanos de gran solvencia moral y prestigio, de cuya rectitud, inteligencia y buen juicio el país puede esperar un aporte decisivo para alcanzar el conocimiento de la verdad que pretendemos.

Conocido su informe y teniendo en cuenta las sugerencias que la Comisión formule, los Poderes del Estado podrán adoptar, cada cual en el ámbito de su competencia, las medidas que la prudencia aconseje para el logro de la justicia y de la reconciliación.

Acabo de firmar, junto a los señores ministros del Interior y de Justicia, el Decreto Supremo mediante el cual se crea esta Comisión, se determinan sus objetivos, organización y atribuciones y se designa a sus integrantes. Ellos son:

Don Raúl Rettig Guissen, abogado, ex senador de la República, ex presidente del Colegio de Abogados;

Don Ricardo Martín Díaz, abogado, ex ministro de la Corte Suprema y actual senador de la República;

Don Jaime Castillo Velasco, abogado, ex ministro de Estado, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos;

Don Gonzalo Vial Correa, abogado, ex ministro de Estado, historiador;

Doña Laura Novoa Vásquez, abogado y académico.

Doña Mónica Jiménez de la Jara, asistente social, ex directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica;

Don José Luis Cea Egaña, abogado, profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Política;

Don José Zalaquett Daher, abogado, ex presidente de Amnesty International.

Actuará como secretario de la Comisión don Jorge Correa Sutil, abogado, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

El país debe saber que he escogido a estas personas pensando únicamente en sus cualidades y méritos, al margen de toda consideración personal o de política partidista. Confío en la independencia y rectitud de juicio de todos y cada uno de ellos, y creo mi deber expresarles mi profundo agradecimiento por su generosa y patrióti-

ca respuesta a mi requerimiento. Al aceptar esta tarea asumen una carga pesada e ingrata y una enorme responsabilidad. Tengo plena confianza en que, en su desempeño, prestarán al país un importante servicio y se harán acreedores a la gratitud de los chilenos.

Al terminar estas palabras, quiero pedir a todos mis compatriotas su comprensión y apoyo a esta iniciativa. Bien sé que a algunos les parecerá insuficiente y que otros la estimarán peligrosa. A unos y otros les pido que no se precipiten a suponer intenciones ni a prejuizar resultados. Esperemos con confianza el trabajo de la Comisión y colaboremos a su éxito con buena voluntad.

Por mi parte, tengo la convicción de que al adoptar esta decisión e impulsar las demás medidas a que me he referido esta tarde, mi gobierno está dando los pasos necesarios, serios y efectivos, para alcanzar una solución de conjunto a sus más importantes problemas en este delicado tema de los derechos humanos y para que Chile avance responsablemente por los caminos de la verdad, de la justicia y de la reconciliación.

Muchas gracias y muy buenas noches.

En ceremonia de conmemoración de los 42 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 12° aniversario de la Comisión Chilena de Derechos Humanos

Santiago, 10 de diciembre de 1990

Estimadas amigas y amigos:

Estoy aquí para expresar el compromiso del gobierno de la República de Chile a respetar y hacer respetar los derechos humanos de todos los habitantes de este país, a asegurar para todos la plena vigencia de los derechos civiles y políticos y a esforzarse porque los derechos económicos y sociales lleguen a ser una realidad al alcance de todos.

La lucha de la humanidad por asegurar el respeto a los derechos de la persona ha sido muy larga a través de la historia. Ha tenido muchos altos y bajos, pero indudablemente, en el correr de los años y de los acontecimientos, especialmente después de los períodos en que esos derechos han sido desconocidos, se han afirmado con mayor vigor la conciencia y la voluntad de los hombres libres por asegurar la vigencia de ellos.

Eso explica que después de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial surgiera, como un clamor de los pueblos que expresaron las naciones reunidas en la Organización de las Naciones Unidas, la necesidad de afirmar solemnemente la enunciación de esos derechos y el compromiso de respetarlos.

Las cosas, los bienes, se sienten cuando se pierden. Nuestro país colaboró gustoso en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se sintió identificado con esa tarea, y aprobarla en el seno de las Naciones Unidas no fue sino expresar su propia vocación desde el nacimiento de la República.

En Chile prácticamente no se hablaba de derechos humanos, y no se hablaba porque era una cosa natural, que no se discutía. Fue preciso que ocurriera lo que ocurrió, con toda su brutalidad, con todo su dolor, con toda su crueldad, para que la conciencia del valor de los derechos humanos se convirtiera en un acicate en todos los chilenos conscientes de la dignidad de la persona.

Así surgieron la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Vicaría de la Solidaridad, y múltiples otras organizaciones que lucharon por defender los derechos de los que habían sido privados. Así surgieron también las organizaciones de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Hoy, en nombre del gobierno de Chile, rindo un homenaje a todos los que en estos años han luchado, exponiendo su propia libertad y a veces su propia vida, en defensa de los derechos humanos, y simbolizo ese homenaje, especialmente, en la Comisión Chilena de Derechos Humanos y en los miembros de su dirección, encabezados por Jaime Castillo.

Bien sabemos que nuestro papel no es sólo celebrar, que el compromiso con los derechos humanos nos impone obligaciones, no sólo de respetarlos y hacerlos respetar en el futuro, y de procurar que sean una certeza para todos, sino también de hacer justicia, esclarecer la verdad y tratar de reparar las violaciones del pasado.

Yo quiero decir muy francamente que comprendo la impaciencia de quienes claman por justicia, que comprendo que haya personas a quienes les cueste entender que los caminos de la democracia y del derecho suelen ser lentos y difíciles. Comprendo a quienes levantan banderas y claman y reclaman. Les pido que también comprendan que el gobierno democrático, inspirado precisamente en la voluntad de hacer respetar los derechos humanos, está trabajando en esa tarea, que todo en la vida requiere tiempo, y que los caminos del derecho, que no son los de la violencia, que no son los de la venganza, que son los de la razón, los del respeto a las personas, los de la justicia, suponen procedimientos y exigen trámites.

Estamos avanzando. La Comisión de Verdad y Reconciliación designada por el gobierno está próxima a emitir su informe, cumplirá con la tarea de esclarecer la verdad, que es la base de una convivencia basada en la confianza colectiva. No hay confianza posible en la vida colectiva, sino sobre la base de la verdad.

Después, vendrá la tarea de la justicia, con todas las limitaciones de la condición humana. Por eso he dicho: justicia en la medida de lo posible, porque todos sabemos que la justicia plena, absoluta, es muy difícil de alcanzar en este mundo. Las limitaciones propias de la condición humana crean esas dificultades.

Pero entendemos que también esa justicia significa no sólo responsabilidades, sino reparaciones; reparaciones a la dignidad, al

honor, al nombre de las víctimas; reparaciones al derecho y a las necesidades básicas de sus familias.

También comprendo a quienes claman porque la justicia llegue para ellos en forma de recuperar su libertad. Por eso el gobierno ha enviado al Congreso, y éste está próximo a despachar, proyectos de ley destinados a que se respete para todos el derecho al debido proceso y que sobre esa base se haga justicia, no sólo para el futuro, sino también respecto del pasado.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos ha querido hoy día celebrar este aniversario con una exposición artística. Hemos escuchado las voces poéticas, aparte de la palabra profunda de Jaime Castillo, y presenciaremos la expresión plástica de los pintores. Y es que los derechos humanos están ligados a la cultura de la vida, son inherentes a la vida misma, y la vida se expresa en un afán de superación, que no es sólo afán de justicia, de verdad, sino también afán de belleza, de belleza que es realización y perfeccionamiento del ser humano, que es crecimiento de la persona.

Por eso, celebro esta forma de manifestación, que importa, creo entenderlo así, una voluntad de pasar en esta lucha por los derechos humanos, a una etapa superior: a la etapa no sólo de la defensa del derecho de cada cual a su libertad, a su vida, a no ser perseguido, a la expresión de sus ideas, a asociarse libremente, a no ser torturado; del derecho a poder participar en el gobierno de su país, a formar parte de la comunidad; del derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la cultura; pasar de ellos a una forma superior, como es el derecho de todo ser humano y de la humanidad entera a aspirar hacia al infinito, a tratar de superarse; el derecho a buscar acercarse al Más Allá en el perfeccionamiento, por el ejercicio de sus aptitudes creadoras. Creo que eso representa esta forma de celebración, a la que adhiero gustoso.

Muchas gracias.

Al recibir el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación

Santiago, 8 de febrero de 1991

Compatriotas:

Todo Chile sabe que mi gobierno tiene un claro compromiso con su pueblo y con el mundo respecto al delicado tema de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestra patria, en tiempos felizmente superados.

Como dije solemnemente en el mensaje que dirigí al país desde el Estadio Nacional, tan pronto asumí mis funciones de Presidente de la República, la conciencia moral de la nación exige que se esclarezca la verdad de lo ocurrido en la materia, por dolorosa que sea, y sobre la base de esa verdad se busque la justicia, en la medida de lo posible. Sólo así podremos satisfacer el anhelo generalizado entre los chilenos de alcanzar la paz y la recíproca confianza ciudadana en nuestra convivencia nacional.

Para cumplir una parte esencial de ese compromiso, el 24 de abril del año último, recién iniciado mi gobierno, creamos la Comisión de Verdad y Reconciliación, integrada por personas de la más alta calidad moral y cívica, para que sobre la base de los antecedentes que le proporcionaran los afectados, las organizaciones de derechos humanos y las autoridades y servicios del Estado, y los que se obtuvieren de sus propias indagaciones y diligencias, elaborara un informe para esclarecer la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

En el decreto respectivo, que se publicó en el Diario Oficial el 9 de mayo último, se precisó que, para delimitar el trabajo de la Comisión y permitirle cumplir su tarea en el lapso de seis a nueve

meses que se le fijó, se entendería por graves violaciones a los derechos humanos "las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado, por actos de sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros y atentados contra la vida de personas, cometidos por particulares bajo pretextos políticos".

En el mismo decreto se estableció que las tareas de la Comisión serían:

a) Establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos referidos, sus antecedentes y circunstancias;

b) Individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero;

c) Recomendar las medidas de reparación y reivindicación que crea de justicia; y

d) Recomendar las medidas legales y administrativas que, a su juicio, deban adoptarse para impedir o prevenir la comisión de hechos semejantes.

Se precisó, al mismo tiempo, que la Comisión no tendría facultades judiciales, propias de los Tribunales de Justicia y, por lo mismo, no podría pronunciarse sobre la responsabilidad que pueda haber a personas individuales en los hechos de que tomara conocimiento, sin perjuicio de su atribución de poner reservadamente en conocimiento del Tribunal que corresponda los que revistieren caracteres de delito.

Al cabo de nueve meses de trabajo laborioso, en que la Comisión ha realizado su tarea con celo, discreción y abnegación ejemplares, hoy hace entrega al Presidente de la República del resultado de su trabajo, concretado en el Informe que en este acto recibo.

Este Informe, que según el decreto que creó la Comisión tiene carácter público, pero cuyo contenido aún ignoro, constituye sin duda la base fundamental y decisiva para la solución del grave problema a que se refiere.

Al recibirlo, quiero dejar constancia ante el país de la absoluta independencia con que la Comisión ha realizado todo su trabajo, en forma reservada, sin interferencias de ninguna especie. Quiero también agradecer públicamente a sus integrantes y colaboradores el valioso servicio que han prestado al país. Trabajando silenciosa y desinteresadamente, han dado un ejemplo de espíritu público y de responsabilidad cívica.

En nombre del gobierno de la República y —estoy cierto— interpretando también el sentimiento general de los chilenos, doy las

gracias a su presidente, don Raúl Rettig Guissen, a sus miembros doña Laura Novoa Vásquez, doña Mónica Jiménez de la Jara, don Ricardo Martín Díaz, don Jaime Castillo Velasco, don Gonzalo Vial Correa, don José Luis Cea Egaña y don José Zalaquett Daher, a su secretario don Jorge Correa Sutil, y a todos sus colaboradores.

El pueblo de Chile tiene derecho a preguntar qué pasará con este Informe y cuándo lo conocerá. Considero mi deber, como Presidente de la República, estudiarlo personalmente para meditar y proponer al país los pasos a seguir. He resuelto dedicar preferentemente a esta tarea lo que resta de este mes, con la mira de encontrar los mejores caminos para avanzar constructivamente hacia el logro de la justicia y la reconciliación.

En los primeros días de marzo próximo, en fecha que será oportunamente anunciada, me dirigiré nuevamente a ustedes para entregar al conocimiento público el texto íntegro de este informe y, simultáneamente, formular al país mis proposiciones.

Buenas noches.

Al dar a conocer a la ciudadanía el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación

Santiago, 4 de marzo de 1991

Compatriotas:

Esta noche me dirijo a ustedes para tratar un tema doloroso que aún divide a los chilenos: el de las violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años.

Al asumir el gobierno, dije que ésta es una herida abierta en el alma nacional, que sólo podríamos cicatrizar si procurábamos reconciliarnos sobre las bases de la verdad y de la justicia.

Con ese propósito, constituimos la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, integrándola con personas de reconocido prestigio y autoridad moral en el país, para que luego de recibir, recoger y analizar todos los antecedentes que les fuera posible, emitieran en conciencia un Informe sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Expresamente precisamos que, para estos efectos, se entendería por graves violaciones "las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos".

Al cabo de nueve meses de esforzada labor, la Comisión emitió dicho Informe, acordado por la unanimidad de sus miembros, del que me hizo pública entrega el 8 de febrero recién pasado. Cumpliendo lo entonces anunciado, hoy lo pongo en conocimiento del

país, para lo cual se ha hecho entrega de su texto íntegro a las más altas autoridades públicas, sociales y morales de la nación y a los medios de comunicación.

Después de haber leído cuidadosamente el Informe, creo mi deber reiterar, en esta oportunidad, el reconocimiento que merecen los integrantes de la Comisión y sus colaboradores, por la abnegación, espíritu público, eficiencia, responsabilidad y objetividad con que cumplieron su tarea. Pienso que su valioso aporte compromete la gratitud de todos los chilenos.

¿QUE DICE EL INFORME?

Relación de hechos

En sus primeras 1094 páginas, luego de definir conceptos y describir el marco histórico político y el marco jurídico institucional en que los hechos acontecieron, relata por orden cronológico todos los casos en que la Comisión se formó la convicción de haberse cometido una violación de derechos humanos con resultado de muerte o desaparición, individualizando a las víctimas y señalando los antecedentes y circunstancias en que el hecho ocurrió.

Partiendo del concepto de que "existen ciertos valores de humanidad que deben ser respetados no solamente por el Estado, sino por todos los actores políticos" y acorde con el decreto que creó la Comisión, el Informe califica de violaciones a los derechos humanos "no sólo ciertos actos cometidos por agentes del Estado, sino también otros perpetrados por particulares que actúan bajo pretextos políticos".

La relación divide el período en tres etapas: primero, la comprendida entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, en que hubo algunos enfrentamientos, detenciones masivas en casi todo el país, ejecuciones de muchos prisioneros políticos y los primeros desaparecimientos; luego, el período de la DINA, hasta agosto de 1977, en que se llevó a cabo una acción sistemática para exterminar a quienes ese organismo atribuía más peligrosidad política y se produjo el mayor número de desapariciones de personas; y finalmente, la etapa en que la DINA fue sustituida por la CNI, en la que, luego de un lapso de relativo apaciguamiento, se produjeron numerosas acciones violentas con resultados fatales, sea en atentados cometidos por grupos armados o terroristas, sea en operativos destinados a combatirlos, sea con motivo de las protestas que tuvieron lugar a partir de 1983.

En cada período se señalan la naturaleza y caracteres de los

organismos represivos, los procedimientos preferentemente empleados por ellos, los lugares de detención, los métodos de tortura y de ejecución de las víctimas. Se relatan, también, los atentados a los derechos humanos cometidos por particulares bajo pretextos políticos y las acciones de violencia política de que resultaron víctimas fatales. Se reseña, asimismo, la actitud asumida ante esos hechos por los diversos actores de la sociedad civil: políticos, sociales, espirituales y medios de comunicación.

El balance de todo el período arroja 2279 víctimas, de las cuales 164 son consideradas por la Comisión "víctimas de la violencia política" y 2115 calificadas de "víctimas de violación a sus derechos humanos". Estas últimas, a su vez, se pueden clasificar en:

a) Muertos por agentes del Estado o por personas a su servicio:	
- en virtud de Consejos de Guerra	59
- por exceso de represión durante las protestas	93
- en ejecuciones alegando ley de fuga	101
- en otras ejecuciones y muertos en tortura	815
Subtotal	1.068
b) Detenidos por agentes del Estado y desaparecidos	957
c) Muertos por atentados cometidos por particulares bajo pretextos políticos	90
Total	2.115

El Informe precisa que la Comisión conoció otros 641 casos, que individualiza, respecto de los cuales no pudo formarse convicción y considera necesario que se continúe investigando.

La Comisión expresa que frente a estos hechos, "el Poder Judicial no reaccionó con la suficiente energía" (pág. 126), lo que produjo "en alguna importante o involuntaria medida, un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales" (pág. 128).

Recomendaciones

En las 74 páginas siguientes (de la 1096 a la 1168) del Informe, la Comisión da cumplimiento al encargo que se le hizo en el decreto

que la creó, de "recomendar las medidas de reparación y reivindicación que crea de justicia" y "las medidas legales y administrativas que a su juicio deban adoptarse para impedir o prevenir" nuevas violaciones a los derechos humanos.

Reparación a las víctimas

Luego de expresar que "la desaparición o la muerte de un ser querido son pérdidas irreparables", por lo que "no es posible establecer correlación entre el dolor, la impotencia y las esperanzas de las víctimas con las medidas" que sugiere, el Informe señala que "la reparación moral y material parece ser una tarea absolutamente necesaria para la transición hacia una democracia más plena, entendiendo por reparación "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le caben al Estado en los hechos y circunstancias que son materia" del Informe. Este precisa que "la reparación ha de convocar a toda la sociedad chilena. Ha de ser un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas. El proceso de reparación supone el coraje de enfrentar la verdad y la realización de justicia; requiere de generosidad para reconocer las faltas y de actitudes de perdón para llegar al reencontro entre los chilenos" (pág. 1096).

En el plano de la reparación moral, propone "reivindicar públicamente el buen nombre de las víctimas" mediante actos que sugiere a modo ilustrativo. Propone, asimismo, establecer un procedimiento especial de declaración de muerte de personas detenidas desaparecidas.

Las recomendaciones relativas al bienestar social tienden "a reparar el daño moral y patrimonial que afecta a los familiares directos de las víctimas", para lo cual propone, entre otras cosas, establecer por ley "una pensión única de reparación" y medidas destinadas a proporcionar a esos familiares una atención especializada en salud, formas de reparación en el plano educativo y con respecto a los problemas de vivienda, condonación de ciertas deudas y exención de la obligatoriedad del servicio militar a los hijos de las víctimas.

En este mismo orden de cosas, el Informe propone la creación de una Fundación de Derecho Público, autónoma, dirigida por un Consejo del más alto nivel y prestigio, que continúe las tareas de "tratar de determinar el paradero de las víctimas" de desaparecimiento, dictaminar acerca de los casos de posibles víctimas respecto de los cuales la Comisión no alcanzó a formarse convicción, centralizar y mantener los archivos y antecedentes sobre las violaciones a los derechos humanos,

prestar asesoría legal y asistencia social a los familiares de las víctimas, y las demás funciones que la ley le encomiende.

Frente al grave problema de "determinar el paradero de las víctimas" en los casos de "personas detenidas desaparecidas" y de "ejecutados sin entrega de los restos mortales a sus familiares", propone "penalizar el ocultamiento de este tipo de información" y, al mismo tiempo, "garantizar reserva y eximir de responsabilidad por su eventual participación, a quienes proporcionen estos antecedentes" (pág. 1161).

Prevención de eventuales violaciones

Luego de señalar que "no existió en Chile, en la época en que estas violaciones se cometieron, una conciencia nacional suficientemente firme respecto del deber imperioso de respetar los derechos humanos", el Informe formula numerosas sugerencias para mejorar la legislación nacional en la materia, perfeccionar el Poder Judicial a fin de que cumpla efectivamente su rol de garante de los derechos esenciales de las personas, lograr en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad la plena conciencia sobre el valor de los derechos humanos y el consiguiente compromiso de respetarlos en el ejercicio de sus funciones, crear una institución cuya misión sea de protección de los derechos humanos y tratar de consolidar, a partir del sistema educacional y en todos los ámbitos de la vida social, una cultura verdaderamente respetuosa de los derechos humanos.

Víctimas

Finalmente, en un segundo volumen de 635 páginas, el Informe contiene una breve reseña biográfica, por orden alfabético, de cada una de las 2279 personas respecto de las cuales se formó la convicción de que murieron o desaparecieron como víctimas de violación de sus derechos humanos o como víctimas de la violencia política, entre ellos 132 miembros de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad.

Hasta aquí el resumen del informe. Ojalá todos lo lean y mediten. Os invito a hacerlo.

REFLEXIONES NECESARIAS

Permítanme ahora compartir con ustedes algunas reflexiones que golpean mi conciencia de ser humano, de chileno y de Presidente

de la República, a raíz de la lectura del Informe y de los intercambios de opiniones que he tenido a su respecto con personas representativas de diversos sectores de nuestra patria.

El tema de la verdad

El imperio de la verdad es el fundamento de toda convivencia. Esto es válido en los múltiples niveles de la vida social, desde el hogar hasta la comunidad universal; rige tanto para las relaciones familiares como para las relaciones en el seno de las naciones, y aun entre éstas.

Donde la verdad no es respetada, se quiebra la confianza entre las personas; surgen la duda, las descalificaciones y, consiguientemente, los odios y la tentación de la violencia. La mentira es la antesala de la violencia e incompatible con la paz.

En este tema de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, la verdad fue ocultada durante mucho tiempo. Mientras unos la denunciaban, otros —que sabían— la negaban, y quienes debieron investigarla, no lo hicieron. Se explica así que mucha gente, tal vez la mayoría, no creyera. Y esa discrepancia fue un nuevo factor de división y odiosidad entre los chilenos.

El Informe que hoy entrego a conocimiento público esclarece la verdad. Por los propios antecedentes del Informe y por la calidad de sus autores, varios de los cuales fueron partidarios y colaboradores del régimen pasado, esa verdad debe ser aceptada por todos. Nadie, de buena fe, podría desconocerla.

No digo que sea una verdad "oficial". El Estado no tiene derecho a "imponer" una verdad. Pero, convencido de ella, yo llamo a todos mis compatriotas a asumirla y a actuar en consecuencia. Compartida por todos, esa verdad, por cruel y dolorosa que sea, removerá un motivo de disputa y división entre los chilenos.

El reconocimiento de esta verdad es independiente del juicio que cada cual tenga sobre los acontecimientos políticos de la época, ni sobre la legitimidad del 11 de septiembre de 1973. Eso lo juzgará la historia; pero ningún criterio sobre el particular borra el hecho de que se cometieron las violaciones a los derechos humanos que describe el Informe. Como éste asevera, "la situación al 11 de septiembre de 1973 y sus consecuencias pusieron objetivamente en riesgo los derechos humanos e hicieron más probables sus trasgresiones, pero en ningún caso las justificaron" (pág. 24).

Tampoco puede invocarse, para negar o desconocer esta verdad, un supuesto estado de "guerra interna" que habría existido, ni la necesidad de defender a la patria del terrorismo. Todos sabemos —y el Informe lo establece— que las Fuerzas Armadas y de Orden

tomaron el control total del país muy rápidamente, a lo más en pocos días. Por otra parte, la guerra también tiene sus leyes. Nada justifica que se torture y ejecute prisioneros, ni que se haga desaparecer sus restos.

El tema del perdón y la reconciliación

Muchos compatriotas piensan que es tiempo de poner "punto final" a este asunto. Por el bien de Chile, debemos mirar hacia el futuro que nos une más que al pasado que nos separa. Es mucho lo que tenemos que hacer para construir una sociedad verdaderamente democrática, impulsar el desarrollo y alcanzar la justicia social, para que desgastemos nuestros esfuerzos en escudriñar heridas que son irremediables. Y nos recuerdan las palabras de S.S. Juan Pablo II en su visita: "Chile tiene vocación de entendimiento y no de enfrentamiento. No se puede progresar profundizando las divisiones. Es la hora del perdón y la reconciliación".

¿Quién podría no compartir estos anhelos? Para realizarlos, sin embargo, hay que empezar por precisar quiénes son los ofendidos llamados a perdonar y quiénes los ofensores que han de ser perdonados. Yo no puedo perdonar por otro. El perdón no se impone por decreto. El perdón requiere arrepentimiento de una parte y, de la otra, generosidad.

Cuando fueron agentes del Estado los que ocasionaron tanto sufrimiento, y los órganos competentes del Estado no pudieron o no supieron evitarlo o sancionarlo, y tampoco hubo la necesaria reacción social para impedirlo, son el Estado y la sociedad entera los responsables, bien sea por acción o por omisión. Es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas de las violaciones de derechos humanos.

Por eso es que las sugerencias sobre reparación moral y material que formula el Informe son compartidas por todos los sectores.

Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de Presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas.

Por eso, también, pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden, y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos, que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo.

El pueblo de Chile siempre ha querido y admirado a sus Instituciones Armadas y de Orden. Ellas se identifican con las glorias de la Patria, con el espíritu varonil de los chilenos y con abnegadas acciones en la vida cotidiana o frente a graves emergencias. El anhelo de reconciliación, en un Chile verdaderamente unido, exige

remover los obstáculos que aún perjudican esos sentimientos. Todos debemos contribuir a ello.

He dicho en más de una ocasión que mi mayor anhelo como gobernante es alcanzar la unidad nacional en democracia. Ello exige de todos y de cada uno un gran esfuerzo para ponerse en el lugar de los demás y procurar comprenderlos, con humildad para reconocer las propias faltas y limitaciones y generosidad para perdonar las ajenas.

El tema de la justicia

La justicia es la mayor de las virtudes sociales, base insustituible de la paz.

Sabemos que, por las limitaciones propias de la condición humana, la justicia perfecta es generalmente un bien inalcanzable en este mundo, lo cual no obsta a que todos anhelemos siempre la mayor justicia que sea posible.

La justicia no es venganza; por el contrario, la excluye. No se sanciona ni repara un delito, cometiendo otro análogo. Nadie tiene derecho a causar un daño al prójimo, ni menos a atentar contra la vida ajena, a pretexto de justicia. Quien lo hace se convierte también en delincuente contra los derechos humanos y merece la mayor condenación social. Admitir la vindicta privada es sustituir el derecho por la violencia, en que la ley de la fuerza prevalece sobre la razón y la justicia.

En este tema de las violaciones a los derechos humanos, el esclarecimiento y aceptación de la verdad, como surge del Informe, ya es parte importante del cumplimiento de la justicia para con las víctimas. También importan la reivindicación moral de la dignidad de éstas y las reparaciones a sus familiares que el Informe propone.

Pero ello no basta. La justicia exige, también, que se esclarezca el paradero de los desaparecidos y que se determinen las responsabilidades personales.

En cuanto a lo primero, la verdad establecida en el Informe es incompleta, puesto que en la mayoría de los casos de detenidos desaparecidos y de ejecutados sin entrega de sus restos a los familiares, la Comisión no tuvo medios para encontrar su paradero.

En lo que respecta a la determinación de las responsabilidades, es tarea que dentro de un Estado de Derecho corresponde a los Tribunales de Justicia, en conformidad al ordenamiento jurídico y con las garantías del debido proceso. La Comisión de Verdad y Reconciliación no pudo entrar en este aspecto, porque el propio decreto que la creó le negó esa facultad en virtud de claros preceptos constitucionales.

En uno y otro caso, la Comisión ha enviado los antecedentes respectivos al Tribunal correspondiente. Espero que éstos cumplan debidamente su función y agoten las investigaciones, a lo cual —en mi concepto— no puede ser obstáculo la ley de amnistía vigente.

Terrorismo y violencia

Los criterios expuestos no deben ser interpretados por nadie como signos de tolerancia o debilidad en la lucha contra el terrorismo y la violencia de sectores extremistas.

Es decisión de mi gobierno combatir con la mayor energía el terrorismo y toda forma de violencia, de quienquiera que provenga. Lo importante es encontrar mecanismos eficaces para derrotarlos y ponerles término. La experiencia de otros países demuestra que los caminos del Derecho son para ello más eficaces que la simple confrontación armada. Nos resistimos a aceptar que para combatir el terrorismo, repudiable entre otras razones porque viola los derechos humanos, sea indispensable emplear métodos que incurran en análogas violaciones, porque tales métodos, moralmente inaceptables, ayudan en la práctica a alimentar la espiral de la violencia.

DECISIONES

En presencia del Informe que he reseñado, teniendo en cuenta las reflexiones precedentes y a fin de encarar los problemas derivados de las violaciones de derechos humanos con la mayor responsabilidad, eficacia y prontitud, creo necesario adoptar las medidas que paso a enunciar:

1°. Hago un ferviente llamado a todos mis compatriotas a aceptar la verdad que se expone en el Informe y a ajustar sus conductas a ese reconocimiento;

2°. Acogiendo la sugerencia del Informe, reivindico pública y solemnemente la dignidad personal de las víctimas en cuanto hayan sido denigradas por acusaciones de delitos que nunca les fueron probados y de los cuales nunca tuvieron oportunidad ni medios adecuados para defenderse;

3°. En el curso del presente mes, el gobierno presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley para concretar las proposiciones del Informe en cuanto a pensión única de reparación a los familiares directos de las víctimas, procedimiento especial de declaración de muerte de personas detenidas desaparecidas, otras prestaciones de

carácter social y creación de una institución de Derecho Público que se haga cargo de las tareas que el Informe señala;

4°. Hoy mismo he enviado a la Corte Suprema un oficio en que le adjunto el texto del Informe y le solicito que, en ejercicio de sus atribuciones, instruya a los tribunales correspondientes para que activen con la mayor diligencia los procesos actualmente pendientes sobre violaciones de derechos humanos y los que deban instruirse con motivo de los antecedentes que la Comisión de Verdad y Reconciliación les remitió, haciéndole presente que, en mi concepto, la amnistía vigente, que el gobierno respeta, no puede ser obstáculo para que se realice la investigación judicial y se determinen las responsabilidades, especialmente en los casos de personas desaparecidas;

5°. El gobierno pedirá, por intermedio del ministro de Justicia y con arreglo al art. 26 bis del Código de Procedimiento Penal, la intervención del Ministerio Público en primera instancia cada vez que lo estime necesario;

6°. Personalmente he pedido a los señores Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al señor General Director de Carabineros, la cooperación de sus instituciones para establecer el paradero de los detenidos desaparecidos y de los ajusticiados cuyos restos no han sido entregados a sus familiares;

7°. El gobierno dará instrucciones especiales a los Servicios de Orden y Seguridad Pública para que presten la más diligente cooperación a los Tribunales de Justicia para el éxito de las investigaciones en los casos referidos;

8°. Se enviará próximamente al Congreso Nacional el proyecto de ley, que le fue propuesto por el Capítulo Chileno del Ombudsman y que el gobierno ha hecho suyo, para crear la institución del Defensor del Pueblo, que se encargará fundamentalmente de cautelar el respeto y plena vigencia de los derechos humanos; y

9°. Finalmente, el Ministerio de Justicia constituirá a la mayor brevedad un equipo de trabajo que prepare el o los proyectos de ley necesarios para introducir en nuestra legislación las reformas que la Comisión de Verdad y Reconciliación sugiere para la mejor protección de los derechos humanos.

Independientemente de lo expuesto, creo oportuno anunciar que, coincidiendo con algunas de las sugerencias del Informe, el gobierno tiene preparados los proyectos de ley necesarios para perfeccionar y modernizar la Administración de Justicia. Siendo ésta

una materia en que existe muy alto consenso nacional, es mi propósito procurar rápidamente los acuerdos necesarios para que dicha reforma judicial pueda presentarse próximamente en términos que faciliten su debate y aprobación parlamentaria en el más breve lapso.

RUEGO A LOS CHILENOS

Al finalizar esta exposición, quiero rogar a todos mis compatriotas que se esfuercen por asumir esta verdad con entereza y responsabilidad. Debemos ser capaces de sacar lecciones de la experiencia para que NUNCA MAS en Chile vuelva a pasar algo semejante. Esta es tarea de todos, de la que nadie puede excluirse.

Si el dolor, el espanto y la justa indignación nos movieran al odio y a la violencia, pronto caeríamos en lo mismo. Sería reanudar la lucha fratricida, destruir nuestra renaciente democracia y renunciar al anhelo de paz que todos abrigamos.

Todos los chilenos pueden tener la certeza de que el gobierno cumplirá su deber, consecuente con los principios morales que lo inspiran, sin otras miras que la justicia, la reconciliación y el bien común de la patria.

Pero ésta no es sólo tarea del gobierno. Lo es igualmente de los otros Poderes del Estado, de las Instituciones Armadas, de las autoridades espirituales, de las organizaciones sociales y de toda la comunidad nacional. A todos pido su cooperación para que juntos, respetándonos y ayudándonos, con comprensión y generosidad, hagamos lo necesario para sanar las heridas del pasado y construir un futuro de justicia, de progreso y de paz para Chile.

En reunión interparlamentaria de derechos humanos

Santiago, 25 de mayo de 1991

Señores Senadores y Diputados
de los países hermanos de América Latina y de Chile:

Permítanme empezar mis palabras con un desahogo personal. Para mí tiene un hondo significado, y me causa mucha emoción, estar en esta sala. Aquí funcionó, durante siglo y medio, el Senado de la República; aquí vimos sentadas a grandes figuras de nuestra patria, ahí se sentaba Salvador Allende, ahí se sentaba don Jorge Alessandri, allá se sentaba Eduardo Frei, Presidentes de Chile democrático. Tuve el honor de presidir esta Corporación y sentarme en este mismo asiento durante un período, y añoro y anhelo que el Senado de la República vuelva a funcionar en esta sede, que tiene un significado tradicional e histórico.

He concurrido con el mayor placer a esta reunión en que parlamentarios de América Latina se juntan para intercambiar opiniones y organizar una colaboración activa en la defensa de los derechos humanos en el Continente.

La verdad es que el concepto de derechos humanos —que, yo diría, es tan antiguo como la concepción humanista de la sociedad—, ha adquirido en nuestro tiempo una relevancia especial, y ello fue significado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, expresada formalmente después del término de la Segunda Guerra Mundial.

Nuestros pueblos anhelan vivir en democracia, y el fundamento básico de toda democracia es la vigencia de los derechos humanos. No hay democracia sin plena vigencia de los derechos humanos, y la democracia será más perfecta cuanto mayor sea la realización

práctica de los derechos de todos los hombres: derecho a la vida, derecho a las distintas libertades, derecho a la propiedad de lo necesario, derecho a asociación, derecho al trabajo, derecho a remuneración justa, derecho a participación. En fin, ustedes, dedicados al tema, saben mejor que yo cuál es el conjunto de los derechos que integran el concepto de derechos humanos.

Nuestros países, en mayor o menor medida unos que otros, hemos pasado durante un largo período —más largo en unos, menos largo en otros—, por regímenes en que el concepto de derechos humanos no sólo no ha sido respetado, sino que ha sido violado. Y en nuestro Continente ha imperado el miedo, el miedo a ser atropellado en la dignidad humana y a que se le desconozcan a uno sus derechos, y ha habido muchas violaciones a los derechos humanos.

Felizmente estamos viviendo una etapa en la historia de nuestro Continente, que coincide con una tendencia en el mundo entero, de afirmación de la dignidad de la persona humana y, como consecuencia, de los derechos humanos. La libertad y la democracia vuelven a imperar.

¿Cuál es nuestro desafío? Nuestro desafío es asegurar que esta tendencia se convierta en una realidad permanente y estable; nuestro desafío es que las renacientes democracias de América Latina, que representan o encarnan las esperanzas de millones de hombres y mujeres que quieren que sea respetada su dignidad y que tienen esperanza para una vida mejor, fundada, precisamente, en el respeto y en la realización de sus derechos de personas, no sea algo efímero; que esas esperanzas se puedan convertir en realidad para todos los hijos de nuestro Continente.

Esto nos exige coordinar esfuerzos; esto nos exige, en cada país, una vigilancia estricta para que los derechos humanos sean respetados y nos exige cooperar entre todos para asegurar que ello ocurra, no sólo en un país, o en dos, o en cinco, o en veinte, sino que en todos; porque la violación a los derechos humanos en un país, es ya un comienzo de una plaga o enfermedad que puede contagiar al resto de los países.

Si uno admite que el hombre es, en definitiva, el sujeto fundamental del Derecho, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, hay Derecho y es necesaria una tutela internacional de los derechos humanos. Esa tutela se ejerce por instrumento jurídico, a través de los organismos previstos en los tratados internacionales, entre ellos el Pacto sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica y la Convención Internacional de Derechos Humanos, pero también se tutela por el control político. La vía jurídica es una vía, en cierto modo, excepcional, pero la presencia de la conciencia viva de la gente, defendiendo los derechos huma-

nos —y este es rol esencial del Parlamento— es fundamental para asegurar esa vigencia.

Ahora yo quiero con mucha franqueza plantear a vuestra consideración un tema que creo de la máxima importancia. Cuando se han producido en el pasado violaciones a los derechos humanos, el desafío que tenemos es doble. Por una parte, es el desafío de asegurar que no se vuelvan a repetir y eso supone una conciencia vigilante, la voluntad decidida de hacer respetar el derecho de todos, el crear mecanismos de Derecho que aseguren que no ocurran esas violaciones. Hay una necesidad de voluntad política de los gobiernos, de los parlamentos y de la sociedad entera.

Hay ahí una tarea muy importante en el ámbito, si dijéramos, cultural: que la sociedad comprenda la importancia del concepto de derechos humanos y se haga solidariamente responsable de su respeto, de su promoción.

Pero tenemos un segundo desafío, el desafío de qué pasa con las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado. En esa materia, en nuestro país, como ustedes saben, designamos una Comisión, que llamamos de Verdad y Reconciliación, que tuvo como primer objeto, como "su" objeto, esclarecer la verdad de lo ocurrido, porque esa verdad era controvertida, porque mientras algunos sosteníamos que tales violaciones se habían cometido, otros las negaban.

El informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación esclareció esa verdad, y ese esclarecimiento es la base fundamental para seguir trabajando, a partir de esa verdad. Ese informe ha sido discutido, pero quienes lo han discutido no han llegado a desconocer la verdad de las violaciones que ese Informe establece. Se discuten las circunstancias, se discuten los hechos que podrían explicar lo que ocurrió, o aun justificarlos, pero no se discute que los hechos ocurrieron.

Yo creo que ése es un avance importante, porque sólo sobre la base de la verdad se puede construir una convivencia pacífica, en que todos nos respetemos y nos entendamos.

Pero es indudable que con la verdad, aunque ella implica algo de justicia en cuanto a vindicación moral de las víctimas, no se soluciona todo el problema de las violaciones ocurridas en el pasado. Desde luego, los familiares de las víctimas, o las propias víctimas que han sufrido, merecen y son acreedores a una reparación por parte de la sociedad, y eso es lo que mi gobierno quiere obtener, mediante un proyecto de ley que ha enviado a la consideración del Congreso, y que actualmente está tratando la Cámara de Diputados de Chile.

Pero queda el problema de la justicia, de establecer las responsabilidades y sancionar a los culpables. Este es un problema jurídico y es también un problema político. En cuanto a lo jurídico, el asunto

es muy claro. Dentro de un sistema democrático, en que hay separación de los Poderes del Estado, y en que la función de juzgar corresponde exclusivamente a los Tribunales de Justicia, éstos son quienes deben cumplir con esa tarea, de acuerdo con la legislación vigente. Eso es lo que estamos pidiendo al Poder Judicial chileno en esta etapa, frente al proceso que hemos vivido.

Hay también un problema político, que no podemos rehuir. Es el problema de en qué ponemos más el acento: si en la sanción de los hechos del pasado o en asegurar la estabilidad del sistema político para el futuro. Las experiencias vividas en algunos países del Continente, en algunas naciones hermanas, nos revelan que el empeño por obtener una plena sanción del pasado pone en peligro la estabilidad del sistema institucional. Nosotros tenemos que conjugar la exigencia de justicia, que es un imperativo de conciencia, con la exigencia de estabilidad del sistema democrático, que es la garantía mayor de que en el futuro no vuelvan a haber violaciones de derechos humanos.

Hay aquí un problema de prudencia política. Por eso es que yo he dicho, en forma reiterada, que en esta tarea tenemos que conjugar la virtud de la justicia con la virtud de la prudencia.

Estimados señores parlamentarios de las naciones amigas,
de las naciones hermanas de América Latina:

Yo confío en que el trabajo que ustedes realicen ayude a dar luces sobre estos temas y ayude, sobre todo, a ir afirmando, cada vez más, no sólo en la conciencia y en la institucionalidad jurídica, sino que en la vigencia práctica, los derechos humanos para todos los habitantes de esta tierra de América.

Muchas gracias.

LA RELACION CIVIL-MILITAR

Saludo en el "Día de las Glorias del Ejército"

Santiago, 18 de septiembre de 1990

En el "Día de las Glorias del Ejército" hago llegar mi más cordial saludo a todos sus Jefes, Oficiales, Suboficiales, Clases y Soldados.

El Ejército de Chile es parte esencial de la historia patria. Nombres como los de O'Higgins, Bulnes, Baquedano y de los que cayeron como héroes de La Concepción, constituyen ejemplos señeros de patriotismo. Su valentía, su desinterés personal y su entrega generosa al servicio de Chile, demuestran el sentido y la dimensión del verdadero amor a la patria. Por eso se ganaron para siempre un lugar privilegiado en el corazón de los chilenos.

Desde la Independencia Nacional, Chile ha confiado en el Ejército y en las demás instituciones armadas de la República, la defensa de su soberanía, de la integridad del territorio patrio y de la vigencia del Estado de Derecho. Para ello las ha dotado, en la medida de sus posibilidades, de los medios necesarios, y ellas forman y entrenan a sus cuadros permanentes y a sus contingentes para alcanzar la máxima eficiencia como cuerpos armados profesionales, jerarquizados, disciplinados, esencialmente obedientes y no deliberantes.

Si muchas han sido las glorias del Ejército en los campos de batalla, la nación también tiene motivos para agradecer la contribución de nuestros soldados en las diarias jornadas de la paz. Junto a las demás instituciones armadas, el Ejército ha colaborado eficazmente en múltiples tareas de desarrollo nacional, y en la pronta y solidaria atención de situaciones de emergencia y de catástrofe que han afectado al país.

Por todo esto, como también por la gallardía y marcialidad de sus soldados, el Ejército de Chile se ganó el aprecio y cariño del pueblo chileno.

La situación de anormalidad política vivida por el país durante

largo tiempo, caracterizada por agudas confrontaciones ideológicas, el quiebre del régimen institucional, el ejercicio del gobierno por la Fuerzas Armadas durante más de dieciséis años y profundas divisiones entre los chilenos, ha dejado graves heridas en la convivencia nacional. Sería ciego desconocer que esta situación afecta especialmente a las relaciones entre civiles y militares.

Habiendo retornado el país a un régimen democrático, como corresponde a su tradición histórica —a lo que las propias Fuerzas Armadas contribuyeron al aceptar el veredicto del pueblo dentro del marco de la nueva institucionalidad que su gobierno estableció—, la patria nos exige a todos sus hijos un gran esfuerzo para cicatrizar esas heridas y reconstruir la unidad nacional.

Como Presidente de todos los chilenos, elegido por el voto libre y soberano del pueblo, estoy consagrado con toda el alma y con toda mi capacidad —desde el mismo día en que asumí— a la tarea de lograr la necesaria unidad entre mis compatriotas.

Lo dije al asumir el mando supremo de la nación, en mi discurso del 12 de marzo en el Estadio Nacional: se trata de “restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares, trabajadores o empresarios, obreros o intelectuales”. Lo repetí en mi mensaje del 21 de mayo ante el Congreso Nacional: “Mi mayor anhelo como gobernante es entregar, a quien el pueblo elija para sucederme, una patria unida en democracia”. Y agregué: “Para alcanzar la unidad nacional que anhelamos, es indispensable superar los agravios del pasado, reparar las ofensas, borrar las sospechas, desvanecer las desconfianzas. Sólo así lograremos una verdadera y no sólo aparente, reconciliación nacional”.

La tarea es difícil, pero necesaria. Sólo podremos cumplirla sobre las bases de la verdad, de la justicia, del respeto mutuo y de la estricta observancia por todos de las normas constitucionales y legales.

No colaboran a la unidad nacional ni al afianzamiento de nuestra democracia quienes se empeñan en provocar conflicto entre las autoridades civiles y militares, y no trepidan en formular suposiciones antojadizas o atribuir al gobierno propósitos imaginarios.

Quiero decirlo con absoluta claridad en esta ocasión del día del Ejército: mi gobierno respeta a las Fuerzas Armadas y de Orden, las quiere prestigiadas y eficientes y no propone cambiar lo que ha sido su institucionalidad tradicional e histórica. Aspira, claro está, a modificar algunas normas que actualmente privan al Presidente de la República de atribuciones que naturalmente le corresponden como Jefe de Estado y que históricamente tuvo desde los orígenes de la República; pero es obvio que ello sólo podrá hacerse por las vías que la Constitución contempla.

Con la misma claridad debo decir que el gobierno exige de todos los miembros de las Instituciones Armadas, desde el primero hasta el último, el riguroso cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.

Estoy cierto de que actuando todos sobre estas bases, disiparemos las sospechas y motivos de discordia y avanzaremos en el camino que la patria nos demanda: el del respeto mutuo y la unidad nacional. Sólo así podremos alcanzar el clima moral indispensable para construir para Chile un porvenir de paz, de progreso y de grandeza.

En esta ocasión en que conmemoramos 180 años de la Independencia nacional, hago un solemne llamado a todos mis compatriotas, civiles y militares, a deponer prejuicios y pasiones y aunar esfuerzos para hacer de Chile una nación cada vez más sólida, próspera y feliz. Es lo que nos demandan las grandes figuras de nuestra historia y lo que nos cobrarán las futuras generaciones.

En ceremonia conmemorativa del 175° aniversario del natalicio del Libertador Bernardo O'Higgins

Santiago, 20 de agosto de 1991

La conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del Libertador Bernardo O'Higgins, es ocasión propicia para compartir algunas reflexiones con mis compatriotas miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Como he dicho reiteradamente, la tarea primera y fundamental de mi gobierno es consolidar la unidad nacional en democracia. Se trata de lograr que todos los hijos de esta patria nos sintamos verdaderamente miembros de una misma familia y, admitiendo nuestras naturales diferencias, nos respetemos recíprocamente, procuremos comprendernos y nos esforcemos en colaborar para la solución de los problemas nacionales e impulsar el progreso de Chile.

Dentro de este espíritu, así como procuro promover el entendimiento entre gobierno y oposición para sacar adelante iniciativas de bien común, así como busco acuerdos entre trabajadores y empresarios para promover el funcionamiento eficiente y equitativo de la vida económica nacional, así también me preocupa y anhele crear un clima de recíproco respeto y confianza entre civiles y militares.

No ayuda a este último propósito la actitud de quienes, de uno u otro lado, permanecen anclados en el pretérito y siguen cultivando viejos prejuicios y celos. Es obvio que muchos hechos dolorosos de un pasado aún reciente y las distintas perspectivas para apreciarlos, son obstáculos que dificultan la tarea de afianzar relaciones de mutua comprensión y confianza entre amplios sectores del mundo civil y los miembros de las instituciones que hasta hace poco, y

por largos años, ejercieron la totalidad del poder político en el país. El superior interés de Chile nos impone a todos el deber de procurarlas.

¿Qué mejor para tan patriótico propósito que buscar en nuestra común historia los elementos que nos unen? Así como el culto a las enseñanzas y valores que heredaron de sus padres es factor aglutinante de la unidad de las familias, así también el culto a los héroes patrios y al ejemplo que con su conducta nos legaron, contribuye a forjar la unidad de la nación.

¿Y en quién mejor que en el Padre de la Patria, el Libertador Bernardo O'Higgins, hemos de buscar los chilenos esos valores y enseñanzas?

Personalidad moral de O'Higgins

El año pasado, en esta misma fecha, destaqué en Chillán las virtudes que, a mi juicio, configuran la personalidad moral de O'Higgins. Me referí a su patriotismo, a su valentía, a su vocación de servicio, a su desinterés personal y a su consecuencia, como rasgos ejemplares de su actuación como soldado, como político y como gobernante.

Permitidme recapitular un poco sobre esos valores.

Patriotismo. Sin duda, Bernardo O'Higgins se nos aparece a todos los chilenos, junto con el capitán Prat, como los símbolos del patriotismo. El mismo lo escribía en alguna ocasión, en estas palabras tan significativas: "El sentimiento que debe ser más grato a nuestro corazón, después del amor que debemos al Creador, es el amor a la Patria". Son palabras textuales del Libertador.

El cultivó ese sentimiento y a su patria entregó toda su capacidad, toda su energía, toda su vida. Y lo hizo demostrando, sobre todo, un enorme coraje. O'Higgins es símbolo de valentía, es el hombre que no tiene miedo, o que supera al miedo, que derrota al miedo. Tiene audacia para arriesgar la vida y no teme hacerlo. En El Roble, Rancagua, Cancha Rayada, Lircay, Chacabuco y Maipú, pone en evidencia esta virtud superior de su valor.

Su arenga en El Roble hace historia. Es expresión de un sentimiento profundo: "¡O vivir con honor o morir con gloria! El que sea valiente, sígame".

Vocación de servicio. O'Higgins, vuelto después de la muerte de su padre al suelo patrio, recibe en herencia, más exactamente en legado, la hacienda de Las Canteras, en El Laja y —lo expresa en más de alguna ocasión— tiene vocación de labrador, se siente bien en su campo. Es un agricultor diligente: multiplica el ganado, hace

mejoras, trabaja con corazón y con empeño. Se reúne ahí con su madre y con su hermana. Tiene tranquilidad.

Pero tiene en su mente y en su conciencia un compromiso superior a su propio bienestar, un compromiso con Chile. Por eso deja su vocación de labrador para consagrarse al servicio público: subdelegado de La Laja; diputado por Los Angeles al Congreso Nacional de 1811; militar, fue autoformándose en la disciplina militar, desde Teniente Coronel hasta Capitán General de la República; Director Supremo de la Nación. Un hombre entregado al servicio público.

Desinterés personal. Como lo dijo cuando decidió embarcarse en esa empresa, en carta al general Mackenna, "tenía mucho que perder y nada que ganar", pero, realmente, él afrontó, con absoluto desinterés, toda su actuación pública. Sirvió a Chile despreocupándose enteramente de sus intereses personales y de su propia vida, y dio un último testimonio de ello, tal vez el más grandioso, cuando estimó que frente a la incompreensión de que era objeto y al sentimiento popular que le reclamaba dejar el gobierno, abdicó y aceptó la dura experiencia del exilio.

Consecuencia. Yo llamo consecuencia a la capacidad de adecuar la conducta a los principios y valores en que se cree; que los hechos correspondan a las palabras; que se predique y se practique. Es decir, que entre el actuar y los ideales, los valores, haya una adecuada correspondencia.

En toda su vida, en sus distintos actos, en el desinterés con que actuó, en su disposición a hacerse a un lado en más de alguna oportunidad y en su disposición, en otras, a aceptar responsabilidades que él mismo no quería, demostró Bernardo O'Higgins esta consecuencia.

Todas estas virtudes las puso O'Higgins al servicio de un ideal superior: construir una patria libre, independiente, soberana.

Ideario político de O'Higgins

¿Qué rasgos caracterizan el pensamiento y la acción de O'Higgins en esta tarea y constituyen lo que podríamos llamar su "ideario político"?

Yo diría que los rasgos fundamentales del quehacer de O'Higgins como hombre de Estado, los que configuran su "legado político", son su espíritu democrático, su respeto al derecho y fe en las instituciones, su sentido social, su voluntad realizadora y su visión de futuro.

Creo importante para la comunidad nacional que reflexionemos

sobre estos valores, que en mi concepto todos los chilenos debiéramos asimilar y compartir, como parte de la vocación histórica nacional.

Espíritu democrático. O'Higgins es un demócrata, cree en el derecho del pueblo a gobernarse por sí mismo. Cree en la igualdad esencial de todos los hombres.

Las circunstancias primigenias de su vida, su origen, su difícil período de infancia y de adolescencia, luego las enseñanzas de Miranda en Inglaterra, llevaron al joven O'Higgins a abrazar con fervor los ideales de libertad, igualdad y fraternidad expresados por la Revolución Francesa.

Porque cree en la voluntad popular, busca legitimar el poder político mediante asambleas legislativas representativas del pueblo. Patrocina la formación del Primer Congreso Nacional. Ante las dudas de Martínez de Rozas, quien abrigaba cierta desconfianza de la capacidad de un Congreso para decidir los rumbos del proceso nacional, admite Bernardo O'Higgins que, por carencia de cultura, ese Congreso podría hacerse "reo de toda clase de insensateces". Pero al mismo tiempo sostiene que es preciso empezar de una vez y que "la reunión de una asamblea legislativa serviría para avivar el proceso revolucionario y para evitar que la Junta cayera en el mismo sistema autoritario de la Colonia".

Estos criterios lo llevan a impulsar la generación del Primer Congreso Nacional de 1811, del que fue miembro. Y luego, cuando como Director Supremo tiene en sus manos todo el poder político, busca generar una Convención representativa de la nación que genere la que será la Constitución de 1822. "Conozco bien —dijo a esa asamblea— que esta Honorable Convención no reviste todo el carácter de representación nacional como se tiene en otros países constituidos y que gozaremos después. Siendo una reunión popular respetable, y la única que legalmente se podía tener por ahora, yo le dirijo la palabra como si estuviera congregado en esta sala todo el pueblo chileno, cuyos intereses he mirado como padre".

Pero este criterio democrático se expresa también en su *espíritu igualitario*. O'Higgins abomina de las diferencias sociales. Consecuente con esos criterios, dispone, en 1817, la abolición de los títulos de nobleza y prohíbe el uso de escudos de armas. Fundamenta esta última decisión así: "Si en toda sociedad debe el individuo distinguirse solamente por su virtud y mérito, en una República es intolerable el uso de aquellos jeroglíficos que anuncian la nobleza de los antepasados. . . El verdadero ciudadano, el patriota que se distingue en el cumplimiento de sus deberes, es el único que merece perpetuarse en la memoria de los hombres libres".

Respeto al derecho y fe en las instituciones. O'Higgins rechaza el poder arbitrario. Cree en el derecho, en la ley, como instrumento regulador de la vida social y del ejercicio del poder, y busca organizar la República sobre bases constitucionales permanentes.

Se ha escrito —con razón— que “con la emancipación, todos los pueblos de América Hispana tuvieron que resolver el arduo problema de organizar el Estado, de adaptar la vida política entera a los nuevos ideales proclamados en la revolución de la Independencia. En casi toda Hispanoamérica, los intentos realizados para solucionar este problema, condujeron a un largo y doloroso período de anarquía, de cuartelazos, de sangrientas revoluciones y de caudillismo, que siguió a la emancipación. En Chile, en cambio, la lucha por la organización del Estado es una etapa breve, no alcanza a dos décadas”.

Es frecuente que se atribuya este éxito en la institucionalización del Estado chileno, casi exclusivamente al genio político de Portales. No creo justa esa apreciación. Portales, con Egaña y Bello, culminan un proceso iniciado en la Patria Vieja, con el Reglamento Constitucional Provisorio de 1812, y proseguido en la Patria Nueva con las Constituciones de 1818 y 1822. O'Higgins contribuye decisivamente a este proceso de institucionalización.

El profesor Julio Heise, en su opúsculo “Ciento cincuenta años de evolución institucional”, nos lo recuerda. Dice:

Después del triunfo de Chacabuco, la propia aristocracia investirá a O'Higgins de poderes discrecionales para proseguir la guerra contra España. El prócer nunca ambicionó el poder, no tuvo vocación de caudillo militar ni de dictador. El mismo año en que el patriciado le entregó el mando supremo, sin limitación de plazos ni de poderes, el propio Director Supremo hizo elaborar el Plan de Hacienda y Administración Pública, especie de código de régimen interior, en el cual se autolimita el poder discrecional con que había sido investido. En los seis años de gobierno de don Bernardo O'Higgins, Chile vivió un autoritarismo legal. El prócer nunca hizo imposible la existencia de la ley, tuvo un claro concepto de la vida ciudadana que lo llevó siempre a respetar la norma jurídica. Es preciso no confundir el autoritarismo legal con la dictadura.

A raíz del triunfo de Maipú, la aristocracia chilena estimó que habían desaparecido las circunstancias que justificaban los poderes discrecionales acordados al prócer. Con notable espíritu cívico, O'Higgins adhiere a los propósitos de la ciudadanía, designando una Comisión Constituyente que se encargó de estudiar y redactar la Carta Fundamental de 1818, que rigió con perfecta regularidad durante más de tres años. Mientras estuvo en vigencia esa Constitución, su poderosa autoridad legal respetó siempre las atribuciones del Senado, y en 1823 prefirió abandonar el poder a seguir gobernando sin el apoyo de la ciudadanía, cuyas aspiraciones ya no traducía.

Sentido social. O'Higgins tenía claramente, y lo demuestra en múltiples actos y expresiones a lo largo de su vida, un sentimiento igualitario. Creía en la igualdad de los hombres, abominaba de los

privilegios y tenía especial preocupación por los más desvalidos. En el artículo 13 del capítulo sobre "los derechos del hombre en sociedad", de la Constitución Provisional de 1818, se estableció que "el Director Supremo y demás funcionarios del Estado, están esencialmente obligados a aliviar la miseria de los desgraciados y proporcionarles a todos los caminos de la prosperidad".

Es decir, O'Higgins entendía que es función del Estado, como órgano de la sociedad constituida, preocuparse especialmente de la suerte de los más desvalidos, crear condiciones de equidad que abran el camino y las puertas del progreso para todos.

En este campo, merece destacarse especialmente la preocupación de O'Higgins *por la educación y por la salud*.

Estos anhelos, estas inquietudes, este afán institucionalizador, esta vocación de servicio social, la concreta O'Higgins en un cuarto rasgo de su trayectoria política: *una gran voluntad y capacidad realizadora*.

O'Higgins entiende que estos anhelos de progreso y de lo que ahora llamamos "justicia social", no pueden quedarse en expresión de buenos propósitos entregados a la iniciativa de cada cual. Exigen del gobierno acciones concretas para convertirlos en realidad.

Para ello crea escuelas, reabre el Instituto Nacional, funda en 1817 la Academia Militar y en 1818 la Academia de Guardiamarinas, orígenes de nuestras Escuelas Militar y Naval; funda bibliotecas, salas de música; organiza el Museo y el Jardín Botánico; exime de derechos y tasas de correo la circulación de libros y papeles públicos; se preocupa de la salud, crea la Junta de Salubridad, funda hospitales y cementerios; crea mercados; transforma el brazo derecho del Mapocho en la Avenida de las Alamedas; impulsa la construcción del Canal del Maipo para fomentar el regadío y la producción agrícola; promueve la pesca; organiza la Administración Pública y, en especial, la Administración de Justicia; regula las aduanas, los puertos y los pasos cordilleranos, las importaciones y las exportaciones.

Su gobierno es un gobierno realizador, y revela una voluntad indomable en el propósito de cumplir, de traducir en hechos sus propósitos de gobernante.

Finalmente, destaca en la personalidad política de O'Higgins su *visión de futuro*. Esta visión de futuro se expresa en múltiples hechos. El mira no sólo al Chile que está viviendo; entiende que esta patria en formación tiene un desarrollo que ha de integrarse, dentro de un ámbito más amplio. Por eso impulsa la creación de la Primera Escuadra y mira hacia el Pacífico pensando que el porvenir de Chile ha de estar ligado a ese inmenso mar que nos baña. Tiene un sentido americanista. Siente que la revolución de la Independencia en Chile es parte de un proceso que trasciende nuestras fronteras y practica la hermandad con las naciones de Latinoamérica que luchan tras el

mismo objetivo. Concibe una Confederación con Argentina y con Perú, que pueda, en el futuro, consolidada la Independencia, asegurar el progreso para nuestros pueblos.

En el momento postrero de su vida, mira hacia Magallanes. Esa palabra, que se dice que es la última que pronunció, revela cómo en el exilio él siguió pensando en el destino de Chile y revela cómo tenía una visión de futuro. Visualizaba aquel rincón del último sur del país como algo que requería preocupación de parte de la nación, porque estaba ligado al porvenir y crecimiento de la patria.

Le preocupa especialmente la juventud. O'Higgins fue un gobernante joven; su vida pública, que duró sólo doce años, transcurre siendo un hombre joven, en la década de los treinta. A O'Higgins le preocupa la juventud, y tal vez una de las enseñanzas más notables que deja, de los testimonios de esta preocupación, aparte de la creación de las Academias Militar y Naval, fue su empeño en multiplicar escuelas a lo largo del país y la importancia que le atribuyó al Instituto Nacional. O'Higgins acostumbraba visitar el Instituto Nacional, conversaba con los profesores y con los estudiantes, y estableció la costumbre, que se mantuvo posteriormente por algunos años, de asistir personalmente a los exámenes de los alumnos del último curso. Con esto él manifestaba su especial interés por el desarrollo de la juventud.

Vigencia de O'Higgins en las tareas nacionales del presente

Los valores que conforman la personalidad moral de O'Higgins y los ideales y principios que configuran su ideario político, siguen hoy vigentes, tienen plena actualidad. Ellos nos interpelan y deben inspirarnos en el cumplimiento de nuestras grandes tareas nacionales. Hablo de *tareas nacionales*, tareas del país entero. Más allá de un gobierno.

Los gobiernos son transitorios, constituyen etapas en la vida de la nación. La nación es permanente, y hay tareas que trascienden a cada uno y a todos los gobiernos, y que deben inspirar el actuar de gobernantes y gobernados.

Yo diría que en esta etapa del desarrollo nacional, tres son, fundamentalmente, las más grandes tareas nacionales:

Por una parte, *consolidar y perfeccionar nuestra institucionalidad democrática*. Chile tiene una institucionalidad que es fruto de sucesivos acontecimientos históricos. En el fondo, la institucionalidad que nos rige ha sido generada a través de diversos procesos que se suceden en la historia, y que marcan uno de los rasgos característicos de Chile como país: el afán institucionalizador.

Muchas veces hemos dicho que estamos orgullosos de esa característica que ha permitido que nuestro país se distinga de otros de nuestro Continente, por la estabilidad de sus instituciones. Ahora bien, tenemos una institucionalidad democrática; pero, como toda institucionalidad, ésta no sólo debe echar raíces, sino que para que asegure la estabilidad de la sociedad, debe generar en torno a ella el mayor consenso posible. Se trata de las reglas del juego fundamentales de la convivencia colectiva, y habrá paz en esa convivencia en la medida en que esas reglas fundamentales interpreten el sentimiento, la voluntad y las ideas de, si es posible, toda la población del país.

Una institucionalidad será tanto más sólida, tanto más estable y tanto más perfecta, mientras mayor sea el bagaje de voluntades que la respalden. En ese sentido, no cabe duda de que nunca se termina en la tarea de perfeccionar la institucionalidad. No se trata de estar cambiando las reglas constitucionales todos los días, sino de hacer los avances para que esas reglas constitucionales interpreten el mayor consenso posible de toda la población nacional.

No cabe duda de que las reglas actualmente vigentes, por su origen, son en cierto modo el criterio de un sector del país, que no contó en su momento, en su génesis, con un consentimiento colectivo. Hay aspectos que requieren por eso ser reformados, pero las reformas han de hacerse para el futuro. Las normas constitucionales no pueden quedar sujetas a las circunstancias, no son de carácter personal, a gusto del gobernante de turno; han de interpretar anhelos permanentes de la nación, grandes consensos colectivos.

Cuando ahora, por ejemplo, se está buscando en el Congreso llegar a un gran consenso para democratizar el régimen municipal de Chile y el régimen de la administración regional, se está marchando en este sentido: se trata de perfeccionar esta institucionalidad y de hacer que responda más a la unanimidad o a la inmensa mayoría de las voluntades colectivas, y no sólo a determinados sectores.

Una institucionalidad será tanto más sólida, cuanto mayor sea el grado de consenso que genere.

Es tarea, por consiguiente, de nuestra patria, para asegurar la paz, la convivencia colectiva ordenada, una democracia de la cual todos nos sintamos partes, donde todos ejerzamos nuestros derechos y cumplamos nuestros deberes. Ella debe ser perfeccionada para llegar, de esa manera, a proporcionar los instrumentos más eficaces para esos fines de convivencia nacional.

Una segunda gran tarea nacional que tenemos por delante es *derrotar la pobreza*.

Estamos viviendo un mundo en que hay naciones desarrolladas, que tienen un ingreso entre 20 y 30 mil dólares por habitante al año, y naciones en vías de desarrollo que tenemos ingresos inferiores a 2 mil dólares por habitante al año. Chile forma parte de estas últimas.

Es un desafío nacional superar esta pobreza, que afecta al desarrollo y a la paz social, porque —lo que es tremendamente injusto— está muy desigualmente repartida en la población. Mientras hay sectores que viven como en una sociedad desarrollada, hay otros sectores que sufren extremadamente esta pobreza.

Se dice que midiendo en parámetros de capacidad adquisitiva para alimentar una familia, reconocidos universalmente, en Chile un tercio de la población vive en estado de pobreza y no menos de 2 millones en estado de extrema pobreza. Esta es una realidad que constituye un desafío nacional.

Frente a esta realidad, tenemos que promover el crecimiento económico y la justicia social. Se trata de un esfuerzo colectivo que recae sobre la sociedad entera, cuyo motor fundamental es la iniciativa privada, el trabajo de cada cual, la capacidad de las personas de, con su esfuerzo, crear riqueza y construir un bienestar mayor para sí, para sus familias, para la sociedad.

Pero se trata, también, de una tarea en que el Estado no sólo debe fijar las reglas fundamentales, sino que tiene que suplir esa iniciativa privada en donde quiera sea necesario para impulsar ese crecimiento, y tiene que adoptar las medidas adecuadas para que ese crecimiento sea con equidad, sea con justicia social, para que el desarrollo del país sea armónico y se superen los problemas de agudas diferencias, que son factores de inestabilidad y de peligro para la paz social.

Finalmente, tenemos la tarea de *preparar a Chile para asumir los desafíos del siglo XXI*. Estamos viviendo en una sociedad cambiante. Las naciones cada día cuentan menos como individualidades y, sin perjuicio de la personalidad y de la necesidad de preocuparse del desarrollo individual de cada nación, se producen grandes aglomeraciones de naciones. La Comunidad Europea, lo que ocurre en Norteamérica, entre Estados Unidos y Canadá y probablemente México, lo que ocurre en sectores del Asia, nos muestra esta tendencia de grandes aglomeraciones de naciones que encaran el futuro sobre la base de complementar sus economías y su vida colectiva, en múltiples aspectos.

Chile pertenece al Continente Latinoamericano, y como tal tiene que integrarse dentro de esta realidad, porque en esta sociedad del próximo milenio, una nación de 13 millones de habitantes, sola encarando al mundo, se encuentra en situación absolutamente desmedrada.

El desafío del futuro nos exige hacer un gran esfuerzo por poner en máximo rendimiento los potenciales fundamentales de nuestra nación. Uno de esos potenciales es la inteligencia. Chile, en los últimos años, ha experimentado un progreso económico del que todos estamos satisfechos. Pero no nos podemos contentar con lo hasta aquí logrado. Se ha logrado, con la apertura de nuestra econo-

mía, abrir la capacidad exportadora del país, multiplicando varias veces lo que hasta hace pocos años exportábamos. Tenemos que proseguir en ese crecimiento.

Pero también tenemos que incorporar cada vez mayor valor agregado, mayor técnica, mayor ciencia, mayor inteligencia, a nuestros productos de exportación. Los países exportadores de materias primas pasan en la sociedad moderna a ser los parientes pobres. Tenemos capacidad, y uno de los motivos por el cual uno siente satisfacción es ver cómo, en los distintos ámbitos del quehacer nacional, chilenos se distinguen por su inteligencia, por su capacidad, por su preparación científica, por su eficiencia.

Esto es motivo de orgullo nacional: la eficiencia de nuestras instituciones; de nuestras instituciones políticas; en el pasado, de nuestras instituciones educacionales, a las cuales debemos volver a colocar en el pie de eficiencia del que nunca debieron caer; de nuestras Instituciones Armadas y de Orden, que se han caracterizado a lo largo de su historia por su eficiencia; de nuestra capacidad creadora en el campo científico y artístico. Todo esto es un imperativo de la nación: buscar el máximo desarrollo para enfrentar los desafíos del siglo XXI, y mirar hacia el Pacífico, y mirar hacia la Antártica, en fin, enfrentar el mundo que viene, no con los criterios de un pasado que ya quedó atrás, sino como lo hacía O'Higgins, mirando siempre hacia el futuro.

Termino estas reflexiones señalando, ante los hombres de armas de mi patria, que la etapa histórica que estamos viviendo hace más que nunca necesario cultivar en nuestros corazones y en nuestra voluntad, los valores morales y los principios y criterios que constituyeron el ideario político del Libertador O'Higgins. Ellos permanecen vivos y nos marcan rumbos para trabajar por nuestro país, siempre tratando de superar las diferencias, con ánimo de fraternidad nacional, en el espíritu de construir con el esfuerzo y colaboración de todos, cada uno en su papel, sobre la base de respetar los valores que se han hecho carne en nuestra historia: el respeto a la libertad, la vocación por la justicia, el anhelo de tener una patria cada vez más grande y más buena. Esos valores deben inspirarnos a todos.

Y en la medida en que actuemos conforme a esos valores, yo estoy cierto de que avizoraremos el siglo que viene con un Chile cada vez más unido, cada vez más fuerte, cada vez más próspero, en paz, con la conciencia tranquila, y viviendo en su seno una verdadera fraternidad.

Muchas gracias.

En ceremonia inaugural de la Convención de Magistrados Judiciales

Pucón, 30 de marzo de 1990

Es para mí feliz coincidencia y motivo de satisfacción que una de mis primeras actuaciones públicas en el ejercicio de las tareas que el pueblo me ha confiado, sea en esta Convención de Magistrados Judiciales. Saben ustedes, y deben saberlo todos mis compatriotas, que mi vocación fundamental es la justicia. El objetivo primordial de mi gobierno será procurar el logro de la justicia en los diversos ámbitos de la vida nacional.

La justicia y el derecho han formado parte de mi vida desde mi niñez. Junto a mi padre, magistrado judicial; durante mi juventud, como estudiante de leyes; cuando, ya recibido de abogado, enseñé en el Instituto Nacional y en las Escuelas de Derecho de las Universidades de Chile y Católica; como profesional, aplicando el derecho y luchando por la justicia; siendo senador, legislando; como político, respetando y velando por su perfeccionamiento; y hoy, Presidente de la República, haciendo honor a mi juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, y procurando que la justicia llegue a todos mis conciudadanos, con prestigio, confianza y eficacia.

Es ésta una buena oportunidad para que reflexionemos juntos, gobernantes, jueces y abogados, sobre lo que Chile tiene derecho a esperar en el ámbito de la administración de justicia, en esta nueva etapa de la vida nacional.

Gracias, señor Presidente, por vuestra invitación a participar en este acto. Gracias, señores magistrados, por vuestra decisión —testimoniada en este encuentro— de asumir vuestra responsabilidad de reflexionar en serio sobre la forma de mejorar la justicia en Chile.

Nadie puede objetivamente negar que la administración de jus-

ticia experimenta una grave crisis. Encuestas de opinión pública y estudios científicos, la opinión corriente del ciudadano común y el análisis del propio Presidente de la Excma. Corte Suprema en su última cuenta, coinciden en señalar las graves deficiencias que aquejan a nuestro sistema judicial: faltan tribunales, éstos carecen de medios adecuados; los juicios demoran demasiado y, en el ámbito penal, muchas veces son inútiles; mucha gente no tiene posibilidad de acceso a la justicia y muchos juzgan ocioso recurrir a ella; y, por sobre todo, la ciudadanía opina que la judicatura no actúa como un Poder del Estado realmente independiente. Se la ve más bien como un mero servicio público que "administra justicia" en forma más o menos rutinaria, demasiado apegada a la letra de la ley y a menudo dócil a las influencias del poder.

Esta crítica adquiere especial relevancia en lo que respecta a las causas en que tenía algún interés el régimen anterior, sobre todo en materia de derechos humanos. La opinión pública piensa —y yo comparto ese juicio— que en la gran mayoría de los casos nuestros tribunales no hicieron suficiente uso de las atribuciones que la Constitución y las leyes les confieren para proteger los derechos fundamentales de las personas, lo que constituye su más trascendental tarea.

Estos hechos que han deteriorado gravemente la confianza colectiva en el sistema judicial chileno, en gran medida corresponden a la circunstancia de haber vivido la judicatura, como el país entero, inserto en un régimen político autoritario ajeno a los principios básicos del Estado de Derecho, que es el medio natural donde debe desempeñarse. El restablecimiento de la democracia debe ser la oportunidad para afrontar la crisis y superarla, mediante las modificaciones constitucionales y legales y la renovación de la judicatura que la conciencia nacional reclama.

Mi gobierno tiene la firme decisión, que constituye un compromiso nuestro con el pueblo de Chile, de afrontar derechamente y a fondo este problema, en el ánimo de elevar la judicatura a su más alto nivel, procurando que su institucionalidad le confiera el carácter de efectivo Poder Público, realmente independiente, y abordar para ello una reforma integral, tanto orgánica como procesal, que la convierta en un instrumento eficaz para realizar la justicia en la convivencia social. Es un proyecto ambicioso que procuraremos ir realizando gradualmente.

Conozco las enormes dificultades del trabajo de jueces y magistrados, especialmente de aquellos de los lugares más apartados: exceso de causas, instalaciones pobres, carencia de medios tecnológicos y de acceso a una bibliografía mínima. Sé, también, que la gran mayoría de ustedes hace esfuerzos dignos del mayor elogio por servir al pueblo con una pronta y cumplida administración de justicia.

La escasez de medios con que cuenta el gobierno, especialmente en este año 1990, en que hemos recibido un presupuesto congelado, comprometido hasta el 31 de diciembre próximo, sin provisión para reajustes, hace que la inversión de mayores fondos sea necesariamente limitada y paulatina, tanto en aumento de remuneraciones como de adquisiciones materiales. Sin embargo, comprometeremos esfuerzos para cooperar con los órganos judiciales competentes en busca de la mayor racionalización administrativa, procurando incorporar los métodos más adecuados y modernos para el mejor uso de los medios de que actualmente dispone.

Queremos, por otra parte, alcanzar una efectiva carrera judicial, que respete plenamente la dignidad de los magistrados. Propondremos cambios legislativos para que los sistemas de nombramientos, ascensos y calificaciones sean lo suficientemente objetivos, transparentes y competitivos, para garantizar que sólo criterios de eficiencia e idoneidad funcionaria sean relevantes para el ingreso y ascenso en la carrera. Nos comprometemos a sujetarnos exclusivamente a ellos a la hora de escoger entre las ternas y quinas, en tanto no se modifiquen la Constitución y las leyes. Aspiro a que no sea jamás necesario pedir audiencia al ministro, al subsecretario o a otros funcionarios para exponer los méritos. Ellos se encuentran en las calificaciones, en la hoja de servicios y en la independencia y presunción con que se ha desempeñado el cargo. Les ruego tener confianza en que así procederemos.

Perdónenme que, saliendo del texto, haga una referencia que tiene para mí un profundo valor. Mi padre fue juez, como la mayoría de ustedes; era un hombre "tieso de espinazo" y se negaba a ir a hacer antesala ante sus superiores para ser colocado en las ternas o quinas correspondientes. Eso le valió algunas postergaciones, pero, en definitiva, el gran reconocimiento de todos sus colegas en la magistratura y de todos los abogados, que lo sabían muy independiente.

Y siendo el superior, él tenía un sistema que llamaba "mis pragmáticas". Iba apreciando los merecimientos de cada funcionario a medida que cumplía su tarea, conociendo apelaciones o recursos, y verificando la certeza de las sentencias. Sobre esa base, y la antigüedad, él iba decidiendo a quién correspondería ascender.

Esto se lo vi hacer más de alguna vez; escuché elogios de algunos magistrados que sufrieron esta experiencia. Llegaron a hablar con él: "Ministro, vengo a pedirle mi voto", y él contestaba: "Mire, no se rebaje viniendo a pedirme el voto. Yo lo tengo a usted, según mis pragmáticas, en tercer lugar. Aunque haya nombrado a dos que están antes que usted, voy a votar por usted".

He oído a los magistrados que recibieron esa respuesta de su parte, que le reconocían su franqueza y se la agradecían.

Ojalá pudiéramos practicar ese sistema. Por lo que hace al Ejecutivo, durante estos cuatro años procuraré ceñirme estrictamente a ese criterio que mi padre me enseñó.

Al mismo tiempo, quiero solicitar, en esta oportunidad, de las autoridades judiciales, que procuren emplear estos criterios para el permanente perfeccionamiento de la justicia que la comunidad reclama. El sistema de cooptación puede llevar a la formación de castas judiciales y hasta al nepotismo, lo que daña gravemente la autoridad y prestigio de la judicatura. Calificaciones públicas y fundadas, efectuadas por el superior jerárquico inmediato con reposición o apelación, según los casos, harán que el juez se sienta amparado en su independencia, protegido en su carrera y con la seguridad de que el progreso en la misma estará condicionado por el mérito de su ejercicio y no por otros factores.

Permítanme algunas palabras sobre la libertad del juez y la responsabilidad que ella entraña. El país está convencido de que los jueces se han limitado a ser meros aplicadores de la ley. Lo cierto es que, si bien la ley enmarca su decisión, no la determina necesariamente. Sus creencias, valores, prejuicios y opiniones juegan un papel innegable en los fallos. Los jueces tienen un ámbito importante en la interpretación del derecho y su criterio es decisivo en el ejercicio de las atribuciones que la ley les confiere.

El valor de la jurisprudencia como instrumento de creación del derecho, sobre la base de la interpretación actualizada de la ley, para sus fines de justicia y bien común, es un factor que debe ser fundamental en la administración de justicia.

Por consiguiente, la protección de los derechos humanos y el logro de los demás fines del derecho —seguridad y justicia— dejan de ser exclusivamente un problema del legislador y pasan a ser también responsabilidad judicial. Si la ley no determina la solución judicial, sino la enmarca, cada juez está obligado a conocerse muy bien, a fin de reconocer los valores y prejuicios que puedan incidir en sus decisiones. Los fallos deben convencer a los destinatarios, ser transparentes. Para ello es necesario dictar resoluciones debidamente razonadas. Existe la imperiosa necesidad de que los jueces funden las sentencias y expongan abierta y decididamente las normas, principios, reglas y argumentos, legales y de equidad, que los lleven a una determinada convicción respecto de un caso.

El abuso que las partes hacen de los recursos extraordinarios, como la queja, hace necesaria una reforma en nuestro sistema judicial. No puede ocurrir que la Corte Suprema se haya transformado en una especie de tribunal de tercera instancia por la vía de la queja. Y en el último año, según la cuenta del señor Presidente, mientras la Corte Suprema falla poco más de quinientos recursos de casación, falla arriba de dos mil recursos de queja. Esto no estuvo

jamás en la mente de don Manuel Egidio Ballesteros ni de los demás redactores del Código Orgánico de Tribunales, ni de nuestras leyes procesales.

El abuso de estos recursos, y la leve fundamentación que las sentencias hacen sobre ellos, han desvirtuado la función jurisdiccional. La fundamentación jurídica y racional de la sentencia es el modo en que el juez rinde cuenta del encargo que la sociedad le hace de administrar justicia. La crítica pública pasa a ser legítima y debe ser escuchada por los jueces.

Permítanme decirles que, en mi concepto, la independencia del Poder Judicial reside no sólo en las normas orgánicas que la garantizan, ni tampoco únicamente en la disposición subjetiva del magistrado de creerse o sentirse independiente. Exige ambas cosas y algo más: la firme voluntad del magistrado de descubrir a toda costa la verdad y de ser justo, protegiéndose con recia coraza de toda clase de influencias y presiones, aun las de sus propios prejuicios y visiones globales sobre la sociedad y el diario acontecer. Esto les exige, constantemente, compenetrarse de la realidad del mundo contemporáneo y, muy especialmente, del que viven las personas que a él recurren. De otro modo corren el riesgo de hacer justicia de escritorio, ajena a la realidad de la vida. Y les exige, a la vez, saber colocarse por encima de las pasiones y tendencias propias de la condición humana.

Pasemos de lo personal a lo institucional.

Estamos de acuerdo en que, siendo el régimen político democrático el mejor sistema ideado por el hombre para resolver pacíficamente el conflicto político y social, el Estado de Derecho es un pilar básico de la democracia. Pero también, sin una justicia independiente no existe Estado de Derecho.

Aspiramos a proponer una reforma constitucional que transforme al servicio público judicial en un auténtico Poder del Estado, el Poder Judicial. Para ello se requieren autonomía organizacional e independencia financiera. Pensamos que la creación de un Consejo Nacional de la Justicia, además de resaltar la importancia y significación de la judicatura, favorecerá su independencia y su mayor eficacia.

Sé que este tema será objeto de un importante debate en esta Convención. Estamos abiertos a recibir opiniones y sugerencias que, desde ya, valoramos.

El Consejo Nacional de la Justicia debe entenderse como un órgano integrante del Poder Judicial, que asumirá exclusivamente funciones no jurisdiccionales, quedando estas últimas reservadas a los tribunales establecidos por la ley. Dentro de estas funciones no jurisdiccionales estarían la orientación de la política judicial; la administración del presupuesto globalmente asignado al Poder Judicial;

su intervención, mediante propuesta pluripersonal, en la designación de ministros, fiscales y abogados integrantes de la Corte Suprema; la tutela y dirección de los órganos auxiliares de la administración de justicia, tales como Policía Judicial, Laboratorio Criminalístico, Instituto de Peritajes, Servicio Médico Legal, etc.; la tutela y dependencia directa del sistema carcelario; la tutela y dirección de una Escuela Judicial; la tutela y dirección del servicio de asistencia jurídica.

El Consejo Nacional de la Justicia estaría integrado por representantes de los Tribunales, del Presidente de la República y del Congreso Nacional, de las Facultades de Derecho y de los abogados, y sería presidido por el Presidente de la Corte Suprema. Este organismo daría al Poder Judicial plena independencia de los otros poderes del Estado y, también, permitiría evitar los defectos de la actual organización; lograría aumentar la eficiencia de la actividad jurisdiccional, adscribiendo a ella servicios fundamentales; procuraría un cabal perfeccionamiento de los jueces; mantendría a jueces y magistrados dentro de su actividad jurisdiccional propia, liberándolos de los quehaceres administrativos y económicos; aseguraría su independencia y despolitización, de manera que sean sólo criterios de excelencia los que determinen las políticas generales, designaciones, etc. Con la creación del Consejo Nacional de la Justicia, queremos, en suma, fortalecer la independencia y jerarquía del Poder Judicial.

Creemos también muy importante impulsar las reformas necesarias para hacer realidad la aspiración, tan compartida entre jueces y abogados, de crear una Escuela Judicial, destinada a preparar a los abogados y auxiliares de la administración de justicia que tengan vocación para ingresar a la noble carrera judicial, y a perfeccionar a los jueces en funciones, antecedente importante para los ascensos. La experiencia en actividades de capacitación y perfeccionamiento llevadas a cabo por el Instituto de Estudios Judiciales y diversos centros académicos del país, constituirá la base de la Escuela Judicial. En ella deben tener prioridad las cuestiones doctrinales y prácticas, para así fortalecer el sentido de responsabilidad ética y social de tan delicada misión, y preparar y compartir las destrezas y habilidades propias de la función judicial. Para hacer efectivo el fin propuesto será necesario modificar la Constitución en cuanto a las normas de ingreso al Poder Judicial y a la promoción por la vía del ascenso.

En otro orden de ideas, hemos incluido en los proyectos de ley que penden de la consideración del Congreso Nacional, algunas reformas que precisan la competencia de los Tribunales Militares, restituyéndola a su función propia: juzgar delitos militares; para dar mayor amplitud a los jueces en el ejercicio de su facultad de

conceder la libertad provisional y de decidir sobre el valor de las confesiones; para racionalizar procedimientos y penas, de manera que los ciudadanos vean un proceso debido justo, racional, conocido por tribunales independientes, que prestigien a la judicatura y contribuyan a recobrar la confianza en ella.

En otro plano, deberemos remitir al Congreso Nacional reformas de carácter procesal y orgánico, que permitan afrontar situaciones de urgencia, que procuren acelerar el ritmo judicial y mejorar la calidad del Servicio, extendiendo la función jurisdiccional a los sectores más desvalidos de la población; creando juzgados vecinales de paz y optimizando el servicio de asistencia judicial. En la elaboración de estos proyectos, deberemos evaluar las reformas introducidas últimamente, para seguir avanzando hacia una justicia expedita al alcance de todos.

Valorizo enormemente el aporte que los magistrados pueden hacer para ahondar en el diagnóstico de estos problemas y sus posibles soluciones, y les pido encarecidamente su ayuda. Ustedes conocen mejor que nadie cuáles son las fallas, dónde están, cuáles son los resultados de las experiencias hechas hasta ahora y cuáles las posibilidades de mejoramiento. Escucharemos con especial interés sus opiniones, que desde luego les agradezco.

No podría concluir sin expresar mi reconocimiento a la Asociación Nacional de Magistrados Judiciales y al Instituto de Estudios Judiciales, que han promovido el desarrollo y perfeccionamiento de la judicatura, dándoles oportunidad a los propios jueces de avanzar en su progreso personal y profesional.

Es cierto que hay una crisis de la Justicia en Chile y una pérdida de confianza colectiva a su respecto. Pero también es cierto que existen en el Poder Judicial personas preparadas, eficientes, probas, que, a pesar de las limitaciones que sufren, se sienten responsables de superar los actuales signos de la crisis y cumplir, lo mejor posible, con la alta misión de impartir justicia que el pueblo ha depositado en sus manos. Son la base fundamental para la renovación y las reformas que efectuaremos. Confío en ellos, confío en ustedes, y me siento optimista. Con alegría, con pasión, lleno de recuerdos y de esperanzas, los invito a participar, en el importante campo que les compete, en la hermosa tarea de construir un Chile en que siempre haya justicia para todos.

En acto de la creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas

Santiago, 17 de mayo de 1990

Estimados representantes de las organizaciones indígenas de Chile, estimados amigos:

Este es un día de hondo significado: los dirigentes más representativos de los pueblos originarios de Chile se reúnen en el Palacio de La Moneda junto al Presidente de la República en un ambiente de respeto, consideración, y voluntad por cambiar y superar las difíciles condiciones de vida que viven estos pueblos.

Durante la campaña electoral realizamos un especial esfuerzo de incorporación de la temática de los pueblos indígenas en el Programa de Gobierno. Fue así que el día 12 de octubre de 1989 entregué a consideración de las organizaciones indígenas del país una propuesta programática que había elaborado la Concertación de Partidos por la Democracia, acogiendo las demandas que las mismas organizaciones nos hicieron llegar. Esa propuesta fue discutida ampliamente, a lo largo del país, y en una reunión realizada en Nueva Imperial con dirigentes de los distintos pueblos indígenas del país, ustedes me hicieron ver sus puntos de vista. Allí nos comprometimos mutuamente a poner en marcha estas ideas programáticas.

La primera medida con que nos comprometimos fue la creación de una Comisión Especial de Pueblos Indígenas. Hoy damos cumplimiento a este acuerdo que firmamos en Nueva Imperial durante la campaña.

Esta Comisión tiene un Consejo formado por veinte personas, de las cuales diez han sido elegidas por las organizaciones que ustedes representan. Ha sido un proceso democrático muchas veces

difícil, pero de gran trascendencia. Quizá por primera vez son las propias organizaciones indígenas las llamadas por el gobierno a elegir sus representantes en un organismo gubernamental.

La responsabilidad de los dirigentes seleccionados es muy grande. El gobierno, al crear esta Comisión, abre un espacio para hacer posible la participación de los pueblos indígenas en el estudio de las políticas que les afectan o interesan. Se ha invitado a sus dirigentes a llenar ese espacio. Las bases mirarán y observarán a sus dirigentes. Estarán pendientes de su accionar, deberán velar para que cumplan adecuadamente con su deber.

Quisiera señalar con claridad que el gobierno no pretende instrumentalizar al movimiento indígena, ni construir un movimiento progubernamental o de corte oficialista, como lamentablemente ha solido ocurrir. Es muy importante que se salvaguarde la autonomía de los movimientos indígenas. Pero tampoco quisiéramos que se formara una élite de dirigentes indígenas alejada de sus bases. Queremos que los dirigentes que participan en esta Comisión sean portavoces del sentir de sus pueblos.

Esta Comisión tiene numerosas tareas que enfrentar. Quisiera señalar sólo algunas de las que me parecen más prioritarias.

La nueva legislación indígena es parte del programa de gobierno y, por tanto, creemos que se ubica en un nivel alto de prioridad. La Comisión tendrá a su cargo el proponernos un anteproyecto. Ese cuerpo legal deberá ir al Congreso Nacional en la Legislatura Extraordinaria de fines de este año, de modo que la ley pueda operar a partir del próximo.

Esa ley deberá considerar una serie de materias que están planteadas en el Programa y que son de gran importancia. En primer lugar, el reconocimiento de los pueblos indígenas como parte de la diversidad de la sociedad chilena. Un país moderno debe reconocer las diversas culturas que hay en su interior. La existencia de diversas culturas enriquece a la sociedad, a la nación, a la cultura nacional. La nueva ley debe salvaguardar a estos pueblos, que son los pueblos primigenios de Chile. Debe ser una ley que fomente el desarrollo armónico y equilibrado de estos pueblos y que no propugne la asimilación, el arrasamiento de su cultura.

La dictación de una ley que reconozca formalmente la presencia de pueblos indígenas en la sociedad chilena, será la base para plantear una perspectiva diferente de desarrollo, de mejoramiento de la calidad de vida y porvenir para ellos. Esto sin perjuicio de la necesidad del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que es también una aspiración sentida de ustedes, así como del gobierno que presido.

En el marco de esta nueva Ley Indígena, se deberá crear una instancia estatal definitiva dedicada a los asuntos de los pueblos

indígenas. Esta será la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. La Comisión que hoy día constituimos durará en sus funciones hasta que se dicte la nueva Ley Indígena y se forme esta Corporación.

Las áreas indígenas por lo general viven en la extrema pobreza. Seguramente no será posible realizar de inmediato todos los programas que se quisiera. Sin embargo, se han estado trabajando en conjunto con el Ministerio de Agricultura algunos programas inmediatos. La Comisión tendrá que coordinar con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social y los servicios pertinentes, los programas que se realizarán.

Creemos también de gran importancia la regularización de títulos de dominio sobre tierras y aguas en las comunidades indígenas. Para ello tiene una especial importancia la acción del Ministerio de Bienes Nacionales. Durante este año se deberá comenzar el trabajo de estudios y titulaciones de numerosas áreas indígenas, donde existen litigios y situaciones no resueltas, especialmente en el Norte Grande y en las áreas de cordillera en el sur.

Otra tarea de gran importancia dice relación con la educación y la cultura indígena. Es sabido que la educación en las áreas indígenas es muy deficiente e inadecuada. Se obliga a los niños a estudiar textos escolares diseñados para los niños de grandes ciudades. No se respeta en esos programas de estudio su cultura, su idioma, su idiosincrasia. Esta Comisión, en conjunto con el Ministerio de Educación, deberá abocarse a proponer un tipo de educación más apropiada, en muchos casos bilingüe, y sobre todo con respeto a la realidad cultural de los estudiantes.

Días atrás, al comenzar mi gobierno, el Ministro de Agricultura aquí presente, dictó el decreto que suprimía el corte de la araucaria de Chile, declarándola Monumento Nacional. Este hecho simbólico muestra la disposición del gobierno que presido en el ámbito de la preservación, tanto de recursos naturales como también del hábitat en que viven los pueblos indígenas, en este caso los pehuenches.

Hoy día, junto con firmar el decreto de creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, quisiera también anunciar que hemos resuelto, junto al Ministro de Agricultura, la suspensión de los trámites de división de las comunidades indígenas por parte del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Este organismo no tomará la iniciativa en procesos de división que estén pendientes. Por supuesto que acogerá peticiones de la mayoría acreditada de una comunidad que quiera proceder a dividirse. Aunque sabemos que la mayoría de las comunidades fue dividida en el gobierno pasado, hay algunas que se han resistido y que deben tener el derecho a mantenerse indivisas.

Estimados amigos:

La recuperación democrática de Chile tiene un particular desafío para con los pueblos indígenas del país. Ese desafío consiste en asegurar que en democracia exista un espacio para ustedes, aymaras, rapa nui y mapuches, para sus comunidades y personas que las integran.

Nuestra aspiración es lograr para los pueblos indígenas de Chile y los demás sectores que componen la comunidad nacional, la patria justa y buena que esperamos para todos los chilenos.

Gracias.

En ceremonia de clausura de las Séptimas Jornadas de Regionalización

Valparaíso, 1º de julio de 1990

Amigas y amigos:

Quisiera partir expresando un homenaje a las instituciones que han patrocinado este encuentro, que con perseverancia, a lo largo de varios años, vienen abriendo camino a la idea de la regionalización y la descentralización. Y quiero hacer extensivo este homenaje a alguien a quien probablemente la mayoría de los presentes no haya conocido, y aun ignore de su existencia, pero que fue en nuestro país uno de los pioneros de la lucha por la descentralización; y lo fue, especialmente, en esta Región y en la ciudad de Valparaíso. Me refiero a don Gastón Ossa Saint Marie.

Hará cuarenta años, si no más, cuando en mis clases de Derecho Administrativo yo trataba el tema de la descentralización, encontraba los trabajos realizados por don Gastón Ossa, que era una especie de Quijote de la idea descentralizadora y de la defensa de Valparaíso, y que patrocinó, en aquellos años, encuentros semejantes a éste.

Creo que estos encuentros tienen gran importancia, porque van logrando que en la opinión pública nacional, en el sentir y en el pensar de la gente, se haga conciencia sobre la importancia de este tema. Dice un viejo adagio chino que "la acción sigue al pensamiento como la rueda de la carreta a la pezuña del buey". Es en la formulación de ideas, su desarrollo, su enriquecimiento, su divulgación, como la humanidad va abriendo camino a nuevos derroteros, que luego empiezan a transformarse de ideas y aspiraciones en iniciativas concretas y en acciones efectivas para convertir esas ideas en realidad.

Esta idea de la regionalización, que es parte de una matriz más

genérica de la descentralización, ha hecho un largo recorrido en nuestra patria. Chile, desde la Colonia y también en la etapa independiente, ha tenido un régimen fuertemente centralizado. En cierto modo, durante la etapa de la Independencia la influencia de las ideas políticas y jurídicas francesas —país que se caracterizó en Europa por su fuerte centralismo, consagrado en la época napoleónica— Chile desarrolló un sistema político, económico y cultural fuertemente centralizado.

La aspiración descentralizadora no es una aparición repentina de los últimos años. Recordemos que en la Constitución de 1925 se expresa como una aspiración programática, formulada de modo repetido; por una parte, se programa la creación de Asambleas Provinciales, con la mira de encomendar a ellas la administración de las provincias; y, por otra, se expresa la voluntad de ir transfiriendo, progresivamente, atribuciones del Poder Central a órganos de administración provincial o comunal.

Esas aspiraciones programáticas, lamentablemente quedaron solamente en eso, en el terreno de la institucionalidad jurídica; durante muchos años no lograron plasmar, pero sin duda en la conciencia de los chilenos fueron haciendo camino y los esfuerzos de ese pionero a quien antes me referí, don Gastón Ossa, se insertan en ese trabajo.

La creación de la Corporación de Fomento de la Producción en 1939 marcó, sin duda, un hito en la manera de enfocar el desarrollo nacional. Porque, si bien la Corporación era un ente nacional centralizado, los programas que concibió y puso en práctica para impulsar el desarrollo del país, en el campo de la electrificación, del acero, del petróleo, de la minería, fueron, indudablemente, esfuerzos que se tradujeron en una valorización del significado de las regiones y un impulso al desarrollo de algunos sectores del territorio chileno.

Luego, entre los años 1965 y 1967, la creación de la Oficina de Planificación Nacional y de las Oficinas de Planificación Regional, significaron un nuevo avance en la materia. Por primera vez se reconoció expresamente la necesidad de que en las distintas regiones del país hubiera organismos de estudio que, en contacto con las autoridades respectivas, canalizaran los esfuerzos para ir impulsando el desarrollo de las respectivas regiones.

Luego, bajo el régimen pasado, se dieron nuevos avances importantes en este terreno. Desde luego se produjo la institucionalización de las regiones, que se incorporaron como tal al sistema constitucional chileno. La creación de los Consejos de Desarrollo Regional importó un paso importante para avanzar en esta idea. La creación del Fondo de Desarrollo Regional fue el complemento también decisivo en este sentido.

Es evidente que desde el viejo centralismo chileno hasta la etapa

en que vivimos se ha hecho un camino importante, que sería erróneo desconocer. Se ha avanzado en la institucionalidad jurídica con normas que pueden merecer, y personalmente me merecen, en varios aspectos, reparos como insuficientes o no expresivas de un proceso real de descentralización, pero que han importado todo un avance. El hecho de que hoy día ustedes clausuren una Séptima Jornada de Regionalización, con concurrencia numerosa venida de todo el país, es expresión de que la idea ha madurado, tiene sus seguidores, está encarnando en la conciencia nacional.

Hoy quiero expresar del modo más categórico que mi gobierno es decidido partidario del proceso de regionalización del país, como parte de la tarea descentralizadora, más aún entiendo que la descentralización es una de las formas concretas de realizar uno de los compromisos de mi gobierno con Chile, como es la democratización de nuestra sociedad.

Creo que cuando hablamos de regionalización y de descentralización, nos estamos refiriendo a mecanismos destinados a hacer más real la democracia en todas las instancias de la vida nacional, desde la base local en la comuna, hasta la organización nacional del país, pasando por las instancias de las provincias y de las regiones.

Descentralizar significa ampliar a un mayor número de gente la capacidad de decisión sobre los problemas que le afectan. En un sistema centralizado, el poder de decisión radica en la autoridad central y mientras más autoritario es un sistema, más centralizado es. El absolutismo radical, encarnado en la frase de Luis XIV, "el Estado soy yo", es la expresión de un sistema, al mismo tiempo autoritario, centralizado y, por lo mismo, no democrático.

Si entendemos por democracia, según la definición de Lincoln, "el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo", el pueblo gobierna participando en las decisiones a nivel nacional, a través de plebiscitos, a través de la generación de las autoridades; en las decisiones en los distintos niveles —regionales, provinciales y locales— a través de la generación de autoridades, pero también a través de la participación, del esfuerzo, de la creatividad, del aporte de ideas, del trabajo creador para ir solucionando los problemas.

Y como la vida humana está necesariamente ligada al entorno en que se realiza, y ese entorno parte siendo pequeño, es en el entorno del barrio, de la población, de la aldea; luego de la ciudad y de la provincia, y finalmente de la nación, donde la gente encuentra la posibilidad de participar en los temas que le interesan, no sólo con sus demandas, sino con el aporte constructivo de sus sugerencias y de su esfuerzo. Tal es una manera efectiva de ir democratizando la sociedad.

Quiero expresar, dentro de este predicamento, que hago míos, y respaldo plenamente, los planteamientos que ustedes han oído en

el curso de este encuentro, al ministro director de Odeplan, Sergio Molina, y al subsecretario de Desarrollo Regional, Gonzalo Martner.

A esta altura del proceso, en Chile tres aspectos pueden considerarse fundamentales en la tarea descentralizadora. Por una parte, el aspecto institucional. Se trata de ir creando, a través de la Constitución, de las leyes, de los reglamentos, una institucionalidad participativa que ofrezca realmente opciones reales a las comunidades locales, provinciales, regionales, para participar efectivamente en las decisiones que les atañen.

Creo que en ese aspecto no basta con dictar leyes, no basta con construir esquemas más o menos teóricos. Hay que ir generando esta nueva institucionalidad en forma reflexiva, intentando que esas leyes que en definitiva se dicten sean la expresión del máximo consenso posible. No se trata de imponer fórmulas de laboratorio, porque en esa materia nos encontraríamos con muchas, sino de ir estructurando fórmulas que constituyan el fruto último de una maduración razonable y muy participativa.

Se han expresado aquí temores en orden a que determinadas reformas destinadas a impulsar la descentralización y la democratización en el ámbito municipal conduzcan a una politización de la administración comunal. Por mi parte, pienso que el fenómeno de descentralización requiere una participación en los ámbitos fundamentales, lo que implica la necesidad de adecuar o encontrar una justa ecuación para que concurren la participación política, que señala criterios generales de organización en la marcha de la sociedad, con la participación económica y social, que expresa intereses que deben, naturalmente, ser tomados en cuenta.

El otro plano que debe ser tomado en cuenta en el proceso de descentralización, junto con la participación, es el económico. Se trata de que, de algún modo, las posibilidades de desarrollo de las distintas comunas, provincias, regiones del país, no se queden en simples aspiraciones, sino que puedan convertirse en realidad, porque cuenten con los recursos necesarios para ello.

En el plano teórico, hay quienes aspiran a que lo que cada región produce quede en la región. Pero es indudable que eso no podría permitir un desarrollo armónico de la nación como unidad y conduciría a graves injusticias. Las regiones más pobres estarían condenadas a vivir y morir en su pobreza, y las más ricas tendrían posibilidades de esplendor que generarían graves desigualdades, corrientes migratorias y problemas de distinta índole en el seno del país.

Nuestro propósito es ir a un incremento gradual, realista, en la medida de nuestras posibilidades, del Fondo de Desarrollo Regional. Buscar los criterios más ecuánimes, teniendo en cuenta las necesidades y posibilidades de desarrollo de cada región para la asignación

de esos recursos. Impulsar programas del Fondo de Solidaridad Social para ir en ayuda de aquellos sectores territoriales del país más deficitarios, para darles un impulso que nos permita ponerlos más a tono con el resto del país.

En esta materia de la asignación de recursos, sin embargo, no debe pensarse sólo en aquellos del sector público. Es muy importante la manera en que se asignan o distribuyen, dentro de una economía abierta como es la nuestra actualmente, los recursos del sector privado.

Han escuchado ustedes, y todos están informados, los antecedentes expuestos por el señor ministro director de Odeplan, acerca de los proyectos de inversión del sector privado en nuestro país para los próximos años, que son halagadores, que nos permiten mirar con optimismo el futuro y que, en su enorme mayoría, el 88 por ciento, están destinados a materializarse en regiones y no en Santiago. Los proyectos de la minería, en el ámbito pesquero, en la industria forestal; los proyectos del desarrollo frutícola y otros aspectos de nuestra agricultura son, por su propia naturaleza, descentralizadores, porque se radicarán en distintas regiones del país.

En consonancia con eso, los programas de infraestructura que mi gobierno deberá llevar a cabo para hacer posible este crecimiento de nuestra economía de una manera eficaz, tenderán a solucionar graves cuellos de botella actualmente existentes o casi inminentes a corto plazo. Así ocurre en vialidad, en puertos, en las obras de regadío, indispensables para seguir impulsando el desarrollo agropecuario nacional. Son proyectos que también van a centrarse en las regiones y no en la Región Metropolitana.

Como ustedes comprenderán, yo no tengo nada contra Santiago y no creo que ustedes tampoco lo tengan. Sin embargo es evidente que un desarrollo armónico de nuestro país hace aconsejable limitar su crecimiento, racionalizar su urbanización y multiplicar los polos de desarrollo a lo largo del país. En esa forma, la corriente inmigratoria hacia el centro, que ha sido tradicional en nuestra historia, podrá no sólo llegar a su fin, sino que tal vez devenir en una corriente migratoria del centro hacia las distintas regiones.

Y aquí llegamos al tercer aspecto, el aspecto cultural. El aspecto cultural implica por una parte, la idea de que Chile no es Santiago, de que Chile no es la capital, de que el país se expande a través de todo su territorio. Y lleva, simultáneamente, a la creación de posibilidades para que a lo largo del territorio se desarrollen las capacidades intelectuales de la gente; a que el sistema educacional brinde posibilidades efectivas no sólo en los grandes centros, sino a través de las distintas regiones; a que las aspiraciones a una vida enriquecida por el cultivo de las artes, de las ciencias, del pensa-

miento puro, encuentren también campo donde expresarse a través del territorio nacional; a que la aplicación del conocimiento al desarrollo económico mediante el impulso tecnológico, la aplicación de nuevas tecnologías que abaraten los costos, que perfeccionen la calidad de los productos, que mejoren las posibilidades del trabajo humano, no estén radicadas simplemente en la capital, sino que se diversifiquen a lo largo del país.

Todo esto requiere esfuerzo, voluntad de avanzar en este sentido. Yo les digo, por mi parte, que el gobierno tiene esa voluntad. Nosotros tenemos una voluntad política descentralizadora, y en la medida de que ello vaya dependiendo de nuestras decisiones, este proceso contará con todo nuestro respaldo.

Con mucha franqueza les quiero decir: yo no creo que lo importante sea, estimándola una idea digna de considerar, digna de tomarse en cuenta, que un Ministerio funcione en una parte u otro Ministerio en otra. No estoy convencido de que eso necesariamente genere un avance importante en un proceso de descentralización. Habrá avance importante en un proceso de descentralización en la medida en que los interesados —de la propia base social, comunal, provincial, regional, o de los distintos sectores de intereses comprometidos— tengan instancias donde participar y las decisiones sean fruto de una participación lo más amplia posible.

No habrá necesariamente descentralización porque un Ministerio funcione en el sur y otro funcione en el norte, si esos Ministerios van a ser simples reparticiones del poder central y sus determinaciones tomadas sin contacto directo con la base.

Creo que indudablemente en el plano administrativo se pueden ir adoptando decisiones encaminadas a materializar la aspiración descentralizadora. Y puedo señalar como ejemplo las decisiones que ha adoptado recientemente la Empresa Nacional de Minería, Enami, en orden a regionalizar su administración, de tal manera que las decisiones que afectan a las distintas regiones del país donde esta empresa presta sus servicios, se adopten en las instancias de esa respectiva región y no tengan que venir a la autoridad central.

Y esto que ocurre en el sector público, es necesario que pase también en el privado. No sacamos nada con demandar que las instituciones del Estado se descentralicen, si las grandes empresas que tienen actividades que se desarrollan a lo largo del territorio nacional centralizan no sólo sus decisiones, sino su propia iniciación y gestión. Creo que se avanzaría de modo importante en el propósito descentralizador si los recursos que se generan en las distintas regiones fueran manejados por las empresas en el sistema bancario de la región respectiva, y no necesariamente en los bancos de la capital.

He recibido información de que en la mayor parte de los bancos las colocaciones en las distintas regiones son de montos inferiores a los depósitos que reciben desde esas mismas regiones. Hay ahí una tarea importante que el sector privado debe acometer, e indudablemente que también deben hacerlo el Banco del Estado, la Corporación de Fomento, en cuanto organismos de crédito de naturaleza estatal.

Pienso que debiera irse avanzando en la idea de la creación de bancos regionales que canalicen los esfuerzos de ahorro y el manejo financiero de las respectivas regiones con criterio regional.

En síntesis, yo diría que ésta es una tarea que nos compete a todos y en que tenemos que predicar con el ejemplo.

Permítanme terminar diciendo algo que leí alguna vez en Ortega y Gasset. Dice Ortega y Gasset que es frecuente que las ideas no sean sino expresión de lo que él llama "apetitos con guitarra". Cuando hablamos de un afán descentralizador y de regionalización, pienso que no basta, como suele ocurrir, que las provincias, las comunas o las regiones presenten sus anhelos, sus aspiraciones, sus demandas, en espera de que el poder central las satisfaga. Eso no es descentralización. Eso es, simplemente, muy explicable a veces, lloriqueo hacia una autoridad central. Yo diría, aquí no sólo tenemos que estar dispuestos a plantear aspiraciones, sino que a proponer soluciones.

Frente a la idea del otorgamiento de personalidad jurídica a las regiones, es mi parecer que un proceso de regionalización debe proponerse esa meta. La entidad de administración regional debe ser sujeto de derecho capaz de tener patrimonio, capaz de gestionarlo; debe tener una personalidad jurídica de derecho público, como la tiene el Municipio, en cuanto encargado de la administración comunal.

Yo veo en ustedes, y por eso los felicito, no sólo planteamientos de aspiraciones; veo aportes de ideas, y recojo la sugerencia que ustedes formulan, de considerarlos interlocutores válidos, no los únicos, pero sí uno de los interlocutores en todo el tema relativo a la descentralización de nuestra patria, porque ustedes se han esforzado, porque ustedes, representando aspiraciones, no se quedan en ellas.

No puedo negarles que me apena cuando llego a algún lugar donde me presentan un repertorio de peticiones, de problemas. Y yo les digo: "Bueno, ¿y qué soluciones me proponen?". "Ah, ésas que las busque el Gobierno". No, señores. Para avanzar no sólo en la regionalización, sino que en la construcción de esta Patria, que es de todos, no basta con que planteemos aspiraciones, como esta legítima que ustedes encarnan, sino que es necesario que aportemos

ideas, que propongamos soluciones, que craneemos, que nos esforcemos, y así, con el aporte de todos iremos cumpliendo esta tarea de un Chile armónico, descentralizado, verdaderamente democrático, en que todos seamos actores y no sólo sujetos pasivos.

Muchas gracias.

En aniversario de la Asociación Nacional de la Prensa

Santiago, 24 de agosto de 1990

Señoras y señores:

Como bien ha dicho el Señor Presidente, este encuentro tiene un valor especial por el hecho de realizarse, por primera vez después de muchos años, bajo un régimen democrático.

La tarea de recuperar la democracia ha sido ardua, y en ella cada cual hizo el aporte que sus convicciones le aconsejaron y sus circunstancias le permitieron. La Asociación Nacional de la Prensa contribuyó sin duda, desde su ángulo, representando la importancia de la libertad de expresión, gravemente conculcada o restringida durante tanto tiempo.

Hoy, la tarea de consolidar, perfeccionar y extender la democracia impone nuevos pero no menos exigentes desafíos. En ellos está empeñado mi gobierno; se trata otra vez de una tarea que nos compromete a todos, y en la que corresponde un rol muy importante a los medios de comunicación.

No hay democracia si no existe para la prensa un ambiente de libertad, de respeto y de tolerancia, que permita la libre circulación de ideas y opiniones y garantice el derecho de los ciudadanos a estar veraz y oportunamente informados. Es por esto que una de las primeras iniciativas de mi gobierno fue el envío al Senado de un proyecto de ley destinado a derogar aquellas normas que entorpecían o amenazaban seriamente la libertad de expresión. En la elaboración de su texto y en la discusión parlamentaria hemos contado con la valiosa colaboración de vuestra organización, como

también de la Archi, del Colegio de Periodistas, de las Escuelas de Periodismo de las Universidades de Chile y Católica, y de distinguidos profesionales expertos en la materia.

Esperamos que nuestro proyecto, que ha encontrado una positiva acogida en los señores senadores, sea prontamente despachado por el Congreso Nacional. Sabemos que esto es sólo el principio de una tarea de mayores proporciones, cual es la de modernizar la legislación de prensa en Chile, de tal modo que ella esté enfocada a proteger la libertad de expresión en el marco del respeto a la honra y privacidad de las personas, más que a castigar los eventuales abusos que puedan producirse en el ejercicio de esa libertad. En esta labor modernizadora sabemos que contamos otra vez con vuestra colaboración, así como la de las restantes instituciones con las que hemos venido trabajando en esta materia.

Como ustedes bien lo saben, la sola existencia de normas legales que amparan la libertad de expresión no es garantía suficiente para asegurar su efectiva vigencia. Hay mecanismos de los más diversos órdenes que permiten muchas veces ejercer un control sutil pero eficaz sobre los medios de comunicación.

Digámoslo claramente: para quien tiene poder —sea de tipo político o económico— existe siempre la tentación de ejercitarlo sobre los medios de comunicación, especialmente en un país que careció de periodismo realmente libre por tantos años. Por eso, junto con dotar a los medios de comunicación y a los periodistas de herramientas legales para protegerse de presiones indebidas, es preciso que quienes detentan el poder político o económico se acostumbren a no utilizarlo en perjuicio de la libertad de expresión y, por esa vía, de la propia democracia.

El gobierno que presido se ha propuesto no ejercer ningún tipo de presión privada o encubierta que pueda coartar la libertad de expresión. Todos los que están en esta sala son testigos de que hemos cumplido rigurosamente ese principio. Y el país entero es testigo de que hemos aplicado esta misma norma incluso en el caso de los medios de comunicación estatales, que hoy gozan de total autonomía.

Nosotros no queremos que medios de comunicación públicos que son de toda la nación, estén al servicio del gobierno de turno, y esto lo estamos predicando con el ejemplo. Para ello hemos presentado al Congreso un proyecto que modifica el estatuto legal de Televisión Nacional de Chile, a fin de que dicha autonomía tenga una consagración legal. Nos proponemos hacer lo mismo respecto de Radio Nacional.

Esta actitud, de pleno respeto a la libertad de expresión y a la autonomía de los medios de comunicación, nos ha acarreado más de alguna incompreensión de parte de quienes no conciben el ejercicio

de la autoridad sino a través de mecanismos autoritarios, así como de quienes desconfían del profesionalismo y de la honestidad de los medios de comunicación y de los periodistas. Pero debo ser claro y señalar que mi gobierno cree en la libertad de prensa y confía en los profesionales de la comunicación, porque cree y confía en la democracia.

Hace cerca de un año dije ante ustedes que "el compromiso con la democracia involucra el compromiso con la justicia, con la verdad, con la ética, con los valores morales. Vamos a transitar —dije— hacia la democracia sin vacilaciones y con paso seguro, siempre y cuando la prensa haga suyos estos principios". Permítanme que en el día de hoy reitere estos conceptos. En la medida que la democracia nos permita derribar los obstáculos a la libertad de expresión, en esa misma medida crece la responsabilidad de los periodistas, de los editores y de los propietarios de medios de comunicación.

Vuestra responsabilidad principal es la de difundir los hechos ajustándose estrictamente a la verdad. Me interpreta plenamente en este sentido lo señalado por Su Santidad el Papa Pablo VI en su mensaje a la Primera Jornada Mundial de las Comunicaciones, celebrada en 1967: "No será la Iglesia —dijo él— (yo podría decir "no será el gobierno") la que sugiera atenuar u ocultar la verdad, aunque sea dura. La Iglesia, porque es experta en humanidad, no se deja llevar por un ingenuo optimismo, sino que predica la esperanza y no se complace en el escándalo. Pero, precisamente porque respeta la verdad, no puede menos que poner de relieve que ciertos modos de dirigir los medios de comunicación social son capciosos en relación con la verdad, y deletéreos con la esperanza".

El compromiso con la verdad y con la esperanza es particularmente importante en un momento en que estamos reconstruyendo, desde un fondo doloroso, nuestra unidad como nación de hermanos. Para lograrlo, nos parece que es inesquivable saber la verdad sobre hechos que hasta ahora han permanecido ocultos, pues la unidad de un pueblo sólo es sólida si reposa sobre una historia que recoge las experiencias de todos.

Nadie debe temer a la verdad, ni ver tras ella una amenaza o una campaña. Queremos la verdad no para desprestigiar a nadie, no para ofender a nadie. Queremos la verdad para unir, no para dividir; para cerrar las heridas, no para abrir nuevas. La labor que cumplan en este aspecto los medios de comunicación es fundamental. Como lo dijera Paulo VI, ellos deben entregar la verdad "predicando la esperanza y sin complacerse en el escándalo".

Por este motivo, no puedo menos que compartir lo que ha dicho el señor presidente de la Asociación Nacional de la Prensa en el sentido de practicar un periodismo serio y respetuoso. Coincido en que esto implica una correcta jerarquización de las noticias, las que

deben estar situadas en el contexto histórico adecuado. En los tiempos actuales hay tal abundancia de información, que resulta indispensable un correcto procesamiento de ella por parte de periodistas con una sólida formación ética y profesional de tipo universitario. Por tal motivo, mi gobierno hace suya la iniciativa de devolver al periodismo el rango de carrera universitaria.

Estamos consolidando la democracia, y en una democracia la responsabilidad por el bienestar de la sociedad no recae sólo en la acción del Estado, sino en la acción de cada uno de los ciudadanos y de sus cuerpos intermedios. Que los medios de comunicación jueguen el rol que están llamados a cumplir, haciendo un uso correcto de la libertad de expresión, recae fundamentalmente en la formación ética, en el profesionalismo y en la seriedad de ustedes, los periodistas, editores y directores de medios de comunicación.

Permítanme una pequeña digresión. Yo creo que los gobernantes son especialmente susceptibles frente a la forma como los medios de comunicación juzgan e informan de su actuación. La manera como se relatan los hechos, la seriedad con que la información se fundamenta y no responde a meras apreciaciones subjetivas del periodista o editor; la visión de conjunto en que la información se integra dentro de un contexto, tienen mucha importancia para que ella cumpla efectivamente la tarea de informar con veracidad. Porque una información fundada no en hechos objetivos, sino en suposiciones, comentarios o apreciaciones subjetivas; una información que saca el hecho de su contexto, y que no mira al hecho en su proyección hacia el futuro; un juzgamiento de políticas que pierde la visión histórica, el sentido del tiempo, y que se queda en el instante; o una información titulada tendenciosa o incorrectamente, cuyo título no responde a su verdadero contenido, no ayudan no sólo a facilitar el gobierno del país, sino que a un buen entendimiento entre los ciudadanos, a crear un clima de respeto y comprensión recíproca.

En ese sentido, yo me atrevo a formular un llamado a los miembros de la Asociación, a los editores y a los periodistas para que extremen su cuidado, a fin de que, al cumplir su tarea de informar, sean vehículos —sin perjuicio de la libertad de cada cual de defender sus personales puntos de vista, o los puntos de vista que representa— de unidad y no de disensión, de verdad y no de error.

Dentro de este marco, cabe una función trascendental a organizaciones como la vuestra, en la tarea de regular el ejercicio de un periodismo serio, basado en normas éticas que protejan la verdad y el respeto a las personas. La actitud que ustedes mantengan, y no las medidas legales o las acciones represivas, serán el mejor antídoto para impedir los excesos o deformaciones a que puede estar sometida la noble misión de informar.

Quiero reiterarles mi esperanza de que el periodismo nacional

cumpla cabalmente su trascendental función informativa sobre la base del respeto irrestricto a la verdad, y animado del espíritu de unidad y reconciliación nacional que hoy felizmente prevalece en nuestro Chile.

Muchas gracias.

En ceremonia de clausura del Congreso de Periodistas

La Serena, 16 de diciembre de 1990

Amigas y amigos periodistas:

En primer lugar, quisiera expresar al Colegio de Periodistas mis felicitaciones por el desarrollo de este Congreso que están ustedes finalizando. En verdad, creo que es muy importante que los distintos colegios profesionales, que reúnen en su seno a los profesionales de las diversas actividades, tengan instancias o encuentros de participación y diálogo en las cuales analicen sus problemas, puedan definir criterios comunes y plantear sus puntos de vista ante la sociedad entera. Eso es lo que ustedes han hecho ahora.

Eso es una forma de participación en el gobierno de la sociedad. De ese modo se canalizan las inquietudes y se va avanzando hacia soluciones mediante planteamientos constructivos de los distintos sectores.

Permítanme que en esta oportunidad formule algunas reflexiones sobre el ámbito y la importancia que el Gobierno que presido atribuye a la función del periodismo.

Se ha dicho que el periodismo libre es condición indispensable para el ejercicio de la democracia. En verdad, si la democracia es una forma de convivencia social en que la autoridad deriva su poder de la voluntad de los propios gobernados y tiene como misión tratar de realizar el bien común, interpretando la voluntad del cuerpo social, es indispensable para que la democracia funcione y sea tal, que el cuerpo social, la comunidad de los gobernados, tenga la posibilidad de tener una información permanente, cabal y veraz, de lo que ocurre en la sociedad, de los problemas que la afectan, de las tareas del gobierno, de los quehaceres, de las distintas opciones.

Sólo así, libre y debidamente informado, el pueblo podrá marcar orientaciones y tomar sus decisiones cuando sea llamado a adoptarlas, sea eligiendo autoridades o pronunciándose sobre problemas en que el mecanismo institucional le permita su propia participación directa.

Para decidir y participar, el pueblo debe estar bien informado, cabal y verazmente informado. Y ése es el papel de la prensa. La prensa escrita y oral, el periodismo, tiene como misión mantener cabal y verazmente informada a la comunidad de lo que ocurre, para que de ese modo pueda formarse aquello que llamamos "la opinión pública".

Esta tarea de mantener cabal y verazmente informada a la sociedad de todo lo que ocurre, es sin duda tarea exigente, que requiere capacitación, aptitudes personales, y que requiere también exigencias morales. Importa derecho e importa deberes. La libertad de información y de opinión son derechos de toda persona. Es un derecho del periodista informar, es un derecho tener, por consiguiente, acceso a las fuentes de información, y es un derecho manifestar su opinión sobre el diario acontecer.

Hay dos aspectos: la transmisión de la noticia, del hecho objetivo, que cada cual naturalmente transmite según el color del cristal con que la ve. Los mismos hechos son susceptibles de visiones diferentes. Pero aparte del deber de informar de lo ocurrido, hay el derecho a dar opinión sobre lo que ocurre, emitir un juicio de valor a su respecto, y la función periodística exige, para quienes la ejercen, plena libertad tanto para informar como para opinar.

Pero, al mismo tiempo, el ejercicio de ese derecho impone deberes, porque la libertad de información tiene un destinatario: el destinatario de la libre información es la comunidad social, que tiene derecho a saber la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y en ese sentido, cualquiera que sea la óptica, el color del cristal, la posición subjetiva del que informa, es una exigencia moral ineludible el compromiso de ser lo más objetivos posibles, de comunicar la verdad tal como ha ocurrido.

Esto descarta algo que suele ocurrir: que la información se construya sobre la base de suposiciones. A menudo se emplea un lenguaje elíptico, se expresa que se dicen ciertas cosas o que alguna fuente habitualmente bien informada habría expresado tal otra cosa. Yo creo, y lo digo con mucha franqueza, que por ese camino se puede caer en una deformación de la verdad, y que se aparta de su deber informativo el periodismo que cumple su tarea sobre la base de suposiciones, de decires, y no del conocimiento lo más cabal posible de la verdad a secas.

Al mismo tiempo, es evidente que la información de lo que ocurre, la noticia, tiene que ser expuesta con mucho sentido de

responsabilidad, frente a la necesidad de resguardar o respetar la honra y lo que puede ser privado en las personas. Porque el derecho a la verdad no está contrapuesto con el derecho que toda persona tiene a ser respetada en su honor y en su honra personal.

Naturalmente una cosa es la exposición objetiva de lo que ocurre, de la noticia, y otra cosa es el legítimo derecho del periodista de, frente a eso que ocurre, formular libremente sus opiniones; puede aplaudirlo o puede reprobarlo, puede formular sugerencias sobre lo que debe hacerse, puede plantear lo que su conciencia le aconseja. Libertad de informar es una cosa, libertad de opinar es otra, y ambas se complementan y son necesarias en todo sistema democrático.

Y caigo en un tema que me preocupa, porque sé que a veces ha sido objeto de algunos cuestionamientos: la publicidad de la gestión gubernativa y administrativa. No cabe duda de que quienes desempeñamos funciones públicas somos servidores de la nación; no administramos cosas que nos pertenezcan, sino bienes que pertenecen a la comunidad y, en consecuencia, no podemos pretender trabajar en secreto, mantener en reserva lo que hacemos.

La administración de la sociedad es lo que los antiguos llamaban "la cosa pública", y los gobernantes, las autoridades administrativas, como administradores de "la cosa pública", que pertenece a la sociedad entera, tienen que hacerlo ante la claridad del día, tienen que hacerlo de manera transparente. Deben a la sociedad una información. Y, en ese sentido, los periodistas encargados de dar la información tienen el derecho a recurrir a las fuentes para obtener información.

Hay casos en que la gestación de las decisiones de la autoridad exige reserva, porque si se sabe de antemano la decisión que se está gestando, puede ocurrir que los sectores interesados o afectados por esa decisión la hagan estéril y terminen impidiéndola, o impidiendo los resultados que la autoridad busca, por ese conocimiento prematuro.

En consecuencia, es legítimo que el gobernante y que la autoridad, en muchos casos, rehuya dar información sobre los procesos que están en marcha, sobre las decisiones que están en vías de adoptarse. Las decisiones, los actos del Estado son públicos, y su publicidad se produce en el momento en que el acto nace a la vida jurídica, pero no tiene por qué anunciarse previamente durante su gestación.

Esto no obsta a que los agentes periodistas, encargados de dar información, requieran y pregunten, pero permite que la autoridad a veces se excuse de dar respuestas. A veces me he encontrado con que los periodistas se molestan porque el entrevistado les dice "esto no se lo voy a contestar". Creo que no hay preguntas indiscretas, y ustedes tienen derecho a hacernos, a quienes tenemos responsabi-

dades de gobierno, todas las preguntas que se les ocurra, pero tienen que respetar también el derecho de la autoridad y del gobernante, en aquellos casos en que cree, en conciencia, que sería perjudicial anticipar una respuesta o en que la decisión aún no está adoptada, o está en camino de adoptarse, o en que él mismo tiene dudas de la decisión por adoptar, que simplemente le diga al periodista "sobre esto, excúseme usted; por ahora no le puedo contestar".

Sé que a ustedes preocupan temas como la reserva de la profesión, del ejercicio de la profesión de periodista, a quienes han obtenido el título de tales al cabo de los estudios profesionales correspondientes, a nivel universitario. Comparto los puntos de vista de vuestro gremio sobre este tema y sobre la naturaleza de los colegios profesionales y la colegiatura obligatoria. Como dirigente del Colegio de Abogados durante muchos años, pienso que los colegios profesionales deben ser corporaciones de derecho público, como nacieron siéndolo en la legislación chilena, y pienso que esto no es incompatible con la libertad de asociación.

Sin embargo, ustedes saben que hoy por hoy existe un texto constitucional que establece expresamente lo contrario y que ha prevalecido una interpretación del principio de libertad de asociación que excluye la colegiatura obligatoria. No está en manos del gobierno, dada la correlación de fuerzas que existe en los órganos legislativos, modificar sustancialmente esa situación, pero tal como lo hemos expresado a otros colegios profesionales, el gobierno está llano a estudiar y a proponer en su oportunidad al Congreso Nacional, reformas legislativas que permitan a los colegios profesionales cumplir de manera eficaz ciertas funciones que les son propias, como por ejemplo velar por la ética de la profesión.

Porque creemos en la libertad de información, elemento esencial de la democracia, el gobierno ha procurado, conforme al programa que presentó al país la Concertación de Partidos por la Democracia, avanzar lo más posible para asegurar el pleno ejercicio de la libertad de información en Chile.

Por eso, tan pronto asumimos, invitamos al Colegio de Periodistas, a la Asociación Nacional de la Prensa, a la Asociación de Radiodifusores de Chile y a las Facultades de Periodismo de las Universidades de Chile y Católica, para estudiar la reforma que sería necesario introducir a la legislación vigente en la materia, para asegurar la más plena y efectiva libertad de información y de opinión, y eliminar todas las restricciones o trabas que restringen su ejercicio.

Fruto de esa iniciativa fue un proyecto de ley elaborado con el concurso de estas cuatro entidades, que el gobierno hizo suyo y que presentó al Congreso Nacional.

Recuerdo que cuando se me llevó el proyecto, se me dijo: "Este

es un primer proyecto, y vamos a seguir estudiando otro, para legislar ampliamente sobre todo el tema de la libertad de información y las condiciones de ejercicio del periodismo". Yo manifesté mis dudas, en el sentido de que en el Congreso lógicamente surgirían propuestas de tratar al mismo tiempo otros temas de fondo relacionados con los señalados. Se me dijo que eso podría determinar una demora muy larga en la tramitación de la ley, que era urgente, y por eso estuve de acuerdo en la propuesta de legislar en dos etapas.

El resultado ha sido que la ley simple, fruto del acuerdo unánime que presentamos, se ha demorado varios meses. Y ha intentado internarse en algunos campos de la otra ley, pero no tampoco plenamente. Va a ser necesaria esta ley y otra. Yo confío en que el proyecto de ley que elimina las trabas al libre ejercicio de la profesión, que elimina las restricciones a la libertad de información, sea ley en pocos días más.

Saben ustedes que, en todo lo esencial, la ley está ya aprobada en ambas ramas del Congreso; a última hora ha surgido una impasse en torno a uno o dos artículos, que espero sean superados en la comisión mixta, entre Senado y Cámara de Diputados, y podamos, antes de que termine el presente mes, ver publicada en el Diario Oficial esta ley que constituirá, sin duda, un avance importante para la libertad de información y el libre ejercicio del periodismo en Chile.

Queda abierta la instancia para que —ojalá con el concurso de ustedes, los periodistas colegiados, el Colegio de Periodistas, y ojalá con el de las otras instituciones comprometidas o interesadas en la materia— podamos ir a una reforma o a un estudio más sustancial de las materias que esta legislación no alcance a abordar.

Aprovechando esta ocasión, quisiera hacer alguna reflexión sobre un tema que está de actualidad. El gobierno ha enviado al Congreso un proyecto de ley sobre la Televisión Nacional y sobre la Radio Nacional. Y ha enviado un proyecto especial para resolver los problemas financieros de Televisión Nacional, que son un obstáculo muy grave para su normal desenvolvimiento.

Creo que ésta es una tribuna adecuada, ante los periodistas de mi patria, para expresarlo: no puedo ocultar el sentimiento que me causan las dificultades que estos proyectos están experimentando en el Congreso Nacional. Yo soy muy respetuoso, y lo he demostrado en estos meses de gobierno, de los puntos de vista de todos —gobierno y oposición—, de las opiniones de todos los sectores políticos, pero no reconozco autoridad moral para invocar el principio de la libertad o los derechos de la libertad de expresión, de opinión y de información, como pretexto para obstaculizar el despacho de estas iniciativas, a quienes durante larguísimos años

apoyaron o cohonestaron con su silencio todos los atropellos cometidos a la libertad de opinión e información.

El país tiene derecho a exigir consecuencia a quienes tienen responsabilidades públicas. Personalmente pienso que es bueno que la nación tenga un Canal Nacional de Televisión. Puede haber opiniones encontradas, pero quienes usaron y abusaron de ese Canal Nacional, convirtiéndolo en canal gubernamental, para defender las posiciones del gobierno y para atacar a sus adversarios, no tienen autoridad para, en este momento, venir a sostener que no debe haber Canal Nacional.

Nosotros queremos que ese canal sea, efectivamente, de la nación entera, no del gobierno de turno. La administración que está a su cargo, no obstante ser designada por el gobierno, está tratando de actuar con la máxima consecuencia y honestidad con este criterio, pero queremos más. Queremos que se legisle, y el proyecto de ley que hemos presentado tiene precisamente ese objeto, para asegurar que ese medio quede por encima y al margen de los intereses del gobierno de turno, y sea efectivamente representativo, por la forma de dirección, de la sociedad entera.

Creo que éste es un avance, después de haberse practicado tanto el que los medios de propiedad del Estado se aprovechan como si fueran del gobierno. Creo que esta iniciativa nuestra merece el apoyo de todos, y hago un llamado a quienes discrepan para que lo piensen serenamente, porque ella permitirá una televisión verdaderamente de todos los chilenos.

Esto está íntimamente ligado con un tema que ustedes han tratado en su Congreso. Yo no soy contrario a la televisión privada, como tampoco podría ser contrario a la prensa privada. La libertad de información debe permitir que todo el que pueda hacerlo, disponga de un instrumento de comunicación social. Y tratándose de los canales de televisión, que usan un bien común a todos los hombres, un bien que no es susceptible de propiedad privada, como son las ondas a través de las cuales se transmiten tanto las comunicaciones radiales como televisivas, en todos los países del mundo se admite que el Estado regula su concesión, y nosotros no queremos renunciar a esa facultad, que es inherente a todo Estado.

Incluso hay tratados internacionales que distribuyen la administración de las ondas entre los distintos Estados para que adjudiquen la frecuencia, mediante sistemas de concesión.

Pero, el día en que toda la información televisiva quede exclusivamente en manos de quienes disponen de más recursos para tener las instalaciones respectivas, indudablemente se correrá un riesgo de monopolio informativo, que resulta perjudicial para este anhelo de que la información sea plena, veraz, objetiva, y de que todos tengan posibilidad de expresarse a través de ella.

Cuando se empiezan a producir concentraciones en la propiedad de los medios de comunicación y verdaderos monopolios en cadenas periodísticas o de otro orden informativo, indudablemente hay un riesgo para la plena libertad de información. En ese sentido, yo respeto y encuentro plausible la aspiración que ustedes expresan, de que se faciliten las oportunidades para que todos los que puedan organizarse para tener su propio medio de comunicación, su propio órgano de prensa, puedan hacerlo, y que se evite una concentración monopólica de los medios de información que puede resultar dañina para el interés social, general de la sociedad.

Quiero terminar diciéndoles que hago votos porque el periodismo en Chile sea cada vez más eficiente, más capaz, más independiente, más veraz. Que la verdad resplandezca siempre en la información y que, a través del ejercicio del derecho y el deber de informar, los periodistas contribuyan a robustecer la democracia, proporcionándole al pueblo bases serias para la formación de la opinión pública y para que ejerza sus derechos democráticos a participar en el gobierno de la nación.

Muchas gracias.

En celebración de los 95 años del Consejo de Defensa del Estado

Santiago, 20 de diciembre de 1990

He querido participar en este acto, como una manera de testimoniar la importancia y el aprecio que personalmente tengo por el Consejo de Defensa del Estado y que, como gobernante, le atribuyo a su tarea.

Como hombre de derecho que profesó durante largos años la cátedra de Derecho Administrativo y que ejerció antiguamente la profesión, ante los tribunales, de abogado, pude aquilatar y admirar el trabajo del Consejo. Sus memorias, que contenían recopilaciones de los dictámenes más importantes, fueron para mí valiosa fuente de estudio y de formación.

Creo que el Consejo puede estar orgulloso de su historia de 95 años. Generalmente, a través de su existencia, se ha distinguido por la calidad de sus integrantes. Sin herir la modestia de nadie y simplemente recordando a algunos de los que ahora ya no nos acompañan en esta tierra, quiero rendir un especial homenaje a dos ex consejeros, a quienes conocí personalmente y cuya capacidad, vocación, espíritu público, inteligencia y cultura hicieron de ellos grandes abogados, grandes juristas y grandes consejeros. Me refiero a don Pedro Lira y a don Daniel Schweitzer. Uno y otro demostraron con su sabiduría, con su capacidad de trabajo, con su inquietud intelectual, no sólo grandes condiciones de abogado para la defensa de los pleitos que les fueron encomendados, sino muy especialmente una gran capacidad de elaboración jurídica, manifestada en los dictámenes e informes que ellos evacuaban, en conjunto con los demás consejeros de su tiempo.

Yo creo que la labor que realiza el Consejo es de extraordinaria importancia. Es muy probable que el grueso de la gente no lo aquí-

late, pero quienes tenemos alguna vinculación en el campo del derecho apreciamos y debemos reconocer el mérito de ese trabajo.

El señor presidente se ha referido aquí a varios temas que creo merecen algún comentario. Ha destacado la necesidad de asegurar la independencia del Consejo y de los consejeros, y ha recordado que en otro tiempo, con el objeto de garantizar esa independencia, la ley los declaraba empleados superiores para los efectos de la norma constitucional que exigía acuerdo del Senado para la remoción de tales funcionarios.

Participo plenamente de la opinión de que los funcionarios abogados del Consejo deben tener un estatuto que garantice plenamente esa independencia, que ellos no son servidores de un gobierno, sino del Estado. Los intereses del Estado trascienden a los de los sucesivos gobiernos, son de carácter permanente, y aunque es deber de los gobernantes servir los intereses del Estado, también pensando que éstos tienen permanencia más allá de su propio período, es bueno que el Consejo esté al abrigo de las influencias que puedan intentar menoscabar su desempeño con sentido estrictamente profesional y plenamente independiente.

La independencia, sin embargo, no es sólo cuestión de leyes, aunque las leyes la aseguren. Personas de poco carácter o de poca personalidad, o vinculadas por pasiones o sentimientos ajenos a los estrictos de su deber, pueden tornarse en dependientes, y ponerse al servicio de intereses o posiciones circunstanciales, más allá de esa independencia y del superior interés del Estado. Y aunque las leyes no garanticen la independencia, personas de coraje, de fuerte formación moral, pueden asegurar su plena independencia y de ese modo hacer prevalecer los intereses permanentes sobre los circunstanciales.

Comparto también la preocupación del señor presidente sobre la conveniencia de darle al Consejo de Defensa del Estado un estatus de servicio no vinculado o dependiente de ningún ministerio, sino —tal como lo fue en alguna época— sujeto exclusivamente a la supervigilancia del Presidente de la República.

Creo que eso es más acorde con las tareas de este Consejo, que no se vinculen específicamente a un ministerio, sino al conjunto de la labor del Estado, y que eso contribuya a realizar su jerarquía dentro de la administración del Estado.

Participo también de la opinión de que es conveniente modernizar y actualizar la ley orgánica del Consejo, para que se limiten sus funciones más adecuadamente, y para asegurar su mayor eficacia. Me atrevo a formularles una sugerencia: que ustedes mismos, los miembros del Consejo, preparen un anteproyecto de lo que, a juicio de ustedes, con su experiencia profesional, debiera ser la ley orgánica, y lo sometan a la consideración del gobierno. Me comprometo,

desde ya, a otorgar a esa sugerencia el estudio preferente que merece y poder, de ese modo, generar un proyecto de ley que sometamos, en su oportunidad, al Congreso Nacional.

Comprendo también los alcances que ha hecho el señor presidente sobre las limitaciones materiales que dificultan el trabajo del Consejo y sus necesidades de mejor equipamiento, de poder disponer de medios técnicos modernos para recopilar los antecedentes, elaborar bancos de datos y facilitar el trabajo. Todos sabemos que la tecnología ha experimentado en el último tiempo avances espectaculares que facilitan el trabajo en los distintos campos. Y en el ámbito del ejercicio de la abogacía, del estudio de los informes sobre situaciones críticas, de la defensa en juicios de los intereses del Estado y de la colectividad, indudablemente que esos medios son un valioso aporte para una más eficaz labor.

Comprendan ustedes que en esta materia, como en tantas otras, los problemas son no de falta de voluntad, sino de limitaciones de recursos. Comprendo el argumento de que todo lo que sea perfeccionar el rendimiento del trabajo del Consejo, en definitiva redundará en defensa del patrimonio del Estado, del interés del Fisco y, en consecuencia, reeditúa, probablemente, más de lo que se invierte en estos mejoramientos.

Pero, cuando uno tiene que confeccionar la ley de presupuestos y se encuentra con recursos limitados para atender a una multiplicidad tan enorme de demandas e intereses y necesidades que requieren atención, la verdad es que resulta difícil satisfacer todas las justas demandas y a menudo no se hace una distribución plenamente satisfactoria.

Creo que si se elabora un programa de modernización por etapas, con un presupuesto, por ejemplo, para un período de cinco años, probablemente la tarea sea más fácil. Esto constituye otro desafío para ustedes.

Termino estas mal hilvanadas palabras. He optado por hablar en estos términos, sintiéndome un poco en familia y creyendo que entre colegas, en una institución a la cual me siento vinculado por comunes ocasiones, no era necesaria la formalidad de un discurso y era mejor, simplemente, exponer en forma sencilla mis sentimientos y pensamientos.

Los felicito al cumplir 95 años y deseo que, en el cumplimiento de sus tareas, el Consejo logre la máxima eficiencia, independencia, eficacia, y pueda mantener, a justo título, el alto nivel que históricamente ha tenido.

Muchas gracias.

En clausura del Congreso Comisión de Pueblos Indígenas

Temuco, 18 de enero de 1991

Amigos, amigos, hermanos de los pueblos indígenas de Chile:

Quisiera comenzar mis palabras saludando a todas las delegaciones presentes, a los aymaras de Putre, Parinacota, General Lagos, y a quienes vienen representando a los migrantes aymaras de la ciudad de Arica; a los aymaras de la ciudad de Iquique, de los valles cordilleros y del altiplano, de Isluga y Cariquima, de Colchane, de los pueblos de Coroma y Lirima; a los atacameños de San Pedro de Atacama, de Ayquina, Toconce, Toconao, y tantos pueblos del interior de la Segunda Región; a los habitantes de la Isla de Pascua, a la delegación Rapa Nui, que ha viajado desde tan lejos a este Congreso; a los pehuenches del Alto Biobío, de Callaqui, Cainicú, Ralco, Pitril, Trapa-Trapa, Malla-Malla, y tantos otros que habitan en esas regiones; a los pehuenches del Lonquimay, Icalma y de las comunidades de la cordillera; a las delegaciones que vienen de la provincia de Arauco, de Cañete, Lincura, Contulmo; a las comunidades mapuches de Malleco, Lumaco, Traiguén, Coltauco, Victoria, Selva Oscura, y tantos otros lugares; a las comunidades mapuches de Cautín, de la costa de Puerto Saavedra, de Trovolhue, a la cordillera del Llaima y Curarrehue; desde Galvarino y Lautaro por el Sur, hasta Pitrufrquén y Loncoche; a las delegaciones de comunidades mapuches valdivianas, de San José de la Mariquina, de Panguipulli, Lanco, Mehuín, y a las comunidades de Chaihuín, en la costa de Corral; a las delegaciones huilliches de San Juan de la Costa, de Río Bueno, Lago Ranco, Isla Huapi; las comunidades de Capihuala, Monteverde, y las que se ubican en la cordillera costera de la Décima Región; a las comunidades chilotas, de Cobcu, Ñaldal, Quinchao y Huellipulli, y a los

diversos grupos que habitan esa hermosa Isla Grande de Chiloé. Y un saludo muy especial a la comunidad Cahuascal o Alacalufe, de Puerto Edén. En la delegación que ha venido con tanto esfuerzo, en los pueblos fueguinos, se ejemplifica la intransigencia, la falta de respeto de nuestras sociedades por los pueblos indígenas que tienen costumbres y culturas diferentes. Nuestra generación de chilenos no puede permitir que esto siga ocurriendo. Por eso estamos aquí, por el respeto a las culturas originarias de nuestro país.

Hace poco más de un año, el 1° de diciembre de 1989, aquí, en esta provincia, en la ciudad de Nueva Imperial, señalé que mi gobierno quería establecer una relación diferente con los pueblos indígenas de Chile. Firmamos en esa ocasión un compromiso solemne, los representantes de los pueblos indígenas y quien era en ese momento candidato a la Presidencia de la República. Nos comprometimos a establecer una relación de respeto.

Hoy día estamos dando cumplimiento a ese compromiso. Recibimos de manos de los dirigentes las conclusiones de un largo proceso de discusión, que se plasmará en una nueva ley que deberá beneficiar al casi millón de chilenos que forman los pueblos de la tierra, las raíces de nuestra nación.

En Nueva Imperial firmamos un compromiso. Se comprometieron ustedes y nos comprometimos nosotros. A un año de esa fecha podemos afirmar que hemos venido cumpliendo ese compromiso, ustedes y nosotros, por lo que debemos tener motivos de satisfacción. No sólo hemos inaugurado una relación de respeto, sino también una relación responsable.

Los pueblos y comunidades indígenas han ejercitado la democracia durante estos meses de discusión interna de su proyecto de ley. Me han informado que se realizaron a lo largo del país 2.852 encuentros, a nivel de comunidades, para discutir y aportar ideas a esta iniciativa y para elegir sus delegados a los congresos provinciales. Se han realizado 15 congresos a nivel provincial e intercomunal, donde han participado más de 2.500 representantes, quienes los han elegido a ustedes para expresar democráticamente vuestros puntos de vista respecto de los asuntos de interés de los pueblos indígenas en este Congreso Nacional que hoy culmina.

No han sido, sin duda, absolutamente todos los indígenas los que han participado en este proceso, pero casi 100 mil lo han hecho directa o indirectamente. Pensamos que es un acto democrático de la más alta trascendencia. Las conclusiones que ustedes nos han entregado tienen, por eso mismo, un valor muy grande: son la expresión de un pensamiento colectivo que se fue formando en múltiples difusiones.

Dijimos en la campaña de la elección presidencial que la democracia debía llegar también a los pueblos indígenas, que el proceso

de redemocratización del país debía incorporarlos. Hoy estamos concluyendo una primera etapa de esta actividad democrática: establecer en forma participativa y de conjunto, las bases de una nueva legislación.

Los pasos que siguen son claros y definidos. Estudiaré detalladamente las conclusiones a que ustedes han llegado. El gobierno, a través de sus equipos, examinaremos todas y cada una de ellas y, sobre la base de vuestro proyecto, daremos forma definitiva a una iniciativa de ley que enviaremos al Congreso Nacional en los próximos meses, para que, luego del debate, con participación de todos los sectores, pueda convertirse en ley de la República.

Pensamos que existe un gran acuerdo básico entre lo que aquí se ha propuesto y las políticas del gobierno definidas en el Programa de la Concertación. Me quisiera referir a algunas de ellas.

Creo que es necesario, tal como se ha planteado en vuestro Congreso, el reconocimiento jurídico de las comunidades, de modo de asegurar su participación como tales en la vida social. El reconocimiento que en esa ley se hace de los pueblos indígenas y sus estructuras básicas de organización, es el primer paso para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.

La defensa y protección de los recursos con que cuentan las comunidades es otro aspecto central sobre el cual se debe legislar en forma seria y responsable. Conozco el problema del agua que afecta a las comunidades del Norte Grande, aymaras y atacameños; hemos planteado la necesidad de modificar el Código de Aguas, para proteger ese vital recurso, y permitir que se desarrolle la vida de los pueblos.

En el curso de nuestro mandato presidencial esperamos regularizar la propiedad de las tierras y las aguas en el norte, asegurando de ese modo a las comunidades sus posibilidades de desarrollarse.

Es necesario que la legislación proteja las tierras de las comunidades indígenas. El problema es general, pero especialmente grave aquí en Ancud. La ley deberá establecer normas para la plena protección de las tierras que pertenecen a los indígenas, y plantear mecanismos para ampliar las tierras comunitarias, ya que en muchas partes el minifundio prácticamente impide vivir de lo que la tierra produce. La sociedad debe asegurar que la gente de la tierra pueda vivir con tranquilidad y seguridad en el lugar de su origen. Creemos que ése es un gran objetivo que la futura ley deberá considerar.

Sabemos que hay muchos conflictos por asuntos de tierras. Es evidente que no se pueden resolver de un día para otro todos esos problemas, que se arrastran por décadas. Nuestro criterio es hacerlo sobre la base de buscar que impere la justicia, que se llegue a acuer-

dos, que si es necesario se negocien soluciones, que se suprima el recurso de la fuerza, no sólo por los afectados, sino por todas las partes involucradas.

En este espíritu de justicia es que confiamos que el Congreso Nacional legislará sobre este antiguo problema que afecta la convivencia y el desarrollo en estas regiones del sur. Estamos en tiempos de democracia, de acuerdos, de concertaciones, y en ese espíritu se deben buscar las soluciones a estos graves problemas.

Las tierras también deben ser trabajadas, mejoradas en su calidad, porque muchas de ellas han sido gastadas por el largo uso, por la falta de cuidado, por la erosión, o simplemente porque son muy pequeñas y ha sido necesario darles un uso demasiado intensivo. Hay que crear programas agrícolas adecuados a la realidad de las comunidades. Es necesario modernizar las prácticas agrícolas, pero cuidando de la realidad existente, respetando la cultura, que muchas veces tiene mucho que enseñarnos.

En esta ley que se dictará deberá contemplarse la realización de planes y programas agropecuarios que tiendan a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los campesinos indígenas.

A pesar de que aún no tenemos una legislación especial sobre esta materia, se han realizado esfuerzos, a través de la cooperación internacional y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis; en estos días, la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, junto al Fosis, llama a concurso para proyectos productivos que se realizarán en las comunidades. Esta es una modalidad interesante, porque permite que sean los propios comuneros los que planteen sus necesidades y la forma de resolverlas. Es parte también del trato maduro y respetuoso que quisiéramos consolidar.

Un aspecto muy valorado por ustedes es la educación. Compartimos el criterio de una educación preferencial; que en las escuelas a que concurren los pueblos indígenas se enseñen los dos idiomas, el idioma tradicional de vuestros pueblos, que hablaron vuestros antepasados, y que no debe perderse, y el castellano, que hablamos todos los chilenos. Junto con eso, los programas de estudio deben respetar la cultura, la historia de ustedes, sus tradiciones. En eso estamos de acuerdo.

De vuestras conclusiones percibimos que existe un fuerte deseo de conservar esa cultura, vuestra propia identidad, lo propio de cada una de vuestras idiosincrasias; y junto con eso, al mismo tiempo, progresar, desarrollarse, incorporar los conocimientos del mundo moderno. No se trata de volver al pasado, porque la historia no retrocede. Se trata de avanzar hacia el futuro, sobre la base de las propias raíces y entendiendo la capacidad del ser humano para recoger todo lo mejor del progreso de la civilización y la cultura.

Creemos que hoy día el mundo camina hacia allá, afirmar con

mucha fuerza la propia identidad y abrirse hacia un futuro de progreso y modernidad. Defensa de la cultura y desarrollo no son dos situaciones opuestas. Por el contrario, se complementan.

El acceso a la educación es una demanda sentida por ustedes, que se ha expresado en las discusiones de esta nueva ley.

No cabe duda de que las becas que permitan realizar estudios son de primera importancia para el futuro de la juventud. El acceso a la educación básica y media ha ido aumentando año a año. Es importante continuar en esa línea. Pero más importante es mejorar la calidad de esa educación. Pensamos que la educación media debe adaptarse a las necesidades prácticas de la vida moderna en nuestro pueblo, y en cada región debe orientarse, preferentemente, a capacitar a nuestros niños y jóvenes para el trabajo productivo.

El acceso a la educación superior es más difícil para los jóvenes que viven en el campo, en las comunidades, pero no debe estar cerrado, sino que abierto a todos los jóvenes, cualquiera sea su origen, cualquiera sea su situación económica, que demuestren aptitudes, inteligencia y capacidad de esforzarse para llegar a ser buenos profesionales.

Es por ello que, este año, la Comisión de Pueblos Indígenas que hemos formado junto al Ministerio de Educación, ha iniciado un programa de 300 becas para jóvenes indígenas en el país. A ese programa podrán postular jóvenes pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas de Chile, para que realicen estudios en cualquier universidad del país y en los institutos profesionales con y sin apoyo estatal. La comisión seleccionadora privilegiará el origen rural del estudiante, la carrera adecuada a las necesidades de las comunidades indígenas, los estudios realizados en universidades o institutos regionales.

En este primer concurso se privilegiará a los alumnos que ingresen a primer año. La beca se otorga por un año, y el alumno deberá repostular cada año. El que demuestre sus méritos y cumpla el primer año, tendrá la certeza de que podrá ganarse la beca para seguir progresando en sus estudios.

La creación de un organismo estatal especializado y responsable de las políticas entre los pueblos indígenas, nos parece, también, una gran necesidad. Lamentablemente, en el pasado reciente se desmantelaron las instituciones que tenían por objeto preocuparse preferentemente de este sector de la población chilena. Tenemos confianza en que el Honorable Congreso comprenderá la necesidad de contar con un ente gubernamental dotado de presupuesto, de capacidad de atención, a cargo de las políticas a que nos referimos.

Quisiera referirme a otros temas que sé les preocupan a ustedes. Se acerca el año 1992. Será, sin duda, una fecha importante para América Latina. Algunos querrán solamente celebrar un aconteci-

miento histórico. Nosotros creemos que es un momento oportuno para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra historia, sobre la relación entre nosotros; la relación entre las sociedades mestizas, criollas y las sociedades indígenas, originarias de nuestro país. Es un momento propicio para repensar nuestra cultura, para volver los ojos sobre nosotros mismos y preguntarnos acerca de lo que somos y, tomando como base nuestro pasado, mirar hacia el futuro.

Tenemos mucho que aprender de vuestras culturas, de vuestras raíces. Muchas veces nos preocupamos sólo del progreso, que sin duda es importante, pero corremos el riesgo de perder el sentido profundo de las cosas. Vemos tantas veces que el progreso malentendido destruye el medio ambiente, y nos trae más problemas de los que pretendíamos solucionar. Debemos aprender de las culturas que supieron y saben respetar la naturaleza, tener una relación armónica con ella. Las culturas indígenas nos plantean preguntas fundamentales en torno al progreso, al tipo de desarrollo que queremos, al tipo de vida a que aspiramos.

La discusión de estas leyes va a ser un momento adecuado para realizar esa reflexión. Como ustedes lo saben, el 27 de diciembre pasado el gobierno envió al Congreso, para su ratificación, el convenio internacional N° 169, de las Naciones Unidas, sobre pueblos indígenas. Allí se establecen los principios generales aprobados por la comunidad internacional en torno al tratamiento de las cuestiones que interesan a esos pueblos. Nos parece importante que Chile ratifique el tratado, haciéndose parte del pensamiento moderno respecto a estas materias.

Mañana iré a Lumaco a hacer entrega del fundo Hueico a la cooperativa campesina Lautaro de Lumaco. Esta es la primera cooperativa campesina que se constituye durante mi gobierno. Creo en el cooperativismo, mi gobierno lo impulsará. El cooperativismo ejercita la solidaridad, permite juntar a los pequeños productores y mejorar sus condiciones de trabajo y bienestar. Entregaremos un predio que perteneció a la cooperativa y que luego —en el momento en que ella se amplió— fue traspasado a Conaf. Ese predio fue plantado de pinos por los mismos cooperados, y actualmente está listo para ser explotado.

Los dirigentes de la nueva cooperativa, los mapuches cooperados, no pidieron un regalo. Plantearon comprarlo. Se llegó a un acuerdo razonable entre la cooperativa y Conaf, que le va a permitir a la cooperativa trabajar durante un buen tiempo, explotarlo, y luego reforestar y hacer trabajos de agricultura.

Es una muestra del camino responsable en la búsqueda de soluciones reales y concretas para los pueblos indígenas.

No quiero terminar estas palabras sin dejar de señalar la importancia que atribuyo al trabajo conjunto entre el gobierno y las

organizaciones indígenas. Ese trabajo ha permitido ir avanzando en la superación de los conflictos y problemas más graves que afectan a los pueblos indígenas, ha permitido elaborar un borrador de futura ley para los pueblos indígenas que ustedes han ratificado en esta oportunidad, y abre camino a soluciones constructivas para más adelante.

Yo quiero decirles que mi gobierno quiere ser fiel a su propósito de servir a todos los chilenos. He dicho que soy Presidente de todos los chilenos, y con ello quiero entregar nuestra disposición de buscar la unidad de la patria, por encima de cualquier clase de diferencias, respetando las diferencias, buscando los acuerdos y usando los procedimientos democráticos para superar los desacuerdos. Y así avanzar en la construcción de una sociedad donde verdaderamente haya una convivencia pacífica entre todos, en que todos nos respetemos y en que todos los chilenos, cualquiera que sea el origen, cualesquiera que sean las ideas, cualquiera que sea la condición económica o social, cualquiera que sea el grado de cultura, de función o desarrollo cultural, tengamos la posibilidad de sentirnos miembros de la misma familia.

Los pueblos indígenas de Chile, que constituyen una de nuestras raíces, tienen derecho a un espacio de respeto y participación en la vida nacional. Espero que actuando con sentido de responsabilidad, ejerciten esta participación; que dispongan para ello de los cauces necesarios y, trabajando todos juntos, avancemos en el anhelo de construir lo que he llamado y sigo llamando, una patria buena para todos los chilenos.

Muchas gracias.

A pobladores sin casa y allegados de Concepción

Concepción, 9 de agosto de 1990

Muy buenas tardes:

He querido pasar a saludarlos, sabiendo que estaban realizando esta reunión. Yo estaba en otra en la Universidad, pero como aquélla terminó antes, aunque no estaba programado quise pasar a ésta para, con mi presencia, respaldar lo que ha dicho el señor ministro. Este gobierno, por una parte, quiere escuchar a la gente con el fin de conocer de los propios afectados sus problemas, e ir estudiando junto con la gente la mejor manera de contribuir a resolverlos.

Hemos sido muy claros; yo lo fui durante la campaña, y lo he reiterado en múltiples oportunidades: no podemos resolver de la noche a la mañana todos los problemas; no podemos en un año, menos en algunos meses, suplir los déficit que vienen acumulándose desde hace muchos años. Pero queremos hacer todo lo que está a nuestra mano, dentro de las limitaciones de un aparato estatal compuesto por una Constitución que tiene normas restrictivas, leyes que tienen normas restrictivas, amarras que se nos dejaron, incluso la existencia de autoridades no generadas por el pueblo en muchas partes, que no siempre trabajan en buena colaboración con el gobierno, y que mientras no saquemos adelante la reforma del sistema municipal, estarán ahí. Con todas nuestras limitaciones, lo que queremos es avanzar, ir solucionando los problemas.

Por eso se ha aguzado el ingenio buscando todas las fórmulas posibles. Naturalmente yo no podría querer otra cosa, sino que todos los chilenos tuvieran su casa, y que al término de mi gobierno no quedara nadie de allegado; que todos los allegados tuvieran su

propia vivienda, y ojalá la mejor vivienda del mundo. Pero una cosa es lo que se desea y otra cosa es lo que se puede.

Ahora, ¿cómo podemos avanzar en esto? El ministro ha señalado caminos, ustedes han hecho sugerencias. Oí a un dirigente de la población Las Gredas, que ha dado un ejemplo de cómo abordaron ellos, los miembros de esa comunidad, su problema. Naturalmente, el gobierno tendrá que respaldarlos. Pero ellos han dado un ejemplo que fue en socorro. Tenemos que tener clara conciencia de que los problemas no se solucionan solos ni que la solución es un regalo caído del cielo, que tenemos que trabajar entre todos.

Y así como ustedes tienen derecho a reclamar del gobierno y a esperar de mí que cumpla con lo que he prometido, de esforzarme por solucionar este problema, al mismo tiempo yo espero de ustedes la colaboración y que no esperen, simplemente, que el gobierno les resuelva todo, sino que pongan también su propia parte.

Hay que tener en cuenta que el problema de la vivienda es muy importante, pero no es el único. Junto con el problema de la vivienda tenemos el problema de la salud; tenemos que mejorar los consultorios, y asegurar que haya efectivamente posibilidad de atención suficiente y digna para toda la familia. Y hay un problema de educación: tenemos que abrir posibilidades para que todos los niños tengan una adecuada educación, y eso significa esfuerzos importantes para mejorar el actual sistema educacional, especialmente para desarrollar establecimientos educacionales que capaciten a los niños para ganarse la vida. Es decir, que preparen en determinadas profesiones, oficios; que les enseñen no sólo a prepararse para la universidad, no porque no sea legítimo que todo niño quiera ir a la universidad, sino porque la experiencia demuestra que no todos llegan a ella, por distintas circunstancias; entre ellas, porque hay algunos a quienes no les gustan mucho los estudios de las matemáticas ni de la ciencia ni de la literatura ni de la filosofía, y en cambio tienen aptitudes para el dibujo o para el trabajo manual, o para otras cosas. Y tan digno es un trabajo como el otro.

Pero nuestros colegios enseñan simplemente para ir a la universidad, y cuántos son los que llegan a ella: de diez niños que empiezan a estudiar, probablemente uno llegue a la universidad, y quizás menos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo en eso también.

Me he dado cuenta de que gobernar un país es parecido a manejar un hogar: hay muchas necesidades, pero hay un presupuesto. Y así como los padres deseamos lo mejor para nuestros hijos, y quisiéramos mejorar nuestras condiciones de vida y comprar cosas para que nuestra casa esté mejor —quisiéramos comprarle una bicicleta al hijo o una cocina buena—, encontrando que el presupuesto da para tanto, no más, igual cosa sucede al manejar un país. Entonces hay que establecer prioridades. Y para nosotros, las principales

prioridades son las que les he señalado: vivienda, salud y educación. Porque son los problemas que afligen más a los pobres de Chile. Y ustedes pueden contar con que el gobierno trabajará para resolverlos, y trabajará con ustedes.

Muchas gracias.

Reunión con representantes de Ollas Comunes

Santiago, 26 de octubre de 1990

Estimadas amigas y amigos:

Este acto tiene un significado simbólico. Quienes están aquí hoy día, en La Moneda, son chilenos modestos, de entre los más pobres de nuestra patria, pero que, al mismo tiempo, tienen una gran dignidad de personas, y han asumido su responsabilidad de tales integrándose a organizaciones comunitarias, para expresar su solidaridad entre sí y buscar solución a sus problemas.

Yo hubiera querido, anhelaría que los 5 millones de pobres chilenos pudieran entrar en La Moneda a reunirse conmigo, pero físicamente eso no es posible, y este acto entraña la voluntad de estar en contacto con ese mundo. Ustedes son hoy día las representantes esforzadas de esos 5 millones de pobres.

Ustedes representan al sector más sufrido de la patria, que no se dejó abatir por la desesperanza, ni cayó en el fatalismo, sino que ante la adversidad encontró, en el camino de la organización y de la solidaridad, una manera de afrontar y vencer sus dificultades en los momentos más difíciles para el pueblo de Chile y, especialmente, para sus sectores populares.

Estamos iniciando una nueva etapa en la vida nacional. Queremos que esta etapa se caracterice por el respeto a todos los chilenos, a su dignidad, a sus derechos. Queremos que esta etapa se caracterice por el progreso y superación del país, para desarrollar nuestra economía en forma tal que todos los chilenos puedan tener acceso al bienestar, a mejores condiciones de vida.

Ello exige que el país produzca más, que el país crezca; pero exige, al mismo tiempo, que ese crecimiento no sea en beneficio de

algunos y deje olvidadas a las grandes mayorías populares, sino que sea un crecimiento de cuyos frutos participen, con justicia, todos los sectores de chilenos, especialmente los más postergados.

Esta nueva etapa se caracteriza por un gran afán de justicia social, entendiendo por tal la búsqueda del desarrollo y el progreso para los sectores más postergados, el intento de acortar las diferencias entre los ricos y los pobres. La acción perseverante para que en Chile erradiquemos el flagelo de la extrema pobreza no persigue una riqueza generalizada —nunca podrán todos ser ricos— sino el que cada persona y cada familia pueda vivir con dignidad, satisfacer sus necesidades, tener una casa decente, una atención adecuada de la salud; pueda educar a los hijos para que sean más que lo que fueron sus padres. Ese es un justo anhelo de toda familia.

Ahora bien, estos objetivos —crecimiento, respeto a las personas, justicia social, bienestar mínimo para todos— no se van a obtener sólo por obra de un gobierno, por muy eficiente que el gobierno sea; sólo se pueden lograr con el trabajo, la participación y la cooperación de todos los chilenos. Nosotros entendemos que nuestra misión no es simplemente tomar decisiones y repartir bienes. Nuestra misión es tratar de ser los grandes coordinadores, organizadores de un proceso de movilización de todos los chilenos, para que, con su propio esfuerzo, mediante su propia participación, puedan ir resolviendo los problemas y avanzando hacia una sociedad mejor.

Entendemos que en esta tarea es vital, esencial, la participación organizada de la gente. Creemos en la gente, por modesta que sea. Ustedes lo han comprobado: con las organizaciones de ollas comunes, comprando juntos, de solidaridad en tantos aspectos, han superado en los peores momentos sus problemas. Cuánto más podrán hacer cuando la organización en la base social no es mirada con recelo por el gobierno, no es perseguida, ni siquiera nos es indiferente, sino que cuenta con nuestro pleno respaldo; cuando el gobierno se interesa por promoverla; cuando las autoridades, los ministros, los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, todas las autoridades cooperan y ayudan a la gente a organizarse y a ir solucionando sus propios problemas.

De eso se trata. Nosotros confiamos en que eso es posible, aun cuando hay dificultades. Tenemos dificultades derivadas de amarras legislativas que recibimos del pasado, de instituciones que no nos dan toda la movilidad que quisiéramos. Tenemos dificultades derivadas de la situación económica del país: aunque es buena en algunos aspectos importantes, nos entraña limitaciones derivadas del proceso inflacionista con que recibimos el país; del alza del petróleo, derivada del conflicto del Golfo Pérsico; de distintos problemas que dificultan la acción del gobierno.

Uno quisiera ayudar a resolver todos los problemas, pero los

recursos son limitados, y la sola acción del gobierno no puede resolverlos todos. Entonces, qué es lo que queremos hacer. Queremos, fundamentalmente, movilizar el esfuerzo de la base social, dándole el respaldo y toda la ayuda del gobierno. Por eso es que hemos formulado un programa de integración para el desarrollo. Su objeto es apoyar la iniciativa y el esfuerzo de la propia gente para superar su condición de pobreza. Los actores de este proceso son las organizaciones de la comunidad, los propios interesados organizados. El esfuerzo común es el mejor camino para abrir oportunidades de solución a los problemas de los pobres.

El Estado no puede dejar a los pobres abandonados a su propia suerte. El Estado, la nación jurídica y políticamente organizada, tiene como misión el logro del bien común. El Estado no está simplemente para mirar cómo juegan las leyes del mercado, y cómo las personas, compitiendo con sus egoísmos, avanzan a veces unos a expensas de los más débiles. No, el Estado está para regular la convivencia colectiva, para asegurar bases de justicia en esta convivencia y, sobre todo, para ayudar a los que más necesitan ayuda, para ayudar a los más débiles, para ayudar a los más pobres, y para ayudar a los que quieran hacer el esfuerzo necesario para superarse.

Dije reiteradamente durante mi campaña electoral que mi lema sería: "ayúdate; que yo te ayudaré". El gobierno ayudará a todo el que esté dispuesto a hacer algo de su parte.

Para eso, los órganos públicos tienen la obligación de cooperar. Y yo les he encomendado a todos los ministros que tienen acción en el campo social —de Interior, de Salud, de Vivienda, de Educación, de Trabajo y Previsión Social, de Justicia, de Agricultura— que coordinen sus esfuerzos para ir en ayuda de la solución de los problemas de 108 sectores más postergados, sobre la base que he dejado indicada, de estimular a la gente, de prestarle cooperación a la gente.

Y el Ministerio de Planificación y Cooperación tiene como función coordinar todo ese programa. Por una parte, el Ministerio busca los recursos necesarios para ello, y el Estado, a través de la Reforma Tributaria que aprobó el Congreso hace algunos meses por iniciativa del gobierno, dispondrá este segundo semestre, y sobre todo a partir del próximo año, de más recursos para programas sociales, como lo señaló el ministro Molina.

Además, el Ministerio de Planificación y Cooperación ha estado coordinando la recepción de la cooperación internacional que los países amigos, con generosidad, han querido prestarnos en esta etapa de renacimiento de la democracia en Chile, para ayudarnos a resolver los problemas más delicados de extrema pobreza en el

país. Hoy reitero a los señores embajadores y representantes de naciones amigas, que nos ayudan con su esfuerzo, los agradecimientos del gobierno y del pueblo de Chile por esta cooperación.

A través del Fondo de Solidaridad y de Inversión Social, Fosis, pretendemos no hacer regalos, no hacer préstamos indiscriminados, sino tenderles la mano e ir en cooperación con aquellos sectores pobres del país que tengan su propia iniciativa, sus propias empresas para salir adelante, y que necesiten ayuda técnica, respaldo financiero, capacitación, guía, medios para llevar adelante sus proyectos. Se trata de trabajar en equipo: los pobres con el respaldo de las autoridades, de las organizaciones y organizados entre sí, para ir avanzando en este esfuerzo de construir una patria más libre, una patria más justa, una patria en que haya más bienestar para todos los chilenos.

Muchas gracias.

En ceremonia inaugural de la Convención de Santiago

Santiago, 16 de noviembre de 1990

Señoras y señores:

He aceptado gustoso la invitación a participar en este acto, porque atribuyo especial significado al esfuerzo que representa, como estilo de participación en la convivencia colectiva y en la solución de los problemas de interés común. Con esta Convención culmina una serie de cabildos realizados por habitantes de los distintos barrios y sectores de Santiago, con el fin de estudiar sus problemas y de ayudar con sus propias luces a definir los programas de desarrollo de la comuna, de la ciudad.

Creo que esto es significativo de un nuevo estilo de convivencia entre nosotros: el estilo democrático. Una sociedad democrática es una comunidad de hombres y mujeres libres, iguales en dignidad, solidarios, que se organizan para el logro del bien común. La democracia es esencialmente una sociedad de personas. Es decir, de seres humanos dotados de inteligencia, voluntad, libertad, capaces de ser sujetos activos de su propia vida y de la vida colectiva de la cual forman parte.

Estamos contentos en Chile porque nuestra patria se ha reencontrado con sus tradiciones democráticas, de las cuales siempre nos sentimos orgullosos. Pero este contentamiento no tendría suficiente base de sustentación si no fuéramos capaces de entender que la democracia, como la libertad, es un bien que tenemos que ir conquistando día a día con nuestro propio esfuerzo, que no basta con tenerla como un regalo obtenido y dejarla entregada a su propia suerte.

La democracia no sólo supone que haya autoridades generadas

por la voluntad de los propios gobernados, lo que permite compatibilizar la aparente antítesis entre autoridad y libertad, puesto que al provenir la autoridad de quienes gobiernan, del consentimiento libre, voluntario, de los gobernados, esa antítesis desaparece.

Eso no basta para la existencia de la democracia. Nada lograríamos quienes tenemos responsabilidades gubernativas en el ámbito ejecutivo, legislativo o en el ámbito municipal, aunque deriváramos nuestros títulos de la confianza popular, si quedáramos abandonados a nuestra propia suerte para cumplir las tareas de bien público que nuestras respectivas funciones nos exigen. Para que haya un sistema democrático efectivo, la comunidad debe organizarse y participar.

En otros términos, la solución de los problemas en el ámbito nacional, en el ámbito comunal o en el regional, no es tarea sólo de quienes desempeñan los cargos gubernativos o administrativos. Es tarea de la comunidad entera.

De allí la importancia de la organización social, de las juntas de vecinos y de todas las demás formas de organización, que permiten a los distintos sectores de la comunidad ser sujetos activos y participar en la solución de los problemas que les atañen.

En los regímenes autoritarios, inspirados tal vez en las concepciones de viejos sistemas monárquicos, el pueblo es masa, los ciudadanos son súbditos, y se espera que la autoridad que concentra el poder resuelva todo por sí sola. Los problemas que sufre la gente son transmitidos a la autoridad por la vía de peticiones, se suplica a la autoridad o se reclama de ella que los solucione.

En los sistemas democráticos, la autoridad es un servidor público. Está para servir a la comunidad, funda su título en la confianza de la comunidad, pero entiende y necesita que esa comunidad sobre la cual ejerce autoridad no se limite a sentarse a esperar lo que la autoridad hace, ni se limite a formular peticiones para que la autoridad se las resuelva. Esa comunidad de personas, que tiene problemas, debe participar en la búsqueda de las soluciones, sintiéndose co-responsable del bien común.

Entonces, no se limitan a plantear problemas. Junto con detectar los problemas, estudian sus causas, sus características, y avanzan en la proposición de posibles soluciones. Así, entre la autoridad y la comunidad en que se sustenta y a la cual sirve se produce una relación de flujo de comunicación permanente, porque el súbdito deja de ser súbdito, pasa a ser ciudadano; y no espera, como un regalo de la autoridad, que le resuelvan los problemas, sino que colabora con la autoridad en la búsqueda de la solución de esos problemas.

Esto es de la esencia de una democracia viva. Uno de los grandes desafíos que hoy día tenemos en nuestra patria, al haber

recuperado la democracia, es que los chilenos entendamos que ésta no es un don gratuito, que la democracia nos impone la tarea de ser partícipes en el esfuerzo colectivo para solucionar los problemas, para buscar soluciones. Esto exige la organización y la participación.

Y es eso lo que la Municipalidad de Santiago ha estado haciendo, al organizar estos cabildos y al organizar ahora esta Convención, en que personeros de las bases sociales de la metrópolis, junto con sus autoridades, con los alcaldes, con las autoridades gubernativas respectivas, se reúnen con el ánimo de completar un diagnóstico de los problemas de la ciudad, de buscar programas posibles de solución.

Al realizar esta función, se está vivificando el sistema democrático, se le está dando fuerza y se está abriendo camino a una forma de convivencia democrática distinta, porque al reunirse la gente en función de sus problemas, muchas diferencias que nos separan son superadas por los hechos concretos. Ello porque cualesquiera que sean nuestras ideologías, nuestras creencias, y aunque respecto de sistemas filosóficos o de concepciones políticas o ideológicas estemos en posiciones muy antagónicas, frente al problema concreto de la falta de agua potable, del alcantarillado, del aseo, de la urbanización, de la defensa del medio ambiente, de la movilización, de todos los problemas que en una ciudad experimentan y viven los habitantes de los distintos barrios, desaparecen esas diferencias. Esa coincidencia ayuda a superar barreras y ayuda a escoger caminos de búsqueda de acuerdos. En lugar de imponer unos sus soluciones sobre otros, sus criterios sobre otros, el esfuerzo que se hace es el esfuerzo de encontrar puntos de acuerdo. ¿Cuál es la verdadera dimensión del problema? ¿Cuál es el mejor camino de solución? Siempre habrá diferencias, siempre habrá diferentes enfoques, porque los hechos, aunque objetivos, dependen muchas veces, como dice el viejo adagio, "del color del cristal con que se mira". También hay intereses encontrados, y unos pueden defender determinados intereses y otros, otros.

Pero estas diferencias ceden el paso frente a la realidad concreta, frente a la razón fundada libremente y razonablemente expuesta, dentro de un clima de respeto mutuo.

Así, en este esfuerzo que ustedes han realizado en los cabildos, en este esfuerzo que ahora están realizando en la Convención, que ahora van a empezar a realizar, están viviendo democracia, están construyendo democracia.

Una de las tareas de nuestro gobierno es perfeccionar la democracia chilena, llegar a hacer de ella una estructura de convivencia rica, pacífica, sólida, estable, en la cual no sólo los derechos humanos sean respetados —que toda persona sea respetada en su dignidad, que todos tengan el pleno ejercicio de sus libertades culturales, que cada cual pueda ejercer sus legítimos derechos, en que se reconozca

la igualdad en dignidad esencial de todas las personas—, sino también donde, sobre esa base, haya una convivencia colectiva rica, estimulante, creadora. No necesitamos una democracia vacía de contenido. Necesitamos una democracia en que no sólo haya autoridades generadas libremente por el pueblo, instituciones democráticas en que los distintos órganos de la comunidad puedan realizar sus labores conforme a derecho: necesitamos una convivencia en que todos los sujetos se sientan partícipes activos de la tarea de construir el bien común.

Ese es el esfuerzo que debemos hacer. Es una de las tareas que tenemos por delante, tarea vital para que esta democracia eche raíces y para que las distintas personas no se sientan ajenas al destino natural, al destino de la nación o al destino de su ciudad, sino que todos se sientan comprometidos vitalmente con ese destino y aporten sus luces, sus criterios, sus planteamientos. De ese modo se va enriqueciendo la vida colectiva.

Felicito al alcalde de Santiago, a la Municipalidad y a cuantos han participado en este esfuerzo, por la iniciativa promisoría que ello significa, y hago votos porque esta primera Convención abra rumbos para no sólo impulsar el progreso de nuestra capital, sino también para hacer de ella una ciudad de personas activas, comprometidas con el bien común, que no se limitan a esperar la solución de sus problemas, como un don caído de arriba, sino que son capaces, con su propio esfuerzo, con su propia colaboración y con su propia capacidad de diálogo, de ir contribuyendo a lograr, entre todos, el desarrollo, el progreso y prosperidad que anhelamos.

Muchas gracias.

En acto "Promoción y Desarrollo de la Mujer"

Santiago, 28 de noviembre de 1990

Estimadas señoras y señoritas:

En verdad, no entraba en mis planes sino acompañar a mi mujer y a todas ustedes en este acto tan simpático y tan significativo, de una iniciativa de Promoción y Desarrollo de la Mujer, a mi juicio de gran trascendencia, y que responde a las aspiraciones, inquietudes y anhelos profundos de la mujer chilena, especialmente de la comprometida en organizaciones sociales.

En verdad, estoy contento de esta presencia de ustedes y esta iniciativa, y quiero aprovechar de comunicarles, a quienes no estén informadas, una noticia que creo es de interés para todas ustedes. Ayer el Senado aprobó, en general, por unanimidad, el proyecto del Sernam, el Servicio Nacional de la Mujer. Es un paso más. Las cosas no se realizan de la noche a la mañana y ustedes, las mujeres, lo saben mejor que nadie. Pero en estos ocho meses y medio que llevamos, hemos ido avanzando, se ha empezado a hacer las cosas que le dijimos al país era nuestro propósito hacer.

Se aprobó la Reforma Tributaria, que da recursos para la acción social, a fin de pagar la deuda social, especialmente en salud, vivienda, educación. Están por despacharse las leyes presentadas a través del ministro de Justicia, Francisco Cumplido, a las que se les ha dado su nombre, que tienden a hacer respetar los derechos humanos en el ámbito judicial y a resolver problemas que son una herida todavía latente en la sociedad chilena.

Está por salir la ley que crea el Servicio Nacional de la Mujer, y la que crea el Instituto Nacional de la Juventud. Está aprobada en la Cámara de Diputados la reforma constitucional para ir a la democratización de los municipios. Está en el Congreso Nacional el

proyecto del Estatuto Docente, destinado a dignificar y a asegurar la estabilidad en la carrera del magisterio.

Todas estas cosas cuestan, y la gente a veces se extraña por la demora, pero en la perspectiva de la historia, en verdad hemos ido avanzando.

En otro plano, Chile se ha reinsertado en el concierto de las naciones, con prestigio y dignidad. Hoy el gobierno de Estados Unidos anunció el reintegro de Chile en el Sistema General de Preferencias. Esperamos que otras restricciones del pasado desaparezcan también, luego.

Vamos caminando. Hemos pasado por un invierno duro, la sequía nos ha afectado, nos ha afectado la necesidad de hacer un ajuste económico para contener la amenaza de un proceso inflacionario. A pesar de las necesidades de ese ajuste, el gobierno no desatendió sus compromisos, en orden a reajustar las asignaciones familiares, las remuneraciones mínimas, las pensiones mínimas, y está empeñado en programas para mejorar los sistemas de salud, de vivienda y de educación, especialmente para los sectores más postergados.

La crisis del Golfo Pérsico, con el alza del petróleo, nos ocasionó una dura coyuntura que hizo que el alza del costo de la vida se hiciera onerosa en los meses de septiembre y octubre. Pero estamos reaccionando, y todo hace pensar que este mes esa situación cambiará. El Índice de Precios variará en términos bastante aceptables, y la economía chilena recupera un ritmo de actividad que nos permitirá —es lo que el gobierno anhela y hace todo lo posible por conseguir— que no haya chileno sin trabajo, que todos los chilenos tengan oportunidad de trabajar.

¿Por qué les digo esto? Porque frente a la oportunidad de estar con ustedes, me pareció que era útil, ya que me cedieron la palabra, contarles lo que estamos intentando hacer y expresarles que tengo mucha confianza en que, poco a poco, porque jamás prometimos que las cosas se arreglaran de la noche a la mañana, avanzamos por el buen camino. Y tengo la confianza de que con la colaboración de las mujeres y los hombres de Chile, de todos los chilenos de buena voluntad —especialmente de aquellos que tienen sentido social, que sienten que pertenecen a una comunidad y que deben participar a través de las organizaciones que les comprometen sus intereses, sus aspiraciones, sus anhelos de una vida mejor— con la colaboración de todos, vamos a seguir avanzando.

Por eso les digo, tengo mucha confianza en el porvenir, y les doy las gracias por el compromiso que ustedes asumen de participar en este esfuerzo de Promoción y Desarrollo de la Mujer chilena. La mujer representa, desde luego, la mayoría de la población de nuestro país; y representa, además, y eso lo revela la historia, una capacidad

de constancia, de sensatez, de realismo, conciliado con las aspiraciones de progreso, de sentido de responsabilidad que generalmente supera al de los hombres. Y yo apelo a esas virtudes femeninas para que, con coraje, sigamos luchando para construir la patria mejor que todos queremos.

Muchas gracias.

En Seminario "Perspectivas del Cooperativismo Campesino"

Santiago, 13 de diciembre de 1990

He aceptado gustoso la invitación para concurrir a la inauguración de este seminario sobre Perspectivas del Cooperativismo Campesino en Chile, porque realmente creo que el cooperativismo tiene una importancia fundamental para construir una sociedad más participativa y solidaria, que corresponda a los anhelos, principios e ideales que inspiran al actual gobierno de la República.

Quiero empezar por agradecer a la FAO y a su subdirector, el patrocinio que han prestado para la celebración de este seminario, y la colaboración que permanentemente presta para el desarrollo del mundo campesino en el mundo, y especialmente en nuestra patria. Y quiero agradecer muy especialmente al señor subdirector, mi amigo Rafael Moreno, las palabras tan afectuosas —expresión, a mi juicio, fundamentalmente, de la amistad que nos liga, y que me parecen inmerecidas— con que se ha referido a mí.

Todos sabemos que en Chile hay dos realidades en el mundo agrícola: hay una agricultura empresarial, modernizada, con vocación exportadora, altamente tecnificada, que tiene algunos problemas en relación, fundamentalmente, con el servicio de los créditos a que ha recurrido para impulsar su crecimiento. Es una agricultura que ha determinado un gran incremento de la producción nacional, que nos da la satisfacción de haber diversificado de manera importante las exportaciones del país, y que está en un ritmo de crecimiento tanto de su producción como de sus exportaciones.

Paralelamente, hay una agricultura pobre, representada por alrededor de 200 mil pequeños campesinos, que poseen cerca del 30 por ciento de la superficie agrícola del país, que trabajan con métodos muy a menudo anticuados, que no disponen de capitales, que no

han tenido acceso a la tecnología más moderna, que tienen dificultades para la comercialización de sus productos y que son, sin embargo, los que producen la mayor parte de los bienes de consumo agrícola del país y contribuyen de una manera importante a la alimentación de la población nacional.

¿Cómo elevar el rendimiento de esta agricultura? ¿Cómo dar a estos campesinos la posibilidad de mejorar la calidad y rendimiento de sus empresas? ¿Cómo darles seguridad, permitirles comercializar adecuadamente sus productos? Yo diría que éste es uno de los grandes desafíos que los chilenos tenemos por delante, fundamental no sólo para crear una mayor homogeneidad en el mundo agrícola, para incrementar la producción agrícola del país, para resolver el problema de la alimentación, sino también para poner término al problema de la extrema pobreza que aflige al país y mejorar el nivel de vida de la población rural de nuestro Chile.

Esta es una preocupación seria del gobierno. Nuestra política pretende conciliar un impulso decisivo al crecimiento económico, —dentro de un marco de economía abierta, competitiva, de mercado, sobre la base de reglas claras y estables, que le permitan a cada cual trabajar por su cuenta, con confianza y con seguridad— con el propósito igualmente importante y fundamental de establecer en el país condiciones de justicia social. Queremos superar los graves desequilibrios que existen entre los distintos estratos de la población chilena, derrotar la extrema pobreza e incorporar a los sectores más postergados al proceso de crecimiento, como partícipes en el esfuerzo y también en sus frutos. Forma parte del programa de gobierno una preocupación preferente por este sector de agricultura campesina, que requiere ser estimulado para tener acceso al desarrollo a que está llamado.

En este sentido, creo que realmente la primera responsabilidad corresponde al propio sector campesino. En ese sentido, estoy convencido de que el cooperativismo constituye una herramienta poderosa en sus manos para superarse y lograr un efectivo crecimiento y desarrollo.

Me pregunto, ¿hasta qué punto el espíritu cooperativo se concilia con cierto natural individualismo que forma parte de la manera de ser del hombre de la tierra? Creo que éste es un gran desafío: convencer al mundo campesino de la importancia del cooperativismo. Y, en este seminario, sin duda ustedes van a estudiar las formas de hacer atractivo el movimiento cooperativo para el mundo campesino, y de convencerlo de su efectiva utilidad, de comprometer a la gente con fórmulas cooperativas.

Pero admito, al mismo tiempo, que ustedes no tendrían posibilidades de tener éxito en esta tarea, si no hay de parte del gobierno, de las autoridades, una disposición favorable. Hubo un tiempo en

este país en que el cooperativismo tuvo respaldo del Estado y adquirió cierto desarrollo importante. Después hubo una política deliberadamente anti-cooperativa, que condujo a una destrucción de gran parte de lo que se había avanzado.

En esta nueva etapa, Estado y sociedad civil deben cooperar en la tarea de solucionar los problemas que afligen a la colectividad. Y, en ese sentido, en el mundo campesino y en otros ámbitos, una forma de cooperación del Estado con la sociedad civil es facilitar el desarrollo del movimiento cooperativo. Así lo ha hecho el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, Indap, que ha adoptado medidas para facilitar la constitución de las cooperativas campesinas y hacerse cargo de su tramitación ante el Ministerio de Economía. Entiendo que ya se han constituido algunas cooperativas campesinas, por lo menos una en la Novena Región, dentro de esta política, y espero que esto se generalice.

Pero no nos podemos quedar en eso. Sobre la base de unos planteamientos y anteproyectos presentados por la Confederación Nacional de Cooperativas, el gobierno tiene en estudio, en el Ministerio de Economía, un proyecto de reforma a la Ley General de Cooperativas, destinada, precisamente, a facilitar la organización de las cooperativas y a darles a éstas mayor capacidad, mayores poderes, y a facilitar su funcionamiento del modo que sea más eficaz.

Del mismo modo, el gobierno debe abrir —y lo estamos intentando hacer, a través especialmente de Indap— formas de asistencia técnica y crediticia a los pequeños campesinos. Este esfuerzo podría rendir muchos más frutos, en la medida en que se pueda canalizar a través de un movimiento cooperativo campesino sólido, diversificado a través del país.

Es una tarea muy importante la que ustedes tienen por delante. Pienso que los problemas de asistencia técnica, de capacitación, de adquisición de implementos para el cultivo, de semillas, de mejoramiento tecnológico, y especialmente la comercialización de los productos del mundo de los pequeños propietarios, ganaría inmensamente si en este país pudiera desarrollarse un movimiento cooperativo campesino de gran envergadura.

Las tareas que tenemos por delante en el país son tremendas. ¡Es tanto lo que hay que hacer y son tantas las posibilidades! Sin embargo soy muy optimista. Veo que este país tiene inmensas posibilidades, y para realizarlas y lograr superar el subdesarrollo hay muchas tareas concretas que poner en práctica; tantas, que es imposible pensar que pudieran realizarse por la sola acción del Estado. El Estado puede orientar, puede fijar reglas del juego, puede estimular, pero el esfuerzo fundamental tiene que venir de la propia sociedad civil, de los directamente interesados.

Y, en esa tarea, hay espacio para todos. En el mundo campesino, especialmente en el mundo del pequeño campesino, su organización para superar el individualismo y para enfrentar unidos los problemas, aunando esfuerzos a través de la organización cooperativa, es sin duda un instrumento fundamental para lograr las metas que deseamos.

Repito, tengo mucha confianza en el porvenir de nuestra patria y estoy cierto de que el desarrollo en el ámbito campesino de un movimiento cooperativo eficaz, moderno, bien organizado, con capacidad gerencial, es fundamental para colaborar en esta tarea. Espero, en consecuencia, y hago votos, porque este seminario sea un paso importante en esa dirección, a fin de que el campesinado chileno pueda emprender una ruta hacia el progreso, hacia la superación de la pobreza y hacia su pleno desarrollo, en bien de los campesinos, de los pequeños propietarios, y en bien de la población de Chile entero.

Muchas gracias.

En el acto de clausura de la Quinta Conferencia Iberoamericana de Juventud

Santiago, 13 de septiembre de 1991

Señoras y señores:

En primer lugar, permítanme manifestarles nuestra alegría por el hecho de que esta Quinta Conferencia Iberoamericana de Juventud se realice en nuestro país que, hasta hace poco tiempo, estaba al margen de iniciativas como éstas. Agradezco, por lo tanto, la confianza depositada en el Instituto Nacional de la Juventud de Chile, por los países miembros de la Conferencia, al elegir a nuestro gobierno para presidir esta Quinta Conferencia.

Un ambiente nuevo y desconocido impera en nuestro Continente, dejando atrás décadas de dictaduras y populismos, abriendo nuevas oportunidades de integración y desarrollo para nuestras naciones.

Este encuentro juvenil, inserto en el esfuerzo de cooperación y diálogo iberoamericano, coincide plenamente con los objetivos de nuestro gobierno. Estamos empeñados en implementar políticas que tiendan a incorporar activamente a los jóvenes de nuestro país, y también a buscar gradualmente formas efectivas de cooperación entre los pueblos de nuestro Continente, para enfrentar juntos los grandes desafíos que nos demanda nuestro tiempo. Se inserta también en los acuerdos de la Primera Cumbre Iberoamericana de Guadalajara, que busca convertir nuestras afinidades históricas y culturales en instrumentos de unidad y desarrollo, basados en el diálogo, la cooperación y la solidaridad.

Después de 500 años de iniciarse el contacto del Viejo Mundo

con América, ésta sigue siendo el Nuevo Mundo. Somos un vasto Continente, con una enorme diversidad. Tenemos un territorio de 20 millones de kilómetros cuadrados; una población de 440 millones de habitantes; un producto bruto de 800 mil millones de dólares.

Somos una región depositaria de riquezas físicas, recursos biológicos y recursos humanos que no sólo sirven a nuestros propios países, sino que forman parte del patrimonio universal. Y somos un Continente joven, sobre todo porque la inmensa mayoría de nuestra población así lo es.

Esta realidad representa una esperanza y una oportunidad para nuestros pueblos.

Muchas veces, en todas partes del mundo, se habla —como lo recordaba aquí el ministro Silva— de los jóvenes como un problema de la sociedad. La juventud aparece asociada a temas como la drogadicción, la delincuencia, la indiferencia. Yo creo que debemos rebelarnos frente a esa tendencia. Es dañino para los jóvenes y para la sociedad.

Los jóvenes representan una oportunidad y una esperanza para nuestros pueblos, porque sin su fuerza corremos el riesgo de estancarnos; sin su energía, sin su creatividad, sin sus sueños, sus ideales y sus críticas, sin sus exigencias frente a la realidad, sin sus impacencias, no podremos avanzar hacia una sociedad desarrollada y justa.

Pero para que esas condiciones juveniles no sean desperdiciadas, es necesario asumir que los jóvenes representan un sector muy importante de la sociedad y que su participación e integración es un requisito indispensable para responder al anhelo de nuestros pueblos de crecer económicamente y de superar la pobreza; de crecer en justicia.

Durante mucho tiempo, la aproximación al tema social en América Latina fue muy ideologizado y generalizado. Se hablaba de la "clase trabajadora", del mundo de los pobres o del "proletariado", sin que hubiera una segregación de los distintos sectores de la realidad social.

Hoy, en cambio, la sociedad se muestra en su pluralidad y surgen con fuerza los jóvenes y las mujeres, identificados en sus especificidades, como nuevos actores y, por lo mismo, como nuevas prioridades de la acción gubernamental.

Por eso, la marginación de la juventud, a diferencia de ayer, significa no sólo la marginación de una gran parte de la población, sino de un grupo social al que se le reconoce su importancia y su especificidad propia.

Por eso también, el gran desafío que enfrentamos es impulsar la plena participación de los jóvenes en la vida de nuestras naciones, necesaria para el logro de la justicia social y los objetivos del desa-

rollo, como lo indican las orientaciones emanadas del Año Internacional de la Juventud de Naciones Unidas.

Esto significa invertir en los jóvenes y crear espacios para su desarrollo integral, responsabilidad que debe encontrar en el Estado un firme impulsor y promotor de iniciativas mancomunadas que lo hagan posible.

La juventud de nuestros países ha sufrido mucho; ha sido mirada con desconfianza, estigmatizada por las manifestaciones extremas de su marginalidad. Hoy, más que nunca, busca un nuevo sentido para vivir, y en esta búsqueda necesita apoyo.

Por lo tanto, acercarnos a esos jóvenes más marginados, los que no tienen voz por falta de organización y debido a su pobreza, es la tarea más urgente.

En este contexto se enmarca la política juvenil del gobierno de Chile. La creación reciente del Instituto de la Juventud como ente planificador y coordinador, permanente e institucionalizado, es un paso en ese sentido. También lo son el conjunto de medidas y programas de atención en educación, trabajo y recreación, que hemos estado trabajando y que anunciaremos en los próximos días.

Se trata de abrir oportunidades para que la vitalidad de la juventud pueda ponerse al servicio del país.

En un mundo interconectado como el que estamos viviendo, estas tareas trascienden los límites nacionales y requieren de la cooperación pacífica entre todos los pueblos; requieren del intercambio de experiencias y de acciones conjuntas.

En este sentido, nos parece un aporte muy significativo el proyecto de creación de un Centro Eurolatinoamericano de Juventud, orientado hacia la necesidad de integración en la búsqueda del desarrollo, bienestar e igualdad de oportunidades para los jóvenes. Apoyamos esa iniciativa y también la institucionalización de la Conferencia Iberoamericana como un organismo permanente de diálogo, cooperación y acción programática de los jóvenes europeos y latinoamericanos.

Recojo el desafío que me ha formulado el señor representante de las juventudes de España, para decir que el gobierno de Chile y sus jóvenes asumiremos, en la medida de nuestra capacidad y nuestra responsabilidad, la necesidad de plantear, en el próximo encuentro de Sevilla, los puntos de vista, aspiraciones y demandas de la juventud.

Quiero terminar estas palabras haciendo un llamado a vencer la desesperanza y a soñar con un futuro mejor. Max Weber decía que "sólo soñando lo imposible, se hace posible lo posible". En este mundo que privilegia el pragmatismo, corriendo el riesgo de quedar vacío de valores y contenidos, debemos alimentar el idealismo de nuestros jóvenes.

Un idealismo diferente al de los que gritaban "seamos realistas, pidamos lo imposible". Un idealismo que parte de la realidad dejando de lado el voluntarismo estéril, pero que sueña con mejorarla y asume con entusiasmo la tarea de cambiarla con las propias manos.

Los jóvenes están llamados a ser protagonistas en la tarea de consolidar nuestras democracias, fortalecer la paz y lograr el desarrollo de un mundo más humano.

Muchas gracias.

En ceremonia de firma de Acuerdo Marco entre Gobierno, Trabajadores y Empresarios

Santiago, 27 de abril de 1990

He querido estar presente en este acto de suscripción de este acuerdo marco, porque le atribuyo la máxima importancia. Como ustedes recordarán, el día 12 de marzo recién pasado, tan pronto asumí la primera magistratura de la nación, expuse ante el país algunas ideas fundamentales que orientan la política de mi gobierno y señalé que había encomendado a los ministros de Hacienda, Economía y Trabajo, que procuraran convenir con los representantes del mundo empresarial y del mundo laboral, las bases de un acuerdo marco que buscara la concertación social como base o fundamento de las relaciones entre ambos sectores y de la política económica laboral del país.

Sabía entonces de los esfuerzos que ya estaban haciendo la Confederación de la Producción y del Comercio y la Central Unitaria de Trabajadores, para buscar entendimientos entre ellas. Y lo avanzado desde entonces hasta ahora, traducido en el texto que se acaba de firmar, si bien puede no significar un acuerdo global y completo en todos los detalles, marca un espíritu que es fundamental: la voluntad de los sectores empresariales y laborales de Chile, de escoger el camino del entendimiento y no el de la confrontación para buscar solución a los problemas que les afectan.

Pero marca algo más; marca la existencia en el país, en el mundo vinculado a la producción, al comercio y al trabajo, de ciertos consensos básicos en cuanto a criterios fundamentales que deben inspirar nuestra conducta frente a las tareas que tenemos por delante. Chile enfrenta, realmente, un desafío histórico: demostrar al mundo, y demostrarse a sí mismo, que somos capaces de conciliar democracia política con desarrollo, estabilidad, crecimiento y modernización económica y, al mismo tiempo, con justicia social.

Soy un convencido de que sin la conjunción de estos tres factores no hay posibilidad real de éxito, y que sobre la base de buscar la conjunción de estos factores, Chile tiene un porvenir muy promisorio al finalizar este siglo.

Quiero expresar mi reconocimiento a los dirigentes sindicales y empresariales que han contribuido con buena voluntad a lograr este acuerdo. Quiero felicitar por el trabajo que han realizado, y expresar mi complacencia por la cooperación que han prestado, a los ministros a quienes encomendé esta tarea.

Quiero, al mismo tiempo, expresar mi convicción de que si nos mantenemos en este camino, vamos a superar las barreras de los múltiples problemas que debemos enfrentar; las superaremos no en una vana y cruenta, la mayoría de las veces estéril confrontación, sino conjugando esfuerzos de los chilenos para construir la patria grande, libre y buena que queremos.

Gracias a todos y mis felicitaciones más sinceras.

En ceremonia de conmemoración del Día del Trabajo

Santiago, 1° de mayo de 1990

Nos reunimos para celebrar el Día del Trabajo. Así lo hacen en casi todo el mundo quienes se ganan la vida con su esfuerzo diario.

El trabajo tiene una doble significación. Por una parte, de condena: el hombre está forzado a trabajar. Si nos atenemos a las enseñanzas de la Biblia, en el libro del Génesis, fuimos condenados a ganarnos la vida con el sudor de la frente. El trabajo es una especie de esclavitud.

Pero, por otra parte, el trabajo es la forma de realización del destino humano. También el libro del Génesis nos lo dice: el hombre fue puesto sobre la Tierra para henchirla, enseñorearse de ella, someterla. Y el ser humano cumple su tarea de dominar las fuerzas de la naturaleza y ponerlas al servicio de sus necesidades mediante el trabajo.

De este modo, el hombre se realiza en el trabajo, y el trabajo dignifica al ser humano. El campesino que siembra la tierra, el carpintero que construye la casa, el mecánico, el electricista, el profesional, el minero, el empresario, el sabio, el artista, a través de su trabajo van transformando el mundo, van aprovechando las fuerzas de la naturaleza para ponerlas al servicio de un mayor bienestar para la humanidad.

El desarrollo y el progreso de la humanidad es fruto, fundamentalmente, del trabajo humano.

Pero esta fiesta celebra especialmente la dignidad de una especie de trabajadores, del trabajador asalariado, del que cambia su trabajo por una remuneración que le permite vivir. Esta fiesta celebra la lucha de las organizaciones de los trabajadores, que desde hace más de un siglo reivindican los derechos del asalariado, del hombre de trabajo.

Esa lucha, en definitiva, persigue la justicia, persigue crear condiciones verdaderamente humanas para el desarrollo del trabajo y para la vida de los trabajadores. El gran desafío de los trabajadores y de la sociedad entera en nuestro tiempo, es lograr humanizar las condiciones del trabajo humano; lograr que el hombre no sea esclavo de su trabajo, que el trabajo no se convierta en una rutina, que el trabajo no sea forma de explotación humana, sino que permita, a todo trabajador, realizar plenamente su personalidad, aportar su capacidad creativa, crearse mejores condiciones para sí y los suyos.

Este año, como lo recordó Manuel Bustos, celebramos esta fiesta del trabajo en libertad y con nuevas esperanzas. Después de casi 17 años, estamos reconstruyendo nuestra democracia. Esa democracia que con tanto sacrificio ustedes, los trabajadores chilenos, contribuyeron a reconquistar, y que juntos, todos los chilenos, debemos consolidar y defender.

Cómo no recordar, en esta hora, que fue el movimiento sindical, por allá en los comienzos de 1983, uno de los primeros que venció el miedo impuesto por la dictadura y encabezó la lucha por la democracia. Cómo no recordar a tantos trabajadores y dirigentes sindicales perseguidos, encarcelados, exonerados, exiliados. Cómo no rendir homenaje a los que desaparecieron o fueron asesinados por el solo hecho de ser dirigentes sindicales, o perdieron la vida en su lucha por la libertad.

Cómo no recordar, como símbolo de todos ellos, al dirigente de los trabajadores fiscales, a Tucapel Jiménez, vilmente asesinado.

La conciencia nacional exige esclarecer la verdad, no para engolfarnos morbosamente en el pasado, ni para buscar odiosas venganzas. Sí para hacer justicia a los caídos y por un deber ineludible de saneamiento moral.

El pueblo chileno quiere superar los odios, no quiere más guerra. Quiere paz. Pero la paz sólo puede construirse sobre las bases de la verdad y de la justicia. Por eso hemos constituido la Comisión de Verdad y Reconciliación, por eso los indultos a muchos presos políticos y las leyes que pretenden permitir solucionar y hacer justicia a todos los demás. Por eso nuestro proyecto de ley para promover el retorno de los exiliados.

No se trata, como se ha dicho, de querer enjuiciar al régimen pasado, ni menos de querer desacreditar moralmente a las Fuerzas Armadas. Formular tales suposiciones revela mucha pequeñez de espíritu. Basta ver la calidad personal de los integrantes de la Comisión para descartar tan odiosas suposiciones.

¿No se han dado cuenta, quienes tan mezquinamente nos suponen intenciones, de la generosidad con que mi gobierno y los partidos de la Concertación Democrática estamos procediendo respecto del pasado? Pero nosotros no queremos mirar al pasado, sino en cuan-

to sea indispensable, porque eso sería reavivar los odios y las divisiones, y no es lo que Chile necesita. Felizmente, la gran mayoría de los chilenos quiere otra cosa, quiere mirar hacia el futuro, quiere superar las disputas, quiere buscar entendimientos, quiere construir entre todos una patria unida para todos los chilenos.

Ejemplo de este espíritu constructivo es el acuerdo marco entre trabajadores, empresarios y gobierno, suscrito el viernes último. Puede que haya quienes, sin valorizar todos los antecedentes, reaccionen en contra. Pero yo pienso que ese acuerdo corresponde a un espíritu nuevo, que interpreta a la inmensa mayoría de los chilenos.

Rindo homenaje a quienes se esforzaron para convenirlo; rindo homenaje a su patriotismo, a su visión de futuro y al coraje que demostraron. Los mismos dirigentes sindicales que no tuvieron miedo de luchar contra la dictadura y que por hacerlo fueron a la cárcel o al destierro, como Bustos y Martínez, fueron ahora capaces de vencer el miedo al qué dirán; de vencer el miedo que a algunos produce el romper viejos esquemas, superar juicios caducos y afrontar el futuro en busca de nuevas formas de relaciones laborales, acordes con las nuevas realidades del mundo que está naciendo en este fin de siglo.

El mundo está cambiando. Nosotros, en Chile, también. Lo que acontece en Europa, en el Oriente, es signo de que el hombre busca nuevas formas de convivencia que superen los esquemas ideológicos; busca afirmar, por sobre todo, la dignidad de la persona humana; busca soluciones de justicia pero, a la vez, realistas; prefiere el entendimiento y afirma la libertad antes que el odio y la violencia; no quiere imposiciones por la fuerza, sino conquistas por la vía de la razón y del ejercicio del derecho.

El acuerdo marco a que me refiero tiene para mí cinco grandes significados: significa, en primer término, el surgimiento de un nuevo espíritu en las relaciones entre trabajadores y empresarios, la búsqueda de acuerdos en vez de la confrontación; significa, en segundo término, la afirmación del papel fundamental de las organizaciones sindicales y empresariales, libres, autónomas, en la solución de sus problemas y en la construcción del futuro. Ya no se espera todo del gobierno. No se trata de que unos y otros tiren a los ministros de Estado y a los parlamentarios en busca de sacar leyes a favor de unos y otros. Se trata de entender que la tarea es común y que las organizaciones legítimamente representativas de trabajadores y empresarios son capaces, autónomamente, de discutir entre ellas, de defender sus respectivos derechos y de buscar soluciones de justicia y realismo.

Significa, en tercer término, el surgimiento de una nueva conciencia colectiva respecto a que el mejoramiento de los trabajadores va inexorablemente unido al éxito de las empresas y al desarrollo

de la economía nacional. Para mejorar a los trabajadores no basta repartir. Tenemos que crecer. Como lo dije al asumir la Presidencia el 12 de marzo pasado: si repartiéramos por igual el ingreso nacional entre los 12 millones de chilenos, nadie quedaría satisfecho. Tenemos que hacer crecer a nuestro país, para que produzca todo lo necesario, para que todos los hogares chilenos puedan llegar a un nivel de vida digno y verdaderamente humano. Esto significa más inversiones, más tecnología, mayor productividad en el trabajo, más exportaciones, búsqueda de nuevos mercados y todo eso supone eficiencia en el manejo de la actividad económica. Eso significa empresarios eficientes y trabajadores eficientes.

Tenemos necesidad de mejorar nuestras capacidades de rendimiento, tenemos que hacer de la calidad una norma fundamental en nuestras conductas. Hacer las cosas bien. Tenemos que ser capaces de hacer las cosas bien, todos, cada cual en su esfera: la autoridad de gobierno en lo suyo, los empresarios y los trabajadores en lo suyo, el Parlamento en lo suyo, la Justicia en lo suyo.

Significa, en cuarto término, el reconocimiento colectivo de la necesidad de los equilibrios macroeconómicos y de la estabilidad de las reglas del juego. Un país, como una familia, no puede gastar más de lo que gana. Inversionistas, trabajadores, contribuyentes, ciudadanos, necesitan saber a qué atenerse. Necesitamos mantener esos equilibrios, presupuestos financiados, balanza de pago equilibrada, reglas claras y estables, que den seguridad a unos y otros.

Significa, finalmente, la afirmación conjunta, hecha por trabajadores, empresarios y gobierno, de la voluntad nacional de enfrentar esa tarea del desarrollo patrio sobre la base de la justicia social. No se trata sólo del gobierno, ni de los empresarios, ni de los trabajadores. Es tarea conjunta de todos.

Algunos me dirán: "el ingreso mínimo de 26 mil pesos mensuales es poco; la asignación familiar de 1.100 pesos por carga a los que ganan hasta 50 mil pesos, y de 800 pesos a los que ganan entre 50 y 70 mil pesos, es poco". Estoy de acuerdo, es poco. Hubiera querido poder elevar más las asignaciones y los ingresos mínimos, las pensiones mínimas y, sobre todo, las asignaciones familiares. Pero, ¿qué sacaríamos con elevarlos más, si muchas empresas pequeñas no pudieran pagarlos y surgiera nuevamente, o se acrecentara, el fantasma de la cesantía? ¿Qué sacaríamos con elevarlos más si el aumento se lo comiera la inflación?

Amigas y amigos trabajadores:

Les hablo desde el fondo del corazón. He visto lo que ha ocurrido en naciones hermanas al reconquistar su democracia. Junto con ha-

cerlo, quisieron devolver a los trabajadores todo lo que habían perdido por la dictadura, y aumentaron las remuneraciones, los salarios, los beneficios, en un 100 por ciento o en más. ¿Y qué pasó? Todos lo sabemos. Lo hemos visto y lo estamos viendo. La inflación sobrevino arrolladoramente; alzas del costo de la vida; desvalorización monetaria de 50 por ciento mensual, 100 por ciento mensual, 1000 por ciento anual; inestabilidad total para el mundo del trabajo. Y todos sabemos que cuando la inflación sobreviene, los precios suben más rápido que las remuneraciones; las remuneraciones nunca alcanzan a llegar a los niveles de las alzas, y los primeros y más sacrificados son los trabajadores que viven de un sueldo o un salario.

Por eso mi gobierno tiene el deber de asumir este problema con profunda responsabilidad. No vamos a ir de un salto. Nos vamos a demorar, pero "qui va piano, va lontano"; quien va lentamente, pero sobre bases sólidas, avanza firmemente para llegar a la meta apetecida.

Este es sólo el primer paso. Al proyecto de ley sobre remuneraciones, asignaciones familiares y pensiones mínimas, seguirán otros. Legislaremos sobre las organizaciones sindicales y su financiamiento. Queremos organizaciones sindicales fuertes, representativas de la mayoría de los trabajadores chilenos, y queremos que ellas tengan un adecuado financiamiento. Respetamos el principio de la libertad sindical, pero pensamos que es justo que todos los que se benefician con la acción de los sindicatos, contribuyan a su financiamiento y mantención.

Legislaremos para otorgar personalidad jurídica a las Centrales Sindicales, a fin de que puedan ejercer la plenitud de sus derechos con una base sólida y sin inseguridad ninguna. Mientras se despacha esa ley, y mientras se despacha la ley que resuelva sobre la situación de los bienes confiscados a organizaciones sociales y a partidos políticos, mi gobierno ha decidido entregar en comodato, como préstamo, a la Central Unitaria de Trabajadores, una casa en el centro de Santiago, que le sirva de hogar para realizar sus actividades.

Legislaremos para reformar el sistema sobre término del contrato individual de trabajo y las indemnizaciones. Queremos dar estabilidad, sobre bases realistas, a la situación de los trabajadores. Legislaremos sobre la negociación colectiva, para permitir que las organizaciones sindicales puedan tratar en condiciones de igualdad, de equidad, con los empresarios la negociación de las condiciones de trabajo.

Impulsaremos todas estas reformas laborales y las demás, para obtener relaciones de trabajo justas y equilibradas, definiendo sus términos con participación de las organizaciones sindicales y empresariales. No queremos imponer las reglas. Queremos que esas

reglas sean, en lo posible, fruto de acuerdos equitativos entre las partes interesadas. Pero si tales acuerdos no se produjeran, el gobierno no faltará a su deber de proponer al Congreso los proyectos de ley que considere de justicia para modificar la legislación laboral y la legislación sindical, a fin de que se haga un reconocimiento efectivo de los derechos de los trabajadores.

También legislaremos sobre las situaciones previsionales, que afectan a algunos sectores. Queremos, primero, establecer reglas generales para todos y después ir resolviendo, también, las situaciones de distintos sectores que urge considerar. Aquí hay presentes representantes de trabajadores exonerados. Ese es un problema de justicia que el gobierno tiene que considerar y que está considerando, dentro de sus posibilidades. Han sido reincorporados, o se han establecido normas claras para reincorporar a los trabajadores injustamente exonerados de la Empresa de Ferrocarriles y también de la Corporación del Cobre, Codelco. Hemos convenido normas en el Ministerio de Educación para el reintegro por etapas, progresivo, de los profesores exonerados por razones políticas.

También hemos impartido una norma a todos los Ministerios, de considerar la situación de los exonerados, para que puedan postular con preferencia para llenar las vacantes que se produzcan. Queremos buscar formas equitativas y razonables para solucionar este problema. Pero los afectados tienen también que entender que no se puede, de la noche a la mañana, sin producir un descalabro en la administración o en cualquier empresa, incrementar el número de trabajadores, reincorporando automáticamente a todos los exonerados. Lo haremos con justicia y de un modo efectivo para ir solucionando el problema e ir, al mismo tiempo, manteniendo y mejorando el nivel y la calidad de la administración y de las empresas.

Amigas y amigos trabajadores:

Alguien dijo, hace no mucho: "hay que cuidar a los ricos porque son los que dan la plata". Yo digo: hay que cuidar a la gente y, especialmente, a los que más necesitan cuidado, a los trabajadores y a los pobres de Chile.

En estas frases, se perfila claramente la diferencia sustancial entre dos estilos de gobierno: el de los que esperan todo o de los ricos o de los tecnócratas o de la fuerza de la autoridad, y el de los que esperamos todo de la acción conjunta de un pueblo que con espíritu de justicia, con sentido de fraternidad, trabaja unido para superar sus problemas y lograr el bienestar que aspira.

Por eso, porque para mí hay que cuidar a la gente antes que

nada, nos preocupan preferentemente, y serán tareas fundamentales de mi gobierno, la salud de los chilenos, la educación de los niños de Chile, la educación de los jóvenes, que aprendan a ganarse la vida y ser ciudadanos útiles para la patria; la vivienda para las familias, especialmente para los más pobres, para los que viven de allegados y no pueden construir su propio hogar.

Por eso, porque queremos, primero que nada, cuidar a la gente, es que seremos inflexibles en exigir el cumplimiento de las leyes sociales, especialmente en lo relativo a las remuneraciones mínimas, a los derechos de las madres y de las mujeres, a los derechos de los dirigentes sindicales y, sobre todo, a las condiciones de seguridad en el trabajo.

Progresivamente iremos asumiendo los problemas y enfrentando la solución de los que afectan a distintos sectores: los trabajadores temporeros, los deudores habitacionales, los deudores de crédito fiscal y, sobre todo, los jóvenes chilenos que egresan de la Enseñanza Media, o salen a mitad de camino de ella, y no tienen destino, porque Chile no les ofrece posibilidades reales, y porque la educación que recibieron no los capacita para ganarse eficientemente la vida. Esa es una tarea fundamental de mi gobierno.

Amigas y amigos trabajadores:

Tenemos un gran desafío: lograr consolidar nuestra democracia. Y eso significa la democratización del municipio, significa reformas constitucionales para asegurar que el pueblo sea el actor de su destino, para asegurar que dentro de un Estado de Derecho todos podamos participar en la construcción de la patria que queremos, y el gobierno sea expresión de la voluntad de la mayoría sobre la base del respeto a los derechos de las minorías y a los derechos inalienables de todo ser humano.

Eso significa desarrollar nuestra economía. Tenemos que ser capaces de incrementar la producción de nuestro país, de abrir nuevas fuentes de trabajo, de proporcionar trabajo a todos los chilenos; trabajo estable, trabajo bien remunerado. Pero eso no se hace con leyes ni con palabras: eso se hace con esfuerzo, con reglas claras y estables, con estímulos; estímulos al empresario, pero estímulos también al trabajador, que lo necesita tanto o más que el empresario.

Nuestro desafío es lograr democracia, desarrollo económico y justicia social. Sin justicia social no habrá democracia estable ni economía próspera. Esa es una convicción profunda de cualquier demócrata. Y yo llamo a todos los chilenos a entenderlo así.

Necesitamos para ello una nación unida; necesitamos superar los odios del pasado, los esquemas ideológicos, y actuar con sentido

fraterno, buscando el entendimiento y la reconciliación, caminando hacia la paz que todos anhelamos.

Yo tengo fe en que somos capaces de hacerlo. Chile es un país de gente valiosa. Ya lo dijo Ercilla: "la gente que produce es tan granada". ¿Qué quería decir? Era gente de selección. Los chilenos —el empresario, el intelectual, el profesional y también el obrero, el campesino, el minero, el trabajador de la industria— son seres inteligentes, despiertos, con iniciativa, con capacidad creadora. Yo he sentido orgullo cuando en el extranjero me han hablado de la calidad del obrero chileno, que tiene inventiva, que tiene capacidad de creación, que con medios pobres es capaz de superar las dificultades y ayudar a que su empresa prospere.

Chile, en el campo físico, no es sólo una hermosa nación; no sólo amamos nuestra cordillera, nuestro mar y nuestros valles, nuestros ríos y nuestros lagos: Chile tiene riqueza, una riqueza difícil de extraer, pero una riqueza múltiple, y así como el desierto del norte y la cordillera nos proporcionan minerales en cantidades y calidades como pocos países de la Tierra, los bosques del sur nos proporcionan posibilidades de madera y celulosa y de otras industrias derivadas, y el Valle Central, con su clima privilegiado, nos proporciona la posibilidad de producir las frutas más ricas y apetecidas en el mundo entero. Estas son posibilidades que tenemos a nuestro alcance.

Tenemos que ser capaces de utilizar estas posibilidades, y eso depende de nosotros.

Hay proyectos de inversión del sector privado para los próximos cuatro años por 12 mil millones de dólares, y del sector público para infraestructura, para las obras indispensables que en los últimos años estuvieron muy por debajo de las necesidades del país. Chile tiene un cuello de botella en puertos, en caminos, en obras de riego, en infraestructura en general, y tenemos que ser capaces de crear esa infraestructura para que sea posible seguir produciendo riqueza, trasladándola de un lugar a otro, pudiendo exportarla para conquistar nuevos mercados.

Para todo esto necesitamos empresarios con iniciativa, trabajadores esforzados, espíritu de justicia; necesitamos voluntad de unión y de salir juntos adelante. Lo vamos a hacer con el esfuerzo de todos; lo vamos a hacer, trabajadores chilenos, gracias a ustedes, con el esfuerzo de ustedes, y así nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tendrán el país que nosotros anhelamos.

Muchas gracias.

En asamblea sindical ampliada de mineros del carbón

Lota, 10 de agosto de 1990

Gracias por todo lo que he visto hoy día; gracias por vuestra calurosa recepción. Créanme que, junto con expresarles un saludo y en ustedes a todos los trabajadores mineros de Chile, en este Día del Trabajador Minero, siento la necesidad de hacerles sentir cuánto me ha impresionado esta visita.

Yo era un muchacho de diez o doce años cuando leí, hace mucho tiempo, a Baldomero Lillo, *Subterra*, hijo de esta tierra. Creo que fue una lectura determinante en mi vida. Me hizo comprender, desde pequeño, la dureza de la vida del pobre, y sobre todo la dureza de la vida del trabajador minero, y en especial la del trabajador del carbón.

He dicho en alguna oportunidad que he sentido desde entonces, desde joven, que mi paso por la Tierra debía ser un servicio a la causa de la justicia, y porque queremos justicia nos hemos comprometido en la vida política. Porque la justicia supone cambio de las condiciones sociales, y eso sólo se puede lograr mediante procesos profundos, realizados por la acción de los gobiernos.

Entonces, estar aquí hoy día, recibidos por ustedes con tanto cariño, puede ser fruto, en alguna medida, de esa decisión de consagrarme a luchar por la justicia, para todos los chilenos, y en especial para los trabajadores chilenos.

Sé muy bien lo que nos dijo vuestro dirigente Jaime Ramírez: no todos los trabajadores del carbón, sino una minoría, pueden trabajar con los métodos modernos que yo acabo de ver. Y así y todo, con esos métodos modernos, el viaje de media hora al interior de la mina, y otra media hora para salir de ella; la internación en los túneles, la oscuridad, da al trabajo de ustedes una dureza que no

tienen otros trabajos, y bien sé que la mayoría trabaja en condiciones extremadamente difíciles.

Por eso es que siento, y es un compromiso nuestro, que debo procurar dar respuesta a las inquietudes de ustedes; procurar que cuando queremos construir una patria en que haya más justicia, se parta por intentar resolver los problemas de aquellos sectores que están más atrasados.

Ahora, yo quiero contestar los principales planteamientos que he escuchado esta tarde, de parte de vuestros dirigentes. Quiero decirles, en primer lugar, que comparto plenamente los planteamientos formulados por Jaime Ramírez, respecto de los grandes desafíos que tenemos en esta hora los chilenos. En conjunto, hemos recuperado la libertad, estamos viviendo bajo un régimen que respeta a la gente, que escucha a la gente, que procura solucionar los problemas de la gente, aunque eso no podemos lograrlo en el corto plazo. Recién estamos empezando.

Tenemos, al mismo tiempo, que demostrar que es posible en Chile conciliar una democracia en que haya libertad, respeto y participación de todos, con progreso, crecimiento económico, estabilidad y, junto con ello, justicia social: resolver los problemas de los que más lo necesitan; comprometer a todos en el esfuerzo sobre la base de que los beneficios no van a ir sólo para unos pocos, sino que todo el que participa en este esfuerzo va a tener una retribución que corresponda a ese esfuerzo, va a participar en el fruto de ese progreso.

Tenemos que estabilizar nuestra democracia, y ello significa restablecer una convivencia en paz entre todos los chilenos. La paz se construye sobre las bases de la verdad y de la justicia. Tenemos que esclarecer la verdad sobre situaciones que son heridas abiertas en el corazón de grandes sectores de chilenos.

Yo creo mi deber rendirle hoy día un homenaje de recuerdo a quien fue sin duda para mí un adversario político, pero que era un hombre aquí muy querido y respetado. Me refiero a vuestro regidor, al alcalde y gerente de Enacar, Isidoro Carrillo.

Si hemos constituido una Comisión de Verdad y Reconciliación, lo hemos hecho porque creemos que la conciencia nacional exige avanzar en el camino de esclarecer la verdad, de que se haga justicia, de que todas las familias heridas por las violaciones de los derechos humanos, puedan tener, al menos, el consuelo de reconocer los restos de sus desaparecidos.

Y a quienes me preguntan por la libertad de los presos políticos, les digo claramente: la voluntad de mi gobierno es —por las vías legales, porque estamos en un Estado de Derecho, porque no podemos hacer las cosas al margen de la ley— encontrar soluciones lo más pronto posible, para que nadie pueda seguir injustamente en la cárcel.

Por eso hemos enviado al Congreso Nacional las llamadas "Leyes Cumplido", nombre que deriva del nombre del ministro de Justicia, que ya fueron despachadas. Demoraron bastante, no por culpa de la Cámara, sino porque el mecanismo democrático, así como tiene sus ventajas —el respeto a la gente, la oportunidad para que todos participen—, tiene también la contrapartida de que las cosas suelen demorarse, porque se oyen todas las opiniones, hay discusión. Yo espero que dentro de un plazo breve salgan esas leyes del Senado y, mediante su aplicación, podamos resolver el problema de la mayor parte de las personas, y ojalá de todos los que aún permanecen en prisión.

En relación a los temas específicos del carbón, quiero decirles que el gobierno está seriamente preocupado de encontrar soluciones sindicales. La producción nacional representa más o menos los dos tercios del consumo nacional de carbón. Producimos 2 millones 400 mil toneladas, y consumimos 3 millones 800 mil toneladas.

La mayor parte de ese carbón se produce aquí, en la Octava Región, en Lota, en Coronel, en Curanilahue en la provincia de Arauco, en el Golfo de Arauco. Otra parte se produce en la Décima y en la Undécima Región.

¿Saben ustedes que el costo de producción de nuestro carbón está por encima de los precios del carbón a nivel internacional? Y eso, indudablemente, nos exige un gran esfuerzo.

Podríamos, para evitar la competencia del carbón internacional, simplemente hacer lo que ha sugerido aquí Jaime Ramírez: elevar los aranceles al carbón importado. El problema es que esa solución, no tiende a mantener equilibrios, sino que distorsiona las posibilidades de todos en el inmenso potencial de desarrollo económico que el país tiene hoy día, y que el mundo tiene cada vez más, en un sistema de economía liberado.

Tenemos, sin embargo, que buscar mecanismos, porque no nos podemos quedar simplemente de brazos cruzados, perder esa riqueza y dejar a los 14 mil chilenos que viven directamente del trabajo del carbón con riesgo de cesantía, si no enfrentamos el problema.

El gobierno está preocupado de eso. En la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Minería, hemos escuchado planteamientos sobre la creación de un Fondo Nacional para el Desarrollo del Carbón. Nos parece que puede ser una iniciativa eficaz. Pensamos que debemos buscar la solución entre todos, y ustedes pueden tener la certeza de que en ella serán escuchados y tendrán participación tanto los empresarios del mundo que trabaja vinculado al carbón, como los trabajadores del carbón, a través de sus dirigentes sindicales responsables.

Planteaba Jaime Ramírez la necesidad de una política de ener-

gía. Yo le digo que el gobierno está preocupado, y en relación a la nueva mina para Carampangue, está ya aprobado por la Comisión Nacional de Energía, que preside el ministro Jaime Tohá, el estudio de factibilidad de esa operación. Y en relación a la competencia desleal que significa la comercialización de carbón extranjero por Chilgener, les puedo expresar que, por gestiones del gobierno, precisamente a través de la Comisión de Energía, se ha obtenido el compromiso de Chilgener de no proceder más a comercializar carbón extranjero.

En relación a los problemas de los trabajadores, relacionados con los roles; a los problemas de los trabajadores de subcontratistas, quiero decirles, primero, que advierto que hoy día en esta empresa hay una relación fluida entre los dirigentes sindicales y la administración de la empresa. Espero que esa relación permita ir buscando, de común acuerdo, hablándose recíprocamente con franqueza, las soluciones más eficaces.

No creo que sea bueno que el gobierno intervenga en todo. Cómo se ha de manejar la empresa es una cosa que, para el éxito de la empresa, interesa fundamentalmente a sus propios trabajadores, profesionales y elementos directivos. Entre ustedes tienen que encontrar la fórmula.

En cuanto a los trabajadores de contratistas, yo diría, como criterio general, que no me parece buen criterio encomendar a contratistas particulares trabajos que, por su naturaleza, son permanentes. Entonces, de acuerdo con eso, se puede ir determinando qué trabajos realmente deben estar a cargo de contratistas, y qué trabajos, por ser permanentes en la empresa, deben ser realizados por trabajadores directos de la empresa.

Hemos encargado al Ministerio del Trabajo, específicamente a la Superintendencia de Seguridad Social, que estudie la forma de adecuar nuestra legislación, o de encontrar un procedimiento que permita que los trabajadores que trabajan en trabajos especialmente duros, como son específicamente los del carbón, puedan jubilar anticipadamente y no tengan que esperar los 65 años de edad para poder hacerlo.

En la mayor parte de las legislaciones del mundo se contemplan normas especiales para esos efectos, y pienso que nosotros en esa materia estamos actualmente en una situación de injusticia que debemos corregir.

Yo asumo el compromiso de que, durante mi gobierno, encontraremos una solución a ese problema. Al mismo tiempo, recojo las palabras de vuestros dirigentes, en el sentido de que en un régimen en el cual la previsión se financia fundamentalmente por los propios interesados, cualquier reforma destinada a mejorar el beneficio u obtenerlo antes de lo corriente, significa un costo al cual se debe

buscar financiamiento. Tenemos que encontrar el procedimiento adecuado para financiar la provisión con equidad, con participación de trabajadores, de empresarios, eventualmente del propio Estado, de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Como aquí se ha sugerido, hay que estudiar el mecanismo que permita financiar de manera eficaz el otorgamiento de pensiones en edad adecuada al esfuerzo de quienes trabajan con un desgaste físico superior al común de los trabajadores y que, en consecuencia, sufren un natural deterioro mayor.

Quiero decirles, en relación al tema de la vivienda, que a ustedes les preocupa, que estamos decididos a abordar el problema de manera preferencial. Esperamos, en lo que resta de este año, construir aquí en Lota 400 viviendas, en combinación con la Cooperativa Enacar. Esperamos solucionar el problema de la erradicación del campamento y de construcción de viviendas para poner fin a ese campamento. Y esperamos abordar la remodelación del centro de Lota. Esos son programas que forman parte de decisiones ya adoptadas por nuestro gobierno.

En relación al tema de los pirquineros, el gobierno tiene clara conciencia de las dificultades en que trabajan. Estamos organizando, por una parte, la cooperación del Servicio de Cooperación Técnica, de los planes del Ministerio de Planificación y Coordinación, para que puedan apoyar con asistencia técnica a los trabajadores pirquineros.

Pensamos que es indispensable velar por la seguridad en el trabajo de todos los mineros de Chile, específicamente de los pirquineros, y tenemos cabal conciencia de que ello no es posible con un sistema en que sólo hay uno o dos inspectores del Servicio Nacional de Geología y Minas, Sernageomin, como entiendo que sucede en esta Región. Hemos tomado la decisión de aumentar el personal de inspectores. Sentimos que lo primero que un gobierno tiene que hacer es cuidar a su gente. El bien mayor que tiene un país es su gente y, en consecuencia, hay que asegurar condiciones de trabajo que por lo menos defiendan su vida.

El tiempo ha pasado. Sólo quiero decirles, para terminar, que estamos empezando una tarea hermosa, la tarea de construir un Chile en que todos nos sintamos hermanos, en que haya oportunidades para todos. Es una tarea tan hermosa como difícil, porque tenemos recursos limitados, porque hay problemas de gobernabilidad y estabilidad del sistema, porque tenemos que ser capaces de demostrar que somos maduros y no apurar el tranco y dar saltos en el vacío.

Estamos trabajando, en mi gobierno, todos los sectores comprometidos en él, con un gran sentido unitario, con una gran homogeneidad, como equipo, tratando de llevar adelante el com-

promiso que tomamos con el pueblo de Chile en las bases programáticas que presentamos para la elección pasada.

Pensamos que esto debe ser hecho no con un ánimo revanchista, ni en el de exacerbar las diferencias con nuestros adversarios, sino procurando —en la medida de lo posible, pero sin claudicar de nuestros propósitos y de nuestro compromiso— asegurar la libertad y la justicia social y, al mismo tiempo, impulsar el crecimiento económico, buscando el máximo de acuerdo con todos los sectores, con el fin de aunar fuerzas para salir adelante.

Yo les pido a ustedes —parte doliente de nuestra patria, parte de los chilenos más postergados, de los que tienen más limitaciones, de los que trabajan en las más duras condiciones, de una parte del país donde hay más desocupación—, les pido que comprendan a este gobierno. Es un gobierno que quiere levantar el nivel de ustedes, que ha dado pasos para avanzar en ese camino. Les pido que comprendan que cuando elevamos las remuneraciones mínimas, las pensiones, las asignaciones familiares; cuando condonamos las deudas de los deudores morosos de luz, de agua potable; cuando creamos un sistema para que los deudores del Serviu puedan reprogramar sus deudas y, pagando una pequeña cantidad durante el año, obtener la condonación del saldo; cuando estamos abriendo caminos para el cambio de la legislación del trabajo, para que los trabajadores sean respetados y no estén al arbitrio del capricho del patrón; cuando estamos intentando obtener del Congreso una ley que permita que la organización sindical tenga verdadera capacidad de negociación, en condiciones de equidad; cuando hemos obtenido una reforma tributaria destinada en un 90 por ciento a cubrir el gasto social para mejorar los servicios de salud, de educación y de vivienda para los sectores más pobres de los chilenos, para pagar lo que llamamos “la deuda social”; cuando estamos haciendo todo esto, yo creo que vamos caminando en la dirección correcta, en la dirección de la justicia, de la reconciliación, en la dirección de crear una patria efectiva para todos los chilenos.

Para eso les pido su ayuda, les pido su comprensión, y pueden ustedes tener la certeza de que este gobierno estará siempre con los ojos abiertos y los oídos prontos a escuchar sus necesidades y a procurar atenderlas.

Muchas gracias.

En ceremonia de firma del Acuerdo entre Gobierno, CUT y Empresarios

Santiago, 30 de abril de 1991

Señoras y señores:

En verdad no voy a pronunciar un discurso. Simplemente quiero felicitarlos y felicitarlos a ustedes por la suscripción de este Acuerdo. Creo que constituye un nuevo paso, positivo, dentro del esfuerzo que estamos haciendo a nivel nacional, por lograr grandes acuerdos para resolver los problemas que interesan a la colectividad.

Los abogados solemos decir que "más vale un mal acuerdo que un buen pleito". En verdad, yo sé que, en este caso, trabajadores y empresarios han cedido en lo que consideraban sus legítimas expectativas o puntos de vista. Lo han hecho después de arduos debates, en que se han abordado los temas que estaban en discusión, con seriedad, con criterios técnicos.

Creemos que lo fundamental es que haya estabilidad en nuestra economía, que ésta pueda crecer y lo haga con justicia, sobre bases de equidad.

Indudablemente para nadie el Acuerdo puede ser todo lo que esperaba; sin embargo, quiero agradecer el espíritu responsable que trabajadores y empresarios han demostrado para poder llegar a él, ya que constituye un paso positivo para la estabilidad de nuestra economía y para el mejoramiento de las condiciones sociales de nuestro país.

Gracias, y felicitaciones.

En acto de celebración del Día del Trabajo

Santiago, 1° de mayo de 1991

Amigas y amigos todos, trabajadores de Chile:

Estoy aquí para traer el saludo del gobierno a los trabajadores de mi patria, a sus organizaciones sindicales, a quienes luchan por la defensa de los derechos y la dignidad del hombre de trabajo.

La fiesta del Primero de Mayo conmemora esa lucha, lucha de los trabajadores por condiciones de vida humana, por respeto a su dignidad, por justicia en las relaciones laborales, por progreso.

No puedo dejar de recordar los orígenes del movimiento sindical en nuestra patria: las mutuales, las mancomunales, la FOCH, la CTG, hasta llegar a la CUT; la lucha de los obreros del salitre, de los obreros del cobre, de los campesinos chilenos, de los obreros de las industrias; lucha en que muchos cayeron y a la cual muchos entregaron lo mejor de sus vidas.

No puedo dejar tampoco de recordar el papel fundamental que el movimiento sindical chileno ha tenido en la defensa de la libertad, de la dignidad humana, y en la lucha del pueblo de Chile por reconquistar su democracia.

Creo que es oportuno, en este momento, rendir homenaje a los grandes líderes, o a las personas que con su acción fueron los máximos representantes del sindicalismo chileno, o hicieron en el pasado con sus ideas un aporte fundamental para la defensa de los trabajadores. Me refiero, especialmente, a Luis Emilio Recabarren, al Padre Alberto Hurtado, a Tucapel Jiménez, y a quien fue un símbolo de los trabajadores chilenos, y solo, anciano, después de entregar toda su vida a la causa de los trabajadores, nos abandonó en el año último: a don Clotario Blest.

El movimiento sindical chileno y los trabajadores de nuestra patria estamos viviendo una nueva etapa, la etapa del renacer de nuestra democracia. ¿Qué ha significado este advenimiento, hace un año y casi dos meses, de la democracia en Chile para los trabajadores chilenos?

Permítanme hacer un ligero balance de lo alcanzado en este tiempo, para referirme después a las muchas cosas que nos faltan.

Yo creo que, como lo ha destacado aquí el presidente de la CUT, Manuel Bustos, ha habido un cambio sustancial en las relaciones del Estado, del gobierno, con los trabajadores. Estos no sólo no han visto amenazada su libertad y han sido respetados como dirigentes; han sido oídos, sus organizaciones son reconocidas y el gobierno se esfuerza por tratar de captar sus aspiraciones y buscar fórmulas para poder satisfacer las necesidades e intereses que ellos plantean.

Dentro de este criterio, se ha seguido una política de buscar acuerdos, porque las circunstancias y la historia nos demuestran que se puede progresar más por la vía de la búsqueda de entendimientos razonables, que por la vía de la mera confrontación.

Se han conseguido acuerdos importantes, como fue el celebrado por la CUT con la Confederación de la Producción y el Comercio y el gobierno, en abril del año pasado; como el celebrado en octubre último, entre la CUT, la ANEF y el gobierno, para mejorar la situación de los trabajadores del sector público; como el concertado en febrero último, entre el gobierno y el sector portuario; y como el que firmamos ayer, entre la CUT, la Confederación de la Producción y el Comercio, Conupia y el gobierno, para regular las remuneraciones mínimas en el próximo período.

¿Qué han significado estos acuerdos y los cambios y las políticas puestas en práctica en el curso del último año?

Tengo conciencia de que no han significado un cambio sustancial en el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores chilenos, pero han significado, sin duda, avances importantes. El aumento, el año pasado, en un 44 por ciento, de los ingresos mínimos; la duplicación de la asignación familiar para 2 millones y medio de trabajadores, y su aumento en un 45 por ciento para 400 mil trabajadores; el aumento en un 50 por ciento del subsidio único familiar; el aumento de las pensiones mínimas, entre un 10,6 y un 20 por ciento para el 75 por ciento de los pensionados, fueron logros efectivos, que han significado hacer la vida menos dura para los más pobres de nuestra patria.

En el acuerdo firmado ayer se ha convenido elevar el ingreso mínimo de 26 mil a 33 mil pesos; el reajuste de las asignaciones familiares a todos los que ganan hasta 84 mil pesos mensuales; la restitución del 10,6 por ciento de reajuste de las pensiones a todos

los pensionados que ganan hasta 80 mil pesos, lo cual significa que el 90 por ciento de los pensionados chilenos tendrán, a partir de julio próximo, recuperado el 10,6 por ciento de que habían sido injustamente privados.

El 10 por ciento restante, que tiene pensiones superiores a 80 mil pesos mensuales, tendrá la devolución de ese 10,6 por ciento en el curso del año próximo.

Naturalmente el gobierno hubiera querido poder devolver de una sola vez a todos los pensionados chilenos esa exacción que sufrieron hace algunos años. El problema es que no todo lo que se quiere se puede, y resulta que los recursos fiscales son limitados, lo que ha hecho necesaria una política progresiva, tal como lo anunciamos durante la campaña. Dije, como candidato, que a todos los pensionados se les devolvería el 10,6 por ciento, pero que se haría en la medida de lo posible, empezando por los que tenían pensiones más bajas. Eso es lo que estamos haciendo.

También el sector de los trabajadores chilenos ha recibido en este primer año de gobierno democrático otros beneficios que les significan aliviar su condición de vida. Tales son, por ejemplo, la repactación de las deudas de viviendas del Serviu. Ayer, no más, se ha empezado a otorgar escrituras de cancelación de las deudas, lo que significa sanear totalmente sus propiedades, a 145 mil chilenos adquirentes de viviendas del Serviu que tenían el riesgo de perder sus propiedades, y a quienes no se les otorgaba el título definitivo como consecuencia de las deudas que tenían. El programa de repactación y de condonación ha permitido que estos 145 mil chilenos puedan tener su escritura saneada y puedan dormir tranquilos, sabiendo que tienen su propiedad, y ya no tienen que seguir pagando por ellas.

También han significado beneficios para aliviar la condición de los más pobres, las repactaciones de deudas de agua potable, de luz eléctrica y de contribuciones.

Repito: bien sé que esto no resuelve todos los problemas, que no es suficiente, pero significa un mejoramiento real, compatible con las posibilidades efectivas de nuestra economía. Lo dije el año pasado, ante vosotros, el Primero de Mayo: el gobierno tiene cabal conciencia de que para que haya un mejoramiento real y efectivo en la condición de los trabajadores, y no ocurra que éste se desvanezca como consecuencia de la inflación, es indispensable tener una política económica equilibrada. No podemos gastar más de los ingresos. Tenemos que asegurar el cumplimiento de eso que los economistas llaman las reglas de estabilidad macroeconómicas, porque de otro modo se corre el riesgo de que los aumentos de remuneraciones se desvanezcan por una inflación que se dispara, situación que en otros países de nuestro Continente ha llevado a ser ilusorio el mejoramiento económico después del retorno a la democracia.

Estamos avanzando firmemente, con la decisión de hacer justicia, empezando por los más pobres; debemos mejorar la condición la distribución del ingreso nacional, pero tenemos que hacerlo sobre bases que den garantía de que ese progreso sea estable y permanente, y abra caminos a un mejoramiento cada vez mayor. (evolutivo)

Así, el año pasado debimos aplicar una política de ajuste, que exigió sacrificios a muchos sectores, para evitar que se disparara la inflación. Logramos bajar los índices de inflación, y esperamos que este año sean menores. Y estamos ciertos de que la estabilidad y la reducción de la inflación son garantía efectiva de mejoramiento real, y no meramente nominal, de las condiciones de vida y del poder adquisitivo de las remuneraciones de los trabajadores chilenos.

Sabemos también, y toda persona sensata lo sabe, que cualquier progreso requiere de tiempo. No se hacen las cosas de la noche a la mañana. Después de 17 años de retroceso, en un año estamos avanzando, estamos avanzando hacia condiciones de mayor justicia para los pobres de Chile, para los trabajadores de nuestra patria.

También hemos impulsado cambios legislativos, destinados a crear una institucionalidad laboral que sea equitativa y eficiente. Se aprobó la ley sobre terminación de contrato de trabajo, que significa mayores garantías y mayor indemnización, suprimiendo el tope de cinco meses y elevándolo a once meses, respecto de la indemnización en caso de despido. Establecimos un avance sustancial para un grupo de trabajadores que siempre han estado postergados, y de los cuales nunca nadie se acordaba. Me refiero a las trabajadoras de casa particular. Se ha establecido una indemnización en caso de despido a todo evento, mediante una cotización para garantizar esa indemnización.

Se ha dictado la ley sobre Centrales Sindicales, que significa el reconocimiento del derecho de los trabajadores y de las organizaciones sindicales de agruparse libremente en centrales, de tal manera que ellas tengan el poder de negociación y la representatividad a que tienen derecho.

Está ya aprobada, y próxima a dictarse, la ley sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva, que constituye un avance sustancial en la capacidad de negociación y en el poder de los sindicatos, y que al establecer mecanismos expeditos de cotización, da un instrumento a los trabajadores chilenos para vigorizar su sindicato.

Yo reitero lo que acaba de decir aquí Manuel Bustos: los trabajadores chilenos tienen que vigorizar su capacidad de negociación, asociándose en sus organizaciones sindicales. En la medida en que su organización sindical es más representativa y poderosa, mayor es la capacidad de negociación del mundo del trabajo para defender sus intereses.

Luego vendrán la ley sobre contrato individual, que incluirá normas sobre los trabajadores de temporada y los trabajadores portuarios, y la ley sobre tribunales del trabajo y procedimientos del trabajo.

También estamos empeñados en mejorar los servicios dependientes de la Dirección del Trabajo. No sacamos nada con tener buenas leyes, si no hay instrumentos eficaces para fiscalizar el cumplimiento de esas leyes y tribunales del trabajo que hagan respetar los derechos de los trabajadores.

Todo esto representa que, a fines de año, podremos tener un nuevo Código del Trabajo, gestado democráticamente. Quiero recordar que los dos Códigos del Trabajo que han existido en nuestro país, el de 1931 y el dictado por el gobierno autoritario, fueron impuestos desde arriba, sin participación de los trabajadores y sin generación democrática. Este, que esperamos poder dictar a fin de año, refundiendo esta legislación, será el primer Código del Trabajo democráticamente generado en la historia de nuestro país.

Dentro de este mismo propósito, de respaldar a las organizaciones sindicales, hemos enviado un proyecto de ley que está en el Congreso, para devolverles a los sindicatos, federaciones y organizaciones sindicales, los bienes de que fueron despojados bajo el régimen anterior. Y entre tanto, mientras se dicta esa ley, cumpliendo la promesa que les hice el Primero de Mayo del año pasado, el gobierno ha entregado a la Central Unitaria de Trabajadores, en préstamo, una casa central, donde puede funcionar con todas las comodidades que una institución requiere.

Quiero ahora hacerme cargo de algunos de los planteamientos que le acabamos de oír al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.

Ha dicho Manuel Bustos que los avances son lentos. Soy el primero en reconocerlo, son lentos. Pero yo les pregunto: ¿qué cosa en la vida se consigue de un día para otro? ¿No es lento el progreso de las familias? ¿No es lenta la propia naturaleza en hacer germinar la semilla y convertirla en planta capaz de dar fruto? Estamos tratando de andar al máximo paso que nos sea posible, pero queremos caminar a pie firme y no en aventuras que después queden en vano y se desvanezcan. Tenemos, además, limitaciones: limitaciones económicas y financieras; limitaciones que nacen de las amarras de la institucionalidad vigente, que representan que el avance legislativo tenga que ser objeto de negociaciones en el Congreso, porque el gobierno no tiene, por sí solo, mayoría suficiente para sacar las leyes que propone.

Tenemos, también, que buscar grandes acuerdos, porque sólo en la medida en que los avances sean fruto de consentimientos compartidos por la gran mayoría nacional, van a echar raíces y ser

estables, discutidos diariamente y susceptibles de ser arrasados por cambios de mayorías.

Se ha referido Manuel Bustos a la necesidad de participación de los trabajadores. Estoy ciento por ciento de acuerdo con él. Queremos crear una sociedad participativa. Democracia significa participación y tenemos que abrir, cada vez más, nuevos cauces de participación. Algo hemos hecho: es participación escuchar a los trabajadores; y diariamente, en todos los ámbitos, en todas las materias que les interesan, el gobierno, desde el Presidente de la República, los ministros del Trabajo, de Economía, de Hacienda, los funcionarios respectivos, tienen las puertas abiertas para escuchar los planteamientos de los trabajadores, para debatirlos con ellos. Esto es participación.

Ninguna determinación se adopta sin escuchar, pero participación no es, como lo ha dicho muy bien Manuel Bustos, co-gobierno. La responsabilidad de la conducción del país corresponde al gobierno, como órgano representativo de la nación, y tiene que tomar en cuenta los distintos intereses, las distintas necesidades, las visiones de conjunto.

De allí que no podamos entender que la participación signifique que cada cosa deba ser objeto de un acuerdo, y que cuando un sector, por muy respetable que sea, no está de acuerdo, no se pueda actuar. El gobierno cumple escuchando, creando instancias para debatir, y estamos abiertos a ir creando e institucionalizando cada vez más instancias de participación organizada. Pero siempre, la decisión final ha de corresponder a los órganos del Estado fijados por la Constitución, como los llamados a gobernar el país.

También Manuel Bustos se ha referido a algo sobre lo cual veo numerosos carteles: el tema de los exonerados. Tenemos clara conciencia de que ése es un tema que exige solución, pero la solución no es fácil. Estamos buscándola.

Desde luego, no es posible, simplemente, reincorporar a todos los exonerados, porque no existen los cargos, porque las plantas de la administración son fijadas por ley, porque muchos servicios han desaparecido, porque las plantas han sido reducidas.

Estamos empeñados en mejorar esas plantas y aumentar los cargos en servicios que han sido gravemente deprimidos, como es, por ejemplo, el de Salud, donde se han creado 2 mil nuevas plantas, y donde esperamos seguir aumentándolas en el futuro próximo.

Se han creado nuevas plantas en la Inspección del Trabajo y se ha aumentado en un 20 por ciento el personal de la Dirección del Trabajo, para mejorar las funciones de fiscalización.

Sabemos que no es suficiente, tendremos que continuar. Pero el avance en estas materias está limitado por la disponibilidad de recursos para ello.

No pudiendo reincorporarse a todos, tenemos que encontrar fórmulas para solucionar el problema de los exonerados que no han sido reintegrados: los ferroviarios lo fueron, también los del cobre. En numerosas partes se ha hecho justicia a los exonerados. En Educación hemos establecido una norma de que las vacantes se llenen, preferentemente, con exonerados. En otros puntos, estamos buscando fórmulas de indemnización. Queremos transigir rápidamente los juicios de los que cobran indemnizaciones o pensiones, para los efectos de resolverles su problema. Estamos avanzando, y yo espero que, en los próximos meses, este problema quede definitivamente resuelto.

También estamos avanzando en otro tema, que no ha sido planteado aquí: el de los exiliados. En mi reciente visita a Europa me reuní en Madrid, en Londres, en Stuttgart, en Roma, con exiliados chilenos, con comunidades de chilenos numerosas, formadas por gente que quiere volver. Se formó la Comisión Nacional de Retorno. Estamos dotándola de los recursos necesarios y buscando los procedimientos para que esos compatriotas que quieren volver, que salieron de Chile contra su voluntad —con quienes juntarse es verdaderamente emocionante, porque los ojos les brillan por la nostalgia de Chile, por su querer a la patria— puedan hacerlo, pero no cruzados de brazos, sino teniendo aquí una actividad que les permita ganarse dignamente la vida.

Tenemos clara conciencia de que el tema del empleo y la capacitación, especialmente en el campo juvenil a que se refirió Manuel Bustos, es de los más graves y urgentes que tiene nuestro país. Lo dije en mi conferencia de prensa al enterar un año de gobierno: hemos avanzado, pero me preocupan fundamentalmente tres grandes problemas: el de la pobreza de muchos chilenos, que aún no salen de niveles de vida subhumanos. Intimamente ligado con esa pobreza, el de la desocupación, que afecta especialmente a muchos jóvenes chilenos. Específicamente, entonces, los problemas de la juventud, que aspiran legítimamente a tener en su patria posibilidades de trabajo, de constituir un hogar, de vivir decentemente, de ser elementos activos y de progreso, y que se encuentran con las puertas cerradas, porque la educación no los capacitó para trabajar, y porque no tienen posibilidades concretas para trabajos dignos y estables. Queremos abordar ese tema. Estamos buscando formas de avanzar.

Les confieso que me desespera la lentitud de los procesos, los procesos de capacitación de mano de obra, los procesos de preparación de jóvenes para el trabajo. Es una necesidad urgentísima, a la que es indispensable dar rápida solución.

Pero todo en la vida es difícil. Carecemos de los elementos necesarios, las escuelas técnicas no tienen maquinaria suficiente, instrumentos de trabajo; los mecanismos burocráticos son lentos;

las ayudas y cooperaciones que se nos han ofrecido desde el exterior se han demorado en llegar. Pero vamos avanzando, y yo espero que este año tengamos la posibilidad, a través del Sence, a través del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Educación, del Instituto Nacional de la Juventud, de abrir puertas verdaderas para capacitar y para dar trabajo a varias decenas de miles de jóvenes chilenos.

El tercer problema que me preocupa más hondamente, es el de la delincuencia. Tal vez las condiciones de vida subhumanas de ciertos sectores de chilenos, por las fallas en el sistema educacional, la propaganda permanente de la violencia en los medios de comunicación de masas —porque los programas de televisión son, en gran medida, inductivos a la violencia— son factores que inducen a la delincuencia.

Tenemos que ser capaces de afrontar este problema, con decisión, con criterios de equidad, no meramente represivos, buscando la reeducación del delincuente; pero, al mismo tiempo, lo reitero una vez más, el gobierno será inflexible en la represión y el castigo a la violencia y el terrorismo.

Cuando estuvo aquí el Papa, nos dijo: "Chile tiene vocación de entendimiento, no de confrontación". Estamos viviendo una etapa en que tenemos la posibilidad real de, con buena voluntad, aportar todos un grano de arena para construir una convivencia civilizada, fundada en el respeto a las personas, en la dignidad de todos nuestros semejantes, en la tolerancia, en el anhelo de conseguir la justicia por la vía de la razón y no por la vía de la fuerza.

La lucha del pueblo chileno por recuperar su democracia fue la lucha contra los que querían manejar este país por la fuerza y no por la razón. Que no haya ahora quienes nos quieran sacar de este camino.

Hago más las palabras del presidente de la CUT sobre la condena más categórica a la violencia y al terrorismo, y llamo a todos mis compatriotas a que nos unamos para aislar a los terroristas y a los violentistas, para convencerlos de que ese camino no es un camino de vida, sino de muerte.

Y hago más también sus palabras sobre los derechos humanos y la importancia de no olvidar y de continuar la tarea que emana del informe de la Comisión sobre Verdad y Reconciliación.

Hemos dicho reiteradamente: la reconciliación y la paz sólo se pueden construir sobre las bases de la verdad y de la justicia. Tenemos la verdad, tenemos que avanzar hacia la justicia. Esperamos que los Tribunales de Justicia cumplan su deber.

Seamos claros: nos guste o no nos guste, la justicia la administran los tribunales. No corresponde al gobierno administrar justicia.

El gobierno usará todos los medios a su alcance, pero dentro de la base del respeto al principio de la separación de los Poderes.

Pero tenemos, también, que hacer justicia ayudando a reparar a los familiares de las víctimas. Debemos vindicar el honor y dignidad de las víctimas y otorgar reparaciones y facilidades de mejor vida a sus familiares: eso es también, aunque sea en parte, un acto de justicia. Y por eso el gobierno ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley en ese sentido.

Trabajadores de Chile, compatriotas:

Estamos viviendo un gran desafío, que es el desafío de Chile entero y del mundo al terminar el siglo XX y abrirse las puertas al segundo milenio: el desafío de conciliar una convivencia basada en el respeto a la dignidad y a la libertad de las personas —es decir, la vigencia de la democracia política— con la necesidad del crecimiento económico para producir más y así tener más bienes para satisfacer las necesidades de la gente. Y conciliar a ambas con la justicia social, para que esa libertad y esa prosperidad vayan en beneficio, no de unos pocos, sino de todos los chilenos, especialmente de quienes viven de su trabajo.

Queremos, dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, “una modernización solidaria”. Sí, modernización no en beneficio de unos pocos, modernización no impuesta desde arriba: modernización fruto del esfuerzo colectivo, del perfeccionamiento, de la tecnología, de la capacidad de trabajo del pueblo chileno; y no en beneficio de una minoría, sino en beneficio de todos los que contribuyen con su esfuerzo a construir una patria mejor, a crear un mayor bienestar para los chilenos.

Esta es tarea de todos. Vamos avanzando, pero nos queda mucho por hacer. Estamos recién en los comienzos. Este gobierno será corto; llevamos ya más de una cuarta parte, pero hemos avanzado en el primer año. En los tres años que nos quedan, confío en que este avance continuará cada día en forma más efectiva, en forma progresiva, e iremos construyendo una patria más libre, una patria más justa, una patria más solidaria. Pero eso, compatriotas, trabajadores de Chile, no puede esperarse sentado a la vera del camino, que lo haga un gobierno, que lo haga un Congreso. Eso lo vamos a hacer entre todos los chilenos.

Yo los llamo a todos, especialmente a mis compatriotas trabajadores, a sumarse a este esfuerzo para, juntos, construir la patria que queremos.

Muchas gracias.

En ceremonia de constitución de la Comisión de Estudio de la Educación Superior

Santiago, 4 de mayo de 1990

La creación de la Comisión de Estudio de la Educación Superior responde a la voluntad manifestada por el gobierno de escuchar, para actuar con el mayor consenso posible, frente a las materias que interesan a todo el país.

El futuro de la educación superior es un asunto que compromete vitalmente el futuro de Chile como nación. Allí se forman nuestros jóvenes, que mañana deberán asumir la conducción del país; sus profesionales, empresarios, científicos, maestros y técnicos. Allí, igualmente, se desarrolla una parte significativa de la investigación, que debe proporcionar los conocimientos que necesitamos para crecer, competir internacionalmente y resolver los problemas más apremiantes de la población.

Además, las instituciones de enseñanza superior están llamadas a ser el centro más activo de creación, reflexión, discusión y difusión de la cultura superior del país. La suerte que corra la educación superior no es asunto que interese sólo a sus instituciones, o al gobierno. Es, y debe ser, una preocupación nacional.

De allí que queramos discutir su futuro y adoptar las medidas que sean necesarias, con un criterio nacional, incluyendo, en lo posible, la opinión de todos, sin ningún afán de aprovechar las contingencias del poder.

Actualmente la educación superior del país enfrenta variados y complejos problemas. Las instituciones de este nivel se han multiplicado tan explosivamente, que muchos nos preguntamos si acaso no estaremos arriesgando poner en peligro la seriedad y la calidad de la formación que se ofrece.

Por otro lado, y a pesar de ese gran incremento institucional, no pareciera haber aumentado la equidad del sistema, al punto que todavía muchos jóvenes chilenos de mérito, pero escasos ingresos, encuentran cerradas las puertas de la universidad.

Asimismo, echamos de menos una mayor coordinación del sistema en su conjunto, así como un esfuerzo compartido entre las instituciones, el Estado y el sector productivo, para abordar, con sentido de futuro, el desarrollo de nuestra enseñanza superior.

Durante largos años los académicos del país han reclamado, con razón, una mayor participación en la elaboración de las políticas que afectan al sector de la educación superior. Nosotros no sólo deseamos favorecer esa participación, sino que buscaremos estimularla por todos los medios.

Así, observamos con interés cómo en las universidades estatales las propias comunidades están buscando reencontrarse con sus tradiciones de autonomía y autogobierno, y lo hacen en paz, razonadamente, mediante el diálogo, como corresponde a instituciones que representan en la sociedad el valor de la razón y los valores del espíritu y la cultura.

El gobierno desea hacerse parte en ese mismo proceso, y preparar, junto con los académicos y oyendo a todos los sectores interesados, las bases del futuro desarrollo de nuestra educación superior. Con tal fin, y con ese mismo espíritu, he acogido el planteamiento del señor ministro de Educación, de constituir esta Comisión, que deberá abocarse a la tarea de proponer al gobierno dos importantes materias: primero, las bases de una política de desarrollo de la enseñanza superior; y, segundo, las reformas que se estime necesario introducir a la legislación vigente, que regula las acciones del sistema de educación superior.

La Comisión representa, por la composición de sus miembros, una selección, hecha con la máxima amplitud, de las principales concepciones y opiniones existentes sobre nuestra educación superior. La integran destacados académicos, con diversas experiencias, que poseen una variedad de orígenes disciplinarios y profesionales, y que provienen, en alguna medida, de las distintas regiones del país.

A todos ellos, que han aceptado asumir esta pesada responsabilidad, yo les agradezco, en nombre del gobierno, su generosidad y buena disposición para asumir la tarea. Espero que en el desempeño de sus funciones la Comisión podrá auscultar y consultar ampliamente las opiniones de toda la comunidad universitaria nacional, y de todos los sectores interesados en su desarrollo, entre los que atribuyo especial importancia a los propios estudiantes.

Por mi parte, pueden ustedes contar con todo el apoyo del gobierno y con mi personal preocupación y atención —como hombre

que se siente parte del sistema universitario, no sólo en cuanto profesional, sino por haber sido durante largos años académico, tanto en la Universidad de Chile como en la Universidad Católica de Chile—, mi personal preocupación y atención, para facilitar el éxito de vuestra misión, que será, estoy seguro, una importante contribución para el desarrollo del país.

Muchas gracias.

En reunión con la comunidad estudiantil de la Universidad de Concepción

Concepción, 9 de agosto de 1990

He querido que mi primer encuentro con la comunidad de Concepción, en esta mi primera visita a la Región, sea con la comunidad universitaria. Primero, porque siento que la Universidad —como centro social de la verdad, según se le ha llamado; como lugar de encuentro de quienes tienen vocación por el estudio, de las élites profesionales y juveniles— tiene por su categoría una significación muy representativa y una gran responsabilidad en el desarrollo de nuestro país.

Y, por otra parte, porque esta Universidad —que conocí hace muchos años en mi calidad de universitario, cuando vine a tomar examen, cuando aún aquí la Universidad no podía otorgar sus títulos y venían los profesores de la Universidad de Chile a examinar a los estudiantes— tiene un prestigio nacional. Su trayectoria tiene una significación simbólica: fue la primera Universidad regional; la primera Universidad creada en este país no como dependencia de la Universidad de Chile o de la Universidad Católica, sino surgida de la región, por el espíritu creador de ese ilustre varón que fue don Enrique Molina.

Me parecía, por consiguiente, que venir aquí era la mejor manera de iniciar mi encuentro con la comunidad de Concepción. Yo creo que el deber de un gobernante es escuchar, y ha sido para mí constructivo y positivo escuchar la voz del señor Rector, del representante de los funcionarios administrativos de las universidades de la región y del presidente de la Federación de Estudiantes.

No quisiera continuar mis palabras, haciéndome cargo de los temas que ellos han planteado, sin rendir un homenaje, en este

lugar me parece de justicia, al doctor Ignacio González Genovés, ex rector de esta Universidad recientemente fallecido.

En las palabras que hemos escuchado se expresan distintas inquietudes. En primer lugar, una que yo diría fundamental, por el afán muy legítimo y justo de que la Universidad lo sea realmente. Para que la Universidad sea verdaderamente universidad es esencial que sea autónoma, que ella misma decida su destino, que haya verdadera libertad en sus aulas, que ella genere sus autoridades, que ella fije las reglas de su convivencia interna y que sus académicos e investigadores puedan buscar libremente la verdad, sin cortapisas de ninguna especie.

Participa el gobierno de este anhelo, y creo justo destacar que es verdaderamente fecundo y ejemplar el proceso que se ha ido produciendo en estos cinco meses de democratización de nuestras universidades. La mayor parte de las universidades chilenas, a lo largo de todo el país y no sólo en esta región, han ido, en forma tranquila, serena, mediante procedimientos generalmente convenidos, pero con ejercicio de la libertad de sus integrantes, generando sus propias autoridades. Ha sido para mí profundamente satisfactorio en estos meses ir firmando los decretos para completar el proceso de la generación de los rectores elegidos por las comunidades académicas. Ha sido para mí muy grato firmar, sólo en el día de ayer, la nominación de los rectores elegidos en la Universidad de Santiago, en la Universidad de La Frontera, de Cautín, y en la Universidad de Biobío.

Yo planteo aquí el delicado tema del financiamiento de las universidades. En verdad, cuando uno cree —como creo que lo piensa la mayoría de los chilenos— que es función del Estado, como órgano del bien común, promover el desarrollo personal de la gente, debe admitir que al Estado le cabe una responsabilidad importante en el desarrollo de la institucionalidad universitaria.

Ahora, el gran problema del Estado es que sus recursos son limitados, y no se puede, simultáneamente, cumplir a cabalidad la satisfacción de todas las necesidades. Hay órdenes de prioridades y, en consecuencia, el Estado debe, con sentido de justicia, procurar atender las diversas necesidades. Y en el campo de la educación tiene que, en primer lugar, asegurar el acceso de todos los niños de Chile a los niveles de educación básica y media, y luego procurar los recursos para que aquellos que tienen capacidad puedan tener acceso a la universidad, aunque carezcan de medios económicos para solventarla.

Tiene que acudir también en ayuda de las universidades para su adecuado financiamiento. En los últimos años, bajo el régimen que expiró, sufrió un grave deterioro el aporte del Estado al sistema universitario.

Es nuestro ánimo procurar acudir con lo más que podamos a la recuperación de los niveles que antes existían. Pero eso no se puede hacer en un año, ni menos en meses.

En este orden de cosas, como ustedes saben, el gobierno ha decidido destinar este año una parte del rendimiento de la Reforma Tributaria para acudir en ayuda del sistema educacional chileno. Destinaremos 20 mil millones de pesos para el sistema educacional. Pero eso ha de distribuirse entre la educación básica, que adolece de tremendas insuficiencias, la educación media y las universidades. Procuraremos concurrir a ayudar a las universidades a resolver sus problemas, y esperamos que en el presupuesto del próximo año podamos contribuir con un aporte mayor.

Junto con esto, de esa suma destinaremos 3 mil millones de pesos para el financiamiento del crédito universitario, de tal manera que los alumnos que teniendo méritos no tienen cómo financiar sus estudios, puedan asegurar su acceso a la universidad.

Hemos enviado, por otra parte, un proyecto de ley al Congreso para resolver el problema que aflige a los ex alumnos universitarios deudores de crédito universitario. Pretendemos la solución de ese problema, sobre la base de que cada cual pague un 5 por ciento de su ingreso mensual durante un plazo máximo de doce años, condonándose los intereses de mora, suspendiéndose las acciones judiciales en su contra, estableciéndose incentivos para el pago adelantado y condonándose el saldo al que haya pagado regularmente durante los doce años, el saldo que quede después de ese período.

Hemos constituido, como aquí se ha recordado, una Comisión de Educación Superior, formada por personalidades relevantes del mundo universitario chileno, y les hemos señalado un plazo de seis meses para que propongan al gobierno un proyecto de nueva ley universitaria, y un plazo de doce meses para que elaboren y entreguen los lineamientos generales de una política a largo plazo en materia universitaria.

Las conclusiones de esta Comisión, en que existe el ánimo de escuchar a los representantes de las distintas universidades y los distintos estamentos universitarios, podrán ser oportunamente conocidos y debatidos en los medios universitarios, para que con sus aportes se enriquezca la visión del gobierno y podamos, el Congreso en su caso y el Ejecutivo en lo que le corresponde, definir sobre estas materias, adoptando decisiones compartidas por la mayoría de la comunidad.

He escuchado con mucho interés el planteamiento del representante de los funcionarios, y quiero decirle que estamos conscientes del problema de remuneraciones que aflige no sólo a los funcionarios, sino también, por regla general, a los académicos de las distintas universidades chilenas.

Y estamos conscientes también del derecho legítimo que ellos tienen de organizarse de una manera adecuada para hacer valer sus aspiraciones y derechos, y participar de ese modo en las soluciones de los problemas que les afectan.

En este momento está en el Congreso Nacional un proyecto de ley relativo a la organización sindical del sector privado, y están en estudio por parte del gobierno las bases de lo que debiera ser el régimen de organización de los trabajadores del sector público. Esperamos que en todas esas materias podamos encontrar soluciones equitativas.

He escuchado también los planteamientos relativos a los profesores, funcionarios y estudiantes exonerados o expulsados. Creo que en esta materia las decisiones deben situarse en el ámbito de las respectivas universidades. Es decir, no pueden ser materia de decisiones imperativas del Gobierno, lo que interferiría con la autonomía de cada universidad. Sin perjuicio de ello, pensamos que es legítimo y justo que las universidades busquen y que el Consejo de Rectores estudie la manera de complementar estos esfuerzos, para ir solucionando esta justa aspiración de poder retornar a la universidad, cosa que en algunos lugares ya se ha hecho, o se está en camino de hacer, por aquellos profesores que fueron injustamente exonerados o por aquellos estudiantes que fueron injustamente expulsados, unos y otros por razones políticas.

Entendemos que, en una adecuada organización universitaria, el acceso a la universidad no puede depender de la capacidad de pago de los estudiantes. Y es nuestro propósito, escuchando a la comunidad universitaria, sobre la base de los estudios que está haciendo la Comisión de Educación Superior, encontrar el sistema que sea más equitativo para permitir que todos los jóvenes de talento, con condiciones, dispuestos a estudiar, que cumplan los requisitos académicos necesarios, puedan asegurar su posibilidad de cursar los estudios universitarios.

Habrà que combinar un sistema de becas para aquellos que tengan mayores merecimientos y se hagan por ello acreedores a este beneficio excepcional, con otro sistema —que podrá consistir en el otorgamiento de créditos, o el pago de matrícula diferenciada— que permita que las condiciones económicas de la familia no sean un obstáculo para la posibilidad educacional de todos.

No quiero terminar estas palabras sin referirme a otro aspecto que creo a todos ustedes ha de interesar: la participación de la universidad en el proceso de democratización del país y, específicamente, en el proceso de regionalización.

Las universidades tienen un rol orientador; son el centro cultural donde se debaten las ideas, donde la sociedad procura ponerse a la altura de los tiempos; donde llegan las últimas conquistas de la

ciencia, del saber; donde el diálogo permite enriquecer la conciencia colectiva. La universidad no es una torre de marfil, encerrada al margen de la sociedad. La universidad vive inserta en la sociedad y, como tal, a la universidad no pueden serle ajenos los grandes problemas de la comunidad a la cual pertenece.

No corresponde a las universidades enfocar esos problemas desde ángulos ideológicos o partidistas. Hay otros campos donde se confrontan las distintas concepciones para buscar solución a los problemas. El centro normal del debate político propiamente tal está, por una parte, en los medios de comunicación de masas; por otra, en el Parlamento. Es allí donde, en última instancia, se confrontan las distintas visiones de la sociedad, las distintas orientaciones ideológicas, en busca de predominio o de consenso.

Históricamente, los Parlamentos han pasado por etapas en que ha prevalecido el espíritu de confrontación, en que sus debates han sido altamente ideologizados; y han pasado por etapas —y es lo que creo que está ocurriendo en nuestros días, tanto en nuestro país como en el mundo en general— en que sus debates tienden más bien, a partir del respeto a las ideas de cada cual, a buscar soluciones eficaces.

Pero en la universidad, esos mismos problemas que afligen a la sociedad se enfrentan, por los miembros de la comunidad académica, más que con criterio ideológico, con criterio científico y técnico.

Se trata de sumar las distintas visiones, fruto de las distintas sapiencias, para encontrar las mejores soluciones a los problemas colectivos.

En el proceso de democratización de la sociedad chilena, el abrir cauces de participación a la comunidad, en todos sus ámbitos, es fundamental. Y una forma de participación y de democratización, por consiguiente, es la regionalización.

He dicho en otras oportunidades que no debe confundirse el afán regionalista con una especie de demanda de intereses de la región en espera de soluciones de la capital. Eso no es regionalismo. Regionalismo es la capacidad de una región de afirmar su identidad, de descubrir sus problemas y de buscar por sí misma caminos para solucionarlos, para crecer, para desarrollarse.

En consecuencia, las universidades regionales tienen una función primordial que desempeñar para auscultar, individualizar los problemas y decidir caminos para el desarrollo de la región.

Hay en esta región el aporte de varias universidades, de gente muy capaz, de gente con preparación, que además está identificada con la región porque forma parte de ella, la quiere. En ese sentido, el proyecto EULA, que acá se ha estado poniendo en marcha, representa un aporte importante, y el gobierno quiere contribuir, con su grano de arena, a que las universidades de la zona puedan avanzar en este aporte suyo al proceso de desarrollo de esta región.

Y por eso el gobierno, a través del Ministerio de Planificación y Cooperación, ha convenido con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un proyecto que se pondrá en práctica a partir del 20 de este mes, destinado a contribuir al estudio de las universidades regionales, con aportes técnicos, a fin de hacer el diagnóstico de la región, del impulso de su desarrollo con equidad, y de los problemas del medio ambiente que la rige.

Creo que de este modo estamos demostrando el interés real del gobierno por colaborar con las universidades en el cumplimiento de sus tareas.

Para terminar, quiero expresarles que ha sido para mí un agrado tener esta oportunidad de escuchar las voces de vuestros representantes. Pueden ustedes tener la certeza de que el gobierno que presido, dentro de las limitaciones propias de las circunstancias en que se ha hecho cargo del país, de las limitaciones propias del erario nacional y de la condición humana, hará todo lo que esté de su parte por asegurar a todas las universidades el pleno respeto a su autonomía para su desarrollo; y colaborará para el progreso de la educación superior y, en consecuencia, de todas las universidades chilenas.

Muchas gracias.

En ceremonia de promulgación del Estatuto Docente

Santiago, 27 de junio de 1991

Amigas y amigos profesores:

No puedo ocultarles que he suscrito esta ley con una gran satisfacción. Las cosas cuestan, pareciera que no van a salir nunca, nuestros ímpetus por hacer cosas nos llevan a ser impacientes, pero poco a poco van saliendo. Este es un paso más en el camino que nos hemos propuesto, de realización de lo que nosotros llamamos "nuestras bases programáticas".

De los desafíos que Chile tiene, creo que tal vez ninguno es más profundo que el de afrontar el deber de la sociedad chilena de educar a las nuevas generaciones. La tarea educacional compromete el destino del país, y cuando vivimos un período —no sólo en nuestro Chile, sino que en la humanidad— en que se habla del problema juvenil, en el sentido de que se siente cierta preocupación por la suerte de los jóvenes, por la forma como ellos enfrentarán la vida, las dificultades que ésta les presenta, su capacidad para superar las crisis que puedan sufrir, la verdad es que la educación adquiere una importancia trascendental.

Yo diría que nunca ha sido más cierto que en estos tiempos, para nosotros, el adagio de don Pedro Aguirre Cerda: "Gobernar es educar".

Ahora bien, para que cumplamos, no sólo el Estado, sino la sociedad chilena toda, su función educacional, lo primero es asegurar a los educadores un estatus de dignidad, de respetabilidad, de seguridad en sí mismos, de confianza en su capacidad de cumplir la tarea y de superarse, sin lo cual sería imposible que pudieran cumplir eficientemente su tarea.

El instrumento fundamental para realizar la función educacional son los maestros, los profesores, y los profesores no podrían cumplir su elevada misión si ellos mismos se sienten subestimados socialmente, si no tienen el reconocimiento de la sociedad, si se sienten inseguros en su diario vivir, si están expuestos a la arbitrariedad; si no tienen la posibilidad de hacer una carrera que les signifique que con los años y el perfeccionamiento, van a ir teniendo cada vez una mayor posición, una mayor influencia, una mayor respetabilidad, mejores condiciones de vida.

Por eso, dentro de las tareas múltiples que en el campo educacional el gobierno debe emprender, para nosotros fue claro desde el inicio que lo primero era dictar un Estatuto de la Carrera Docente, legislar sobre las condiciones de trabajo de los profesores. Tal vez esta inestabilidad, esta inseguridad y este frecuente estar expuestos a decisiones arbitrarias que han sufrido los profesores en años recientes, nos llevaron a tener más clara conciencia sobre la importancia de esta tarea.

Por eso el Ministerio elaboró un proyecto, y no lo elaboró encerrado entre cuatro paredes: trabajó escuchando, y el proyecto que se presentó al Congreso fue fruto de estudios en que participaron funcionarios de gobierno, autoridades, y también los miembros del Colegio de Profesores y las personalidades del ámbito educacional a que el gobierno estimó conveniente escuchar, porque podían aportar luces sobre la materia.

Yo quiero agradecer el empeño que el señor ministro de Educación y sus colaboradores pusieron en esta tarea; quiero agradecer la colaboración del Colegio de Profesores para perfeccionar la iniciativa, y quiero agradecer la colaboración constructiva que el proyecto recibió en el seno del Congreso Nacional, de parte de los señores senadores y diputados que participaron activamente en la elaboración definitiva del texto que ahora promulgamos.

Creo que, indudablemente, esta ley no resuelve todos los problemas de los profesores; nada en la vida se consigue de un día para otro; las cosas marchan por etapas, pero creo que constituye un progreso enorme que los profesores tengan una legislación que regula su carrera profesional; los profesores del sistema municipal, una carrera regida por un estatuto, que les proporciona posibilidad clara de ascenso en función de la antigüedad, del perfeccionamiento, que proporciona estímulos en función de prestar servicios en lugares más difíciles, que los pone a cubierto contra riesgos de arbitrariedad. Y también constituye un progreso para los profesores del sistema particular subvencionado el hecho de tener un estatuto contractual, que determina claramente derechos y obligaciones mínimas, que constituye para ellos una garantía.

Desde el punto de vista de la remuneración, no es sin duda la

solución del problema de los profesores, de inmediato, pero constituye un cauce que va claramente marcando una tendencia y que, para muchos, significará un mejoramiento substancial.

Pero hay algo más. Asigno extraordinaria importancia a las normas del Estatuto en lo que se refiere a la participación. El Estatuto consagra la participación de los profesores, a través de los Consejos de Profesores, como partes activas de la conducción del proceso educacional. El profesor no es un mero empleado o funcionario que repite la lección, cumpliendo órdenes que recibe de la dirección superior del establecimiento. El profesor es partícipe en la conducción del establecimiento, en la orientación de la enseñanza, en la solución de los problemas que la compleja vida de la escolaridad presenta cada día. Y esto tiene mucha importancia, tanto para su dignificación como para el enriquecimiento de la tarea educacional.

Sin duda vendrán nuevos pasos, tenemos nuevos desafíos, pero al entregar a los profesores de Chile y al pueblo de Chile esta nueva ley de Estatuto de la Carrera Docente, o de los profesores, creo que hemos dado un paso importante para ir cumpliendo ese desafío educacional a que antes me referí.

Queda en manos de los señores profesores responder a esta nueva oportunidad, a esta mayor seguridad, y hacer de esta carrera docente un instrumento que efectivamente nos permita ir avanzando en la difícil pero apasionante tarea de educar a los jóvenes y niños de nuestra patria.

Muchas gracias.

En ceremonia de clausura del Seminario sobre Pequeña y Mediana Empresa

Santiago, 19 de abril de 1990

He querido estar en este instante en la clausura de vuestro encuentro. Quiero testimoniar dos cosas que me parecen importantes. En primer lugar, la alta significación que mi gobierno atribuye al papel de la pequeña y mediana empresa en el desarrollo nacional. En segundo término, la voluntad reiteradamente expresada en el curso de la campaña, de mantener durante mi gobierno una relación permanente, fluida, de contacto humano con los distintos sectores de la comunidad nacional.

Partiendo por esto último, quiero reiterar que estoy realizando un sistema de reuniones prácticamente diarias con las organizaciones representativas de los distintos sectores de la vida chilena. Algunos días con trabajadores; otros, con organizaciones empresariales, profesionales, del mundo intelectual o artístico. El objetivo es escuchar, a través de los dirigentes de las organizaciones representativas de los distintos sectores, cuáles son sus problemas, cómo miran la marcha del país, cuáles son los aportes que pueden hacer para los fines de desarrollo que todos anhelamos.

Específicamente, en relación al sector que ustedes representan, he querido significar la importancia que le atribuyo designando en el único cargo de representación del Presidente de la República en el Consejo de la Corporación de Fomento, a don Gustavo Ramdhor, y lo he hecho por su valor personal y su vinculación estrecha al mundo que ustedes representan: la pequeña y mediana empresa.

Creo que es un sector que debe tener una participación y una voz importante en la orientación del desarrollo de la economía nacional, y la Corporación de Fomento es uno de los cauces a través de los cuales puede cumplirse esa tarea.

Pienso que Chile vive una etapa de mucha esperanza, pero que el desafío que tenemos por delante es muy grande. Construir la democracia significa ser capaces de acostumbrarnos a convivir respetándonos todos en nuestra dignidad de personas, más allá de nuestras diferencias ideológicas y de nuestras diferencias de intereses.

La democracia es el gobierno de la mayoría sobre la base del respeto a los derechos de todos, y eso significa los respetos de la minoría. Pero es, a la vez, el régimen de gobierno que asegura, promueve, protege los derechos esenciales de la persona humana, de todas las personas, y que se funda en el consentimiento colectivo.

En el fondo, la democracia tiende a conciliar el fenómeno de la autoridad, esencial en toda sociedad, con la libertad de las personas. La autoridad tiende a ejercer su poder y avasallar a las personas. Esto no ocurre si, aparte de tener que respetar los derechos de todos, la autoridad se funda en el consentimiento voluntario de la mayoría de la población.

En cuanto la autoridad expresa el sentimiento colectivo mayoritario, respetando a la minoría, se concilia autoridad con libertad.

Pero nuestro desafío no consiste sólo en restablecer en Chile una convivencia fundada en la razón y en el derecho, y en estos criterios de institucionalidad democrática-política. Consiste también en sacar adelante, y seguir impulsando, el progreso y desarrollo de nuestra economía, conciliando esa tarea con las exigencias de la justicia social.

En los últimos años nuestro país ha experimentado un importante crecimiento económico. Hemos logrado cifras de incremento de la producción, de las exportaciones, de control inflacionario, de equilibrio presupuestario, que son satisfactorias. Pero, al mismo tiempo, todos sabemos que el país vive situaciones de grave injusticia social, que hay sectores que no han participado y no sienten como suyo ni se sienten incorporados a este proceso de progreso y de modernización. Y esto es un factor que perturba la estabilidad del proceso.

Si queremos una economía estable, necesitamos que todos los chilenos sientan que son parte, no sólo en el esfuerzo de lograr el progreso y el desarrollo, sino también en los frutos y beneficios que ese progreso y desarrollo generan.

De allí que pensemos que para asegurar la permanencia de la estabilidad anhelada, es fundamental hacer ciertos cambios en algunos de los criterios que han prevalecido en los últimos años.

Creemos que son necesarias reglas claras y estables para la actividad económica. Nos hemos comprometido —y reitero aquí ese compromiso— a mantener los equilibrios macroeconómicos y se-

guir incrementando los esfuerzos por controlar el riesgo inflacionario. Pensamos que la inflación es un flagelo que destruye la economía y que debemos hacer todo lo necesario para evitarla.

Al mismo tiempo, creemos que es necesario, para lograr ese equilibrio social a que antes hacía referencia, que todos contribuyamos, en la medida de nuestras posibilidades, de una manera justa, a financiar la carga social que impone la situación de extrema pobreza que aflige a vastos sectores de chilenos. Ese es el sentido del proyecto de Reforma Tributaria enviado por el gobierno al Congreso Nacional, que en estos momentos se está discutiendo en la Cámara de Diputados.

Nosotros no queremos más recursos para crear burocracia ni para fines de índole político partidista, sino para atender las necesidades impostergables de salud, de educación, de vivienda, de pensiones mínimas, de asignaciones familiares que cumplan en mínima parte los requerimientos de la familia, que la justicia en nuestro concepto exige, y que los sectores más postergados reclaman.

Dentro de esta concepción global, atribuimos extraordinaria importancia al papel que en todas estas tareas cabe a la pequeña y mediana empresa; a su esfuerzo de creatividad, de organización; a su aporte en la creación de fuentes de trabajo, de perfeccionamiento de métodos de trabajo, de progreso en las tecnologías que se empleen, de relaciones de convivencia social más armónicas, y también de incremento de nuestras exportaciones y diversificación de ellas.

Ustedes son mujeres y hombres de trabajo. Ustedes ponen su iniciativa al servicio de la sociedad, tratando de crear bienes o prestar servicios. Ustedes no son poderosos y, por no serlo, compiten dentro de la vida económica, de la vida del intercambio, en condiciones a menudo de inferioridad.

No queremos un Estado que sustituya a la iniciativa privada. No queremos un Estado que pretenda dirigir toda la economía. Pero creemos que el Estado, como órgano del bien común, no puede ser un mero testigo impasible de cómo se desarrollan las leyes del mercado regulando la economía, sino que debe cumplir una función orientadora para impulsar el progreso y asegurar la justicia. No sólo regulando la competencia para que sea verdadera competencia y no ocurra que "el pez gordo se coma al chico", sino que también promoviendo condiciones que faciliten la iniciativa y capacidad empresarial de los sectores que requieran, de parte de la autoridad, que ésta le tienda la mano.

Nuestra filosofía es, frente a la empresa, la misma que ayer yo les planteaba a los pobladores frente a sus problemas de la vivienda: "ayúdate, que yo te ayudaré". El gobierno, como órgano superior del Estado, responsable del bien común, debe prestar algún respaldo,

dentro de una visión general del desarrollo económico nacional, a los sectores que más lo merecen, que más lo necesitan.

En este plano, me informaba don Gustavo Ramdhor que ustedes estudian —y en este Seminario se ha planteado— la necesidad de algunas normas legislativas que pudieran fijar el Estatuto de la Pequeña y Mediana Empresa. Yo les digo que son ustedes mismos quienes deben proponernos un proyecto de esa legislación, y nosotros lo estudiaremos, con la mejor disposición, en el ánimo que dejo expuesto de otorgar el respaldo que esta actividad necesita y merece para cumplir su aporte para con la patria.

Especial preocupación tenemos por la capacitación de mano de obra de trabajadores para los distintos rubros de la economía nacional.

Creo que uno de los problemas más graves, si no el más grave que Chile como sociedad tiene hoy día, es el drama de los jóvenes entre 18 y 25 a 30 años, que egresan de una enseñanza que los orientó para llegar a la universidad, a sabiendas de que no iban a llegar a ella. Y que se encuentran, de la noche a la mañana, con que no pudieron terminar los estudios de enseñanza media o, habiéndolos terminado, no obtuvieron en la Prueba de Aptitud Académica puntaje que les permitiera ingresar a la universidad y que no saben, no tienen ninguna preparación para ganarse la vida.

Esos muchachos son los que a menudo caen en la drogadicción, el alcoholismo o la delincuencia. Tenemos un deber para con ellos, y el país los necesita. Tenemos que hacer un gran esfuerzo de capacitación de jóvenes, y en este sentido tengo mucha confianza en la colaboración que en este plano se produzca entre los organismos estatales y los propios sectores empresariales, tanto de la grande como de la pequeña y mediana empresa, para ayudar a capacitar a jóvenes de manera que puedan ganarse la vida y, al mismo tiempo, aportar para el desarrollo de estas mismas empresas.

Otro aspecto que me parece fundamental es el del perfeccionamiento tecnológico de la actividad productiva nacional. En ese sentido, la cooperación entre el Servicio de Cooperación Técnica y la pequeña y mediana Empresa reviste fundamental trascendencia.

Me alegro de haber escuchado las palabras que le oí a don Gustavo Ramdhor acerca de su confianza en que el Servicio de Cooperación Técnica podrá cumplir, en esta nueva etapa, una labor importante y positiva de aporte al trabajo que ustedes realizan y al progreso de las empresas chilenas.

Quisiera terminar diciendo que, en nuestro tiempo, el mayor valor que los países pueden aportar al desarrollo y la convivencia, es su inteligencia, su capacidad creadora. Como chileno, no puedo ocultar cierto orgullo por el nivel, la capacidad demostrada por los profesionales y los trabajadores.

Creo que los empresarios, hombres de trabajo, tienen mucho que aportar en este sentido. Creo que hay que aguzar la inteligencia para descubrir nuevos caminos destinados a perfeccionar procedimientos, inventar formas de actuar e, incluso, bienes o servicios que producir; que Chile no sólo aporte a la sociedad chilena para mejorar su nivel de vida, sino que lo haga más allá de nuestras fronteras.

Ustedes han demostrado que pueden hacerlo, y tengo mucha confianza en que, recibiendo de parte del Estado una mano de solidaridad y de respaldo, podrán hacerlo con mayor eficiencia.

Les agradezco la oportunidad que me han dado para decir estas palabras y los insto a seguir trabajando, con confianza en el futuro de Chile, en la capacidad de los chilenos de superar los odios del pasado y construir una familia que puede vivir en paz; confianza en la capacidad de Chile de lograr el progreso, la modernización y la prosperidad que todos anhelamos, y de llegar al siglo XXI como una nación que se acerca a la plenitud del desarrollo y lo hace sobre bases de justicia, de participación, sobre la base de que todos los chilenos se sientan parte y beneficiarios de esta tarea común.

Muchas gracias.

En la VII Reunión Ministerial del Grupo Cairns

Santiago, 5 de julio de 1990

Para nuestro país es especialmente significativo recibir a tan distinguidos ministros de Estado de naciones amigas, en esta etapa de nuestra vida nacional en que estamos restaurando nuestra democracia en un clima de paz social y estabilidad económica.

Uno de los mayores desafíos que los chilenos enfrentamos, consiste en armonizar las exigencias que imponen nuestras urgentes necesidades sociales, con los sacrificios que requiere la mantención de una economía sana. Chile ha consolidado un esquema económico basado en la apertura comercial, logrando un considerable incremento de su comercio internacional. Hemos aumentado el volumen de nuestras exportaciones y, a la vez, Chile se ha transformado en un atractivo mercado, no sólo para los bienes, sino también para los servicios y las inversiones del exterior.

Para mantener la estabilidad económica con que Chile los recibe, debemos incrementar el gasto social a niveles que aseguren a todos los habitantes la satisfacción de las necesidades básicas, y lograrlo sobre la base de mantener nuestro desarrollo dentro del marco de una economía abierta.

Para lograr estos objetivos es imprescindible perfeccionar las normas que regulan el comercio internacional, asegurando así su liberalización y expansión.

Chile, por consiguiente, otorga su pleno respaldo a todas aquellas iniciativas que tienen por objeto fomentar un mayor intercambio comercial y asegurar su estabilidad y dinamismo, y por ello ha participado activamente en las negociaciones de la Ronda Uruguay, en momentos en que la tendencia proteccionista de los países desarrollados hace cada vez difícil el ingreso de nuestros productos a esos mercados.

Dentro de este panorama, es indiscutible que la agricultura es el sector más acosado por los obstáculos proteccionistas, ya sea por las dificultades en el acceso a los mercados, por las distorsiones de precios derivadas de la aplicación de fuertes subsidios, o por las cada vez más complejas y solapadas restricciones no arancelarias aplicadas a los productos agrícolas.

La feliz iniciativa que dio origen a la creación del Grupo Cairns nos permite presentar un frente unido y coherente en las negociaciones sobre agricultura llevadas a cabo durante estos últimos tres años. En la fase en que entra la Ronda Uruguay a partir del mes de julio en curso, se hace más necesario aún intensificar los esfuerzos por mantener esa coordinación y lograr los objetivos que nos hemos trazado. En tal contexto, mi país recibe con satisfacción el interés mostrado por Polonia en los trabajos del Grupo Cairns y su deseo de sumarse a los resultados que se obtengan.

Creemos que el trabajo realizado por el Grupo ha sido fecundo, y que la propuesta presentada en la Ronda Uruguay en diciembre último constituye un excelente resumen de los intereses de todos sus miembros y una legítima posición frente al resto de los países. En esta ocasión, espera a los señores ministros un arduo trabajo para mejorar la mencionada propuesta, en términos acordes con las reacciones y acontecimientos observados en estos meses.

Para nuestros pueblos tendrán mucha importancia los logros que podamos exhibir al cierre de estas negociaciones. Esperamos que con la comprensión y el apoyo del resto de los países miembros del GATT, puedan satisfacerse aspiraciones de mejoramiento de trato para nuestros principales productos de exportación y lograr condiciones más justas para el desarrollo de la agricultura y, en especial, para los trabajadores que viven del cultivo de la tierra. Sin un acuerdo satisfactorio en la negociación agrícola, el resultado global de la Ronda Uruguay se verá seriamente comprometido.

La expansión del comercio exterior en términos equitativos, permite a las naciones alcanzar mayores niveles de bienestar. Del éxito de estas trascendentales negociaciones comerciales multilaterales que finalizan en diciembre próximo, depende el futuro del desarrollo de nuestros países para los comienzos del próximo milenio.

Reitero mi confianza en el buen término de esta reunión, y les doy la más cálida bienvenida a nuestro país.

En ceremonia de conmemoración del "Día del Industrial", organizada por Conupia

Santiago, 22 de agosto de 1990

Señoras y señores:

Encuentro este acto muy estimulante. Lo que aquí ha planteado el presidente de la organización, sobre reconocimiento, preocupaciones y esperanzas, corresponde a inquietudes que compartimos. Puedo aseverar que el gobierno tiene cabal conciencia de la importancia de la pequeña y mediana industria para el desarrollo nacional. Sentimos que hasta ahora no hemos podido hacer todo lo que hubiéramos querido, pero que vamos en camino de avanzar para otorgar un efectivo respaldo a este sector tan importante de la actividad nacional.

Las palabras del gerente de la Corporación de Fomento han sido muy claras en cuanto a los esfuerzos que el gobierno está realizando, a través de sus distintos organismos, con la mira de cumplir este objetivo.

Yo quiero felicitar al directorio de Conupia, y a los periodistas que han sido agraciados por su labor de divulgación de los problemas, intereses, aspiraciones, necesidades del mundo que ustedes representan. Quiero felicitar al pequeño industrial que ha sido premiado por su labor como tal, cuyo ejemplo es digno de imitarse, porque representa, sin duda, la forma de realización personal y de servicio a la comunidad que mucho chileno quisiera poder llevar a cabo.

Creo que son muchos los chilenos que aspiran a poder realizar en la vida una labor constructiva, con independencia; que no aspiran ni a grandes riquezas ni a grandes honores, pero sí a una vida digna, en que puedan realizar su creatividad, su capacidad personal, trabajando en equipo con sus colaboradores.

Hago mías las felicitaciones que cada uno de los que trabajan en ese ámbito y en esa forma merecen.

Felicito, en fin, al presidente por los reconocimientos de que ha sido objeto por la labor que realiza en los distintos ámbitos de su actividad.

Y quiero terminar mis palabras confirmando la esperanza que aquí se ha expresado y que la conducta de ustedes revela, en el sentido de que en la etapa que está viviendo nuestro país, sobrellevando las dificultades propias de una economía en desarrollo y de un ajuste económico-social, estamos avanzando y podremos, con el esfuerzo y colaboración de todos, ir construyendo un porvenir más auspicioso para todos los chilenos y, muy especialmente, con la colaboración y en beneficio de los hombres de trabajo de nuestra tierra.

Muchas gracias.

En ENADE "90"

Santiago, 28 de noviembre de 1990

Señoras, señores:

Agradezco a ENADE (Encuentro Nacional de la Empresa) su invitación a participar en este importante evento. Tuve el honor de hacerlo el año pasado, siendo entonces candidato a la Presidencia de la República. Lo hago hoy como Presidente de Chile. Es ésta, por consiguiente, ocasión propicia para reflexionar con los empresarios de mi patria, que anualmente se congregan en este Encuentro, sobre lo que ha pasado en estos ocho meses de gobierno con los planteamientos y propuestas que entonces formulé y sobre los desafíos que Chile enfrenta hacia el futuro en el campo de su desarrollo económico y social.

Lo que dijimos y lo que hemos hecho

Sostuve en esa ocasión que "el país necesita del cambio en lo político y social, conjuntamente con la estabilidad y el progreso en lo económico", como manera de conciliar democracia y desarrollo. Consecuentemente, anuncié nuestro propósito de hacer un gobierno que asegurara "el cambio con estabilidad".

Mi planteamiento recogía dos aspiraciones muy profundas que anidan en el alma nacional: la aspiración de la mayoría de los chilenos a alcanzar un régimen de veras democrático, y a mejorar substancialmente sus condiciones de vida, con la aspiración generalizada a prosperar sin violencias, sobresaltos, ni incertidumbres. Consecuente con esos anhelos y con los valores y principios que he profesado toda mi vida, sostuve la necesidad imperiosa y urgente

de hacer algunos cambios importantes y de realizarlos en un clima de orden, por los caminos del derecho, asegurando la estabilidad y el progreso.

En el área de los cambios, señalé la necesidad de hacer un significativo esfuerzo social con el fin de lograr un desarrollo con equidad. Anuncié —aunque no fuera popular en plena campaña electoral— que para poder llevar a cabo dicho esfuerzo, especialmente en programas de salud, educación y vivienda, sería necesario aumentar los impuestos. Dije, también, que estimaba indispensable introducir reformas a la legislación laboral, porque el actual sistema no tiene una adecuada legitimidad social, ni favorece la identificación del trabajador con su empresa y, en consecuencia, no contribuye eficazmente al crecimiento de la productividad. Sostuve que aspirábamos a construir un acuerdo lo más amplio posible entre trabajadores y empresarios acerca de las reglas del juego en el ámbito económico y en sus relaciones recíprocas.

En cuanto a las que llaman “áreas de estabilidad”, sostuve que mantendríamos una política orientada a fortalecer una economía abierta, con reglas claras y estables, adecuados estímulos a la inversión y para el fomento de las exportaciones, asegurando las condiciones de estabilidad macroeconómica indispensables para incentivar el proceso de desarrollo.

Por último, señalé que nuestro gobierno no sería el triunfo de unos sobre otros, y que por eso invitábamos a los diversos sectores de la sociedad a participar en la tarea común de avanzar juntos en una nueva fase de modernización de Chile.

Eso dije hace un año. Eso es lo que hemos estado haciendo en estos meses de gobierno.

Hemos iniciado las transformaciones necesarias en función de cumplir con el esfuerzo nacional que permita lograr desarrollo con equidad. Con este propósito se ha incrementado significativamente el gasto social, asegurando al mismo tiempo para éste un financiamiento acorde con el objetivo de mantener los equilibrios macroeconómicos indispensables para sostener el crecimiento de nuestra economía.

La Reforma Tributaria permitió aportar una importante cantidad de recursos destinados a mejorar significativamente la asignación familiar, el subsidio único familiar y las pensiones mínimas. Adicionalmente, contribuyó a financiar gran parte del suplemento a los presupuestos de salud, vivienda, educación y otros programas sociales. El acuerdo logrado sobre esta reforma fue una promisorio demostración de la voluntad de todos los sectores de participar en el esfuerzo social que el país necesita.

En el campo de las relaciones del trabajo, consecuentes con nuestros anuncios, enviamos al Congreso un conjunto de proyectos

orientados a perfeccionar y hacer más equitativa la institucionalidad laboral. Desde la etapa de su elaboración y formulación y durante el proceso parlamentario, estos proyectos han sido debatidos con todos los sectores sociales y políticos. Ello ha hecho posible que en los últimos días estas reformas, que se encuentran en una de las áreas más sensibles de cambio, hayan logrado el consenso necesario para asegurar su legitimidad y, por lo tanto, su eficacia y estabilidad.

Quisiera decir que comparto las palabras que acabamos de oír al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, en el sentido de que la trascendencia y eficacia de una legislación laboral reside no sólo en que sea justa, sino en que sea percibida también como justa por los distintos actores sociales, tanto empresarios como trabajadores. Y comparto también su criterio, que es el del gobierno, en cuanto a la conveniencia de que el debate sobre estas materias y la aprobación definitiva de la legislación al respecto, se perfeccione cuanto antes y termine cuanto antes, para quedar definidas las reglas, y en esta materia no haya factores de inquietud ni de perturbación.

Estas iniciativas de cambio se han insertado en el marco tanto de una conducción rigurosa de las políticas públicas —que ha preservado los equilibrios fundamentales para un crecimiento basado en la inversión y el ahorro—, como de un fortalecimiento de la inserción internacional de nuestra economía. Manifestación de esta coherencia en el manejo de la política económica durante estos meses ha sido la firme y constante decisión con que se ha sostenido un adecuado control de la inflación, apoyando el ajuste que fue necesario implementar como consecuencia de la tendencia inflacionaria heredada del régimen anterior y pese a las dificultades derivadas de una coyuntura externa desfavorable. Es también expresión de esa coherencia el criterio de austeridad puesto en práctica por el gobierno en el diseño del presupuesto público del próximo año. Estas políticas, como muchas otras, constituyen una demostración de la voluntad de mantener la estabilidad y continuidad necesarias en todas aquellas reglas e instrumentos que componen la base de la estrategia de crecimiento y desarrollo que el país ha venido implementando en los últimos años.

Llamado a superar la desconfianza

Quiero ser muy franco. El año pasado me escucharon ustedes con deferencia, pero la mayoría no ocultó su escepticismo. Muchos du-

daron de la fuerza de nuestras convicciones, o no creyeron en nuestra decisión ni capacidad para cumplir lo que planteamos.

En los ocho meses de nuestra gestión gubernativa hemos demostrado con hechos nuestra consecuencia. Estamos haciendo precisamente lo que anunciamos.

Los vaticinios alarmistas de nuestros detractores han sido desvirtuados por los hechos. A pesar de los problemas que hemos debido afrontar —algunos herencia del pasado; otros sobrevinientes, como la crisis del petróleo—, el país vive y progresa bajo un régimen de Derecho, la convivencia democrática se consolida, en las relaciones laborales prevalece un clima de entendimiento, las bases de nuestra economía están sanas, hemos controlado el peligro de inflación, las inversiones aumentaron y hay justos motivos para mirar el porvenir con esperanza y optimismo.

Sin embargo, no puedo ocultarles que percibo, de buena parte del empresariado, una actitud de recelo y desconfianza que me parece injusta y negativa.

Uno de los muros que ha separado a los chilenos con mayor intensidad, es la desconfianza. En el pasado, hubo motivos para las desconfianzas de unos y de otros: entre partidos políticos, entre civiles y militares, entre trabajadores y empresarios. La desconfianza nos llevaría a sentirnos permanentemente amenazados y nos dividió en sectores antagónicos y excluyentes.

Creo firmemente que hoy esas desconfianzas no se justifican y, lo que es grave, hacen daño al país. Veo en ellas apego a tendencias del pasado que es preciso superar. No podemos seguir apostando —como una crónica anunciada y a pesar de la realidad— caos, el estancamiento económico, la regresión a políticas estatistas y tantas otras catástrofes imaginarias. Tales fantasmas sólo crean confusión y dan pretextos a quienes buscan servir mezquinos intereses con miras de corto alcance y sin sentido de país.

También resulta un anacronismo pensar que empresarios y trabajadores deban identificarse necesariamente con posiciones ideológicas contrapuestas. Este es un lastre que debemos ser capaces de superar y que muchos aún no se atreven a hacer.

Aprovecho esta ocasión para hacerles un ferviente llamado a desterrar definitivamente las desconfianzas y superar los esquemas añejos que aún persisten, para mirar hacia el futuro con optimismo, porque así lo exigen los grandes desafíos que juntos los chilenos debemos encarar. Si somos capaces de trabajar con empeño y solidaridad, estamos en óptimas condiciones para superarlos y salir airoso.

Signos tentadores

Quienes vivimos en este final de siglo, somos testigos y también actores de fenómenos que están transformando profundamente la convivencia en el mundo entero. Son signos alentadores.

La democracia

Uno de esos signos es el proceso de democratización de las sociedades, fundado en el reconocimiento y afirmación de la dignidad de la persona humana.

La libertad como fundamento de la vida individual y social se alza por todas partes por sobre los bloques definidos ideológicamente. Hemos presenciado cómo, frente al monólogo del Estado, se ha ido imponiendo el diálogo de la sociedad. La democracia está triunfando en el mundo entero.

Nuestro país no ha sido observador en este proceso, sino que lo ha vivido intensamente. En pocas ocasiones de nuestra historia, Chile ha sido más contemporáneo del mundo que en el presente.

La humanidad ha comprendido que la libertad es un valor indivisible; que no hay mayores falacias que creer que se puede tener libertad económica o se puede tener justicia social sin tener libertad política, como si la capacidad creadora del hombre pudiera admitir alguna forma de sojuzgamiento. La experiencia está enseñando que la convivencia civilizada y el progreso se construyen sobre las bases de la libertad y de la justicia.

Ante nuestras conciencias la democracia surge no sólo como un imperativo ético, sino también como un imperativo de eficiencia. Es éste el sistema que nos permite el mejor uso de nuestra creatividad y de nuestra energía, porque ya no es necesario desgastarse en levantar barreras frente a diversos enemigos. Lo que hoy nos une como nación es mucho más fuerte que nuestras legítimas diferencias.

La creatividad personal y colectiva

Nunca ha sido tan evidente como ahora la maravillosa creatividad de que es capaz el ser humano. Este es otro signo alentador.

El hombre vive, con asombro, un proceso de aceleración del tiempo histórico, en que una década de antaño equivale a un par de semanas de hoy.

Por eso el éxito de las economías modernas depende de su capacidad para adaptarse a los cambios e innovar. De allí que la función fundamental de los gobiernos sea crear un contexto que

estimule la creatividad. Y las empresas deben estar abiertas al cambio económico, tecnológico y social. La creatividad supone empresas capaces de integrar armónicamente en su interior a profesionales, técnicos y trabajadores. Es el propósito común el que permite elevar la productividad, diseñar procesos, productos nuevos y mejorar la calidad. De ahí que el éxito de la empresa dependa de todos sus integrantes.

La innovación exige el desarrollo de una base empresarial extensa. En el comercio internacional hay lugar para todos aquellos que sean eficientes. No sólo hay grandes empresas exportadoras; también hay medianas y pequeñas. En el vasto mercado mundial actual, aquellos empresarios que poseen capacidad de gestión, sea cual sea su tamaño, encontrarán un lugar promisorio.

Por otra parte, la creatividad depende también de la calidad de los recursos humanos. La ventaja comparativa esencial para tener éxito en el mundo moderno está en la calidad de la gente y su formación. La modernidad no reside sólo en las máquinas, sino fundamentalmente en la capacidad creativa de las personas.

Quiero decir que suscribo plenamente lo que acabamos de oír al presidente de ICARE, don Gustavo Vicuña, sobre la importancia que en este sentido tiene el proceso educativo. El esfuerzo educativo que debemos hacer en nuestro país, para estar a la altura de los tiempos, es una de las cosas sobre las cuales el gobierno pide a todos los chilenos la mayor comprensión y solidaridad.

Nuestro gran desafío económico

Estos signos promisorios están presentes en el desarrollo nacional. De nuestra capacidad de afianzarlos y vigorizarlos dependerá en gran medida el éxito o fracaso de la actual generación chilena en el empeño de incorporar a nuestra patria al mundo de las naciones prósperas.

La economía chilena de nuestros días es muy distinta a la de las décadas de los cincuenta o los sesenta. Hoy Chile es un país en que el sector exportador juega un rol importante; los empresarios nacionales tienen mentalidad exportadora y están dispuestos a penetrar los mercados externos y competir allí, de igual a igual, con los empresarios más eficientes del mundo.

El nivel de las exportaciones chilenas de este año superará los 8.500 millones de dólares; la participación relativa de las exportaciones en el PGB (Producto Geográfico Bruto) sobrepasará el 30 por ciento. Mientras que en las décadas del cincuenta y sesenta había en Chile fundamentalmente dos grandes empresas exportadoras, hoy hay más de 4 mil exportadores, la mayoría de ellos chilenos.

No obstante lo anterior, hay que señalar que éste es sólo el comienzo. Medidas las exportaciones en términos per cápita, Chile exporta 650 dólares por habitante. Este nivel está muy por debajo del logrado por los países asiáticos, como Corea y Taiwán, en que el nivel de las exportaciones supera los 1.500 dólares por habitante, y el de las naciones escandinavas, que han alcanzado niveles superiores a 4.000 dólares por habitante.

Chile se encuentra sólo en la primera fase del desafío exportador. La variedad de recursos naturales que nuestro país posee le ha proporcionado ventajas comparativas para tener éxito en esta etapa. Pero es necesario pasar a una nueva fase.

Esto implica aumentar el nivel de competitividad internacional de la economía chilena, no únicamente en recursos naturales como cobre, productos forestales, productos marítimos y frutícolas, sino en bienes que posean un mayor nivel de elaboración, que tengan más valor agregado.

Ello requiere inversión en tecnología y en personas. Sólo aumentando el nivel del trabajador chileno, será posible alcanzar este objetivo. Eso es lo que han hecho las economías exportadoras exitosas, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros.

Responsabilidad del gobierno, de empresarios y de trabajadores

La importante tarea que tenemos por delante requiere del sector público y del sector privado; del gobierno, de los empresarios y de los trabajadores.

El gobierno ha asumido su parte con responsabilidad. Hemos realizado una política seria y eficaz en el manejo macroeconómico, en la apertura de la economía internacional y en la creación de nuevos espacios mediante el mejoramiento de las relaciones internacionales de Chile, que hace factible un mayor despliegue de la actividad económica nacional.

Hemos sido responsables en el esfuerzo de justicia social y no hemos rehuído empeño ni generosidad para crear un ambiente de colaboración nacional. Sabemos que queda mucho por hacer y mucho que mejorar en nuestra propia tarea.

En este nuevo contexto, pienso que el empresariado debe asumir una mayor responsabilidad en el desarrollo social del país. La inversión en educación, en salud y en bienestar debe ser compartida, y los empresarios deben asumirla con mucho más energía que en el pasado.

La experiencia de los países avanzados, con economías más dinámicas, nos revela que la existencia de sindicatos fuertes y de

una atmósfera de colaboración y participación entre empresarios y trabajadores ha sido un factor decisivo para el éxito.

No olvidemos que en una economía abierta la colaboración y la unidad interna son indispensables para triunfar. En una economía cerrada, la pérdida de eficiencia que significan los conflictos y tensiones puede ser absorbida con una alta protección del exterior. Pero en una economía abierta eso no es posible. Por lo tanto, adquiere mucho mayor fuerza la necesidad de la colaboración. Los tiempos nos exigen un esfuerzo solidario.

La colaboración es la otra cara de la competencia. Términos que en otra época podían parecer antagónicos, son hoy día complementarios. No son los aranceles los que aumentarán nuestra riqueza. Es la colaboración la que nos hará más competitivos en los mercados internacionales.

Son tres las áreas fundamentales en que ésta colaboración debe expresarse.

Entre empresarios y trabajadores

Se ha iniciado un camino promisorio que debe ser profundizado. El proceso de concertación social que se ha ido desarrollando entre la CUT y la Confederación de la Producción y el Comercio debiera extenderse a las empresas, en la búsqueda de acuerdos que permitan relaciones armónicas y favorezcan la productividad.

Colaboración entre el sector público y el sector privado

No valen ya las disputas del pasado. La penetración de mercados externos, el desarrollo de una base tecnológica sólida, el afianzamiento de una capacidad de educación y formación técnica profesional, la disposición de servicios más competitivos internacionalmente, son tareas que se deben emprender conjuntamente con una mirada de mediano plazo.

Como un aporte a esta función, el gobierno dará nuevos pasos, flexibilizando la acción de la Corporación de Fomento y de la Corporación del Cobre, para estimular nuevas inversiones conjuntas en empresas mixtas.

Colaboración entre empresas privadas

El tamaño de nuestras empresas es pequeño frente al mercado mundial. La necesidad de preservar la calidad de las empresas chilenas exige de esfuerzos mancomunados para la penetración de

mercados, para el control de la calidad, para el desarrollo de nuevos productos en el país. La torpeza o desidia de un solo exportador irresponsable puede significar un grave costo para todos.

Es ésta una tarea indispensable, que radica fundamentalmente en los propios empresarios.

Señoras y señores:

No me canso de repetirlo, porque lo creo esencial: Chile enfrenta el desafío de consolidar su democracia —con todo lo que significa de libertad, vigencia de los derechos humanos y respeto a la dignidad de las personas— y al mismo tiempo impulsar el desarrollo y crecimiento económico indispensables para derrotar la pobreza, para alcanzar mejores niveles de vida para su pueblo y para avanzar hacia nuestra plena integración en el mundo moderno, y hacer todo ello en un clima de paz interna, justicia social y solidaridad nacional.

Esta no es sólo la tarea de un gobierno; es la tarea de todos los chilenos. Todos podemos contribuir eficazmente a su logro, si somos capaces de superar naturales egoísmos y vencer explicables diferencias. A todos los llamo a colaborar con buena voluntad.

En esta tarea los empresarios tenéis un papel insustituible, que requiere de vuestro esfuerzo, comprensión, disciplina, creatividad y generosidad.

Es el aporte que Chile espera de vosotros.

Yo estoy cierto de que no se lo negaréis.

Muchas gracias.

En ceremonia aniversario de la Corporación de Fomento de la Producción

Santiago, 29 de abril de 1991

Señoras y señores:

Estamos aquí para expresar nuestra confianza y nuestro respaldo a la acción de Corfo. Después de las palabras que le acabamos de oír al vicepresidente, es poco lo que yo podría agregar. Quiero, simplemente, decir que comparto plenamente todos los conceptos que él ha expuesto sobre la evolución de Corfo y sobre las tareas que actualmente tiene por delante.

La verdad es que hace un año, cuando asumimos el gobierno, parecía que Corfo estaba en un estado de decrepitud verdaderamente amenazante. Dentro de una concepción dogmática, de prescindencia absoluta del Estado en la vida económica, prácticamente se estaba conduciendo a utilizarla sólo como instrumento de privatización de las empresas del Estado; y, cumplida esa tarea, iba a quedar con un enorme pasivo y sin funciones específicas que desarrollar.

Frente a esa concepción, no faltaban quienes añoraban los viejos tiempos en que Corfo fue el motor dinamizador del desarrollo industrial del país, y abrigaban la esperanza de que el nuevo gobierno pudiera tratar de hacer nuevamente de Corfo lo que fue en sus inicios.

Ni una de ambas cosas es compatible con la realidad. El pasado no revive; las funciones que Corfo cumplió —ser el motor creador del proceso de industrialización nacional—, hace cincuenta años, indudablemente no corresponden a las exigencias de las realidades económicas del mundo de hoy. Esa tarea se cumplió, y cualesquiera que sean los dogmatismos al respecto, personalmente pienso que llenó un papel importante para el desarrollo de nuestra nación.

Chile no tendría las posibilidades económicas que hoy día tiene si Corfo, en su tiempo, no hubiera hecho lo que hizo.

Pero, no se puede volver atrás, y la tarea que entonces se cumplió, ya está cumplida.

Hoy día hay otras tareas. Admitiendo que el motor de la actividad económica es la iniciativa privada y la empresa privada; que la economía se rige, fundamentalmente, por las reglas del mercado, y que el papel del Estado es simplemente subsidiario, hay que afirmar que ese papel exige de parte del Estado intervenciones necesarias, en algunos aspectos, para la regulación del mercado, a fin de que éste funcione adecuadamente. Y, en otros aspectos, de estímulo y apoyo para que el espíritu de empresa y de iniciativa del sector privado pueda realizarse adecuadamente.

Nuestro país hoy día necesita, fundamentalmente, del desarrollo de la pequeña y de la mediana empresa. Mi experiencia en mi reciente viaje por Europa me confirma ese criterio. Los países más desarrollados de Europa deben gran parte de su producto y, sobre todo, la fuente principal de trabajo para sus habitantes, a pequeñas y medianas empresas.

Y para que surjan estas pequeñas y medianas empresas no basta con que digamos "entreguemos el desarrollo de esto a la iniciativa privada, que cada cual trate de formar su empresa, movido por su espíritu de iniciativa", porque se necesita crédito adecuado, y el acceso al crédito internacional no es fácil para un pequeño y mediano empresario. Es necesario un organismo de intermediación para que ese crédito llegue a ese pequeño empresario.

También se necesita tecnología, y el acceso a la tecnología no está a disposición de cualquiera. Es indispensable hacer un esfuerzo para poner esta tecnología al alcance de quienes la requieren.

Tenemos un enorme desafío por delante, el desafío de desarrollar la potencialidad creadora de nuestro país, no sólo en el ámbito de las grandes empresas, sino ayudando, estimulando, con crédito adecuado, con tecnología eficiente, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa.

Creo que en esta hay un papel enorme para la Corporación de Fomento de la Producción, y que al cumplir ese papel el Estado está cumpliendo un deber ineludible. Si queremos desarrollo nacional, el Estado tiene que contribuir con su cooperación de esta manera.

La forma como Corfo se está estructurando para cumplir estas tareas, constituye un enfoque moderno, positivo y constructivo, no sólo para que Corfo se mantenga viva, sino que para que cumpla una función de bien público que Chile necesita y espera de ella.

Yo quiero terminar mis palabras expresándole a la plana directiva de la Corporación de Fomento de la Producción, a su Consejo,

a sus gerentes y a todos los funcionarios que en ella trabajan, la confianza que el gobierno tiene en que, con diligencia, con eficacia, con abnegación, con espíritu patriótico, seguirán cumpliendo esta tarea tan importante para el desarrollo nacional.

Muchas gracias.

En ceremonia que da inicio al Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa

Santiago, 4 de julio de 1991

Señoras y señores:

En verdad, después de lo que le hemos oído al ministro de Economía, es poco más lo que se puede agregar. Sólo quiero destacar que el paso que da el gobierno tiende a concretar en acciones específicas una aspiración que, entiendo, es compartida por todos los sectores en nuestro país: la necesidad de facilitar el desarrollo de la mediana y la pequeña empresa.

La experiencia mundial revela, incluso en los países más desarrollados, que el crecimiento económico no depende sólo de las grandes empresas. Las grandes empresas cumplen un papel, pero su propia acción está complementada por la de muchas pequeñas y medianas empresas que colaboran con las grandes, o que cubren otros sectores de la actividad económica, satisfacen otro tipo de necesidades y, sobre todo, tienen un gran impacto en la ocupación. Y diría que tienen, además, un papel muy importante como motivadoras de la capacidad de esfuerzo individual.

El pequeño y mediano empresario que se arriesga y se empeña en salir adelante en una actividad creadora, pone en ello no sólo su modesto patrimonio y su capacidad personal, sino que cierto ideal, cierto entusiasmo, cierto afán de contribuir con su capacidad creadora a mejorar su propia situación y la de su familia, la de quienes con ellos laboran, y de hacer un aporte efectivo al país.

De esto se ha hablado siempre y se ha hablado mucho, y en nuestro programa, como señalaba el señor ministro, la idea de im-

pulsar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, ocupa un lugar preferente.

Pero del dicho al hecho hay bastante trecho, y pasar de las generalidades a concretar en acciones específicas esta voluntad de impulsar en nuestro país el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, es una tarea que nos ha costado algunos meses. Desde que asumimos el gobierno hemos estado preocupados de esto, y en ello han trabajado equipos del Ministerio de Economía, de la Corporación de Fomento de la Producción, del sistema financiero, del Servicio de Cooperación Técnica, del Ministerio de Planificación. En definitiva, hemos logrado organizar este programa que hoy día, en la exposición que acabamos de oír, del señor ministro de Economía, el gobierno entrega al país y a los empresarios chilenos.

Yo sólo quiero resaltar que esto corresponde a una voluntad política muy definida de traducir aspiraciones en realidad; y quiero hacer un llamado a los sectores empresariales, a las organizaciones de empresarios y de trabajadores, para que vean en esta iniciativa una posibilidad importante y traten de encauzar su acción para que ella realmente funcione. Me dirijo sobre todo, a los colaboradores del Estado, a los distintos servicios públicos, que son llamados a poner en práctica las políticas aquí diseñadas, para que lo hagan no de una manera burocrática, cumpliendo simplemente una obligación rutinaria, sino poniendo el alma en esta tarea, a la cual atribuyo gran importancia en el cumplimiento de ese objetivo fundamental de mi gobierno, el de impulsar el crecimiento con equidad.

Muchas gracias.

En asamblea general ordinaria de socios de la Sociedad de Fomento Fabril

Santiago, 24 de julio de 1991

Señoras y señores:

Quiero expresar, aparte de mi respaldo a todo lo que acaba de decir el señor ministro de Hacienda, la complacencia con que he escuchado el discurso de vuestro presidente don Fernando Agüero. La seriedad con que él ha expuesto los puntos de vista del sector empresarial, la ecuanimidad con que ha analizado los distintos puntos, es materia de profunda satisfacción para quien les habla.

Creo que el camino del diálogo, de hablar con franqueza y con respeto recíproco, es el que mejor sirve para una buena convivencia nacional y para cumplir los propósitos de progreso que nos animan a todos.

Quiero aprovechar para decir que valorizo muy altamente el papel de la industria en el desarrollo nacional. Sé que todos ustedes, y los representados de ustedes, la gente que trabaja en el sector industrial, son personas que hacen un gran esfuerzo, que ponen todo lo que son capaces para el éxito de sus empresas, y sé también que el éxito de las empresas se traduce en progreso, en bienestar, en crecimiento del país.

No pienso que el simple progreso de las empresas sea la solución definitiva para todo, pero creo que es condición esencial. Sin un fuerte desarrollo de nuestra capacidad productiva, en manos de ustedes, indudablemente el país no va a crecer.

Y creo que el desafío en el campo industrial es muy grande. En este mundo que se achica, en que grandes conglomerados de naciones se agrupan y compiten, el drama de los países en vías de desarrollo es que de nosotros se quiere materias primas o productos

con poco grado de elaboración y se nos dificulta, como ocurre en la Comunidad Europea por los sistemas arancelarios, la producción y exportación, a esos sectores, de productos con mayor valor agregado.

Tenemos el desafío de superar esas barreras, y lo podremos hacer en gran medida en cuanto seamos capaces de un perfeccionamiento científico y tecnológico que nos permita producir mejor y con más bajos costos.

Termino mis palabras agradeciéndoles el esfuerzo de los empresarios chilenos del sector industrial. Me alegra haber escuchado lo que realizan en el campo de la capacitación y de la educación; la inversión en la gente, a que se ha referido el señor presidente, es verdaderamente una tarea, a mi juicio, primordial para el desarrollo del país.

Cuando uno ve la cantidad de jóvenes que no están adecuadamente capacitados para el trabajo y el drama que significa el desaliento que por ello sufren, que los lleva muchas veces a caer en el derrotismo y en cosas peores, uno siente como un imperativo patriótico y de conciencia la necesidad de hacer un tremendo esfuerzo por abrir posibilidades de capacitación y perfeccionamiento a tanta gente.

La experiencia que nos muestran algunos países desarrollados, especialmente del mundo de Asia del Este, revela que el esfuerzo de capacitación de la gente y la capacidad de los empresarios de entenderse con sus trabajadores, el buen manejo de las relaciones de personal, que estimulen la creatividad no sólo del empresario sino de cada colaborador, es un factor fundamental de progreso.

Gracias, y yo confío en que nosotros seguiremos realizando desde el gobierno la tarea de mantener reglas claras, estables, para la actividad económica; de tratar de impulsar el crecimiento sobre bases de una economía abierta, libre y competitiva; y, al mismo tiempo, de crear las condiciones de justicia y de atender las necesidades de los sectores más postergados, lo que es indispensable para que realmente haya una convivencia pacífica y estable. El crecimiento económico no será suficiente garantía de paz social y de estabilidad institucional si no va acompañado de un fuerte mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más pobres, si no va acompañado de justicia social.

Muchas gracias.

Para dar a conocer el Programa Nacional de Infraestructura

Santiago, 30 de agosto de 1991

Compatriotas:

He creído conveniente dirigirme a ustedes e informarlos sobre el Programa de Inversión en Infraestructura para los años 1991 a 1994, que el gobierno ha comenzado a ejecutar.

En varias oportunidades me he referido a las graves deficiencias de que adolece la infraestructura pública nacional, especialmente en materia de caminos, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, riego, agua potable, alcantarillado, saneamiento de aguas servidas, transporte urbano, regulación de las ciudades y edificación pública.

Aunque en los últimos veinte años la población del país creció en cerca de tres millones y medio de personas, la inversión anual en obras públicas disminuyó considerablemente.

Algunos ejemplos demuestran cuán grave es el deterioro que en este aspecto sufre el país.

La red básica de caminos es de 23.000 kilómetros, de los cuales hay poco más de 11.000 pavimentados. La mayor parte de estas pavimentaciones se hicieron antes de 1970. Entre 1955 y 1970 se pavimentaban aproximadamente 360 kilómetros al año. En los últimos veinte años ese ritmo disminuyó a poco más de la mitad, mientras la flota de vehículos se multiplicó tres veces.

En el caso de la red vial comunal, cuya responsabilidad se entregó a los municipios, sin dotarlos de equipamiento y recursos adecuados, se ha producido un grave deterioro. La mayor parte de los caminos se encuentra en mal estado de conservación. Ello afecta muy gravemente a la población rural, principalmente en las regiones más apartadas.

La explotación de las plantaciones de bosques hechas desde los años cincuenta en adelante ha triplicado desde 1970 a 1990 el transporte de productos forestales. Para atenderlo, nos encontramos sin caminos suficientes y con una empresa de ferrocarriles altamente endeudada, con líneas deterioradas y equipos en muy malas condiciones. Nuestros ferrocarriles, en lugar de incrementar su capacidad para movilizar estos tráficos, la han disminuido.

En materia portuaria los mejoramientos en la productividad, logrados como resultado de cambios institucionales en los puertos, hicieron posible sostener el crecimiento del tráfico con muy pequeñas inversiones en infraestructura. Sin embargo, al asumir este gobierno ya se notaban serios síntomas de copamiento de la capacidad. Además, el crecimiento proyectado del tráfico de exportación e importación hacía impostergables expansiones adicionales de capacidad en la zona central. Los sitios dañados por el sismo de 1985 en Valparaíso y San Antonio no han sido reconstruidos, y los que se encuentran en pie podrían colapsar de producirse un nuevo fenómeno telúrico.

Las carencias en el transporte interurbano se dan también en las zonas urbanas. La infraestructura no se ha acomodado al crecimiento de la población y de la flota de vehículos. Hacia el futuro, si no adoptamos desde ahora medidas de fondo, sólo se visualiza más congestión, más accidentes, más contaminación y un deterioro creciente de la calidad de vida de la gente que vive en zonas urbanas.

En obras sanitarias, durante los últimos veinte años se lograron mejoramientos de la cobertura, continuando una acción histórica encomiable. Sin embargo, en parte como resultado de la insuficiencia de inversiones, se han ido copando las fuentes de abastecimiento de agua y reduciendo a menos de la mitad las dotaciones disponibles por habitante. Además, han surgido problemas cada día más graves para una adecuada disposición final de las aguas servidas. Entre 1970 y 1991 se ha triplicado el volumen de aguas servidas que se arrojan en nuestros ríos, lagos y mares, casi sin ningún tratamiento, ocasionando gravísimos problemas de sanidad.

En regadío, para la implementación de grandes proyectos es insustituible la acción del Estado. Sin embargo, ella virtualmente se detuvo durante el gobierno anterior. Estos proyectos son los que pueden hacer la diferencia entre la prosperidad o el estancamiento de muchas regiones del país, y en especial de los campesinos medianos y pequeños que le dan sustento permanente a la actividad económica de ellas.

Como éstos, podrían citarse ejemplos análogos en otros sectores, demostrativos todos de que el país está sufriendo una importante crisis en su infraestructura pública, que si no es superada con deci-

sión y rapidez, puede llegar a convertirse en seria barrera para el crecimiento económico y en grave obstáculo para el progreso social.

Mi gobierno tiene con el pueblo de Chile el compromiso de impulsar el crecimiento con equidad. Tenemos que derrotar la pobreza. El desarrollo económico y la justicia social son, para nosotros, tareas prioritarias.

El crecimiento depende, fundamentalmente, de la inversión privada en el desarrollo de los recursos productivos. Pero esa inversión requiere que haya caminos, puertos, servicios sanitarios, posibilidades de riego, etc.

El progreso social y la calidad de vida de la gente exige la satisfacción de las necesidades esenciales de salud, educación y vivienda; pero esto a su vez entraña muchas veces la existencia de obras y servicios de urbanización, como calles, agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, medios de transporte, etc.

Por estas razones, es deber ineludible del Estado emprender las acciones y destinar los recursos necesarios para dotar al país de la infraestructura pública indispensable para su progreso y modernidad, como asimismo para satisfacer adecuadamente necesidades básicas de la población.

Conscientes de esta responsabilidad, hemos puesto en marcha el Programa de Inversión en Infraestructura cuyas líneas fundamentales ahora expongo. Este Programa es el resultado de serios estudios intersectoriales que han sido indispensables para individualizar las principales carencias, elaborar los respectivos proyectos o anteproyectos, evaluar su costo y rentabilidad, ubicar los recursos disponibles para su financiamiento y determinar las prioridades.

Esta clase de obras suelen ser de alto costo y generalmente son de cargo del Fisco. Esperamos que la ley promulgada hace poco, por iniciativa de mi gobierno, sobre concesiones de obras públicas, permita sumar importantes aportes de capital privado a la tarea de modernizar nuestra infraestructura —formalmente invitamos a hacerlo a nuestros empresarios—; pero es evidente que el esfuerzo principal recaerá sobre el Estado.

El Programa que hemos preparado para el período 1991-94, considera una inversión pública de 2.350 millones de dólares, que al valor del cambio de hoy equivale a 835 mil millones de pesos. Esto significa un incremento notable de las inversiones en el sector. Ya este año las hemos aumentado en prácticamente un tercio con respecto a 1990 y en el Presupuesto del próximo año consideramos otro aumento semejante.

Como ustedes comprenderán, la destinación de estos recursos importa un gran esfuerzo, que debemos hacer sin provocar déficit presupuestarios, ni quebrar los equilibrios macroeconómicos —que significarían riesgo de inflación, lo que debemos evitar a toda costa—

y sin perjuicio de nuestro compromiso preferente en materia de gasto social, especialmente en salud, educación y vivienda.

¿En qué se invertirán estos recursos?

En materia de *vialidad interurbana*, aparte de los gastos de conservación y mejoramiento de caminos, estamos construyendo la doble calzada de la Ruta 5 desde San Fernando al sur y esperamos llevarla hasta San Javier antes de fines de 1993. También completaremos hasta San Antonio la doble calzada en la Ruta 78. Además, pavimentaremos casi mil kilómetros en distintos caminos en todas las regiones del país. Adicionalmente, por el mecanismo de licitación de obras por concesión, esperamos ejecutar los proyectos del Túnel El Melón, el acceso sur a Concepción, parte de la Ruta de los Conquistadores —entre San Javier y Concepción— y el acceso a Santiago de la Ruta 78 desde San Antonio.

En *ferrocarriles*, hemos enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley para sanear la empresa y modernizarla, a fin de que vuelva a ser realmente eficiente. Para ello el Fisco invertirá 98 millones de dólares y se propone la formación de empresas mixtas con capital privado, para atender el tráfico de carga.

En *puertos* estamos concentrando nuestro esfuerzo en un programa de emergencia que permitirá entregar en servicio, a comienzos del próximo año, un sitio en San Vicente y dos en el muelle Barón de Valparaíso; concluir en 1993 dos sitios adicionales en San Antonio y comenzar, a fines de ese año, el mejoramiento de los sitios 1, 2 y 3 del puerto de Valparaíso. También se está terminando la construcción de un sitio en el Puerto de Chacabuco y se está en negociaciones con empresas privadas para construir por concesión nuevos puertos en Corral y Punta Arenas. Simultáneamente, estamos preocupados del desarrollo de instalaciones portuarias y caletas para la pesca industrial y artesanal.

En materia de *aeropuertos*, complementando las inversiones que realiza la Dirección General de Aeronáutica Civil, se proyecta mejorar las pistas, sistemas de seguridad o terminales en Iquique, Antofagasta, Isla de Pascua, Tepual y Punta Arenas, y se encuentra en elaboración la ingeniería final para el nuevo terminal de pasajeros en Pudahuel, obra que se espera concluir a mediados de 1993.

Estamos poniendo en marcha un programa de construcción de varias grandes *obras de riego*. El próximo año concluiremos el regadío del valle de Pencahue en la Séptima Región. Próximamente iniciaremos la construcción del Embalse Santa Juana en la Tercera Región. En 1993 concluiremos una primera etapa del Embalse Convento Viejo en la Sexta Región y esperamos iniciar la construcción del Canal Laja-Diguillín en la Octava, sin perjuicio de las obras que se desarrollen directamente por el sector privado con apoyo del Estado, conforme a la ley de fomento del riego, para lo cual consideramos

un aumento significativo de recursos. Simultáneamente, se avanza en los estudios del Canal Linares en la Séptima Región, del embalse Puclaro en la Cuarta, del embalse Minillas en la Quinta y del Canal Victoria-Traiguén en la Novena.

En materia de *obras sanitarias*, se proyectan múltiples obras para satisfacer las necesidades de agua potable y alcantarillado de numerosas comunas y atender las expansiones de demanda generadas por los programas de vivienda, como también la construcción de sistemas de agua potable rural. La inversión pública en este rubro se complementará con inversión privada en los servicios sanitarios de Tongoy, Pucón, litoral norte y sur de la Quinta Región y otros que sea factible y conveniente entregar en concesión. Se contemplan además recursos para interceptar y tratar las aguas servidas en distintas ciudades del país, lo que incluye el saneamiento del Gran Valparaíso, para poner fin a la contaminación del litoral, y la primera etapa de un plan de saneamiento para Santiago con la construcción de interceptores en el Zanjón de la Aguada y el río Mapocho y una planta de tratamiento en Santiago Poniente, incluyéndose un posible pretratamiento de emergencia para combatir la contaminación bacteriológica de algunos canales de regadío.

En *vialidad urbana* se proyectan ampliaciones, mejoramientos y habilitación de ejes viales para evitar la congestión vehicular en varias ciudades, y la pavimentación de aproximadamente 700 kilómetros de calles de tierra en poblaciones de distintas comunas, lo que aparte de mejorar la calidad de vida de la gente, contribuirá a disminuir la contaminación por partículas, especialmente grave en la Región Metropolitana.

Con este mismo propósito de defender la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, se ha iniciado un proyecto de mejoramiento urbano de Santiago, que incluye la remodelación de áreas céntricas —como la aldea a la Estación Mapocho—, inversiones significativas en forestación y parques y la racionalización y modernización del *transporte público urbano*. Sin perjuicio de las diversas medidas que se están adoptando para regular la movilización colectiva a fin de disminuir la congestión vehicular y la contaminación, se ha decidido la construcción de una nueva línea del Metro de Santiago, que atenderá la demanda entre La Florida y el centro de la ciudad. Esperamos iniciar la ejecución material de esta obra en el segundo semestre de 1993.

En materia de *edificación pública*, preocupa seriamente al gobierno el deterioro que, por falta de adecuada mantención, ha sufrido el patrimonio inmobiliario fiscal, constituido por los edificios en que funcionan los servicios civiles del Estado. Para corregir esta situación, se está poniendo en marcha un programa de reparación y

conservación de edificios públicos y de construcción de edificios fiscales multiuso social y control de zonas fronterizas.

Como mis compatriotas podrán apreciar, se trata de un Programa a la vez ambicioso y realista. Son muchas las necesidades que demandan solución en materia de infraestructura; pero las obras públicas demandan cuantiosos recursos y éstos son limitados. Hemos procurado establecer las prioridades con sentido de equidad regional y social, tratando de que las nuevas obras beneficien a todas las regiones y atiendan preferentemente a los sectores más necesitados. Sin perjuicio de la atención que el Programa presta a los requerimientos de la Región Metropolitana, donde habita casi el 40 por ciento de la población nacional, nos preocupa especialmente el desarrollo integral del país. Prueba de ello es que alrededor del 80 por ciento del total de los recursos comprometidos se gastará en las otras regiones.

En este sentido creo necesario destacar, también, que este Programa de Infraestructura es independiente y adicional a las obras que se ejecuten con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que el gobierno se propone incrementar, conforme ha quedado establecido en el Proyecto sobre reforma de la Administración Municipal y Regional recientemente aprobado por el Senado.

Este programa es, asimismo, independiente de los que en algunos rubros de infraestructura realizan otros servicios, como son, por ejemplo, las edificaciones que ejecuta Digeder, y las obras de riego en beneficio de familias campesinas a cargo de Indap y el Fosis.

La programación de estas inversiones se ha hecho contemplando los grados de flexibilidad necesarios para hacer frente a posibles emergencias, de modo que sea posible efectuar las reasignaciones que ellas hagan necesarias. Como todos sabemos, nuestra naturaleza nos suele prodigar cruentos fenómenos destructivos. Hasta hace pocos meses sufríamos una sequía que duró tres años y causó graves daños, especialmente en el Norte Chico y en la costa central. Recién Antofagasta fue víctima de un aluvión de efectos catastróficos. En los últimos días, la erupción del volcán Hudson ha ocasionado enormes perjuicios en la región de Aysén. Frente a estos accidentes, es preciso acudir en auxilio de las zonas afectadas y, muchas veces, ellos obligan a ejecutar obras públicas que no estaban programadas.

Podrá extrañar que este Programa Nacional de Infraestructura comprenda hasta 1994, en circunstancias de que mi gobierno termina a comienzos de ese año. Lo cierto es que el Presupuesto fiscal de 1994 deberá ser aprobado el año anterior y, sobre todo, las obras de que se trata requieren, por su naturaleza, largos períodos de ejecución. La tarea que estamos emprendiendo no responde sólo a las urgencias del presente, sino principalmente a los desafíos del futuro.

Por lo demás, yo no trabajo para mi gobierno. Yo y mi gobierno trabajamos para Chile. Los gobiernos pasan, Chile permanece.

La ejecución de este programa generará nuevos empleos para nuestros trabajadores y será un importante desafío para las empresas relacionadas con la construcción. Si bien el Estado financia las obras—salvo las que se ejecuten por concesión— serán empresarios privados quienes las construyan.

Estas obras significarán progreso nacional. Al programarlas y ejecutarlas, estamos cumpliendo una de nuestras grandes tareas: promover el crecimiento con equidad. Estamos preparando a Chile para el nuevo siglo. Estamos haciendo patria.

Buenas noches.

Con motivo de la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente

Santiago, 5 de junio de 1990

Nos reunimos para solemnizar la firma del decreto que crea la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Hemos querido hacerlo hoy para dar realce a la celebración en nuestro país del Día Mundial del Medio Ambiente. Hace 18 años, se iniciaba la histórica Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, que significó un fuerte impulso a la toma de conciencia universal sobre el estado de los recursos del planeta y su incidencia en la calidad de vida de la mayoría de sus habitantes. Hoy damos en Chile un paso para avanzar, como comunidad nacional, en el camino de generalizar esa toma de conciencia y convertirla en acciones concretas.

Vivimos en medio de fenómenos de agudo deterioro de nuestros recursos naturales renovables, y de graves procesos de contaminación. Nuestros recursos forestales nativos, nuestros recursos hidrobiológicos, nuestros suelos y nuestra fauna sufren, desde hace mucho tiempo, un tratamiento descuidado, de corto plazo, que no toma en cuenta su carácter de proveedor de riquezas para hoy y para mañana. Nos vemos seriamente afectados por la contaminación de nuestro aire y de nuestras aguas interiores y marítimas. Este fenómeno afecta especialmente a Santiago, que sufre contaminación atmosférica, hídrica, acústica y de suelos.

Esta situación tiene un fuerte impacto en la calidad de vida de la mayoría de la población del país.

Hemos señalado reiteradamente nuestra voluntad de enfrentar en forma seria y responsable la protección de nuestro medio ambiente, para poner efectivo término al grave proceso de deterioro y destrucción que viene sufriendo ostensiblemente.

Expresión de esa voluntad son algunas decisiones del gobierno,

en el corto lapso transcurrido desde que asumimos: la que declaró Monumento Nacional a la Araucaria; la creación de la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana; las medidas adoptadas en los Ministerios de Agricultura, Minería, Obras Públicas, para reformar, en el ejercicio de sus funciones, sus competencias en materias ambientales.

Pensamos que nuestro compromiso con el desarrollo y con la equidad, que conforman dos de las tareas fundamentales de nuestro gobierno, lleva implícita la defensa y protección del medio ambiente. No habrá verdadero desarrollo, ni tampoco justicia, si nuestro medio ambiente continúa destruyéndose o deteriorándose.

Este es un desafío que nos obliga a todos, más allá de posturas político-partidarias o concepciones ideológicas particulares. Es nuestra firme decisión buscar, en esta materia como en otras, consensos amplios que comprometan a todos los sectores y actores sociales en esta empresa común.

Tampoco nos cabe duda de que la responsabilidad asumida es una tarea de futuro, que se proyecta ciertamente mucho más allá del período de este gobierno. Ello nos obliga a sentar bases estables y duraderas, no emocionales o nacidas del impulso, que aseguren la continuidad del esfuerzo que estamos iniciando.

El Decreto Supremo que hoy firmamos, constituye un paso en esta dirección. Al crear la Comisión Nacional del Medio Ambiente, busca dar una expresión constitucional sólida, dentro de la estructura del gobierno, a los compromisos señalados. A partir de los mecanismos que supone su funcionamiento y de los criterios que gobernarán su quehacer, la Comisión establecerá también las condiciones para iniciar un proceso de creciente y progresiva participación del sector privado, de las organizaciones no gubernamentales, de las universidades, de las instituciones representativas de los diversos actores sociales y de la ciudadanía en general, en la gestión de nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales.

No se trata, como livianamente se podría interpretar, de crear simplemente una nueva Comisión. Se trata, y así se señala con claridad en el texto del Decreto Supremo, de reemplazar institucionalmente una estructura que, por diversas razones, no arrojó los resultados esperados al crearse. Y para hacerlo, estamos, por una parte, entregando un fuerte respaldo político a los mecanismos de coordinación de las diversas instituciones públicas, vinculadas a la temática ambiental; y, por la otra, estamos aprovechando y fortaleciendo al máximo posible todas sus capacidades técnicas y de recursos humanos existentes. No se crean, por lo tanto, nuevas y costosas estructuras burocráticas.

La Comisión Nacional del Medio Ambiente, de carácter interministerial, estará constituida por un Comité de Ministros, presidido

por el ministro de Bienes Nacionales y formado por los ministros de Salud, Economía, Agricultura, Minería, Vivienda y Transportes; por un Comité Operativo formado por representantes de todos los Ministerios con competencias ambientales y una Secretaría Ejecutiva como organismo técnico de estudio y planificación.

Sin perjuicio de la proyección de largo plazo que tiene nuestro compromiso con la nación en estas materias, la Comisión deberá acometer un conjunto de tareas inmediatas. Entre ellas, quisiera destacar la urgencia de formular una política nacional de protección ambiental que permita orientar adecuadamente los programas de desarrollo y los proyectos de inversión que se irán realizando en los variados sectores de la actividad nacional.

Resulta también urgente abordar con seriedad la tarea de proponer, dentro de plazos razonables, una legislación ambiental que consagre los conceptos expuestos y establezca un sistema de normas realistas y apropiadas para el adecuado manejo, explotación y protección de nuestro patrimonio natural. Para la elaboración y discusión de dicha propuesta, la Comisión promoverá la concurrencia y participación más amplia posible de todos los sectores de la comunidad nacional.

La constitución de los mecanismos regionales, provinciales y comunales que permitan extender la acción de la Comisión a todos los ámbitos del territorio nacional, es otra de las tareas prioritarias que ella acometerá. Junto a esto deberá establecer los canales de participación ciudadana que, a esos niveles, consideramos absolutamente indispensable en los procesos de identificación de problemas, planteamiento y ejecución de soluciones y control en el cumplimiento de medidas y normas.

Para una participación eficaz y eficiente se requiere de una comunidad consciente e informada. He encomendado a la Comisión impulsar y coordinar un programa de educación y extensión en torno a los problemas ambientales que aquejan al país, que permita avanzar a paso seguro en este sentido.

También está entre las responsabilidades más inmediatas de la Comisión el coordinar las acciones necesarias para que Chile asuma una posición activa en el concierto internacional, reflejando los criterios nacionales en torno a materias tales como los cambios climáticos globales, el debilitamiento de la capa de ozono, la cuestión antártica, la conservación de la diversidad genética y otros.

Estimados amigos:

Creo que ustedes coincidirán en que es hermoso el desafío que enfrentamos. Siento, entre nosotros, la presencia espiritual de tantos

antepasados nuestros, chilenos y extranjeros, que dedicaron sus mejores esfuerzos a conocer nuestra tierra, a amarla, a difundir sus valores y a enseñarnos a cuidar de ella y de sus recursos. Y también siento a aquellos chilenos que aún no están entre nosotros y que esperan heredar un patrimonio ambiental íntegro, sano y al servicio de todos.

Pensando en ellos, en los que ya quisieron a esta tierra y los que la querrán en el futuro, los invito a reflexionar junto al poeta Luis Oyarzún, respondiendo al juez que se hace eco de la parábola de los talentos:

Te di un pedazo de la tierra bien plantado de árboles y amenizado por aguas y ahora me lo devuelves yermo. Ahora sabes. Te lo di para probarte, para ver quién eras. . . Mira lo que me entregas. No me importa tanto la tierra como lo que hiciste con ella. . . No me cuesta reparar lo que destruyes. Pero tu propia destrucción me importa y me cuesta. La tierra es tu retrato.

En acto de clausura de la Primera Reunión de Expertos de Alto Nivel designados por los gobiernos para revisar el borrador del Plan de Acción para el Medio Ambiente en América Latina y el Caribe¹

Santiago, 13 de julio de 1990

Hace pocos días tuve la oportunidad de dar la bienvenida en su sesión inaugural, a los delegados asistentes a la XXI Conferencia Regional de la FAO, que se realizó en Santiago en esta misma semana. Hoy, cuando se clausuran vuestras deliberaciones, es para mí motivo de igual satisfacción poder expresar, en nombre del gobierno y del pueblo de Chile, mis felicitaciones por la labor realizada a los distinguidos participantes de esta Primera Reunión de Expertos de Alto Nivel designados por los gobiernos para revisar el borrador del Plan de Acción para el Medio Ambiente en América Latina y el Caribe. Esta coincidencia no es producto del azar. Se trata de una expresión clara de la decisión de mi gobierno de reinsertar a Chile, de un modo activo, en los debates internacionales sobre temas de particular importancia para nuestros países.

Queremos reafirmar hoy que la región de América Latina y el Caribe puede volver a contar con la activa y decidida participación del gobierno de Chile en todas aquellas iniciativas internacionales, regionales y subregionales definidas como de interés común. El tratamiento de nuestros problemas ambientales y vinculación con

¹ Convocada por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Santiago, 11 - 13 julio 1990).

las políticas globales de desarrollo ocupará un lugar destacado en nuestra reinserción internacional.

Desde que asumimos el gobierno, hace cuatro meses, hemos demostrado, de cara al país y con hechos concretos, nuestra decisión de enfrentar resueltamente nuestra problemática ambiental, en la medida de nuestros recursos y posibilidades. Por primera vez Chile tendrá una política sobre problemas del medio ambiente.

El propósito de mi gobierno es abordar con decisión la difícil tarea de hacer crecer nuestra economía, de asegurar una distribución socialmente justa de los beneficios de dicho crecimiento y de garantizar que este proceso no atente contra el derecho de las futuras generaciones a gozar de un medio ambiente sano y de una base de recursos naturales que les permitan continuar mejorando su calidad de vida.

Comparto el diagnóstico, tantas veces formulado, sobre la crítica situación que vivimos en la región en relación al deterioro de nuestros recursos naturales renovables y a los crecientes procesos de contaminación, que afectan seriamente nuestras potencialidades de desarrollo y la calidad de vida de los habitantes de nuestro continente.

La tarea de incorporar plenamente la dimensión ambiental a las decisiones de política que demanda el desarrollo económico y social de nuestros pueblos, es un desafío que los gobiernos de la región han estado asumiendo en forma creciente.

La variedad de situaciones políticas, económicas, sociales y ambientales de nuestra región ha provocado que las respuestas en esta materia sean variadas y con resultados también disímiles. Ello se aprecia en los diferentes modelos institucionales ensayados, que incluyen —por mencionar tan sólo algunos—, la creación de ministerios u organismos claramente especializados, la asignación de competencias a los órganos nacionales de planificación, o la creación de instancias de coordinación de competencias ambientales descentralizadas en organismos sectoriales.

Esta heterogeneidad de respuestas también se aprecia con claridad en su expresión jurídica, que ha significado una enorme riqueza en materia de legislación, desde su incorporación en las respectivas constituciones; la promulgación de leyes orgánicas y leyes marco; el establecimiento de códigos ambientales y, en no pocos casos, el establecimiento de normas puntuales y aisladas referidas a temáticas o situaciones específicas.

El panorama no es menos diverso en lo que se refiere a la aplicación de instrumentos de política que buscan alcanzar los objetivos propuestos. Aun cuando es posible apreciar una tendencia a privilegiar los instrumentos asociados a la regulación directa en sus diversas expresiones, no están ausentes los intentos de inducir com-

portamientos ambientalmente sanos de los agentes sociales mediante el uso de variados instrumentos económicos indirectos.

Esta variedad de respuestas que están dando los países de nuestra región a esta problemática, es uno de los fundamentos básicos de nuestro respaldo a las iniciativas de cooperación regional que se han estado desarrollando.

Consideramos que debe promoverse, en la forma más activa posible, el intercambio de experiencia e información entre nuestras administraciones ambientales. El plan de acción que ustedes han revisado, recogiendo las prioridades ambientales ya definidas, puede llegar a ser, en su versión definitiva, un conjunto ordenado de estrategias y programas de coordinación, a nivel regional y subregional, y sobre áreas temáticas globales o específicas, según sea el interés de los países participantes.

No cabe duda de que los acuerdos que alcancemos sobre las áreas y programas, así como los mecanismos para la cooperación regional que han ocupado vuestras deliberaciones en estos días, jugarán un papel de enorme importancia para resolver los problemas ambientales más graves que nos afectan.

Sin embargo, y teniendo a la vista la celebración de la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se realizará en Brasilia en 1992, tampoco puede dudarse de que la cooperación regional constituye un camino para asegurar que América Latina y el Caribe lleguen a ella con una clara y definida posición común, que permita colocar en la mesa de las negociaciones los planteamientos que demanda nuestro propio desarrollo para que sea sustentable. Los países altamente desarrollados caminan hacia acuerdos entre sí.

Es éticamente aceptable, y políticamente deseable, que los países de América Latina y el Caribe también desarrollen sus acuerdos. Ninguno de los grandes problemas globales del medio ambiente podrá superarse sin el requisito de la cooperación.

Por eso, a veinte años de la Conferencia de Estocolmo, estoy seguro de que el evento de Brasilia marcará de manera profunda la forma como el planeta en general, y nuestra región en particular, comenzarán a transitar por el tercer milenio.

Numerosas son las materias en que deberemos concordar. El Plan de Acción, su discusión en la próxima Conferencia Interministerial por realizarse en Trinidad y Tobago hacia fines de este año, y la Conferencia preparatoria que la Cepal convocará en 1991, son instancias que deberemos saber utilizar con este objeto: la necesidad de defender nuestro patrimonio natural.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para reflexionar ante ustedes sobre dos temas que, entre otros, considero de gran importancia en este sentido.

El primero de ellos se refiere a la convicción que tengo de que el bienestar de nuestros pueblos y la integridad de nuestros recursos naturales, no pueden seguir soportando el peso que significan las condiciones en que se realiza el comercio internacional de nuestros principales productos y el tratamiento que se ha dado a nuestro endeudamiento externo. Ello ha significado una enorme transferencia neta de recursos desde la región hacia las naciones industrializadas.

No es viable continuar aumentando nuestras exportaciones sobre la sola base de incrementar su volumen físico, particularmente de aquellas materias primas que provienen de nuestros bosques, nuestros mares y nuestro suelo.

La defensa de nuestro patrimonio natural y, por lo tanto, la contribución de éste no sólo al bienestar de nuestras futuras generaciones sino también a la estabilidad global del planeta, pasa necesariamente por la capacidad que sepamos desarrollar para agregar valor, sobre bases competitivas, a los recursos naturales que exportamos, y atenuar así el ritmo de su explotación.

La cooperación regional en materias ambientales debe, en consecuencia, incluir esfuerzos en campos como la integración, para defender los términos de intercambio de nuestro comercio, para enfrentar las tendencias proteccionistas de las naciones industrializadas y para generar las transformaciones productivas y tecnológicas necesarias.

El segundo tema se refiere a nuestra posición, como región, frente a los problemas ambientales globales.

Sin desconocer la cuota de responsabilidad que nos corresponde en la tarea de prevenir o atenuar tales problemas, no cabe duda de que ellos son generados principalmente por actividades realizadas en el mundo industrializado. Los países del Norte acumulan una "deuda ambiental" con nosotros, que afecta las posibilidades del crecimiento y el desarrollo de nuestros países. Algunos ejemplos:

- El alto consumo de energía y sus formas de producción por los países desarrollados son la causa principal del calentamiento de la tierra, que afecta a todos.
- La producción de gases que destruyen la capa de ozono, se sitúa en los países altamente industrializados del Norte, y nos afecta a todos.

Ello hace necesario que esos países asuman en forma importante el costo de sanidad ambiental, con el fin de superar los riesgos a la sobrevivencia de las especies y de la humanidad misma.

Por nuestra parte, a los países de la región nos corresponde plantearnos unificadamente en torno a algunas facetas que esta cuestión presenta.

Por un lado, la evaluación de los efectos que estos problemas tendrían sobre la estabilidad y comportamiento de nuestro propio ecosistema y poblaciones, y la propuesta correspondiente de mecanismos de compensación que aseguren a nuestros países el poder enfrentarlos adecuadamente.

Por otro lado, el reconocimiento al servicio que presta a la estabilidad global del planeta la conservación de nuestros ecosistemas y la propuesta de mecanismos de retribución a través de vías comerciales y financieras.

Por último la necesidad de promover un proceso no oneroso de transferencia tecnológica hacia los países en desarrollo, que asegure su indispensable crecimiento sin acrecentar estos problemas globales.

Al finalizar estas reflexiones, quiero agradecer a los distintos organismos del Sistema de Naciones Unidas que han participado en la preparación de las propuestas en que ustedes han trabajado. En particular, vaya nuestro saludo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y a la Oficina Regional del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por sus actividades de promoción de la cooperación regional, que deseamos ver fortalecidas e incrementadas en beneficio de nuestros pueblos.

Antes de concluir, permítanme expresarles algo que me nace desde lo más profundo de mi condición de ser humano.

Según la tradición bíblica, al crearse el mundo, Dios lo entregó al hombre para que se enseñoreara de él y dominara las fuerzas de la naturaleza. A través de milenios, la humanidad ha cumplido el mandato bíblico, se ha multiplicado y ha ejercido señorío sobre la naturaleza física del universo; señorío extraordinario, que la ha llevado a descubrir las leyes que rigen el desarrollo de la naturaleza y a encontrar en ella las fuerzas, desde el fuego hasta la energía atómica, que permiten el desarrollo y el crecimiento del nivel de vida de los seres humanos.

Pero, cuando uno examina en conciencia cómo la humanidad ha cumplido este mandato, yo diría que no obstante el tremendo éxito alcanzado en dominar las fuerzas de la naturaleza, nos encontramos con una doble deuda.

Por una parte, estos bienes han sido puestos a disposición de todos los seres humanos y han sido, sin embargo, apropiados y distribuidos de manera muy inequitativa o desigual entre los distintos seres humanos. Hay pueblos ricos y pueblos pobres. Hay pueblos que han aprovechado este potencial y hay pueblos que han quedado al margen de ese progreso. Esto nos impone un tremendo desafío, el desafío de lo que alguien llamó la justicia social internacional.

Junto con eso, hemos incurrido los humanos en otra falta. Nos

hemos creído dueños absolutos de estos bienes de la naturaleza puestos a nuestra disposición y los hemos usado de una manera abusiva, sin pensar que son bienes que están a disposición no sólo de las actuales generaciones, sino de las futuras; no sólo de la humanidad presente y pasada, sino de la que viene, sin pensar que son bienes que, así como se multiplican y fructifican, también se destruyen y se deterioran. Sólo en estos últimos años la humanidad se ha venido a dar cuenta de este pecado, que significa usar abusivamente del ambiente que nos fue puesto a disposición. Por eso, aquí viene otra forma de justicia: la justicia con la naturaleza, que es tarea de todos.

En ese esfuerzo se inserta todo el movimiento ecológico, toda la lucha por la defensa del medio ambiente. El aporte que ustedes, expertos en la materia, están otorgando para crear conciencia en la humanidad, para extender en todos los ámbitos la conciencia sobre la trascendencia de estos problemas, sobre el deber que tenemos de cuidar el ambiente, creo que es de una enorme importancia.

Por eso, yo quiero felicitarlos por la labor que ustedes realizan y expresarles, en nombre del gobierno, que Chile, su pueblo y su gobierno están decididamente comprometidos en la lucha por la defensa del medio ambiente.

Muchas gracias.

En acto de inauguración del Primer Encuentro Nacional Juvenil de Medio Ambiente

Santiago, 25 de septiembre de 1991

Estimados jóvenes:

Agradezco a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica su invitación para participar en esta Jornada Inaugural del Primer Encuentro Nacional Juvenil del Medio Ambiente, un evento que es ejemplo de iniciativa, entusiasmo y participación de los jóvenes.

Esta casa universitaria, que ha hecho tantos aportes a la vida nacional, acoge hoy cerca de mil expresiones juveniles de literatura, artes plásticas, visuales y gráficas, y de aportes científicos y tecnológicos relacionados con el tema del medio ambiente, lo que es prueba del espíritu innovador y creativo que existe en nuestra juventud. Felicito a cada uno de los jóvenes que, convocados por la Federación de Estudiantes, destinaron tiempo, esfuerzo y cariño, en distintos lugares de nuestro territorio, a expresar en estos interesantes trabajos el amor a su tierra y a la vida.

Cuando ustedes se organizan y manifiestan su preocupación por el medio ambiente, por el deterioro de nuestros recursos naturales, por los fenómenos de contaminación, por la calidad del hábitat urbano de nuestra población, están expresando amor por la vida, por la de quienes comparten nuestro tiempo y la de quienes vendrán después de nosotros. Están expresando, también, un compromiso con nuestra patria, que nos demanda preocupación por sus problemas y esfuerzos para solucionarlos. Es propia de la gente joven una mayor sensibilidad —que suele llegar hasta la re-

beldía— frente a realidades que repugnan a su conciencia moral, a sus conceptos de bien, de verdad, de justicia, de belleza, de fraternidad humana.

Esa sensibilidad puede expresarse en un mero testimonio, o en capacidad para concebir cambios y voluntad para luchar por ellos.

Los países, especialmente las naciones jóvenes y en vías de desarrollo, como la nuestra, requieren de este aporte de su juventud. Lo necesitan en sus tareas prioritarias de asegurar la libertad, derrotar la pobreza, impulsar el crecimiento y conquistar la justicia social. La requieren, asimismo, para cuidar sus recursos naturales, impedir la degradación ambiental y lograr así una mejor calidad de vida para sus pueblos.

Es triste comprobar que, en los últimos años del segundo milenio de la era cristiana, nos encontremos con que nuestro mundo enfrenta tan agudos problemas de degradación ambiental porque nuestra generación y las que nos antecedieron no supimos cuidar adecuadamente la naturaleza. Cumpliendo el mandato bíblico, los hombres nos hemos esforzado, a través de los siglos, en dominar el universo y aprovechar todas sus potencias naturales para conquistar mayor bienestar y más poder, pero lo hemos hecho olvidando que los recursos naturales no son ilimitados y han de servir no sólo a las generaciones presentes, sino también a quienes vengan después. Este olvido, traducido en uso descuidado y abuso irresponsable, cuando no francamente destructor de esos recursos, se ha transformado en creciente degradación y contaminación ambiental.

Este fenómeno se ha visto agravado en los últimos decenios por los excesos del consumismo, convertido por muchos en fin de la vida, lo que ha terminado por deteriorar la calidad de vida de la población. Como señalara con lucidez Octavio Paz en su discurso al recibir el Premio Nobel:

El mercado tiene una relación muy directa con el deterioro del medio ambiente. La contaminación no sólo afecta al aire, a los ríos, y a los bosques, sino también a las almas. Una sociedad poseída por el frenesí de producir más para consumir más, tiende a convertir las ideas, los sentimientos, el arte, el amor, la amistad y las personas mismas en objetos de consumo. Todo se vuelve cosa que se compra, se usa y se tira al basurero.

Ninguna sociedad había producido tantos desechos como la nuestra. Desechos materiales y morales.

La ilusión de la prosperidad sin límites se ha convertido, paradójicamente, en un peligro para la humanidad.

En nuestros días, felizmente, la comprobación del deterioro ambiental a nivel del planeta está generando una creciente movilización internacional, que también ha llegado a nuestro país.

Son, especialmente, las jóvenes generaciones de estudiantes,

trabajadores y profesionales como ustedes, quienes con su inquietud y preocupación han provocado este despertar.

Es cierto que desde los orígenes de nuestra historia ha habido en Chile hombres y mujeres que nos alertaron sobre la fragilidad de nuestro territorio y se preocuparon de nuestros recursos naturales. Muchos trabajaron en silencio, generalmente en medio de incomprendiones y con escaso apoyo, estudiando los recursos de nuestra patria y desentrañando sus riquezas. La mayoría de nuestra sociedad, sin embargo, vivió de espaldas a su propio territorio y a las posibilidades que éste le ofrecía. Así lo demuestra la situación a que hemos llegado, cuyo grado de deterioro todos podemos comprobar.

Más de 50 por ciento de los suelos productivos de Chile sufre algún grado de deterioro, producto de la acción del hombre. En algunas áreas, como en la Cordillera de la Costa de la zona central, tres de cada cinco hectáreas sufren de erosión entre moderada a muy grave.

Las tasas de recolección o captura de nuestros recursos hidrobiológicos, peces o mariscos, han sido superiores a su capacidad de recuperación, lo que ha obligado a la permanente imposición de vedas y controles, sin que se hayan podido impedir los serios peligros de extinción de varias especies.

Nuestro país aún no dispone de un catastro completo y confiable de sus recursos forestales nativos. No sabemos bien cuál es la distribución, el estado y la calidad de ese recurso básico para el futuro de Chile.

El crecimiento en extensión de las ciudades es preocupante. Santiago, que en 1970 tenía 36 mil hectáreas, hoy tiene 50 mil hectáreas construidas. Es decir, entre 1970 y 1991 ha crecido casi un 40 por ciento del crecimiento total que había tenido desde su fundación en 1541. Esto no sería de por sí tan grave si no fuera porque muchas de nuestras ciudades están instaladas sobre los mejores suelos del país. En el caso de Santiago, 90 por ciento del crecimiento de estos años se ha hecho sobre los suelos de mayor productividad del país, calidad que sólo tiene un 4 por ciento del territorio nacional.

Podríamos dar muchos otros ejemplos de fenómenos de deterioro ambiental. Nuestra capital ha tomado bastante conciencia de la contaminación atmosférica que nos afecta. Pero como país debemos saber también que aproximadamente 98 por ciento de las aguas servidas de nuestros alcantarillados son descargadas sin tratamiento en cursos de agua. Sólo en Santiago se recolectan 4 mil toneladas diarias de basuras y no sabemos a ciencia cierta qué ocurre con los residuos industriales líquidos y los peligrosos o tóxicos.

Estos antecedentes ilustran acerca de la complejidad y magnitud del desafío que enfrentamos. Ellos revelan que es necesaria la

intervención del Estado para garantizar un derecho humano fundamental, como es el de crecer y desarrollarse en un ambiente sano.

Frente a esta tarea, nuestro gobierno ha empezado a actuar. Por primera vez en Chile se está definiendo una política ambiental explícita y de largo plazo, en la que estamos avanzando con decisión, aun cuando sus resultados demoren años en apreciarse. Así también ha sucedido en todas las experiencias exitosas en el mundo en esta materia.

Los esfuerzos de la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana por aplicar un Plan de Acción frente a los problemas atmosféricos e hídricos de nuestra capital, la reordenación en marcha del sistema de transporte, el inicio de inversiones significativas para reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos, la puesta en marcha del Plan de Tratamiento de Aguas Servidas mediante el abovedamiento del zanjón de La Aguada y la instalación de una planta piloto, son pasos concretos en la ejecución de esa política ambiental.

Por otra parte, la instalación y puesta en marcha de la Comisión Nacional del Medio Ambiente como organismo coordinador de las competencias de la administración pública en la materia, ha permitido ir incorporando, gradualmente y con realismo, criterios ambientales en la gestión de los distintos ministerios y organismos públicos.

El pronto conocimiento del catastro de toda la legislación ambiental vigente, que comprende más de 1.200 normas dispersas en distintas leyes; los diseños de fortalecimiento de la gestión sectorial y regional en marcha y, sobre todo, los avances en materia de educación ambiental y la preparación de una propuesta seria y bien fundada de una nueva legislación ambiental adecuada a la realidad y los problemas de nuestro país —legislación que esperamos proponer en el curso de este año— son señales claras, aunque no espectaculares, del compromiso político de mi gobierno de avanzar resueltamente en este campo.

Reconozco con franqueza que el tiempo nos urge. Quisiéramos avanzar más rápido, tener más resultados visibles y resolver pronto los más urgentes problemas ambientales. Pero todos han de entender que este esfuerzo es un proceso que exige tiempo, constancia y paciencia. Estamos apenas dando los primeros pasos, orgánicos y fundados, de un largo camino, en el cual todos los chilenos tenemos un papel que cumplir. No es sólo tarea del gobierno, sino de la comunidad nacional entera.

Hace pocos días, en otro evento juvenil, señalé que ustedes los jóvenes representan una oportunidad y una esperanza para nuestros pueblos, porque sin la participación y dinamismo de la juventud corremos el riesgo de estancarnos. Su energía, su creatividad, sus

ideales y sus críticas, sus exigencias frente a la realidad, sus impaciencias, sus estímulos y aportes son valiosísimos para avanzar hacia una sociedad desarrollada y justa. Reafirmando esos conceptos, hoy quiero explicitar que sin ustedes, sin su colaboración y su entusiasmo, tampoco podremos construir el Chile limpio que queremos.

Concretar estos propósitos nos exige ser capaces de diseñar y poner en práctica mecanismos de participación para que los jóvenes puedan expresar sus intereses y, sobre todo, movilizar sus energías en esta causa de la defensa del patrimonio ambiental, que compromete no sólo el presente, sino sobre todo el futuro de nuestro país y de su gente.

Los invito a seguir en este camino, formular propuestas concretas en este sentido, superando, como ustedes lo están haciendo, la etapa de las denuncias espectaculares y avanzando hacia un mayor conocimiento de nuestro territorio, de sus recursos, de sus problemas y de sus potencialidades. Se trata de que la participación sea de aportes y no sólo de proclamas.

La juventud está llamada a mirar hacia adelante.

Sé también que es propia de la juventud la búsqueda de coherencia interna, de un proyecto de vida que fije un horizonte y un camino por donde transitar, en diálogo con sus hermanos, construyendo la justicia y la solidaridad. El encuentro con la naturaleza y una adecuada relación con ella, forma parte de esa búsqueda.

Los invito a no dejarse estar. Que vuestro amor por la vida se exprese, también, en el cuidado de este territorio de loca geografía que Dios y nuestros antepasados nos legaron, para protegerlo, sanarlo y desarrollarlo, condición indispensable para conquistar una buena vida humana para todos nuestros compatriotas.

Así, esta tierra hermosa, que Subercaseaux llamara "el país de las montañas tranquilas, de la tierra inquieta, de los espejos azules, de la noche crepuscular", será también la nación de hermanos que juntos construyen su futuro.

Muchas gracias.

REINSERCIÓN DE CHILE EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Señor Director General de la PAC
Señores Embajadores y Miembros del Cuerpo Diplomático
Señores Ministros y Subsecretarios
Señores Jefes de delegaciones
Señalados
Señores y señoras:

En nombre del gobierno y del pueblo de Chile, me es un honor poder dirigirme a ustedes en esta oportunidad y a la ceremonia de inauguración de la Vigencia Permanente de Chile en la Oficina Regional de la Paz para América Latina y el Caribe.

Acojemos esta oportunidad en la que podemos expresar el deseo de reafirmación de Chile en el mundo que radica en sus relaciones con los países de sus objetivos prioritarios de nuestra política.

Agradezco, señor Director General, sus palabras de bienvenida a nuestro país y sus deseos de éxito en la labor de la Oficina Regional de la Paz para América Latina y el Caribe. Entendemos que la perspectiva del futuro requiere la participación de los grandes transformadores que son capaces de crear un mundo mejor y de superar los obstáculos de nuestra política.

Comprendemos que esta delegación es una parte importante de los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr la paz y la justicia y en la cual los esfuerzos de la Oficina Regional de la Paz para América Latina y el Caribe son fundamentales. El gobierno chileno tiene la importante tarea que en esta delegación debe jugar el papel de representante de las Naciones Unidas y el pueblo de Chile.

Conocemos las valiosas contribuciones que Chile ha hecho a la

ORGANISMOS INTERNACIONALES

En la XXI Conferencia Internacional de la FAO para América Latina y el Caribe

Santiago, 9 de julio de 1990

Señor Director General de la FAO
Señores Embajadores y Miembros del Cuerpo Diplomático
Señores Ministros y Subsecretarios
Señores Jefes de delegaciones
Autoridades
Señoras y señores:

En nombre del gobierno y del pueblo de Chile, me es grato expresarles el más cordial saludo y la calurosa bienvenida a nuestra patria en esta ceremonia inaugural de la Vigésimo Primera Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

Acogemos este evento como un importante respaldo al proceso de reinserción de Chile en el cuadro internacional, que constituye uno de los objetivos prioritarios de nuestro gobierno.

Agradezco, señor Director General, sus generosas expresiones sobre nuestro país y sus deseos de éxito en la tarea de democratización en que estamos empeñados. Entendemos este proceso no sólo en la perspectiva del interés nacional, sino también como parte de las grandes transformaciones que está viviendo el mundo entero hacia nuevos espacios de libertad y paz.

Comprendemos que esta evolución es una tarea de todas las naciones, de la cual ningún país debe marginarse ni ser marginado, y en la cual son indispensables las instancias de encuentro y coordinación a nivel internacional. Mi gobierno respalda el rol importantísimo que en esta búsqueda debe jugar el sistema multilateral de las Naciones Unidas y, en particular, la FAO.

Conocemos las valiosas contribuciones realizadas por esta Or-

ganización a lo largo de su historia, en su infatigable lucha por poner fin a los flagelos del hambre, la malnutrición y la pobreza. La FAO tiene a su haber una trayectoria notable de intervenciones en favor de las naciones del Tercer Mundo, a través de la información que provee a los países, las medidas de urgencia que adopta para ayudarlos a enfrentar los períodos de crisis alimentarias y los proyectos mediante los cuales entrega su valioso apoyo técnico a los pueblos en vías de desarrollo. Es ésta una ocasión propicia para expresarle formalmente nuestro reconocimiento por tan importante labor.

Chile tiene el alto honor de haber acogido a la Sede Regional de la Organización desde el establecimiento de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en los años cincuenta. Ello ha permitido mantener fecundas relaciones entre la Organización y nuestro país, que se han concretado en múltiples acciones de mutuo beneficio. Por lo mismo, quiero garantizarle, Señor Director, que continuaremos brindando nuestro apoyo a la FAO, a su dirección y a su oficina en Chile, para el cumplimiento de su tarea.

Esta Vigésimo Primera Conferencia Regional se realiza en momentos de grandes cambios, caracterizados por el desmoronamiento de la concepción de un mundo bipolar y la valorización creciente de las más diversas expresiones sociales que, aunque con visiones fragmentarias del desarrollo de la humanidad, han tenido el mérito de orientar hacia un desarrollo más tolerante, universal, de diálogo y participación. Desde otro punto de vista, esta Conferencia se realiza en un período difícil para los países de América Latina y el Caribe, que aún enfrentan graves problemas, tales como la superación del endeudamiento, el restablecimiento de los flujos financieros, el combate a la inflación y, en general, el logro de un desarrollo económico sostenido con grados crecientes de justicia social.

El crecimiento económico y la equidad, así como la consolidación y profundización de los sistemas democráticos, son los grandes desafíos para el futuro de la región. En esta perspectiva, adquiere especial relevancia el examen del rol que debe jugar el sector rural en la definición de nuevos estilos de desarrollo para América Latina y el Caribe.

Ha transcurrido ya un cuarto de siglo desde la última oportunidad en que la Conferencia Regional de la FAO se reunió en Chile, en su Octava Sesión, en 1965. Desde entonces hasta ahora se han producido en todo el mundo profundos cambios en lo político, en el campo tecnológico, en las relaciones sociales y económicas y en el acontecer cultural.

En este lapso, la población mundial ha aumentado de 3.300 millones de habitantes a casi 5.500 millones, y en América Latina y

el Caribe lo ha hecho aún en forma más acelerada, desde 249 millones de habitantes a casi 450 millones.

Dicho crecimiento demográfico ha generado una presión creciente sobre los recursos naturales que alimentan a los hombres, como también sobre otros bienes básicos para el bienestar general. Esta presión sobre la tierra, los bosques, el mar, las aguas e incluso sobre el aire que respiramos, ha sido determinante de la actual preocupación por el buen manejo de los ecosistemas, en cuya preservación en lo inmediato se está jugando el destino de muchas generaciones en el futuro.

En América Latina y el Caribe esta situación se ve aún más exacerbada por la migración acelerada de quienes no tienen modo de sobrevivir dignamente en el sector rural y vuelven su esperanza hacia lo urbano, en cuyas grandes concentraciones no son satisfechas esas esperanzas, enfrentándose a menudo al desempleo y a niveles de ingresos tan magros como los que tenían antes.

Las restricciones internas y externas que han golpeado las economías de América Latina y el Caribe en la última década y las medidas de ajuste a que han obligado, han llevado en muchos casos a ampliar la brecha entre el nivel de vida de los más ricos y los más pobres. Aparte de su injusticia, este fenómeno crea tensiones que dificultan el desarrollo y hacen peligrar la paz social y la estabilidad política.

En estos mismos años y a pesar de verse afectados por dichos factores de crisis económica, los sectores agrícola, forestal y pesquero han mostrado una vitalidad para muchos desconocida o sorprendente. Esta se ha manifestado tanto en la capacidad de aumentar la oferta de productos tradicionales, a costos competitivos en mercados deprimidos o injustamente discriminados, como en la generación de nuevos productos, fruto de nuevas tecnologías y formas de aprovechar recursos. Ello ha permitido, al menos en parte, paliar los efectos de la crisis.

Los países de América Latina y el Caribe ven con preocupación que, ante los ingentes esfuerzos por equilibrar sus economías y las presiones y exigencias por abrir sus mercados, algunos centros desarrollados se oponen tenazmente a abrir su comercio agrícola, lo que termina lesionando seriamente los intereses de los países de la región.

El gobierno de Chile apoyará, con todos los esfuerzos que estén a su alcance, las iniciativas tendientes a estructurar mercados internacionales abiertos y leales. De la misma forma, seremos rigurosos para denunciar todos aquellos mecanismos utilizados en contra de un mercado transparente y que sean lesivos para nuestras naciones. Creyendo interpretar el sentir de los países de la región, atribuyo principal relevancia a los resultados que se logren en las negociacio-

nes multilaterales del GATT en la Ronda Uruguay. Confío en que esta preocupación, condicionante del futuro económico de la región, será compartida en las discusiones de esta Conferencia, así como en las sucesivas deliberaciones y acciones que le sigan.

Permítanme ahora referirme en particular al caso de Chile, país en el cual estos 25 años también han traído profundas transformaciones y que hoy, al reiniciar el proceso democrático, creemos necesario destacar.

Partiendo de los cambios estructurales de los años sesenta y pasando por los ajustes de alto costo social realizados durante el pasado gobierno, podemos exhibir importantes progresos y, a la vez, problemas inquietantes.

Chile ha experimentado progresos notables en los sectores agropecuario, pesquero y forestal; pero ese desarrollo no ha sido equilibrado. Paralelamente a explotaciones modernas, con fuertes inversiones y avanzada tecnología, que hacen aportes importantes y crecientes a las exportaciones del país, subsisten otras que permanecen al margen del crecimiento y la modernización, generalmente en manos de pequeños propietarios, productores indígenas y pescadores artesanales.

Esta realidad exige al país un serio esfuerzo para procurar que el crecimiento productivo, además de mantenerse alto y sostenido, se expanda adecuadamente entre las distintas regiones del país, lo que hace indispensable privilegiar de algún modo eficaz a los pequeños y medianos productores y a las comunas que se encuentran en condiciones más desmedradas.

La reconstrucción de nuestra convivencia democrática es una tarea colectiva que exige la participación de todos los sectores sociales, especialmente de quienes han padecido con mayor crudeza la marginación de la vida política, económica y social del país. En este sentido, es prioritario terminar con la discriminación de que ha sido objeto el sector rural frente al urbano, disponiendo las bases para que la población rural tenga acceso a los bienes y servicios necesarios para llevar una vida digna y que, de una vez por todas, se reconozca el aporte real del trabajo y cultura de hombres y mujeres del campo en el progreso económico y social del país.

Para ello será necesario promover y estimular la reconstrucción del tejido social en las zonas rurales, creando expresiones jurídicas e instrumentos institucionales que den la oportunidad a sindicatos, asociaciones de pequeños productores, cooperativas y otras formas de organización de la población rural, para constituirse y desarrollarse.

Es de suma importancia que el desarrollo rural sea entendido como un crecimiento que asegure la satisfacción continua de necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. El

problema ambiental de la agricultura chilena, traducido principalmente en enormes zonas desertificadas y erosionadas, desequilibrio hidrológico de cuencas e inundaciones, contaminación de alimentos, aguas y suelos por uso indebido de agroquímicos, pérdida de recursos genéticos vegetales y animales, entre otros, nos obliga a reorientar las modalidades de desarrollo agrícola y rural hacia formas sostenibles, teniendo presente, además, que gran parte de los problemas de las metrópolis tienen su origen en la falta de atención o la inadecuada forma en que se abordan los problemas del campo. Especial importancia adquiere esta perspectiva de desarrollo para el campesinado, el cual, por razones de marginalidad, fragilidad de los ecosistemas que ocupa y costos de producción, tiene en las propuestas agroecológicas una de las posibilidades reales de prosperar.

En otro orden de ideas, nos preocupa la necesidad de perfeccionar los sistemas de sanidad vegetal y animal, tanto para erradicar pestes y enfermedades que menoscaban la producción, cuanto para eliminar los efectos nocivos de su inadecuada aplicación. Igualmente, estamos abocados a la tarea de diseñar políticas que permitan racionalizar la explotación de nuestros recursos marítimos, compatibilizando su óptimo aprovechamiento con la exigencia ineludible de preservar su subsistencia. También en el ámbito de las actividades forestales, necesitamos perfeccionar las políticas de defensa del patrimonio forestal y de protección y fomento a las nuevas plantaciones, incluyendo en forma eficiente las especies nativas.

Finalmente, creo oportuna esta ocasión para recordar el debate de la Conferencia Mundial de Reforma Agraria y Desarrollo Rural realizada en Roma en 1979 y, compartiendo las tesis allí planteadas por la inmensa mayoría de los países del mundo, adherir al programa de acción y declaración de principios que ahí se aprobaron. Al hacerlo, quiero anunciar que el gobierno de Chile deja sin efecto en este momento sus reservas a dicho Programa de Acción y Declaración de Principios, y hace suya la que el Director General de la FAO ha llamado la "Carta del Campesino". Reconocemos que el objetivo fundamental del desarrollo rural es la búsqueda permanente de la transformación de la vida y las actividades del campo en los aspectos económicos, sociales, culturales, institucionales, ambientales y humanos, todo ello orientado al crecimiento con equidad y con participación activa de toda la población rural.

Consecuente con estos criterios, mi gobierno quiere incorporar de manera efectiva al desarrollo agrícola y rural de nuestro país a aquellos segmentos de la sociedad que durante largos años han estado marginados. Queremos un país en el cual empresarios, técnicos, profesionales, campesinos, trabajadores, mujeres y jóvenes trabajen conjuntamente para lograr un equilibrio entre progreso económico, justicia social y estabilidad política.

Creo firmemente que a pesar de que la década pasada fue tan difícil para nuestros países, contribuyó a entender que América Latina y el Caribe no tendrán desarrollo ni modernización continua, si no existen estrategias de cooperación que permitan enfrentar solidariamente los problemas comunes. Es en esta perspectiva que el tema de la integración de los países que conforman la región de América Latina y el Caribe adquiere una urgencia impostergable. Acorde con este criterio, hago votos para que, en estos importantes foros regionales, seamos capaces de asumir decisiones que abran cauces efectivos a la concertación regional y al fortalecimiento de la cooperación internacional.

Al iniciar esta Conferencia, reciban ustedes el cálido aliento del país que los acoge y de su gobierno, para que vuestros trabajos logren los mejores frutos. Estoy seguro de que la experiencia y lucidez de los participantes aquí reunidos son una garantía para que los resultados de estos días de deliberaciones sean del mejor provecho y de la mejor relevancia, en el esfuerzo de pasar a una nueva etapa de desarrollo y prosperidad para la agricultura, las zonas rurales y todos aquellos que pueblan la región de América Latina y el Caribe.

En ceremonia de firma de la Convención de Derechos del Niño

Santiago, 14 de agosto de 1990

Queridos niños:

Este acto de firmar esta Convención de Derechos del Niño, tiene mucha importancia para todos los niños del mundo. De qué se trata. La mayor parte de la población del mundo es menor de 15 años, son niños. Los niños representan el futuro, los niños son débiles y tienen que llegar a ser fuertes, pero para ello necesitan formarse.

No todos los niños en el mundo, y en nuestra propia patria, cuentan con los cuidados necesarios. Muchos niños no tienen una vivienda decente y digna en la cual vivir; los padres de muchos no ganan lo suficiente para darles una buena alimentación; muchos no pueden educarse adecuadamente; y la educación, el aprender, saber de la vida y aprender a vivir con sus semejantes, aprender a trabajar para que el mundo del futuro sea mejor, y para vivir y conquistar para uno y los suyos una vida mejor, es una aspiración de todo ser humano.

Los niños son débiles y necesitan del cuidado de su familia, y del cuidado de la sociedad. Y por eso es que la Organización de las Naciones Unidas, en que están agrupadas prácticamente todas las naciones del mundo, así como se preocupa de los derechos humanos de todas las personas, de los problemas que afligen a la humanidad, para asegurar que haya paz, que haya libertad, que haya justicia, que haya desarrollo económico, así se preocupa también de los problemas de la infancia.

Y para eso ha constituido una organización en su seno, que se llama la Unicef, que se preocupa de atender y de organizar y aunar

fuerzas para ir en protección de los niños. Y por iniciativa de esta organización, las Naciones Unidas han acordado suscribir un tratado, un convenio, en virtud del cual todos los países miembros de la Organización asumen el compromiso de preocuparse de los niños, de hacer respetar los derechos de los niños.

Pero respetar los derechos de los niños supone que los niños también se preocupan de sus deberes, porque los derechos tienen una contrapartida en los deberes. Así los niños tienen que ser ordenados, disciplinados; tienen que ser empeñosos y generosos los unos con los otros; tienen que ser buenos hijos con sus padres, buenos estudiantes con sus maestros, y respetar a los padres, a los mayores, a los profesores; tienen que ser buenos compañeros entre sí, y no pelear, sino que ayudarse los unos a los otros, porque el futuro de la humanidad será un futuro feliz en la medida en que no sea el egoísmo, el que cada uno se preocupe de sí mismo y no de los demás, sino la generosidad y el amor lo que prevalezca entre todos.

Para mí es muy honroso, en nombre del gobierno y del Estado de Chile, de nuestra patria, firmar hoy día este documento que con nuestra firma entera veinte Estados que lo han suscrito, con lo cual adquiere vigencia internacional.

El mundo puede estar seguro de que el gobierno de Chile cumplirá este acuerdo sobre Protección de los Derechos de los Niños, y yo les pido a los niños chilenos que estén a la altura de la responsabilidad que asumimos, siendo no sólo beneficiarios de estos derechos, sino que siendo, por su parte, coadyuvantes, personas generosas, que ayudan a que estos derechos de los niños sean realidad, no sólo para cada cual, sino que para todos los niños de nuestra patria y del mundo, especialmente los más pobres, los enfermos, los que más necesitan.

Muchas gracias.

Ante la Organización de Naciones Unidas

Nueva York, 28 de septiembre de 1990

Señor Presidente:

Traigo a esta Asamblea, con alegría y emoción, la auténtica voz de la nación chilena, que acaba de renacer a la democracia. Me es muy grato felicitarlo por su elección para dirigir los trabajos del cuadragésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General. Felicito también al embajador Joseph Garba, de Nigeria, por su positivo y dinámico desempeño en la presidencia que recién termina.

Igualmente saludo al señor Secretario General de las Naciones Unidas, don Javier Pérez de Cuéllar. Estamos orgullosos del prestigio que este gran diplomático peruano ha dado a las Naciones Unidas. Fue para los chilenos un honor tenerlo hace pocos días de visita en nuestra patria.

Como sabéis, Chile se distinguió a lo largo de su historia por su espíritu libertario, su respeto al derecho y la solidez de su democracia.

Hemos recuperado esos valores, y lo hemos hecho en paz, sin rencores, mirando hacia el futuro, y con un amplio sentido de reconciliación y de esperanza. La lógica de la guerra que dividió a los chilenos en amigos y enemigos, ha sido superada por la lógica de la paz, en que todos nos reconocemos como compatriotas, cualesquiera que sean nuestras diferencias.

El chileno común está viviendo en libertad una vida más plena y más segura, sin los miedos del pasado, con alegría y esperanza, porque se sabe respetado y tomado en cuenta en su dignidad de persona y llamado a participar, con su propio aporte, en la tarea común de construir el futuro de la patria.

Al reencontrarse con su tradición de pueblo democrático, Chile,

por mi intermedio, saluda y expresa su reconocimiento a las Naciones Unidas y a todos los pueblos y personas que en el mundo acompañaron a los demócratas chilenos en la lucha por defender la dignidad del hombre y reconquistar la libertad.

Los derechos humanos ocupan un lugar preferente en la relación entre Chile y las Naciones Unidas. Desde sus inicios, fuimos infatigables promotores de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Impulsamos el concepto más allá de la protección física de las personas para incluir sus dimensiones políticas, sociales, económicas y culturales, y abogamos por la supremacía de estos principios. Para la democracia chilena los derechos humanos nunca tuvieron fronteras.

Pero en el pasado reciente, el péndulo osciló en dirección opuesta. Cuando en mi país se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, la Organización de Naciones Unidas nunca dejó de mantener bajo estrecha observación lo que ocurría en Chile. Esta actitud vigilante, expresada en las reiteradas condenas de la situación vigente entonces, constituyó una valiosa contribución a la recuperación democrática, que hoy quiero agradecer públicamente.

Esta experiencia nos compromete. Sabemos bien que el respeto irrestricto a los derechos humanos es una exigencia universal, que constituye el fundamento moral y jurídico de toda convivencia civilizada, tanto en el orden nacional como internacional.

Por lo mismo, su defensa es una tarea permanente que jamás debe utilizarse con criterios discriminatorios o al servicio de otros objetivos de política exterior. La protección de los derechos humanos se debe aplicar en todo tiempo y en todo lugar.

Nos parece importante, en consecuencia, informar a la comunidad internacional sobre el espíritu que nos anima para aliviar las heridas infligidas en el alma nacional, como resultado de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado.

Estamos realizando esa tarea con prudencia, equidad y gran sentido de responsabilidad. Se necesita esclarecer y conocer la verdad de lo ocurrido para no prolongar indefinidamente una fuente constante de dolor. Sin embargo, no deseamos detener el reloj de la historia, ni mucho menos procurar revanchismos estériles. Es preciso buscar la verdad y, junto a ella, una auténtica reconciliación entre los chilenos.

Para tales efectos, mi gobierno dispuso la creación de una Comisión Especial denominada "De Verdad y Reconciliación", cuya tarea es investigar las violaciones de derechos humanos más graves cometidas. Esta Comisión está recopilando la información existente y, dentro de un plazo relativamente breve, elaborará un informe. Dada su naturaleza institucional, en ningún caso suplantaré a los Tribunales de Justicia. Esa Comisión, constituida por personas de la

mayor jerarquía moral y prestigio nacional, está trabajando con absoluta independencia y cuenta con la colaboración de los distintos sectores del país.

Por este camino, con la buena voluntad de todos, esperamos satisfacer el anhelo de paz y entendimiento que prevalece en el pueblo de Chile, por las vías del derecho, sobre las bases de la verdad, la justicia y la reconciliación.

En la nueva etapa que inicia, Chile debe consolidar la democracia como forma de convivencia política, fundada en la libertad de las personas, conciliándola con el crecimiento económico y con la justicia social. Este es un desafío común a los países en vías de desarrollo.

La experiencia ha demostrado que sin democracia puede haber prosperidad económica por algún tiempo, pero ésta no echa raíces permanentes, porque la falta de libertad favorece el abuso de los poderosos sobre los débiles, principalmente sobre los pobres; ahoga la iniciativa y participación de muchos, y crea un clima asfixiante de opresión y consiguiente rebeldía que hará imposible la estabilidad.

Sin crecimiento económico puede haber democracia, pero los esfuerzos para mejorar la condición de vida de los sectores postergados, procurando mayor igualdad, sin un efectivo incremento de los bienes disponibles, por bien intencionados que sean, conducen inevitablemente a graves crisis económicas que ponen en peligro todo el sistema social y, desde luego, a la propia democracia.

Sin justicia social cualquier democracia, por próspera que sea, vivirá bajo la permanente amenaza de que el natural descontento de los sectores postergados en demanda de equidad, se transforme en agitación que perturbe los procesos del desarrollo económico, y ponga en jaque la estabilidad del propio régimen político.

Para lograr la paz y la estabilidad en la convivencia nacional es, pues, indispensable, procurar al mismo tiempo la democracia en lo político, el crecimiento en lo económico y la justicia en lo social. Esta es, precisamente, la tarea en que los chilenos estamos empeñados.

Para tener éxito en esta tarea necesitamos no sólo aunar y disciplinar nuestros esfuerzos internos, sino también contar con la comprensión y cooperación de nuestros amigos del mundo, especialmente de las grandes naciones desarrolladas. Nuestros mayores empeños podrían terminar siendo estériles, si en las relaciones económicas entre los países no prevalecen criterios de equidad y de solidaridad.

Este es un problema que afecta vitalmente a todo el mundo en desarrollo. Si queremos ser fieles a los principios que inspiraron el nacimiento de esta organización, debemos ser consecuentes con la idea de que la paz mundial está íntimamente vinculada al imperio

de la libertad, al progreso económico social y a la elevación del nivel de vida en todos los pueblos de la tierra. Mientras haya pueblos sumidos en el hambre o la miseria, u otros que, sin tan dramáticas circunstancias, se estrellan con obstáculos insalvables en sus esfuerzos para crecer y superarse, la causa de la paz estará amenazada.

Sin duda que la acción de los distintos organismos especializados de Naciones Unidas, del sistema financiero internacional y de los programas de cooperación entre países industrializados y naciones en vías de desarrollo, constituyen aportes significativos para superar este problema. Pero yo me atrevo a llamar la atención de los líderes más conscientes y responsables de las grandes naciones desarrolladas para que valoricen en toda su importancia las consecuencias que sus decisiones pueden tener en el afianzamiento o retroceso de la libertad, la justicia, el progreso y la paz en nuestro mundo.

Abrigamos la esperanza de que la efectiva consolidación del nuevo clima de paz entre las grandes potencias, permita a las naciones más ricas reorientar los recursos que han venido dedicando a fines de defensa hacia objetivos de progreso económico-social del mundo en desarrollo.

Reiteramos los principios generales que tradicionalmente han inspirado la política exterior de Chile, que responden a un amplio grado de consenso nacional, y que se identifican plenamente con los valores, principios y objetivos que constituyen la razón de ser de las Naciones Unidas.

Dentro de este marco, la política exterior de Chile busca los siguientes objetivos principales:

- Recuperar la presencia internacional de nuestra patria, mediante una acción realista que se inspire en los valores y principios referidos, con especial énfasis en la defensa de los derechos humanos;
- Universalizar nuestras relaciones internacionales en sus aspectos políticos, económicos, sociales y culturales;
- Impulsar la integración económica y la concertación política latinoamericana, incluyendo el desarrollo de concepciones modernas de seguridad que fortalezcan la paz y la democracia en la región;
- Desarrollar una política económica externa abierta y moderna que nos vincule con los núcleos dinámicos de crecimiento e innovación tecnológica;
- Fomentar las relaciones de cooperación y entendimiento con los países en desarrollo; y
- Reforzar los organismos multilaterales y la participación de Chile en sus iniciativas.

El mundo está en pleno tránsito hacia un nuevo sistema internacional. Celebramos el robustecimiento de la libertad, el mayor respeto por los derechos humanos y la expansión de la democracia como signos auspiciosos del progreso de la humanidad.

Hoy más que nunca es necesario intensificar la lucha contra los autoritarismos de todos los signos. Hoy se desploman las excusas ideológicas para las dictaduras. No hay legitimidad posible para el dominio por la fuerza. La plena vigencia de las libertades esenciales del ser humano es condición ineludible de toda sociedad civilizada. De ahí que mi gobierno apoye decididamente y dé la mayor importancia al examen de las "formas y medios apropiados para fortalecer la eficacia del principio de la celebración de elecciones auténticas y periódicas" que está llevando a cabo la Comisión de Derechos Humanos.

Extraordinariamente positivo nos parece el término de la Guerra Fría, la búsqueda de acuerdos y el clima de amistad y colaboración entre las grandes potencias. Damos la más cordial bienvenida a una Alemania unida y a las nuevas democracias europeas. Ese espíritu debiera contagiar a todas las naciones y permitir poner fin a múltiples conflictos y tensiones que se arrastran durante años en distintas regiones del planeta.

Esta nueva situación ha fortalecido la unidad política y moral de Naciones Unidas, facilitando el diálogo para mejorar la situación internacional. Es el momento de avanzar con mayor rapidez y decisión para alcanzar un desarme general y completo, lograr la prohibición del uso de armas nucleares, el cese de ensayos nucleares y un compromiso total de no utilizar armas químicas y bacteriológicas.

Contrariaría ese espíritu y constituye una amenaza inaceptable el riesgo de que la Guerra Fría sea reemplazada por una intensificación de conflictos regionales, étnicos o religiosos. Naciones Unidas debe permanecer atenta a esta situación y actuar conforme a la Carta cada vez que ello parezca necesario.

La unánime condena internacional por la invasión de Kuwait es expresión de estos anhelos y principios, como asimismo expresa el repudio y justa indignación que suscita esa conducta, que es una flagrante violación a las normas del derecho internacional y una grave amenaza a la era de paz y de cooperación que se inicia. Chile respalda plenamente y está dando cabal cumplimiento a las decisiones que al respecto ha adoptado el Consejo de Seguridad.

Mi gobierno también reitera su convicción de que las resoluciones 242 y 338, del Consejo de Seguridad, son el marco adecuado para garantizar, por una parte, el derecho de Israel a vivir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas y, por la otra, el derecho del pueblo palestino a constituir un Estado soberano.

Hay además otros focos de tensión que son materia de preocupación internacional. Confiamos en que ellos serán resueltos por vías pacíficas, de acuerdo a los principios de la Carta de Naciones Unidas.

Chile condena también toda forma de racismo y discriminación racial, y en particular el oprobioso régimen del *apartheid*. Mi país desea fervientemente que los caminos que con imaginación y voluntad política han abierto el gobierno del Presidente De Klerk y el Congreso Nacional Africano por intermedio de su líder Nelson Mandela, conduzcan al término definitivo del *apartheid*, a través de negociaciones pacíficas, que permitan alcanzar una democracia no racial, sin discriminaciones, basada en el respeto de los principios de la Carta de Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Han transcurrido 45 años desde la creación de las Naciones Unidas y hoy podemos aquilatar con satisfacción la obra trascendental realizada por la Organización en el campo de la descolonización.

La completa aplicación de la Declaración sobre Descolonización debe extirpar el colonialismo, antes de que ingresemos al próximo milenio.

Señor Presidente:

En el nuevo contexto mundial es necesario que cada región se preocupe de promover la seguridad colectiva, para reducir la desconfianza y afianzar la paz, dentro del marco de los tratados y acuerdos internacionales vigentes. Queremos resaltar la extraordinaria labor que diversos gobiernos han desarrollado con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos y de las Naciones Unidas, para traer mayor tranquilidad a América Central.

Chile tiene el privilegio de estar situado geográficamente en una región donde ha primado la cordura y el sentido común, como lo ha demostrado la firma, en 1984, del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, y el creciente afianzamiento de la cooperación entre nuestros países.

Chile tiene una tradicional vocación de participación y cooperación en América Latina.

Consideramos indispensable promover la vinculación política regional y subregional. La creación de grandes espacios económicos en otras regiones del mundo, nos obliga a pensar entre nosotros y con los otros bloques sobre la mejor manera de abordar estos nuevos fenómenos y evitar los riesgos de proteccionismo que ellos representan.

La región atraviesa un importante momento de apertura y modernización de sus estructuras económicas. Ello trae ajustes y variados ritmos de cambios internos, los que debemos tomar en cuenta para acordar formas pragmáticas de cooperación. Nuestro deseo es lograr compromisos estables y duraderos de comercio e inversión que hagan posible superar las tradicionales trabas a nuestro intercambio recíproco. Ya hemos dado importantes pasos en esa dirección con diversos países y seguiremos avanzando por este camino.

Ninguna nación puede quedar marginada de los movimientos mundiales en favor de la liberalización de los mercados y la constitución de amplios espacios económicos. Ello exige una revisión de las políticas y estructuras imperantes en las regiones en desarrollo, así como una política efectiva de apertura de los mercados de las potencias industrializadas.

Las naciones en vías de desarrollo no pueden abrir sus economías y expandir sus exportaciones si no reciben un trato recíproco por parte de los países más avanzados. En los últimos tiempos hemos comprobado, con decepción, que subsisten, e incluso se incrementan, las barreras arancelarias y no arancelarias que entorpecen o impiden la exportación de nuestros productos a los mercados de los países industrializados. Estimamos impostergable la cooperación externa para hacer más fluido el comercio mundial y para flexibilizar las obligaciones que impone el servicio de la deuda.

Por todo lo anterior, mi gobierno considera en términos positivos la denominada "Iniciativa de las Américas", anunciada recientemente por el Presidente de los Estados Unidos, quien propone crear una zona de libre comercio en el hemisferio occidental. Estimamos que éste es un paso constructivo en favor de una mejor relación continental.

Señor Presidente:

Si la distensión es efectiva y perdurable, visualizamos unas Naciones Unidas que en lugar de concentrar su mayor energía en evitar los enfrentamientos bélicos producto de un mundo dividido, podrán abocarse a resolver asuntos que nos son comunes: la lucha contra la drogadicción; los problemas de la familia, la mujer, la juventud, la ancianidad, los impedidos; la degradación del medio ambiente, la falta de alimentos, el terrorismo, el desarrollo de la salud y la higiene y, en fin, tantos otros que son examinados por esta Organización. De las soluciones que encontremos surgirá una más digna condición humana.

En noviembre de este año Chile tendrá el honor de ser la sede de la reunión más importante que se ha celebrado, dentro del Sistema de Tratado Antártico, para la protección del medio ambiente en ese continente helado, objetivo al cual Chile y todos los miembros del Tratado están profundamente comprometidos.

Nuestro planeta está cambiando profundamente y hoy, más que nunca, se requiere de visiones imaginativas y creadoras para enfrentar la realidad internacional. Se deben buscar concepciones prácticas sin olvidar los valores ni las convicciones morales.

Necesitamos preservar nuestra pasión para luchar contra las injusticias, pero es indispensable una actitud serena y un enfoque realista cuando busquemos las fórmulas más eficientes para resolver esos problemas.

Dentro de este realismo debemos reconocer la falta de recursos económicos con que cuenta la Organización, agravado por la multiplicidad de asuntos que debe atender.

Por ello, somos partidarios de racionalizar al máximo el Sistema de las Naciones Unidas, evitando duplicidad de funciones y logrando una mejor coordinación entre las Agencias Especializadas, una mejor eficiencia financiera y administrativa que hagan practicable una respuesta más rápida a los problemas que enfrentamos. En este orden de cosas, apoyamos decididamente los trabajos que con tal finalidad se están llevando a cabo.

En términos globales, no hay duda de que el avance de la democracia ha producido una mayor humanización de la política. Las personas son más respetadas, están más protegidas, son menos vulnerables. Pero, al mismo tiempo, se produce el contrasentido de que se incrementa una deshumanización en lo social. La igualdad de oportunidades se reduce, la persona está más indefensa frente a su entorno, el empleo es difícil de lograr y mantener, los ingresos no alcanzan y vastos sectores viven en condiciones de extrema pobreza.

La situación social del mundo es, a nuestro juicio, el problema más apremiante por resolver, pues hace peligrar la estabilidad internacional. Se requiere de manera urgente dar contenido a una justicia social internacional, para impedir que las dificultades económicas en los países menos desarrollados se sigan trasladando al ámbito político, afectando los procesos de modernización económica y democratización política.

Por ello debemos abordar los asuntos sociales desde una perspectiva global interconectada, dando a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo, al papel de la mujer, al desarrollo de la juventud y a otros temas vinculados, la prioridad que requieren. Sumamos nuestra voz a los llamados que desde esta misma tribuna se han hecho en ese sentido.

El diagnóstico certero y el completo análisis que nos presentan distintos estudios y documentos de esta Organización, adolecen de falta de proposiciones concretas para combatir los males que han ido vulnerando a nuestras sociedades.

Por ello, es de la mayor trascendencia que otorguemos el mandato necesario a la Secretaría General para que en el más breve plazo posible, y aprovechando la enorme riqueza de información existente, proponga medidas concretas de acción para aminorar los más graves problemas sociales detectados.

Es particularmente alentador que en estos días nos estemos reuniendo Jefes de Estado y de Gobierno de alrededor de setenta naciones para aprobar una declaración de compromiso político y un plan de acción para mejorar el futuro de los niños del mundo. Es un símbolo de que esta nueva conciencia que reclamamos está ya emergiendo, porque tras cada niño marginado hay una familia marginada, en muchos casos destruida. Los niños con problemas son un símbolo de los problemas del mundo.

Debemos tener conciencia de que el niño maltratado de hoy es el ciudadano escéptico de mañana. En cambio, aquel niño seguro y protegido será, sin duda, el encargado de construir el universo nuevo y armónico que todos anhelamos.

Señor Presidente:

La comunidad internacional se encuentra en el umbral de una nueva era. El cambio trascendental que significa el desaparecimiento de la Guerra Fría abre perspectivas vastísimas para incrementar y perfeccionar la cooperación internacional en el siglo XXI. Las Naciones Unidas, por primera vez en sus 45 años de existencia, tienen la posibilidad de trabajar en esta labor fundamental sin los límites que significa tratar de intermediar en el enfrentamiento bipolar que, presente en casi todas las áreas, dificultaba enormemente los progresos hacia entendimientos constructivos.

Dentro de esta nueva realidad, traigo del pueblo de Chile un mensaje de paz y de optimismo.

Los acontecimientos de los últimos tiempos son motivo de esperanza para la humanidad. Si no fuera por la grave crisis desencadenada irresponsablemente en el Golfo Pérsico —que tanto daño está causando en los más diversos confines de la Tierra y que ocasiona la peligrosa incertidumbre que hoy vivimos— podríamos decir que el mundo avanza hacia una etapa superior de humanización, con todo lo que significa de crecimiento de la libertad, la justicia y la paz.

La civilización ha avanzado en la medida en que se ha extendido la aceptación y la observancia generalizada de las normas que deben regir la conducta de los hombres y las naciones, para hacer posible la convivencia, la colaboración y el bien común de toda la humanidad.

Es necesario que todas las naciones, débiles o poderosas, comprendan que Naciones Unidas está dispuesta a proteger la vigencia de esas normas. Quienes las violenten o desprecien no pueden esperar nuestra indiferencia y, menos, nuestra aprobación. Naciones Unidas está para apoyar y promover la paz, la justicia, el derecho, y también el bienestar y el progreso de todos. Estas son las bases del bien común nacional e internacional y el sustento de un ordenamiento civilizado de la humanidad.

Chile cree, señor Presidente, que todos nosotros, "los pueblos de las Naciones Unidas", en el umbral del siglo XXI, tenemos un futuro no desprovisto de obstáculos, pero también colmado de promisorias perspectivas, cuya realización dependerá de nuestra decidida voluntad de trabajar juntos y de observar rigurosamente los principios de la Carta y de ser solidarios.

A esta magna tarea, Chile, dentro de sus medios y posibilidades, se suma con fe y entusiasmo. Esta es la nueva oportunidad que se brinda a nuestra generación para construir un mundo mejor. Es el desafío vital para todos los gobiernos y los pueblos de la Tierra.

Muchas gracias.

En la sede del Sistema Económico Latinoamericano (SELA)

Caracas, 10 de octubre de 1990

Es un honor tener la oportunidad de formular algunas reflexiones acerca de nuestra región latinoamericana desde esta tribuna del SELA, justamente cuando se cumplen quince años de la entrada en vigencia del Convenio de Panamá, que dio existencia a este organismo, como respuesta a la evidente necesidad de contar con una entidad de concertación y consulta para analizar los graves problemas que amagaban el desarrollo económico y, por ende, el desenvolvimiento social de nuestra América Latina.

Hace menos de un mes se celebró, como aquí lo ha recordado el señor secretario, en esta misma sala, el decimosexto período de sesiones del Consejo Permanente, debatiéndose los problemas e interrogantes que inquietan a los pueblos y gobiernos de la región, los que hoy día, tras los cambios que se han producido en el mundo, exigen una atención y una más nítida voluntad política compartida.

El signo actual de los tiempos se identifica con la imaginación y la creciente búsqueda de solidaridad más allá de ideologismos y posiciones confrontacionales, que hasta hace poco tiempo parecían naturales e irreversibles. Si la búsqueda del consenso se plantea entonces, con urgencia, a nivel mundial, sería lamentable que América Latina careciera de una instancia que fuera capaz de obtenerlo entre nuestros propios países.

Resulta evidente que este clima favorable en el plano político no se da aparejado de una voluntad definida de reestructurar el actual ordenamiento económico mundial, de modo de tornarlo más justo y equitativo, para posibilitar la solución de los graves problemas que aquejan a los países del hemisferio sur. Por el contrario, sólo

hemos tenido algunos destellos de esperanza como la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas, de abril último, en que las voluntades parecieron aunarse momentáneamente para enfocar el problema del crecimiento de los países en desarrollo con una visión común.

Ha sido tradicional en América Latina culpar de nuestros atrasos y marginalidad a las grandes potencias, sin reflexionar sobre la falta de un esfuerzo serio, sostenido y solidario que permita a nuestros pueblos insertarnos con dignidad en los debates propios del concierto mundial.

Se inicia la década de los noventa sin que se aprecie una reducción de las tendencias proteccionistas que afectan el sistema de comercio internacional, que limitan el crecimiento exportador de los países en desarrollo mediante una trama compleja y poco transparente de obstáculos tarifarios y no tarifarios. Se multiplican las cuotas de importación, condicionamientos bilaterales y "acuerdos de zona gris", numerosas prácticas restrictivas, requerimientos por compensación, una escandalosa y desembozada política de subsidios que imposibilita la sana competencia, surgiendo incluso mecanismos unilaterales de represalia comercial.

Se une a ello el continuo deterioro de los precios internacionales, ya que entre 1982 y 1989 los ingresos en dólares de la región latinoamericana aumentaron sólo en 24 por ciento, en circunstancias de que el volumen físico de las mismas se incrementó en 57 por ciento.

Estos dos últimos factores contribuyen a que la posición relativa de América Latina en el comercio internacional mundial se reduzca de manera constante, pues en tanto que en 1960 la región representaba 7,7 por ciento de las exportaciones mundiales, este porcentaje disminuyó a 5,5 por ciento en 1980, decayendo aun más en 1989, en que alcanzó sólo a 3,3 por ciento.

Especial mención merece el hecho de que el sistema monetario internacional, en lugar de contribuir al financiamiento de las economías latinoamericanas, extrae recursos netos de la región en una proporción que representa el 3 por ciento del producto interno bruto y 20 por ciento de las exportaciones de América Latina. El solo servicio anual de la deuda excede en 25 mil millones de dólares el monto de lo que la región en su conjunto recibe en nuevos préstamos cada año. Estos son hechos irrefutables que restan recursos vitales para el proceso de desarrollo.

Larga y dramática es la lista de desafíos, en la cual no debemos olvidar, por cierto, el fenómeno de la inflación, que a nivel regional alcanzó en 1989 tasas cercanas a mil por ciento y multiplicó por diez aquéllas de 1982.

El panorama anteriormente descrito hace más difícil el proceso

de ajuste que se reconoce como ineludible respuesta para lograr ese desarrollo, complicándose, por lo tanto, la tarea de hacer frente a las consecuencias sociales del ajuste.

Un ajuste serio y sostenido parece, a lo menos en el corto plazo, una tarea que incide en toda la sociedad. Pero la búsqueda del ajuste no nos puede hacer ignorar los deberes ineludibles de la justicia social, sin la cual el mantenimiento de la democracia política resultaría una utopía. Es así como el crecimiento económico equilibrado, la justicia social y la democracia política, forman un eje inseparable y constituyen un desafío vital para nuestros países.

Debemos reconocer que los cambios profundos en la escena económica internacional traen consigo un espacio de nuevas posibilidades para el desarrollo. En efecto, los realineamientos en el hemisferio norte muestran claramente que, en las postrimerías del siglo XX, no hay ya lugar para economías nacionales aisladas. Se torna así imprescindible que América Latina y el Caribe reclamen también para sí esta tendencia, asignando a la integración su verdadero valor como meta única para alcanzar la competitividad a nivel internacional. Sólo asociados en un vasto conglomerado de países, con el consecuente poder de negociación que ello lleva aparejado, es que se presentará para América Latina la posibilidad de competir con éxito en los mercados internacionales.

Al encarar esta tarea no debemos enredarnos en falsos dilemas que puedan perturbarla, planteándonos posiciones aparentemente irreductibles, que no son tales.

En primer término, no existe incompatibilidad en encontrar un horizonte integrador multilateral, común a todos los países de la región, con el desarrollo de acuerdos y proyectos bilaterales o subregionales de integración y cooperación que puedan converger, gradualmente, al marco multilateral. El propósito de ir consolidando un mercado común regional, donde circulen bienes, capitales y servicios en el área, como si se tratase de un solo territorio, puede obtenerse mediante aproximaciones parciales que resulten compatibles con tal propósito. Afortunadamente, existe en la actualidad una convicción generalizada en el sentido de estimar que ALADI, creada por el Tratado de Montevideo de 1980, es funcional a ese propósito.

El segundo elemento central es reconocer que, para avanzar efectivamente en la senda de la integración, se requiere de una buena dosis de pragmatismo. No basta sólo la decisión política, sino es necesario asegurar la mayor identidad posible de las políticas económicas de la región.

En un proceso de integración válido y acelerado como el que se requiere, difícilmente pueden coexistir de manera eficiente grados

muy diversos de integración a la economía mundial, que es a su vez el reflejo del grado de apertura de los mercados componentes.

Frente a la apertura de nuestras economías al comercio mundial, suele surgir otro falso dilema. No existe incompatibilidad entre un proceso de apertura a la economía internacional, con la creación, desarrollo y consolidación de un espacio económico regional. Muy por el contrario; se trata de procesos que se apoyan, se retroalimentan y se sostienen mutuamente. Así lo han estimado los doce países de la Comunidad Económica Europea, prestos a consolidar su integración en 1992, y los países de América del Norte, Estados Unidos y Canadá.

Paralelamente se necesita, como condición básica para perfeccionar el proceso de integración, la existencia de estabilidad en nuestras economías, para lo cual resulta esencial la conservación de los equilibrios macroeconómicos, además de una política arancelaria que refleje razonables grados de apertura al comercio internacional, unidas a una estrategia exportadora clara, como bases para la recuperación del crecimiento sostenido, lo que garantizará nuestro acceso como región a los flujos internacionales de comercio y financiamiento necesarios para nuestro desarrollo.

Tenemos optimismo al constatar que en la región se han producido cambios significativos en las estrategias de desarrollo, lo cual redundará en un proceso económico más eficiente y, por lo tanto, facilitará el avance hacia la aspirada integración.

En este orden de ideas resulta necesario acelerar el proceso de transformaciones de nuestras estructuras productivas, pues es obvio que una vez producida la integración, deberemos ser capaces de responder eficientemente a las crecientes demandas que impone el cambiante y cada vez más exigente escenario económico internacional.

La integración económica supone también una convivencia pacífica. Sin paz no hay desarrollo, ni político ni económico.

Mi país está firmemente convencido de que ha llegado el momento para América Latina de emprender en forma decidida la modernización productiva y tecnológica, a fin de poder acrecentar nuestra base empresarial y con ello generar nuevos productos y ampliar nuestros mercados. Nadie puede dudar de que existe en los países de nuestra región un potencial importantísimo para aumentar las exportaciones de rubros ya consolidados, y avanzar a la vez hacia la incorporación creciente de valor agregado a nuestros abundantes recursos naturales.

Tampoco podrá faltar en dicha política la adecuada capacitación y reciclaje de la mano de obra existente en nuestros países, con miras a aumentar realmente la productividad de nuestros trabajadores. Este elemento resulta fundamental para asegurar una mejora

sustantiva de nuestra competitividad. La modernización productiva supone contar con una base creciente de empresas y empresarios. Ellos necesitan reglas estables, ciertas y realistas. Ni el comercio, ni la inversión, ni el desarrollo pueden vivir la retórica.

Sólo una vez que hayamos sido capaces de responder a estos desafíos es que América Latina podrá enfrentar las tareas que plantea el acelerado cambio tecnológico y el pujante dinamismo de los mercados internacionales.

La labor del SELA, teniendo un papel destacado en la proposición y concertación de las posiciones de la región, sólo podrá resultar fortalecida mediante una participación activa y útil en la discusión de las temáticas esbozadas, que nos permitan a los gobiernos avanzar con la ayuda de criterios técnicos y enriquecidos por análisis en conjunto, hacia la integración como vía al desarrollo económico y social de nuestros pueblos.

El SELA, al promover determinadas acciones de cooperación intrarregional entre nuestros pueblos, busca constituir, realmente, un sistema donde las diferentes acciones se vinculen ordenadamente, se apoyen unas a otras y se orienten con racionalidad adecuada.

No quisiera terminar mi intervención sin aludir al pensamiento profético de un ilustre sabio que comparten Venezuela y Chile: Andrés Bello. Ya en 1826 aludía Bello a la necesidad de proyectar aquella comunidad natural de naciones hispanoamericanas, como él llamaba a nuestros países. Aquella proyección, para Andrés Bello, suponía que entre nuestros países se celebraran tratados comerciales basados en la reciprocidad y en la complementación.

El comercio, señalaba Bello, puede hacer más por suavizar nuestras relaciones que simples promesas de paz. Andrés Bello pensaba que antes de mirar, encandilados, hacia otras regiones, buscáramos, entre nosotros mismos, las fuentes de la prosperidad y el desarrollo. Ahondar el pensamiento latinoamericano del ilustre venezolano contribuirá poderosamente a fundamentar los esfuerzos que hoy estamos realizando.

Muchas gracias.

Ante la XXI Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA

Santiago, 3 de junio de 1991

Señoras y señores:

Esta XXI Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos que hoy tengo el honor de inaugurar, tiene un gran significado para Chile. Por una parte, porque ella se realiza en nuestra tierra, lo cual confirma el pleno reencuentro de nuestro país con la comunidad de naciones americanas y nos estimula para continuar el camino de consolidación de nuestra democracia. Por otra, porque en esta ocasión, quizás por vez primera, todos los representantes aquí reunidos lo son de gobiernos generados por la voluntad libre de sus pueblos.

En nombre del pueblo de Chile les agradezco el honor con que nos han distinguido y les doy la más cordial bienvenida a nuestra patria.

Chile tiene profundos vínculos con la Organización de Estados Americanos. Las iniciativas que le dieron origen y los esfuerzos que ella ha llevado a cabo para fortalecer la paz y el derecho internacional, promover la justicia y la libertad en nuestro continente, encontraron siempre en la democracia chilena un aliado. Por su parte, en las horas difíciles de la intolerancia y la persecución, la Organización de Estados Americanos fue un valioso foro para la defensa de los valores conculcados y del ideal democrático, que los chilenos no olvidamos.

Los tiempos que vivimos nos enfrentan a nuevos desafíos. La fisonomía del mundo de postguerra ha cambiado por la acción de muchos pueblos que, en distintas latitudes, han derrumbado con sus propias manos los muros que contenían su vocación de libertad.

Nuestro continente ha formado parte de este movimiento. Para ello ha debido dejar atrás largas décadas marcadas por viejos dogmatismos que nos llevaron a la división y el odio.

La recuperación de la democracia, el restablecimiento de una convivencia basada en la libertad y el respeto a los derechos humanos, ha sido la gran tarea que convocó a nuestros pueblos durante años.

Ahora tenemos la doble tarea de consolidar este nuevo orden democrático y de esforzarnos, con decisión y eficacia, para derribar el otro gran obstáculo que separa a los hombres en su dignidad: el muro de la pobreza.

Este es un problema que interpela las conciencias en el mundo contemporáneo. Nuestro continente sabe bien de qué se trata. Un pasado de dictaduras y populismos ha dejado como herencia la grave crisis que las naciones latinoamericanas se esfuerzan en resolver y cuya expresión más dramática es la profundización de una pobreza que amenaza con convertirse en endémica.

Nuestros países tienen la enorme responsabilidad de ser capaces de consolidar sus democracias y, al mismo tiempo, avanzar en el crecimiento económico y en la justicia social que nos permitan alcanzar mejores condiciones de vida para nuestros pueblos e integrarnos plenamente en el mundo moderno.

En ambas tareas, si bien son responsabilidad de cada nación, cabe realizar importantes aportes a esta Organización de Estados Americanos.

La plena vigencia de los derechos humanos en el continente y la consolidación, estabilidad y perfeccionamiento de la democracia en todos nuestros países, son condiciones importantes para asegurar la paz, que a todos nos interesa y a cuyo logro esta Organización puede y debe contribuir, por los medios adecuados y del modo más decidido y eficaz.

También el desafío de superar la pobreza y alcanzar la justicia social para nuestros pueblos es tarea que nos interesa a todos, porque el desarrollo económico y social equitativo de las naciones es, asimismo, un elemento indispensable para asegurar una paz sólida y estable.

No será quejándonos ni esgrimiendo teorías como nuestros países avanzarán en el camino hacia el desarrollo. Para ello es necesario que nos incorporemos en forma creativa y competitiva en el proceso de globalización de la economía que vive el mundo de hoy. Ello significa la apertura de nuestras economías a una saludable competencia, el estímulo a la creatividad e iniciativa de nuestros empresarios, la capacitación de nuestros trabajadores, la promoción de la investigación científica y tecnológica y la puesta en marcha de nuestros aparatos productivos.

En este esfuerzo, las naciones de América Latina y el Caribe requerimos de la colaboración de las naciones más desarrolladas. Esta colaboración es mucho más que una ayuda asistencial. Es apoyo científico tecnológico; son créditos para impulsar el desarrollo y enfrentar la deuda externa; es inversión directa o de *joint ventures* en nuestros recursos naturales y humanos; y es, sobre todo, oportunidades para nuestros productos, que muchas veces encuentran limitaciones en los mercados internacionales, en trabas burocráticas que desmienten la apertura de los mercados.

No es justo ni conveniente que los bloques ideológicos de antaño sean reemplazados ahora por grandes bloques económicos; que las reglas de la libertad de comercio sean para unos, mientras el proteccionismo impere para el resto.

Nuestras naciones no piden privilegios ni caridad, sino igualdad de condiciones.

Nuestros esfuerzos para modernizar nuestros aparatos productivos, abrir nuestras economías y mantener los equilibrios macroeconómicos, que han comprometido a nuestros pueblos, a sus trabajadores y empresarios, serían vanos si no podemos competir con la calidad de nuestros productos, sino que debemos hacerlo con las burocracias que ganan mercados por decreto.

Factor fundamental para tener éxito en nuestros objetivos de desarrollo es el impulso hacia la integración de nuestras naciones. En el nuevo contexto internacional, la articulación con las principales corrientes económicas del mundo constituye un imperativo que ningún país puede enfrentar en forma individual. Los procesos de los grandes centros dinámicos de la economía mundial, como Norteamérica, Europa y el Sudeste Asiático, nos muestran un camino exitoso, donde la integración regional permite participar eficazmente en los mercados internacionales.

Para fortalecer este proceso de integración, no basta —sin embargo— con la decisión política, sino que es necesaria también una coherencia económica. Con satisfacción vemos que en nuestra región se han producido importantes avances en tal sentido, expresados en cambios significativos en las estrategias de desarrollo y en los grados de apertura de nuestras economías.

La integración tampoco es una fórmula mágica para la solución de nuestros problemas. Es más bien un camino largo que abre enormes posibilidades y que tiene tanto un sentido económico como cultural. Como lo demuestran otras experiencias que han sido exitosas, como la europea, ella no se construye con discursos o buenas intenciones, sino con voluntad, realismo y flexibilidad.

No queremos que la retórica de la integración oculte sus dificultades. De hecho, los proyectos anteriores en nuestro continente no han satisfecho las esperanzas que en ellos se pusieron y sigue pen-

diente el ideal de una América unida que soñó Bolívar. La integración real —no la retórica— requiere de un flujo comercial y de servicios significativos. Requiere también de políticas económicas compatibles, disposición a someterse a mecanismos colectivos, diálogo y entendimiento político.

Hoy existen en América Latina mejores condiciones que en el pasado para avanzar hacia una integración real. Los procesos de integración y concertación subregional que ya están en marcha así lo demuestran.

Chile quiere asumir plenamente su parte en este proceso de integración, conforme a su histórica vocación por la búsqueda de la cooperación hemisférica y, especialmente, de la integración latinoamericana. Concebimos la integración como un requisito para nuestro propio desarrollo en plenitud y reconocemos la validez de los esquemas subregionales que confiamos habrán de converger progresivamente en la formación de un espacio común. Es el caso del mercado común del cono sur, del grupo andino, de la proyectada zona de libre comercio del norte de América, de la asociación latinoamericana de integración como centro de convergencia y concertación, y de los acuerdos bilaterales dentro del marco de ésta, que nosotros estamos concluyendo.

Nuestra política de apertura externa es perfectamente compatible con la importancia que asignamos a nuestras relaciones con América Latina; se trata de políticas absolutamente complementarias.

En este proceso integracionista, la Organización de Estados Americanos es un foro que tiene la mayor relevancia. Los países de América Latina y el Caribe encuentran en ella un lugar de encuentro para relacionarse entre sí y con los Estados Unidos y Canadá, más allá de las vinculaciones bilaterales o subregionales. La OEA ha sido un instrumento hemisférico idóneo para exponer opiniones, acercar criterios, buscar acuerdos.

El reciente ingreso a la Organización de Belice y Guyana, a cuyos representantes damos la bienvenida en esta Asamblea, enriquece el diálogo entre los países del hemisferio.

La orientación futura de la Organización de Estados Americanos debe expresar la nueva realidad internacional y, a la vez, contribuir a forjarla. El hecho de que convoque a naciones de tan diverso poderío y desarrollo socioeconómico en un marco de igualdad, es una oportunidad que no se puede despreciar. Junto con regular las relaciones entre ellas conforme a los principios enunciados en la Carta de la Organización, que hoy mantienen su plena vigencia, si queremos una OEA actualizada para los nuevos tiempos, debemos definir una agenda hemisférica de temas relevantes para los años noventa, a la cual dedicarle prioritariamente atención política, energía y recursos financieros.

Mi país ha recibido con agrado la "Iniciativa para las Américas" formulada por el señor Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, George Bush. Entendemos que ella abre la perspectiva de una nueva etapa en las relaciones hemisféricas, pues aborda temas de gran interés tradicional en nuestros países, como son la reducción de la deuda, el estímulo a la inversión y, de manera especial, la apertura del comercio. Por otra parte, la iniciativa conlleva importantes beneficios económicos potenciales en términos de incremento de exportaciones y creación de nuevas plazas de trabajo.

Valoramos especialmente el hecho de que, por primera vez, se vinculen los temas de deuda, comercio e inversión; la disposición para actuar en conjunto en el GATT, en aras de objetivos de apertura comercial; la oferta de negociar acuerdos de libre comercio; la disponibilidad de recursos para fomentar la inversión. Todas éstas son ideas que abren una interesante perspectiva de diálogo y trabajo comunes. Merece reconocimiento y debe proseguirse el trabajo de análisis y seguimiento que el Consejo Permanente de la OEA ha hecho sobre esta materia, que, por su trascendencia, requiere ser tratada con la máxima seriedad y mirando el interés de todos.

Otros problemas que están en la agenda de nuestras preocupaciones son el narcotráfico, la violencia, el terrorismo y el deterioro ambiental. Si bien no son fenómenos enteramente nuevos, lo novedoso es que hoy sus características trascienden las fronteras nacionales e incluso condicionan las relaciones internacionales, dentro y fuera de nuestro continente.

Todos ellos son problemas que, para ser enfrentados eficientemente, requieren de una vasta y profunda conciencia colectiva, tanto a niveles nacionales como internacionales. Lo que antes pudo ser problema interno de un país —como el narcotráfico— o preocupación de grupos aislados de personas —como la conservación de los recursos naturales o la implementación de una política ambiental—, hoy forma parte de la agenda de todos los gobiernos y organismos internacionales. La superación de estos problemas reclama la acción solidaria de la comunidad de naciones, la colaboración hemisférica y la decisión concertada de enfrentar con decisión estos flagelos.

En esta perspectiva, la OEA —que reúne a naciones desarrolladas y naciones en desarrollo— es un foro eficaz para concordar enfoques y acciones para contribuir en la resolución de estos problemas de alcance mundial.

Dentro de este contexto, nos alegra que en esta Asamblea se considerará un proyecto de "Programa Interamericano para la Protección del Medio Ambiente", al cual atribuimos la mayor importancia. Confiamos en que dicho documento sea un aporte significativo a los trabajos preparatorios de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se efectuará

en Brasil en 1991. En definitiva, sólo con el compromiso colectivo de todos podremos proteger y usar en forma racional el patrimonio ecológico de nuestros países, a fin de que nuestros pueblos puedan desarrollarse en toda su plenitud.

Señores Cancilleres:

Cuando la democracia ha vuelto a nuestras naciones por la voluntad soberana de sus pueblos, estamos en mejores condiciones para asumir los graves problemas pendientes que hemos señalado y los nuevos desafíos que nos demanda el mundo de hoy.

En esta tarea, la Organización de Estados Americanos puede ser un instrumento útil y eficaz para el diálogo, el entendimiento y la cooperación hemisférica. En el contexto de los cambios que se han producido en el orden internacional y en el continente americano, la OEA tiene una oportunidad para revitalizarse y renovarse a fin de servir, una vez más, los ideales que la han inspirado.

Nuestra gran responsabilidad es dar pasos eficaces a fin de crear para nuestros pueblos un futuro mejor, en el que la paz, la libertad, el desarrollo y la justicia sean realidades palpables en su vida cotidiana.

Chile tiene vocación de paz, ama la libertad y busca el desarrollo y la justicia. Consecuentemente, junto con ofrecer a las naciones hermanas de América y el Caribe su hospitalidad para esta reunión, comprometo su voluntad política para contribuir, con su mejor disposición, a que las deliberaciones de esta Asamblea contribuyan eficazmente a robustecer la amistad entre nuestras naciones y a asegurar la paz, la democracia, la justicia y el progreso en todo el continente americano. ¡Dios nos ayude a conseguirlo!

Señores Cancilleres y representantes:

Junto con desearles pleno éxito en vuestra elevada misión, declaro inaugurada esta XXI Asamblea de la Organización de Estados Americanos.

En Instituto de Cooperación Iberoamericana, ICI

Madrid, 9 de abril de 1991

Agradezco sinceramente esta invitación para dirigirme a ustedes, en este lugar que es símbolo de una tradición cultural común y de la voluntad de vuestro país de cooperar al desarrollo económico, cultural, científico y técnico de América Latina.

Chile ha sido testigo de esa cooperación, que en los años del autoritarismo se canalizó hacia organizaciones sociales y centros de investigación de orientación democrática, y que se ha expresado también en el apoyo a importantes proyectos en conjunto con el gobierno de Chile. Vuestro compromiso con la causa de la democracia chilena ha sido un testimonio de amistad y cercanía que valoramos en toda su magnitud.

Es esta la primera vez que un Presidente chileno democráticamente elegido visita España. En una larga historia de encuentros y desencuentros, nuestras naciones han marchado por rumbos similares en tiempos distintos. Sin embargo, aunque ello significó un distanciamiento oficial, las relaciones culturales y las manifestaciones de solidaridad incubaron una creciente hermandad nacida del dolor y sustentada en una larga tradición común.

El distanciamiento de las relaciones oficiales no pudo, sin embargo, borrar la herencia de una historia, una lengua y una similar filosofía de la vida. Así como "España es incomprensible sin su vertiente americana", América no puede comprender su pasado, su presente ni su futuro, sin tener en mente su "vertiente" española. De este modo, las barreras oficiales o los silencios fueron traspasados por la fecundidad del intercambio cultural.

El impacto cultural de la generación del 98 fue muy significativo en el mundo de habla hispana durante todo este siglo. Así también trascendieron desde nuestro continente hacia España, el espíritu de

intelectuales, escritores y artistas americanos. Sobre esa historia estamos escribiendo hoy un presente y un futuro de promesas para nuestros pueblos.

Vivimos tiempos de esperanza. Uno de sus signos es el proceso de democratización que está experimentando el mundo contemporáneo.

El reconocimiento y afirmación de la dignidad de la persona humana se imponen como fundamento de la convivencia, y la libertad se alza por todas partes por sobre las ideologías que hasta hace poco nos dividían en bloques irreconciliables.

El diálogo de la sociedad se ha ido imponiendo frente al monólogo del Estado. La experiencia nos está demostrando que la convivencia civilizada y el progreso se construyen sobre las bases de la libertad y de la justicia.

Ante nuestras conciencias, la democracia surge no sólo como un imperativo ético, sino también como un requisito de eficiencia.

Es éste el sistema que nos permite el mejor uso de nuestra creatividad y de nuestra energía, porque ya no es necesario desgastarse en levantar barreras frente a diversos enemigos.

Europa se ha constituido en el centro de este proceso democratizador. Es esta región la que ha abierto las fronteras de un mundo marcado por la guerra fría, y es aquí donde se está llevando a cabo el más ambicioso proyecto integrador que se acerca al antiguo sueño de una Europa unificada. Nuestros países de América ven con extraordinario interés un proceso que influirá poderosamente en el curso que siga el orden internacional en las próximas décadas.

Chile también ha sido un testimonio de los aires que soplan en el mundo contemporáneo. Estamos enfrentando el desafío de consolidar nuestra democracia —con todo lo que significa de libertad, vigencia de los derechos humanos y respeto a la dignidad de las personas— y al mismo tiempo impulsando el desarrollo y crecimiento económico indispensable para derrotar la pobreza, para alcanzar mejores niveles de vida para nuestro pueblo y para avanzar hacia nuestra plena integración en el mundo moderno. Y lo estamos haciendo en un clima de paz interna, justicia social y solidaridad nacional.

Chile, por historia y destino, pertenece a América Latina y participa en la construcción de su porvenir. Un continente que, por primera vez en muchas décadas, vive en democracia y se esfuerza por resolver la grave crisis que recibió de herencia de un pasado de dictaduras y populismos.

Enfrentamos la tarea de conjugar nuestro acervo común mirando hacia el futuro, permeados por una sensibilidad frente a los principales problemas que prevalecen en nuestra América —como la miseria, la injusticia, el atraso cultural, la insuficiencia tecnológica y

la desesperanza de los desposeídos— para realizar un programa concebido en torno a los desafíos del siglo XXI, cuya meta es el pleno desarrollo de nuestras naciones, en libertad, justicia y paz.

No será quejándonos ni esgrimiendo teorías como nuestros países avanzarán en el camino del desarrollo. La consolidación de nuestras democracias, el estímulo a la iniciativa de nuestros empresarios, la apertura de nuestras economías a una saludable competencia, la promoción de la investigación científica y tecnológica y la puesta en forma de nuestros aparatos productivos, son imperativos para conquistar definitivamente el bienestar a que aspiran nuestros conciudadanos.

Para tener éxito en este esfuerzo, debemos reforzar las tendencias hacia la integración de nuestras naciones. En el nuevo contexto político general, la articulación de la región con las principales corrientes económicas del mundo constituye un imperativo que ningún país de América Latina podrá afrontar cabalmente en forma individual.

Los procesos de integración de los grandes centros dinámicos de la economía mundial, como Europa, Norteamérica y el Sudeste Asiático, nos muestran un camino exitoso, en el cual la competitividad pasa por su integración en el plano regional para participar eficazmente en los mercados internacionales.

Nuestros países encaran el desafío de incorporarse a ese proceso de integración, con todas sus posibilidades. Para hacerlo no basta con la decisión política, sino que es también necesaria una coherencia económica. Con satisfacción comprobamos que en nuestra región se han ido produciendo avances en tal sentido, expresados en significativos cambios en las estrategias de desarrollo y en los grados de apertura de nuestras economías.

También hemos aprendido de Europa que la integración no tiene por qué comenzar simultáneamente entre todos los países. Vuestra experiencia demostró que ha de ser un proceso que podrá ir completándose y perfeccionándose en etapas sucesivas.

Esta América Latina que lucha por consolidar su democracia, por eliminar la pobreza y alcanzar el desarrollo, requiere de la colaboración de las naciones más desarrolladas del planeta, en especial de Europa, con quien tenemos las mayores afinidades culturales y políticas. Esa cooperación se ha expresado ya en muchos programas que han beneficiado a nuestra región. Pero esa cooperación es mucho más que una ayuda asistencial. Es apoyo científico-técnico y transferencia tecnológica; son créditos para el impulso al desarrollo y enfrentar la deuda externa; es inversión directa o de *joint ventures* en nuestros recursos naturales y humanos; y es, también, oportunidades de comercio para nuestros productos, que muchas veces encuentran limitaciones en los mercados europeos en trabas burocráticas que desmienten la apertura de los mercados.

Estamos conscientes de que esa cooperación requiere que los países de América Latina tengan economías estables para atraer esos créditos, transferencia tecnológica e inversión. Pero es importante, también, saber si existe bajo esas condiciones la disposición a cooperar con la región. Digo esto en España, porque este país ha levantado su voz en los foros europeos y ha defendido la necesidad de dar una mayor prioridad al continente en las orientaciones de política exterior y económica de la Europa de los doce. Pero también sabemos que ésa no es la actitud predominante.

El impulso de una mayor cooperación entre nuestros continentes será determinante para el papel que América Latina ocupe en la reestructuración del sistema mundial que está hoy en marcha.

Somos un mercado potencial de más de 300 millones de habitantes. Podemos movilizar recursos naturales y humanos suficientes para emprender la tarea común del desarrollo. Hoy tenemos en común una vocación democrática, construida sobre los desgarros de varias décadas. Ambos, América y Europa, tenemos mucho que ganar de una asociación que contribuya a potenciar los recursos que posee cada cual. Este es el nuevo contenido de la cooperación.

Señoras y señores:

Si América mira a su alrededor buscando un interlocutor comprensivo y un amigo con quien fortalecer sus necesidades de interdependencia, las afinidades históricas le señalan primero a España. Y este Instituto de Cooperación Iberoamericano, concebido como un lugar de encuentro, estímulo y promoción de las relaciones entre todos los pueblos de Iberoamérica, representa una instancia importante para alcanzar las aspiraciones de nuestras comunidades a través de un enfoque moderno y dinámico, concorde con los desafíos de este final de siglo y del Quinto Centenario.

Cuando estamos próximos a conmemorar los quinientos años del descubrimiento de América, que separó épocas y unió continentes, dando origen a un nuevo mundo, es preciso que en la vorágine de los intereses concretos y lucrativos de las relaciones económicas y comerciales, no se pierdan de vista los ideales culturales y espirituales que nos unen.

Como señalara Su Majestad el Rey Juan Carlos, "todos los pueblos de nuestra lengua y cultura estamos llamados en esta hora a cumplir una gran aventura: la de crear una realidad nueva y una palabra inédita capaz de expresar el sentimiento trascendental que nuestros pueblos tienen de la justicia, de la libertad y de la dignidad..."

Podéis tener la certeza de que, en esa tarea trascendental, Chile hará su parte.

Ante el Parlamento Europeo

Estrasburgo, 17 de abril de 1991

Señores Parlamentarios:

Constituye un alto honor para el Presidente de Chile ser recibido en este Parlamento, que representa la vocación unitaria de las naciones europeas.

Es una feliz coincidencia que ello ocurra la víspera del día en que las Instituciones Comunitarias recuerdan los cuarenta años de la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, piedra fundacional de todo el proceso de construcción comunitaria. El 18 de abril de 1951, en París, los Padres Fundadores expresaron, con palabras premonitorias, que "la paz mundial sólo puede salvaguardarse mediante esfuerzos creadores proporcionales a los peligros que la amenazan" y suscribieron, a sólo seis años del fin de la guerra, el primer gran acuerdo entre los enemigos de ayer, cuya fecundidad perdura hasta nuestros días.

En este tiempo nuevo, cuando una ola democratizadora recorre nuestro mundo y los muros ceden paso a la libertad, los avances de la comunidad europea hacia su unidad económica y política están dando un nuevo rostro al orden internacional. Los pueblos latinoamericanos también estamos presentes en esta etapa trascendente de la humanidad, contribuyendo a este nuevo rostro universal con nuestro propio esfuerzo de democratización, desarrollo e integración. Signo de ello es la historia reciente de mi país. Los chilenos hemos recuperado pacíficamente nuestra democracia, de la que en el pasado tuvimos justo motivo de orgullo, a través de un largo camino recorrido con dolor y perseverancia por un pueblo que ama la libertad.

En este andar, Chile contó con la solidaridad de los pueblos

Europeos, que tomaron en sus manos la causa de la democracia chilena, inspirados en la defensa de valores compartidos. Es ésta ocasión propicia para agradecer al Parlamento Europeo su valioso respaldo, que se manifestó en tantas acciones de apoyo a los demócratas chilenos y a la defensa de los derechos humanos. Esta actitud y esta confianza se siguen reflejando en la constructiva y vital relación que ha surgido entre Chile y la comunidad europea durante el primer año de mi gobierno. La reciente ratificación del Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y Chile, es una muestra de que hoy compartimos los mismos principios y un común optimismo en torno a la consolidación de nuestra democracia y los desafíos de su futuro. Es un signo, también, del fortalecimiento de nuestra amistad.

Permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el proceso de recuperación democrática que estamos viviendo. Los chilenos tenemos cabal conciencia de los requerimientos, dificultades y peligros que él entraña. Creemos, sin falsa modestia, que lo estamos haciendo bien.

Chile vive un clima de plena libertad y de paz social, lamentablemente perturbado por algunas cruentas acciones de grupos violentistas que suscitan el repudio general. Dentro de la vía institucional que el pueblo chileno escogió, libre y soberanamente, para transitar del autoritarismo a la democracia, vamos avanzando a paso firme y decidido, con los escollos y demoras propias de todo Estado de Derecho. Los tres poderes constitucionales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ejercemos nuestra autoridad con independencia, dentro de la esfera que a cada cual compete. Y tanto en el ámbito político —entre gobierno y oposición— como en el económico social —entre trabajadores y empresarios— prevalece la voluntad de buscar acuerdos por sobre las tendencias confrontacionales.

Esto es parte de la madurez de un pueblo que quiere superar sus divisiones y que aprendió en el sufrimiento a privilegiar la razón sobre la fuerza, a no confundir anhelos con posibilidades y a avanzar hacia sus metas de justicia y de progreso, con lealtad a los valores y principios, pero a partir de la realidad, conciliando —como Ulises— el coraje con la prudencia.

Este es el camino que se ajusta a nuestra vocación histórica. Sabemos que obliga a refrenar naturales impaciencias e impone limitaciones no siempre bien comprendidas por quienes nos observan sin vivir nuestras circunstancias. Pero estamos ciertos de que es justamente este delicado equilibrio entre continuidad y cambio el que nos ha permitido avanzar con éxito, sin quedarnos enredados en nuestras peleas del pasado y sin los costos de muerte y destrucción con que suelen ir acompañados los derrumbes de las dictaduras.

Estamos también ciertos de que ésta es la forma de construir un sistema sólido para los chilenos de hoy y para los de mañana.

La experiencia de vuestro continente, que vivió la tragedia de la destrucción y de la guerra y que superó ese pasado, construyendo la Europa de hoy, tiene para nosotros un hondo significado. Creo que, a la vez, el recuerdo de esa propia experiencia debe ayudar a los europeos a comprender y valorar en toda su dimensión el proceso que estamos viviendo en Chile.

Nuestro principal empeño ha estado orientado a buscar la reconciliación nacional. Para ello creemos indispensable enfrentar el problema de las violaciones a los derechos humanos acontecidas en los años pasados. Con este fin formamos la "Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación", integrada por personas de diferentes pensamientos políticos y reconocido prestigio moral, que, tras nueve meses de intenso trabajo, entregó un Informe que establece la verdad sobre lo sucedido. Para nuestro pueblo éste ha sido un paso doloroso, de profundo contenido ético. Conscientes de que la verdad es el fundamento de toda convivencia, nos hemos enfrentado ante nuestros propios errores, para asumir un pasado de confrontación y violencia en aras de un futuro en que nunca más puedan repetirse los hechos que tanto daño causaron a nuestra patria.

Hoy en Chile podrá haber distintas interpretaciones sobre las causas que nos llevaron al enfrentamiento fratricida y a la pérdida de la libertad; pero ya nadie puede dudar de buena fe acerca de la realidad y magnitud de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron. Ahora estamos abocados a vindicar la dignidad de las víctimas, a buscar justicia y a reparar en lo posible a los deudos. Sabemos que las heridas son lentas de curar, pero estamos recorriendo el camino que nos conduce a ello, con la voluntad y la esperanza de la inmensa mayoría del país.

Estamos avanzando, también, en la solución de la situación jurídica que afecta a algunos compatriotas que permanecen privados de libertad en calidad de procesados por delitos políticos. Sobre esto quiero ser muy claro: en Chile no quedan presos políticos de conciencia. Quienes no han recuperado su libertad están sujetos a proceso por delitos de motivación política que no habían tenido un juicio justo. Para remediar su situación, hemos aprobado reformas legislativas y aun constitucionales que transfieren la mayoría de esos procesos de la justicia militar a la ordinaria, agilizan sus procedimientos y amplían la facultad del Presidente de la República para conceder indultos, lo que nos permitirá, por los cauces del ordenamiento jurídico, solucionar totalmente este problema en los próximos meses.

Creo mi deber dejar en claro que esta situación no debe confundirse con la de quienes persisten en acciones terroristas, negándose

a aceptar la nueva etapa democrática que vive el país y pretendiendo escudarse tras la categoría de presos políticos, para ganar impunidad por sus crímenes. Frente a la violencia terrorista seremos implacables en aplicar todo el rigor de la ley. El Estado de Derecho que hoy impera en Chile así lo exige.

Señores Parlamentarios:

Vengo de un país que no sólo está viviendo un proceso político esperanzador, sino que también está experimentando un proceso económico positivo y promisorio. Tras diecisiete años de gobierno autoritario, Chile está demostrando que en el mundo en desarrollo una economía que crece, que es estable y busca ser equitativa, es compatible con un sistema político abierto y democrático.

Con mucho realismo podemos afirmar que, en lo que hemos recorrido del camino, los resultados han sido positivos. Por eso, los chilenos miramos con optimismo nuestro futuro económico.

Un pasado de grandes fluctuaciones nos ha permitido lograr un amplio consenso acerca de la estrategia de desarrollo para el país. Existe pleno acuerdo sobre la necesidad de mantener una inflación baja, una gestión macroeconómica prudente, así como en la importancia de promover las exportaciones y participar del vigor del comercio mundial. Nuestra economía es y permanecerá abierta, y las políticas de mi gobierno promueven sin complejos el comercio internacional y la inversión extranjera. Al mismo tiempo, cada vez hay mayor conciencia sobre la necesidad de que el desarrollo que buscamos sea integrador, involucrando a todos los habitantes de nuestra patria, no sólo en el esfuerzo sino también en sus beneficios.

De este consenso emana la orientación económica básica del gobierno que presido. Chile se orienta, dentro de un sistema de mercado, hacia una economía solidaria y justa, en que el sector privado es motor principal del desarrollo, en colaboración con un Estado que concentra sus acciones en la provisión de servicios como salud, educación y vivienda. Nuestra mira es lograr un crecimiento económico sostenido, en que la expansión del producto vaya acompañada de crecientes grados de equidad social.

El regreso a la democracia ha consolidado un clima de estabilidad económica. Emprendimos un proceso de ajuste para frenar la creciente tasa de inflación heredada del pasado gobierno, que se ha completado exitosamente. Durante 1991 esperamos una inflación que será la mitad de la del año anterior, de las más bajas en América Latina. Hemos seguido incrementando nuestras exportaciones y la inversión foránea está alcanzando cifras elevadas. Chilenos y ex-

tranjeros tienen confianza creciente en las posibilidades de la economía nacional.

Chile mantendrá una conducta abierta al mundo, dentro de cuyos marcos aspiramos a desarrollar una política industrial y tecnológica destinada a agregar mayor valor a nuestras exportaciones —aún principalmente primarias— y fortalecer nuestro mercado a través de orientaciones que fomenten una mejor distribución del ingreso nacional. Nuestro país tiene todavía enormes carencias en vivienda, salud y educación, que afectan a la dignidad de los chilenos y al desarrollo de nuestros recursos humanos. A ello se suman los problemas derivados del deterioro del medio ambiente, como resultado de una ausencia histórica de políticas de conservación y descontaminación, tareas a las cuales estamos dando una decidida prioridad.

Sabemos que, en un mundo interconectado como el que estamos viviendo, el esfuerzo, la creatividad y el entusiasmo de un país como el nuestro son importantes, pero no suficientes.

Chile pertenece, por historia y destino, a América Latina. Nuestros países enfrentan la tarea común de atender a los principales problemas que nos aquejan —pobreza, a veces extrema; atraso cultural, insuficiencia tecnológica, desesperanza de los desposeídos— para realizar un programa concebido en torno a los desafíos del siglo XXI, cuya meta es el pleno desarrollo de nuestras naciones, en libertad, justicia y paz.

Para lograrlo, la articulación de la región con las principales corrientes económicas del mundo y el reforzamiento de su tendencia hacia la integración constituyen un imperativo insoslayable.

Somos decididos partidarios de la integración latinoamericana. Fuimos impulsores de importantes esfuerzos en ese sentido. Con mayor razón lo somos ahora, cuando es un fenómeno que muestra su eficacia en los centros más dinámicos de la economía mundial. Sin embargo, no queremos que la retórica de la integración oculte sus dificultades. De hecho, los proyectos anteriores en nuestro continente han fracasado y sigue pendiente el ideal de una América Latina unida que soñó Bolívar. Para tener éxito, es preciso reconocer esos fracasos y aprender de los resultados de experiencias como la europea, buscando fórmulas realistas, viables y graduales para ir avanzando en la apertura de nuestro comercio recíproco y en el incremento de nuestras relaciones para el logro de una real integración.

La integración real, no la retórica, requiere de un flujo comercial y de servicios verdaderamente significativo. Chile mantiene un comercio intenso con sus vecinos latinoamericanos, que incluso arroja un importante déficit en nuestra balanza comercial. Pero la integración también requiere de políticas económicas compatibles,

disposición a someterse a mecanismos colectivos, diálogo y entendimiento político.

La integración es apertura a la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales. Ella puede partir abarcando solamente un grupo de países que compartan algunos objetivos comunes, para luego ir ampliándose a quienes estén preparados para ello. También ella exige convocar a los empresarios, que en definitiva constituyen un elemento esencial para unificar los mercados.

Con satisfacción comprobamos que en nuestra región se han ido produciendo avances en tal sentido, expresados en importantes cambios en las estrategias de desarrollo y en los grados de apertura de nuestras economías.

La experiencia del actual diálogo político entre el Grupo de Río y la Comunidad Europea ha resultado muy constructiva. El Acta de Roma podría abrir una nueva etapa en las relaciones entre las dos regiones, en la medida en que sepamos traducirla en contenidos reales y concretos. Tengo la esperanza de que la reunión de Luxemburgo, que tendrá lugar en los próximos días, sea coronada por avances concretos en los temas de financiamiento del desarrollo, cooperación científico-tecnológica y para la formación de expertos y ejecutivos en materias de integración, así como en el desarrollo de programas de intercambio comercial y tecnológico.

Este es un panorama que lleva al optimismo. Sin embargo, sería negligencia de nuestra parte no señalar también algunos peligros potenciales que se vislumbran en este nuevo escenario internacional. Quizás el mayor de ellos sea el proteccionismo y la tendencia a formar bloques de comercio cerrados. No podemos permitir que las guerras comerciales reemplacen a la Guerra Fría. Hoy día nuestras exportaciones encuentran trabas sustanciales en los mercados del mundo desarrollado. Nuestra propia experiencia en los mercados europeos ha demostrado que los aranceles suelen ser bajos tratándose de productos primarios, pero tienden a subir drásticamente al incrementarse el grado de elaboración del producto. Al mismo tiempo, múltiples cuotas y restricciones no tarifarias limitan nuestros volúmenes exportados.

Por estas razones, es imprescindible que la retórica del libre comercio se traduzca en acciones. La suerte de economías con vocación exportadora, como la chilena, depende en gran parte de ello.

Estoy cierto de interpretar a todos los pueblos de América Latina al hacer, en este Parlamento tan representativo, un cordial llamado a vuestras conciencias de ciudadanos europeos. Los valores de respeto a la dignidad humana, equidad y solidaridad, que forman parte esencial de nuestra común cultura cristiana occidental —que nosotros heredamos de vosotros—, nos exigen situar nuestras relaciones e intercambios sobre bases de justicia y conveniencia mutua.

Señores Parlamentarios:

América Latina y Europa pueden más que nunca avanzar en una asociación madura y productiva. Para este desafío, Chile está dispuesto. Porque estamos comprometidos con la libertad y la democracia, porque creemos en la colaboración, en el esfuerzo y en la imaginación, porque hemos recibido solidaridad y estamos dispuestos también a darla, Chile asume su cuota de responsabilidad en contribuir a la formación de un mundo más humano.

Al enfrentar este desafío, no podemos dejar de mirar hacia Europa. Ella ha estado siempre presente entre nosotros, en la política, en la economía, en la cultura y, también, en la sangre.

Muchas veces se ha dicho, también desde esta tribuna, que América Latina es la parte no desarrollada de Occidente. No lo voy a desmentir; pero pienso que ésta es una forma negativa de plantear esta relación. Prefiero pensar que América Latina es el mayor espacio futuro de desarrollo de Occidente. Es la tierra donde el hombre europeo, eterno migrante, ha reencontrado siempre una parte esencial de su cultura, una visión del espacio geográfico y un concepto de civilización y trascendencia que abre nuevas fronteras y genera nuevas y creativas formas de vida. Hacer de este encuentro vital una vía de dos sentidos es el desafío mutuo de hoy y de mañana.

Inspirado en la experiencia europea, pero consciente de su condición latinoamericana, Chile asume su responsabilidad de demostrar que en un país pequeño y alejado, la democracia es compatible con el desarrollo, el cambio es compatible con la estabilidad y la libertad es compatible con la justicia.

Muchas gracias.

Exposición en el Parlamento Bundestag y encuentro con Comisiones de Asuntos Exteriores y Cooperación Económica

Bonn, 25 de abril de 1991

Para mí, como Presidente de la República de Chile, y para los miembros de mi comitiva, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, don Enrique Silva, que me acompaña, es motivo de especial complacencia estar entre vosotros. Lo es porque sentimos que en Chile los demócratas tenemos una deuda de gratitud con el Parlamento alemán. Vosotros, reiteradamente, durante el período de la dictadura en Chile, nos expresasteis, de distintas maneras, vuestra solidaridad y vuestro afecto. Parlamentarios alemanes, representantes de ustedes, estuvieron en múltiples ocasiones en Chile, viendo de qué manera podían ayudar a la defensa de los derechos humanos y al retorno de la democracia en Chile.

Ahora, cuando los chilenos hemos logrado restablecer nuestra democracia, es un acto de elemental justicia que yo empiece por expresaros nuestros profundos agradecimientos por esa solidaridad. Solidaridad que entendemos referida no sólo al pasado, sino también al presente. Ustedes saben que la democracia es un bien que no basta conquistar; hay que consolidarla para mantenerla, y eso exige que nosotros tengamos éxito. Tengamos éxito en el plano político, en el plano económico y en el plano social.

En el plano político, tener éxito significa lograr la reconciliación entre los chilenos; que las divisiones del pasado, que nos llevaron al quiebre de nuestra institucionalidad democrática, de la cual estuvimos orgullosos, sean superadas. Eso nos ha exigido un esfuerzo para cerrar las heridas producidas por las violaciones de derechos humanos. Y hemos pensado que ello sólo era posible sobre la base

de la verdad. De ahí el informe sobre Verdad y Reconciliación, que muestra lo que realmente ocurrió y que ha sido asimilado por la conciencia nacional.

Tenemos que superar los riesgos que para la democracia entraña la supervivencia de cierta influencia o tendencia de algunos sectores hacia el militarismo, y la acción de algunos grupos extremistas que recurren a la violencia y ejecutan actos de terrorismo.

Estamos contentos por los avances logrados hasta ahora, pero nuestro esfuerzo es superar esta etapa, mediante un gran entendimiento nacional. La Concertación de Partidos que sustenta al gobierno es sólida, y actúa con extraordinaria homogeneidad, pero estamos tratando, en esta etapa inicial, de buscar entendimientos más allá de la propia coalición de gobierno, con los sectores de la oposición, sobre las bases fundamentales para asegurar la estabilidad democrática. Tengo confianza en que lo lograremos.

Pero junto con eso, para que haya estabilidad es necesario que haya progreso económico y justicia social. Sin progreso económico, sin crecimiento de nuestra economía, la pobreza terminará por desalentar a la gente; y sin justicia social, sin que los sectores más postergados de la sociedad tengan acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y a posibilidades mejores de trabajo para una vida digna, habrá inestabilidad social.

Por eso nuestro esfuerzo es, por una parte, impulsar un crecimiento con equidad, pagar la deuda social que nos dejó la dictadura para con los sectores más pobres; por otra parte, impulsar un crecimiento de nuestra economía.

Lo estamos logrando, también sobre la base de consensos, buscando un gran entendimiento entre trabajadores y empresarios. Hasta aquí lo hemos conseguido, y es un hecho sorprendente que al cabo de poco más de un año de democracia en Chile, no hayamos tenido una sola huelga, los trabajadores hayan mejorado su participación en el ingreso, hayamos disminuido la inflación y tengamos una economía bastante estable y con muchas perspectivas para el futuro.

Termino reiterándoles, gracias por vuestra solidaridad, la cual esperamos también en este esfuerzo, en que buscamos de las naciones amigas, europeas, cooperación en el plano tecnológico, en los planos de los proyectos de desarrollo económico, de programas de acción social y, sobre todo, de apertura a un comercio que dé posibilidades de colocación a nuestros productos acá, y de inversiones alemanas en nuestro país.

Muchas gracias.

Preguntas de diputados alemanes

Agradezco, desde luego, los conceptos vertidos por todos los señores diputados que han hablado. En el tema de la cooperación económica, en la mañana tuve el agrado de participar en una conversación con el señor ministro de Cooperación, y mi ministro de Planificación y Cooperación siguió trabajando con él en proyectos específicos. Hay programas muy concretos en materias de salud, de vivienda y de capacitación profesional, y esperamos que estos programas puedan continuar y ampliarse.

Uno de los temas en los cuales nosotros tenemos más necesidad es el de capacitar a los jóvenes en profesiones técnicas que habiliten para ganarse la vida, y estimular la pequeña empresa, como un factor dinámico de la economía.

Esos son campos en los cuales ustedes nos pueden otorgar mucha experiencia y conocimientos.

Estoy de acuerdo en que la cooperación es muy importante, pero no es suficiente si no hay un régimen de apertura en Europa, en la Comunidad Europea, para los productos de Chile, y de América Latina en general.

En Chile, hoy día, el 30 por ciento del Producto Bruto Nacional es fruto de nuestras exportaciones, y nuestro principal socio comercial es Europa. El 40 por ciento de nuestras exportaciones viene a Europa y, dentro de Europa, el principal país que compra productos chilenos es Alemania.

Nosotros exportamos cobre, productos marítimos, fruta, madera. Pero nuestro gran desafío consiste en agregar mayor valor a nuestras exportaciones, que no sean sólo de materias primas, sino que productos con un mayor grado de elaboración.

Las tarifas aduaneras de la Comunidad, sin embargo, son discriminatorias, y en ese sentido las posibilidades de nuestro desarrollo están vinculadas a la liberalización del comercio europeo y al término de las medidas proteccionistas. Chile es un país de una economía muy abierta y queremos lo mismo.

Colonia Dignidad: Hemos cancelado la personalidad jurídica de Colonia Dignidad, y estamos tomando otra serie de medidas para hacer que rija la ley en el ámbito tributario, de salud, de educación, de respeto a los derechos humanos.

Chile es un Estado de Derecho y los Estados de Derecho tienen grandes ventajas, porque garantizan los derechos de las personas, pero tienen el problema de que establecen muchos recursos judiciales que hacen muy lentas las decisiones. Contra cada decisión del gobierno, Colonia Dignidad interpone recursos ante los Tribunales, y tenemos que esperar que éstos sean fallados.

Comisión Verdad y Reconciliación: El informe de esta Comi-

sión establece los hechos, el país los conoce. Muchos de esos hechos son delitos. Los servicios de inteligencia del antiguo régimen, la CNI, fue disuelta. Pero la acción judicial, el castigo de los delitos, corresponde a los Tribunales de Justicia.

Hay una Ley de Amnistía. Nosotros hemos obtenido que esa Ley de Amnistía no pueda cubrir los crímenes de lesa humanidad. Es un problema que tienen que resolver los Tribunales. Es auspicioso que los Tribunales hayan cambiado su jurisprudencia, que prohibía investigar lo cubierto por la Ley de Amnistía, y hayan dado instrucciones a los Tribunales inferiores para investigar todos los casos que ha puesto en su conocimiento la Comisión de Verdad. Ya es un avance, en eso estamos.

Eso sería lo que tendría que expresar, en relación a los temas que aquí se han planteado.

Muchas gracias.

Ante el Congreso brasileño

Brasilia, 26 de julio de 1990

Quiero dar las gracias por este gesto tan significativo de que el Parlamento de Brasil haya suspendido su receso para hacerme este honor de recibirme en esta ocasión. Yo sé que no es un homenaje a una persona. Es un testimonio de la amistad del pueblo brasileño con el pueblo de Chile.

Es para mí un alto honor concurrir al Congreso Nacional de Brasil para traer a los representantes de la soberanía popular de esta gran nación amiga, el saludo afectuoso y fraterno de la democracia chilena, de su pueblo y del gobierno que presido.

El Presidente de Chile que hoy los visita fue parlamentario como ustedes. Como senador y presidente del Senado, procuré durante años servir a mi patria y a su democracia en las difíciles y procelosas aguas de la actividad política.

La política —tan vituperada por muchos— es una actividad de la mayor elevación y jerarquía moral, que exige sacrificios y demanda coherencia e integridad para conducir los asuntos públicos, con el ánimo de servir los superiores intereses nacionales.

Durante el siglo pasado, se concibió al Parlamento como un centro de grandes debates, de lucha y confrontación. El Parlamento en los tiempos modernos, en nuestros tiempos, tal vez por las exigencias propias de la sociedad en que vivimos, debe ser más bien un crisol de búsqueda de grandes encuentros, de búsqueda de acuerdos y consensos, en que a partir de las diferentes opciones se haga un esfuerzo de síntesis para lograr el bien común nacional.

Como sabéis, Chile tiene una antigua y respetable tradición parlamentaria, que era legítimo orgullo para los chilenos. Interrumpida abruptamente durante más de dieciséis años, acabamos de

reanudar, junto con el retorno a la democracia, el funcionamiento del Congreso Nacional como órgano titular del Poder Legislativo.

Vosotros, que vivisteis en Brasil una experiencia semejante, nos lleváis en este terreno camino adelantado. Y vuestra experiencia parlamentaria debe haberos ya demostrado cuán grande y seria es la responsabilidad del Parlamento y de sus miembros.

Por estar constituido por representantes directos del pueblo, en el Parlamento se concentran los mayores anhelos y esperanzas populares. El parlamentario es su mejor intérprete. Pero la experiencia nos enseña que no todo lo que se desea es posible de realizar, que muchas aspiraciones muy legítimas son inalcanzables en el corto plazo y que, a menudo, lo mejor es enemigo de lo bueno. Es tarea propia de la madurez y grandeza política de los parlamentarios, procurar con inteligencia, imaginación y carácter, encauzar las aspiraciones populares por caminos constructivos. Sólo de este modo se puede conseguir una eficaz colaboración entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo en la tarea común de conducir por buen camino a la nación.

Pienso que nuestros países de América Latina enfrentan en estos días un formidable desafío. Debemos demostrar que somos capaces de vivir en democracia, con todo lo que ello entraña de libertad y justicia social, y al mismo tiempo de alcanzar la estabilidad, desarrollo y progreso de nuestras economías.

Como lo he dicho en mi país, mi mayor anhelo como gobernante es entregar a quien el pueblo elija para sucederme una patria unida en democracia. Para alcanzar esta meta, entiendo que la misión de mi gobierno es promover el reencuentro de Chile con sus tradiciones de tolerancia y libertad, de respeto al derecho y de rechazo a las arbitrariedades y a la opresión.

En esta perspectiva hemos definido cinco grandes tareas.

En primer lugar, esclarecer la verdad y hacer justicia en materia de derechos humanos, como una exigencia moral ineludible para la reconciliación nacional. Como cristiano, creo que "sólo la verdad nos hará libres". Libres de nuestros propios prejuicios y pasiones, que son obstáculo para la paz. Por ello hemos acometido la compleja labor de restañar las heridas que quedaron del pasado, y la estamos abordando con sentido de equidad y por las vías de la razón y del derecho.

Una segunda tarea dice relación con el perfeccionamiento de nuestras instituciones, de manera de poder construir una democracia sólida y estable. Ello significa asegurar una plena vigencia de los derechos humanos para todas las personas; la participación de todos los sectores en la vida colectiva; una administración de justicia eficiente y oportuna; una adecuada integración entre las Fuerzas

Armadas y la sociedad civil; mecanismos eficaces y justos de seguridad del Estado y equilibradas relaciones entre los poderes públicos.

Un tercer desafío consiste en marchar hacia una sociedad más equitativa. Chile ha experimentado un crecimiento económico y modernizaciones importantes en diversos sectores de la actividad nacional. Sin embargo, esta situación coexiste con la presencia de profundas desigualdades. Sin un pronto y efectivo avance para superarlas, corremos el riesgo de consolidar una situación de marginación de grandes sectores de la vida nacional. Avanzar en el camino de la equidad significa invertir en las personas, especialmente en los campos de la salud, la educación y la vivienda.

Inspirados en estos principios y procediendo con criterios realistas, estamos implementando las reformas y las políticas sociales necesarias para lograr este objetivo.

Una cuarta tarea es progresar en el camino del crecimiento. La economía chilena ofrece hoy perspectivas alentadoras y tenemos muchos factores favorables para el éxito de este esfuerzo. De ahí que el crecimiento no sólo es posible, sino que es una realidad y un objetivo central de nuestra acción como gobierno. Ello requiere de imaginación y creatividad, pero también de disciplina, austeridad y perseverancia. Necesitamos tanto un gobierno como un país eficientes y modernos. Hemos sostenido que ningún sector social puede soslayar esta tarea.

Para mi gobierno, el motor primordial del desarrollo reside en la empresa privada. El Estado estimulará el desarrollo utilizando los recursos públicos con la máxima eficiencia y buscará regular la actividad de los mercados mediante normas generales de aplicación universal, absteniéndose de intervenciones puntuales, erráticas y frecuentes que terminan por detener el crecimiento. El Estado intervendrá con medidas correctivas si se producen imperfecciones o ineficiencias en la asignación de recursos, sólo cuando sea estrictamente necesario.

Por último, el objetivo fundamental de nuestra política internacional es la plena reincorporación de Chile en el concierto de las naciones, cooperando en todas las instancias de encuentro multilateral y bilateral, con nuestro modesto pero decidido aporte al desarrollo de los pueblos, al logro de la justicia y la paz entre los países y al pleno imperio de los derechos humanos y del derecho internacional en todos los rincones de la tierra.

La política exterior de Chile es de vocación universalista y de raíces americanas. Por historia y destino pertenecemos a América Latina y queremos construir juntos el porvenir.

La rapidez y profundidad de los cambios en el ámbito mundial caracterizan una nueva sociedad marcada por una creciente interdependencia y por el afianzamiento de grandes agrupaciones

económicas y políticas. El mundo de ayer, que evolucionaba de acuerdo a tendencias fácilmente predecibles, ha dado paso a nuevas estructuras caracterizadas por su gran movilidad.

En este contexto político general, la articulación de la región con las principales corrientes económicas del mundo constituye un desafío que ningún país de América Latina podrá afrontar cabalmente en forma individual. La región no puede permanecer al margen de las grandes tendencias imperantes a nivel mundial. Es así como una gran mayoría de países ha iniciado decisivos procesos de apertura, aplicando políticas económicas cuyas orientaciones sustantivas están orientadas a generar capacidad de respuesta frente a las exigencias del mundo moderno, y teniendo entre sí grandes aproximaciones.

Estos cambios, así como la revalorización que se otorga a la integración, obligan a estructurar una agenda latinoamericana que incorpore las nuevas concepciones y que permita elevar el diálogo entre nuestros países a un nivel compatible con los requerimientos de lo que acontece en el plano internacional.

Para la economía chilena es evidente que un esfuerzo aislado tiene limitaciones. Un país pequeño no tiene por sí mismo la fuerza necesaria para hacer valer sus prioridades. Por ello, se hace necesario confiar cada vez más en la necesidad y validez de los acuerdos internacionales.

Por otra parte, es preciso insistir en la vigencia de principios, que deben ser conducta de los Estados, con el objeto de asegurar su igualdad jurídica, su convivencia y su cooperación eficiente.

La autodeterminación y la no intervención, la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza, la solución pacífica de las controversias y la promoción de los derechos del hombre, constituyen hoy un referente de acción, que se ampara en el derecho internacional, cuya normativa y espíritu debemos alentar como garantía de equilibrio y de justicia, para alejar los fantasmas apocalípticos del conflicto y de la guerra.

Estamos próximos a conmemorar quinientos años del descubrimiento de América, que separó épocas y unió mundos, dando origen a nuestra América Latina. Es nuestro escenario natural y el de nuestros esfuerzos para hacer común el destino, porque tenemos un mismo origen. Nuestras raíces son americanas y en la variada gama de asociaciones en las que se desarrollan las vocaciones internacionales de Chile y de Brasil, nuestro Continente y sus naciones hermanas representan la primera prioridad de nuestros vínculos internacionales, que queremos expresar en resultados concretos de concordia y bienestar.

Brasil goza hoy, como ayer, de un enorme prestigio en el concierto de las naciones por la sabiduría de su política externa, que ha

sabido proyectar las dimensiones de su territorio, la calidad de su gente, sus recursos y su cultura.

Vuestro país ocupa, meritoriamente, un rol de privilegio en la articulación de la sociedad internacional, pues por su potencial es una de las diez mayores economías del mundo, a la vez que comparte problemas y preocupaciones de las sociedades insatisfechas de los países en desarrollo. Juega así una importante función de contacto con las naciones opulentas y, muy específicamente, un rol moderador en la región sudamericana. A esa área Chile desea sumar sus energías y su voluntad para promover la cooperación.

Son numerosas las expresiones de afecto y amistad y las coincidencias que a lo largo de la historia han reunido a chilenos y brasileños.

Ya recordaba Nabuco, en el siglo pasado, que Chile y Brasil "teníamos la misma continuidad de orden, de gobierno parlamentario, de libertad civil, de pureza administrativa, de seriedad, decoro y dignidad, al punto de ser península de tierra firme entre olas revueltas y ensangrentadas". Hoy en día, ambos países vivimos nuevamente en democracia, habiendo remontado las tempestades que perturbaron el horizonte de nuestras naciones, reencontrándonos no sólo con la historia sino también con el porvenir.

De allí que nuestras posibilidades sean amplias y abiertas para encontrar coincidencias y alcanzar logros en un camino inspirado en el recíproco afecto y los principios comunes.

Señores Congresistas:

La vida de hombres y naciones está marcada por símbolos. Por eso, en la vastedad de esta planicie central —"cerebro de las grandes decisiones nacionales", como la llamó su fundador el Presidente Kubischek— levantamos las miradas sobre América, para anticiparle un gran destino.

Como Presidente de Chile, os agradezco esta ocasión con que me habéis honrado para exponer las grandes líneas de la política de mi país.

Como americano, siento las fuerzas y las energías, la vitalidad y la juventud de esta "Capital de la Esperanza", y las expreso en el sentimiento lúcido de nuestro poeta Pablo Neruda: "Brasilia, aislada en su milagro humano, en medio del espacio brasileño, es como una imposición de la suprema voluntad creadora del hombre. De aquí nos sentiremos dignos de volar a los planetas".

Muchas gracias.

En el que agradece el banquete ofrecido por el Presidente del Perú, don Alberto Fujimori

Lima, 28 de julio de 1990

Excelentísimo Señor Presidente:

Con mucho regocijo nuestra familia de naciones está presente en esta ciudad, para testimoniarle al Perú y a Vuestra Excelencia su solidario afecto y celebrar una nueva fiesta democrática.

Para las delegaciones aquí presentes —de cuya voz colectiva soy el portador— es un privilegio asistir a la concreción de otro ciclo de renovación del mandato popular.

En esta América Latina, liturgias democráticas como ésta tienen una especial significación, pues nos revelan que la democracia se va consolidando no sólo como un sistema de organización política, o como un mecanismo de renovación de las autoridades, sino también como una forma de convivencia que encuentra legitimidad en nuestros pueblos, pues hace posible el respeto a la dignidad de la persona y sus valores.

El camino que ha recorrido nuestro Continente ha sido largo y doloroso para que la conciencia democrática se asiente en nuestras naciones, en nuestras instituciones y en sus dirigentes o autoridades.

No se trata de que la democracia haya sido desconocida en su dimensión teórico-política, o haya estado ausente en las innumerables constituciones y cartas fundamentales otorgadas, plebiscitadas o simplemente impuestas a lo largo y lo ancho de Iberoamérica en estos dos siglos de vida independiente. Tampoco ha sido poca la sangre derramada en su defensa. Sin embargo, no ha habido una sólida percepción de los desafíos y renunciamentos que la vida

democrática impone: la ética de un sistema en el que unas veces se gana y otras se pierde; la convicción de que el poder no es patrimonio adquirido, sino un instrumento para servir; la necesidad de respetar las opciones discrepantes, de rechazar la violencia como método y procurar siempre el bien común.

En vez de ello, sufrimos de un exceso de ideologización que nos impidió buscar soluciones consensuales a los conflictos y nos llevó a extremar las controversias, cayendo en los extremos del fanatismo.

Todavía hoy la democracia se debate entre inquietantes amenazas. Unas, incubadas entre los gérmenes totalitarios que aún perduran en la región; otras, generadas en el hedonismo de culturas de la abundancia, donde la felicidad se busca —paradójicamente— por el camino angosto de la autogratificación y la droga.

Aunque avanzamos con paso decidido hacia una completa afirmación democrática —las dictaduras ya han dejado de ser una realidad continental en América Latina— la solidaridad de los gobiernos democráticos se convierte en el imperativo de la hora.

Es éste el más importante y solemne mensaje que podemos dirigir al pueblo peruano y a Vuestra Excelencia en estos días de grata convivencia fraternal.

Señor Presidente:

Vuestra patria está en el corazón de los latinoamericanos.

Sobre las majestuosas cumbres andinas, el sol del Perú iluminó los afanes de una de las más grandes culturas de nuestro Continente, cuya hermosa y atrevida arquitectura aún causa el asombro de sus visitantes.

En esta tierra el encuentro andino y europeo produjo notables frutos, expresados en múltiples manifestaciones culturales. Aquí podemos encontrar un Inca Garcilaso de la Vega.

Fue en el Perú donde la emancipación americana pasó de la incógnita a la certeza. Junín y Ayacucho cerraron un ciclo de nuestra historia para dar paso a uno nuevo.

Hoy el Perú centra su tarea en la construcción de la paz y la democracia.

Al iniciar vuestro mandato, queremos expresar el apoyo solidario de las naciones amigas del Perú. Compartimos el afecto por los hijos de esta tierra fecunda y una fe en el destino de esta nación. Compartimos un común anhelo de un futuro de colaboración americana y mundial; de una revitalización de los esfuerzos integracionistas, que deberemos iluminar con las luces de la eficiencia.

Permitidme, Excelentísimos Señores Presidentes, Ilustres Delegados, Hombres Públicos, Diplomáticos y Amigos, levantar esta copa por el Perú y su grandeza, por sus hombres libres y dignos, por su futuro de esperanza y por el Mandatario que hoy ocupa el sitio de sus Presidentes.

Que la sabiduría y la justicia sean su compañía.

¡Que la ventura y el éxito coronen sus desvelos!

En ceremonia de condecoración y cena ofrecida al Presidente de la República Argentina, don Carlos Saúl Menem

Santiago, 27 de agosto de 1990

Amigas y amigos todos:

Vuestra presencia en Chile, señor Presidente, tiene gran relevancia en las relaciones entre nuestros países. Ella confirma, por una parte, nuestra voluntad compartida para proyectar hacia el siglo XXI los frutos de una amistad que tiene profundas raíces históricas. Por otra parte, su visita se produce cuando Chile se ha reencontrado con su tradición democrática y se reinserta en el concierto de las naciones con decidida voluntad de cooperar al desarrollo de los pueblos, al logro de la paz y de la justicia entre las naciones y al imperio de los derechos humanos y el derecho internacional en todos los rincones de la tierra.

Esta realidad que hoy vivimos se enmarca en un proceso que en nuestros días, con penosas excepciones, parece revestir carácter universal, manifestado en el derrumbe de los muros que han dividido a la humanidad y en una conciencia generalizada de respeto al derecho de las personas y de los pueblos. Tal tendencia coincide con la vocación de diálogo y de acuerdo que ha caracterizado tradicionalmente a nuestro país.

Chile pertenece a América Latina, éste es su ámbito natural de inserción en la comunidad internacional. Consciente de esta realidad, admite el desafío de buscar modernas y eficaces formas de integración con las naciones hermanas, para promover el progreso de nuestros pueblos.

Las relaciones chileno-argentinas son demostrativas de las po-

sibilidades y dificultades, frustraciones y esperanzas propias de la vida de las naciones. Como vecinos geográficos, construimos juntos la Independencia de Argentina, Chile y Perú. Nuestros héroes iniciaron un destino común y con sus ilusiones de próceres con amplia visión, soñaron para América un horizonte de hermandad y progreso. Al genio estratégico del general José de San Martín, que comprendió la importancia de la plena emancipación de la Capitanía General de Chile para asegurar las provincias del Río de la Plata, se unió la capacidad organizativa y la voluntad de Bernardo O'Higgins para llevar a cabo la expedición libertadora del Perú, empresa en la que estaba en juego todo el proyecto de independencia de América Latina.

Así, a través de cordilleras, desiertos, mares y serranías, argentinos y chilenos desplegaron su esfuerzo y derramaron su sangre, unidos en la heroica y hermosa tarea de conquistar y asegurar la libertad de nuestros pueblos.

La historia posterior nos reveló también las dificultades de la vecindad, especialmente derivadas de un escenario de fronteras extensas e imperfectamente delimitadas desde los tiempos coloniales. Como en la vida de los hombres, la relación chileno-argentina fue entretejiéndose con puntadas de cercanía y distancia, de fraternidad y desencuentro.

No obstante, cada vez que los hechos parecieron desanimar la conciencia de paz de ambas naciones, hubo en la Argentina y en Chile reservas de grandeza y generosidad que, unidas a la capacidad diplomática, concretaron soluciones imaginativas, más allá de las incomprensiones, y supieron imponerse para preservar una tradición de paz y una conciencia de respeto mutuo.

Es así como Argentina y Chile han sido capaces de concebir mecanismos positivos para desincentivar el armamentismo, afianzar la convivencia pacífica e impulsar la confianza recíproca. La historia registra los Pactos de Mayo, en 1902, como uno de los únicos acuerdos exitosos del hemisferio, para frenar una desatada carrera armamentista que consumía a principios del siglo los recursos para el desarrollo de uno y otro Estado.

Más adelante, cuando circunstancias políticas internas de nuestras naciones permitieron la gestación de nuevas desinteligencias bilaterales, ambos países tuvieron la lucidez de aceptar la mediación de Su Santidad el Papa Juan Pablo II, para superarlas felizmente. Se inició entonces un intenso y fructífero período de negociaciones, que tuvo como resultado nuestro Tratado de Paz y Amistad, que incluye uno de los más perfeccionados mecanismos de solución pacífica de controversias que registra el derecho internacional moderno.

Argentina y Chile tienen hoy sólidas bases para avanzar en una

relación amistosa y creativa, con perspectivas de futuro. La apertura de las economías regionales y la interdependencia mundial representan un enorme desafío para la región. Deseamos construir en nuestras naciones democracias sólidas y estables. Para ello es preciso progresar en el camino del crecimiento económico, conciliándolo con los imperativos de la justicia y de la libertad.

En el mundo de hoy, las economías de los países necesitan ser competitivas. Ellos requieren de imaginación y creatividad, pero también de paciencia, austeridad y constancia. La democracia, el desarrollo y la equidad son tareas constantemente renovadas y no dádivas gratuitas. Necesitamos países eficientes y modernos, en los cuales ningún sector social pueda soslayar su responsabilidad.

De aquí deriva una nutrida agenda para nuestra nación con miras al siglo XXI. Junto con promover la democracia, los derechos humanos y la dignidad del hombre a través de la justicia social, debemos impulsar el crecimiento y el desarrollo, generando los intereses comunes que consoliden una beneficiosa interdependencia y alentando los cambios culturales que enriquezcan el acervo común a partir de la identidad de cada cual.

La voluntad coincidente de nuestros gobiernos, el suyo y el mío, para impulsar decididamente las relaciones bilaterales, se ha manifestado en las numerosas reuniones, políticas, económicas y técnicas, que Argentina y Chile han venido sosteniendo, con ritmo inédito, desde marzo pasado.

Hemos coincidido en un espíritu constructivo que ha procurado conjugar equilibradamente los intereses de cada parte con los requerimientos de la complementación. Esta tarea integracionista no comprende sólo a los gobiernos, sino que debe ser el resultado de un compromiso más amplio, asumido por toda la sociedad, por los actores de la vida política, económica y cultural de nuestros países. Como conductores de nuestros pueblos, debemos transmitir a argentinos y chilenos un sincero entusiasmo ante este ideal de siempre, que hoy tiene nuevas perspectivas.

Los próximos meses exigirán a nuestra Cancillería, nuestros políticos, a nuestros empresarios, a nuestros trabajadores y a nuestros intelectuales, una intensa actividad para perfeccionar los mecanismos de integración y avanzar en la solución de las dificultades que debemos superar.

Mi gobierno está convencido de que con políticas eficientes, y con la capacidad y los recursos de que argentinos y chilenos disponemos, será posible alcanzar los niveles necesarios para competir exitosamente en los mercados internacionales.

Analizaremos también las perspectivas de cooperación en el campo energético, del transporte y de las telecomunicaciones. En el ámbito específico de la economía estamos dando señales inequívocas

a nuestros empresarios e inversionistas, a través de la aprobación de las bases generales para un acuerdo de complementación económica, en las que queda consignado nuestro firme compromiso de conformar un espacio económico ampliado, que esperamos perfeccionar a más tardar a fines de 1995.

Excelentísimo señor Presidente:

Existen entre Chile y Argentina lazos profundos para un sólido entendimiento. Como signo de esta amistad, ha sido para mí un honor, y nos ha sido muy grato, otorgarle hoy la Orden al Mérito de Chile, que está íntimamente ligada a la etapa en que nuestras nacionalidades se confundieron en un solo ideal y una misma lucha.

Ella nació en medio de la alegría provocada por la victoria de Chacabuco, cuando el Libertador Bernardo O'Higgins la concibió como un instrumento para la exaltación de nobles ideales americanistas. La Orden creada como Legión de Mérito de Chile, fue desde sus orígenes un honor que compartieron americanos de distintas latitudes, unidos por la común entrega a la causa de la emancipación.

La historia de esta Orden está vinculada a muchos trasandinos ilustres, cuyos nombres bastan por sí mismos para traer a nuestra memoria el recuerdo de glorias y hazañas que nos enorgullecen por igual a chilenos y argentinos: San Martín, Soler, Pueyrredón, Las Heras, Alvarez de Arenales, son algunos de los patriotas que honran sus huestes.

Al haberos impuesto esta noche el Collar de la Orden Mérito de Chile, hemos rendido homenaje no sólo al gobernante de la nación vecina, al que sabemos sincero amigo de Chile, sino también al conductor de un noble pueblo al que sentimos hermano.

Que este gesto sea expresión simbólica de la unión de nuestras patrias en un común destino de libertad, justicia, prosperidad y paz.

Ante *The Council of the Americas* y *Americas Society*, de Nueva York

Nueva York, 27 de septiembre de 1990

Señoras y señores:

Vengo de un país pequeño que está viviendo un proceso político y económico para el cual existen pocos precedentes. Emergiendo de más de dieciséis años de gobierno autoritario, Chile se halla empeñado en demostrar que en el mundo en desarrollo una economía que crece, que es estable y equitativa, es compatible con un sistema político abierto y democrático. Con orgullo, pero también con realismo, puedo señalar que, en lo que hemos recorrido del camino, los resultados han sido positivos, y que ello lleva hoy a los chilenos a mirar su futuro económico con optimismo.

Particularmente auspiciosa ha sido la forma consensual y pragmática en que la transición a la democracia se ha llevado a cabo. En octubre de 1988 los chilenos rechazamos en un plebiscito la extensión por ocho años más del régimen del general Pinochet. Como consecuencia de esa decisión del pueblo, pudieron realizarse elecciones presidenciales y parlamentarias libres, en las que resultó victoriosa la amplia coalición de partidos democráticos que me honro en representar. A partir del 11 de marzo de 1990, fecha en que asumimos el poder, la sociedad chilena ha demostrado su voluntad y capacidad para vivir en democracia.

Esta evolución pacífica tiene sus raíces en nuestra historia. En los últimos 25 años, Chile ha atravesado los más diversos experimentos políticos y sociales. Como resultado, la sociedad chilena llegó a ser polarizada y extremadamente ideologizada. Este proceso culminó con la llegada del régimen militar, que terminó con una tradición democrática centenaria caracterizada por la preeminencia

de mecanismos pacíficos para resolver los conflictos sociales. El término de la democracia también representó un enfoque más ideologizado de la gestión gubernamental, que se expresó en el intento de imponer recetas rígidas para el desarrollo económico. Los años setenta y la primera mitad de los ochenta trajeron inestabilidad y experiencias económicas traumáticas. El desorden y la hiperinflación de 1970-73 dieron paso a la recesión en 1975-76. A su vez, una genuina depresión azotó el país a comienzos de los años ochenta, acompañada de una crisis financiera y de tasas de desempleo de hasta 30 por ciento.

Como reacción generalizada frente a esa inestabilidad, los chilenos hemos avanzado sustancialmente en los últimos años hacia un consenso respecto de la estrategia de desarrollo que deseamos para el país. Chile hoy está alcanzando la madurez: un pasado de grandes fluctuaciones ha contribuido a hacer de la estabilidad una prioridad nacional. Existe un amplio acuerdo sobre la necesidad de mantener una inflación baja y una gestión macroeconómica prudente, así como sobre la importancia de promover las exportaciones y participar con dinamismo en el comercio mundial. Al mismo tiempo, amplios sectores de la sociedad concuerdan en que el desarrollo no debe producirse a expensas de los más vulnerables, y que mayores esfuerzos deben dedicarse a satisfacer las necesidades básicas de los pobres en nuestra sociedad.

De este consenso emana la orientación económica básica del gobierno que presido. Chile se orienta hacia la economía de mercado, en que el sector privado es motor principal del desarrollo, en colaboración con un Estado que concentra sus esfuerzos en la provisión de servicios sociales esenciales como salud, educación y vivienda. Nuestra economía es y permanecerá abierta, y las políticas de mi gobierno promueven sin complejos el comercio internacional y la inversión extranjera. Todo ello con miras a lograr un crecimiento económico sostenido, en que la expansión del producto vaya acompañada de crecientes grados de equidad.

Sólo así podremos evitar aquellos dos polos nocivos tan típicos de la experiencia económica latinoamericana: por una parte, un énfasis en la acumulación, que no conlleva mayor bienestar para los más pobres y que, por ello, carece de legitimidad social y tarde o temprano entra en crisis política; por la otra, el ciclo populista por todos conocido, en que políticas redistributivas miopes, apoyadas en déficit fiscales insostenibles, terminan por perjudicar a los mismos a quienes se pretendía ayudar y a la sociedad en general.

La economía chilena ofrece hoy perspectivas esperanzadoras. En contraste con la experiencia de otros países latinoamericanos, la apertura política no ha tenido lugar en un momento de crisis económica. Con un gran costo para muchos chilenos, el país se ha ajustado

a los shocks sufridos a principios de los ochenta, y ha ordenado su balanza de pagos a pesar del lastre de la deuda externa. En los últimos cinco años, el producto se ha recuperado de la profunda recesión de 1982-83, alcanzando tasas de crecimiento sustanciales. El presupuesto fiscal se encuentra equilibrado y la inflación es una de las más bajas de la región.

El regreso a la democracia ha acentuado este clima de estabilidad económica. A pesar de algunos vaticinios pesimistas e infundados, los inversionistas han reaccionado con un espaldarazo de confianza. A partir de marzo nuestra moneda se ha visto fortalecida, y el Banco Central ha acumulado reservas adicionales por más de mil millones de dólares. El mercado accionario se ha mantenido fuerte, y la inversión extranjera está llegando a un récord histórico.

Nuestro compromiso con la estabilidad nos ha llevado a emprender un proceso de ajuste macroeconómico, con miras a reducir la creciente tasa de inflación heredada del pasado gobierno. Este adoptó políticas monetarias expansivas en los años 1988 y 1989, llevando la inflación a fines de 1989 a más de 30 por ciento a tasas analizadas. En conjunto con el Banco Central, autónomo desde diciembre último, se ha buscado reducir el crecimiento de los medios de pago y de la demanda. Gradualmente se ha tenido éxito, por lo que proyectamos para este año una tasa de inflación del orden del 25 por ciento.

Tenemos confianza en que las sólidas bases de la economía chilena, complementadas por este ajuste, permitirán que Chile continúe por la senda del crecimiento sostenido. Para lograrlo, también será necesario afrontar con éxito la necesidad de mayores inversiones, requerimiento muchas veces no satisfecho en los países de América Latina. En Chile ya se vislumbran signos positivos: esperamos que este año la participación de la inversión total en el producto sea la más alta de los últimos veinte años. Pero es necesario ir aún más allá, y en esa tarea la inversión extranjera tendrá un papel central que jugar. Las políticas y resultados económicos ya descritos, sumados a un régimen flexible y no discriminatorio para la inversión extranjera, hacen de nuestro país un socio confiable. Proyectos que contribuyan con conocimiento tecnológico, creación de empleos y generación de divisas, encontrarán en Chile un ambiente propicio en el cual desenvolverse.

La inversión en recursos humanos también debe incrementarse sustancialmente. Una mayor atención a la educación y la capacitación es necesaria para asegurar el crecimiento de la productividad y, a su vez, generar una mejoría permanente en las condiciones de vida de los más pobres. Hoy en Chile estamos haciendo un esfuerzo por aumentar el gasto social y la inversión en capital humano. Este esfuerzo se guía por dos principios.

En primer lugar, buscamos financiar cualquier incremento en el gasto a través de mayores ingresos, como lo ilustra la recientemente aprobada Reforma Tributaria. De este modo, evitaremos el riesgo de perturbadores déficit fiscales que pudieran poner en peligro el crecimiento. Merece destacarse el hecho de que esa Reforma Tributaria fue fruto de un acuerdo en que gobierno y oposición coincidieron, y que las reformas laborales en estudio en el Congreso Nacional expresan también en gran medida consensos entre empresarios y trabajadores, que al comienzo de mi gobierno suscribieron con éste un acuerdo marco.

Un segundo aspecto distintivo de las políticas sociales es su implementación en el tiempo. Los nuevos programas sociales se distribuirán a lo largo de cuatro años. Este enfoque gradualista, orientado a utilizar eficientemente los recursos disponibles, asegurará que el esfuerzo para eliminar la pobreza sea sostenido.

Chile comparte con otros países latinoamericanos un peso sustancial: la deuda externa. A pesar de las recientes reducciones de la deuda, a través de recompras e intercambios de pagarés, la relación deuda total-PGB de Chile es aún alta, y los pagos de intereses consumen una proporción importante de nuestros ingresos por exportaciones. Es por ello que actualmente nos encontramos abocados a un proceso de diálogo con nuestros acreedores comerciales, el que creemos, por lo hasta aquí avanzado, culminará con éxito. Pensamos que Chile está preparado para entrar a una nueva etapa en el tema de la deuda externa. Habiendo caminado largo trecho por la senda de las reformas estructurales, aspiramos hoy a métodos más flexibles y voluntarios de financiamiento internacional. Si lo planteado en nuestras conversaciones se logra concretar definitivamente, Chile y sus acreedores habrán dado un paso de pioneros.

El panorama económico que describo es hoy una fuente de esperanza para mis compatriotas. Pienso que tenemos además la buena fortuna de iniciar esta senda de desarrollo económico en democracia en un contexto internacional especialmente propicio. Los cambios recientes en el escenario mundial —excluyendo las incertidumbres que ha traído la crisis del Golfo Pérsico— ofrecen nuevas oportunidades para las naciones latinoamericanas. Un primer efecto ya se está registrando en nuestros debates políticos y económicos. En la posguerra, Latinoamérica ha vivido constreñida por la bipolaridad definida por las dos grandes potencias. La opción por una u otra alternativa desataba conflictos ideológicos y traumas tremendamente desestabilizadores. Por contraste, confío en que la aparición de un gradual consenso mundial que resalte las virtudes de la descentralización en la asignación de recursos, el libre intercambio internacional y el crecimiento con equidad, abra

también espacio para que en nuestro continente se apliquen políticas económicas más sensatas, pragmáticas y flexibles.

En la arena económica internacional, los cambios recientes también traen buenos augurios. Algunos pesimistas señalan: "La apertura de Europa del Este llevará a la postergación y descenso relativo de América Latina. Nos costará más concitar la atención y atraer la inversión internacional". Creo sinceramente que esta visión es errada. En la economía de hoy los recursos fluyen hacia donde hay buenas oportunidades insertas en un ambiente económico sano y estable. Esto es precisamente lo que países como Chile pueden ofrecer. Más aún, con políticas adecuadas, nuestras economías deberán aprovechar sus ventajas comparativas. En el caso de Chile, éstas son: nuestros recursos naturales —agrícolas, mineros, forestales y pesqueros— y nuestros recursos humanos: una fuerza de trabajo educada, ingenieros y técnicos bien preparados y grupos empresariales innovadores. En todos estos planos nuestras circunstancias son claramente diferenciables de las de Europa Oriental. En muchos casos, no creo que compitamos por el mismo tipo de inversión. Y cuando ello ocurra, estaremos preparados para enfrentar sin temores una competencia libre y justa.

Este es un panorama que lleva al optimismo. Sin embargo, sería imprudente de nuestra parte no señalar también algunos peligros potenciales que se vislumbran en este nuevo escenario internacional. Quizás el mayor de ellos sea el proteccionismo, y la tendencia a formar bloques de comercio. No debemos aceptar en silencio que las guerras comerciales reemplacen a la Guerra Fría. Hoy día nuestras exportaciones encuentran trabas sustanciales en los mercados del mundo desarrollado. Los aranceles son bajos tratándose de muchos productos primarios, pero tienden a subir drásticamente al incrementarse el grado de elaboración del producto. Al mismo tiempo, múltiples cuotas y restricciones no tarifarias limitan nuestros volúmenes exportados. Por estas razones, es imprescindible que la retórica del libre comercio se traduzca en acciones. La suerte de economías con vocación exportadora, como la chilena, depende en gran parte de ello.

Es por esto que hemos recibido con beneplácito y entusiasmo la Iniciativa para las Américas propuesta por el Presidente Bush. La visión de un mercado común de Alaska a la Antártica, es audaz y de futuro. En versiones menos amplias, ése es también un ideal que los latinoamericanos llevamos décadas tratando de concretar. Esta experiencia sugiere que el proceso de integración comercial continental puede ser complejo y difícil. Por ello, es menester llevar a la práctica la iniciativa del Presidente Bush de modo creativo y veloz. Chile quiere y puede ser de los primeros en este proceso. Nuestra economía abierta y con pocas distorsiones nos pone en buenas con-

diciones para hacerlo. Pensamos también que no conviene ser rígidos en cuanto a la mejor manera de estructurar el proceso de negociación. Un mercado común continental no puede sino ser la meta final. Pero para llegar allí, lo mejor es proceder incrementalmente, permitiendo que las economías que están preparadas para abrirse e integrarse lo hagan pronto, ya sea de modo bilateral o multilateral, sin permitir que un globalismo mal entendido le imponga a este esfuerzo la lógica del menor común denominador.

Señoras y señores:

Los cambios vertiginosos de los últimos tiempos nos han dado a los seres humanos la posibilidad de dar rienda suelta a nuestra imaginación. Imaginar —por ejemplo— un mundo menos segmentado, próspero y en paz, en que los países se enfrenten en la competencia sana del mercado y no en el campo de batalla. En ese escenario se abrirían nuevos espacios para naciones pequeñas pero emprendedoras como la nuestra, que quieran demostrar su voluntad de vivir en democracia. Hoy en Chile estamos aportando nuestro grano de arena para que esta visión se vuelva realidad. Pero en tal esfuerzo, inserto en un mundo cada día más interdependiente, necesitamos socios y colaboradores. Los invitamos a unírse nos en esta importante tarea.

Nuestro amor por los niños y la conciencia de la fragilidad de sus vidas, deben estar en nuestras mentes las 24 horas del día. Ese es nuestro compromiso permanente.

En nombre del gobierno de Chile, yo expreso nuestra adhesión a la Convención Internacional Sobre Derechos del Niño que hemos ratificado, y reitero públicamente nuestro decidido compromiso a luchar seriamente, con todas nuestras fuerzas, por este problema de asegurar la supervivencia de los niños del mundo.

Muchas gracias.

Al inaugurar la Cumbre Mundial de la Infancia

Nueva York, 30 de septiembre de 1990

... La supervivencia del niño a estas alturas es uno de los problemas más dramáticos que vive la humanidad. El grado de mortalidad infantil es, sin duda, en nuestros tiempos, un escándalo que necesita ser afrontado muy seriamente.

Creemos que ello es posible con técnicas adecuadas y con solidaridad internacional. El problema afecta fundamentalmente a los países pobres. La mayoría de los niños del mundo son pobres, y la mayoría de los niños que mueren son pobres.

Es posible, y con pocos recursos, afrontar el problema. Basta con la voluntad política y la organización de servicios sociales y de salud eficientes.

La experiencia de nuestro país nos indica que el objetivo de salud y de sobrevivencia infantil suscita un alto grado de consenso nacional. Nosotros, en Chile, en la década del año veinte, teníamos 200 muertes infantiles por cada mil; en la década de los cuarenta lo redujimos a 165; en la década de los sesenta, a 95; y en la década de los ochenta, a 19,5. Un esfuerzo sostenido bajo gobiernos de distintas corrientes.

¿Qué es necesario para ello? Una adecuada identificación de los problemas, un diseño estratégico inteligente, la capacitación de personal, una intensa participación de la comunidad.

Los instrumentos de esta tarea son conocidos: cuidado prenatal, educación de las madres, atención del parto, control del niño sano, alimentación adecuada, esparcimiento de los nacimientos, inmunizaciones y un medio ambiente limpio.

Pero, por encima de todos los factores e intervenciones, está el amor y el cuidado de sus padres y la estabilidad de la familia. El amor es el gran alimento, el único indispensable e insustituible.

Nuestro amor por los niños, y la conciencia de la fragilidad de sus vidas, deben estar en nuestras mentes las 24 horas del día. Ese es nuestro compromiso permanente.

En nombre del gobierno de Chile, yo expreso nuestra adhesión a la Convención Internacional Sobre Derechos del Niño que hemos ratificado, y reitero públicamente nuestro decidido compromiso a luchar seriamente, con todas nuestras fuerzas, por este problema de asegurar la sobrevivencia de los niños del mundo.

Muchas gracias.

Ante el Senado de la República de México

Ciudad de México, 3 de octubre de 1990

Señor Presidente de la Comisión Permanente del Congreso;
Honorables Senadores y Diputados;
Señoras y señores:

Aunque traía preparado un texto para leer en esta ocasión, al escuchar las palabras del señor Presidente y de los Honorables Senadores y Diputados que, en representación de los distintos partidos políticos de México, han querido expresar el testimonio de su afecto y solidaridad con Chile, me ha parecido que era más justo y más adecuado que dejara llevar, en esta ocasión, la voz del corazón, del sentimiento y de mis convicciones, con alguna espontaneidad.

En primer lugar, quiero decirles que me siento muy honrado al estar en el seno del Congreso. Fui parlamentario por años y fui Presidente del Senado de mi país, y como demócrata tengo la convicción más profunda de que el Parlamento es el órgano de expresión natural, institucional, de las distintas corrientes de opinión de un país. Es el espejo de la nación entera. Porque la unidad de una patria se construye en su propia diversidad. Nadie puede pretender que, por compartir la identidad nacional, hayan de compartirse todos los pensamientos, todas las convicciones, todas las opiniones.

El respeto a la dignidad esencial de la persona humana, fundamento básico de toda democracia, exige la posibilidad de que todas las opiniones y todas las tendencias tengan posibilidad de expresarse, mediante un sistema de representación proporcional que permita que todas participen, la mayoría gobernando, las minorías exponiendo sus críticas o sus alternativas en la construcción común del destino nacional.

El Parlamento es, entonces, un baluarte esencial en toda democracia.

Quiero, en segundo término, expresar ante ustedes lo que ya he dicho ante el señor Presidente de la República y ante las autoridades, ante el Municipio o el Consejo de Administración de la ciudad, que han tenido la gentileza de recibirme. Quiero expresar la gratitud del pueblo chileno, al cual represento hoy día como Presidente de la República, para con el pueblo de México, por la solidaridad permanente, expresada por ustedes, sus fuerzas políticas, sus instituciones, sus representantes, con la lucha de los demócratas chilenos por la libertad en nuestra patria; y por la solidaridad fraterna, expresada por el pueblo de México, al recibir con tan cariñosa y afectuosa hospitalidad a tantos chilenos que, huyendo o forzados por las circunstancias que vivía Chile, encontraron en el asilo mexicano un nuevo hogar, afectuoso, fraterno, solidario.

Quiero, en tercer lugar, decirles del afecto de Chile por México, del pueblo chileno por el pueblo mexicano. Tal afecto se va forjando desde la niñez en el estudio de nuestra historia, de la historia común de los pueblos de Iberoamérica; se enriquece con los aportes de la cultura mexicana, con la admiración que suscitan en nuestras juventudes los murales de Rivera, Orozco, las expresiones de la música de ustedes, que llegan a través de los medios de comunicación, y que son entonadas y compartidas en la vivencia diaria, sobre todo en los sectores populares de nuestra patria, en los sectores campesinos. Hay entre nuestros dos países un afecto muy profundo, nos sentimos como hermanos. Y es un afecto unido a cierto grado importante de admiración por la lucha permanente del pueblo de México en defensa de ciertos principios fundamentales, lo que pudiéramos llamar "la dignidad nacional"; la lucha del pueblo de México por su soberanía y por la soberanía de los pueblos de Iberoamérica.

Eso lo hemos conocido a través de la historia, lo admiramos, y es un vínculo de unión con la tierra chilena, que legó también del indómito araucano cierta gallardía, ésa que llevó al poeta español a decir "que no había sido por Rey jamás regida y a extraño dominio sometida". Esa cosa natural del pueblo chileno se ve expresada en admiración ante una actitud análoga, tan viril y tan permanente, de parte del pueblo mexicano.

En cuarto lugar, yo quisiera decirles que agradezco mucho todos los conceptos de reconocimiento que se han expresado aquí respecto del proceso de retorno a la democracia que está viviendo nuestra patria.

En verdad, excúsenme unos breves minutos de reflexión a título informativo, para que ustedes estén más compenetrados de la verdad de ese proceso. Se trata de un proceso bastante atípico. Generalmente

los restablecimientos de sistemas democráticos se producen sobre la base del derrumbe de los regímenes autoritarios que le precedieron, y generalmente este derrumbe no está exento de violencia y de confrontación aguda.

El pueblo chileno luchó como mejor pudo en defensa de sus libertades, de su vocación democrática, pero cuando el camino de las protestas, del levantamiento generalizado, se estrelló con un muro al parecer imbatible, se abrió camino en la sociedad chilena la idea de que podíamos reconstruir y reconquistar la democracia por los propios caminos institucionales que el sistema autoritario había establecido.

Básico para el éxito de este camino fue un hecho, a mi juicio, fundamental: que el sufrimiento de tan largos años nos llevó, a quienes habíamos sido adversarios en el pasado, a comprender que era mucho más lo que nos unía que lo que nos separaba; y que, más allá de las banderas ideológicas que desplegadas en todo su esplendor conducen a veces a confrontaciones inútiles, debíamos aunar esfuerzos en torno a los valores fundamentales que conforman el espíritu y la esencia de la democracia.

Por eso se pudo formar la Concertación de Partidos por la Democracia, fruto de un largo proceso, de sucesivas tentativas, que aún en su seno a quienes fuimos adversarios en el pasado, a quienes constituyeron el eje de sustentación del gobierno del Presidente Allende, y a quienes estuvimos, como quien les habla, en la oposición democrática a ese gobierno.

Caminamos juntos, logramos ponernos de acuerdo en lo esencial, y sobre esa base hemos constituido no sólo una fuerza poderosa, que ganó con el No el 5 de octubre de 1988, que eligió Presidente de la República el 14 de diciembre de 1989, sino que, desde el 11 de marzo pasado, está gobernando al país con una conducta ejemplarmente democrática, con una gran homogeneidad. Nos decían: "¿Cómo se van a poner de acuerdo? En el gobierno van a empezar a disputar entre sí". Y resulta que la madurez forjada en el dolor, nos ha hecho comprender que estamos de acuerdo en todo lo esencial, y nos ha hecho comprender que los acuerdos que constituyen las bases programáticas de nuestro gobierno, deben ser respetadas de corazón por todos los partidos integrantes. Estamos gobernando juntos, y para mí, como Presidente de la República, es motivo de profunda satisfacción la unidad demostrada, tanto por mis equipos de gobierno como por los partidos de la Concertación, tanto en las acciones del Ejecutivo como en la acción del Parlamento, para hacer posible el cumplimiento de nuestro Programa de Gobierno.

Quiero decir algo más. En el éxito de este proceso es fundamental entender que la política no es sólo el arte de hacer lo que se quiere, sino el arte de hacer lo que se puede de lo que se quiere. La

política exige conciliar ideal con realidad. Exige ser consecuente con los grandes principios y valores por los cuales se lucha para construir una sociedad mejor, a los cuales jamás se puede dejar de mirar, como el Norte que nos guía, como la meta final. Pero es indispensable, al mismo tiempo, ir mirando el suelo que se pisa, los escollos que se encuentran en el camino, para no estrellarse vanamente contra los muros, para no confundirse, para no fracasar.

Un político eficaz tiene el deber de tener éxito, y para tener éxito no puede prescindir de la realidad con la cual se encuentra. Nuestros pueblos tienen por delante la tarea de alcanzar simultáneamente tres grandes metas u objetivos en nuestras realidades nacionales y en nuestro concierto latinoamericano. Son los desafíos de demostrar que es posible en nuestros pueblos la democracia, con todo lo que significa de libertad, de respeto a la dignidad de la persona humana, de pluralismo; y, al mismo tiempo, lograr la justicia social, que significa que la democracia no es sólo libertad, sino que es derecho para todos, que es posibilidad de acceso a todos a condiciones de vida dignas, que es superar la barrera entre ricos y pobres, que es abrir posibilidades a los pobres para un mundo de bienaventuranza y de justicia. Y significa, al mismo tiempo, ser capaces de vencer el desafío de la pobreza, es decir, superar las barreras del subdesarrollo, lograr el crecimiento de nuestros pueblos, el crecimiento económico, la modernización de nuestras economías; ser capaces de producir más, de crear más riqueza, porque con el solo repartir la riqueza que tenemos, no vamos a lograr la condición de bienestar mínimo de dignidad humana para todos los habitantes de nuestras patrias.

Conciliar el desafío del éxito económico con el desafío de la justicia social, con el desafío del imperio de la libertad: ésa es nuestra gran tarea, en esa tarea estamos, en esa tarea somos hermanos, ustedes mexicanos, nosotros chilenos, y todos los pueblos de nuestra América. En esa tarea tenemos que marchar unidos; tenemos que, con las cabezas serenas pero con el corazón ardiente, trabajar juntos, hermanados, ir superando los escollos, y estoy cierto de que conquistaremos para nuestras patrias, para nuestros pueblos, un porvenir de libertad, de justicia, de paz.

Muchas gracias.

Ante el Congreso de la República de Venezuela

Caracas, 9 de octubre de 1990

Señoras y señores:

Para el Presidente de la República de Chile es un alto honor y motivo de gran satisfacción ser recibido en esta tierra de Simón Bolívar, por el Congreso de Venezuela. Permítanme, en primer lugar, expresarles mis profundos y sinceros agradecimientos por este recibimiento tan cordial, y por esos gestos de extraordinaria fineza, que constituyen los obsequios de que aquí se me ha hecho objeto.

Recibo con profunda emoción el documento de acuerdo del Congreso de Venezuela, en homenaje al ex Presidente Allende, destinado al Congreso de Chile. Salvador Allende fue Presidente del Congreso de Chile durante varios años. Me tocó ser senador en el período en que él lo presidía. Y, sin duda, este testimonio del Parlamento hermano de Venezuela será una reliquia importante en la historia del Parlamento chileno.

Y este gesto del senador Polanco, que fue embajador en Chile, y que tiene la gentileza de salvar y restituir a Chile un cuadro que sufrió los avatares de la situación que en nuestro país vivimos tan trágicamente, es también un gesto de hermandad que agradezco profundamente.

Mi experiencia como parlamentario y presidente del Senado de mi país me fortaleció la convicción sobre la importancia democrática del Parlamento, órgano de expresión natural e institucional de las distintas corrientes de opinión de un país.

El Parlamento es el espejo de la nación entera, porque la unidad de una patria se construye en su propia diversidad, y nadie puede pretender que para compartir la identidad nacional haya que compartirse también los pensamientos, ideales y convicciones.

El respeto a la dignidad esencial de la persona humana, fundamento básico de toda democracia, exige la posibilidad de que todas las opiniones y todas las tendencias puedan expresarse mediante un sistema de representación que permita que la mayoría participe gobernando, y las minorías, exponiendo sus críticas, puntos de vista y alternativas, en la construcción común del destino nacional.

El Parlamento es, entonces, un baluarte esencial de toda democracia.

En el caso de Venezuela, después de más de tres décadas de estabilidad democrática, este Congreso ha sido escenario de un rico pluralismo ideológico y partidista, y ha sido un lugar que ha facilitado la concertación de grandes consensos nacionales.

En esta ocasión, no puedo dejar de evocar la figura de don Andrés Bello, el caraqueño ilustre que honró al Congreso chileno, porque además de la fecunda labor que cumplió en su patria adoptiva en los campos del derecho, las letras, la diplomacia y la educación, fue también senador de la República de Chile, y con su preclara inteligencia y su sabiduría iluminó los debates legislativos, dejando una huella que marcó un estilo parlamentario que se constituiría en una tradición en el ejercicio de la función legislativa de mi país.

Quiero también expresar ante ustedes la gratitud del pueblo chileno, al cual tengo hoy el honor de representar, para con el pueblo de Venezuela, por el apoyo permanente de su Parlamento, de su gobierno, de sus fuerzas políticas, de sus organizaciones sociales y de toda la ciudadanía, a la lucha de los demócratas chilenos por la libertad de nuestra patria, y agradecer también la solidaridad fraterna del pueblo venezolano, al recibir con tan generosa y afectuosa hospitalidad a tantos chilenos que, forzados por las circunstancias que vivía Chile, encontraron aquí un nuevo hogar.

La historia de Chile reciente es la de una nación que ha luchado por la paz, con las armas de la paz, de un pueblo que ha amado con tesón la libertad.

El proceso de transición del autoritarismo a la democracia en Chile tiene características que se explican en la vocación democrática y en la tradición histórica de nuestro país. El pueblo chileno luchó como mejor pudo en la defensa de sus libertades, de sus derechos democráticos. Pero cuando el camino de las protestas y de la movilización social generalizada se estrelló con un muro que parecía infranqueable, y con un alto costo de muerte y dolor para los chilenos, se abrió paso en la sociedad la idea de que podíamos reconstruir y reconquistar la democracia por los propios caminos institucionales que el sistema autoritario había establecido. Es ésta una experiencia *sui generis*. Para que ello fuera posible, fue necesario que tras largos años de sufrimiento, quienes habíamos sido adver-

sarios en el pasado comprendiéramos que era mucho más lo que nos unía que lo que nos separaba; y que más allá de las banderas ideológicas, que desplegadas en todo su esplendor conducen a confrontaciones muchas veces perniciosas e inútiles, debíamos aunar esfuerzos en torno a los valores fundamentales que conforman el espíritu y esencia de la democracia.

Por eso se pudo formar la Concertación de Partidos por la Democracia, fruto de un largo proceso, de sucesivas tentativas, que aún a quienes estuvimos en posiciones encontradas en el pasado, a quienes constituyeron el eje de sustentación del gobierno del Presidente Allende y a quienes estuvimos, como quien les habla, en la oposición democrática a ese gobierno.

Hemos logrado ponernos de acuerdo en lo esencial, y sobre esa base hemos constituido una fuerza poderosa que ganó el plebiscito del 5 de octubre de 1988, que eligió Presidente de la República el 14 de diciembre de 1989, y que desde el 11 de marzo último está gobernando el país con una gran homogeneidad, empeñada en cumplir con éxito las bases programáticas que propusimos al país. Un espíritu de conciliación domina hoy en la vida política y social chilena. Los mismos partidos que durante los años setenta cayeron en ideologismos extremos, que impidieron todo entendimiento y negociación, hemos sido ahora capaces de lograr los acuerdos que culminaron con las reformas constitucionales de 1989, para facilitar el proceso de transición democrática, y también aquellos que el gobierno democrático que presido ha alcanzado con la actual oposición, en temas relevantes para el desarrollo del país.

Ese mismo espíritu ha permitido concretar un acuerdo marco entre empresarios y trabajadores, inédito en la historia de Chile, que nos posibilita enfrentar con esperanzas un proceso de concertación social, indispensable para avanzar en el crecimiento que necesitamos.

Nuestros pueblos tienen por delante una enorme tarea por realizar, que implica alcanzar simultáneamente tres grandes metas en nuestras realidades nacionales y en nuestro Continente latinoamericano: asegurar la democracia, como sistema de convivencia fundado en la libertad; conquistar la justicia social como sistema de convivencia que asegura la igualdad esencial entre todas las personas; y lograr el progreso y crecimiento económico indispensables para superar la etapa del subdesarrollo y poder satisfacer las necesidades de toda nuestra población.

Es el desafío que estamos encarando en Chile; que encaran, en mayor o menor medida, todas las naciones de nuestra Región. Tenemos que demostrar que es posible vivir en democracia, con todo lo que significa de libertad, de respeto a la dignidad de la persona humana, de pluralismo. Y junto con eso, promover la justicia social,

que significa que la democracia no es sólo libertad, sino derecho para todos, posibilidad para todos de acceso a condiciones de vida digna, superación de la barrera entre ricos y pobres, apertura de posibilidades a los pobres para que vivan en un mundo mejor.

Y significa también, al mismo tiempo, ser capaces de lograr el crecimiento de nuestros pueblos, la modernización de nuestras economías, para crear más riqueza, para producir más, porque con sólo repartir la riqueza que tenemos no vamos a lograr la condición de bienestar mínimo y de dignidad humana que requieren todos los habitantes de nuestras patrias.

Por ello debemos incrementar sustancialmente la inversión en lo que nosotros llamamos la gente, en los recursos humanos. Invertir en la gente es invertir en salud, en educación y en vivienda, fundamentalmente.

Esta tarea debe cumplirse simultáneamente con un proceso sostenido de crecimiento económico. La economía chilena es actualmente una economía abierta, y se mantendrá así porque los chilenos sabemos que, en las actuales condiciones de la economía mundial, es la mejor estrategia para lograr un crecimiento sostenido.

Con orgullo, pero también con realismo, puedo señalar que en lo que hemos recorrido del camino, los resultados han sido positivos, y que ello lleva hoy a los chilenos a mirar el porvenir con optimismo. Las condiciones para que estos ideales cobren vigencia tienen también una dimensión internacional inescapable. Las profundas transformaciones que tienen lugar en la Unión Soviética y Europa del Este, suponen un reacomodo del conjunto de la economía mundial.

América Latina corre el peligro de quedar excluida de los importantes beneficios que esta nueva situación ha generado.

La Europa comunitaria de 1992 y el pujante desarrollo de los países de la Cuenca del Pacífico, son elementos que deben ser integrados en nuestras economías, para mejorar nuestras condiciones de operación y conseguir el bienestar de nuestros conciudadanos.

Otra de las tareas del gobierno democrático de Chile es la reinsertión de Chile en el ámbito internacional. Chile jugó, a través de su historia, un papel modesto pero digno en la convivencia de las naciones, caracterizándose por la defensa de los principios fundamentales del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de los conflictos, el imperio del derecho en las relaciones entre las naciones.

Pasado el doloroso y largo período del régimen autoritario, Chile se ha esforzado por reincorporarse en todas las instancias de colaboración multilateral y bilateral con el resto de los países del mundo, y especialmente con América Latina. Chile pertenece a América Latina, somos pueblos hermanos, nuestros destinos son comunes.

Y por eso estas visitas, como la visita que el señor Presidente de la República de Venezuela tuvo la gentileza de hacernos con motivo de la asunción del mando del primer Presidente democrático en nuestra patria, después del período a que me he referido, son elementos positivos y eficaces para ir creando nuevamente las condiciones, no sólo de convivencia fraterna, sino de creación de mecanismos de complementación y ayuda recíproca, para encarar juntos el destino común de nuestras patrias.

El gran reto bolivariano de integración latinoamericana continúa vigente. La integración de nuestras fuerzas y nuestros recursos debe superar la frialdad de lejanos esquemas programáticos, para transformarse en beneficios concretos para nuestros ciudadanos.

Señor Presidente, señores Parlamentarios:

Hoy, desde todas partes nos llegan señales esperanzadoras de transformaciones positivas. Por primera vez en su historia, América del Sur es íntegramente democrática. En Europa caen muros y los pueblos que estaban divididos por la imposición de la fuerza vuelven a reencontrarse. Mientras estos acontecimientos inéditos se producen en otros Continentes, no debemos perder tiempo para estrechar los lazos entre nuestros países, y contribuir, con nuestra propia identidad, a cumplir con el legado que nos dejaron nuestros antepasados, construir la patria grande por la que combatieron Simón Bolívar y Bernardo O'Higgins, lograr el imperio de la ley como condición indispensable para la paz interna y externa que nos inculcó Andrés Bello, y consolidar una democracia eficiente, que asegure el desarrollo en libertad y con justicia social a que aspiran nuestros pueblos.

Muchas gracias.

En la VII Conferencia Regional del Empleo en América Latina y el Caribe

Santiago, 3 de diciembre de 1990

Sr. Michel Hansenne, Director General de la OIT;
Sres. Ministros del Trabajo de América Latina y el Caribe;
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de Chile;
Sr. Ministro del Trabajo y Previsión Social de Chile;
Sr. Director del Programa de Empleo para América Latina de la OIT;
Sres. Ministros presentes;
Sres. Directores de Planificación y Directores de Empleo de los países
de la Región;
Sr. Manuel Bustos, Miembro del Consejo de Administración de la OIT;
Sres. dirigentes de organizaciones de trabajadores y empleadores;
Autoridades nacionales e internacionales presentes:

Me es grato concurrir a esta sesión inaugural de la VII Conferencia Regional del Empleo en América Latina y el Caribe, y lo hago con especial interés. La realización de este evento en Chile constituye una demostración más de que nuestro país vuelve a ser un escenario importante para actividades que, como esta Conferencia, son hitos relevantes en la actividad internacional de la región.

Chile fue siempre un país con vocación regional, lo que se plasmó en numerosas iniciativas a las cuales pudimos contribuir como nación, entre ellas la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuya sede, como todos saben, se encuentra en Santiago. Dentro de ese contexto, este acto merece especial valoración, porque representa un signo de continuidad con aquella vocación de la cual nos habíamos apartado en los últimos años. Nos es grato hoy acogerlos en un país en democracia, que se reencuentra día a día con sus tradiciones que lo hicieron ocupar un lugar de

avanzada en América Latina y le permitieron ser un espacio abierto al debate intelectual, político y social sobre los grandes temas de la Democracia y el Desarrollo.

El tema del mercado del trabajo y, en particular, el del empleo, que convocan a esta Conferencia, son precisamente de los que en forma más directa se relacionan con este desafío.

Una sociedad que aspira al desarrollo y a la profundización democrática debe asegurar a sus miembros las mayores y mejores posibilidades de trabajo, de ocupación.

Para incrementar en forma persistente los niveles de ocupación, se requiere de inversión y desarrollo. En nuestra América Latina, la fuerza de trabajo se expande año a año a un ritmo tal, que nos exige un gran esfuerzo de creación de riquezas para asegurar a los jóvenes que ingresan al mercado laboral la esperanza de progreso personal y familiar a la que tienen derecho.

Para que se expanda la inversión con persistencia en el tiempo, no hay mejor clima que el que proviene de la equidad social y el que aseguran los consensos básicos entre los diversos actores de la comunidad. Sin estos componentes tan fundamentales, terminan por cuestionarse las bases mismas de la democracia y la estabilidad social, indispensables para avanzar en un proceso de desarrollo.

Democracia, desarrollo y equidad no pueden mirarse como objetivos separados, ni menos como contrapuestos. Muy por el contrario: se trata de objetivos que se necesitan recíprocamente.

Enfrentar los desafíos del mercado laboral y de la generación de empleos no es un problema sencillo. No se trata únicamente de aumentar la oferta de ocupaciones, sino también que ellas sean ocupaciones de alta productividad, ya que esto asegura que sean estables y que permitan generar los ingresos necesarios para una calidad de vida digna y un porvenir de progreso.

Esto supone, por ejemplo, que a menudo sean necesarios procesos de reconversión productiva, o diversos otros tipos de cambios, que resultan ineludibles ante las nuevas condiciones económicas internas o externas y ante las exigencias de la competitividad y la evolución tecnológica. Ello implica realizar esfuerzos sociales muy rigurosos que requieren ser abordados con el máximo consenso.

La efectiva y plena modernización de una sociedad sólo se alcanza si surge de una base de legitimidad cultural y social. Tal legitimidad sólo puede alcanzarse en un régimen democrático. Las modernizaciones autoritarias pueden lograr resultados materiales, pero difícilmente serán fuente de valores compartidos en la comunidad nacional.

Los temas que ustedes analizarán en esta Conferencia, el del empleo, el mercado laboral, la institucionalidad del mercado del trabajo, el pago de la deuda social, son factores directamente aso-

ciados a la estabilidad de una democracia y a la persistencia de su capacidad de desarrollo, y como tal involucran de manera muy decisiva la participación de todos los actores sociales y políticos.

Para que esta participación sea fructífera, se requiere no sólo coincidir en un diagnóstico, sino sobre todo en una concepción del desarrollo, en una visión del porvenir y de los desafíos de la propia sociedad y de su entorno internacional.

Lo anterior exige que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y trabajadores, los equipos técnicos y, en general, todos quienes intervienen en la formulación de las políticas, estén siempre atentos a la evolución de las nuevas tendencias que, en sus diversas dimensiones, caracterizan el mundo del trabajo y la vida económica. Esto asegura una sensibilidad a los cambios y una capacidad de ir adaptándose a la velocidad con que hoy se transforman las relaciones económicas y técnicas, así como a las consecuencias sociales que de ellas derivan.

Asistimos a cambios notables en la composición y configuración de los mercados de trabajo. Cada vez se hace más necesario considerar su heterogeneidad, así como la influencia que ejerce sobre ellos, en las realidades nacionales, la creciente integración económica mundial.

Asimismo, la incorporación cada vez mayor de la mujer y de los jóvenes, los fenómenos de la llamada terciarización moderna, el surgimiento —también creciente— de modalidades no tradicionales de trabajo, como las de tipo transitorio y tantos otros elementos, requieren ser considerados con atención y rigor.

Todos estos desafíos son exigencias del presente, y su adecuada resolución constituye una de las claves para que nuestros países ingresen al nuevo siglo en condiciones que permitan mirar el futuro con optimismo.

Uno de los temas a los cuales ustedes dedicarán parte importante de su reflexión, es al de la institucionalidad laboral. Se trata de un área de gran relevancia, estrechamente ligada al problema del crecimiento y la ocupación. No puede concebirse una disociación entre ambos temas. Por eso es necesario garantizar que las regulaciones que rigen las relaciones de trabajo, junto con asegurar una adecuada equidad social, constituyan un instrumento que armonice con los objetivos de crecimiento y estabilidad de los empleos. Sabemos que esta armonización no es fácil, pero también sabemos que es absolutamente indispensable.

En Chile estamos llevando a cabo un esfuerzo serio por asegurar una estabilidad laboral que establezca las reglas del juego básicas para que trabajadores y empleadores se relacionen en condiciones de equiparidad y de libertad. Creemos que así se contribuye a gene-

rar condiciones adecuadas para promover una cooperación en los objetivos comunes de unos y otros. En particular nos interesa que esta legislación permita una adecuada y razonable seguridad para el trabajador en su puesto de trabajo, así como garantizar el progreso de las empresas. Estamos convencidos de que esa seguridad no es contradictoria con la necesidad de adaptación y flexibilidad de la empresa a las condiciones del cambio técnico y de la competencia. Al contrario, si ambos propósitos se combinan con creatividad, se permite que todos los factores que concurren a la actividad de las empresas puedan ser usados con la máxima productividad.

Una institucionalidad laboral participativa, flexible, y sobre todo reconocida como legítima por quienes harán uso de ella, trabajadores y empresarios, es sin duda un poderoso instrumento para la generación de empleos, y también para asegurar la paz social y el desarrollo.

Me alegra ver que en vuestra agenda de trabajo esté el tema de la deuda social. El pago de dicha deuda social es uno de los objetivos fundamentales que inspiran a mi gobierno. El próximo año daremos un paso importante en la dirección que nos hemos trazado en materia de vivienda, salud, educación y capacitación de jóvenes. El camino es largo y sabemos que no exento de dificultades. Lo importante es caminar con decisión. Lo que está en juego es la dignidad de nuestros compatriotas.

Todos estos desafíos serán parte de vuestros debates. La oportunidad de diálogo es muy significativa para Chile, como para toda la región, ya que las materias que van a discutirse son parte de nuestra agenda de este tiempo. Tenemos un deber social y político de diseñar las soluciones al problema del empleo, de la pobreza y la deuda social.

Esto es también un deber ético. El trabajo es fuente de dignidad humana y es la manera como el hombre logra su mayor realización. Por eso éste es uno de los campos en que se juega no sólo la dimensión material del desarrollo, sino también su dimensión más integral.

La calidad moral de una sociedad tiene sin duda mucho que ver con su capacidad de ofrecer, a todos sus miembros, una oportunidad digna de realización a través de su trabajo.

Hago votos porque esta Conferencia tenga éxito y que de ella surjan conceptos, estrategias e instrumentos que nos permitan a todos, en los años que vienen, hacer realidad una sociedad que ofrezca a los habitantes de nuestro continente y, en especial, a sus trabajadores, las posibilidades de realización, progreso y justicia que todos anhelamos.

Al inaugurar en este acto esta Conferencia, me es grato, en nombre del gobierno de Chile, dar la bienvenida a los señores mi-

nistros del Trabajo de las naciones de América Latina y el Caribe que aquí se reúnen, y hacer votos para que las deliberaciones de vuestro Congreso sean fructíferas y vuestra permanencia en Chile sea grata.

Muchas gracias.

En banquete ofrecido al Presidente de Estados Unidos de Norteamérica, George Bush

Santiago, 6 de diciembre de 1990

Excelentísimo Sr. Presidente:

Para el pueblo de Chile y su gobierno es motivo de satisfacción recibir en nuestra tierra al Presidente de los Estados Unidos, nación con la cual nos une una larga amistad.

En este tiempo crucial de la humanidad y de nuestra patria, vuestra visita es ocasión propicia para reforzar los signos positivos que caracterizan la historia que se está escribiendo al finalizar este siglo.

Estos signos, Sr. Presidente, encuentran su más profundo sustento en los principios que inspiraron a los fundadores de nuestras repúblicas.

Aunque pertenecemos a distintas tradiciones culturales, tenemos en común haber nacido forjando un mundo nuevo bajo el signo de la libertad como razón de ser de nuestras naciones. Al afirmar "como verdades evidentes, que todos los hombres nacen iguales, dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables", que los gobiernos "derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados" y que la convivencia colectiva ha de sujetarse a las normas e instituciones democráticas, nuestros próceres consagraron los valores sobre los cuales vuestra patria y la nuestra han construido su historia.

Desde nuestra constitución como pueblos libres, el destino nos ha ligado. A veces con comprensión y respeto, a veces con distancia. El pasado nos enseña que nuestra relación ha sido fructífera cuando hemos sido fieles, ustedes y nosotros, a esos valores que dan fundamento a nuestra identidad. Son ellos los que hoy nos permiten reunirnos para construir el futuro que soñaron nuestros padres y que debemos legar a nuestros hijos.

Una ola democratizadora recorre nuestro mundo.

Este hecho, que no puede sino llenar de alegría el corazón de todos los hombres de buena voluntad, ciertamente refuerza los vínculos entre nuestros países, y nos invita a renovar el empeño en la tarea de vivir la democracia y cuidarla con esmero.

Chile ha sido durante los últimos años un signo de esta nueva época.

Su historia reciente es la de un pueblo que ha luchado por la paz con las armas de la paz, que ha amado con tesón la libertad.

Los chilenos nos sentimos orgullosos de retornar a la tradición democrática que nos distinguió durante 150 años. El proceso que estamos viviendo no ha sido fruto de un hecho fortuito, sino de la madurez de una nación que ha privilegiado el entendimiento por sobre la confrontación, el diálogo por sobre la fuerza. El pueblo chileno aprendió con su propio dolor el costo de la intransigencia y el dogmatismo.

Este ha sido un largo andar que ha ido convocando a quienes hoy estamos en el gobierno y en la oposición, lo cual nos ha permitido avanzar en la reconstrucción de nuestra democracia y en la solución de los problemas más apremiantes de nuestros compatriotas.

Nuestro primer empeño ha estado dedicado a promover una efectiva reconciliación nacional. Para conseguirlo es preciso cerrar las heridas que aún permanecen abiertas. Por estas razones, seguiremos haciendo todos los esfuerzos para buscar la verdad y hacer justicia, en la medida de lo posible, sobre todos los casos de violación a los derechos humanos, incluidos por cierto los de Ronny Moffit y Orlando Letelier.

Por otra parte, estamos respondiendo al enorme desafío de impulsar una estrategia de desarrollo que nos permita en democracia, con libertad y justicia social, avanzar en el camino del crecimiento económico y superar la pobreza.

La senda que hemos elegido es la que se ajusta a nuestra vocación. Es cierto que impone limitaciones a nuestra acción, lo cual resulta difícil de entender para algunos observadores de la transición chilena. Pero es precisamente este delicado equilibrio entre continuidad y cambio el que nos permite tener la certeza de que estamos construyendo un sistema sólido para los chilenos de hoy y de mañana.

El documento firmado en París hace dos semanas, que formalmente pone fin a la guerra fría, nos revela que éste es un momento propicio para consolidar nuevas formas, flexibles, creativas y solidarias, para enfrentar los desafíos del presente. Nos invita a enfrentar con mejores energías los grandes problemas que hoy afligen a la humanidad a superar la pobreza que afecta a millones de personas

en el planeta; a preservar el medio ambiente para nuestras generaciones y las del futuro; a combatir el narcotráfico que flagela especialmente a los jóvenes; a la desnuclearización y la proscripción de armas químicas y bacteriológicas que permanecen como una amenaza a la sobrevivencia de la Tierra.

Hoy se abren perspectivas de cooperación, insospechadas hasta hace pocos años, donde América Latina tiene un rol activo que cumplir. Los países de nuestra región nos encaminamos positivamente hacia una integración real y no puramente de intenciones, a través del fortalecimiento de la confianza entre nuestras naciones y la materialización de nuevas formas de relación bilateral y multilateral, contribuyendo así a la seguridad global.

En este nuevo escenario mundial, la crisis del Golfo Pérsico es un conflicto que perturba y ensombrece a la humanidad. Sin embargo, la respuesta de Naciones Unidas, que Chile apoya sin limitaciones, revela que hoy existe como nunca una voluntad concertada para hacer respetar el orden jurídico internacional como fundamento de la convivencia entre las naciones.

No puedo dejar de expresarle, estimado Sr. Presidente, que valoramos mucho el decidido esfuerzo que usted personalmente, y su gobierno, están realizando para defender los principios que han sido violentados por esta condenable invasión y, al mismo tiempo, alcanzar una solución pacífica de esta crisis. Hacemos votos porque se vean culminados por el éxito, ya que ello expresa la aspiración de paz que impera en la humanidad.

Los cambios en la economía internacional también ofrecen nuevas posibilidades para nuestros países.

A nivel regional crece el consenso sobre la necesidad de descentralizar la asignación de recursos, eliminar las trabas al desenvolvimiento del sector privado, fomentar el libre comercio y la competitividad internacional.

En este contexto, el crecimiento económico depende en gran medida de la creatividad, el esfuerzo y la capacidad de innovar de las personas.

Chile ha iniciado ese camino y está dispuesto y preparado para profundizarlo.

Pero en un mundo interconectado, nuestra voluntad y nuestro esfuerzo son condiciones necesarias, pero no suficientes.

Requerimos, también, que las naciones más industrializadas se comprometan en los hechos, y no sólo en las palabras, con la libertad de comercio y una genuina apertura de los mercados.

Hoy día nuestras exportaciones encuentran importantes trabas en los mercados del mundo desarrollado. Tal como usted señaló hace pocos días en México, "los subsidios que distorsionan el co-

mercio y las barreras artificiales, crean ganadores y perdedores antes de que se inicie el juego”.

En estos mismos días, la vigencia de estos principios se está poniendo a prueba en la Ronda Uruguay del Gatt. Somos solidarios con todos los países que aspiran a un comercio verdaderamente libre.

Chile tiene vocación exportadora, y por eso queremos competir con la calidad de nuestros productos y no con las burocracias que ganan mercados por decreto.

Cuando el Presidente Eisenhower estuvo en Chile, destacó ante nuestro Congreso Nacional el valor que su país otorgaba al esfuerzo de otras naciones libres para “afianzar su prosperidad mediante la reducción de las barreras al comercio y el máximo uso de los recursos” y añadió —en palabras que serían precursoras— que “un mercado común debe estar destinado, no sólo a aumentar el comercio dentro de la región, sino a elevar el nivel del comercio mundial”.

Treinta años después, la iniciativa para las Américas propuesta por usted, Sr. Presidente, abre perspectivas interesantes para que ese anhelo se concrete. Su visión de una zona de libre comercio en todo el Continente se ajusta a las aspiraciones e intereses de americanos del Norte, del Centro, y del Sur. Esta puede ser una oportunidad histórica. No la dejemos pasar. Se requiere definir plazos, mecanismos y criterios, y tener la flexibilidad para proceder gradualmente, permitiendo que las economías que están preparadas para abrirse e integrarse lo hagan pronto, ya sea de modo bilateral o multilateral. Chile desea incorporarse activamente a este proceso, conforme a nuestra política de inserción en los mercados internacionales.

Señor Presidente:

Durante los últimos años, las relaciones de nuestros países se vieron deterioradas por dolorosos sucesos que lamentamos chilenos y norteamericanos.

Sin embargo, las condiciones que suscitaron ese distanciamiento han cambiado sustancialmente. Desde el inicio del gobierno democrático, hemos realizado esfuerzos conjuntos para remover los obstáculos que dificultaron las normales relaciones entre Estados Unidos y Chile; ello se ha traducido en resultados concretos.

Los contactos permanentes entre nuestros gobiernos y la reunión que sostuvimos hace dos meses en la Casa Blanca, nos han permitido avanzar en la solución de los problemas del pasado y sentar las bases para una nueva etapa de colaboración.

Hemos recibido con satisfacción la revocación de todas las situaciones que impedían una plena relación bilateral: la recuperación de los beneficios de seguros de inversión de la Corporación de Inversiones Privadas de Ultramar (OPIC); el regreso al sistema generalizado de preferencias (SGP) y el levantamiento de la enmienda Kennedy. Ello facilita que las cuestiones que restan puedan ser enfrentadas dentro del nuevo espíritu de entendimiento y comprensión que estamos construyendo.

Por otra parte, valoramos como expresión de este nuevo espíritu la aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos, de un programa de ayuda a nuestro país en salud y en vivienda, así como la firma de un acuerdo marco de comercio que ya está operando para resolver nuestras diferencias en el campo comercial y favorecer el incremento de las inversiones.

Señor Presidente:

Su presencia en Chile marca el inicio de un nuevo período en las relaciones de nuestros países.

Un período en que la imaginación y la creatividad podrán desplegar sus fuerzas sin ajenas restricciones; un período en que el amor a la libertad no tendrá que derribar muros, sino construir la esperanza; un período en que nuestras naciones buscarán la justicia y la solidaridad. Esa es nuestra voluntad, que hoy expresamos en palabras del Presidente Lincoln: "Sin rencor hacia nadie, con generosidad hacia todos, con la firmeza de la razón, la misma razón que Dios nos ha dado, caminemos hacia terminar la tarea que hemos comenzado".

Señoras y señores:

Los invito a brindar por el Presidente Bush, por el éxito en su valerosa búsqueda de la paz en un mundo más humano, por el pueblo norteamericano y por la amistad entre nuestras naciones.

Que Dios bendiga a las Américas.

Ante la Cumbre de Presidentes Centroamericanos en El Salvador

San Salvador, 17 de julio de 1991

Excelentísimos señores Presidentes y distinguidas esposas;
Señoras y señores:

Deseo, en primer lugar, agradecer muy sinceramente la invitación que me han hecho los Excelentísimos Presidentes de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, para estar presente en esta Reunión Cumbre de Jefes de Estado de América Central y Panamá.

Es para mí un muy alto honor que recibo en nombre de mis compatriotas, como testimonio de afecto hacia nuestra patria.

Es la primera vez, en largos años, que un Presidente de Chile realiza una visita oficial a estas tierras. Ella ocurre en un momento significativo de la historia de nuestro continente latinoamericano, cuando vivimos un esperanzador proceso de encuentro con la democracia, superando un pasado de dictaduras y populismos que dejó profundas secuelas en nuestros pueblos.

En este tiempo nuevo, cuando soplan aires de libertad en todas las latitudes de la tierra, nuestras naciones están haciendo su propio aporte a la creación de un nuevo orden internacional. Y ello ocurre no por una mera casualidad, sino como consecuencia de un profundo anhelo de nuestros pueblos que se ha expresado en su lucha para alcanzar la paz, la libertad, la justicia y el progreso.

Ese ha sido el signo de la experiencia chilena durante los últimos años. Nuestro país aprendió, en el dolor, que es más lo que nos une que lo que nos separa. Que para transitar del autoritarismo a la democracia era necesario dejar atrás la confrontación, guiados por una firme voluntad de reconciliación y reencuentro nacional.

Ha transcurrido más de un año desde que asumiera el gobierno democrático y hemos restablecido un clima civilizado en nuestra convivencia. Para ello ha sido indispensable enfrentar el problema de las violaciones a los derechos humanos acontecidas en los años pasados. Con este fin constituimos la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, integrada por personas de diferentes pensamientos políticos y reconocido prestigio moral que, tras nueve meses de ingente investigación, entregó un informe que establece la dolorosa verdad sobre lo sucedido. Ahora estamos abocados a devolver a las víctimas su dignidad, a reparar a sus deudos en aquello que sea posible y a buscar la justicia, dentro de las posibilidades que nos brinda el actual marco legal. Sabemos que las heridas son lentas de curar, pero estamos recorriendo el camino que nos conduce a ello, con la voluntad y la esperanza de la inmensa mayoría del país.

Pero la recuperación de la democracia para los chilenos no sólo significa restaurar la convivencia y volver a la normalidad institucional. Significa también hacer realidad un futuro y un sueño común: hacer de Chile una nación desarrollada, que acoja a todos sus habitantes y le brinde las posibilidades de una vida mejor.

Entendemos que la democracia no sólo significa las ventajas de gozar de la libertad y tener posibilidad, toda la comunidad, de participar en la construcción del destino común. Significa también la responsabilidad de respetarnos los unos a los otros y de asumir cada cual su parte en esa tarea común.

Por eso estamos dando un decidido impulso al crecimiento económico del país, buscando, al mismo tiempo, compatibilizar ese crecimiento con criterios de equidad, de manera que el empeño común y la participación de todos haga de nuestra patria un hogar compartido, próspero, justo y solidario.

El pueblo chileno ha hecho un enorme esfuerzo para lograr una economía sana, reducir la inflación y establecer reglas claras en nuestras relaciones, en el marco de una economía abierta.

Sabemos que el crecimiento económico depende en gran medida de la creatividad, la disciplina y la capacidad de innovar de las personas. Pero también sabemos que en el mundo de hoy, cada vez más interdependiente, los esfuerzos de un pueblo son necesarios, pero por sí solos no son suficientes.

Por eso la difícil pero hermosa tarea de construir la paz, la democracia y el progreso en nuestras naciones, requiere más que nunca que enfrentemos unidos esta tarea común.

La situación actual de Centroamérica, donde reconocemos los mismos valores y aspiraciones que han estado presentes en nuestro país, nos parece extraordinariamente propicia para avanzar en nuevos entendimientos de mutuo beneficio.

No podemos sino elogiar las valientes medidas que en cada

nación se han adoptado en la búsqueda de la reconciliación nacional y regional, así como los compromisos orientados al cese de todo tipo de hostilidades, al apoyo de los procesos de democratización, la promoción de elecciones libres, la suspensión de ayuda a fuerzas irregulares, su incorporación a la vida política, el no uso del territorio para agredir a otros Estados, y tantas otras que se enmarcan en un espíritu de conciliación que abre nuevas perspectivas a esta región. La historia ha demostrado que los logros sustentados en la violencia o en la imposición de mecanismos diferentes al diálogo, son efímeros.

Por ello valoramos y apoyamos el proceso de pacificación en marcha y hacemos votos por el éxito de los esfuerzos que se siguen haciendo en El Salvador y Guatemala, a la vez que expresamos nuestro reconocimiento a la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, así como a países amigos, por su labor en el logro de la paz en esta región.

Excelentísimos señores y señoras:

El nuevo escenario internacional demanda de nuestros países una actitud decidida y realista en aras de una creciente integración.

Debemos volver a marchar juntos —como ocurrió en el pasado— para contribuir a este proceso en nuestra América.

Aspiramos a llevar a la práctica esta voluntad de cooperación, buscando aumentar efectivamente el intercambio comercial, técnico, científico y cultural entre nuestras naciones.

Tenemos acuerdos vigentes, como los que hemos convenido en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, Aladi, y los que hemos suscrito con varios países de la región. Sin perjuicio de que ellos puedan perfeccionarse o complementarse, es necesario que nos esforcemos por darles contenido concreto. Chile aspira a intensificar su intercambio y cooperación con vuestros países, y para ello abriremos una Oficina Comercial en Centroamérica.

En este espíritu, me permito manifestarles nuestra mejor disposición para cooperar, en la medida de lo posible, con el esfuerzo de reconstrucción y desarrollo en que vuestra región está empeñada.

Existen numerosas áreas de interés común que incluyen, entre otras, la administración pública, la seguridad ciudadana, la gestión económica, la investigación científico-técnica, la educación y la cooperación interuniversitaria.

En todas estas áreas es posible acordar programas conjuntos de asistencia técnica, capacitación de recursos humanos, proyectos de investigación o intercambios y cooperación empresarial, a través del estímulo a la participación del sector privado en proyectos de

inversión, comercio o desarrollo de mutuo beneficio. En esta línea estamos trabajando y esperamos que sea una realidad en el corto plazo.

El documento que acabamos de suscribir es un paso constructivo, es un punto de partida de un esfuerzo decidido en esa dirección.

Las exitosas experiencias de integración que se han ido consolidando en otras regiones del mundo durante los últimos años, deben ser un incentivo para modernizar nuestras economías, propiciar la apertura externa y fortalecer nuestra participación en el nuevo contexto internacional.

Los significativos pasos que Centro América y Panamá están dando para complementar áreas de sus economías y movilizar sus esfuerzos en la búsqueda de nuevas formas de integración, nos indican que, sin desconocer las dificultades, con realismo y voluntad, es posible avanzar por este camino.

Esta es la empresa que convoca a nuestros pueblos y a los hombres y mujeres de buena voluntad, porque ella significa hacer de nuestro continente un lugar que sea capaz de acoger amablemente a todos sus habitantes.

Estando hoy día en esta tierra, reunido con los Presidentes de las naciones de esta región, he conocido más de cerca sus anhelos y sus esfuerzos. He querido compartir, en esta Cumbre, la fe de un pueblo que ha amado con tesón la libertad y que ha luchado por la paz con las armas de la paz. Nuestra experiencia y la que en esta región se está desarrollando nos permiten confiar en que efectivamente podemos construir este futuro de paz, justicia y libertad que merecen nuestros pueblos.

Permítanme terminar expresando el gran honor que constituye para mí haber tenido la ocasión de estar presente en esta Cumbre tan fructífera, en que los pueblos de Centroamérica y Panamá han demostrado su capacidad de entendimiento y de avanzar en la búsqueda de su integración, de su progreso y de la consolidación de su democracia y de su justicia en las relaciones de sus pueblos. Los felicito por el trabajo que ustedes han realizado, me congratulo de estar aquí, les agradezco la oportunidad que me han dado, la cual estimo como una señal del aprecio que en esta parte de nuestra América se profesa a nuestra patria, a Chile. Saben ustedes que Chile también les profesa un gran cariño.

Muchas gracias.

En inauguración de Cumbre Iberoamericana

Guadalajara, 18 de julio de 1991

Señor Presidente de los Estados Unidos de México;
Su Majestad Juan Carlos I;
Señores Jefes de Estado y de Gobierno;
Señor Secretario General de Naciones Unidas y representantes de organismos internacionales;
Señoras y señores:

Estamos aquí reunidos, en esta generosa tierra mexicana, los representantes de numerosas naciones. Pertenece a una comunidad que se encuentra en el umbral de conmemorar cinco siglos de historia compartida, de una historia común que ha impreso su sello distintivo en nuestros valores y en nuestra cultura. Somos también una comunidad que, porque tiene una tradición que está viva, puede forjar en común el futuro que queremos.

Nuestro origen marcó el inicio del Mundo Moderno, período que universalizó la historia, ligando así el destino de todos los hombres. Al finalizar el siglo XX, vivimos la culminación de un proceso de interrelación mundial iniciado a fines del siglo XVI.

En nuestro tiempo, más que en ninguno de los grandes momentos de estos cinco siglos, más que en la era de los descubrimientos o de las Revoluciones Nacionales, América Latina participa activamente en las tendencias fundamentales del mundo.

La primera de ellas es el avance asombroso de la causa de la libertad. La democracia se consolida en el mundo entero como el sistema capaz de expresar la libertad de cada ser humano. ¡Con qué satisfacción podemos hoy reunirnos en este foro los mandatarios de la soberanía popular! Son nuestros pueblos los que gobiernan. Esta comunidad, junto a otras, ha dibujado el mapa de la libertad y de la

democracia en el mundo, y nuestra unión es también garantía de su permanencia.

Pero debe ser claro para todos que la vigencia de la libertad sólo estará garantizada en la medida en que se creen condiciones de justicia, lo que impone el apremiante desafío de derribar el muro de la pobreza y conquistar así la dignidad de los habitantes de nuestras naciones.

Esa dignidad significa incorporar a todos a los beneficios de la modernidad, así como imprimirle a ésta un sustrato valórico que implique el respeto del hombre y de la naturaleza, de modo que no sólo signifique elevar el nivel de vida, sino también cuidar la calidad de vida.

Esta es la gran meta que debe definir nuestros instrumentos en el escenario forjado por la creación de un nuevo orden internacional.

Nuestra comunidad será, al término de este siglo, una zona poblada, con más de 500 millones de habitantes, repartidos en dos continentes y tres océanos. Tenemos una enorme variedad de recursos naturales, algunas de las más grandes cuencas hidrográficas, las mayores reservas de la biodiversidad. Tenemos una enorme riqueza humana cuya capacidad hoy día está destinada a crear inteligencia.

Compartimos un patrimonio humano, natural y cultural que nos permite incorporarnos y participar de las profundas transformaciones técnicas y económicas del mundo contemporáneo. Pero es fundamental hacerlo en conjunto. Por eso, si España y Portugal se volcaran exclusiva y excluyentemente hacia la Comunidad Europea y si América Latina se encerrara en la autarquía continental o en un tercermundismo rezagado, las opciones de enriquecimiento de las relaciones internacionales que ofrece nuestra comunidad serían irrelevantes.

La lucha por el crecimiento económico en el cual estamos empeñados requiere también del desarrollo científico y tecnológico para agregar inteligencia a nuestros productos naturales, para hacer más eficiente nuestra gestión pública y privada, para iniciar nuevas líneas de producción y de servicios, así como para abandonar definitivamente un tipo de desarrollo que no respeta ni la ecología natural ni la humana.

Somos responsables del medio ambiente global, que exige una concertación planetaria, y también de la crisis ambiental que está en la puerta de nuestros hogares. La enumeración de sus manifestaciones es larga y por todos conocida.

Somos responsables también de asumir las graves carencias sociales que afectan a nuestros pueblos, especialmente a nuestros niños y jóvenes.

La Comunidad Iberoamericana, porque es rica en su unidad, es

también una realidad abierta al mundo. Ella es y quiere ser una comunidad con vocación de servicio universal, agente de desarrollo económico, de intercambio y de cooperación, puente entre los grandes bloques económicos que se están formando y garantía de un sistema multilateral fundado en la ventaja comparativa, en una regulación igualitaria y transparente.

Por ello es que la Comunidad Iberoamericana está capacitada para contribuir activamente en el diseño de un nuevo orden internacional basado en el desarrollo compartido. El imperio del derecho en las relaciones internacionales, el fortalecimiento y renovación del Sistema de Naciones Unidas para promover y mantener la paz, así como para construir un nuevo orden ecológico internacional, son algunas de las grandes tareas que queremos asumir.

Creemos firmemente en la contribución iberoamericana en los organismos internacionales. Pensamos que un mundo cada vez más interdependiente, encontrará en ellos el lugar donde enfrentar y resolver los temas que más nos preocupan. Para ello debemos renovar y reforzar los organismos multilaterales y regionales, y especialmente las Naciones Unidas, otorgándoles capacidad para anticipar, prevenir y resolver conflictos, combatir la extrema pobreza, definir estrategias de desarrollo económico y social sustentables y, sobre todo, defender la democracia.

Muchas gracias.

Ante el Parlamento argentino

Buenos Aires, 1° de agosto de 1991

Señores parlamentarios:

Para el Presidente de Chile es un honor muy significativo ser recibido por el Parlamento argentino y poder compartir con sus miembros algunas reflexiones sobre la hora que viven nuestros pueblos hermanos.

También fui parlamentario y tuve el honor de presidir el Senado de mi país. Como demócrata, pienso que el Parlamento es el espejo de toda la nación, el órgano de expresión natural e institucional de las distintas corrientes, aspiraciones y necesidades de un pueblo. Es aquí donde la patria, en su diversidad, construye su unidad.

Tanto en Chile como en Argentina, la actividad parlamentaria ha experimentado, en años recientes, serios y graves quebrantos. Nuestros regímenes constitucionales fueron interrumpidos por gobiernos autoritarios que ejercieron el poder sin los contrapesos que la democracia pone al Ejecutivo, y negando los mecanismos de participación ciudadana.

La crisis de la democracia en nuestras naciones fue, en gran medida, desenlace de un proceso de polarización ideológica y política. El afán de muchos de cambiarlo todo o la resistencia de otros a todo cambio, cerró las puertas al diálogo constructivo y abrió el camino a la violencia. En ese ambiente de confrontación cerrada, en el que los proyectos ideológicos contrapuestos pesaban más que la realidad social y que las necesidades concretas de nuestros pueblos, la democracia hizo crisis y fue sucedida por regímenes autoritarios que usaron la fuerza, la restricción de las libertades y la negación de la participación para imponer sus propios modelos.

Restablecido en nuestras naciones el imperio del orden consti-

tucional democrático —antes en Argentina, después en Chile— estamos dejando atrás largas décadas marcadas por los dogmatismos que nos llevaron a la división y al odio. En ambos países procuramos crear un clima de paz social, en donde el diálogo, la participación y el común anhelo de enfrentar con éxito los grandes desafíos que los nuevos tiempos nos imponen, ponen un sello de moderación a las naturales diferencias que existen en toda sociedad.

Para salir de las dictaduras fue necesario superar los debates ideológicos y establecer alianzas marcadas por la común adhesión a los valores democráticos.

Si fuimos capaces de unirnos para recuperar la libertad, ahora debemos hacerlo para enfrentar con éxito las grandes tareas que tenemos por delante: consolidar la plena vigencia de las instituciones democráticas, impulsar el desarrollo económico con justicia social y avanzar en los caminos de cooperación e integración que la nueva realidad internacional de fines de siglo nos plantea como imperativos para el progreso de nuestros pueblos.

El pasado reciente nos enseña que la estabilidad de las instituciones es requisito fundamental para el respeto de los derechos de todos. Ello supone admitir que nunca más los medios puedan divorciarse de los fines. La violencia no es el camino para la paz; el dogmatismo no es el camino para el diálogo; la confrontación no es el camino para eliminar conflictos.

Hablar de instituciones es hablar de normas generales, justas y adecuadas a la sociedad. Instituciones y Derecho son caras de la misma moneda. Fuera del marco del derecho podrá haber luchas de poder, relaciones de fuerza, juegos de intereses; pero no política concebida como instrumento al servicio del bien común.

Es este contexto de estabilidad institucional el que nos permite enfrentar con eficacia nuestro segundo gran desafío: promover el desarrollo económico de nuestras naciones y caminar simultáneamente hacia una mayor justicia social. Son también derechos humanos fundamentales el derecho a una vida digna, a la educación, a la salud, a la vivienda. Tenemos que abordar con renovados instrumentos el grave problema de la pobreza. Ella requiere, por una parte, del crecimiento sostenido de nuestras economías; y, por otro, de una eficaz acción del Estado que permita a los más desposeídos incorporarse a los beneficios del desarrollo. Ello es un imperativo ético, a la vez que una exigencia de eficacia. No seremos competitivos en la economía mundial con algunos sectores modernizados y otros, los mayoritarios, sumidos en la pobreza. Si el sector privado tiene un papel fundamental en la creación de riqueza, el Estado lo tiene en la creación de riqueza humana. Invertir en las personas y, principalmente, en los más pobres, es deber ineludible del Estado contemporáneo.

El desarrollo económico con equidad es, por otra parte, un elemento indispensable para asegurar una paz sólida y estable, tanto al interior de cada uno de nuestros países como del Continente entero.

Pero en el mundo contemporáneo no hay, por lo general, posibilidades reales de crecimiento económico importante sin cooperación internacional. Pasaron los tiempos de los sueños autárquicos. Nuestro planeta, enormemente más poblado que el de nuestros padres, es paradójicamente muchísimo más chico, porque el abismal progreso de los medios de comunicación y de transporte, la veloz circulación de personas, noticias, ideas y mercaderías, el incremento del comercio internacional, hacen cada vez a los países más interdependientes los unos de los otros.

Esto es especialmente cierto entre naciones vecinas, como ocurre entre Argentina y Chile. Unidos por orígenes comunes desde el nacimiento de nuestras Repúblicas, separados por más de cinco mil kilómetros de frontera en su mayor parte cordillerana, con economías bajo muchos aspectos complementarias, nuestras patrias no han sabido aprovechar suficientemente en beneficio mutuo esta vecindad. Recíprocos celos, alimentados a veces por inconsultos desvaríos hegemónicos, han hecho durante más de un siglo de esa frontera motivo de discrepancias y conflictos, apartando nuestras relaciones del camino del entendimiento y la colaboración.

Ha llegado la hora de superar definitivamente esos obstáculos. Convencidos de que en estos días ni las más altas montañas separan a las naciones, nuestros gobiernos —seguros de interpretar a nuestros pueblos— estamos empeñados en la tarea de hacer que nuestra frontera no sea nunca más motivo de separación entre Argentina y Chile, sino que se convierta, con visión de futuro, en instrumento de unión y cooperación.

Tal es el sentido profundo del acuerdo que, sobre esta materia, suscribiremos mañana con el Presidente Menem. Removiendo de este modo un viejo lastre de nuestras relaciones, queremos poner ahora nuestro mejor empeño en impulsar el entendimiento y complementación de ambas naciones en la común tarea de nuestro desarrollo.

Existe hoy conciencia de que el desarrollo va de la mano con la apertura de las economías. Nuestros países y nuestra región lograrán éxito en sus metas de crecimiento en la medida en que nos incorporemos creativa y competitivamente al comercio mundial. Para ello es fundamental el proceso de integración que, con diversos matices y en diferentes grados, se está dando por todos los rincones del Continente. Vemos con satisfacción que se avanza en la coherencia económica necesaria para poder hacer realidad este proceso,

avance que se expresa en cambios significativos en las estrategias de desarrollo y en el grado de apertura de las economías.

En el nuevo contexto internacional, la articulación con las principales corrientes económicas del mundo constituye un imperativo que ningún país puede afrontar en forma individual. Los procesos de los grandes centros dinámicos de la economía mundial nos muestran un camino exitoso, donde la integración regional permite participar eficazmente en los mercados internacionales.

La integración, sin embargo, no es ni una fórmula mágica para la solución de nuestros problemas, ni una bandera retórica para agitar por motivos de buena crianza cuando se está visitando un país amigo. Es, más bien, un camino largo que requiere voluntad, realismo y flexibilidad.

Nuestros socios naturales en este proceso son, naturalmente, los países vecinos. El gran reto del momento es sentar las bases para lograr el desarrollo de economías complementarias entre nuestros países, logro que sin duda aceleraría nuestros respectivos desarrollos y redundaría en una sustantiva mejoría de las condiciones de vida de nuestros pueblos.

Compartimos con Argentina el anhelo de la integración no sólo en el aspecto económico. Entre dos países unidos tan profundamente por la geografía y por la historia, es natural que existan también otras expectativas de integración.

Desde que se iniciaran los procesos independentistas en América Latina, lazos de especial hermandad unen a Chile con la República de Argentina. Ella fue el refugio para nuestros patriotas, derrotados en su primer intento de emancipación. Desde Mendoza salió el Ejército Libertador que afianzó la independencia de Chile, con tal empuje que participó también en las campañas decisivas de la independencia del Perú. El gran patriota argentino, el Libertador José de San Martín, tiene un lugar de privilegio en la Historia de Chile.

Compartimos, desde entonces, sueños y aspiraciones que nos dan una identidad común. La cordillera de los Andes nos separa, pero también nos une ante un medio ambiente común que debemos preservar. Los temas de la ecología y de la conservación de los bienes naturales tienen un lugar destacado en nuestras conversaciones e instancias de intercambio. Cuando la polución, la explotación descontrolada y la depredación de los recursos naturales alcanzan proporciones que amenazan seriamente nuestros patrimonios nacionales, debemos reaccionar con políticas severas y compartidas a uno y otro lado de los Andes.

Señores parlamentarios:

Es de sentido común afirmar que estamos ante la consolidación de un nuevo orden internacional. Asistimos al afianzamiento de la democracia en distintos y apartados lugares del mundo. Vemos cómo las naciones se organizan progresivamente en grandes bloques económicos que les permiten enfrentar competitivamente los mercados internacionales. Por todas partes, la confrontación ideológica cede paso a la búsqueda de fórmulas que aseguren el bienestar y el desarrollo de las naciones.

En este contexto, nosotros, como políticos a los que nos ha sido encomendado el gobierno de nuestras naciones, tenemos la ineludible necesidad de privilegiar las instancias de cooperación entre Argentina y Chile, a fin de que el sueño de una América unida salga del dominio de la retórica y entre en el campo de la realidad.

En esta tarea todos tenemos una cuota que aportar, y el paso que hoy se da, de constitución de una Comisión Interparlamentaria Chileno-Argentina, es y debe ser un instrumento eficaz en la construcción de este futuro mejor.

Tengo el honor de ser acompañado en mi visita oficial a la República Argentina, por representantes del Parlamento chileno; senadores y diputados de gobierno y de oposición me acompañan, porque ésta no es la visita de un gobierno a otro gobierno, es la visita de la nación chilena a la nación argentina.

Esto es, sin duda, lo que nuestros pueblos esperan de nosotros y tienen derecho a demandarnos. Ellos quieren paz, respeto a la dignidad de las personas, acceso real al bienestar económico de la modernidad, justicia social. Avanzaremos hacia esas metas en la medida en que seamos capaces de consolidar y perfeccionar nuestra convivencia democrática, impulsar en nuestras naciones el crecimiento con equidad y cooperar eficazmente para superar las limitaciones de cada cual mediante caminos de integración que, aunando nuestros esfuerzos, nos ayuden a alcanzar los niveles de prosperidad a que aspiramos.

¡Dios nos ayude a conseguirlo!

Mensaje de fin de año a los chilenos

Santiago, 31 de diciembre de 1990

Compatriotas:

En la víspera del Año Nuevo, quiero hacer llegar a todos los chilenos, sea que habiten en el suelo patrio o en el exterior, un cordial saludo de paz y de esperanza. Este saludo va también dirigido a los extranjeros que viven y trabajan en nuestro territorio.

Al comenzar el año que termina, expresé que mi primera tarea como gobernante sería afianzar la unidad de los chilenos. Para ello llamé solemnemente a todos a que hiciéramos de éste el año del reencuentro nacional: reencuentro de Chile con su historia en la práctica de los valores democráticos de libertad, tolerancia, respeto a las personas y a las instituciones; reencuentro de Chile con el mundo; reencuentro de los gobernantes con el pueblo, sobre la base de su autoridad moral fundada en la capacidad de escuchar y servir a la gente y de dar ejemplo de entrega y generosidad; reencuentro del país con la verdad como único camino para cicatrizar las heridas del pasado y lograr la reconciliación nacional; reencuentro, en fin, de la paz basada en la justicia, de la libertad con la seguridad, del crecimiento económico con la equidad social.

Al concluir el año, podemos comprobar con satisfacción que en el curso de este período hemos avanzado sustancialmente en el camino entonces propuesto. El pueblo de Chile se está acostumbrando a vivir en libertad sin miedos, y al funcionamiento normal de sus instituciones democráticas. Un ánimo de entendimiento prevalece en la convivencia nacional, manifestado especialmente en la búsqueda de acuerdos entre gobierno y oposición, y entre trabajadores y empresarios. Nuestro país se ha reinsertado plenamente en el mundo y en los caminos de la cooperación internacional. Se ha

aliviado la condición de vida a los sectores sociales de menores ingresos mediante un aumento substancial de las remuneraciones y pensiones mínimas y de las asignaciones familiares, la reprogramación y condonación parcial de las deudas habitacionales, tributarias, agrícolas, de agua, de luz y de crédito universitario, y el incremento del gasto social en salud, educación y vivienda. Pese a las dificultades derivadas del ajuste que fue necesario aplicar para impedir un rebrote inflacionario y del alza del petróleo motivada por la crisis del Golfo Pérsico, la economía del país progresa sobre la base de reglas claras y estables, las inversiones aumentan y las expectativas para el nuevo año son promisorias. El gobierno ha sido fiel a su compromiso con el pueblo de Chile, escucha a todos los sectores y ejerce su autoridad con prudencia y firmeza, sin otra mira que el bien común de la nación, sin otro criterio que su apego a la verdad y a la justicia.

Estos hechos, cuya positiva significación nadie podría razonablemente subestimar, no deben, sin embargo, motivar ninguna especie de triunfalismo. Estamos recién empezando y nos queda mucho por hacer. Para que nuestra renaciente democracia se consolide, tenemos que cuidarla con esmero, paciencia y perseverancia, y crear condiciones de estabilidad, equidad y progreso para todos los chilenos, especialmente para los jóvenes y los más postergados.

En esta empresa es fundamental que todos los sectores de la nación se acostumbren a la convivencia democrática y se sometan a sus normas, obligatorias para todos, que claramente determinan los derechos y deberes de las personas, y las funciones, atribuciones y responsabilidades de las diversas instituciones del Estado.

Sobre esta base debemos proseguir, con prudencia a la vez que decisión, la tarea ineludible de esclarecer la verdad y hacer justicia, en la medida de lo posible, respecto de situaciones del pasado aún pendientes, o que constituyen heridas abiertas en el alma nacional, o que afectan gravemente el interés público o la confianza colectiva. Se equivocan quienes temen que este empeño se oriente a dañar el honor o la fama de determinadas instituciones o personas. El prestigio de las instituciones no puede ser afectado por las fallas individuales de algunos de sus miembros y el de las personas depende, en definitiva, de sus propias acciones.

Reitero una vez más mi profunda convicción de que sólo sobre la base de la verdad es posible construir una convivencia social pacífica y estable, en que imperen la confianza, el respeto mutuo y la amistad cívica, en vez del recelo, la odiosidad y la violencia. Ninguna presión ni amenaza, abierta o encubierta, me apartará de este camino.

Otra tarea que debemos encarar con decisión es combatir eficazmente la delincuencia y el violentismo. Para ello no sólo es necesario robustecer la capacidad de acción de Carabineros e Inves-

tigaciones, como lo estamos haciendo, sino también crear conciencia, en todos los sectores de la comunidad nacional, especialmente en el mundo juvenil, sobre la inutilidad e inmoralidad de las conductas violentistas; abrir perspectivas de vida y de trabajo a quienes se encuentran postergados, y comprometer la solidaridad de todos.

En 1991 redoblabaremos nuestra lucha contra la pobreza y por el crecimiento con equidad. Aumentaremos substancialmente la construcción de viviendas y de obras públicas. Construiremos nuevas postas y hospitales y mejoraremos la dotación y atención de los existentes. En el ámbito escolar, incrementaremos en 150 mil los almuerzos y desayunos y a 4 millones los textos gratuitos para alumnos de enseñanza básica, y otorgaremos 5 mil becas universitarias a estudiantes de escasos recursos. Nos esforzaremos, sobre todo, en capacitar a los jóvenes para el trabajo productivo, en crear nuevos empleos y en expandir la producción y el crecimiento económico del país. La clave para alcanzar el bienestar de las personas es asegurarles el acceso a trabajos dignos y productivos, cuyas remuneraciones se incrementen a medida que suba la productividad del trabajador y de la economía en su conjunto. Sólo a través de un crecimiento sostenido podremos llegar a proveer buenos empleos para todos los chilenos. Lograrlo es objetivo primordial de mi gobierno.

En este empeño, que exige asegurar los equilibrios económicos fundamentales y aumentar substancialmente el ahorro y la inversión, creemos indispensable conjugar, sin dogmatismos de ninguna especie, las iniciativas y aportes del sector privado con los esfuerzos del Estado. Las necesidades de inversión pública son muchas, pero los recursos presupuestarios son escasos. Esto aconseja complementar la inversión pública con la privada, mediante fórmulas razonables de asociación que consigan el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y el consiguiente crecimiento de la economía nacional.

También deberemos, en el año que viene, ahondar el proceso de democratización institucional. Desde marzo hasta ahora, el Congreso Nacional ha trabajado con ahínco junto al Ejecutivo en el estudio de numerosos proyectos de ley destinados a ir dando cumplimiento a nuestro compromiso programático con el pueblo de Chile, para hacer justicia, para pagar la deuda social, para mejorar la condición de los trabajadores, para impulsar el desarrollo y para abrir cauces de participación. Algunos de esos proyectos ya son leyes; otros están a punto de llegar a serlo. No faltan quienes reprochan de lentitud al proceso legislativo. Sin perjuicio de los reparos que nos merecen algunos mecanismos heredados que entraban ese trabajo y distorsionan la representatividad del Congreso, pienso que el debate en su seno es un precio necesario y a la larga positivo de la democracia, a fin de que las reglas de convivencia expresadas

en las leyes sean fruto de la más amplia participación de todos los sectores. Confío en que pronto quede aprobada la reforma municipal, de manera que en el año puedan constituirse, en todas las comunas, municipalidades elegidas por sufragio universal. Luego deberemos avanzar en iniciativas que el gobierno presentará para profundizar la regionalización y para reformar nuestro sistema judicial.

Como puede verse, las tareas que tenemos por delante son múltiples y difíciles, pero necesarias para el bien de Chile y de su gente. Constituyen un hermoso desafío, que nos compromete a todos y que exige de todos comprensión del proceso que estamos viviendo, de la imposibilidad de satisfacer simultáneamente todas las aspiraciones, por justas que sean, y del deber de cada cual de asumir su cuota de responsabilidad en el esfuerzo común.

Hago un formal llamado a todos los chilenos, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, trabajadores y empresarios, civiles y uniformados, para que cada uno, desde su particular situación y propio punto de vista, ayude a seguir avanzando en el camino iniciado. Se los demando, muy especialmente, para que nos esforcemos todos, con buena voluntad, patriotismo y espíritu generoso, por hacer del que comienza el año de la plena reconciliación nacional. Sólo así podremos alcanzar el Chile que queremos, unido, democrático, en proceso constante de superación y desarrollo, en que haya trabajo digno y progreso para todos y en que imperen la paz y la solidaridad.

Porque tengo fe en Chile y en su gente, confío en que, con la colaboración de todos, en el año que viene adelantaremos decisivamente hacia esa meta.

Pido a Dios que nos ayude y expreso a todos los chilenos y chilenas mis mejores deseos de felicidad, salud, paz y progreso para el Año Nuevo.

Buenas noches.

Con motivo del primer aniversario de gobierno

Santiago, 11 de marzo de 1991

La ocasión de cumplirse un año de las tareas de gobierno, es propicia para hacer un pequeño balance.

Como ustedes saben, y el país sabe, este gobierno tiene metas y plazos. El plazo son los cuatro años de su ejercicio, de su período constitucional. Las metas fueron definidas en las bases programáticas, en mi discurso al asumir el mando el 12 de marzo el año pasado, y en mi cuenta al Congreso Nacional, el 21 de mayo último.

Queremos la reconciliación y el reencuentro entre los chilenos, queremos perfeccionar nuestras instituciones democráticas; queremos vencer el flagelo de la pobreza, buscando la justicia social en nuestra patria; queremos el crecimiento y desarrollo económico y queremos la reinserción internacional de Chile en el ámbito mundial.

Hacia estas cinco metas se han encaminado los esfuerzos del gobierno durante el año. Yo diría que la última, la reinserción de Chile en el ámbito mundial, está ampliamente lograda. No hemos querido tener un papel protagónico o de vedette en el campo internacional. Hemos tenido una política internacional deliberadamente de bajo perfil, destinada a lograr ese objetivo: que después de haber sido Chile un país aislado políticamente en el concierto de las naciones, recuperara una participación permanente, fluida, de colaboración con el resto de las naciones, en los organismos internacionales y en el plano de las relaciones bilaterales. Creo que nadie que juzgue objetivamente podrá dejar de reconocer que esos objetivos se han logrado.

Hemos avanzado hacia la reconciliación nacional. No es un mérito que yo invoque como del gobierno. Creo que es un mérito del país, al que hemos contribuido todos, gobierno y oposición, civilidad e instituciones armadas, empresarios y trabajadores. El clima de

confrontación que Chile vivió por tantos años ha sido reemplazado por un clima de colaboración. Los chilenos preferimos buscar acuerdos para avanzar juntos en la satisfacción de las necesidades nacionales, que gastar nuestros esfuerzos en pelear entre nosotros.

Hay legítimas discrepancias, propias de toda convivencia social, pero en el país impera un clima de paz, de armonía.

En lo social, estamos afrontando la lucha contra la pobreza, y en ello se han dado pasos importantes. Al aprobarse la Reforma Tributaria se impuso un sacrificio mayor a quienes tienen más, para poder incrementar el gasto social en beneficio de los que tienen menos. Las reformas laborales han significado un avance también en el camino de lograr relaciones equitativas entre trabajadores y empresarios.

Estamos muy lejos de superar la pobreza, pero los programas sociales en materia de educación, de salud, de vivienda, se orientan hacia esa meta. Estamos avanzando.

En el orden económico ha habido en Chile, en este año, una etapa difícil; generalmente los períodos de transición de gobiernos autoritarios a democracias se caracterizan por la eclosión de demandas sociales y políticas inflacionarias que desestabilizan las economías. Nosotros, por una parte, logramos por la madurez, especialmente de los sectores laborales, y la comprensión de los sectores empresariales, un acuerdo marco entre trabajadores y empresarios que fijó la pauta en las relaciones entre unos y otros; por otra, asumimos el gobierno con signos de un recalentamiento de nuestra economía, que amenazaba con un escape de la inflación que obligó a un ajuste doloroso, pero que, en definitiva, fue fecundo. Hemos logrado detener la inflación y los índices de los últimos meses son francamente halagadores.

Y todo nos hace pensar, por el incremento de las inversiones y por el comportamiento de los demás indicadores económicos y la voz de los propios agentes económicos, que podemos esperar para este año una etapa de efectivo crecimiento de nuestra economía.

En el orden político institucional, las instituciones propias de nuestra democracia han funcionado. Todos los poderes públicos han ejercido sus atribuciones, dentro del marco de la Constitución, con plena independencia. Ha habido colaboración entre Ejecutivo y Legislativo para avanzar en el plano de las reformas legales que el país necesita. Las instituciones armadas han cumplido sus funciones profesionales dentro del ámbito que les es propio, y ha imperado en Chile plena libertad de expresión, de asociación, de reunión, de culto. De esta manera, la comunidad chilena desenvuelve su vida acostumbrándose nuevamente a vivir en democracia.

Creo que a todos debe causarnos satisfacción, no euforia. Yo no soy triunfalista. Admito que estamos en el comienzo de una tarea, y

tenemos mucho por delante para cumplir, en tan breve lapso, las metas que nos propusimos.

Me preocupan, especialmente, tres problemas. Me preocupa la pobreza. Derrotar la pobreza en Chile es una tarea ímproba, que exige el esfuerzo de todos. Todavía hay muchos compatriotas que, a pesar de los avances realizados, a pesar del mejoramiento de los ingresos mínimos, de las pensiones mínimas, de las condonaciones o reprogramaciones de deudas, de vivienda, de agua potable, de contribuciones, de luz eléctrica, viven una vida muy limitada.

Creo que éste es el desafío fundamental que tenemos: derrotar la pobreza.

Me preocupa la juventud chilena. La mayor parte de nuestra población es joven, y los jóvenes, los jóvenes del mundo pobre, son quienes sufren en mayor medida, porque la juventud es una etapa de la vida en que se sueña siempre con algo mejor, es la etapa de las ilusiones, de las grandes esperanzas; y nuestra juventud, especialmente en los medios populares, se siente frustrada porque ni tiene una educación adecuada que la capacite para ganarse la vida, ni tiene perspectivas de trabajo permanente y creador que satisfaga sus legítimas aspiraciones.

Este es un problema sobre el cual todos los chilenos debiéramos tomar cabal conciencia. Hay que hacer un gran esfuerzo para capacitar a los jóvenes, para abrirles horizontes.

Me preocupa, finalmente, y con esto no quiero decir que sea lo único, pero son mis tres preocupaciones principales, el tema de la delincuencia.

Indudablemente en nuestro país tenemos índices altos de robos, de robos a mano armada, a veces con consecuencias de homicidios o lesiones graves. Hay gente que usa las armas como juguete; pareciera haber en esta materia una gran irresponsabilidad.

Esta delincuencia tiene distintos signos o contenidos. Hay delincuencia por motivos económicos y delincuencia que invoca motivos de tipo político. Para mí, el terrorismo es delincuencia. Los terroristas son delincuentes. Y esto debe entenderlo así todo el país.

El fenómeno puede tener explicaciones, y quizás las explicaciones están, precisamente, en los otros dos factores que antes señalaba: la pobreza y el desaliento juvenil. La pobreza y el desaliento juvenil puede que expliquen, en gran medida, el que muchachos —porque casi todos los que se descubren son gente joven— caigan en la violencia, sea con ánimo de obtener beneficios económicos que les mejoren su condición de vida, sea en un afán de querer cambiar el mundo, por medio de la violencia. Pero la experiencia histórica de Chile y del mundo revela que la violencia no es camino ni para mejorar la condición económica de los pueblos, ni para cambiar el orden de las sociedades, ni para avanzar a la justicia.

Por el contrario, la violencia genera sufrimiento y más violencia. Empuja en una espiral que conduce a mayores desastres y dolor.

Termino diciendo, a partir de esta comprobación de la realidad, que hemos cumplido, a mi juicio en forma satisfactoria, nuestra primera parte de la tarea; que tenemos que seguir avanzando hacia el logro de las cinco metas, porque queremos entregar un país verdaderamente unido y reconciliado, sobre las bases de la verdad y de la justicia. Para ello hemos dado pasos importantes, porque queremos perfeccionar nuestras instituciones democráticas, de manera que Chile sea una nación participativa, en que haya libertad y en que el gobierno responda a grandes consensos colectivos, en los que el pueblo entero participe; porque queremos justicia social y desarrollo.

Entendemos que tenemos que continuar marchando en esa tarea, como en la reinserción internacional, y pensamos que este año que estamos iniciando, tenemos que esforzarnos especialmente en avanzar hacia el desarrollo con equidad, estimular el crecimiento económico, porque no vamos a derrotar la pobreza si este país no produce más, no crece. Pero este crecimiento económico, para que derrote la pobreza, ha de orientarse con un sentido de justicia social, de tal manera que se puedan crear cada día más empleos estables, productivos, para los jóvenes y trabajadores chilenos; y haya para los empresarios cada vez más oportunidades de un progreso que se traduzca en mayor ingreso nacional y en mayor bienestar para todos los chilenos.

Quedo a disposición de ustedes. He expuesto esta línea gruesa del balance y de la orientación, para contestarles las preguntas que me quieran formular.

Pregunta: (María Luisa Martínez, Univisión)

Al comienzo de su discurso dijo que esta democracia era todavía "imperfecta". ¿A qué puntos se refería usted?

S.E.: Creo que la institucionalidad democrática chilena deja bastante que desear en varios aspectos. Una democracia supone participación real del pueblo en los distintos ámbitos del quehacer colectivo. Y es evidente que la administración municipal en Chile, de las comunas, por ejemplo, no es democrática. Tenemos que avanzar hacia la democratización del sistema de administración comunal, y de ahí la importancia de la reforma municipal.

Tenemos que avanzar a mayores grados de democratización y participación en el ámbito de la administración regional. Tenemos un sistema judicial que obviamente no satisface los requerimientos del país, materia sobre la cual hay un consenso, al menos en el

mundo forense, en el mundo de los abogados y de la gente vinculada al tema, y yo creo que en la gran mayoría de la población nacional. Tenemos que abordar la reforma del sistema judicial chileno, para modernizarlo y perfeccionarlo, y darle mayor independencia.

Creo que para que haya perfecta democracia hay que multiplicar los cauces de participación de la comunidad en los distintos ámbitos de la vida social, y son esos campos en los cuales nuestra democracia puede perfeccionarse.

Creo, finalmente, que la composición del Poder Legislativo, con el Senado integrado parcialmente por senadores designados, y el sistema electoral chileno, binominal mayoritario, no favorecen el perfeccionamiento de la democracia.

Entonces son todos esos campos en los cuales tendremos que ir avanzando, en la medida de lo posible. Y para eso yo aspiro a lograr, como en otras materias, grandes consensos nacionales que nos permitan ir haciendo esas reformas sin dolor, de una manera constructiva y consensual.

Pregunta: (Manola Robles, Radio Cooperativa y Diario Fortín)

Presidente, primero una curiosidad, que de alguna manera usted aclaró esta mañana: ¿Por qué no se ha celebrado, con su presencia y junto al pueblo, este primer aniversario de gobierno?

Y ahora lo puntual. El gobierno, ¿tiene algún tipo de información que haya emanado de sus organismos de seguridad, en orden a que pudiera existir algún plan para desestabilizarlo, mirando primero el asesinato del médico militar de Rancagua, algunas publicaciones en el exterior y otros hechos que, de alguna manera, han preocupado a la opinión pública y han provocado un clima de tensión?

S.E.: Lo primero, yo creo que esto de todos los años celebrarse el cumpleaños con gran algarabía, es un poco infantil. Uno celebra los cumpleaños de los niños, pero las naciones maduras no celebran todos los años el cambio de gobierno. Celebran el aniversario patrio, hay efemérides nacionales que dan motivo a congratulación, pero yo no he visto que en Europa ni en Estados Unidos se celebre todos los años el día en que asumió el gobernante de turno. Por eso me ha parecido que había que rebajarle el perfil a esta conmemoración. Aspiro a que, si cumplimos bien la tarea, cuando terminemos nuestro período recibiremos alguna forma de festejo de parte de nuestros compatriotas.

En cuanto a lo segundo, verdaderamente el gobierno no tiene antecedentes que permitan hablar de ninguna acción sistemática, organizada, con el objeto de provocar una desestabilización institu-

cional. Más bien creemos que los hechos a que usted ha hecho referencia deben investigarse para acreditarse su origen; no se puede prejuzgar atribuyéndolos a unos ni a otros, y no dan por sí solos motivos para creer que pudiera estar en peligro la estabilidad institucional del país.

Pregunta: (Federico Quilodrán, Agencia Associated Press)

Presidente, en materia internacional su gobierno tiene algunos asuntos pendientes, como son, por ejemplo, las relaciones con Cuba, con Bolivia y el cumplimiento del Tratado con Perú. ¿Qué anuncios podría decirnos usted en este instante, respecto a estas materias?

S.E.: En verdad no estoy en condiciones de hacerle ningún anuncio en relación a esas materias.

Pregunta: (Raúl Rojas, Diario La Tercera)

Presidente, a raíz de las declaraciones tuyas en las que denunció la falta de coraje moral del Poder Judicial, el senador Jaime Guzmán está pidiendo que usted se retracte. Me gustaría pedirle un comentario suyo sobre esta materia.

S.E.: Yo no soy hombre que me empecine en afirmaciones de las cuales pueda convencerme de que he estado equivocado. Si yo me he atrevido a decir lo que dije en esa materia, es porque responde a un penoso convencimiento adquirido a lo largo de varios años. Convencimiento muy penoso para mí, por ser hijo de juez y por haberme ganado la vida en el ejercicio de la profesión de abogado ante los Tribunales; porque yo fui en mi tiempo abogado de pleitos, no de escrituras, no de asesorías a empresas; de pleitos, en el trajín ante los Tribunales y en el alegato ante las Cortes, y además de árbitro. La verdad es que conozco, aprecio y tengo cariño por la función judicial, por la magistratura, y me duele haber comprobado situaciones que me han llevado a formarme ese juicio. Con él no pretendo denigrar a nadie, sino simplemente constatar lo que creo una verdad importante de ser asimilada por la nación entera, especialmente por los propios magistrados.

Pregunta: (Jorge Uribe, Diario Excelsior, México)

Señor Presidente, en 1973 algunos poderes del Estado denunciaron que existía peligro para la estabilidad institucional. Recientemente un Poder del Estado ha hecho la misma acusación. ¿Observa usted alguna similitud en estos hechos, y especialmente porque esas de-

claraciones y denuncias del 73 produjeron un hecho que trajo, según usted mismo ha dicho, secuelas extraordinariamente penosas para el país?

S.E.: Creo que quienquiera que haya vivido en aquellos años y viva hoy día en Chile, advierte que las condiciones son absolutamente distintas. Entonces se vivía un clima de confrontación, de violencia cotidiana, de odiosidad entre los chilenos. Hoy día, como empecé por resaltarlo en mi exposición inicial, hay un clima de entendimiento, de búsqueda de acuerdos, de anhelo de paz. Gobierno y oposición combatimos, nos criticamos, pero buscamos acuerdos y nos tratamos respetuosamente. Ningún poder del Estado puede quejarse de que esté de alguna manera coartado en el libre ejercicio de sus atribuciones propias, porque, en una democracia, la crítica, que constituye un derecho, expresión de la libertad de opinión, es algo que tiene que ser aceptado como parte de la convivencia normal, y el recibir críticas obliga a quienes seamos criticados a pensar lo que estamos haciendo, a dar explicaciones de nuestra conducta, pero no nos inhibe de cumplir nuestros deberes.

En consecuencia, la afirmación que, en el sentido que usted indica, se ha hecho recientemente, me parece, por decir lo menos, una ligereza irresponsable.

Pregunta: (Nelson Oteíza, Radio Chilena)

Presidente, siguiendo con el tema del Poder Judicial. La reacción que han encontrado en la derecha sus dichos respecto a este poder del Estado, ¿le hacen temer que una de las reformas que usted impulsará este año, que es la reforma al Poder Judicial, podría verse entrabada en el Parlamento, de acuerdo a la postura, reitero, de los partidos políticos de la derecha?

S.E.: Lo que yo anhelo fervientemente —lo he dicho a los propios dirigentes de los partidos de derecha en mis conversaciones con ellos, y lo he dicho públicamente ante el país— es separar la disputa que pueda producirse en cuanto a actuaciones contingentes del Poder Judicial o de algunos magistrados, en relación especialmente al tema de los derechos humanos, con el tema fundamental de la necesidad de avanzar hacia perfeccionar y modernizar ese Poder del Estado.

Repito, hay un consenso nacional sobre la materia. Las gentes no creen mucho en la justicia. Muy a menudo el que es víctima de un hecho ilegal, incluso de un delito, prefiere resignar o buscar un arreglo con su victimario antes de seguir un juicio que puede resultar eterno.

Se han hecho encuestas recientes en el foro acerca de este tema, y revelan un consenso bastante crítico, compartido. Especialistas de la más diversa inspiración, doctrinaria y política, entre ellos connotados juristas, pertenecientes o militantes en los partidos de derecha, han planteado la necesidad de reformas que son bastante coincidentes con las que plantean los asesores del gobierno.

El gobierno ha elaborado un grupo de proyectos de ley, pero antes de enviarlos al Congreso nos ha parecido que es bueno ver si podemos lograr acuerdo con esos sectores opositores, y provocar en esta materia un consenso que permita hacer una reforma no dirigida contra nadie, sino orientada a mejorar la justicia y superar los problemas que hoy y en el pasado ha tenido.

El jueves último se efectuó aquí en La Moneda una reunión entre asesores míos, dos ministros de Estado, y los presidentes de los partidos políticos de gobierno y oposición, con representación en el Parlamento, y se propuso allí la constitución de equipos técnico-parlamentarios que busquen un acuerdo en esta materia, que nos permita avanzar en esa línea. Yo confío en el patriotismo de todos y creo que para ello es bueno que separemos este tema de las legítimas discrepancias que podamos tener respecto de la conducta particular de determinados magistrados en el acontecer de los últimos años.

Pregunta: (Orlando Milesi, Agencia ANSA)

Señor Presidente, con todas las críticas que hemos escuchado al Poder Judicial y lo poco que se avanzó en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno anterior, y la reacción que ha habido en este Poder, diciendo que está amenazada la institucionalidad, a raíz de la amenaza de muerte a algunos jueces, ¿cómo es posible esperar que esta misma justicia avance en el aclarar los nuevos antecedentes que surgieron de la Comisión Rettig en cuanto a violaciones de los derechos humanos?

S.E.: Yo creo que uno nunca debe desesperar de la capacidad del ser humano de corregir sus errores y de avanzar por caminos de perfeccionamiento. Sé de muchos jueces, ministros, magistrados judiciales, a quienes los temas a que usted se refiere preocupan seriamente y que tienen vocación, abnegación, sentido de justicia, para cumplir adecuadamente su deber en esta materia.

Pregunta: (Ricardo Downey, Diario El Mercurio)

¿Cuál es el propósito de su gira a Europa y qué puede esperar el país, en resultados concretos, de ella?

S.E.: El propósito de la gira se inserta dentro del objetivo general de afianzar la vinculación de Chile con el resto del mundo a raíz de su reinserción en el ámbito internacional. Chile tradicionalmente ha tenido una relación política, económica y cultural muy intensa con los países de Europa, y esa relación indudablemente se vio resentida en los últimos años.

Mi visita busca, en primer término, estrechar lazos, superar los motivos de esos alejamientos, avanzar en los planos de la cooperación, tanto en el ámbito cultural como en el ámbito económico y tecnológico.

Objetivos específicos. A menudo se me hace la pregunta, "bueno, ¿qué consiguió usted cuando conversó con Bush? ¿Qué sacó para Chile cuando hizo tal cosa?" Uno no va a visitar a un amigo para sacarle algo. Uno va a visitar al amigo para estrechar las relaciones, lo que ha de traducirse en una mayor colaboración y, consiguientemente, en frutos positivos para unos y para otros.

Pregunta: (Jorge Carrasco, Notimex de México)

Presidente, en esta reinserción de Chile al mundo, ¿es interés de su gobierno incorporarse a mercados comunes sudamericanos?

S.E.: Evidentemente aspiramos a que cada día se superen las vallas que obstaculizan el mercado entre nuestros países, pero no cabe duda de que las posibilidades de crear un mercado común están muy vinculadas al tipo de política económica que en cada país se sigue, y al grado de evolución de ciertos criterios en materia económica.

Yo creo que nuestro Continente vive reeditando cada cierto tiempo el ideal de Bolívar, de la integración plena entre nuestros países, pero que estamos muy lejos de alcanzarla.

La experiencia de esquemas más o menos ideologizados, de mercados comunes convenidos un poco artificialmente, no ha dado buenos resultados. Aspiramos a que ojalá llegue el día en que nuestro Continente americano sea capaz de tener un mercado común.

Tratamos de avanzar realísticamente hacia eso, por una parte, mediante una política general, económica, de apertura y liberalización del comercio; por otra parte, mediante el avance en acuerdos bilaterales que nos permitan ir incrementando el comercio y la complementación entre Chile y otros Estados del Continente.

Pregunta: (Arturo Castillo, Megavisión TV)

Señor Presidente, usted al comienzo de esta conferencia destacaba lo importante que es para su gobierno lograr la reconciliación en el

país. ¿En qué medida eso se ha logrado, cuál es el principal escollo para lograrla plenamente? ¿Cree usted que la diferencia de opinión que hubo entre el Ejecutivo y el Poder Judicial la semana pasada podría ser uno de ellos, o cómo ve usted la actitud de los partidos opositores frente a este objetivo?

S.E.: Yo diría que en el año, y creo haberlo expresado al comienzo, hemos avanzado bastante en ese sentido. La política chilena no se ha caracterizado en este año por agudas confrontaciones, por choques violentos, por insultos entre adversarios políticos, por manifestaciones de violencia colectiva. Por el contrario, todo eso que caracterizó a la política chilena hace alrededor de veinte años, hoy día ha desaparecido. Hay controversia, naturalmente, en el tema que usted señaló y en muchos otros, pero se tratan civilizadamente. Creo que hay un buen espíritu de los partidos de gobierno, de los partidos de oposición, de los trabajadores y sus organizaciones, de los sectores empresariales.

Por eso, creo que hemos avanzado y estoy optimista sobre las posibilidades de seguir avanzando. Creo que uno de los factores de división más dolorosos que persistían en la sociedad chilena, y no digo que se hayan eliminado, pero se ha atenuado, era el derivado del tema de los derechos humanos, y creo que la presentación del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación ha tenido acogida en todos los sectores de la comunidad nacional: en el Poder Legislativo, tanto Senado como Cámara de Diputados; en los partidos políticos; en las iglesias y otras organizaciones de tipo espiritual, o con autoridad moral; en los sectores culturales y en las organizaciones sociales. Eso me hace abrigar la esperanza de que en este año avanzaremos decisivamente en ese camino hacia la plena reconciliación.

Pregunta: (Amelia Miranda, Diario La Nación)

Presidente, usted ha reiterado que no hará cambios en su Gabinete; sin embargo, éste ha recibido críticas de partidos políticos, incluso de la Concertación y de algunos otros sectores sociales.

Considerando lo que usted hace poco decía sobre las críticas y la obligación de la autovaloración al respecto, ¿qué valor otorga usted a las críticas que han recibido sus ministros, y derivará de ellas cambios en algunas políticas sectoriales?

S.E.: Mire, yo soy muy respetuoso de las críticas, como dije hace un instante, y trato de valorizarlas. A veces de las críticas resulta la necesidad de poner más atención en un determinado aspecto que podría haber sido descuidado, resulta la conveniencia de hacer al-

gún cambio. De lo que yo he recibido hasta ahora, en materia de críticas, no hay ninguna que me convenza, ni siquiera que me haga pensar, en la conveniencia de cambiar a ninguno de mis ministros. Estoy contento con la actuación de todos ellos, no me canso de repetirlo. Creo que éste es un gobierno que trabaja como equipo.

Hay críticas que corresponden a visiones de lo que debiera hacerse, que no coinciden con las políticas fijadas por el gobierno. Al ministro de Relaciones Exteriores le piden una política distinta de la que ha fijado el gobierno, quisieran un papel protagónico de Chile. Chile convertido en vedette en los foros internacionales, Chile tomando iniciativas que causarían mucha bulla y que lo más probable es que terminaran sin pena ni gloria.

Yo, deliberadamente —lo dije desde un principio— he querido darle un perfil modesto a nuestra política internacional, lo que no significa que no sea efectiva. Se nos han hecho diversas críticas al respecto.

Sin embargo, sin meter bulla, actuando prudente y eficazmente, hemos ido lográndolo todo. Se suprimió la exclusión de Chile del sistema general de preferencias; se reintegró a Chile en el sistema de seguros; se eliminó la Enmienda Kennedy; los agricultores perjudicados en el caso de las uvas envenenadas presentaron su demanda ante los mecanismos correspondientes norteamericanos, con respaldo del gobierno, y el gobierno presentó, en forma seria, por las vías adecuadas, sin hacer de esto un motivo de ruptura, el planteamiento del país en defensa del interés chileno.

Eso marca nuestro estilo. Dicen que el estilo hace al hombre. A mí no me van a cambiar a esta altura de mi vida mi modo de ser.

Pregunta: (Malcolm Coad, Guardian y Washington Post)

Señor Presidente, usted ha sido muy claro al declarar que la ley de amnistía de 1978 no puede ser obstáculo a la investigación de las violaciones a los derechos humanos. Quisiera saber, si la Corte Suprema no decide cambiar su postura en esa materia, ¿el gobierno propondrá o estará dispuesto a apoyar una ley interpretativa de esa ley de amnistía?

S.E.: Yo confío en que los Tribunales acogerán los planteamientos que el gobierno ha formulado. No entra dentro de los propósitos del gobierno patrocinar ninguna ley interpretativa sobre esa materia.

Pregunta: (Juan Rauld, Diario La Segunda)

Presidente, ¿cómo visualiza usted las críticas que se han hecho al papel de la Concertación? Desde la oposición se insiste mucho en

que su actividad está decayendo paulatinamente, en que no está jugando un papel de ninguna manera preponderante en el quehacer del gobierno.

S.E.: Este es un gobierno presidencial. En Chile existe un sistema presidencial de gobierno. Es el Presidente de la República quien determina la orientación del quehacer gubernativo. El elige a sus colaboradores y decide sobre las acciones a emprender por el gobierno.

Los partidos de la Concertación me hicieron el honor de expresarme su plena confianza cuando me eligieron como candidato, y luego en un documento que se suscribió antes de la elección. Aquí no hay un co-gobierno, aquí no hay un gobierno de los partidos políticos. Los partidos políticos respaldan al gobierno en la misma medida en que el Presidente es fiel a las bases programáticas que constituyen el compromiso suyo, mío, en este caso, con esos partidos.

Yo creo que esas críticas carecen de fundamento. Creo que los partidos de la Concertación están cumpliendo lealmente su tarea, han mantenido su confianza y respaldo al gobierno, a los ministros que lo integran, colaboran con el gobierno, el gobierno los escucha. Yo siento que tengo un amplio respaldo de los partidos de la Concertación para la acción de mi gobierno, lo que me satisface profundamente y compromete mi gratitud.

Mensaje presidencial en el inicio de la legislatura ordinaria del Congreso Nacional

Valparaíso, 21 de mayo de 1991

Conciudadanos del Senado
y de la Cámara de Diputados:

En cumplimiento del mandato constitucional, doy cuenta al país, ante vosotros, "del estado administrativo y político de la nación".

Al cabo de un año y setenta días de gobierno puedo decir, con satisfacción, que la convivencia nacional se desenvuelve por los cauces del Estado de Derecho. Nuestra renaciente democracia funciona sobre las bases de la plena vigencia de los derechos humanos y las libertades públicas, y del cabal ejercicio de sus atribuciones por los Poderes del Estado; un clima de paz y entendimiento prevalece en las relaciones sociales, especialmente entre trabajadores y empresarios, como también entre los diversos sectores políticos; la economía nacional funciona de manera sana y promisoria, demostrando favorables perspectivas de estabilidad y crecimiento; se progresa —tal vez lenta, pero decididamente— en la solución de los graves problemas sociales que afligen a vastos sectores de compatriotas, en la clara dirección de construir una sociedad equitativa, y Chile se ha reinsertado plenamente, suscitando gran respeto y simpatía, en el ámbito internacional.

Contrasta esta realidad con los negros presagios de quienes vaticinaban que nuestro gobierno traería al país caos político, desastre económico y desorden social. Gracias a Dios, a la madurez del pueblo chileno y a la responsabilidad con que el gobierno y los principales actores de la vida nacional estamos procurando cumplir

nuestras funciones, los pronósticos de esos agoreros han sido desmentidos por la realidad: Chile hoy se destaca entre las naciones del mundo en desarrollo por su equilibrio político y por sus favorables condiciones económico-sociales.

Naturalmente, no estamos libres de problemas, como no lo está ningún país, ni aun los más desarrollados. Aparte de las dificultades derivadas de la pobreza y de las inherentes al proceso de crecimiento, nos causan especial preocupación el incremento de la delincuencia y la acción terrorista de pequeños grupos que procuran imponer la violencia en la vida colectiva. Víctima de tal conducta criminal cayó hace poco un distinguido miembro de este Congreso Nacional, el senador Jaime Guzmán. Esta es ocasión propicia para rendir homenaje a su memoria y para reiterar nuestro categórico compromiso de emplear todos los medios legítimos a nuestro alcance para erradicar el terrorismo y la violencia de la vida nacional.

LAS TAREAS DEL GOBIERNO

El año pasado, en esta misma fecha, expuse ante este Honorable Congreso nuestro diagnóstico de la realidad nacional al comenzar esta nueva etapa en la vida del país, y enuncié las tareas que mi gobierno se proponía cumplir durante su período y los criterios fundamentales que inspirarían nuestra acción.

Esas tareas, conviene recordarlas, son las siguientes:

- I. Alcanzar la reconciliación nacional;
- II. Consolidar y perfeccionar nuestra democracia;
- III. Promover la justicia social;
- IV. Impulsar el crecimiento, desarrollo y modernización del país; y
- V. Reinsertar a Chile en su lugar histórico en la comunidad internacional.

¿Cuánto hemos avanzado, en este primer año de gobierno, en el cumplimiento de esas tareas?

Es lo que me propongo precisar, en sus líneas fundamentales, en la presente exposición, sin perjuicio del relato detallado de la labor de cada Ministerio, que los Honorables Parlamentarios encontrarán en los anexos de esta cuenta.

I. *Reconciliación Nacional*

Consecuente con mi profunda convicción de que el reencuentro y unidad de la familia chilena no podría alcanzarse sin un serio esfuerzo para superar los agravios del pasado, consideré un deber insoslayable encarar derechamente los problemas derivados de las violaciones a los derechos humanos, del exilio y de la situación de los llamados "presos políticos".

A fin de avanzar hacia la solución del primero de esos problemas, constituimos la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Al cabo de nueve meses de abnegado, silencioso y eficiente trabajo, esa Comisión emitió un Informe que di a conocer al país el 4 de marzo último.

La divulgación de ese Informe conmovió la conciencia nacional. Su seriedad y ponderación fue valorizada en acuerdos unánimes por ambas Cámaras de este Congreso Nacional, que expresaron su reconocimiento a los miembros de la Comisión por el aporte que hicieron en pro de la verdad y del reencuentro nacional.

Considero mi deber reiterarles, en esta solemne ocasión, los agradecimientos del gobierno por el valioso servicio que prestaron a la causa de la verdad y de la reconciliación entre los chilenos.

Las observaciones y comentarios que a ese Informe han formulado respetables instituciones y personas, no desconocen la verdad de los cruentos hechos que el Informe establece, sino que se refieren a las circunstancias en que ocurrieron y que podrían explicarlos.

Por mi parte, considero necesario reiterar aquí lo que dije el 4 de marzo: "El reconocimiento de esa verdad es independiente del juicio que cada cual tenga sobre los acontecimientos políticos de la época o sobre la legitimidad del 11 de septiembre de 1973. Eso lo juzgará la historia, pero ningún criterio sobre el particular borra el hecho de que se cometieron las violaciones a los derechos humanos que describe el Informe". La aceptación de esa verdad, compartida por la comunidad nacional, removerá un motivo de disputa y de división entre los chilenos.

En cuanto a la justicia, que exige esclarecer el paradero de muchos desaparecidos y determinar las responsabilidades que jurídicamente correspondan, es tarea que compete a los tribunales. Uniéndose a mi ruego, las dos Cámaras de este Congreso expresaron su confianza en que "los tribunales investigarán a fondo, de acuerdo con la legislación vigente y con la prontitud necesaria", los casos sobre violaciones a los derechos humanos.

La verdad, por sí misma, es parte de la justicia, al menos en cuanto a la vindicación moral de las víctimas. También la justicia exige que el Estado, como órgano de la sociedad toda, asuma la

responsabilidad que le corresponde, bien sea por acción o por omisión, al causar tanto sufrimiento, o al no haber sabido o podido evitarlo. Para ello es que el gobierno, acogiendo las sugerencias de la Comisión de Verdad y Reconciliación, os ha presentado el proyecto de ley sobre reparaciones a las familias de las víctimas, que confío este Congreso estudie y despache con la mejor disposición.

Frente al tema del exilio, propusimos un proyecto que dio origen a la Ley N° 18.994, que creó la Oficina Nacional de Retorno, la cual está abocada a la tarea de facilitar la reinserción de los exiliados políticos, gestionando con organismos nacionales e internacionales las prestaciones de asistencia social, jurídicas, de salud, laborales y previsionales necesarias para facilitar el regreso de quienes quieren hacerlo. Es de suma importancia, para las posibilidades de retorno de muchos compatriotas, e interesa al país para aprovechar sus capacidades, que los estudios que hayan realizado en el exilio les sirvan en Chile. Tal es el objetivo del proyecto sobre revalidación de títulos y grados actualmente pendiente de la decisión de este Congreso.

En cuanto al problema de los presos por delitos de motivación política, el gobierno ha indultado, conforme a los criterios que reiteradamente ha expuesto, a todos los que no han estado comprometidos directamente en hechos de sangre y a medida que su situación procesal de condenados ha permitido el indulto. Pero la mayoría de estos presos están sujetos a procesos pendientes, etapa en que el indulto es improcedente, y muchos lo son por acciones terroristas que excluían la posibilidad de indulto.

El gobierno propuso solucionar estos casos por la vía judicial, mediante normas que permitieran a los Tribunales, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, adoptar las decisiones más equitativas. Este Honorable Congreso acogió sólo parcialmente esa iniciativa, en cuanto a traspasar a la competencia de ministros de la Corte muchos procesos que estaban sujetos a la justicia militar, y aceptó la proposición de Renovación Nacional, que el gobierno hizo suya, de autorizar excepcionalmente el indulto a condenados por delitos terroristas.

En el corto tiempo transcurrido desde la vigencia de estas normas —contenidas en las leyes Nos. 19.027 y 19.055, del 26 de enero y 1 de abril de 1991, respectivamente—, los tribunales han puesto en libertad condicional a varios procesados, y otros han salido en libertad provisional. Por mi parte, he remitido o conmutado penas a 99 condenados, y seguiré ejerciendo la facultad presidencial de indultar conforme a criterios de justicia y de prudencia.

No comparto la opinión de quienes alegan que el otorgamiento de indultos a personas condenadas por actos terroristas sería una señal contradictoria de la voluntad del gobierno de combatir el te-

rrorismo, o insinúan que obedecería a simples motivos de equilibrio político. Mi gobierno no determina su conducta por criterios mercantiles, sino por razones de equidad y bien común. Esas alegaciones olvidan que las responsabilidades son estrictamente personales, y equivalen a sostener que para no dar signos que alienen al pecado, ningún pecador debiera salvarse. Olvidan, por otra parte, que en la lucha contra el terrorismo, las experiencias más exitosas han combinado la energía con el perdón. Si el Congreso Nacional dio al Jefe de Estado esa facultad, fue sin duda porque entendió que sería un instrumento eficaz para resolver situaciones de justicia sin poner en peligro a la sociedad. El país puede estar seguro de que ejerceré esta atribución con el máximo cuidado, para que realmente sirva a la reconciliación entre los chilenos y a la paz social. ¡Dios me ayude a no equivocarme!

II. *Consolidación y Perfeccionamiento de nuestra Democracia*

Como dije en mi Mensaje anterior, para lograr este fin el gobierno considera necesario:

1. Asegurar la plena vigencia de los derechos humanos para todos;
2. La participación de todos los sectores en los distintos aspectos de la vida colectiva;
3. Una administración de justicia eficiente y oportuna;
4. Una adecuada integración entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil;
5. Mecanismos eficientes y justos de seguridad; y
6. Relaciones equilibradas entre los Poderes Públicos.

A continuación expongo someramente los pasos que hasta ahora hemos dado hacia el logro de estas metas.

1. Vigencia de derechos humanos

El país es testigo del respeto que mi gobierno profesa a las personas y a sus derechos. Es mi especial preocupación asegurar a todos, sin excepción ni discriminaciones, el pleno ejercicio de sus derechos y libertades, sin otra limitación que hacerlo en la forma regulada por la ley, única manera de compatibilizar la libertad con el orden.

Especial importancia tiene, para que una sociedad sea plenamente democrática, la efectiva vigencia de las libertades de información y de opinión.

Para asegurar la libertad de información, el gobierno ha abierto las fuentes oficiales de noticias a todos los órganos periodísticos, sin ningún tipo de discriminaciones, y ha desarrollado una política de plena autonomía de los medios de comunicación, incluso en los de propiedad oficial, como el diario *La Nación*, Televisión Nacional y Radio Nacional. Con respecto a estos dos últimos órganos de expresión, se han sometido al Congreso sendos proyectos de ley, que procuran darles una estructura pluralista.

Inspirado en el mismo propósito de asegurar la plena libertad de expresión, el gobierno presentó al Congreso Nacional un proyecto, fruto de estudios conjuntos con la Asociación Nacional de la Prensa, la Asociación de Radiodifusores de Chile, el Colegio de Periodistas y las Escuelas de Periodismo de las Universidades de Chile y Católica, para derogar las disposiciones que vulneraban más gravemente el ejercicio de esa libertad. Su despacho en el Congreso dio origen a la Ley N° 19.048 del 3 de febrero último, que constituye un significativo avance en este campo. Con participación de las mismas entidades, se encuentra en estudio otro proyecto encaminado a actualizar nuestra ya antigua legislación sobre la materia, con la mira de regular y proteger la actividad periodística más que sancionar sus abusos.

A fin de adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las normas internacionales de tutela de los derechos humanos, nuestro país ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra. Adicionalmente, reconocimos la competencia del Comité de Derechos Humanos prevista en el artículo 41 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y retiramos las reservas con que el anterior gobierno había ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles.

Restan aún pasos importantes que dar en esta materia, que esperamos completar durante el presente año.

En otros aspectos se han hecho también progresos significativos a través de la entrada en vigencia de normas que garantizan en mejor forma los derechos de las personas. En el ámbito judicial, la Ley N° 19.047 modificó las normas sobre incomunicación, aislamiento, confesión, libertad provisional y derecho de defensa, y disminuyó algunas penalidades exageradas. Mediante la dictación de la Ley N° 19.029 se restringió la pena de muerte sólo a algunos delitos gravísimos, pasando ella a ser una sanción excepcional. Es mi esperanza que los tiempos y las circunstancias evolucionen de modo tal que pronto podamos desterrar definitivamente la pena de muerte de nuestra legislación. Quiero destacar también que la Ley

Nº 19.027, a la vez que sanciona eficazmente las conductas terroristas, contempla normas que permiten que ello se haga con pleno respeto a los derechos de las personas.

Uno de los problemas importantes que plantea el resguardo efectivo de los derechos humanos frente a los eventuales abusos del poder estatal, dice relación con la situación de los sectores más desposeídos. Por lo general, ellos no sólo son incapaces de defender sus derechos frente a los abusos administrativos, sino que, lo que es peor, desconocen las vías para defenderlos.

Consciente de este problema, he enviado recientemente a la Cámara de Diputados dos mensajes, uno de reforma constitucional y otro de ley orgánica constitucional, destinados a crear en nuestro país la institución del Defensor del Pueblo. De acuerdo al constitucionalismo moderno y la experiencia de diversas naciones, esta institución puede ser un instrumento eficaz para subsanar la grave deficiencia anotada. Estoy seguro de que el debate legislativo sobre el tema posibilitará que, en conjunto, forjemos una visión común sobre el problema y sobre las medidas más idóneas para enfrentarlo.

Reafirmo, una vez más, el compromiso intransable de mi gobierno con la plena vigencia y eficaz tutela de los derechos humanos. Ellos son consustanciales al Estado de Derecho propio de una democracia. Buscaremos incansablemente nuevos y mejores instrumentos que los protejan y no admitiremos, bajo ningún pretexto o circunstancia, que la acción del Estado y sus agentes transgredan los límites que el respeto a ellos impone.

2. Participación

No hay verdadera democracia sin participación.

Para alcanzar mejores niveles de participación en nuestra sociedad, hemos logrado en este primer año de gobierno algunos avances significativos en ámbitos sectoriales, relacionados con la mujer y con la juventud.

Mediante la Ley Nº 19.023 se creó el Servicio Nacional de la Mujer, Sernam. Este organismo es el encargado de colaborar con el Poder Ejecutivo en el estudio y proposición de planes generales y medidas conducentes a que la mujer goce de igualdad de derechos y oportunidades respecto del hombre en los procesos de desarrollo político, social, económico y cultural, respetando la naturaleza y especificidad de la mujer que emana de la diversidad natural de los sexos, incluida su adecuada proyección a las relaciones en el interior de la familia.

En el caso de la juventud, mediante la Ley Nº 19.042, se creó el Instituto Nacional de la Juventud. Se trata de un organismo técnico

encargado de colaborar con el Poder Ejecutivo en el diseño, planificación y coordinación de las políticas relativas a los asuntos juveniles. El país conoce bien los graves problemas de cohesión social e integración que afectan a los sectores juveniles, particularmente a los de origen más modesto, y las nefastas consecuencias que ello acarrea. Con el Instituto hemos dado un primer paso en la búsqueda de respuestas para las necesidades de participación de los más jóvenes, necesidades que constituyen una de las preocupaciones más permanentes y prioritarias del gobierno.

Si bien estos dos organismos no son propiamente instancias de participación, sino técnicos, obviamente su funcionamiento se orientará a promover la participación de mujeres y jóvenes.

También, en el ámbito sectorial, hemos avanzado en el estudio de una legislación sobre pueblos indígenas, propuesta por la Comisión Especial que creamos el año pasado, en la que participaron personeros representativos de esos pueblos. Esperamos presentar próximamente al Congreso el respectivo proyecto.

Otro campo en el cual la participación ciudadana es factor indispensable para asegurar la democracia y comprometer a la sociedad en su desarrollo, es el ámbito vecinal. Para que la Junta de Vecinos cumpla su función natural de ser el lugar de encuentro en que los habitantes de un mismo sector concurren organizadamente a la solución de los problemas comunes y aportan su colaboración al progreso del barrio, se hace necesario reformar la ley que las rige. Eso es lo que persigue el proyecto presentado por el gobierno, en actual trámite legislativo.

Dicho proyecto se inspira en dos principios fundamentales. Primero, la Junta de Vecinos es una organización territorial y no funcional, que debe representar al conjunto de los vecinos. Segundo, debe constituir un canal de participación no politizado.

No puedo sino lamentar el reciente fallo del Tribunal Constitucional en relación a este proyecto. Naturalmente, lo acato y respeto; pero no puedo ocultar que, como hombre de derecho, discrepo de su criterio. En mi concepto, esos principios en nada afectan a la libertad de asociación que la Constitución garantiza, puesto que no se trata de agrupaciones privadas que dependan de la voluntad de los interesados. Las Juntas de Vecinos son personas jurídicas de derecho público, como las municipalidades. Se pertenece a la Junta de Vecinos por el solo hecho de habitar en el barrio, así como se pertenece a la municipalidad por el hecho de residir en la comuna.

Confío en que ese fallo no impida al Congreso considerar favorablemente las demás ideas contenidas en el proyecto.

Pero es en el ámbito de la administración comunal donde la ausencia de participación ciudadana limita mayormente el carácter democrático de nuestra sociedad. La necesidad de democratizar los

municipios constituye una aspiración compartida por la inmensa mayoría de los chilenos, fue expresada formalmente por todos los sectores en la última campaña electoral y existe a su respecto un consenso general. Estos antecedentes, y una convicción profunda sobre la materia, me llevaron en diciembre último a hacer un llamado a los Honorables Senadores para que, por encima de circunstanciales diferencias, prestaran su aprobación en general al proyecto de reforma municipal que había sido despachado por la Cámara de Diputados. Desgraciadamente no fui oído. Abrigo la esperanza de que el reciente acuerdo con la oposición, surgido de las conversaciones entre personeros del gobierno y Renovación Nacional, que conviene un procedimiento para tramitar conjuntamente en el Senado el proyecto de Reforma Constitucional sobre Administración Comunal y Regional y luego, separadamente, las leyes orgánicas respectivas, y para tramitar en forma paralela en la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre rentas municipales, conduzca al pronto despacho de estas iniciativas. El país no entendería y hablaría muy mal de nuestra clase política, si afirmando todos la necesidad de democratizar el régimen de la administración comunal y regional, no fuéramos capaces de ponernos de acuerdo sobre la manera de hacerlo.

No debo terminar este tema sin hacer presente una observación que mi conciencia de superior responsable del bien común de la nación me impone. Mi gobierno favorece el tratamiento conjunto de las reformas constitucionales sobre el gobierno municipal y el gobierno regional, en el claro entendido de que el análisis de las leyes orgánicas correspondientes tiene que sujetarse a ritmos necesariamente distintos.

El municipio es una institución tradicional de nuestro sistema político, como también lo es su carácter democrático-representativo. Al deliberar sobre su reforma, contamos con una larga y rica experiencia, producto de nuestra propia historia. En esta materia, estamos pisando terreno conocido. Sólo secundariamente nos es útil la experiencia de otros países. Conocemos bien los problemas que plantean el gobierno y la gestión municipal.

En cambio, la reforma del gobierno y administración regional nos lleva a *terra ignota*. Se trata de introducir en nuestro sistema político una innovación que no es menor. Carecemos aquí de una historia y una tradición que nos hayan proporcionado una experiencia directa y sostenida en el tiempo, útil para identificar los problemas involucrados y diseñar respuestas confiables a ellos. Haríamos muy mal en copiar simplemente instituciones existentes en otras realidades, sin prestar la atención debida a sus peculiaridades, que pueden no ser las nuestras. También haríamos mal en dejarnos llevar por la seducción de principios, que si bien pueden ser válidos

en teoría, plantean cuestiones muy complejas en su aplicación práctica.

Entiéndaseme bien: soy decidido partidario de un proceso de descentralización regional, pero pienso que debe hacerse sobre bases realistas y sin afectar al carácter unitario del Estado chileno. En naciones más desarrolladas que la nuestra, los procesos de regionalización han tomado decenios, y nosotros no podemos hacerlo de la noche a la mañana. Si no queremos exponernos a fracasos que serían lamentables, debemos avanzar por etapas y construir sobre la base de experiencias.

3. Administración de justicia eficiente y oportuna

No creo necesario extenderme sobre los problemas que la administración de justicia plantea en el Chile contemporáneo. Estos problemas son ya suficientemente conocidos por el país y hay un consenso amplio, que abarca al conjunto de las fuerzas políticas y a la más vasta gama de sectores sociales, sobre la necesidad imperiosa de llevar a cabo una reforma judicial que permita avanzar en su solución. Sólo en la medida en que todos los chilenos, y particularmente los más desposeídos, tengan la experiencia efectiva de que la democracia significa posibilidades reales de justicia, sólo entonces pisaremos terreno firme en nuestro esfuerzo por consolidar la democracia. Este consenso está por encima de todo juicio histórico contingente sobre el desempeño del Poder Judicial en períodos recientes de nuestra vida política.

Respondiendo a esa necesidad hondamente sentida, he enviado a la Cámara sendos mensajes para iniciar una reforma constitucional y las reformas legales pertinentes.

Los principios básicos que guían este primer conjunto de reformas son los siguientes: compatibilizar la necesidad de innovar con el respeto a nuestras tradiciones jurídicas; reforzar el carácter de Poder del Estado que corresponde a la Judicatura; restituir a la Corte Suprema su misión de unificar la interpretación del derecho y dotarla de condiciones que favorezcan una mejor eficacia y eficiencia en su desempeño; incorporar la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico; perfeccionar el estatuto del Poder Judicial, robusteciendo la imparcialidad, responsabilidad, autonomía e independencia de la judicatura; y establecer mecanismos que posibiliten el constante perfeccionamiento profesional de los jueces y magistrados.

Los proyectos enviados se complementarán con otros referidos a la Judicatura del Trabajo, a los Tribunales de Menores, a los Tribunales Vecinales y a la Corporación de Asistencia Jurídica, que se

encuentran en estudio y esperamos someter próximamente a vuestra consideración, encaminados fundamentalmente a hacer que la justicia esté al alcance de todos.

Nada sería más dañino para el interés nacional que hacer de esta reforma un tema de confrontación política partidista. Como hombre de derecho, vinculado toda mi vida, por múltiples conceptos, a los Tribunales de Justicia, pienso que el perfeccionamiento y modernización del sistema judicial chileno es una necesidad impostergradable. La urgencia de esta necesidad es compartida por los propios magistrados judiciales, según estudios de su Asociación, y por otras entidades preocupadas de la administración de justicia, más allá de diferencias ideológicas o partidistas, como lo prueba el trabajo recientemente publicado por el Centro de Estudios Públicos.

Yo invito a los señores parlamentarios y a todos los partidos políticos, a estudiar esta materia con espíritu constructivo y la mejor disposición a buscar acuerdos. Las ideas contenidas en los proyectos presentados por el gobierno son sólo una base para la discusión. Bien sé que algunas de esas ideas suscitan recelos y que hay también otros proyectos. El gobierno no pretende imponer ningún pie forzado y espera de todos igual predicamento. Si procedemos de esta forma, con sabiduría y buena voluntad, daremos un paso histórico y prestaremos al país un gran servicio.

4. Defensa nacional

La consolidación de nuestra democracia exige que las Fuerzas Armadas perciban y sientan que el pueblo y sus autoridades comprenden y respaldan su papel de instituciones nacionales encargadas de la defensa del país y que, a su vez, el pueblo y las autoridades del Estado perciban y sientan que las Fuerzas Armadas son instituciones que pertenecen a la nación entera, esencialmente profesionales, jerarquizadas y no deliberantes.

El cumplimiento de estas condiciones impone deberes recíprocos.

A la sociedad civil, sus representantes y autoridades, les exige respetar a las Fuerzas Armadas en su honor y en su institucionalidad, dotarlas de los medios necesarios para el cumplimiento de sus tareas y evitar celosamente cualquier intento de procurar instrumentalizarlas para objetivos sectoriales o partidistas ajenos a sus fines.

A las Fuerzas Armadas, especialmente a sus mandos, les exige consagrarse al cumplimiento de sus tareas profesionales, acatar su subordinación a las autoridades superiores del Estado y abstenerse escrupulosamente de cualquier conducta de carácter político o que las vincule especialmente con algún sector partidista.

Esto, que parece tan obvio, no resulta fácil de cumplir cuando

el país viene recién saliendo de un largo período de gobierno militar. Por una parte, las críticas que en la sociedad civil se formulan a ese régimen, de alguna manera tocan a las instituciones mismas y a sus miembros. Por otra, éstos tienden a ver como sus "amigos" a quienes fueron partidarios de ese gobierno y a mirar con cierta distancia a quienes fuimos sus adversarios. Y no faltan quienes, de uno u otro lado, siguen viviendo fieles a esquemas ideológicos del pasado, que dividen a los chilenos en buenos y malos.

El interés superior de Chile nos exige a todos un gran esfuerzo para superar esos obstáculos. Civiles y uniformados tenemos el deber de procurar ser objetivos, evitar generalizaciones y distinguir entre el pasado gobierno y las Instituciones Armadas. Y en la medida misma en que nos concentremos en las tareas del presente y del futuro, dejando atrás el pasado, que la historia juzgará, ese esfuerzo será más fácil y fecundo.

Fiel a su misión fundamental de promover la unidad nacional, mi gobierno está empeñado en que, cada vez más, las Instituciones Armadas y la sociedad civil compartan los mismos valores, como son el amor a la patria, el espíritu de trabajar por su bienestar y grandeza, el respeto a los principios e instituciones democráticas y la estricta sujeción al Estado de Derecho.

Pienso que la experiencia vivida a este respecto en este tiempo es satisfactoria y que el conocimiento mutuo que día a día se va alcanzando, al que ayudan positivamente las distintas instancias de encuentro entre civiles y militares que se están produciendo, deben conducirnos a crear, en bien de Chile, un clima de cada vez más respeto, comprensión y confianza mutua.

Dentro de este marco, nuestra política de Defensa Nacional busca asegurar la conducción superior y la continuidad de funcionamiento operativo cada vez más profesional de las Fuerzas Armadas, apartadas de la contingencia política y dedicadas a su vital misión de seguridad externa y a los múltiples y beneficiosos roles de paz que cumplen día a día.

Comprendemos y asumimos la necesidad de dotarlas, dentro del marco que surge de la multiplicidad de las demandas sociales y la limitación de los recursos financieros, de los medios necesarios para asegurar su eficiencia. La democracia ha demostrado ser una condición favorable para el desarrollo institucional y modernización de las Fuerzas Armadas y para la continuidad de sus niveles operativos, como quedó evidenciado en la aprobación casi unánime por el Congreso Nacional del presupuesto de defensa para el presente año.

En el mismo sentido se orienta el nuevo Programa de Cooperación Internacional para la Defensa puesto en práctica por el Ministerio del ramo, destinado a abrir nuevas oportunidades de educación y entrenamiento militar avanzado, de especialidades tec-

nológicas y de comando y apoyo para nuestros uniformados, como asimismo a ofrecer oportunidades de adquisición, en condiciones favorables, de materiales, equipos, piezas y partes requeridas por nuestras Instituciones Armadas. El primer ejemplo de esta nueva acción es el programa conjunto convenido en marzo último entre los Ministerios de Defensa de Chile y de los Estados Unidos.

Durante el período que comprende esta cuenta, se ha seguido desarrollando en el Ejército de Chile un proceso de estudio de medidas que posibilitan perfeccionar la administración de los recursos humanos y materiales y el apoyo logístico para actividades fundamentales, como la instrucción del personal y el entrenamiento de las unidades. Igualmente, esta rama ha llevado a cabo inversiones de mantención y construcción de la red vial de las zonas apartadas.

La Armada de Chile, por su parte, además de sus tareas habituales de capacitación profesional, dio cumplimiento a sus planes de reparaciones y recuperaciones, destacándose la transformación de unidades mayores, tanto de superficie como submarinas. Asimismo, desarrolló un extenso programa de participación en investigaciones sobre geología marina, contaminación del medio acuático y climático mundial. Complementando sus tareas de patrullaje marítimo, en noviembre último se creó la Patrulla Antártica Naval, para tareas de remolque, rescate, salvataje, control y combate contra la contaminación. Y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante acudió en auxilio, en múltiples oportunidades, de chilenos y extranjeros víctimas de siniestros o emergencias marítimas.

A su vez, la Fuerza Aérea ha continuado con su labor de fomento del desarrollo de la industria aeronáutica nacional y de investigación científica y tecnológica relacionada con esa industria. Y, recientemente, ha asumido una importante participación en la misión de observación de las Naciones Unidas entre Irak y Kuwait (Unikom), enviando un grupo de seis helicópteros y cincuenta oficiales y sub-oficiales a esa zona desmilitarizada, misión para la cual fue seleccionada por Naciones Unidas por su reconocida capacidad profesional.

5. La seguridad ciudadana

Preocupa especialmente al gobierno la necesidad de garantizar a todos los ciudadanos las condiciones de seguridad indispensables para toda convivencia civilizada.

Esta seguridad está siendo seriamente afectada por dos fenómenos frecuentes en las sociedades contemporáneas, la delincuencia y el terrorismo, que preocupan justificadamente a la población.

El gobierno tiene cabal conciencia de la gravedad y peligro de estos males, que está encarando con toda energía dentro del marco de nuestro ordenamiento jurídico y con los medios de que dispone.

La investigación y sanción de los delitos, sean comunes o terroristas, compete exclusivamente a los tribunales, asistidos por las Fuerzas de Orden y Seguridad, integradas por Carabineros de Chile e Investigaciones. Ello constituye una base primordial sobre la que se construye el Estado de Derecho. Ignorarla o sobrepasarla sería el principio del fin de nuestra democracia.

Por otra parte, la prevención y represión de la delincuencia común y el terrorismo han de hacerse siempre respetando los derechos civiles de las personas. La acción contra la delincuencia y el terrorismo no puede ni debe ser sinónimo de barbarie, del empleo de la tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes. De no ser así, la larga y dolorosa lucha sostenida por este pueblo para reconquistar sus libertades y derechos tradicionales carecería de todo sentido.

Permítaseme referirme separadamente a la forma como el gobierno entiende y encara la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.

a. *La delincuencia*

Nuestra política frente a la delincuencia contempla tres objetivos: su prevención, su represión y la rehabilitación del delincuente.

Pienso que el fenómeno de la delincuencia se explica, en parte importante, por las condiciones socioeconómicas existentes, particularmente las que afectan a los sectores más desposeídos. La progresiva superación de lacras como la extrema pobreza y la cesantía juvenil, traerá consigo avances importantes en la superación de la delincuencia. Si bien la constatación de este hecho poco puede influir en el enfrentamiento del problema en el corto plazo, llamo al país a tenerlo siempre presente y a aquilatar, por consiguiente, la relevancia de todos los avances que se puedan hacer hacia una mayor justicia social.

Las nuevas características que ha adquirido el fenómeno de la delincuencia están estrechamente relacionadas con los contenidos de violencia que atraviesan nuestra cultura. Reitero mi llamado a los responsables de los medios de comunicación, a los educadores, a las familias, a las iglesias, a los formadores de opinión y al conjunto de la ciudadanía para que, abandonando la desidia en que frecuentemente incurrimos, luchemos pacientemente por la difusión de una cultura que privilegie la vida, la paz, el respeto a los otros y el control de sí mismo.

Otro factor determinante de la delincuencia en las sociedades

modernas es el fenómeno de la drogadicción y el consiguiente tráfico de estupefacientes. Estamos encarando decididamente la amenaza de este flagelo, mediante la acción coordinada de los organismos policiales, de salud, de aduana, como asimismo mediante la cooperación con otros países del continente. Mediante Decreto Supremo, hemos creado el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, cuya función es coordinar al conjunto de las instituciones y servicios del Estado en la acción contra la producción, tráfico ilícito y consumo indebido de drogas.

Hay también una cuota importante de responsabilidad que incumbe al sector privado en la prevención del delito. Esto es manifiesto en el caso de los bancos. Se está estudiando en el Ministerio del Interior, con la participación de la Asociación de Bancos, un reglamento de aplicación común a todas las instituciones bancarias para mejorar los mecanismos de prevención y represión de los asaltos a ellas. Espero que el sector privado encare, de una vez por todas, la responsabilidad que le cabe en esta materia. La seguridad es un bien que tiene un precio, y no hay justificación alguna para que instituciones como las bancarias no contribuyan a pagarlo.

Respecto de la represión del delito, además del complemento presupuestario otorgado a Carabineros de Chile el año pasado para crear nuevas plazas, mediante una ley de febrero de este año se aumentó la dotación en 4.400 plazas, que el gobierno espera poder proveer durante este año y el próximo, adelantándose así los plazos primitivamente previstos. Hoy puedo informar con satisfacción que la próxima semana prestarán juramento y se incorporarán 1.100 nuevos carabineros. Estamos haciendo todo lo posible por aumentar sustancialmente los recursos materiales y técnicos de Carabineros e Investigaciones, y por mejorar su capacitación.

La actividad delictual se alimenta principalmente de la reincidencia del menor en situación irregular. En términos de una política de mediano plazo, es esta profesionalización del delincuente la que debemos evitar. Por ello, la rehabilitación y la situación de los menores merece especial preocupación.

Para 1991 y los años que siguen, hemos estimado indispensable atender prioritariamente las necesidades más urgentes del sistema carcelario, a cargo de Gendarmería de Chile y del Servicio Nacional de Menores.

b. El terrorismo

El terrorismo y la violencia política, mal que afecta contemporáneamente a muchos países, no es un fenómeno que haya surgido durante este gobierno. Lo enfrentó también el gobierno militar.

Frente a la lacra del terrorismo, no faltan los que hacen caudal

de la supuesta ineficacia de las democracias para prevenirlo y reprimirlo, comparativamente con la supuesta eficacia de los autoritarismos. El argumento es recurrente en quienes añoran el pasado autoritario. Parecen olvidar muchos hechos de ese pasado, que atestiguan en un sentido contrario. También olvidan que si este fenómeno está reducido a unas pocas organizaciones, ello se debe a que los partidos políticos que son hoy gobierno supieron adoptar un comportamiento político que rechazó la lógica de la guerra y el empleo de la violencia.

Si los partidos de la Concertación no hubieran sido capaces de crear un gran consenso social en torno a la idea de que se podía y debía luchar por la libertad a través de medios pacíficos, el fenómeno terrorista tendría hoy una magnitud que tal vez haría imposible la consolidación de nuestra democracia.

Reitero, una vez más, mi convicción de que la democracia puede protegerse eficazmente contra el terrorismo, tal como lo han hecho con éxito otras democracias, y que puede y debe hacerlo respetando su propia esencia. Prevendremos la acción terrorista y la perseguiremos empleando a fondo nuestra voluntad, cada vez con mayor eficacia, en el marco del Estado de Derecho democrático, respetando las competencias y atribuciones propias de cada poder e institución del Estado.

La definición de las políticas contra el terrorismo es una cuestión de Estado. No puede ser asumida con criterios partidistas, según lógicas electoralistas o en términos de un campo de confrontación entre gobierno y oposición. Necesitamos en esta materia del más amplio consenso. Por esa razón, en marzo pasado convoqué a las directivas de todos los partidos con representación parlamentaria para solicitarles su colaboración a fin de que el país enfrente unido el terrorismo, única forma de aislar a sus actores. El gobierno celebra la constitución de comisiones parlamentarias que participan en el estudio y definición de las estrategias de lucha antiterroristas, y confía en que el examen conjunto del tema conduzca a consensos en que todos los demócratas nos comprometamos a fondo, renunciando a utilizarlo como factor de eventuales ventajas partidistas.

En el enfrentamiento del terrorismo, cabe distinguir tres tipos de medidas. Primero, el desempeño de la función preventiva de inteligencia; segundo, las medidas políticas y sociales de prevención; tercero, la función de investigación y sanción de hechos terroristas.

Contemporáneamente, en la prevención del terrorismo y la violencia política ha adquirido suma importancia la función de inteligencia preventiva, que incluye la planificación estratégica y coordinación de las actividades de las instituciones y servicios estatales competentes en esta materia.

Es por ello que el gobierno ha considerado necesario dar una

institucionalidad mayor a estas actividades, creando, con el carácter de órgano asesor, el Consejo Coordinador de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio del Interior. Cabe destacar que este Consejo contempla, dentro de su estructura orgánica, además de un Comité de Asesoría Directa, un Comité Consultivo de Inteligencia integrado por el subsecretario de Interior, los jefes de Inteligencia de cada una de las tres ramas de la Defensa Nacional, y los jefes de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad. De esta manera, se dispone de un espacio institucional para la articulación del conjunto de la comunidad nacional de Inteligencia, lo que permitirá aumentar la eficacia en la prevención del terrorismo.

Frente a las críticas de quienes han estimado insuficiente la creación de este organismo, considero necesario precisar lo siguiente:

- El gobierno está abierto a considerar todas las ideas y espera sugerencias concretas del Senado, al cual hizo una consulta; de las comisiones parlamentarias y de los partidos políticos. Su propósito es proponer al Congreso, sobre la base de la experiencia acumulada y de las propuestas que reciba, un proyecto destinado a dar estructura legal al organismo que en definitiva se encargue de estas tareas. Entretanto se estudia, discute y aprueba ese proyecto, está procediendo por la vía administrativa, en ejercicio de sus facultades, frente a la urgencia del asunto;
- Lo que el gobierno no aceptará en ningún caso es la creación, para combatir el terrorismo, de organismos como los que existieron en el régimen pasado, claramente incompatibles con las normas constitucionales y con los principios democráticos.

La prevención del terrorismo descansa, en gran medida, en su aislamiento político, social y cultural.

Cuando todas las fuerzas políticas socialmente significativas rechazan públicamente el terrorismo, de manera incondicional y descalificándolo absolutamente, entonces se ha dado un gran paso adelante en su prevención. En esta materia, no caben ambigüedades de ninguna especie. Reitero el emplazamiento a quienes persisten en posturas equívocas sobre tan grave asunto. La democracia chilena no quiere exclusiones ni excluidos, pero para ser parte de ella se requiere de un compromiso incondicional con sus reglas.

La prevención y represión eficaces del terrorismo exigen también un cambio en la mentalidad colectiva de muchos sectores de la sociedad. Probablemente, hay quienes siguen viendo en la acción terrorista o violentista la obra de idealistas o héroes románticos, o que la miran con lenidad en razón de consideraciones sociales o económicas. Necesitamos de una decidida acción educativa y cultural que persuada a los chilenos de que el terrorismo es sinónimo de

delincuencia, y que contribuir a prevenirlo o al progreso en la investigación de hechos terroristas no es un acto censurable, sino una expresión de coraje cívico y de preocupación por el bien común.

Llamo a todos los chilenos a cooperar en este esfuerzo por cambiar mentalidades frente al terrorismo, condición ineludible de su aislamiento.

Otro problema importante que plantea la prevención del terrorismo reside en lo que podríamos llamar la rehabilitación del terrorista. Para las personas que ingresan a las organizaciones terroristas es sumamente difícil abandonarlas. La naturaleza de dichas organizaciones es tal, que lleva a que sus miembros, aun cuando se arrepientan y tengan una firme voluntad de reintegrarse a la vida social y política democrática, no puedan escapar al círculo vicioso en que se encuentran.

El Estado debe ir en ayuda de quienes buscan esa reintegración. Al hacerlo, además de tender una mano a muchas personas que se encuentran en situaciones desesperadas, debilita el fenómeno terrorista mismo. Es por ello que he iniciado un proyecto de ley que facilita la cooperación con la Justicia de aquellos miembros de organizaciones terroristas que quieren reintegrarse a la sociedad.

En cuanto a la investigación y sanción de los delitos terroristas con arreglo a la Constitución y las leyes, es tarea que compete exclusivamente a la Judicatura, asistida por Carabineros e Investigaciones. En el cumplimiento de esta función, cuentan con el apoyo irrestricto que al Poder Ejecutivo le cabe otorgar dentro de sus atribuciones, y confío en que ese mismo apoyo le prestarán todas las instituciones y sectores de la sociedad.

Igualmente, no me cabe duda de que, con serenidad y coraje cívico, sin sacrificar las libertades y los derechos civiles, alcanzaremos niveles de eficacia cada vez mayores al enfrentar el terrorismo, tutelando con efectividad creciente el valor de la seguridad ciudadana, consustancial a la convivencia pacífica y a la democracia.

6. Perfeccionamiento del Estado

Con la mira de hacer más eficaz el funcionamiento del Gobierno, propusimos durante este primer año sendos proyectos para modificar las leyes que rigen a los Ministerios Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno, y para transformar la antigua Oficina de Planificación Nacional en el Ministerio de Planificación y Cooperación. El despacho de esos proyectos, convertidos en las Leyes Nos. 18.993, 19.032 y 18.989, respectivamente, ha significado un importante mejoramiento en nuestra organización administrativa.

También el gobierno ha presentado, o tiene en estudio, otros proyectos encaminados a superar rigideces y a hacer más expedito el funcionamiento de la Administración del Estado.

Simultáneamente, se han estado estudiando algunos proyectos, de mayor alcance, para concretar los criterios sobre democratización institucional contenidos en las Bases Programáticas que la Concertación de Partidos por la Democracia presentó al país en la campaña electoral que condujo a mi elección de Presidente de la República. Ellos se refieren, entre otras materias, a la existencia de senadores no elegidos en votación directa, a la actual modalidad de integración del Tribunal Constitucional, al sistema electoral que se emplea en las elecciones parlamentarias, al estatuto y financiamiento de los partidos políticos, al sistema de designación y permanencia de los jefes de Instituciones Armadas y de Orden, a la dependencia de Carabineros e Investigaciones, a la extensión del período presidencial, y a vigorizar el rol del Congreso Nacional en sus relaciones con el Poder Ejecutivo.

Sobre la necesidad de introducir reformas en algunas de estas materias, hubo consenso en los estudios conjuntos que se realizaron entre la Concertación de Partidos por la Democracia y Renovación Nacional a comienzos de 1989, y si ellos no se incorporaron a la reforma constitucional aprobada en el plebiscito de julio de ese año, fue porque el gobierno de la época no prestó su consentimiento.

Frente a la mera posibilidad de que estas reformas se planteen a la consideración legislativa, se han levantado voces que sostienen que ellas crearían un clima de incertidumbre o afectarían la estabilidad nacional, y aun acusan al gobierno de querer "desmantelar" la Constitución.

Considero injustificadas aquellas aprensiones y rechazo categóricamente tan ligera acusación. Desde luego, dado el mecanismo que la Carta Fundamental establece para su reforma, que exige quórum calificado, y teniendo en cuenta la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional, no existe la menor posibilidad de que la Constitución sea "desmantelada". Mi gobierno carece de la mayoría parlamentaria requerida para aprobar, sin la concurrencia de senadores institucionales o de oposición, ninguna reforma constitucional. La viabilidad de futuras reformas está condicionada, por consiguiente, a que se alcance consenso para llevarlas a cabo.

Como tengo el más profundo convencimiento de que las normas constitucionales vigentes en esas materias —que no nacieron de un consenso— son incompatibles con un sistema de gobierno verdaderamente democrático y pueden perjudicar el buen funcionamiento del Estado, abrigo la esperanza de alcanzar, en su oportunidad, los acuerdos necesarios para poder modificarlos. Y no veo por qué razón abordar esas reformas podría afectar la estabilidad de nuestro

régimen político. Por el contrario, lo que pone en peligro tal estabilidad es el hecho de que algunas instituciones o mecanismos aparezcan como injustos o arbitrarios para gran parte de la población, que cuestiona su legitimidad. Respecto de ellas se requiere de un gran acuerdo que, al promover su reforma a partir de un amplio consenso, elimine esa fuente de potencial inestabilidad. Alcanzar un entendimiento en esas materias significaría dar un gran paso en la consolidación de nuestra democracia.

Como el planteamiento de esas reformas formó parte del Programa de Gobierno con que fui elegido, considero un compromiso mío con el pueblo proponerlas durante mi período. La oportunidad en que lo haga dependerá de las circunstancias, en especial de los acuerdos que, a su respecto, puedan irse produciendo. En todo caso, las reformas que ahora tenemos en tabla son las relativas al régimen municipal y regional y al sistema judicial. Mientras no avancemos en éstas, pienso que sería prematuro proponer otras.

III. *La Justicia Social*

Como lo he repetido muchas veces, para este gobierno la justicia social es un imperativo moral. Repugna a la conciencia la visión de una sociedad que es capaz de prosperar mientras mantiene en su seno desigualdades sociales tan profundas como las existentes en nuestro país. Porque ciertamente en los últimos años Chile experimentó un crecimiento económico importante, pero los frutos de ese crecimiento se concentraron en unos pocos, sin beneficiar a los trabajadores ni a la multitud de compatriotas que viven en situación de pobreza.

No hemos llegado al gobierno simplemente para administrar ese estado de cosas, sino para procurar cambiarlo. Por ello, desde el comienzo de nuestra gestión iniciamos un vigoroso esfuerzo para comenzar a revertirlo. Pese a las limitaciones y trabas con que nos encontramos, hemos obtenido logros importantes, que constituyen el inicio de un proceso que integrará crecientemente a los trabajadores y a los pobres a los frutos del desarrollo.

Durante el año transcurrido desde que asumí la Presidencia de la República, no obstante la política de ajuste que fue necesario aplicar, los salarios reales aumentaron en 7,2 por ciento, lo cual ha permitido que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo de que gozaban hace veinte años.

Por otra parte, la entrada en vigencia de la Reforma Tributaria, hecha posible por una actitud política responsable de la mayoría de la oposición, cuya aplicación generará mayores recursos fiscales,

cercanos a los 600 millones de dólares, permitió aumentar el gasto social de manera importante, particularmente en relación con los subsidios masivos que deberemos mantener durante un largo tiempo para aliviar la situación de los más pobres.

Más de 90 por ciento de los recursos adicionales obtenidos financiaron diversos programas sociales; entre otros, el reajuste extraordinario de las pensiones de más de 70 por ciento de los pensionados de menores ingresos, y el aumento de las asignaciones familiares y del subsidio único familiar.

Con el mismo espíritu enfrentamos el grave problema social que significaba la existencia, hacia el 1 de junio de 1990, de más de 320 mil deudores habitacionales de los Servicios de Vivienda y Urbanismo, Serviu, de los cuales 70 por ciento eran morosos. Esta situación repercutía negativamente en la operación del sistema habitacional, en los ingresos fiscales y, lo que es más importante, en la seguridad de las familias morosas.

Para atender a este grave problema se aplicó un programa de repactación global de deudas, que culminó en enero de este año. Con este programa, 137 mil deudores terminaron de pagar sus deudas, asegurando la propiedad de sus hogares, y casi 100 mil celebraron convenios equitativos que les han permitido regularizar su situación.

Con el mismo criterio se dispuso lo que se llamó la "renegociación de la deuda vencida de los pobres", que permitió a 91.805 familias solucionar sus problemas de deudores morosos de los servicios de luz y agua potable, muchas veces cortados, y a 338.014 pequeños propietarios regularizar su situación de contribuyentes de bienes raíces. Y tal acción no constituye un simple "perdonazo". Se trata de buscar soluciones de equidad que hagan posible, a los sectores más postergados, superar situaciones de emergencia y avanzar hacia mejores condiciones de vida.

El gobierno ha definido su política hacia la pobreza a través del concepto de integración al desarrollo, que busca enfrentarla en todas sus dimensiones, lo cual exige una coordinación de ministerios, servicios y reparticiones. Nuestro propósito es superar el asistencialismo estatal, alentando la participación de los afectados en la búsqueda de soluciones y estimulando el desarrollo de la pequeña y microempresa como los mejores caminos para reducirla. A la vez, estamos dirigiendo esfuerzos especiales hacia los grupos más desvalidos: las mujeres pobres jefas de hogar, los jóvenes y los ancianos.

Una de nuestras preocupaciones permanentes es que el gasto social efectivamente beneficie a quienes lo necesitan, y que ese beneficio se otorgue eficaz y eficientemente. Con tal fin, se realizó en 1990 una encuesta de caracterización socioeconómica que permitirá evaluar de manera sistemática las políticas sociales e identificar las

correcciones requeridas. Igualmente, se supervisó la encuesta CAS II, que evalúa el impacto de los diferentes subsidios sociales en el nivel comunal en todo el país.

Uno de los avances más significativos en esta materia ha sido la puesta en marcha del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis, que apoya el propio esfuerzo de la gente por superar la pobreza. Ponemos así en práctica uno de los lemas de mi programa: "Ayúdate, que yo te ayudaré".

Conjuntamente con el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, Indap, la Comisión Nacional de Riego y los campesinos organizados, el Fosis está financiando pequeñas obras de riego, principalmente en las zonas más afectadas por la sequía, que benefician a 10 mil familias.

El Fosis está también financiando más de doscientos proyectos, referidos a microempresas urbanas y rurales, pesca artesanal, capacitación comunitaria, cuidado de menores, nutrición y prevención de salud. Conjuntamente con ello, se realiza un programa de desarrollo de la pequeña producción, destinado a aumentar los ingresos y crear condiciones estables de trabajo para una parte importante de los pequeños productores.

También se está trabajando en un programa de apoyo a la alimentación popular en Santiago y la Quinta Región. Merece mencionar, además, un programa conjunto con Enami, la Empresa Nacional de Minería, de ayuda técnica y crediticia a los pirquineros, y otro con la Comisión Especial de Pueblos Indígenas para auxiliar a ese postergado grupo de chilenos.

En el fundamental ámbito de la cesantía juvenil, a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social se ha iniciado un Programa de Capacitación y Desarrollo de la Educación Técnica, destinado prioritariamente a jóvenes desempleados y que da especial importancia a los que padecen condiciones de marginalidad social. Se espera capacitar este año a aproximadamente 15 mil jóvenes, utilizando una metodología que considera la capacitación simultánea en instituciones de enseñanza técnica y en empresas.

En este mismo sentido, frente al flagelo de la cesantía juvenil, en diversas regiones del país se desarrolla un programa piloto de oficinas municipales de colocación y, en forma conjunta, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Planificación y Cooperación, Mideplan, estudian modalidades que permitan reorientar la educación media dándole una utilidad laboral.

Estos criterios de equidad inspiran nuestras políticas sociales en los ámbitos laboral, de la salud, de la educación y de la vivienda, según paso a detallar.

1. La política laboral

El criterio que ha orientado nuestra política del trabajo ha sido construir una institucionalidad laboral estable, asentada en una real legitimidad social y política, que asegure la equidad en las relaciones laborales y establezca a la vez bases sólidas para el crecimiento sostenido de la economía.

Creemos estar avanzando firmemente en ese sentido. La política de diálogo con trabajadores, empresarios y fuerzas políticas, si bien a algunos puede parecer lenta y engorrosa, ha constituido un procedimiento eficaz para lograr las soluciones más consensuales posibles, y de ese modo asegurar la mayor legitimidad social a los avances logrados.

En este ámbito del diálogo social, al acuerdo marco suscrito el año pasado con la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y la Confederación de la Producción y del Comercio, sobre remuneraciones mínimas, asignaciones familiares y reajuste de pensiones, siguió otro suscrito en octubre con la CUT y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, sobre reajuste de 25 por ciento de las remuneraciones del sector público y otros beneficios. Posteriormente, en febrero de este año, se firmó un acuerdo tripartito en materias laborales del sector portuario, con participación de las organizaciones sindicales más representativas de ese sector y sus respectivos empleadores. Así también, desde el año pasado viene realizándose, en conjunto con los Ministerios de Interior, Hacienda y Economía, un intercambio de ideas y proposiciones con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales para identificar alternativas de regulación de las asociaciones de trabajadores del sector público, que esperamos concretar en breve plazo. Finalmente, en abril último se suscribió un nuevo acuerdo entre el gobierno, la CUT, la Confederación de la Producción y la Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana y pequeña Industria, Servicios y Artesanado de Chile, Conupia, para elevar a 33.000 pesos el ingreso mínimo, reajustar las asignaciones inferiores a 84.000 pesos mensuales y regular la restitución de 10,6 por ciento a los pensionados que no la obtuvieron el año pasado. Para legalizar estos acuerdos, el gobierno ha sometido al Congreso Nacional los proyectos respectivos.

En el ámbito legislativo, los importantes acuerdos alcanzados tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, han permitido el despacho de los proyectos sobre Terminación del Contrato de Trabajo y Estabilidad en el Empleo, que constituyen sustanciales avances en las respectivas materias; sobre personalidad jurídica de las Centrales Sindicales y sobre organización sindical y negociación colectiva, los dos primeros convertidos en las Leyes Nos. 19.010 y 19.049, y el último, ya aprobado por el Honorable Congreso, en

trámite de control de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional.

Para completar este proceso de modernización y mejoramiento de nuestra legislación laboral, el gobierno acaba de enviar al Congreso los proyectos sobre Contrato Individual de Trabajo y sobre Judicatura del Trabajo y Procedimiento Laboral, que confío encuentren de vuestra parte la favorable disposición que por su importancia merecen. Una vez despachados estos proyectos, estaremos en condiciones de refundir en un solo texto esta legislación, que constituirá el nuevo Código del Trabajo acordado en democracia.

Pero no basta con buenas leyes; hay que asegurar que se cumplan. Ello exige una decidida política de fiscalización. En este aspecto, se ha modernizado la Dirección del Trabajo y se ha aumentado su dotación en 20 por ciento; se ha puesto énfasis en las funciones de conciliación y mediación, con claros frutos en cuanto a prevención y resolución de conflictos; se aumentó la ejecución de programas de fiscalización por rama de actividad y área geográfica, sin descuidar la fiscalización reactiva; se puso énfasis en la fiscalización de sectores tradicionalmente reacios al cumplimiento de las obligaciones laborales y en sectores históricamente no fiscalizados, como contratistas mineros, pequeño comercio y servicios, faenas forestales y agroindustria. Este conjunto de actividades benefició en 1990 a más de medio millón de trabajadores.

En materia de previsión social, aparte del reajuste de las pensiones mínimas y asistenciales y del mejoramiento de las asignaciones familiares, se pusieron en vigencia las cuentas en las Administradoras de Fondos Previsionales, AFP, para trabajadoras de casa particular y de trabajadores regidos por el Código del Trabajo que pactan una indemnización "a todo evento", de acuerdo a la Ley N° 19.010. A partir del 1 de octubre, se estableció el pago preliminar de pensiones por las AFP, con lo que se resolvió el problema de los períodos de espera, reduciéndose el tiempo promedio de pago de siete meses a quince días. En agosto de 1990 entró en vigencia la pensión de invalidez parcial.

Del mismo modo, se encuentran actualmente en estudio iniciativas para aumentar la cobertura del sistema de previsión e introducirle elementos de mayor solidaridad, para posibilitar la pensión anticipada a los trabajadores que realizan faenas pesadas, mejorar el estatuto de las Cajas de Compensación, agilizar y modernizar el Instituto de Normalización Previsional, y numerosas otras tendientes a resolver diversos problemas en el ámbito previsional.

2. Política de educación

En el ámbito educacional, la acción del gobierno se ha encaminado, fundamentalmente, a mejorar la calidad y equidad de los servicios, procurar el mejoramiento profesional y socioeconómico del profesorado, abrir nuevos canales a la participación social e incrementar la inversión pública en educación.

Entre las acciones llevadas a cabo para el logro de esos objetivos, merecen destacarse especialmente las siguientes:

- a. El Programa de Mejoramiento de Calidad en Escuelas Básicas Pobres, que el año último benefició a 969 escuelas municipales y subvencionadas en todo el país, con más de 160 mil alumnos, y el presente año alcanza a 1.385 escuelas, con más de 220 mil alumnos.
- b. Los programas de alfabetización y educación de adultos, que en 1990 atendieron a alrededor de 20 mil personas y este año beneficiarán a 25 mil.
- c. El reequipamiento y mejoramiento docente de liceos técnico-profesionales municipalizados mediante la renovación de equipos, que este año se espera realizar en 41 establecimientos, lo que se financia con recursos de la Reforma Tributaria y de la cooperación española.
- d. El aumento sustancial de la asistencialidad escolar. En el segundo semestre del año último se incrementó el programa de alimentación escolar hasta 577.609 raciones de desayunos y almuerzos diarios, y este año se ha elevado algo más. Por otra parte, el programa de colonias escolares, campamentos de verano y alimentación de escuelas durante enero y febrero, benefició en la última temporada a 126 mil niños. Y el presente año se aumentó más que al doble el esfuerzo de distribución gratuita de textos escolares —se llegó a 4.523.938 unidades, en las asignaturas de Castellano, Matemáticas, Ciencias Naturales, e Historia y Geografía—, que ha beneficiado a 1.570.400 alumnos de enseñanza básica. Además, 1 millón 100 mil niños han recibido este año útiles escolares.
- e. En el ámbito de la educación superior, el año último se entregaron aportes suplementarios por 4.000 millones de pesos para cubrir los déficit de los fondos de créditos universitarios, y este año se contempla otro aporte extra de 3.650 millones. A fin de solucionar la situación de los deudores de crédito fiscal en mora, que afecta a más de 80 mil egresados universitarios, presenta-

mos un proyecto de ley para reprogramar su pago en doce años, proyecto actualmente en el Senado en segundo trámite constitucional. Por otra parte, implementamos un nuevo programa de 5 mil becas completas para estudiantes meritorios de escasos recursos que ingresen al primer año universitario en 1991, programa que seguirá incrementándose progresivamente en los años posteriores.

- f. Con el fin de establecer la carrera docente y dignificar la función del profesor, presentamos en octubre último al Congreso Nacional el proyecto de ley, actualmente pendiente en el Senado, sobre Estatuto Docente, que tiende a reconocer a los profesores estabilidad en sus empleos y una remuneración básica mínima nacional susceptible de mejoramiento por antigüedad, perfeccionamiento y otros factores.
- g. El gobierno ha sometido también a la consideración del Congreso un proyecto de ley para perfeccionar los mecanismos de asignación, utilización y control de las subvenciones educacionales; y
- h. A fin de promover la participación de los interesados, se dictaron nuevas normas para el funcionamiento de los Centros de Padres y Apoderados, de los Centros de Alumnos en la educación media y de los Consejos de Profesores, y se crearon por decreto los Consejos Provinciales de Educación.

En cuanto a las universidades, es digna de destacar la forma rápida, participativa y no confrontacional en que se ha llevado a cabo el proceso de transición al pleno ejercicio de su autonomía, renovando sus autoridades mediante decisiones de sus respectivas comunidades académicas. A fin de definir una política nacional universitaria y preparar un proyecto de nueva ley de educación superior, se constituyó una Comisión de Estudios ampliamente representativa, que cumplió su cometido con eficiencia y prontitud. El gobierno está estudiando sus propuestas para tomar las decisiones correspondientes. Entretanto, se trabaja para enfrentar los problemas más agudos del sistema, entre ellos aliviar los déficit de las universidades, para lo cual se han elevado los aportes estatales en un 15 por ciento real.

En el presente año y los siguientes, se continuará y profundizará el esfuerzo para mejorar la calidad y la equidad de la educación en sus niveles prebásico, básico y medio, en un programa de cinco años de duración, que cuenta con un financiamiento especial del Banco Interamericano de Desarrollo y que comprende mejoramiento de infraestructura física de las escuelas, bibliotecas escolares, textos, perfeccionamiento docente y otros.

Especial preocupación merece al gobierno el mejoramiento de la educación media, especialmente en el aspecto técnico-profesional. Durante este año y el próximo, esperamos renovar el equipamiento de la mayoría de los establecimientos de este carácter traspasados a las municipalidades, lo que queremos sirva no sólo para mejorar su funcionamiento regular, sino también para atender más eficazmente los programas intersectoriales de capacitación de jóvenes desempleados.

Uno de los problemas más serios que afecta a la sociedad chilena, es la falta de horizontes y oportunidades para la juventud. Signos relevantes de ese fenómeno son las altas tasas de deserción escolar y las aún mayores de desocupación juvenil, fenómenos que a su vez empujan a muchos jóvenes al alcoholismo, la drogadicción, la prostitución y la delincuencia. Chile está en deuda con sus jóvenes, y la mejor forma de pagar esa deuda es ofreciéndoles un sistema educacional, sobre todo a nivel medio, que los capacite moral y profesionalmente para trabajar. Este es un tema que trasciende la capacidad de un Ministerio y en el cual todo el país y el Estado en su conjunto debemos comprometernos. Hago un formal llamado a mis compatriotas a colaborar en el esfuerzo nacional de pensar en el porvenir de nuestra juventud y buscar caminos para abrirle nuevas perspectivas.

3. La política de salud

En mi Mensaje del año pasado, representé la situación profundamente negativa que, al asumir el gobierno, enfrentamos en materia de salud, destacando el grave retraso tecnológico, la insuficiencia de recursos y el deterioro de la infraestructura de los hospitales públicos, las dificultades e insuficiencias de la atención de salud en los consultorios municipalizados y el desamparo de la clase media por las fallas del sistema de libre elección.

Durante los primeros meses de gobierno, los equipos técnicos pudieron comprobar que la magnitud del deterioro era mayor que la estimada en un comienzo, y que ello obligaba a iniciar acciones de emergencia para corregir las innumerables deficiencias acumuladas en un largo proceso de no inversión y falta de prioridad sobre la atención de salud, especialmente a nivel de los hospitales.

Con este diagnóstico y con la inevitable urgencia provocada por la realidad de la atención de salud y su alta prioridad para la opinión pública, el gobierno inició sus tareas en este importante sector social.

En primer lugar se ha privilegiado la calidad, cantidad y condiciones de trabajo del recurso humano del sector público de los

servicios de salud, cuyo aporte al buen funcionamiento de consultorios y hospitales es primordial. Para ello se otorgó, a contar de septiembre de 1990, una Asignación Compensatoria de salarios con un valor total de 1.075 millones de pesos, que inició la corrección de una injusta situación remunerativa, junto con una serie de iniciativas de bienestar y capacitación.

A contar de enero de 1991, los servicios de salud cuentan con 2 mil nuevos funcionarios, que han permitido disminuir el déficit de personal a lo largo del país. Entre tales contrataciones, cabe hacer notar la de 521 nuevos médicos en becas de perfeccionamiento de postgrado y de 251 médicos generales de zona para servir a las regiones alejadas. Contrástense estas cifras con un promedio de 95 cargos anuales provistos para médicos en el régimen anterior.

Durante 1990, se asignaron al Ministerio de Salud recursos adicionales provenientes de la Reforma Tributaria por 10.000 millones de pesos, los cuales se destinaron a corregir déficit no financiados del gasto público y a las imprescindibles reparaciones mayores de la parte oculta de 90 hospitales, esto es, de sus centrales térmicas, lavanderías y cocinas. Para 1991, el presupuesto aprobado contempla un aumento de 15 por ciento real, destinado fundamentalmente a las inversiones en infraestructura y equipamiento, y aumentos sustanciales en bienes y servicios de consumo.

Este año se está iniciando una inversión de 21.000 millones de pesos, provenientes tanto del crédito multilateral como bilateral y de los recursos sectoriales.

Se iniciaron las obras de normalización de los hospitales de los servicios de salud de Iquique, San Felipe, Los Andes y Valdivia, además del Hospital Regional de Chillán. Con la cooperación alemana, se está equipando y modernizando la totalidad de los hospitales de las regiones de la Araucanía, Concepción-Arauco, Valparaíso-San Antonio y Sur Oriente de Santiago. Con otras cooperaciones bilaterales se están adquiriendo equipos por 7.000 millones de pesos, los cuales se distribuirán en el resto del país. Cabe hacer notar aquí que seis importantes hospitales del sector público contarán con scanners de última tecnología, a la que anteriormente la mayoría de sus usuarios no tenía acceso.

Para mejorar el acceso a la salud, dijimos hace un año que se haría efectiva la atención libre de pago en los consultorios; se dotaría a 60 de ellos de más recursos para farmacia y más personal, de manera que pudieran extender sus horarios; y se organizarían servicios de atención de 24 horas en 12 de ellos. Hoy día podemos decir con satisfacción que la atención gratuita es una realidad; que se aumentó en 50 por ciento el gasto en medicamentos en 104 comunas rurales y 241 urbanas; se estableció un tercer turno en 50 consultorios, y existen funcionando 15 servicios de atención primaria

de urgencia. A nivel de la atención primaria, se ha lanzado este año un importante refuerzo hacia la salud rural, la promoción de salud y prevención de enfermedades crónicas, la salud mental y la participación de los organismos no gubernamentales, gracias a una importante donación del gobierno de los Estados Unidos de América.

Hace un año dijimos que de las 703 ambulancias existentes en el sector público, había 53 por ciento en mal estado o fuera de servicio. Hoy podemos decir que hemos adquirido 240 nuevas ambulancias, 157 de las cuales fueron donadas por el gobierno de Francia en un gesto generoso y oportuno. Para el presente año se están adquiriendo vehículos especiales de rescate que servirán en la atención expedita de los accidentados, los cuales constituyen la tercera causa de muerte en nuestras estadísticas.

Desde septiembre de 1990 se encuentra en funciones la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional, Isapres, entidad creada por la ley respectiva y que a nuestro gobierno correspondió implementar. Su trabajo hasta la fecha le ha permitido resolver numerosas controversias y proteger el interés no siempre respetado de los afiliados; a la vez, ha preparado un nuevo proyecto de ley que establecerá la máxima equidad compatible con el funcionamiento de este sistema de seguro privado de salud.

Mi gobierno entiende claramente que salud no es sinónimo exclusivo de atención médica, y que es preciso insistir en los aspectos de promoción y prevención, junto a la protección del medio ambiente. En lo primero, se ha continuado un trabajo exhaustivo de revisión y actualización de los programas de salud referidos a las enfermedades emergentes de carácter crónico, como es el cáncer; a aquéllas propias de grupos de mayor riesgo, como son senescentes y adolescentes; y a las de transmisión sexual, como el SIDA.

Con vistas a mejorar una acción determinante en salud materno-infantil, se envió al Congreso una enmienda a la Ley N° 18.469, en la cual se establece la posibilidad de otorgar hasta 100 por ciento de bonificación de la atención del parto para los grupos de ingresos medios.

La contaminación del medio ambiente es una fuente de enfermedades, y nuestra preocupación por su limpieza y conservación ha sido y será invariable. El reciente brote de cólera que afecta a la región y que llegó a nuestro país, es un llamado de atención en este sentido. La carencia de agua potable y alcantarillado en la mayoría de las ciudades del Continente hace que esta amenaza probablemente permanezca por largo tiempo, y obliga a nuestro país a defenderse adecuadamente. Gracias a la gran capacidad de planificación y ejecución de acciones sanitarias preventivas de larga tradición en nuestros servicios de salud, y que nuestro gobierno ha recuperado,

el impacto del cólera ha sido mínimo, lo que se ha reflejado en un bajo número de casos, la mayoría dados de alta.

El gobierno ha destinado los recursos necesarios para combatir esta enfermedad y está iniciando los estudios de ingeniería necesarios para la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas en un plazo razonable y a un costo financiable por nuestra economía.

Las acciones realizadas por el Ministerio de Salud a través de sus servicios a lo largo de Chile, gracias al esfuerzo de sus funcionarios, junto a los nuevos recursos que el gobierno ha podido destinarle, nos permiten mirar con optimismo el futuro de este sector, hacia el cual mantendremos una dedicación prioritaria y solidaria.

4. Política de vivienda y urbanismo

La magnitud de los problemas de vivienda y de urbanización que Chile debe enfrentar para que la población tenga acceso a una calidad de vida verdaderamente humana, es francamente preocupante. Nuestro déficit habitacional afecta aproximadamente a 800 mil familias, mientras otras 300 mil habitan viviendas de mala calidad o provisionarias. Notables desequilibrios en el desarrollo de los centros urbanos, con excesiva concentración de la población en determinados lugares y muy escaso aprovechamiento de estructura en otros, más una gran dispersión de barrios segregados carentes de equipamiento y de servicios urbanos, son expresión de la magnitud de la tarea que en este aspecto tenemos por delante.

En esta tarea, que ofrece campos de acción tanto al sector público como al privado, es indispensable una adecuada coordinación, porque la necesidad de aprovechar bien los escasos recursos disponibles —especialmente en materia de infraestructura—, el alto costo de los mismos y las exigencias de racionalidad de la vida urbana, son aspectos que claramente comprometen el interés social y no pueden quedar entregados al mero arbitrio de los intereses particulares. El no haberlo entendido así, en los últimos años, ha contribuido, sin duda, a agravar el problema.

Dentro de este cuadro y conforme a la institucionalidad vigente, corresponde al Estado, especialmente por intermedio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, crear condiciones que mejoren la calidad de vida de los centros urbanos y asentamientos rurales; aumentar sustancialmente el número de soluciones habitacionales para satisfacer las necesidades de vivienda, especialmente de los sectores más pobres; generar condiciones para que todos los agentes involucrados participen con eficiencia; y actuar sobre la planificación urbana para optimizar el aprovechamiento de los recursos de infraestructura.

En este marco, el gobierno ha dado preferencia, en el último año, a la necesidad primordial de procurar soluciones habitacionales a los más pobres, especialmente los que carecen de vivienda y viven "allegados"; mejorar la eficiencia y equidad de los sistemas de selección de los postulantes a la asignación de marginalidad habitacional; implementar programas de equipamiento comunitario para mejorar la calidad de vida urbana; y buscar la manera de mejorar el desarrollo de nuestras ciudades.

Para el cumplimiento de sus tareas, el Ministerio del ramo no sólo ha procurado proceder con arreglo a los mejores criterios técnicos de eficiencia, sino también promoviendo la más amplia participación de la gente interesada, tanto pobladores y sus organizaciones, como organismos técnicos y gremios vinculados a la construcción.

En el curso del año pasado, el total de viviendas terminadas por el sector público y de subsidios pagados por el Ministerio, alcanzó a 64.336 unidades, cifra ligeramente inferior a la del año anterior y superior a la de todos los años precedentes. Esto resulta meritorio, si se considera que recibimos para 1990 un presupuesto claramente inferior al de 1989 y que, para igualarlo a éste, fue necesario suplementarlo en el segundo semestre con recursos de la Reforma Tributaria. Es justo señalar que a marzo de este año, al enterarse el primer año de mi gobierno, se habían entregado 77.300 unidades; es decir, más que en ningún período análogo.

A pesar del mayor esfuerzo del sector público realizado en 1990, la producción total de viviendas iniciadas ese año disminuyó en relación al año anterior, hecho determinado por la baja producida en la iniciación de proyectos del sector privado como consecuencia del ajuste económico, que afectó especialmente a la construcción.

A las soluciones habitacionales referidas, hay que agregar las poco más de 20 mil soluciones básicas de saneamiento, mediante lotes con servicios, llevadas a cabo por el Ministerio del Interior con las Municipalidades.

Para el presente año, los programas en marcha del Ministerio de la Vivienda contemplan 89.250 soluciones habitacionales, y si la producción privada sin subsidio se incrementa, como parece razonablemente previsible, podría llegarse a más de 100 mil unidades en el año.

En lo que se refiere a vialidad urbana, durante 1990 se ejecutaron obras por 8.122 millones de pesos y para el presente año hay construcciones programadas por 15.125 millones de pesos.

Es justo señalar también que en el curso del año pasado se ejecutaron 65 acciones, con una inversión del orden de los 700 millones de pesos en programas de urgencias urbanas y equipamiento social, destinados a dotar de servicios básicos y comunitarios a con-

juntos habitacionales contruidos por el sector, o a nuevas poblaciones. Para este año se contempla duplicar este esfuerzo.

En lo que respecta a los sistemas de selección de postulantes, a fin de hacerlos más eficientes y justos, se perfeccionó la medición de la marginalidad habitacional a través de la información de la ficha CAS II, aspiración muy sentida de los pobladores; se aumentó el puntaje relativo de sectores más débiles, como son las mujeres jefas de hogar y las personas de la tercera edad; y, recogiendo las experiencias solidarias del mundo popular, se posibilitó la postulación en forma grupal, si así lo desea el beneficiario, sin perder la opción individual cuando la prefiera.

Consecuente con la preferencia otorgada a la situación de los más desposeídos, se puso en marcha el sistema de viviendas progresivas, que busca beneficiar a los sectores con menos capacidad de ahorro.

Especial preocupación ha merecido la atención del sector rural, para el cual se han buscado sistemas que permiten su mejor atención, que a partir de este año está siendo ampliada sustancialmente.

En lo tocante al desarrollo urbano, se creó la Comisión de Asentamientos Humanos, ampliamente participativa, cuyas propuestas están siendo evaluadas para lograr su implementación. Paralelamente, la modificación que el Congreso aprobó al DFL N° 2 para permitir reciclar las construcciones antiguas, y el aumento de los montos de los subsidios para las zonas de remodelación, darán importante apoyo a la tan necesaria y urgente renovación urbana.

IV. *Crecimiento, Desarrollo y Modernización*

La gestión económica de mi gobierno persigue un crecimiento estable y equilibrado, cuyas características garanticen una mejoría sostenida en la calidad de vida e integren a todos los chilenos al desarrollo.

Durante el período del que doy cuenta, se buscó cumplir tres objetivos básicos: primero, asegurar y consolidar los equilibrios macroeconómicos; segundo, generar recursos para el gasto social a través de la Reforma Tributaria; y tercero, garantizar las condiciones para un desarrollo sostenido en el largo plazo.

Puedo afirmar con satisfacción que hemos cumplido con estos objetivos. Creo que 1990 será recordado como un año en que se invirtió para la gente, para la estabilidad y para el crecimiento.

En materia de estabilización, ciertamente un logro ha sido el haber despejado la incertidumbre propia de un proceso de transición. Los indicadores más sensibles a las expectativas de los agentes económicos muestran resultados positivos. Para señalar dos de ellos: el

valor de las acciones aumentó en más de 70 por ciento en los últimos doce meses y la inversión privada —nacional y extranjera— llegó al más alto nivel de las últimas décadas.

Por otra parte, las exportaciones crecieron sustancialmente, en especial las menos tradicionales; se alcanzó un nivel inédito de inversión extranjera; se acumuló una cantidad importante de reservas internacionales; se negoció favorablemente la deuda externa; se firmaron acuerdos que refuerzan y abren nuevas posibilidades en las relaciones con los principales socios comerciales de Chile; se fortaleció la relación con los organismos multilaterales; y se creó un clima de confianza respecto de nuestra economía en la comunidad internacional.

Para los próximos años, en ausencia de la ocurrencia de hechos extraordinarios, podemos prever un crecimiento estable, que estimamos en torno a 5 por ciento anual. No obstante, para alcanzar esa meta deben cumplirse varias condiciones: primero, tienen que existir mayores niveles de inversión, especialmente privada; segundo, la competitividad de las actividades productivas tiene que aumentar; y tercero, el proceso de modernización debe acelerarse y profundizarse, extendiéndose a toda la economía.

La etapa de crecimiento basada en la utilización de capacidad ociosa llegó a su fin en 1989. Por consiguiente, sólo si se producen inversiones que expandan la capacidad productiva, podremos seguir creciendo. Para cumplir con la meta antes señalada, la inversión total tiene que alcanzar niveles en torno a 20 por ciento del producto geográfico bruto.

Por otra parte, el crecimiento de la economía descansa en una medida importante en las exportaciones, principalmente privadas. Desde este año en adelante, se estima que las exportaciones por sí solas van a dar cuenta de más de la mitad del crecimiento que el país experimente. En consecuencia, el esfuerzo de inversión deberá concentrarse principalmente en la expansión de la base productiva del sector privado exportador.

Hasta ahora, la nueva inversión privada se ha canalizado en actividades de exportación en las que el país posee una posición competitiva, principalmente minería, hortofruticultura, pesca y harina de pescado, papel y celulosa. Sin duda, estas actividades deben mantener su contribución al crecimiento. Para ello, hay que consolidarlas en el marco de una economía internacional crecientemente más abierta y competitiva.

Conjuntamente con ello, si no queremos declinar y estancarnos, hay que avanzar hacia la diversificación de nuestros productos de exportación y de los mercados de destino. Debemos saltar hacia una nueva etapa del desarrollo exportador, que incorpore productos tecnológicamente más avanzados e intensivos en mano de obra y

en conocimiento. Sólo así podremos superar los puntos vulnerables de nuestra economía y competir con éxito en mercados altamente dinámicos.

Lo anterior sólo se logrará en la medida en que nuestras empresas sean capaces de incorporar en su operación un conjunto de actividades esenciales para aumentar la competitividad. Ellas son la investigación y desarrollo para la innovación de productos y procesos; la capacitación permanente de los trabajadores y formas de comercialización orientadas a mercados altamente dinámicos. En otras palabras, para avanzar hacia una nueva etapa del desarrollo exportador, es necesario modernizarse.

Este esfuerzo por aumentar la productividad y la competitividad tiene que extenderse al conjunto del sector productivo, incluidas la pequeña y mediana empresa. Ello nos plantea el desafío de ajustar los instrumentos de nuestra política a las peculiares condiciones de este último sector, especialmente su baja escala de producción y su rezago en la capacidad de gestión. Llevaremos a cabo, este año y los siguientes, un gran esfuerzo para enfrentar este desafío, no sólo por razones de equidad, sino también porque nos asiste el convencimiento de que en estas empresas existe un potencial importantísimo, con altas posibilidades de crecimiento, además de su capacidad histórica de generar empleo.

La tarea de elevar los niveles de inversión, modernizarse y pasar a una nueva etapa exportadora, exige la colaboración entre el sector público y el privado. Las acciones de ambos deben potenciarse recíprocamente. El sector público debe abrir oportunidades crecientes al sector privado, y la expansión de éste debe responder a los desafíos de lograr avances sustantivos en la inversión y modernización productiva. Por su parte, le corresponde al Estado, además de mantener la estabilidad macroeconómica y velar por el desempeño eficiente y competitivo de los mercados, adecuar la infraestructura a los requerimientos del desarrollo; efectuar la coordinación entre gobiernos para fortalecer el intercambio con nuestros principales socios comerciales; asumir un rol activo en el fomento de la modernización productiva, particularmente en relación a la pequeña y mediana empresa; y crear las condiciones para que el desarrollo sea sustentable en el mediano y largo plazo.

Con arreglo a estos criterios fundamentales, el gobierno ha orientado sus políticas en los distintos ámbitos del quehacer económico.

En el sector agrícola, durante el año se aumentó la asistencia del Instituto de Desarrollo Agropecuario de 20 mil a 33.800 agricultores; se saneó totalmente la situación de los deudores de Indap; se dictó la ley de recuperación del IVA para los pequeños productores, que permitirá a gran cantidad de campesinos incorporarse al mer-

cado formal; y el convenio Indap-Fosis permitió formular 134 pequeños proyectos de riego que beneficiarán a 9 mil familias campesinas.

En materia triguera, la fijación, antes de las siembras, del precio a que Cotrisa compraría la cosecha siguiente, sobre bases coherentes con las previsiones del mercado, dio seguridad a los productores y mantuvo la producción nacional en términos adecuados a las necesidades del país.

Durante 1990, las exportaciones de frutas frescas recuperaron su tasa de crecimiento, incrementándose el volumen físico y aumentando espectacularmente (35 por ciento) el valor exportado, expresado en dólares. Han contribuido a este éxito nuestras adecuadas políticas fitosanitarias.

La producción de leche fresca alcanzó un crecimiento cercano a 16 por ciento, con un volumen de recepción superior a los 890 millones de litros.

La forestación alcanzó las 100 mil hectáreas. Las exportaciones fueron de 855 millones de dólares, y la inversión comprometida y en ejecución será de 2.500 millones de dólares hasta 1994. Cabe destacar que se ha avanzado en el establecimiento, por primera vez en Chile, de una política consistente respecto del bosque nativo, que compatibiliza su preservación con la explotación racional del mismo.

Después de tres años seguidos de sequía, el país se ha visto enfrentado a una crítica situación en la Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Regiones, donde el problema de falta de lluvias ha afectado principalmente a los agricultores de secano. El gobierno, mediante la creación de la Comisión Nacional de Sequía, ha transferido más de 4.000 millones de pesos en ayuda extraordinaria, destinados a paliar los graves efectos del siniestro. Se ha recurrido a la declaración de zonas de catástrofe; se han generado planes de empleo extraordinarios, entrega de raciones de forraje y alimentos, obras de regadío, obras civiles y mejoramiento de cuencas. Actualmente, se está acordando un convenio del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, con la Fuerza Aérea, para que esta última institución pueda utilizar sus aviones en el estímulo artificial de precipitaciones.

En las últimas semanas, con el apareamiento de brotes de cólera, se puso en marcha un dispositivo preparado con antelación, que en lo específico para el sector agrícola ha significado la colocación de barreras para impedir que salieran de la Región Metropolitana hortalizas que pudieran estar infectadas, la certificación en su origen para las hortalizas regadas con agua de pozo, y el estudio de créditos especiales para los productores que se ven forzados a realizar cambio de cultivos.

En el sector pesquero, la principal preocupación del gobierno

ha estado centrada en la dictación de la nueva Ley General de Pesca y Acuicultura, ya que ha habido consenso en la necesidad de postergar la entrada en vigencia de la dictada a fines del gobierno anterior, para introducirle modificaciones que permitan cautelar tanto el desarrollo estable de la actividad productiva como la participación de los diversos agentes del sector. A la vez, se procura establecer mecanismos destinados a incentivar la investigación de nuestros recursos. El acuerdo suscrito por parlamentarios de todos los partidos y concordado con el gobierno, ha posibilitado encauzar la tramitación de este proyecto, que espero pueda convertirse en ley dentro de los plazos requeridos.

En el sector minero, la inversión extranjera materializada en 1990 alcanzó su récord histórico de 629 millones de dólares. Simultáneamente, ha sido objetivo clave de la política gubernativa la modernización de las empresas públicas. Enami ha hecho importantes inversiones para mejorar sus plantas de beneficio y reducir la contaminación, y ha reanudado el plan de fomento a la pequeña minería a través de la asistencia crediticia y técnica y la apertura de nuevos poderes compradores, elevando sus adquisiciones a los pequeños mineros en 10 por ciento con respecto al año anterior. La Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, ha intensificado su campaña de exploraciones, con resultados que le han permitido detener la curva de disminución de la producción de los últimos años. Simultáneamente ha convenido una asociación con YPF, la empresa petrolera argentina, para explotar en conjunto yacimientos ubicados en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, actuando como operadora la parte chilena, en lo que constituye un caso concreto e importante de integración.

En cuanto a la Corporación del Cobre, Codelco, que aporta al país 49 por ciento del presupuesto de divisas y al Fisco 25 por ciento de sus ingresos, está empeñada en una política para revertir la tendencia alcista de sus costos unitarios y mantener su competitividad y liderazgo en el mercado mundial de cobre, como asimismo para resolver los problemas geomecánicos y de contaminación de sus dos más importantes yacimientos. Mención especial merece el proyecto de ley actualmente en trámite, que permite a Codelco traspasar a Enami las pertenencias menores para dinamizar la pequeña y mediana minería, y la autoriza a asociarse para la exploración y explotación de parte de sus reservas actualmente improductivas, con inversionistas que pueden aportar capital, mercado y tecnología, en función de las futuras exigencias del mercado internacional.

En el sector infraestructura y obras públicas, merecen destacarse la construcción de más de 200 kilómetros de nuevas pavimentaciones, 13 kilómetros de segunda calzada en la Ruta 5 y 246 kilómetros de reposición de pavimentos; el plan extraordinario para la rehabili-

tación de los puertos de Valparaíso y San Antonio y la ampliación de un sitio del puerto de San Vicente, obras —la primera y la última— que ya se encuentran en ejecución; el programa de mejoramiento de aeropuertos, que comprende la construcción de un nuevo terminal de pasajeros en Pudahuel; y un ambicioso programa de obras de riego, destinado a suplir el grave déficit de los dos últimos decenios en ese rubro, que en una primera etapa aspira a regar 150 mil hectáreas nuevas y a mejorar otras 270 mil hectáreas de tierras insuficientemente regadas. Hace un mes se ha llamado a licitación la construcción de la primera de estas obras, el canal matriz Pencahue, y esperamos poder llevar a buen término las diversas obras proyectadas, para lo cual se cuenta con financiamiento del Banco Mundial y del gobierno de Japón.

Conscientes de que, pese a los esfuerzos hechos, el nivel de inversión en infraestructura es aún insuficiente, se presentó al Congreso un proyecto de ley que posibilita la inversión privada en la construcción y explotación de nuevas obras, estabilizando sus derechos y facilitando los respaldos crediticios mientras dure la concesión. El Congreso, en una actitud que deseo destacar hoy, lo aprobó por unanimidad, enriqueciendo su contenido. Los primeros llamados a licitación se producirán en los próximos meses. Espero que los empresarios aprovechen esta oportunidad de contribuir al desarrollo nacional.

En el sector transporte se ha realizado un esfuerzo especial en el área del transporte urbano, recibido en situación verdaderamente caótica, siendo Santiago el caso extremo de un problema que existe también en otras ciudades del país. En este terreno se ha avanzado con decisión y enfrentado la dura resistencia del sector, aplicando cada una de las medidas diseñadas para ordenar y modernizar esta actividad de manera definitiva. Se ha modificado la Ley N° 18.696, originaria de las graves distorsiones heredadas. Se ha retirado definitivamente 20 por ciento del parque vehicular de la locomoción colectiva de Santiago; y se ha determinado para las Regiones un calendario de salida por antigüedad de vehículos del parque de la locomoción mayor y de taxis, que se iniciará desde el próximo año. Se ha iniciado el proceso de licitación de las vías más congestionadas de la capital y se estudia la eventual aplicación de esta medida en otras ciudades del país. Se ha dictado una reglamentación que moderniza el servicio de transporte público y mejora su calidad, a tarifas razonables.

En el transporte carretero, el gobierno se ha esforzado por encontrar una solución al problema del endeudamiento de los camioneros, en el marco del problema global de deudas impagas que tiene la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo. Junto con ello y como forma de compensar los desequilibrios a que podría

dar lugar el impuesto específico al diesel que pagan los camioneros, se han puesto en marcha, con el Servicio de Impuestos Internos, mecanismos que reduzcan sustancialmente la evasión por parte de consumidores no transportistas de dicho combustible. Además, el gobierno ha elaborado un proyecto de ley sobre peso por eje, para controlar el sobrepeso en los caminos y reducir el daño producido en las carreteras del país.

Especial mención merece la preocupación del gobierno por el problema de Ferrocarriles. En el curso del año se ha diseñado una política de rehabilitación y modernización que intenta dar apropiada cuenta de los cuatro componentes principales de dicho problema: solución a la abultada deuda; provisión de recursos frescos, tanto públicos como privados; readecuación a fondo de la institucionalidad de la empresa; y reacondicionamiento y reciclaje de la mano de obra. En los próximos días, el Ejecutivo enviará al Parlamento el correspondiente proyecto de ley que pondrá en marcha dicha política.

En el sector portuario, el gobierno ha avanzado sustancialmente, a través de un trabajo interministerial, en la definición de su política respecto a la participación del sector privado tanto en los puertos estatales existentes como en los nuevos que se pueden construir en diferentes regiones del país. Al mismo tiempo, la Empresa Portuaria de Chile, dentro del marco legal e institucional vigente, ha continuado modernizando sus instalaciones y equipos para atender eficientemente el creciente movimiento portuario en que se traduce el dinamismo que observa la economía del país.

Finalmente, en el área del transporte marítimo, corresponde al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones asegurar los servicios de transporte mínimos e indispensables de las zonas más apartadas del país, especialmente en las Regiones Undécima y Duodécima, donde se han incrementado los correspondientes subsidios, asumiendo así el gobierno su responsabilidad de garantizar el normal y regular tránsito de personas y tráfico de bienes en dichas zonas del país. Por otra parte, el gobierno tiene cabal conciencia del destino marítimo de nuestro país y aspira a que Chile recupere su liderazgo en este rubro.

En el sector energía, en el curso del año fue necesario enfrentar dos problemas imprevistos: la aguda sequía, por tercer año consecutivo, que se sorteó felizmente con el esfuerzo coordinado del gobierno, empresas eléctricas y la comunidad; y la inestabilidad del mercado de combustibles derivados del petróleo, con motivo de la crisis del Golfo Pérsico, problema que fue superado por la oportunidad y eficacia de las precauciones tomadas y la dictación de la ley sobre Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo.

En este período se ha terminado la construcción, por el sector

privado, de tres nuevas centrales hidroeléctricas y se proyecta poner en servicio otras dos dentro de los próximos cinco años, aparte de una o dos centrales termoeléctricas. También se espera aumentar la producción de carbón de Magallanes, continuar la mecanización de la Empresa Nacional del Carbón, Enacar, y Carville, y diversos otros proyectos que —en conjunto— representan una inversión del orden de los 3.500 millones de dólares en un período de cuatro años.

En el sector fomento, Corfo ha redefinido su papel de acuerdo a las siguientes funciones: fomento de inversiones, desarrollo tecnológico y productivo, intermediación financiera y gestión de empresas.

La política de la Corporación se orientará a identificar posibilidades de asociación con el sector privado, de modo que aquellas empresas públicas eficientes puedan aumentar la calidad y cantidad de los servicios, integrando aportes privados de capital, de acceso a mercados y otros análogos.

Igualmente, está por crearse el Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo, Fontec, cuyo directorio de siete miembros incluirá tres representantes de organizaciones empresariales, y que comenzará a operar en breve plazo con recursos iniciales ascendentes a 5 millones de dólares. Los recursos del Fondo se destinarán al desarrollo tecnológico de empresas nacionales, y se asignarán mediante concursos públicos de proyectos.

De acuerdo a nuestro objetivo de fortalecer al máximo posible la empresa mediana y pequeña, grandes generadoras de empleo, Corfo está regularizando la situación de miles de pequeños empresarios endeudados con la Corporación. Así, en colaboración con Conupia, para resolver problemas de los sectores respectivos, a fines de 1990 se renegociaron deudas de la industria manufacturera, del sector pesquero artesanal, de agricultores y otros pequeños empresarios.

Finalmente, en el marco del saneamiento financiero de Corfo, se presentó en marzo un proyecto de ley que permite licitar préstamos por debajo de su valor de garantías, lo que reducirá significativamente la morosidad y aumentará los recursos de la Corporación.

En cuanto al medio ambiente, además de las diversas acciones ejecutadas por los distintos ministerios, en junio del año pasado se creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente, presidida por el Ministro de Bienes Nacionales y con carácter interministerial, responsable del estudio, propuesta, coordinación y evaluación de todas aquellas materias relacionadas con su gestión, protección y conservación. A partir de esta iniciativa, han comenzado sus actividades las Comisiones Regionales del Medio Ambiente; se está trabajando en el diagnóstico ambiental del país; se ha avanzado en los catastros

de antecedentes sobre bosque nativo, emisiones de residuos líquidos y contaminación marina, y legislación vigente sobre la materia.

Por su parte, la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana puso en marcha un Plan de Acción de largo plazo para atacar los graves fenómenos de contaminación atmosférica, hídrica y acústica de la capital, que se ha traducido en diversas medidas y programas, tanto de mediano y largo plazo, como de corto plazo que se encuentran todas en ejecución. Especial mención merece el inicio de los trabajos básicos de saneamiento de recursos hídricos de Santiago, mediante la construcción de colectores respaldada por el Banco Mundial.

Reiteramos nuestro compromiso de continuar incorporando progresivamente la dimensión ambiental en nuestras políticas y acciones, única vía hacia un desarrollo sostenible y hacia una calidad de vida mejor para todos los chilenos.

Dentro de las diferentes actividades productivas, creo conveniente también destacar la importancia que le otorgamos al desarrollo del sector turismo, que viene jugando un papel creciente en el ingreso de divisas y en el fortalecimiento de las economías de varias regiones del país.

En el campo de las relaciones económicas internacionales, nuestra acción se ha orientado hacia tres objetivos: primero, la promoción de nuestras exportaciones; segundo, eliminar gradualmente las medidas proteccionistas que entraban el intercambio comercial entre los países. Finalmente, profundizar una política que procura armonizar los acuerdos comerciales bilaterales con las posibilidades de una integración regional progresiva. Las oportunidades para que esa integración pueda acelerarse dependen de que las transformaciones de las políticas económicas de los distintos países permitan compatibilizar los intereses de la economía chilena con los de las otras economías de la región.

Todo este esfuerzo del gobierno sería en vano en ausencia de una respuesta empresarial dinámica, que recoja los desafíos que enfrentamos. Es mi convencimiento, y creo que así lo prueban las experiencias exitosas de otros países, que los incentivos de mercado no bastan por sí solos para caminar hacia el desarrollo. El dinamismo empresarial supone también una mentalidad, un sentido de nación, una identificación con Chile y su gente. Los llamo a adoptar una nueva mentalidad, a creer en los chilenos y ser solidarios con ellos, a abandonar las actitudes defensivas, a ser dinámicos e innovadores, a desarrollar una mística que ponga el interés privado al servicio del desarrollo de Chile.

En síntesis, durante mi gobierno la economía chilena va a crecer estable y sostenidamente. Se van a integrar al proceso de desarrollo millones de chilenos que no habían tenido oportunidades de empleo

estable ni acceso adecuado a la vivienda, a la educación, a la salud, y a condiciones de vida digna. En estos años vamos a avanzar significativamente en la internacionalización de la economía chilena, penetrando nuevos mercados con nuestros productos y aumentando la presencia y gravitación de Chile en el comercio y las finanzas internacionales.

Lograr estos objetivos no será fácil. Nuestro país es pequeño. Su economía es vulnerable a cambios en los precios internacionales de las materias primas, a alzas de tasas de interés internacionales, a disminuciones en el ritmo de crecimiento de las economías más desarrolladas y a las tendencias proteccionistas de los países industrializados. Nuestras propias condiciones naturales internas son difíciles de prever; factores climáticos como la sequía nos han afectado por tres años.

Nunca nada ha sido fácil para los chilenos. El progreso se ha logrado sólo a través de un esfuerzo persistente y sostenido. Las familias chilenas saben esto muy bien, especialmente en los sectores más modestos de la población. El sacrificio, la disciplina, el ahorro y la entereza frente a la adversidad, son características de este pueblo que se han ido forjando a lo largo de su historia.

Los avances económicos y en la justicia social que lograremos en los próximos años, deberán ser protegidos entre todos. El peor enemigo del presupuesto familiar puede llegar a ser la inflación. La lucha para derrotarla debe darse cada día. Tenemos que mantener una economía ordenada. No podemos ni debemos gastar más que los recursos de que se disponga. Así, un exceso de gasto del gobierno llevaría rápidamente a alzas desmedidas en los precios. Aquellos que hoy, con un dejo de populismo, nos presionan para gastar más, son los mismos que el día de mañana se van a quejar de un gobierno que no reduce la inflación.

Estamos comprometidos con una mejoría en las condiciones de vida de los asalariados y de la gente modesta de este país. Pero todo chileno sabe que los aumentos de salarios tienen que guardar relación con los aumentos de producción y productividad. Si los sueldos y salarios crecen desmedidamente, las alzas mayores de los precios terminarán reduciendo el poder de compra de esos salarios. Estos serán nominalmente más altos, pero en la práctica, por la inflación que desatan, deteriorarán en vez de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

Para proteger el nivel de vida de la población, hay que reducir la inflación. Quiero afirmarles que el gobierno hará su parte en esta tarea. No vacilaremos en controlar el gasto público, y aun reducirlo si fuera necesario para disminuir la inflación. El país tiene que entender que en 1990 y 1991 hemos hecho un esfuerzo extraordinario para aumentar el gasto social y la inversión pública en infraestruc-

tura. Este ritmo de crecimiento no puede sostenerse a futuro. El deberá encuadrarse dentro de lo que el crecimiento de la economía permita. La disciplina fiscal, con la colaboración activa del Gabinete y los jefes de Servicios Públicos, será un objetivo prioritario del gobierno.

También tendremos que tener especial cuidado en el ritmo de aumento de los salarios. Las organizaciones sindicales han comprendido que el alza de salarios debe ser necesariamente gradual, para que no aumente la inflación y la economía pueda competir exitosamente en los mercados internacionales. Esta actitud debe ser mantenida a futuro.

El crecimiento económico no se nos dará tampoco como un acto espontáneo y milagroso, como algunos iluminados quisieran hacernos creer. Para crecer hay que ahorrar e invertir. El país tiene los proyectos y los financiamientos necesarios para que esa inversión se concrete. Invitamos a los empresarios nacionales y extranjeros a que participen activamente en la materialización de estos proyectos, que darán empleo a las generaciones de chilenos que recién se integran a la fuerza de trabajo.

La apertura de los mercados y la proyección internacional del país tendrán que ser asimismo resultado del esfuerzo persistente y mancomunado del país en su conjunto. No hay tarea de un carácter más nacional, y al mismo tiempo más atractiva, que proyectar a nuestra patria para que tenga una presencia creciente en el mundo globalizado que hoy emerge.

El avance en todos estos objetivos será gradual, con progresos y —a veces— retrocesos. Trabajando en conjunto llegaremos a la meta. Mi gobierno trabajará incansablemente para dejar como legado al país una economía fuerte, estable, integrada al resto del mundo y equitativa, es decir, solidaria. Trabajaremos por la prosperidad de todos los chilenos, pero nunca olvidaremos que quienes más necesitan de nuevas oportunidades son los más pobres de Chile.

V. *Chile y el Mundo*

En el ámbito de las relaciones exteriores, la política del gobierno se ha encaminado a lograr la plena reinserción de Chile en la comunidad internacional; a cooperar, en los organismos multinacionales y en las relaciones bilaterales con los demás Estados, al logro de la paz entre los países, al efectivo y pleno imperio de los derechos humanos y del derecho internacional en todo el mundo; y a promover el desarrollo de los pueblos, la justicia, la cooperación y la solidaridad en sus relaciones.

Puedo afirmar con satisfacción que el primero de estos objetivos está ampliamente alcanzado. Ya la mera instauración del gobierno democrático significó un avance importante en ese sentido, como lo demostró el número y la calidad de las delegaciones que concurrieron a la toma de posesión del nuevo Presidente. Las visitas oficiales que en el curso del último año hemos recibido de los Presidentes de Argentina, Colombia, Uruguay, la República Popular China y los Estados Unidos de Norteamérica, y la del Secretario General de Naciones Unidas, como las que yo tuve el honor de realizar a Brasil, Perú, Ecuador, México, Venezuela, España, el Reino Unido, los Países Bajos, Holanda, Italia, el Vaticano y Alemania, no sólo han sido propicias para intensificar las relaciones de Chile con esos Estados, sino también han demostrado el respeto y aprecio que Chile suscita en el ámbito internacional. Especial significación en ese sentido tiene, sin duda, la afectuosa acogida de que el Presidente de Chile fue objeto con motivo de las intervenciones que tuvo el honor de realizar ante las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo.

A estos contactos del Presidente de la República, cabe agregar los sostenidos a nivel de cancilleres y de ministros de Estado, parlamentarios y altos funcionarios del gobierno.

Estos encuentros no son meras reuniones sociales y protocolares. Además de permitir el conocimiento personal entre los gobernantes y el intercambio de experiencias sobre problemas comunes y sobre asuntos de interés recíproco, permiten avanzar en la búsqueda de entendimientos y en la formalización de acuerdos de conveniencia mutua.

En el plano político, la incorporación de Chile al Mecanismo Permanente de Consulta y Coordinación Política del Grupo de Río, constituyó un hecho de especial relevancia. Nuestro ingreso formal se cumplió en la Cumbre Presidencial celebrada en Caracas en octubre pasado. Posteriormente, participamos en la suscripción del Acta de Roma, que contiene un conjunto de disposiciones orientadas a dinamizar las relaciones entre la Comunidad Europea y el Grupo de Río. Hace tres semanas, en Luxemburgo, se efectuó un nuevo encuentro entre ambas regiones, inserto en un marco de iniciativas concretas y de realizaciones en torno a proyectos específicos.

Al interior de la región, estamos impulsando conjuntamente con otros gobiernos, proyectos concretos de integración. Hemos suscrito —o estamos por suscribir— avanzados convenios de complementación económica con México y Venezuela, y se han iniciado negociaciones en la misma dirección con otros países andinos. Con Argentina y Brasil continuamos trabajando por alcanzar las mejores relaciones económicas y comerciales.

Se ha completado una profusa red de interrelaciones con Latinoamérica y el Caribe. Prácticamente con todos los Estados hemos

logrado avances de trascendencia. Debo destacar los importantes pasos que estamos dando con los países centroamericanos, a cuyos Primeros Mandatarios he extendido invitaciones para que visiten Chile.

Nuestras relaciones con Estados Unidos de Norteamérica entraron en una etapa de franca cooperación. En la visita que hice a Washington en octubre y en la que el Presidente Bush efectuó a Chile en diciembre, avanzamos sustancialmente en el mejoramiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Expresión de ello ha sido el reingreso de Chile al Sistema de Seguros de Inversiones OPIC, el restablecimiento de nuestro país como nación beneficiaria del Sistema Generalizado de Preferencias, SGP, el levantamiento de las sanciones impuestas a través de la Enmienda Kennedy y la suscripción de un Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversión. También merece destacarse la normalización de las relaciones entre ambos países en el ámbito de la defensa, expresado en el programa conjunto convenido en el reciente encuentro en Washington de los ministros del ramo.

Esperamos que en la próxima reunión del Consejo del Acuerdo Marco con Estados Unidos, avancemos en la búsqueda de un acuerdo de libre comercio con ese país, dentro del espíritu de la Iniciativa para las Américas del Presidente Bush.

La Comunidad Europea es el primer socio comercial de Chile y, por lo tanto, el tema del comercio e inversión entre Europa y nuestro país fue prioritario en nuestra reciente gira a ese continente. Allí, como en todas partes, abogamos por una relación económica justa y abierta, y por la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias que afectan a nuestros productos, especialmente aquellos con mayor valor agregado. Dejamos muy en claro que lo que pedimos a nuestros amigos en el mundo no es ayuda, sino un trato justo para nuestros productos, basado en la reciprocidad.

Nuestros contactos con los países de Asia y el Pacífico se han fortalecido e incrementado. Hemos intensificado los esfuerzos encaminados a profundizar la proyección de Chile hacia el Pacífico, tanto en lo que se refiere al incremento de nuestro intercambio con los países de la Cuenca, como en lo que dice relación con la profundización de nuestra participación en los organismos de cooperación transpacíficos. Precisamente en estos momentos, en Singapur, se está materializando la plena incorporación de Chile en la Conferencia de Cooperación Económica en el Pacífico, PECC.

Hemos restablecido relaciones con naciones de Europa Central y del Este, de América Latina, Africa, Oceanía y el Caribe, haciendo realidad nuestro postulado de pluralismo en el manejo de las relaciones internacionales y nuestro anhelo de establecer contactos con todos los países del mundo.

Las negociaciones con Estados Unidos, nuestras discusiones en Europa, nuestra incorporación al Pacífico, nuestro interés en la integración y nuestra apertura a nuevas regiones, corresponden a la orientación que hemos fijado en materia de relaciones económicas internacionales. Chile es un país que ha cambiado profundamente en este sentido: hoy, 38 por ciento de nuestro Producto Geográfico Bruto depende de nuestras transacciones en el exterior. Asumir ese cambio significa esforzarnos permanentemente por abrir cada vez nuevos mercados y crear nuevas oportunidades para nuestros productos, especialmente para aquellos que significan agregar valor a nuestras riquezas naturales, y no seguir exportando sólo o principalmente materias primas.

Ello hace indispensable mantener una política abierta frente a la inversión extranjera, que permita mantener flujos favorables de capitales y tecnología para el desarrollo productivo del país, así como fortalecer las inversiones chilenas en otros países. Chile firmó el Convenio Multilateral para el Arreglo de Disputas con nacionales de otros Estados, y en los próximos meses esperamos avanzar en la negociación de acuerdos de protección de inversiones y sobre doble tributación, para así fortalecer nuestro ya ventajoso régimen de inversiones extranjeras.

La cooperación reembolsable y no reembolsable que hemos recibido de la Comunidad Europea y de la mayoría de sus países miembros, de los países escandinavos, de Japón y de Canadá, ha sido muy importante para impulsar diversos programas de desarrollo científico-tecnológico y social. Agradecemos esa cooperación, que entendemos como un aporte a la consolidación de nuestra democracia, y que se inserta además en el cuadro más amplio de nuestras relaciones económicas con estos países.

Paralelamente, es posible comprobar con satisfacción la forma en que Chile está participando en la labor que se desarrolla en los organismos multilaterales. Hemos llevado a cabo una activa labor en los distintos foros, lo que ha permitido que Chile sea reconocido nuevamente como actor responsable, efectuando aportes en distintos ámbitos de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales.

Hemos participado activamente en las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, en el interés de hacer avanzar lo más posible la apertura del comercio internacional, con un criterio realista que permita armonizar los intereses de todos. Es preferible lograr algunos avances durante los próximos meses, que llegar a una ruptura como la que tuvo detenidas las negociaciones durante varios meses el año pasado.

En el ámbito regional, la próxima realización en Santiago, en

pocos días más, de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, junto con constituir un importante desafío para nuestro gobierno, representa una expresa y estimulante confirmación de la nueva posición que Chile desempeña en el concierto internacional.

En el período de postguerra que ha seguido al conflicto del Golfo Pérsico, Chile se ha sumado a los esfuerzos que desarrolla la comunidad internacional para el mantenimiento de la paz y el logro de un nuevo orden en la región, a través de su participación en la Misión de Observación de las Naciones Unidas para Irak y Kuwait (Unikom) establecida por el Consejo de Seguridad. Como ya lo dije, la Fuerza Aérea de Chile envió una unidad de helicópteros, con su correspondiente tripulación.

En suma, nuestro país ha vuelto a tener una presencia exterior y una voz escuchada por la comunidad internacional.

Tenemos la convicción de que estamos avanzando por la buena senda, sin que nos inspiren afanes protagónicos, sino tan sólo el anhelo de participar constructivamente en la comunidad internacional, inspirados en el deseo de cooperar en pro del mejor entendimiento entre todas las naciones. Reitero, nuevamente, que en este ámbito, más que en ningún otro, el gobierno aspira y hace todo lo necesario para que nuestra política exterior constituya una "política de Estado", fruto de un gran consenso nacional, por encima de las diferencias partidistas. Creemos, de este modo, servir con la mayor lealtad y eficacia los superiores intereses de Chile.

Honorables Parlamentarios:

Al finalizar esta exposición, permítaseme compartir con ustedes y con todos mis compatriotas tres breves reflexiones.

La primera se refiere a la magnitud de la empresa que tenemos por delante. Cuando se comparan los grados de progreso y nivel de vida que han alcanzado los países más desarrollados con la agobiante pobreza en que vive más de un tercio de nuestra población y la escasez de recursos de que disponemos para solucionar tantos problemas y salir adelante, se advierte cuán grande y prolongado es el esfuerzo que tenemos que hacer. Ciertamente es que Chile puede mucho, como lo ha probado en ocasiones cruciales a lo largo de su historia. Pero no es con fáciles consignas ni con dogmáticas recetas de escritorio como se movilizan las energías de un pueblo para superar las grandes pruebas. Para lograr de la gente la capacidad de sacrificio, esfuerzo, disciplina y paciencia indispensables para

salir adelante, se necesitan ideas claras sobre el conjunto de los problemas políticos, económicos, sociales y culturales del país; un profundo sentido de justicia para que todos se sientan estimulados a participar en el empeño, sabiendo que también participarán de los beneficios; y gran autoridad moral de quienes dirijan o encabezen el proceso. Es deber nuestro, de quienes ejercemos los poderes del Estado, o de los partidos políticos, los medios de comunicación y otras instancias participantes en la conducción del país, ganarnos con nuestra conducta esa autoridad.

Yo no puedo ocultar cuánto me duele no poder satisfacer con más prontitud los legítimos anhelos de tantos compatriotas, principalmente jóvenes, de solucionar sus múltiples problemas, en especial de quienes aspiran a un trabajo estable, una remuneración digna, una casa decente. A ellos consagramos nuestros principales esfuerzos y, como esta cuenta lo demuestra, avanzamos seriamente en ese camino.

Mi segunda reflexión es de reconocimiento para todos los que, de una u otra manera, están cooperando en el esfuerzo en que estamos empeñados. Agradezco, desde luego, a mis colaboradores inmediatos, que en el desempeño de sus funciones están poniendo esfuerzo, capacidad, responsabilidad y disposición para trabajar en equipo, con modestia y ecuanimidad. Agradezco igualmente a los partidos políticos de la Concertación Democrática, que respaldan al gobierno con ejemplar disposición, y a las organizaciones sociales que han sabido valorizar los desvelos del gobierno y cooperan con nosotros. Agradezco, también, a los partidos de la oposición, por la voluntad que han demostrado en varios casos para buscar entendimientos que nos permitan avanzar en la solución de los problemas.

Pero mi especial agradecimiento es para el pueblo de Chile, para la multitud de hombres y mujeres que constituyen nuestra patria, por la madurez y responsabilidad que han demostrado para comprender el empeño de este gobierno por solucionar progresivamente sus problemas.

Finalmente, quiero hacer un llamado a todos mis compatriotas y, en especial, a los dirigentes políticos y sociales y a ustedes, honorables Parlamentarios, a que perseveremos en la disposición al entendimiento que hemos procurado poner en práctica en este primer año de gobierno. Chile es uno solo, en su rica diversidad. Porque creemos en la dignidad de la persona, debemos saber respetarnos en nuestras diferencias. Es de la esencia de la democracia la libertad de cada cual para defender sus criterios y postular las soluciones que considere mejores. Pero el interés superior del país nos exige, para consolidar nuestra renaciente democracia, que sepamos poner

el énfasis más en lo que nos une que en lo que nos divide. Felizmente, quizá porque la experiencia enseña, hoy existe entre los chilenos una gran unidad de criterio en lo fundamental. Ella nos proporciona una base para seguir avanzando por el camino de los acuerdos, que es el camino de la unidad nacional.

Os invito a hacerlo.

Creo que es lo que nos demanda el bien común de Chile.

En acto de celebración del segundo aniversario de la elección presidencial

Osorno, 14 de diciembre de 1991

Señor Presidente del Senado;
Señor Presidente de la Cámara de Diputados;
Señores Ministros; Intendentes; Gobernadores;
Autoridades; dirigentes de los partidos políticos y
de las organizaciones sociales.
Amigos y amigas de Osorno:

Este es un día de alegría, pero es un día en que también debemos meditar. Es satisfactorio recorrer el país y encontrar que los compatriotas siguen expresándole cariño a quien hace dos años eligieron Presidente de la República. Es para mí emocionante recorrer poblaciones modestas y encontrarme con tanto chileno humilde que me saluda con afecto, que me expresa respeto, que tiene confianza en mí.

Yo entiendo que esto trasciende a las personas; entiendo que no soy más que un representante de un equipo que interpreta una aspiración común que viene del alma de la nación chilena; una aspiración a tener una patria verdaderamente unida, en la que todos los chilenos sean respetados en su dignidad de personas, en que todos nos sintamos solidarios en la misma tarea y en que luchemos unidos por construir una patria verdaderamente buena para todos. Esa es la tarea.

Y hoy día, en este acto de recordación, debemos preguntarnos: ¿Estamos cumpliendo? ¿Qué planteamos? ¿Qué le propusimos al pueblo de Chile los partidos de la Concertación Democrática cuando pedimos su confianza en diciembre de 1989? ¿Qué hemos hecho? ¿Ha ganado la gente? ¿Avanza el país, progresa?

Conviene recordarlo y detenemos brevemente a reflexionar sobre la materia. Es bueno recordar. No ofrecimos solucionar todos los problemas de Chile en dos o cuatro años. Por el contrario, llamamos a un gran esfuerzo nacional, y dijimos que tendríamos necesidad de tiempo para cumplir la tarea; que construir esa patria mejor es una tarea que empezariamos en este período, y esperábamos tener frutos en él, pero que sería una labor que deberíamos realizar durante un período prolongado. Y no sólo un hombre —ustedes me lo escucharon—; no se espera de un hombre, de un Presidente de la República ni de un gobierno, que solucione todos los problemas. Los problemas de Chile los va a solucionar el pueblo de Chile, bajo una conducción verdaderamente solidaria.

Ofrecimos tres cosas claras: democracia, progreso y justicia social, y —sobre esas bases— convivencia pacífica entre todos los chilenos. ¿Qué hemos logrado? ¿Cuánto hemos avanzado? Tenemos democracia; tal vez no una democracia perfecta, sino una que tendremos que ir perfeccionando, porque todas las cosas humanas son imperfectas y susceptibles de perfeccionar. Pero tenemos democracia y esto es bueno para todos.

¿Qué significa la democracia que tenemos? Significa respeto para todos los chilenos, más allá de sus ideas, de su condición social: todo chileno es respetado hoy día en su dignidad de persona; significa libertad para todos: todos pueden decir lo que piensan, a nadie se le pregunta de qué partido es, o qué tendencia tiene; significa reconocimiento de la diversidad entre los chilenos: naturalmente no todos somos iguales, no todos pensamos lo mismo, no todos son mis partidarios, pero partidario o adversario, piense lo que piense, todo chileno es digno de respeto y sus derechos son respetados por el gobierno.

Para este gobierno hay partidarios y opositores, pero ser opositor es un derecho que respetamos. Para este gobierno no hay amigos y enemigos: esa división que durante tanto tiempo hirió el corazón de la patria, dividió a Chile, se acabó. En Chile no hay más amigos y enemigos.

Democracia significa Estado de Derecho; significa el término de la arbitrariedad, significa que los chilenos no tienen por qué tener miedo de que de la noche a la mañana lleguen a sacarlo de su casa, lleguen en operativos a ponerlos en fila contra la pared. No hay motivo hoy día para tener miedo; nadie tiene el temor de ser encarcelado, relegado, exiliado por abuso de la autoridad. Todos sabemos que la autoridad se sujeta a la ley y que los Tribunales de Justicia tienen como misión asegurar el respeto de la ley.

Democracia significa participación; gobierna un Presidente elegido por el pueblo; hacen las leyes representantes populares, senadores y diputados elegidos por el pueblo; desde junio próximo

administrarán las comunas alcaldes y concejales elegidos por el pueblo. Y, luego, como consecuencia de la reforma constitucional ya aprobada sobre descentralización regional, los intendentes, en la tarea de administración de la región, actuarán trabajando en conjunto con los Consejos Regionales, formados por representantes elegidos indirectamente por el pueblo de la región, a través de los propios concejales. Los concejales de cada provincia elegirán un número de consejeros del Consejo Regional, que ayudarán al intendente en la tarea de administrar la región.

Y esperamos seguir avanzando en este camino de abrir cauces mayores de participación a las juntas de vecinos, a los sindicatos, a las cooperativas, a las distintas organizaciones comunitarias.

Hay participación, y esto es bueno para todos.

La segunda tarea: el progreso económico. Dijimos durante la campaña de modo muy claro: no basta con distribuir la riqueza, porque Chile es un país que tiene todavía un ingreso por habitante muy bajo. Si distribuimos por igual lo que Chile gana en el año, muy pocos van a quedar contentos. Es tarea fundamental incrementar la riqueza nacional, y para eso debemos tener una economía sólida, ordenada. Expresamente dije en la campaña, una y otra vez: no vamos a poner en práctica recetas populistas, que mediante alzas rápidas y sustanciales de salarios provoquen lo que ha pasado en otros países que salieron de la dictadura y entraron a la democracia en nuestro continente, en los cuales la política de alzas repentinas de las remuneraciones provocó un proceso inflacionario de 100, 200, 500, 1.000 por ciento al año, inflación que terminaron sufriendo, fundamentalmente, la clase trabajadora y los más pobres de esos países.

Dijimos: haremos una economía ordenada, respetaremos lo que los economistas llaman "los equilibrios macroeconómicos". Y lo hemos hecho. El primer año fue difícil, porque nos entregaron lo que también los economistas llaman "una economía recalentada", con un crecimiento artificial de 10 por ciento el año 89, que nos amenazaba con una inflación de 30 por ciento para el año siguiente.

Debimos tomar medidas de ajuste severas, que se tradujeron en menores cambios de los que queríamos hacer. Pero tuvimos éxito: para este año nos propusimos bajar la inflación a 18 por ciento, y lo logramos, junto con más de 5 por ciento de crecimiento. Y sobre esta base de contener la inflación, esperamos seguir impulsando el crecimiento, aumentar las exportaciones, poner en juego toda la capacidad productiva del país e incorporar a nuestras exportaciones el valor agregado de la inteligencia de los chilenos; esperamos tecnificar cada vez más nuestra producción, abrir cada vez más nuevas posibilidades de actividades distintas, creadoras de riqueza; esperamos ayudar a los pequeños propietarios, a los pequeños empresarios,

a la pequeña y mediana empresa, al pequeño campesino, al pescador artesanal, al pequeño artesano, a ser también un artífice creador de riqueza y, de ese modo, mejorar su condición y la de su familia, aumentando la productividad del país. Por ese camino miramos con confianza el porvenir.

Gabriel Valdés señalaba que en el mundo exterior se mira como un ejemplo lo que está ocurriendo en la economía chilena. El presidente del Fondo Monetario destaca a Chile como un país cuya economía está en un nivel ejemplar, digno de imitarse; los inversionistas extranjeros también lo estiman así. Frente a eso, las quejas expresadas por dirigentes empresariales que viven asustados y anunciando catástrofes que resultan contradichas por los hechos, no nos merecen un gran respeto. Nos parece que son mezquinas o que revelan falta de voluntad y de imaginación creadora.

Es muy curioso: los mismos que defienden la libertad económica en todos los planos y que quieren el libre imperio de las reglas del mercado, frente a ciertos fenómenos acuden presurosos a pedirle al gobierno protección y amparo para sus intereses. ¿En qué quedamos? ¿Quieren reglas del mercado o quieren que el gobierno sea el que maneje la economía?

Nosotros entendemos que el Estado tiene una función que cumplir en la economía: debe velar por un bien común y defender a los más débiles. Mi gobierno admite que el principal factor promotor de la actividad económica es la empresa privada; pero, al mismo tiempo, entiende que es tarea fundamental del Estado asegurar que ese mercado se realice en condiciones de justicia y equidad, que haya verdaderamente libre competencia y que, en ese esfuerzo creador, los derechos de los más débiles, los derechos de los trabajadores, sean respetados.

Mi gobierno entiende que no basta con que los particulares hagan negocios para que crezca la economía. Son necesarios bienes de uso común, lo que se llama la infraestructura, que tiene que ser proporcionada por la sociedad entera. Se necesitan caminos, calles, puertos, electrificación; se necesitan, en las zonas secas o centrales del país, obras de regadío. Todo eso, que en los últimos veinte años fue abandonado, debe ser asumido por el Estado. Nosotros estamos llevando adelante un programa serio para suplir ese déficit, y construir los caminos que a Chile le hacen falta y los puertos que Chile necesita, porque no vamos a poder seguir exportando nuevas riquezas si no tenemos caminos y puertos por donde sacar nuestros productos.

No basta, sin embargo, con progresar; no basta el crecimiento. Dijimos que nuestra tercera tarea —y no menos importante que las otras dos: democracia y progreso— es la justicia social. Todas forman parte de un mismo empeño, de un mismo esfuerzo general.

Justicia social significa leyes del trabajo justas que protejan a los trabajadores contra los despidos arbitrarios; que permitan la organización sindical de los trabajadores para la defensa de sus derechos; que den capacidad de negociación a los sindicatos para sentarse a una mesa, frente a frente, de igual a igual con el patrón, a discutir las condiciones laborales; justicia significa un Estatuto Docente que garantice a los profesores el respeto a la dignidad de su carrera, que les dé posibilidades de perfeccionamiento, que les asegure un ingreso mínimo; justicia significa dar a los trabajadores de la salud las condiciones mínimas indispensables para cumplir su abnegada tarea.

Y en eso hemos estado. Hemos dictado nuevas leyes del trabajo y tenemos otras pendientes en el Congreso; hemos dictado un Estatuto Docente para el Magisterio; hemos aumentado el personal de salud y mejorado sus remuneraciones, y ahora estamos empeñados en considerar los problemas generales de todo el sector público, de los trabajadores de la administración del Estado, para, en la medida de las posibilidades económicas del Fisco chileno, ir también en su ayuda para que puedan tener remuneraciones más justas en relación al trabajo que efectúan.

Este año que termina, el ingreso real de los trabajadores habrá aumentado en 6,2 por ciento. El año pasado también se produjo un aumento. Esto significa que hemos revertido la tendencia de los últimos 17 años, en que la participación en la distribución del ingreso nacional del 20 por ciento de los que ganan más fue aumentando, mientras disminuía la del 40 por ciento que tiene menos ingresos, entre ellos los trabajadores. Hemos cambiado esa tendencia. Y si todavía no se obtienen logros sensacionales, y si mucha gente no siente que en su vida esto signifique un mayor bienestar considerable, podemos afirmar categóricamente que hoy día la tendencia que impera en nuestro país, y que estamos siguiendo hacia adelante, es la de mejorar progresivamente la condición de los más modestos y del mundo del trabajo, y aumentar su participación en el ingreso nacional.

Así, aumentamos los ingresos mínimos, las pensiones mínimas, las asignaciones familiares; resolvimos el problema de la deuda vencida de los pobres: las deudas de Serviu, las de agua potable y de luz eléctrica. Arriba de cien mil chilenos han obtenido los títulos de propiedad de las casas compradas a Serviu, gracias a los mecanismos que permitieron poner término a una deuda que parecía inacabable.

Tengo la convicción más profunda de que hoy día los más pobres en Chile son menos pobres que cuando nosotros asumimos.

A eso se encaminan también los programas de salud, de vivienda y de educación, que tienden a atender preferentemente estas necesidades básicas de los chilenos.

Ustedes me oyeron decirlo durante la campaña: la gente que tiene recursos financia su propia salud, paga su Isapre o un médico particular, financia la educación de sus hijos en un buen colegio privado, tiene recursos u obtiene créditos del banco para comprar su propia vivienda. Los pobres, en cambio, tienen que hacer cola en los consultorios del Servicio Nacional de Salud, en los consultorios municipales o en los hospitales financiados por el Fisco. Los pobres tienen que mandar a sus hijos a las escuelas municipalizadas, que son generalmente tan pobres como ellos. Los pobres viven en poblaciones sin servicios de infraestructura sanitaria adecuada, muchas veces en poblaciones construidas por ellos mismos, sin los requisitos mínimos.

Por eso nuestro esfuerzo principal ha estado dirigido a mejorar el sistema de salud, a dotar a los hospitales de los medios indispensables para atender a la gente. Cuando asumimos el gobierno había hospitales que no tenían sábanas ni frazadas, había hospitales donde las calderas no funcionaban.

Hay cosas que no se ven. No sólo progresa la salud cuando se inaugura un nuevo policlínico o un nuevo hospital, sino también cuando se dota al hospital de elementos para que trabaje, cuando se mejora la condición de sus trabajadores, cuando se le dota de ambulancia, cuando se aumenta el número de médicos.

Lo mismo pasa en las escuelas —ya se refirió a ello el ministro de Educación— y en vivienda. Recibimos el país con un déficit de 800 mil viviendas, y se estaba construyendo a un ritmo promedio, en los últimos años, inferior a 50 mil casas anuales. A ese paso, necesitaríamos más de veinte años para suplir ese déficit, para llegar a tener viviendas para todos los chilenos.

Hemos aumentado ese ritmo: el año pasado construimos más de 80 mil casas, este año 100 mil, y esperamos superar esa suma el próximo.

Ustedes me dirán, "sí, pero a mí no me tocó"; "sí, pero resulta que aquí en Osorno sólo se han construido tantas". Se está construyendo a un ritmo que significa que en un máximo de diez años resolveremos el problema para todos, y queremos acelerar el paso. Pero una cosa es lo que uno quiere y otra, lo que se puede.

Tenemos clara conciencia de que falta mucho por hacer. Nunca dijimos que terminaríamos todos los problemas en dos o cuatro años, pero estoy cierto de que avanzamos en buena dirección.

Hay un tema que preocupa mucho a grandes sectores de chilenos, especialmente en Santiago y en algunas otras ciudades: la seguridad de las personas. Los medios de comunicación informan diariamente con grandes caracteres de la comisión de delitos, de asaltos, de robos a mano armada, y esto crea un clima de inseguridad y de temor entre la gente. Se habla indistintamente de delincuencia

y terrorismo, se mete todo dentro de un mismo saco, y se dice que con la llegada de la democracia se acabó el orden y la seguridad de las personas y que ahora todos están expuestos a, en cualquier momento, ser víctimas de un atraco que les cueste lo que tienen, y a veces la propia vida.

Yo creo que hay en esto una exageración. Creo, en primer lugar, que si miramos hacia el pasado, no podemos afirmar que los pobres de Chile estaban más seguros cuando eran víctimas de toda clase de atropellos, cuando desaparecían personas, cuando otras eran encarceladas, cuando se allanaban poblaciones. No me van a decir que hoy hay más terrorismo que el terrorismo que imperó durante 17 años en este país, de lado y lado.

Cierto, hay fenómenos de delincuencia, y por eso el lunes último me he dirigido al país explicando las medidas que el gobierno está poniendo en práctica, que tienen por objeto encarar seriamente el problema, atendiendo a sus causas, por una parte; buscando eficiencia en los servicios encargados de enfrentar la delincuencia, por otra. Porque al asumir el gobierno recibimos una fuerza de Carabineros disminuida, que durante los últimos 17 años prácticamente no creció y que estaba desprovista de los medios adecuados para cumplir su función. La ocupaban en otra cosa, en reprimir al pueblo y no en combatir la delincuencia. Queremos que Carabineros de Chile vuelva a ser el amigo en el camino, Carabineros de Chile al servicio de todos los chilenos, Carabineros de Chile con personal idóneo y con elementos suficientes para defender la vida, la salud, la propiedad de todos los chilenos. Y eso es lo que estamos haciendo.

Y lo haremos con Investigaciones, y lo haremos también con la Justicia. No queremos tribunales incondicionales al servicio del gobierno. Queremos tribunales que hagan justicia a los chilenos y en los cuales los chilenos confíen; queremos tribunales eficientes; queremos aumentar el número de tribunales y dotarlos de los recursos y la capacidad necesaria, y de los procedimientos adecuados para que la gente acuda a la Justicia y no sienta que ir a ella es perder el tiempo; queremos una Justicia eficaz, seria, imparcial, independiente.

Y queremos también corregir el escándalo que significa el sistema penitenciario chileno, porque las cárceles en Chile no son para regenerar a los que han caído en delito, sino para corromperlos más.

Esas son algunas de las tareas en que estamos.

Quiero terminar con dos reflexiones. Una primera, mi reconocimiento más profundo de que esto que estamos haciendo es posible por la madurez del pueblo chileno, por la confianza que el pueblo deposita en su gobierno. Este pueblo ha sido responsable. La Central Unitaria de Trabajadores ha dado ejemplo de madurez, sentándose a negociar. ¿Qué decían nuestros adversarios? Decían, antes de

nuestra elección, "elegido el señor Aylwin, al día siguiente se va a encontrar con huelgas a lo largo de todo el país, porque los trabajadores se van a disparar con sus demandas". Pero hemos tenido una dirigencia sindical responsable y patriótica, que ayuda al gobierno y defiende los intereses de los trabajadores.

¿Y qué otra cosa decían? "Los 17 partidos de la Concertación se van a poner a pelear al día siguiente; esto va a ser el caos; ¿cómo van a gobernar entre tantos?" Sin embargo, la Concertación ha dado un ejemplo de disciplina política, de madurez y de responsabilidad.

Hay mucho chileno, mucho chileno pobre, mucho chileno sufrido, que tiene en su familia el dolor de la violación de los derechos humanos en algún familiar, que tiene alguna persona presa por largo tiempo, que siente que la situación económica le hace terriblemente dura la vida, que vive en condiciones de extrema pobreza. Sin embargo, ese pueblo, esa gente que sufre, ha tenido altura para plantear sus puntos de vista, para reivindicar sus derechos, y ha tenido confianza en su gobierno.

Yo les digo: gracias, gracias trabajadores de Chile, gracias partidos de la Concertación, gracias pobladores, gracias familiares de víctimas de los derechos humanos, gracias pobres de mi patria, sufridos. Con vuestra ayuda estamos gobernando, con vuestra ayuda saldremos adelante.

¿Cuál es la segunda reflexión? Que la tarea que estamos realizando, que estamos empezando —como dijo Ricardo Lagos— tiene que prolongarse en el futuro, porque no basta Concertación para hoy, necesitamos Concertación para mañana y para pasado mañana. Estoy convencido: Chile no tiene mejor alternativa política que la Concertación de Partidos por la Democracia. Ella es la base de la estabilidad, del orden jurídico y social chileno, y es la única alternativa que ofrece la posibilidad de conciliar democracia en lo político, progreso en lo económico y justicia en lo social.

Pero la tarea no es sólo de partidos políticos. La tarea, en lo que resta de mi gobierno y de los que vendrán, es tarea del pueblo de Chile, es tarea de todos los chilenos. Llamo a todos a participar, a sentirse responsables del destino de la patria, a preguntarse cada día no "qué tengo que pedir", sino "qué puedo dar para hacer más grande y mejor a nuestra patria".

Y llamo especialmente a los jóvenes de Chile, llamo a esa enorme juventud. Chile es un país joven, un país con una gran juventud, y a mí me duele sentir que los jóvenes suelen sentirse frustrados. Dicen, "bueno, esto no era lo que nosotros esperábamos". Yo comprendo, la juventud es impaciente. En los años mozos se quiere que todo ande rápido; como ha sido corta su vida, esperan resultados sin valorizar la importancia del tiempo.

Quienes llevamos ya largo recorrido por la vida, aprendemos a

comprender que todo requiere tiempo, y así como la siembra requiere tiempo para fructificar en la cosecha, así como el árbol que se planta demora en dar sus frutos, los cambios sociales requieren un proceso de elaboración, de consolidación, y en este proceso la presencia de los jóvenes es fundamental. En un sistema democrático es a través de las instituciones propias de la democracia —Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, municipios, administraciones regionales, partidos políticos, organizaciones sociales— como se va construyendo el porvenir.

A mí me asusta el desinterés que tienen los jóvenes compatriotas hoy día por inscribirse en los registros electorales. Yo los llamo a mirar con confianza el porvenir.

Para mí los jóvenes no son un problema; son una esperanza, una posibilidad, son la fuerza que debe ser el motor de nuestra historia.

Yo llamo a los chilenos a confiar en el futuro y llamo a los jóvenes a soñar con un futuro mejor, pero sin contentarse con soñar. El sueño debe ir unido al trabajo disciplinado, al esfuerzo consciente, a la capacidad de aumentar su propia preparación, a la capacidad de una disciplina para, unidos trabajando, construir este futuro mejor que soñamos.

Compatriotas:

Al cabo de dos años de mi elección para esta responsabilidad tan trascendental que me ha tocado desempeñar, no puedo ocultarles que siento una honda satisfacción; no la vanidad personal de tener el poder, que no me interesa; no el goce de las situaciones de privilegio que da tan alta magistratura, que son para mí más bien problemas de escrúpulos de conciencia.

Siento satisfacción de que estamos trabajando en un país hermoso, con trece millones de chilenos que son gente de calidad; siento la satisfacción de que estamos realizando una tarea en beneficio de la nación entera y, especialmente, de los más modestos y los más pobres de Chile; siento la satisfacción de que estamos cumpliendo un deber y, de esa manera, estamos construyendo una patria mejor para nuestros hijos.

Muchas gracias.

Mensaje de fin de año

Santiago, 31 de diciembre de 1991

Compatriotas:

Esta noche me dirijo a ustedes para hacer llegar a todas las familias chilenas y a cuantos habitan nuestro territorio, un cordial saludo de Año Nuevo.

El término de un año y el comienzo del siguiente es ocasión propicia para reflexionar sobre nuestra existencia y nuestro destino; sobre lo que somos y lo que queremos ser; lo que nos ha sucedido en la etapa recorrida y lo que esperamos de la próxima. Esto nos ocurre tanto en el plano personal y familiar, como en el nacional y el universal.

No es mi intención hacer ahora un balance de la situación de Chile al cabo del año que termina, ni anunciar propósitos para el que viene. Mi función me impone el deber de hacerlo en otras oportunidades. Quiero, en cambio, invitarlos a que lo hagan ustedes mismos. Un deber elemental de solidaridad nacional exige a toda persona procurar formarse su propio juicio, razonado y equitativo, sobre la suerte de su patria, y preguntarse de qué manera puede contribuir a mejorarla.

Los seres humanos somos más aficionados a quejarnos de lo que nos falta que a apreciar lo que tenemos. También somos propensos a culpar a los demás de los males que suceden y a no pesar ni asumir las responsabilidades propias.

Siento el deber de llamarles la atención sobre lo bueno que hemos alcanzado y del camino que estamos haciendo.

Hay sin duda en el país muchos problemas y estamos aún lejos de alcanzar la sociedad plenamente democrática, próspera y justa que anhelamos. Pero son muchos los hechos y signos que nos mue-

ven a valorar positivamente el año que termina y a mirar hacia el futuro con esperanza y optimismo.

Aunque nuestro régimen político requiere perfeccionamiento, tarea en la que estamos empeñados, lo cierto es que se ha consolidado en el país una convivencia pacífica y democrática, fundada en el respeto a las personas y a las instituciones, dentro del marco de un Estado de Derecho plenamente vigente.

Si bien la tranquilidad social suele ser perturbada por acciones de violencia delictual y terrorista que causan hondo dolor y justificada indignación, lo cierto es que esas conductas suscitan general repudio y estamos adoptando las medidas necesarias y eficaces para castigarlas y evitarlas. Después de tantos años en que sectarismos, pasiones y odios dividieran a los chilenos en amigos y enemigos, imponiendo un clima de violencia permanente, hoy impera entre nosotros un espíritu de reconciliación y entendimiento.

Si bien estamos aún lejos de llegar a ser una nación desarrollada, nuestra economía está funcionando sobre bases sólidas y sanas, pasamos con éxito el ajuste del año 1990, crece el producto nacional, disminuye la inflación, aumentan las exportaciones, se multiplican y diversifican las inversiones, y el país progresa en infraestructura y en desarrollo tecnológico.

Nuestro mayor problema sigue siendo la pobreza, que aflige sobre todo a casi 40 por ciento de la población nacional. Pero las remuneraciones reales de los trabajadores han aumentado, especialmente los ingresos mínimos; las políticas sociales de salud, vivienda, educación y capacitación de jóvenes para el trabajo empiezan a producir sus frutos y el esfuerzo nacional de crecimiento con equidad que estamos impulsando se orienta precisamente a derrotar a la pobreza. Este es nuestro mayor desafío como nación y él requiere la colaboración solidaria de todos los chilenos.

En el ámbito internacional, que a pesar de algunos cruentos conflictos se presenta alentador y promisorio de un clima de paz y colaboración mundial, Chile goza de sólido prestigio y es señalado a menudo como ejemplo; estrechamos nuestra amistad con las hermanas repúblicas vecinas y con los países iberoamericanos, e incrementamos sólidas relaciones de paz y cooperación con todas las naciones.

Hay chilenos a quienes preocupa el debilitamiento de algunos valores en la realidad de nuestra convivencia. El tema, más que motivo de polémica, debiera ser objeto de serena meditación. La historia muestra que la estabilidad y solidez de las sociedades depende mucho más de la vigencia de valores éticos generalmente compartidos y acatados voluntariamente por la gente, que de decisiones autoritarias. La moral no se impone por decreto. El respeto a la verdad, al derecho y a las instituciones; la honradez, la sobriedad,

el sentido de justicia, la tolerancia, el amor a la familia y a la patria, la solidaridad, son valores o virtudes arraigadas en el alma y en la tradición de los chilenos. Su práctica nos ha dado un sello histórico que es motivo de orgullo nacional. Todos debiéramos esforzarnos por cultivar estas virtudes e inculcarlas en el corazón de nuestros hijos.

Al comenzar el nuevo año, hago votos porque haya paz entre los hombres y entre las naciones, y ruego a Dios por nuestra patria, por todos sus hijos y habitantes. A todos digo cordialmente: ¡Feliz Año!

En ceremonia de conmemoración del segundo aniversario de gobierno

Santiago, 11 de marzo de 1992

Amigas y amigos:

Me he tomado la libertad de invitarlos a este acto, con el propósito de aprovechar esta ocasión, en que el gobierno constitucional de la República entera dos años de ejercicio en su mandato y la mitad de su período, para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre dos temas que me parecen de gran significado nacional.

Primero, el sentido y trascendencia de los logros obtenidos en estos dos años. Y, segundo, los desafíos y tareas que como nación tenemos por delante.

Se trata de una reflexión de carácter nacional que trasciende las divisiones entre gobierno y oposición, entre los distintos sectores políticos en que se agrupa la población nacional y entre los distintos sectores que conforman la sociedad chilena.

Hace dos años se inició un gobierno democrático. Y este hecho, la consolidación de este sistema democrático que hemos obtenido en estos dos años, indudablemente tiene un sentido y un significado que supera los marcos partidistas. No se trata sólo del triunfo de un sector que logró, a través del veredicto de la ciudadanía, que se le confiara el gobierno del país. Se trata de que hemos iniciado una forma de convivencia entre los chilenos que se está arraigando en los hábitos nacionales, que se inspira en una institucionalidad jurídica, dentro del marco de un Estado de Derecho.

Antes de estos dos años había incertidumbre en el país. Muchos se preguntaban qué vendría después y cuál sería el resultado de esta experiencia, la de entregarle nuevamente al pueblo de Chile y a

quienes él libremente eligiera, la conducción de los destinos nacionales. Para muchos había incertidumbre y desconfianza.

Al cabo de estos dos años, sin duda todo eso ha desaparecido. Hoy día Chile ya no es un país dividido entre amigos y enemigos. Aspiramos a ser una nación de hermanos, y avanzando hacia eso hemos logrado una convivencia respetuosa, en que en el marco del derecho, respetando las opiniones y diversidad de criterios, de ideologías, de inspiraciones religiosas, de puntos de vista, de intereses económicos de los distintos sectores de chilenos, nos respetamos y estamos aprendiendo a convivir en paz y a buscar acuerdos para superar los problemas que afligen a la patria.

Hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan, pero este solo hecho de que en Chile hoy día vivamos en paz y aquí estemos juntos hombres de gobierno y de oposición, representantes de los empresarios y de los trabajadores, hombres y mujeres de las distintas condiciones sociales, unidos para conmemorar este acontecimiento y para reafirmar nuestra voluntad de consolidar la democracia chilena, es de por sí un hecho que merece celebración.

Yo no los voy a cansar en esta oportunidad haciendo un recuento de la labor cumplida. Creo que está, en mayor o menor medida, en la mente de todos. Por lo demás, por mandato constitucional, el 21 de mayo próximo, ante el Congreso Nacional, rendiré cuenta al país de esa labor, y allí se podrán apreciar los logros obtenidos en el campo institucional, en el campo económico, social e internacional.

Pero más allá de eso, reitero y destaco: Chile es hoy un país que, superando sus divisiones y a pesar de que todavía hay, indudablemente, probablemente en uno y otro extremo, grupos que de algún modo resisten o no estiman suficiente esta forma de convivencia, lo cierto es que el afán de que Chile sea una patria para todos, es un afán en pleno camino de realización. Y esto tiene que enorgullecernos y satisfacernos a todos.

Que hay un Estado de Derecho, observado por todos; que los Poderes Públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, funcionan dentro de la órbita de sus respectivas atribuciones y ejercen sus tareas conforme a las normas institucionales; que las instituciones armadas cumplen sus labores profesionales bajo la dependencia de la autoridad civil; que hay en Chile plena libertad para opinar, para reunirse, para asociarse; que todas las garantías constitucionales se respetan, son hechos acordes con la tradición histórica de que nosotros estuvimos mucho tiempo orgullosos y representan un avance substancial.

Que, dentro del libre juego de las instituciones democráticas, más allá de las legítimas diferencias de los distintos sectores, hay disposición, frente a los grandes problemas nacionales, de buscar acuerdos, de no encerrarse en posiciones intransigentes ni obcecadas, de renunciar a toda forma de violencia, de proceder con racionalidad;

así se ha expresado en el despacho de numerosas leyes por el Congreso Nacional, en los acuerdos logrados entre empresarios y trabajadores en relación a las bases o marcos de las relaciones y remuneraciones en el mundo laboral.

Estos son hechos efectivos, y debiéramos hoy día reiterar la voluntad de afianzar esta forma de convivencia y de no apartarnos jamás de ella, para que en Chile impere siempre una democracia fundada en el respeto a la dignidad de toda persona humana, quienquiera que sea, y en que haya efectiva oportunidad para todos de defender sus intereses, sus opiniones, sus puntos de vista, y en que sea el pueblo soberano el que decida, sobre la base de que las decisiones de la mayoría han de ser siempre respetuosas de los derechos de las minorías.

Que tenemos hoy día una economía sólida, creciente, cada vez más estable; que estamos avanzando en la lucha contra el flagelo de la inflación, que aumentan no sólo el Producto Bruto, no sólo las inversiones nacionales y externas, también el ahorro interno; que Chile está creciendo, es un hecho que nos llena de optimismo con vista al futuro.

Que, en el plano de las relaciones sociales, hay un mayor respeto por la dignidad de los trabajadores; que se ha avanzado para reconocer los derechos sindicales y su capacidad de negociación colectiva; que se ha avanzado en la tarea de lograr que dentro de las condiciones de una economía —como la moderna— en constante transformación, haya garantías de los derechos de los trabajadores cuando se producen movilizaciones en el empleo.

Que las remuneraciones del trabajo hayan aumentado en términos reales, especialmente las remuneraciones mínimas; que las pensiones y las asignaciones familiares hayan aumentado en términos reales; que los sectores de menores ingresos hayan aumentado su participación en el ingreso nacional, es algo que va en el camino de la justicia y que merece ser reconocido y que debe causarnos satisfacción.

Indudablemente, estamos muy lejos de llegar a las metas que anhelamos. Falta mucho para que nuestro país constituya una sociedad verdaderamente igualitaria, en que haya igualdad de posibilidades para todos, y son aún muy grandes las distancias entre los sectores afortunados y los sectores pobres de nuestra sociedad. Pero marchamos en una buena dirección.

Y el que, en el campo de la educación, en el campo de la salud, en el campo de la vivienda, en la construcción de obras públicas, en la creación de infraestructura para el desarrollo nacional, se estén haciendo importantes inversiones y se estén movilizando importantes esfuerzos de trabajadores y de empresarios, del Estado y de los particulares, es señal de que vamos avanzando.

Pero, indudablemente, esto y muchas otras cosas que podría agregar respecto al reconocimiento internacional que ha alcanzado nuestro país entre las distintas naciones del mundo, al prestigio y el respeto de que Chile goza en la comunidad internacional, todo esto que es motivo de satisfacción, no debe ser motivo ni de vanidad ni para sentarnos a gozar de nuestra gloria, sino de meditación, porque tenemos clara conciencia de que en este gobierno vamos a mitad de camino, y en la marcha del país, esto que se ha logrado en estos años, es sólo el comienzo de una tarea muy larga para lograr las metas de democracia, crecimiento y equidad que Chile necesita para su pleno desarrollo.

Por eso, más que invitarlos a reflexionar sobre el pasado, sobre estos logros de este par de años, yo los he convocado para que reflexionemos juntos sobre los desafíos y tareas que tenemos por delante. Desafíos y tareas que, lo mismo que la obra realizada, trascienden las divisiones de los partidos, trascienden los sectores sociales, son desafíos y tareas de Chile, y deben ser tomados con las dos manos y con firme coraje y decisión por todos los chilenos.

No pretendo yo dictar cátedra sobre cuáles son esos desafíos y tareas. Pretendo sólo insinuar algunas líneas generales que responden a los criterios que inspiran a mi gobierno y a la Concertación de Partidos que lo apoya, pero que creo trascienden las fronteras partidistas.

En el ámbito de la paz social, en el ámbito de la convivencia pacífica entre los chilenos, es indudable que nuestro país enfrenta problemas que nos preocupan a todos, los cuales tenemos que afrontar con la mayor decisión y unidad. Son los problemas de la delincuencia y el del terrorismo, que atentan contra la seguridad ciudadana y, por consiguiente, contra la convivencia pacífica entre los chilenos.

Luchar contra estos flagelos es tarea de todos, pero fundamentalmente del gobierno. Y yo reconozco que, por mandato constitucional, la principal responsabilidad recae, en esta materia, sobre el Presidente de la República.

Hemos estado haciendo esfuerzos para robustecer la capacidad, en cuanto a dotación de personal y de equipos y en cuanto a elementos técnicos para trabajar, de los servicios policiales, Carabineros de Chile e Investigaciones. Hemos estado tratando de impulsar reformas legislativas que permitan actuar con más eficacia en esta lucha. Yo reconozco que en esa materia hay diferencias de opiniones. No soy de los que creen que simplemente se combate con eficacia el terrorismo y la delincuencia con penas draconianas.

La legislación penal, para que sea eficaz, ha de ser justa. Pero son necesarias también muchas otras cosas: es necesario contar con un Poder Judicial lo suficientemente eficaz y rápido para que admi-

nistre efectivamente justicia. No pretendo tirar sombra sobre los jueces de mi patria. Soy hijo de juez, respeto a los jueces. Pero no cabe duda de que el sistema judicial chileno está anquilosado. Por eso tenemos una reforma constitucional en el Congreso, y proyectos de ley destinados a darle mayor eficacia, mayor independencia, mejores condiciones de trabajo al Poder Judicial chileno.

Por eso es que, reconociendo la realidad de la escasez de recursos presupuestarios del Poder Judicial, realidad histórica —durante decenios en nuestra patria el presupuesto judicial ha fluctuado entre 0,7 y 0,9 por ciento del total del Presupuesto Nacional— yo me he propuesto duplicar el presupuesto judicial en los próximos cinco años, a partir del presente, sobre la base de un incremento de 20 por ciento anual. Puede que sea todavía poco, pero es expresión de la voluntad de avanzar en el recto camino, sobre bases compatibles con la situación general de los recursos fiscales, con las posibilidades del erario nacional. Si éstas mejoraran, probablemente habría que aumentar ese esfuerzo.

En todo caso, pediré al Congreso que esta decisión de aumentar un 20 por ciento real cada año —que se podrá cumplir este año y el próximo, porque me preocuparé de que en el presupuesto respectivo se haga efectiva— constituya un compromiso para el futuro gobierno, de tal manera que efectivamente de aquí a cinco años tengamos un Poder Judicial dotado de mucho mayores elementos.

Pero no basta con eso. Tenemos que mejorar nuestro sistema penitenciario, que es, si ustedes me lo permiten, un verdadero escándalo nacional; no escándalo por incorrecciones, no escándalo por corrupción administrativa: escándalo por la pobreza, por el atraso en que ese sistema está funcionando.

El resultado es que, hoy por hoy, en Chile muchos de los establecimientos penitenciarios no cumplen la tarea de ser lugares de rehabilitación que ayuden, al que ha caído en el delito, a regenerarse y convertirse en un ciudadano positivo, que va a aportar para la sociedad en el futuro; a menudo son escuelas de delincuencia.

Pero también es necesario algo más. Es necesario un mecanismo de inteligencia, que pueda, a través de órganos adecuados, cumplir la tarea de orientar la acción contra el delito, y especialmente contra el terrorismo. Para eso mi gobierno creó por decreto un Consejo Asesor de Seguridad; para eso mi gobierno ha pedido al Congreso Nacional, mediante un proyecto de ley cuya consideración está pendiente de su decisión, la creación de una Subsecretaría de Seguridad e Informaciones en el Ministerio del Interior.

Yo hago un llamado a mis compatriotas; hago un llamado al Congreso Nacional, a los parlamentarios de gobierno y oposición, a que más allá de los criterios que cada cual pueda tener sobre cuál es el mejor instrumento —respetando la tarea que constitucionalmente

corresponde al Presidente, de ser el responsable superior de la seguridad nacional— le otorguen apoyo a este proyecto. Puede que haya otras teorías, puede que haya quienes estimen que estas instituciones deben confiarse a otras ramas institucionales. Yo creo que el camino que hemos escogido es el adecuado y asumo la responsabilidad de pedir respaldo para este camino, en la certeza de que por él avanzaremos en esta tarea.

La sociedad chilena ha estado conmovida en estos años por crímenes. El asesinato del senador Guzmán, el secuestro del joven Edwards, otros hechos nos han acongojado y preocupado a todos. No puede ser motivo para aliviar la preocupación por esos hechos, la circunstancia de que en otros tiempos, a los que Chile no quiere volver, pudieran ocurrir hechos semejantes o peores. ¡No queremos que haya más crímenes en Chile!

En el ámbito institucional, nuestra democracia es susceptible de ser perfeccionada. Hay quienes dicen “la Constitución está recién empezando a cumplirse, a ponerse en práctica. ¿Para qué le hacemos cambios?” No sólo porque yo tengo un compromiso con las bases programáticas que presenté al país, y que entiendo que al elegirme el país respaldó, sino también por profunda convicción personal, creo mi deber impulsar las principales de estas reformas durante lo que resta de mi período, para perfeccionar nuestro sistema democrático. El sistema binominal mayoritario que rige en materia electoral es un sistema profundamente injusto. Ese sistema, a una mayoría de 66 por ciento, le da la misma representación que a una minoría de 34 por ciento. Podrá decirse que esto fuerza a buscar consensos, que esto empuja hacia la democracia de los acuerdos. Pero yo también ruego a mis compatriotas pensar que en períodos en que no haya tanta generosidad, en que por cualquier motivo las posiciones se endurezcan, haya en los distintos sectores mayores intransigencias, este sistema, tal como está establecido, puede conducir a hacer ingobernable al país. Por eso es que mi gobierno propondrá un proyecto de reforma constitucional y electoral para establecer un sistema de representación proporcional corregido, que permita evitar estos peligros y que permita que la configuración del Congreso Nacional sea representativa de los distintos sectores que componen la nación chilena.

Chile no ha sido históricamente un país bipartidista, ni lo será, presumiblemente, en un futuro visible. Chile siempre ha tenido más de dos corrientes de opinión. Y, en consecuencia, forzar al país en una especie de zapato chino, en un riel implacable, para funcionar en un sistema propio de países bipartidistas, es desnaturalizar las formas habituales de convivencia política entre nosotros.

También creo que nuestro sistema constitucional adolece de defectos serios, que afectan a la representatividad de los Poderes

Públicos, al establecer senadores que no son generados por la voluntad popular. Se dan muy buenas razones, y al decir esto yo no pongo en duda la idoneidad personal ni menos la respetabilidad moral de quienes desempeñan esas funciones, pero pienso que ésta es un arma que distorsiona la adecuada representación; un arma peligrosa, porque está en manos del sector que está arriba en el momento en que corresponde la renovación. Mañana pueden ser unos, pasado mañana otros.

¿No será mejor que evitemos la tentación de esta manija, que depende probablemente de la suerte el que caiga en manos de uno o de otro y que altere una representación verdaderamente expresiva de la voluntad de los distintos sectores de chilenos?

La Constitución establece la inamovilidad de los señores comandantes en jefe, y en el actual período, mediante un artículo que costaba entender cuando se leyó en sus comienzos, hubo muchos que tardaron en descubrir que esta inamovilidad no era sólo por cuatro, sino que, en este caso, por ocho años.

Yo creo que en ningún país del mundo el Jefe del Estado carece de atribuciones para designar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, sobre la base, naturalmente, de que debe hacerlo dentro de los funcionarios de más alta graduación.

Yo no pretendo esta reforma para mí y, en consecuencia, en el proyecto que presentaremos al Congreso sobre la materia propondremos que las modificaciones, tanto en relación a la institución de los senadores designados o institucionales como a la inamovilidad de los comandantes en jefe, rijan al término de los períodos de quienes actualmente desempeñan los cargos.

El Tribunal Constitucional es una institución muy importante en una democracia que pretende regirse por normas de derecho. Pero es evidente que el Tribunal Constitucional tiene que tener una generación que, sin llevar a su seno las batallas, los conflictos, las intransigencias de las luchas político-partidistas, haga que sea adecuadamente representativo de todos los sectores. La actual constitución y forma de generación del Tribunal Constitucional no es democrática, y merece y necesita algunas rectificaciones.

No me voy a detener en otras tareas. Estas son tal vez las más importantes de las que debemos encarar, después de haber logrado ya la aprobación de la reforma constitucional para democratizar el sistema municipal y el sistema regional chileno, avances sustantivos para que la democracia no sólo rija en torno al gobierno nacional, sino también para la administración comunal y para el desarrollo de las distintas regiones de nuestra patria, para incorporar a la ciudadanía de las comunas y las regiones en la administración y en el gobierno de su ámbito territorial.

Pero es indudable que hay otros campos en que también tenemos desafíos y tareas impostergables.

En el ámbito económico, nuestro desafío es seguir por el camino en que vamos; nuestro desafío es seguir aumentando el crecimiento, dentro del marco de estabilidad; nuestro desafío es movilizar todas las energías nacionales para que aumenten el ahorro y la inversión. Estos años hemos tenido récords de inversión extranjera: tenemos que aumentar, mantener esos récords, proyectarlos en el futuro, pero tenemos que aumentar también la inversión nacional.

Nuestro gobierno ha hecho un esfuerzo para aumentar la inversión en infraestructura productiva, porque no sacamos nada con que este país desarrolle sus fuentes de riqueza, mineras, agrícolas, pesqueras, madereras, si no vamos a tener caminos, puertos por donde sacar esas mercaderías, ferrocarriles para transportarlas. No avanzaremos mucho más en el desarrollo frutícola y agrícola, que ofrece tantas posibilidades, si no somos capaces de crear nuevas obras de regadío. Y éstas no se crean por iniciativa y recursos privados, porque exigen inversiones muy grandes, cuya recuperación es a largo plazo.

Por eso mi gobierno está empeñado en aumentar las inversiones en infraestructura; lo hemos hecho en estos años, pero indudablemente necesitamos seguir en ese camino. Queda mucho por hacer, quedan muchos caminos por pavimentar, quedan muchas posibilidades de puertos que construir, en este país que tiene un destino marítimo. Tenemos que volver a tener un ferrocarril del que, como en el pasado, los chilenos nos sintamos orgullosos.

En estos esfuerzos deben cooperar el Estado y los particulares. Y por eso hemos dictado una ley de concesiones en materia de obras públicas, que permitirá que en condiciones transparentes, con licitación pública, particulares puedan poner sus capitales y sus esfuerzos para mejorar la infraestructura del país.

Pero quiero insistir especialmente en una cosa: no habrá crecimiento estable, no habrá solidez de nuestra economía, si no derrotamos el flagelo de la inflación. Yo creo que el país tiene clara conciencia de que la inflación es un fenómeno que perturba todas las relaciones económicas y afecta a la vida misma de la gente. Nadie la sufre más que los trabajadores y los pobres, los que viven de un sueldo, de un salario, que en la medida en que sube el costo de la vida se les va desvaneciendo entre las manos y haciendo cada día menos efectivo.

En estos dos años hemos avanzado considerablemente, pero este esfuerzo, que nos lleva a bajar el año último de más de 27 por ciento a poco más de 18 por ciento, prácticamente cumpliendo la meta que nos habíamos propuesto de que no exceda la inflación del

15 por ciento, no puede quedarse allí. Es un esfuerzo que hemos de seguir, en mi gobierno y en el futuro, y yo espero que seamos capaces, antes de dos años, de superar la barrera de los dos dígitos y tener una inflación no superior a un dígito. Es un desafío que exige de todos esfuerzo; que exige del Estado mantener los equilibrios, cuidar de los gastos; que exige de los particulares, también, que deben evitar las tentaciones populistas que pudieran significar pan para hoy y hambre para mañana.

Yo invito a todos los chilenos a comprometerse en este esfuerzo. Invito a los empresarios y a los trabajadores chilenos. Tenemos que ser capaces de ir avanzando en este camino, y cuando hablamos, conforme a lo convenido el año último entre trabajadores y empresarios, de que el establecimiento de remuneraciones mínimas se debe hacer no sobre la base de la inflación producida, sino de la inflación esperada y del incremento de la productividad, hemos abierto camino a una fórmula que debe conducirnos al éxito en esta tarea tan importante para el desarrollo de nuestra patria.

Y viene el campo social. Este es, amigas y amigos míos, el mayor desafío. Tenemos el desafío de derrotar, de una vez por todas, la pobreza en nuestra patria. Lo hemos dicho muchas veces: no la derrotaremos exclusivamente repartiendo lo que tenemos. Tenemos que ser capaces de incrementar el ingreso nacional, porque en la medida en que aumente la riqueza disponible, iremos derrotando la pobreza.

Pero yo tengo una profunda convicción: no creo que el mero crecimiento provoque, por arte de magia, como consecuencia de las leyes naturales, la superación de las grandes desigualdades sociales, el término de la postergación de los sectores más pobres.

Es indispensable una acción social deliberada del Estado y de la sociedad entera para orientar ese crecimiento, de modo que vaya primordialmente a mejorar las condiciones de vida de los sectores más postergados. Esa fue la filosofía que inspiró la reforma tributaria que con votos de parlamentarios de gobierno y de oposición aprobó el Congreso. Esa reforma nos ha permitido destinar importantes recursos a programas de educación, de vivienda y de salud que el país conoce, y a los cuales me referiré más en detalle en mi cuenta del 21 de mayo próximo ante el Congreso Nacional.

Pero tenemos que seguir en esa línea, y tenemos que establecer condiciones cada vez más equitativas en las relaciones laborales. Tenemos que ver manera de atender preferentemente la situación de aquellos que trabajan en condiciones más difíciles o que, por no estar organizados, se encuentran expuestos a trabajar en condiciones muchas veces inhumanas e injustas.

Lo que voy a decir no lo he consultado con mis asesores, pero yo personalmente siento que los trabajadores del comercio, que no

están adecuadamente organizados ni tienen capacidad de negociación, por regla general, con sus empleadores; que los trabajadores temporeros en el sector agrícola, que los trabajadores forestales, necesitan algunas medidas de protección; necesitan, en honor a la justicia, para que sea digna su vida, que el país se preocupe de ellos.

En este campo social se están haciendo esfuerzos importantes en educación y en salud.

Yo quiero decirles que también siento que debemos abordar, como tareas nacionales, dos preocupaciones, que de algún modo u otro comprometen a todos los chilenos: la preocupación por nuestros niños y nuestros jóvenes, y la preocupación por nuestra tierra.

Hay mucho niño en Chile que no recibe la educación preescolar indispensable para ingresar a la enseñanza básica en condiciones de aprovecharla adecuadamente; hay mucho niño en Chile —no obstante todo lo que hemos incrementado los desayunos y almuerzos escolares, la repartición de textos y los esfuerzos para mejorar las escuelas más atrasadas— que no reciben todavía una educación que los coloque en cierta igualdad de condiciones con los demás niños, para tener acceso a iguales posibilidades de vida, según sus talentos, sus capacidades; hay mucho niño y joven que egresa de la enseñanza media y que deambula buscando un trabajo, puesto que no pudo entrar a la Universidad, porque la capacitación en la enseñanza media en nuestro país es dramáticamente desigual entre los colegios a que mandamos a nuestros hijos quienes disponemos de algunos medios y los colegios a que pueden mandarlos los pobres de nuestra patria.

Esa es una tarea que nos debe preocupar a todos, porque esa situación es el caldo de cultivo de la drogadicción, del alcoholismo, de la delincuencia. Tenemos que hacer un gran esfuerzo nacional por preocuparnos de nuestros niños y nuestros jóvenes, y esto trasciende las fronteras partidarias.

Si queremos un Chile mejor en el futuro, si queremos servir a la gente de nuestra patria, tenemos que poner a nuestras futuras generaciones en condiciones de enfrentar la vida con esperanza, con optimismo, con fe, con capacidad para desarrollarse.

Pero también tenemos que defender nuestra tierra, tenemos que defender el medio ambiente. No se trata sólo de tener conciencia del problema, la que ya existe en la mayoría de los chilenos, especialmente los jóvenes. Es necesario afrontar los problemas de la contaminación: la contaminación ambiental, de las aguas, de nuestros ríos, de nuestros lagos, los sistemas sanitarios que dan salida a nuestros desechos.

Es necesario también enfrentar el problema de la erosión. Hay muchos que creen que la erosión dejó de ser problema en Chile,

pero quien se dé el trabajo de recorrer nuestras zonas de secano costero, quien se interne en las cuencas de nuestros ríos, advertirá que ése es un fenómeno real, que va deteriorando la naturaleza, que va haciendo infecundos terrenos que antes fueron fértiles; que va privando al país de humedad, de lluvia; que va envenenando el aire que respiramos.

Esta también es una causa que debiera entusiasmarlos a todos. Tenemos que hacer reverdecer a Chile, no sólo cuidando nuestros bosques nativos, defendiendo la riqueza autóctona de nuestras montañas originarias, lo que no se opone a una adecuada explotación, porque los bosques también mueren, y los bosques que no se manejan adecuadamente no sobreviven, sino que se van pudriendo y destruyendo.

Tenemos que conservar y revalorizar ese bosque nativo y extenderlo, lo que es posible, y lo he visto por mis ojos, y lo he conversado con empresarios y con trabajadores, que me dicen que no se necesitan cien años para reforestar con árboles nativos.

También la forestación con especies exóticas debe continuar, y tenemos que ir avanzando del sur hacia el norte. Cuando uno piensa que cuando llegaron los descubridores de Chile, españoles, se encontraron con bosques en la zona de Copiapó, y piensa que todo esto se ha ido convirtiendo en un desierto, podríamos proponernos como tarea, sin duda que no sólo para una generación, hacer de nuevo de Chile un país plagado de árboles, un país verde, que respire oxígeno; un país que nos dé un régimen de lluvias adecuado. Estos son desafíos.

Amigas y amigos, perdónenme, me he extendido más allá de lo que esperaba. No he querido traer un discurso escrito. He querido hablar espontáneamente con mis compatriotas y decirles lo que siento en este instante.

Es un honor muy grande para un chileno ser Presidente de la República, pero tal vez también es una tremenda responsabilidad. Y no cumpliría, no estaría a la altura de esa responsabilidad, si estuviera sólo pensando en cómo terminar bien los dos años que me quedan. Yo no quiero sólo terminar bien los dos años que me quedan. Yo quiero ayudar, con todo lo que sea capaz, y obtener para ello la colaboración de todos mis compatriotas, para que al término de estos dos años Chile sea una nación no sólo más próspera, no sólo más libre, no sólo más unida, sino también más justa, con más posibilidades para todos sus hijos. Esa es la tarea.

Pueden tener ustedes la certeza de que en los dos años que me quedan en el desempeño de este cargo, no descansaré de luchar por estas cosas con el mismo espíritu de buena voluntad, de respeto a los adversarios, de comprensión a todos los sectores, de búsqueda de acuerdos que ha caracterizado mi gestión en este período. Pero,

al mismo tiempo, con la misma voluntad decidida, luchar derechamente por lo que considero mi deber, sobre todo por los mandatos que mi conciencia me exige: luchar por tratar que Chile sea cada vez más una nación más justa, una nación más unida, una nación más libre, en beneficio de todos los chilenos.

Muchas gracias.

TITULOS
DE LA COLECCION

ETICA Y POLITICA
Patricio Aylwin
José Joaquín Brunner
Gustavo Lagos

SU MENSAJE OPTIMISTA
Paula Peláez

21 SLOGANS DIVORCISTAS
José Miguel Ibáñez Langlois

LA CRISIS
DE LA DEMOCRACIA
EN CHILE.
ANTECEDENTES Y CAUSAS
Miguel Luis Amunátegui
y otros.

LA IDENTIDAD FEMENINA
EN SITUACIONES DE PODER
Y CONFLICTO
PARTICIPA

LOS HOMBRES
DE LA TRANSICION
Ascanio Cavallo

COLECCION TEMAS

COLECCION TEMAS

Al asumir el gobierno de la nación, el 11 de marzo de 1990, el Presidente de la República, Don Patricio Aylwin Azócar, estableció un compromiso con el país: avanzar en la solución de los grandes desafíos que enfrentaba el conjunto de la sociedad chilena en su transición a la democracia.

La selección de discursos que aquí presentamos, que cubren los primeros dos años de gobierno democrático, refleja el itinerario seguido en el cumplimiento de esas tareas. Ellos dan cuenta de los logros en materia de derechos humanos, perfeccionamiento institucional, justicia social, desarrollo económico y reinserción de Chile en la comunidad internacional, y de lo que aún está por hacerse en esos campos.

Esta publicación, que cuenta con el patrocinio de la Secretaría de Comunicación y Cultura, Ministerio Secretaría General de Gobierno, es así un testimonio del avance hacia lo que el mismo Presidente Patricio Aylwin ha llamado "una patria justa y buena".



EDITORIAL ANDRES BELLO